



UNIVERSIDAD DE BUENOS AIRES
FACULTAD DE CIENCIAS ECONÓMICAS
Escuela de Estudios de Posgrado

Maestría en Historia Económica y de las Políticas Económicas

TESIS DE MAESTRÍA

“La experiencia política, social y económica de los gobiernos de la Revolución Argentina 1966-1971. Génesis, axiología, medidas y resultados: una investigación integradora.”

Autor: C.P.N. Ricardo H. Tonno

Directora de tesis: Dra. Noemí Brenta

PRÓLOGO

Este trabajo trata sobre los sucesos de la historia argentina reciente transcurridos entre los años 1966 y 1971 que corresponden a la experiencia política, económica y social del gobierno de facto a cargo de las Fuerzas Armadas- que se denominara gobierno de la Revolución Argentina. La tarea que se intenta acometer consiste en la realización de una investigación integral, abarcativa, descriptiva, cronológica, analítica y explicativa de los sucesos de la Argentina de ese tiempo, vistos desde la perspectiva histórica que nos da el casi medio siglo transcurrido desde entonces y con la inigualable ventaja que nos otorga la posición de *persona póstuma* en el análisis de los hechos, conociendo de antemano sus resultados y consecuencias. Este transcurrir de la historia nos otorga hoy la posibilidad de distanciarnos de aquellos sucesos abordándolos e iluminándolos con la claridad, la objetividad y el desapasionamiento que solo otorga el paso del tiempo y la vivencia y el conocimiento de los sucesos posteriores de la historia política, económica y social de una Argentina que no nos dio descanso, es decir, de la Argentina que vino después. Así acometeremos este trabajo con una metodología de carácter narrativo, que entrelaza los hechos con las voces de los protagonistas y de los observadores, que se resaltaron en bastardilla para poner de relieve su autonomía dentro del contexto de los hechos narrados, con la finalidad de volver más inmediato el carácter dramático de las situaciones en que accionaron esos protagonistas que debieron cotidianamente optar y decidir entre las múltiples posibilidades del presente, ignorando el futuro. Bajaremos la lente sobre los hechos cotidianos, los sucesos del día a día, relacionando los avatares de nuestro país, con el papel que le tocaba cumplir en la compleja bipolaridad internacional y con el rumbo que ese mundo tomaba en el escenario de la guerra fría, las instituciones de Bretton Woods y el mundo bipolar que siguió a la segunda posguerra.

En la primera parte del trabajo analizaremos el proceso político que culminó en la caída del gobierno constitucional del Presidente Illia, veremos la intervención que tuvo en los hechos la prensa escrita de esa época muy concentrada en unos pocos diarios y revistas de actualidad con una tendencia ideológica muy marcada y con mucha influencia en la formación de la opinión pública sin dejar de mostrar la abulia generalizada de una ciudadanía que, lejos de defender la institucionalidad, se sumó al consenso del derrocamiento.

En los capítulos siguientes revisaremos la justificación jurídica e ideológica que dio las bases teóricas al régimen de facto, el establecimiento del nuevo orden jurídico, jerárquico y administrativo, el funcionamiento de sus nuevas instituciones, su inserción en el contexto internacional y el carácter fundacional que este régimen intentó asumir. Analizaremos los grupos de presión e intereses que convergieron

en el primer gobierno de la Revolución Argentina presentado históricamente como referente de este proyecto político: la presidencia del teniente general Juan Carlos Onganía que condujo el país durante cuatro años ejerciendo la suma del poder público. Revisaremos las tribulaciones que provocó al régimen la falla en la formación de un eje ideológico propio y transversal que cruzara este particular proceso político que derivaba entre la más conservadora derecha católica liberal y las iniciativas frustradas de experiencias comunitarias socializantes sin dejar de pasar por una vertiente nacionalista de pretensiones populistas de un carácter bastante ortodoxo. Claro que más que una falla, hoy a la distancia parece una ingenuidad o una miopía; esa ideología necesitada y buscada por el régimen ya había sido conformada veinte años antes y se encontraba revitalizada, ampliada y en plena vigencia e incluía -en un mismo movimiento- de una manera transversal y muy abarcativa el abanico político que iba desde la más liberal derecha conservadora hasta la izquierda insurgente revolucionaria; también tenía un nombre: peronismo.

Analizaremos y explicaremos con visión retrospectiva y espíritu crítico -en un capítulo tal vez un poco extenso- las medidas concretas de gobierno de la administración Onganía, sus decisiones económicas, políticas y sociales con sus yerros y aciertos después de medio siglo de aquellos acontecimientos, para reenfoclarlas, redimensionarlas, resignificarlas y relativizarlas -ya aquietadas las turbulencias desatadas por los hombres y su tiempo- siempre con la mirada puesta desde el conocimiento que nos da aquella posición del *testigo póstumo*. En el ocaso del experimento político aparecerá el breve interludio del Presidente Levingston que tratara de profundizar el régimen con un golpe de timón de corte nacionalista-populista que incluyó un proyecto político propio, que duró hasta que general Lanusse le puso límite. Veremos las razones -nada casuales- por las que el general Roberto Marcelo Levingston fue designado presidente por la Junta de Comandantes y como se proyectó la larga sombra del general Lanusse a lo largo de todo el proceso de la Revolución Argentina. Nuestra investigación no abarca la presidencia de Alejandro Agustín Lanusse porque no la consideramos parte del frustrado proyecto político y económico de la Revolución Argentina sino la administradora de su liquidación, a través del restablecimiento del sistema constitucional liberal partidario que aquel proyecto intentó reemplazar.

➤ **ÍNDICE POR CAPÍTULOS:**

- **CAPÍTULO UNO: *El derrocamiento del gobierno constitucional de Arturo Illia.***
 - 1.1. Los medios escritos, la opinión pública y la formación del clima de opinión / p. 9.
 - 1.2. La cuestión de la legitimidad de origen y la debilidad constitutiva del gobierno. / p. 14.
 - 1.3. La crítica a la gestión de gobierno. La coalición alternativa y la legitimación social del golpe de Estado. / p. 15.
 - 1.4. El fin de un gobierno. / p. 17.

- **CAPÍTULO DOS: *La Revolución Argentina (1966 – 1971). Fundamentación ética y doctrinaria.***
 - 2.1. Axiología, fundamentos y justificación del régimen revolucionario. / p. 22.
 - 2.2. La legitimidad y el nuevo régimen. / p. 23.
 - 2.3. Los instrumentos jurídicos de la revolución y sus orígenes. / p. 24.
 - 2.4. Ideología y modernización. / p. 25.
 - 2.5. Objetivos políticos y económicos de la revolución. / p. 26.

- **CAPÍTULO TRES: *La primera etapa. El gobierno de Juan Carlos Onganía: un gobierno de objetivos sin plazos.***
 - 3.1. Ecce Homo. La elección de Onganía como presidente. Las expectativas sobre su persona y la confrontación con la realidad. / p. 31.
 - 3.1.1. La Iglesia Católica y la Revolución Argentina. La Ciudad Católica, el Cursillismo Católico y el Ateneo de la República. La conformación de los cuadros dirigentes. / p. 33.
 - 3.1.2. Autoritarismo, modernización, los empresarios y el sindicalismo. La cuestión social. / p. 39.
 - 3.2. El escenario internacional a fines de los sesenta y comienzos de los setenta. / p. 44.
 - 3.3. La Doctrina de la Seguridad Nacional. Orígenes, ideología y principios. / p. 46.
 - 3.3.1. La Doctrina de la Seguridad Nacional en América Latina. / p. 47.
 - 3.3.2. La Doctrina de la Seguridad Nacional en Argentina. La conexión francesa. / p. 49.
 - 3.4. La Doctrina de la Seguridad Nacional y el concepto de desarrollo económico acelerado en los regímenes militares en Latinoamérica. / p. 50.

3.5. El vínculo entre la Doctrina de la Seguridad Nacional y el desarrollo económico en la Argentina. / p. 51.

3.6. Los militares y la idea de progreso. La utopía modernizadora de la Revolución Argentina. / p. 53.

- **CAPÍTULO CUATRO. *Del consenso a la desilusión. Nacimiento y ocaso de un proyecto político. Las acciones concretas de gobierno de la administración Onganía.***

4.1. Los primeros meses. Julio de 1966 a Diciembre de 1966. / p. 68.

4.1.1. El clima cultural, el régimen y la Universidad. / p. 70.

4.1.2. Onganía y el movimiento obrero organizado. / p. 75.

4.1.2.1. El panorama del movimiento obrero organizado al arribo de Onganía. / p. 75.

4.1.2.2. La relación inicial con el movimiento obrero. / p. 77.

4.1.3. Salimei, el problema azucarero y el Operativo Tucumán. / p. 80.

4.1.4. Perón y el nuevo gobierno. / p. 86.

4.1.5. Onganía: su formación, sus hombres más cercanos y su estilo de gobierno. / p. 90.

4.1.6. Las primeras fricciones. El fin del principio. / p. 93.

4.2. El segundo comienzo y las tensiones ideológicas. / p. 98.

4.2.1. La propuesta comunitarista o las organizaciones intermedias. / p. 99.

4.2.1.1. La creación del Ministerio de Bienestar Social. Las ideas comunitaristas, sus raíces. Los católicos desarrollistas y católicos nacionalistas. Educación y planeamiento. La influencia franquista del desarrollo tecnocrático. / p. 103.

4.2.1.2. La SEPAC: el instituto del desarrollo comunitario. / p. 107.

4.2.1.3. Apuntes sobre la idea de democracia en el pensamiento político de los intelectuales cristianos. La polémica de dos siglos: Charles Maurras (1868 – 1952) – Juan Jacobo Rousseau (1712- 1778). El debate entre católicos nacionalistas y liberales en la Argentina. / p. 111.

4.2.2. La lucha por las ideas al interior del poder. / p. 114.

4.3. El tiempo de Krieger. Su origen ideológico y su fuente doctrinaria. Su política económica de heterodoxia neoliberal. / p. 115.

4.3.1. La situación económica previa a la instauración del programa de estabilización de Krieger. / p. 116.

4.3.2. El plan en sí. Los objetivos, el paquete de medidas, las etapas. / p. 117.

4.3.3. La aplicación del programa de estabilización: restricciones iniciales, herramientas aplicadas, solidez, sustentación temporal y estrategia implícita. / p. 123.

- **CAPÍTULO CINCO. *Las luces y las sombras: avances y desventuras del proyecto político y económico de la Revolución Argentina.***

5.1. En busca del tiempo perdido. El costo del desgaste y el segundo comienzo. Krieger Vasena y Guillermo Borda, la clave del nuevo gabinete. / p. 144.

5.2. Obras Públicas: del programa a los hechos. La asignación presupuestaria y el financiamiento. / p. 147.

5.2.1. Las disyuntivas y críticas sobre el Presupuesto 1968. / p. 149.

5.2.2. La Obra Pública: una cuestión estratégica. / p. 151.

5.3. La promoción de las ramas estratégicas de la industria. / p. 152.

5.4. La política nuclear. / p. 154.

5.4.1. El ingreso al Club Atómico: ¿Átomos para la paz? / p. 156.

5.5. La reforma educativa. / p. 158.

5.5.1. La reforma en la Universidad. / p. 160.

5.6. La política exterior: el mundo bipolar, la guerra fría. Argentina en el Bloque Occidental bajo la influencia estadounidense: una inestable dualidad entre el acuerdo y la confrontación. Las relaciones con América Latina. / p. 163.

5.7. La política oculta: los sindicatos y el gobierno en la trastienda de la prohibición formal. / p. 168.

5.7.1. El Plan de Acción del 3 de febrero de 1967. La batalla que no se quería pelear. / p. 168.

5.7.2. Después del diluvio: el largo y difícil camino hacia un Congreso Normalizador. / p. 172.

5.8. La cuestión política y el debate institucional. El gobierno en su laberinto: ¿Quo vadis Revolución? / p. 176.

5.8.1. La hegemonía cuestionada: el largo camino del día hacia la noche. / p. 181.

5.8.2. La interna militar, el relevo del general Alsogaray y la inesperada llegada de Lanusse. / p. 185.

5.8.3. Un suceso (in) trascendente en Tucumán. La proto-insurgencia armada revolucionaria en la Argentina de los sesenta. / p. 188.

5.9. El '69: el fin de la "Pax Onganía". La posición de la Iglesia Católica y el último intento comunitario. / p. 189.

5.9.1. Tiempos borrascosos. Los preludios de mayo. / p. 191.

5.9.2. La hora de la violencia: del comedor estudiantil a la guerra urbana. Siete días en mayo. / p. 194.

5.9.3. Protestas y radicalización obrera. Córdoba en la convergencia obrero-estudiantil / p. 199.

5.9.4. Apuntes sobre el Cordobazo. / p. 202.

5.10. Las consecuencias: crisis en el gobierno y un gabinete cuestionado. / p. 206.

5.10.1. Las Fuerzas Armadas y los políticos en el nuevo escenario: Onganía bajo vigilancia. / p. 209.

5.10.2. La política armada: la subversión en escena. La hora del miedo. / p. 212.

5.10.3. La larga sombra de Lanusse en el ocaso de Onganía. / p. 213.

5.10.4. La Junta de Comandantes retoma el poder y destituye a Onganía: el papel de Lanusse en los sucesos que desembocaron en el relevo. Los hechos. / p. 217.

5.11. Apuntes y conclusiones sobre Onganía y su gobierno. / p. 223.

- **CAPÍTULO SEIS. *Roberto Marcelo Levingston: su breve interludio presidencial (18 de junio de 1970 – 22 de marzo de 1971).***

6.1. Los cambios políticos en Latinoamérica: un escenario inesperado. / p. 276.

6.2. Las tribulaciones de la Junta y la designación de Levingston. / p. 276.

6.3. La presidencia de Levingston: su condicionamiento de origen y la falta de poder real. / p. 279.

6.3.1. La escalada subversiva: la insurgencia armada en su forma urbana. El atentado contra José Alonso. / p. 280.

6.3.2. El frente sindical: el Congreso Normalizador de la CGT. José Rucci al frente de la CGT unificada. / p. 281.

6.3.3. Las contradicciones de origen en el gabinete: vacilaciones sobre el plan político. El intento de profundizar la Revolución. La encrucijada política. / p. 282.

6.4. El giro de la política económica: del liberalismo económico al nacional-desarrollismo populista. El programa económico y social de Aldo Ferrer y el Plan de Desarrollo y Seguridad 1971-1975. / p. 285.

6.4.1. Un cuestionado Rucci en la CGT: el paro edulcorado. Los cambios en el Ejército. / p. 290.

6.5. El compromiso de la Hora del Pueblo. El proyecto de plan político. / p. 291.

6.5.1. La coyuntura impone límites al Plan Ferrer. / p. 292.

6.5.2. Apuntes y conclusiones sobre el Plan Ferrer: cuando la coyuntura condiciona el largo plazo. / p. 294.

6.6. El flanco político y militar. El sindicalismo clasista y combativo: otra vez Córdoba. Los idus de marzo. / p. 297.

6.6.1. El gremialismo clasista y combativo: Los sindicatos de FIAT en el post-Cordobazo. Un verano sin concesiones. / p. 299.

6.6.2. Levingston y la Junta de Comandantes: poderes en pugna. Ferrer en apuros. / p. 301.

6.6.3. Los idus de marzo: Córdoba otra vez. / p. 304.

6.7. Una crónica del final. / p. 306.

6.8. Apuntes y conclusiones sobre el gobierno de Levingston. / p. 308.

- ***Apuntes y conclusiones: una mirada de conjunto*** / p.333.

- **ANEXOS.**

Anexo 1. Cuadros e infografías / p. 341.

Anexo 2. Imágenes de los principales protagonistas de la época. / p. 352.

- **BIBLIOGRAFÍA:** Fuentes secundarias y primarias. / p. 357.

Capítulo 1.- *El derrocamiento del gobierno constitucional de Arturo Illia.*

1.1. *Los medios escritos, la opinión pública y la formación del clima de opinión.*

El 7 de julio de 1963 se celebraron los comicios generales que abrían un nuevo crédito a la vida democrática del país después de un año y medio de gobierno de José María Guido, continuador constitucional del depuesto presidente Arturo Frondizi.

Los resultados electorales habían sido elocuentes: en cifras redondas; 2.400.000 votos para la Unión Cívica Radical del Pueblo (UCRP); 1.600.000 votos para la Unión Cívica Radical Intransigente (UCRI) que llevaba a Oscar Allende de candidato a presidente; 1.300.000 votos para Unión del Pueblo Argentino (UDELPA) con el general (RE) Pedro E. Aramburu como candidato; y un respetable 1.500.000 votos en blanco que eran de extracción justicialista, es decir; los proscriptos. Los ganadores no habían obtenido la mayoría necesaria y para ser elegidos el Dr. Arturo Illia como presidente y el Dr. Carlos Perette como vicepresidente requirieron del apoyo en el Colegio Electoral de democristianos, demoprogresistas, conservadores, partidos provinciales y neoperonistas. La UCRP solo había logrado 168 electores de los 239 que necesitaban. Si bien de indudable legalidad, esta escasa legitimidad de origen signó al gobierno así elegido durante toda su administración y hasta su derrocamiento.

Sin embargo, esta debilidad de origen, traducida como una escasa legitimidad, no debería haber sido suficiente para provocar su colapso. Solo cuando esta legitimidad atenuada se combina con la presencia de una alternativa política organizada y concreta que se presenta como una opción real, es que puede considerarse que la estabilidad de un régimen está amenazada.

¹ La duda planteada era que el justicialismo proscripto no había podido intervenir en la elección del gobierno y no se veía su posible incorporación a la vida cívica por la oposición a ello de las fuerzas armadas. La administración elegida no podía darles el lugar que les correspondía en la vida política nacional sin enfrentar seriamente el condicionamiento imperante por partes de las fuerzas armadas. Así el peronismo, desde el terreno político, hostigó al gobierno desde el principio y los sindicatos llevaron adelante su Plan de Lucha, que paralizó innumerables veces al país con ocupación de fábricas y huelgas gremiales que obstruyeron el normal desarrollo de la gestión de gobierno. Durante los últimos dieciocho meses, regresaron las preocupaciones por el temor a la restauración peronista², al avance del comunismo y la crisis tucumana de la zafra de 1965 completada por la bancarrota del Estado provincial en el primer trimestre de 1966.³ Los últimos tiempos del gobierno radical estuvieron plagados de graves dificultades, se acentuó la idea de la ineficacia administrativa y el deterioro de la imagen de la administración fue cada vez peor.

En las décadas del cincuenta y sesenta la concepción dominante atribuía una influencia decisiva a los medios en la formación de ideologías y comportamientos, en realidad, establecían una agenda de temas que, si bien no indican al lector como pensar, logran focalizar los temas de interés y legitiman una lectura de la realidad recortada sobre la cual se instalará el debate. En definitiva, se convierte en un periodismo de influencia que logra formar bajo su influjo a buena parte de lo que llamamos opinión pública. En nuestro país este tipo de nuevo periodismo se dio con los semanarios *Primera Plana*, *Confirmado*, *Todo* y el mensual *Extra*.

Tienen la función de dramatizar los acontecimientos colectivos para conformar lo que solemos llamar *climas de opinión*, contribuyendo así a ratificar emocionalmente la unidad de una comunidad cuya coordinación es siempre problemática. Los actores involucrados son políticos, periodistas, intelectuales, representantes de corporaciones y voceros de *lobbies* empresarios y movimientos sociales.⁴ Estas publicaciones representaban el programa de un nuevo grupo de actores sociopolíticos decididos a imponer la ideología de la modernización y el crecimiento económico acelerado, mediante un gobierno autoritario ya que el gobierno radical no daba lugar a los intereses impulsados por los actores socioeconómicos surgidos durante el gobierno desarrollista de Arturo Frondizi.⁵ En este sentido, en una sociedad en la que la influencia de los medios audio-visuales era reducida e incipiente y la práctica de la lectura un hábito cultural extendido socialmente, las revistas desempeñaron un rol central como actoras formadoras de opinión; como factores de poder con argumentos para interactuar en la realidad de su tiempo al sugerir propuestas a las diferentes instancias de poder y a la comunidad. Así, en este período histórico, las revistas semanales presentan una posición crítica que pretende informar al tiempo que influir e intervenir en el campo político. Estos semanarios permitieron visualizar las críticas al gobierno y configurar un caudillo –que abroquelaba la coalición opositora alternativa– como parte de la propuesta política que caracterizó al golpe de Estado del 28 de junio de 1966. .

Primera Plana, fue la primera y posiblemente la más importante de estas publicaciones. Fundada por Jacobo Timerman en 1962 se inició como el órgano de prensa para difundir los intereses de los militares victoriosos del bando azul, pero adoptó su nombre con la intención de presentarse con mayor seriedad y más abarcadora en su cobertura y tomó su formato del exitosísimo semanario estadounidense *Time*. Para esa época no había en Buenos Aires una revista política, cultural, de economía y de sociales y la fórmula de *Time* era un fenómeno original y revolucionario en el nuevo periodismo. La publicación se presentaba como rectora de un deber ser nacional y conjugaba un proyecto político superador de la antinomia peronismo-antiperonismo.⁶ Incorporó periodistas de fuste para la época como; Hugo Gambini en temas históricos; Ramiro de Casabellas como corresponsal en Estados Unidos, Guillermo Edelberg como columnista económico. Mantenía corresponsales estrella en Europa, como Vargas Llosa en París, Alberto Giovaninni en Roma o Curt Donig en Berlín Occidental. Aquí Gambini

comenzó su libro *Historia del Peronismo*, que permitió a *Primera Plana* hacer otro peronismo, que fue creado y ofrecido para el consumo de sus lectores.

Pero fue sin duda Mariano Grondona como editorialista político el más importante periodista de esta publicación que, más tarde, con Onganía en la presidencia se desempeñaría como asesor general de política y planeamiento del Ministerio de Relaciones Exteriores con jerarquía de embajador extraordinario y plenipotenciario. Grondona identifica el funcionamiento de un discurso que, al tiempo que invalidaba la gestión presidencial de Illia, justificaba y naturalizaba la solución autoritaria del Ejército y el encumbramiento de Juan Carlos Onganía como un líder emergente comprometido con la Revolución Nacional y el cambio de estructuras.⁷

Los argumentos, razonamientos, interpretaciones de la información o sus intervenciones, hacían de su columna un espacio de expresión que serviría para legitimar el golpe de estado como solución excluyente de los problemas nacionales. Doblemente autorizado y justificado por una doble misión salvadora y fundadora, su discurso se bifurcaba en dos grandes enunciados complementarios. Por una parte la situación de crisis y estancamiento que vivía el país como consecuencia de la dirigencia anacrónica e ineficiente y por otra la incapacidad para llevar adelante un programa de orden social, desarrollo económico y proyección internacional; de esta manera decía un alto funcionario: “nuestro gobierno se deteriora porque su debilidad electoral, su decisión de monopolizar el poder a toda costa y la ausencia de un liderazgo personal comunican la imagen de la ineficiencia”.⁸ Grondona redefinía los lugares de poder separando, por un lado el poder formal (el gobierno, la dirección política del Estado) y por el otro el poder real (el nuevo caudillo de los tiempos que corrían, el comandante en jefe del ejército): “La autoridad formal se otorga con los ritos y procedimientos de la Constitución. La autoridad real, en cambio, se tiene o no se tiene. La autoridad formal es un derecho que proviene de la estructura institucional. La autoridad real es un “hecho” que nace y se desarrolla según sus propias leyes. Aquella se da. Esta se toma. A una la llamamos, simplemente, “gobierno” a la otra “liderazgo”.⁹ El cuestionamiento al proceso democrático - o al menos a la democracia liberal representativa tal como se conoce - se concentraba en su aspecto básico es decir en el conflicto electoral. Un comicio que no resolvía la representatividad de los factores de poder derivaba en una farsa ya que la democracia liberal vigente no proporcionaba orden: “En un país ordenado, una elección significa que los políticos preguntan al pueblo por sí o por no, si acepta o rechaza una vía, si aplaude o condena una gestión. Toda complicación, toda confusión que vaya más allá de esta problemática simple y elemental, convierte a la elección en un acertijo para técnicos y anula la intervención de la mayoría en la democracia. La extrema subdivisión de nuestra vida política partidaria es la forma más sutil del fraude electoral: el fraude de la sectorización. Para saber de qué se trata hay que ser experto. Los ciudadanos comunes meterán en marzo una boleta en la urna. Pero no por eso decidirán.”¹⁰ Lo que se cuestionaba era la enorme subdivisión y fragmentación de los partidos políticos -de la democracia representativa liberal

partidaria- que aparecía como una enfermedad de difícil sino imposible cura en esas circunstancias y que invalidaba la formación de un consenso de base que permitiera la posibilidad de gobernanza y progreso. La comunidad sin mando es la algarabía de millones de voluntades divergentes.

En este esquema interpretativo, Onganía emergía como el hombre en el que se conjugaba la síntesis de tres poderes ancestrales: representaba la ley moral como héroe épico, la ley del vínculo entre la tierra y la sangre –como el caudillo- y la ley divina, el Mesías. Es la reunión de los tres poderes sobre los cuales la generación del '80 edificó la Nación: “los tres poderes de Alberdi – el civil, el militar y el bonaerense – están de nuevo reunidos en una sola mano”.¹¹

El discurso político de Grondona desde *Primera Plana*, centró su atención en el problema de las vinculaciones entre los procesos históricos y los medios de difusión impresos, a través de la lectura e interpretación de la columna, que funcionaba como editorial político del semanario de Mariano Grondona en la campaña de acción psicológica que, al tiempo que atacaba la gestión radical de Illia, publicitaba la opción alternativa de Onganía. Sin duda la campaña tuvo exitoso resultado no solo por la influencia que pudiera ejercer el periodista en el universo de lectores sino también porque esos sectores modernos que, a diferencia de Frondizi, no son integrados en el proceso de toma de decisiones, veían en el golpe de estado la posibilidad de un cambio fundacional y un nuevo líder que lo impulsara.

Después del alejamiento de Timerman, que abandonó la dirección de *Primera Plana* y fue a fundar *Confirmado* en mayo de 1965, se hicieron cargo del semanario Ramiro de Casabellas y Tomás Eloy Martínez, entre ambos lograron perfeccionar el proyecto original y convirtieron a *Primera Plana* en la líder indiscutida de las revistas de su género.

Confirmado se presenta en sociedad – bajo la dirección de un ya controversial Jacobo Timerman – como la “revista semanal de noticias” definición modesta y poco pretenciosa para su intento de emular y superar a *Primera Plana*. Su objetivo específico era contribuir en todo lo posible al derrocamiento de la administración Illia. A su redacción se incorporaron nombres como: Horacio Verbitsky, Rodolfo Pandolfi, Armando Alonso Piñeiro, Kive Staiff y Carlos Ulanovsky. Pero el periodista político excluyente del semanario era Mariano Montemayor: ensayista, escritor y abogado nacionalista. Su misión fue desde el principio, instigar en forma directa y desembozada a las fuerzas armadas al derrocamiento de Arturo Illia. Es, de todos los periodistas mencionados, el único que continuó en la redacción una vez destituido Illia.

Esta revista representó en forma definida a los sectores socioeconómicos y los propósitos políticos que conformaron la coalición azul del ejército, o más claramente al *establishment*. Timerman repitió –casi calcados- los objetivos iniciales de *Primera Plana*. Al *staff conspirativo* se agregaron también: Rodolfo Martínez, ex ministro del interior de Guido; Carlos Florit, ex canciller de Frondizi; el teniente coronel (RE) Alberto Garasino, un cuadro pseudo-intelectual del ejército y Félix Gastón Maceda, nexos entre

el Estado Mayor del Ejército y Timerman. Los frentistas eran representados por Mariano Montemayor que abandonó *Primera Plana* cuando el frente fracasó.

Así *Confirmado* se metía dentro de una tradición específica de la cultura política nacional: amalgamaba un proyecto político con un medio de prensa que lo difundía. Reflejaba la misma alianza que se había dado entre los militares azules y *Primera Plana* auspiciando el gobierno militar de la “Revolución Argentina”. *Confirmado* se presentaba como una fuente alternativa y veraz de información, principalmente militar, obtenida de conocimiento directo, no disponible a la prensa convencional. La obtención de documentos reservados, la situación militar y los planes tendientes al derrocamiento del presidente, se debían al general Fonseca y al general Roberto Marcelo Levingston, jefe del Servicio de Informaciones del Ejército, y colaborador del general Lavicoli, principales contactos con el comando golpista.¹² En definitiva, *Confirmado* resultó un clon de *Primera Plana* pero de menor calidad. Diez años más tarde, el mismo Timerman desde *La Opinión*, propuso y alentó el golpe de estado del 24 de marzo de 1976 contra el gobierno constitucional de Isabel Perón.

Todo, fue otra revista de actualidad de la época, tuvo su origen en la imposibilidad que su fundador – Bernardo Neustadt – continuara en la recién arribada televisión al perder su programa *Incomunicados*. Esta revista hace su presentación en octubre de 1964 para “interpretar la realidad argentina y mundial” y hacía referencia a la intención de su director de poner al alcance del público la mayor cantidad de información de actualidad posible. Propondría también lo que se conocería como “estilo Neustadt”: directo, efectista, coloquial y contundente, que evitaba siempre la sofisticación intelectual de *Primera Plana* y se proponía como una herramienta para la comprensión de la realidad de una manera directa y simplificada. Esta revista, en su apuesta por la evolución frente a la revolución hacía necesaria la “legalidad para todos”, es decir, para un peronismo que había estado ausente en la última elección nacional. La solución era una clase dirigente nueva que suplantara la tradicional estructura de los partidos políticos, que no podían resolver los problemas de la agenda desarrollista que luego del golpe de 1962 disociara desarrollo de democracia. De esta manera definirá su perfil como una revista desarrollista de centro derecha.

La aparición de *Todo* en el mercado de revistas de información general obedeció a la estrategia de aprovechar las consecuencias negativas de una supuesta crisis que se produciría en *Primera Plana* una vez la hubiera abandonado Timerman. La crisis no solo nunca sucedió, sino que después de la salida de Timerman, *Primera Plana* se ubicó como líder indiscutido del mercado de revistas de actualidad. *Todo* no superó la circunstancia, nunca creció y finalmente desapareció tan rápido como llegó.

Durante su breve vida, la revista mantuvo un entretenido equipo de periodistas entre los que se contaban: Ulises Barrera, Esteban Peicovich, Oscar Delgado, Pola Suarez Urtubey y la pareja de moda de la época Eva Giberti y Florencio Escardó. Debutaron en la revista un grupo de jóvenes, casi adolescentes, que acababan de terminar la secundaria: José “Pepe” Eliashev, Pablo Guerchunoff, Rolando “Lanny” Hanglin, Milton

Roberts y Carlos Ulanovsky. En definitiva, a pesar de su buena calidad periodística, *Todo* no llegó a completar un año de existencia y fracasó como alternativa editorial frente al tanque que significaba *Primera Plana*.

Finalmente, el breve ciclo de *Todo*, coronado por el fracaso, permitió el siguiente emprendimiento editorial: la revista *Extra*, que a diferencia de *Todo*, logró una continuidad de casi treinta años como mensual dirigido a la clase media alta y a un empresariado fiel.

1.2 La cuestión de la legitimidad de origen y la debilidad constitutiva del gobierno.

Las transformaciones producidas por el proyecto político-económico desarrollista de Arturo Frondizi consolidaron un punto de no retorno en la estructura de la economía y de la sociedad argentinas. Entre 1958 y 1962 se sentaron las bases para consolidar la hegemonía del capital extranjero en la industria. Así los industriales nacionales debieron ajustarse a esta nueva situación y los tradicionalmente poderosos productores pampeanos fueron definitivamente desplazados de su posición de privilegio. El desarrollismo frondizista redefinió las complejas relaciones económicas y sociales representadas por los nuevos actores: el empresariado trasnacional y local, los niveles gerenciales y técnicos y la nueva tecnoburocracia formada en las universidades privadas. En este contexto obtuvo la victoria la UCRP, dispuesta a cumplir con el rígido postulado ideológico de la Carta de Avellaneda -que contenían las Bases de Acción Política de 1947- sin advertir la emergencia de estos nuevos actores, o lo que es peor, negando su presencia. La UCRP no solo no fue capaz de sintetizar en su gobierno este nuevo equilibrio de fuerzas, sino que en realidad, pretendió alterarlo y modificarlo para ajustarlo a sus postulados ideológicos

Por otro lado, la enorme concentración de poder del sindicalismo organizado, claramente economicista y fuertemente politizado, sumado a la proscripción del peronismo, afectaron también a los gobiernos de estos períodos, que obligados a normalizar la economía, debieron muchas veces antagonizar con los sectores populares y hacer concesiones en épocas de elecciones, para calmar el desorden social y alejar el riesgo de un golpe de estado. Lograban así, ponerse en contra a una burguesía que cada vez más clamaba por un gobierno fuerte, no dependiente de mecanismos electorales que planteaban -recurrentemente- el mismo problema irresuelto de la cuestión peronista.

Si bien el intento exitoso de las fuerzas armadas por resolver y superar la fraccionalización interna del Ejército con la clara victoria del grupo azul *profesionalista*, permitió que se llevaran a cabo las elecciones en las que Arturo Illia logró la presidencia, quedó abierto el camino para el derrocamiento del gobierno radical en una práctica permanente de "acoso y derribo", cuando los líderes militares sintieron que sus metas de cohesión institucional habían sido logradas

Arturo Illia conocía estos condicionamientos. En su discurso inaugural en la Asamblea Legislativa dijo: “Todas las fuerzas políticas argentinas participan desde hoy, sin exclusiones, en mayor o menor medida, en el gobierno de la cosa pública. Este hecho de suyo significativo, compromete la responsabilidad del conjunto”. Pero, la expresión “todas las fuerzas políticas argentinas” no era formalmente correcta: en los comicios del 7 de julio la UCRP obtuvo el 25.15% de los votos, superando por solo un 5% al voto en blanco ordenado por Perón (19.72%), constituyendo una primera minoría débil en una contienda electoral indirecta.¹³

En la votación de los Colegios Electorales reunidos el 31 de julio la UCRP puso en juego sus 169 electores propios y logró tejer alianzas con el resto de los partidos participantes hasta lograr 270 electores, número más que suficiente para alcanzar la Presidencia de la Nación. En el Senado de la Nación la UCRP obtuvo una ajustada mayoría, cosa que no sucedió en la Cámara baja, donde obtuvo 71 bancas oficialistas, frente a 39 de la UCRI; 20 de partidos provinciales neoperonistas; 15 del partido del general Aramburu (UDELPA); 12 del partido Demócrata Progresista; 12 de la Federación de Partidos de Centro; 6 del Partido Socialista Argentino y 4 del partido Socialista Democrático.

En virtud de esta correlación de fuerzas y teniendo en consideración tanto la distribución del mapa parlamentario como el apoyo a Illia en el Colegio Electoral se podía conjeturar que algún tipo de política de alianzas se vería reflejada en la conformación del Gabinete Nacional. No fue así, Illia fue renuente a establecer coaliciones o compromisos y gobernó solo con su gente, es decir, básicamente con el radicalismo cordobés.¹⁴ A la dudosa legitimidad de origen se sumaba ahora el abroquelamiento en su propio partido; sin alianzas políticas ni gremiales. Esta suma potenció la debilidad congénita del gobierno y esta debilidad -sin amigos extrapartidarios- lo acompañó hasta el accidentado final.

1.3 La crítica a la gestión de gobierno. La coalición alternativa y la legitimación social del golpe.

A principios de 1964 los temas centrales –en el orden interno- que identificaban la crítica al gobierno radical eran: la presunta ineficacia o lentitud en la gestión gubernamental, el temor a la expansión comunista y a la guerrilla y el problema irresuelto de la cuestión peronista.

En el orden internacional, el conflicto limítrofe con Chile en Laguna del Desierto, la formación de una fuerza interamericana para preservar la seguridad nacional y las remezones de la cuestión de la no intervención en Santo Domingo.

Hacia fines de octubre de ese año el Congreso aprobó la ley que derogaba la legislación política represiva contra el comunismo y el peronismo. Esta ley –junto con el Estatuto de los Partidos Políticos- revistió singular importancia, ya que derogaba toda restricción electoral en el espectro político nacional. Esto significaba iniciar la solución

de la cuestión peronista de cara a la elección legislativa de marzo de 1965. La estrategia consistía en encontrar dirigentes locales del peronismo que pudieran reemplazar, de manera creíble y eficiente, el liderazgo de Perón¹⁵ y, en lo posible, ampliar la base electoral del oficialismo captando votos disconformes de la clase obrera. Si bien los resultados de las elecciones de renovación legislativa no fueron totalmente adversos al gobierno –el caudal electoral de la UCRP creció casi en 2.5 millones de votos- la mayoría de la cámara baja quedó en manos de la Unión Popular que – con cerca de los 2.9 millones de votos- representaba al peronismo.¹⁶ Mariano Grondona resumía así la situación post-electoral: “.....Y después de marzo, el radicalismo, concebido aún por sus críticos, como un eficaz moderador político de la energía justicialista, no muestra a la opinión pública una nueva estrategia, sino una nueva perplejidad”.¹⁷ En definitiva, los resultados no fueron los esperados y esto realimentó la crítica a la gestión de gobierno. La pregunta era: ¿Cómo asegurar los resultados deseados en el marco de la democracia liberal de representación partidaria? En el clima de ideas se iba imponiendo el cuestionamiento a la legitimidad de los partidos políticos como mecanismo representativo de poder político¹⁸ y la necesidad de una mano fuerte que tomara las riendas del Estado.

Al mismo tiempo y en medio de este escenario político conflictivo, la economía funcionaba aceptablemente y no ofrecía un terreno favorable para un golpe militar. Los informes del IDES (Instituto de Desarrollo Económico) indicaban que el país estaba en un muy moderado crecimiento, el costo de vida, si bien alto, se encontraba controlado, la política de empleo era satisfactoria, el comercio exterior presentaba un saldo positivo y el Comité Interamericano de la Alianza para el Progreso había aprobado el financiamiento del Plan de Desarrollo. El panorama económico distaba de ser negativo.¹⁹ Sin embargo, y en base a las mismas series estadísticas, el futuro Ministro de Economía, Adalberto Sully Krieger Vasena, del también futuro presidente Onganía opinaba así: “A fines de 1966 la Argentina había caído una vez más en lo que se denominaba *crisis recurrente*. El país tenía ante sí el grave problema del muy lento crecimiento económico, una inflación crónica que producía grandes tensiones en la puja distributiva, una mala infraestructura, una industria excesivamente protegida, un agro receloso y un tremendo desequilibrio en las finanzas públicas. El déficit fiscal de 1966 era de casi del 40% del total del gasto, y había que reducirlo a cualquier costo.”²⁰ Como se ve, dos visiones opuestas de una misma realidad. Un país fragmentado de intereses desencontrados. Esta situación de fractura es la que hace singular –aún hoy- a la Argentina; distinta a la mayoría de los demás países. La ausencia de objetivos compartidos, la inexistencia de una mística nacional amalgamante, la falta de un proyecto común capaz de hacernos avanzar –en comunidad- hacia un destino de grandeza, condujeron a este desencuentro entre esos sectores de interés emergentes y su falta de representación en el sistema político al que intentara poner fin el golpe de Estado de 1966, en nombre de esta coalición alternativa sustentada por una rara *entente* de intereses convergentes entre un liberalismo católico integrista, el

nacionalismo popular-conservador y el desarrollismo industrialista. Esta *entente* no tardaría en mostrar sus propias divergencias que, más tarde, se verían reflejadas en las sucesivas políticas aplicadas por la Revolución Argentina.

Pero, la lógica de la desestabilización funcionaba con independencia de los indicadores económicos y las críticas de la oposición liberal conservadora fueron acompañadas crecientemente por la de los grandes sectores empresariales industriales y rurales.²¹ Tras los comicios de marzo la oposición “nacional y popular” también intensificó sus críticas al gobierno sosteniendo que esas elecciones habían puesto de relieve la vulnerabilidad del gobierno ya que esta se medía no solo en número de votos, sino también en la incapacidad política para encontrar “la fórmula perdida”.²² Se conformaba así un movimiento de pinzas entre los dos sectores opuestos de la oposición. Una formidable campaña de acción psicológica, sólidamente orquestada por los desarrollistas y frentistas intentaba desacreditar al gobierno y al sistema parlamentario, los valores de la democracia liberal habían caído muy bajo. La ideología tecnocrática de la modernización autoritaria, que abriría una grandiosa perspectiva a un país de posibilidades ilimitadas, sustituía al credo liberal. La palabra clave de la *nueva mentalidad* de la ideología modernista revolucionaria era *el cambio de estructuras*. La campaña fue tan bien manejada que la opinión pública estaba dispuesta a creer que los partidos y el régimen pluralista constitucional eran los causantes de los males del país. Esta *nueva mentalidad* constituyó la idea fuerza de los lineamientos del Estatuto de la Revolución Argentina, que, meses más tarde, reemplazaría a la Constitución Nacional. En el frente militar, la cuestión del rechazo por parte del Presidente a las propuestas del Comandante en Jefe del Ejército general Juan Carlos Onganía sobre la constitución de una fuerza de seguridad interamericana, el envío de tropas a Santo Domingo, la cuestión limítrofe con Chile, que terminó siendo resuelta por la vía diplomática, la victoria electoral peronista de ese año y la amenaza marxista; terminaron deteriorando irreversiblemente la relación entre el Presidente y el Comandante en Jefe. Además Illia había sido el candidato preferido por los militares “colorados”, derrotados en el orden interno por los “azules profesionalistas” liderados por el propio Onganía. El apoyo del radicalismo cordobés a los levantamientos “colorados” de setiembre de 1962 y abril de 1963, que representaban a la facción más antiperonista del Ejército fue muy claro. Después de la renuncia del Secretario de Guerra – general Ávalos- y producida la desinteligencia en el nombramiento de su reemplazante, el general Onganía eleva su renuncia indeclinable al cargo de Comandante en Jefe del Ejército. La renuncia de Onganía resultó el corolario de una secuela de desencuentros que marcaron la relación del gobierno con el grupo azul de Caballería, desde el inicio mismo de la administración Illia que había simpatizado con el bando colorado.²³

1.4. El fin de un gobierno.

Onganía, ya desde su retiro, va asumiendo el perfil de un adalid, un redentor, una figura pacifista capaz de cohesionar a su alrededor los factores necesarios para generar una coalición opositora en torno a su figura para abrir el cauce a una confluencia liberal-conservadora que posibilitara – al estilo de un De Gaulle criollo - la paz y el orden social, el progreso modernizador, proveer la solución a los grandes problemas nacionales y superar la antinomia peronismo-antiperonismo que retrasaba el proceso de crecimiento acelerado e impedía convertir al país en una potencia continental. Frente a los apoyos civiles recibidos por Onganía la reacción gubernamental fue ambigua. El Ministro del Interior Juan Palmero hizo una declaración que oscilaba entre la candidez y el doble discurso: “Soy el primero en lamentar el alejamiento de ese jefe, brillante y pudoroso, que ha hecho honor a la estabilidad institucional”.²⁴

¿Era posible que el Presidente pudiera desconocer la inminencia del golpe de Estado? ¿Era una prioridad del gobierno la defensa del orden institucional? A principios del otoño de 1966 el entonces Secretario de Guerra, general Castro Sánchez, dio a conocer un fuerte comunicado de prensa saliendo en defensa de la legalidad institucional. Siete días más tarde el Ministro del Interior Juan Palmero, afirmó en la Universidad de Córdoba que no había espacio para un golpe de Estado. Mientras Zavala Ortiz – Ministro de Relaciones Exteriores- sugería la existencia de un plan golpista. Estas contradicciones ponían de manifiesto la desorientación y ambigüedad del propio Presidente de la Nación. En rigor, los signos que presagiaban el final de su gobierno eran muy intensos y manifiestos.²⁵

El discurso del general Pistarini –nuevo Comandante en Jefe del Ejército- el 29 de mayo de ese año, fue una radiografía y un verdadero telegrama de aviso de la opinión militar sobre la situación. Allí hizo severas críticas a la gestión gubernamental y expresó concretamente las causas que justificaba el golpe de Estado que se produciría.²⁶ El Presidente no destituyó al general y perdió su mejor oportunidad para detener el golpe. Selló así la suerte de su gobierno. Un funcionario importante del oficialismo como Antonio Tróccoli –vicepresidente del bloque de diputados de la UCRP- declaró: “Yo deduzco en principio y en términos generales que las Fuerzas Armadas demuestran ser sostén de la legalidad, pero si las circunstancias aconsejaran un cambio de actitud, en ese momento sobrevendrá una definición. Por eso considero que los conceptos del general Pistarini no deben ser motivo de alarma”.²⁷ Mientras tanto, el Presidente seguía recibiendo pésima información de su Secretario de Informaciones –brigadier Gallardo Valdez- y de su Ministro del Interior Juan Palmero quienes –seguramente de buena fe- le infundían al Presidente un optimismo y una confianza que acentuaban su natural tendencia a fugarse de la realidad y sumirse en un quietismo suicida. Años después, cuando se le pregunta a Illia si luego del discurso de Pistarini y ante la proximidad del golpe contaba con informes de los servicios de seguridad e inteligencia respecto de los movimientos de los movimientos de los generales sediciosos, el ex presidente respondió: “La Policía Federal nos tenía al tanto de todo, con información precisa y correcta. Junto a ello –lo destaco- teníamos otros datos, los más serios, a cargo de

hombres nuestros. La conspiración, no tengo duda, era de pocos”.²⁸ En un reportaje efectuado por el *New York Time*, el 17 de setiembre de 1966, preguntado acerca de la posibilidad de haber detenido el golpe de Estado, el ex presidente dijo que nada podía haberse hecho ya que: “ocho días antes de derrocar me recibí una declaración firmada de lealtad de todos los altos jefes militares. Tres días antes del golpe, los comandantes en jefe del Ejército, la Marina y la Fuerza Aérea me entregaron otra promesa firmada para contener los rumores. El día del golpe me sentía tan seguro como siempre en la Casa de Gobierno”.²⁹ En verdad, el Presidente en esas horas dramáticas, denotó apatía y abulia frente a la inminencia de su derrocamiento.³⁰

Con la detención del general Caro –hermano de un diputado peronista– único defensor del orden constitucional que tenía el gobierno –cuya detención obedecía al supuesto de su nombramiento como Comandante en Jefe-³¹ se ordenó el inicio de las operaciones tendientes al derrocamiento del gobierno constitucional. En la fría mañana otoñal de aquel martes 28 de junio de 1966 a las 7.25 horas, después de una tensa noche crispada de dramatismo, el ahora ex presidente Arturo Illia es desalojado de la Casa de Gobierno. Se retira en un auto particular junto a su hermano Ricardo rumbo a la casa de este en Martínez al norte de la capital, sin siquiera ser arrestado, es decir, en absoluta libertad. Dos años, siete meses y veintiocho días duró el gobierno de Arturo Umberto Illia. Para los radicales del pueblo, el mayor orgullo fue, que durante su vigencia, no fue necesario recurrir al estado de sitio y, además, no hubo presos políticos, lo que resultaba excepcional en la Argentina de aquellos años. Frente a ello, sus oponentes sostenían que aún sin estado de sitio ni presos políticos se podía hacer un mal gobierno.

Ninguna reacción civil o militar acompañó la caída del presidente constitucional, mientras la vida ciudadana continuaba con su rutina habitual. La Argentina había perdido –otra vez– el crédito de un gobierno constitucional, un poco por no quererlo y otro poco por no saber defenderlo.

NOTAS AL CAPÍTULO UNO

¹ Smulovitz, Catalina; *La eficacia como crítica y utopía. Notas sobre la caída de Illia*. Buenos Aires, Desarrollo Económico N° 131 octubre-diciembre 1993.

² Las elecciones provinciales de 1966 en la provincia de Catamarca le dieron el triunfo a la Unión Justicialista sobre la UCRP por 30.500 votos a 27.961. Buenos Aires; en: *Todo es Historia* N° 230, julio 1986.

³ Como consecuencia de la zafra de 1965 se agudizó el retraso en el pago de los salarios a los cañeros, se multiplicaron las deudas provinciales y el Estado provincial entró prácticamente en cesación de pagos. Buenos Aires, En: *Primera Plana* 24 de mayo de 1966.

⁴ Muraro, Heriberto. *Políticos, periodistas y ciudadanos*, Sao Paulo, FCE 2000, p. 72

⁵ Smulovitz, Catalina, "En busca de la fórmula perdida", Buenos Aires, *Desarrollo Económico* N° 121, abril – junio 1991.

⁶ Taroncher, Miguel A., *La caída de Illia*, Buenos Aires, Vergara editores, 2009. p.46

⁷ Ibidem: p. 72

⁸ "La imagen", *Primera Plana* N° 173, 19 de abril de 1966, p.7.

⁹ Grondona, M, ¿Quién manda?, *Primera Plana*, N° 148, 7 de setiembre de 1965, pag. 7.

¹⁰ Grondona, M., "Signos de la campaña", *Primera Plana*, N° 118, 9 de febrero de 1965, p. 5.

¹¹ Grondona, M, "Por la Nación", *Primera Plana*, N° 179, 31 de mayo de 1966.

¹² Este general (lavícoli) asesorado por periodistas y espías, llegó a ocultar una grabadora y un micrófono en su uniforme para registrar los diálogos que el Comandante en Jefe del Ejército, el Secretario de Guerra y el presidente Illia mantuvieron durante una cena en Campo de Mayo. La reproducción textual de fragmentos de las conversaciones se publicó en la sección *La Nación* bajo el título de "El cuento de hadas del presidente" *Confirmado*, N° 39, 17 de marzo de 1966, pp. 12-13.

¹³ Sánchez, Pedro, *La presidencia de Illia*, Buenos Aires, CEAL, 1983, p. 9.

¹⁴ Tcach, César y Rodríguez, Celso; *Arturo Illia: un sueño breve*, Buenos Aires, Edhasa 2006, pp. 60/61.

¹⁵ Taroncher, M. Ángel, *La caída de Illia y la Revolución Argentina*, Universidad de Valencia, España. 2004.

¹⁶ Smulovitz, Catalina, "En busca de la fórmula perdida", Buenos Aires, *Desarrollo Económico* N° 121, abril-junio 1991, p.118.

¹⁷ Grondona, Mariano, "Conflictos y tensiones", *Primera Plana*, 1º de junio de 1965, p.7.

¹⁸ Grondona, Mariano: "El problema central de la coalición no peronista es, como en 1946, algo quizá insuperable: los votos", Buenos Aires, *Primera Plana*, 7 de julio de 1965.

¹⁹ García Vázquez, Enrique; *La economía durante la presidencia de Illia*, Buenos Aires, *Desarrollo Económico* N° 134, julio-setiembre 1994, pp. 291-294

²⁰ De Pablo, Juan C.; *La economía que yo hice*, Buenos Aires, Ediciones El cronista Comercial, 1986, Vol.II pp. 60-63, Buenos Aires,

²¹ Tcach, César y Rodríguez, Celso, *Arturo Illia: un sueño breve*, Buenos Aires, Edhasa 2006, p.126

²² Smulovitz, Catalina, definición del problema político de la cuestión peronista en; “La búsqueda de la fórmula perdida: argentina, 1955-1966”, Buenos Aires, *Desarrollo Económico* N° 121 abril-junio 1991, pp. 113-124

²³ Rouquié, Alain, *Poder militar y sociedad política en Argentina*, Buenos Aires, Emecé 1982, Buenos Aires, Tomo II, pp. 228-234

²⁴ *La Voz del Interior*, Córdoba, 28 de diciembre de 1965.

²⁵ Tcach, César y Rodríguez, Celso, *Arturo Illia, un ...ob.cit.* pp. 147-152

²⁶ *Todo es Historia*, N° 230, julio de 1986, p.21

²⁷ *Todo es Historia*, N° 109, abril de 1976, p.15.

²⁸ *Primera Plana*, N° 439, Buenos Aires, 29 de junio de 1971, p.40

²⁹ *Historia Integral Argentina*, Buenos Aires, CEAL, 1971, Tomo II p.85

³⁰ *Todo es Historia*, N° 109, abril de 1976, p.25

³¹ Cavarozzi, Marcelo, *Autoritarismo y democracia (1955-1983)*, Buenos Aires, CEAL, 1983, entrevista al general Caro, pp.105-106

Capítulo 2. La Revolución Argentina (1966-1971). Fundamentación ética y doctrinaria.

2.1 Axiología, fundamentos y justificación del régimen revolucionario.

Hay momentos extraordinarios en la vida de las naciones en los cuales el respeto a las normas estatuidas se convierte en una sencilla fórmula ritual. Así ocurre cuando el sistema institucional y jurídico se sostiene por la costumbre, pero ha perdido consenso. Las revoluciones –al igual que las guerras- son, a veces, la *última ratio* a la cual se apela cuando no es posible encontrar soluciones dentro de las leyes de juego vigentes, cuando –dentro del sistema- no existen mecanismos regulatorios para adaptar este a los cambios operados en la sociedad o cuando existiendo los mecanismos, no funcionan adecuadamente. Recién en esta instancia cabe apelar a la revolución. En teoría, por medio de la revolución el pueblo reasume el poder delegado a sus gobernantes. Pero en la práctica el pueblo no hace la revolución, sino que ella es el resultado de la acción de minorías activas y organizadas que tienen una ideología de cambio. Ellas son quienes actúan en nombre del pueblo y lo sustituyen en el ejercicio de sus derechos, y este acto de sustitución siempre depende del deterioro del consenso al régimen depuesto y del grado de consenso que haya acumulado el nuevo gobierno revolucionario a través del estilo iconoclasta de sus actos de gobierno.

En el caso argentino, la revolución de junio de 1966 pareció ser el meridiano que marcaba el fin de una época. La revolución declaró la falencia del viejo orden institucional e intentó implantar uno nuevo, pero no se perfiló una opinión pública organizada en torno a la acción de gobierno, sino, que más bien el régimen logró un consenso pasivo pero no un apoyo activo, lo que convirtió al pueblo en espectador más que en un protagonista de la empresa revolucionaria. Probablemente en la ausencia de un sistema de pensamiento que nutriera ideológicamente la acción revolucionaria se explique el fracaso de todos los golpes de Estado sucedidos desde 1930. La Revolución Argentina –*malgré* sus intenciones- no consolidó una ideología del cambio, no aportó un sistema de ideas ni un modelo sustitutivo de organización nacional. No contó con una usina de pensamiento que le permitiera afrontar –responsablemente- la tarea de debatir bases doctrinales inspiradoras de una nueva arquitectura política e institucional para una Argentina modernizada. Su acción se redujo a cambiar los equipos de gobierno y a lanzar una serie desordenada de medidas e iniciativas. El resultado fue idéntico a los demás casos; a poco de andar, la falta de un programa revolucionario y las contradicciones internas de intereses más la presión de la opinión pública, provocaron un súbito retorno a la normalidad constitucional, que era, justamente, lo que esta revolución había venido a cambiar.

2.2 La legitimidad y el nuevo régimen.

Dícese –filosóficamente- que es legítimo todo aquello justificado existencialmente, cuya presencia conviene al orden natural, en cuanto tiende a la planificación posible que propenda a su realización. Por lo tanto el criterio normativo de la legitimidad es *el orden natural*. Este criterio de legitimidad permite tantas aplicaciones como diversos tipos de entes trata de justificar. Al analizar los distintos aspectos que legitiman la vida política es preciso elevarse e indagar los fines últimos, es decir, se hace necesario un planteo filosófico. Sin mengua de ello, es posible analizar la eficacia de un elenco dirigente (legitimidad política), sus raíces tradicionales (legitimidad histórica), la aprobación de la mayoría dirigida (legitimidad sociológica) y también la coherencia institucional (legitimidad jurídica).¹ La política no podría desarrollar su papel sintetizador sin un instituto de realización que le permita su ejercicio. Este instituto, que surge del seno comunitario en origen es el Estado, que despliega su energía y la razón de su existencia en la realización (poder político). El poder político con el que el Estado efectiviza su dominio está legitimado por su finalidad última: *el bien común*. El Estado es legítimo, puesto que sin su intervención la sociedad se descompondría y quedaría librada a un *estado de naturaleza* hobbesiano, así que no hay cuestión de supremacías; la comunidad sin Estado sería solo una multitud, -en el sentido de Antonio Negri- un conglomerado destinado a dispersarse o destruirse, y el Estado sin comunidad es una entelequia irreal. Claro que el Estado y el poder que posee no es una forma vacía, el elenco social que lo constituye y ocupa, abarca cierto sector dedicado a la función pública en sus diversas especialidades. Estas minorías constituyen el funcionariado y se conforman de acuerdo a las condiciones de reclutamiento de cada régimen en función a las fuerzas que ese Estado sintetiza y se ocupan de la burocracia estatal y el mando político.

La legitimidad es siempre el piso, el “suelo” del poder y del sistema, hay una *legitimidad envolvente* que tiene como sede al cuerpo social y constituye la base sobre la que descansa el poder. Se dice entonces que un sistema político es legítimo cuando hay consenso suficiente en torno de su calidad y eficiencia, sus virtudes y su vigencia, comparado con otros sistemas existentes. Existen también *legitimidades insulares* que son propias de las instituciones políticas, sociales o profesionales.² Estas constituyen el soporte consensual del sistema original de aquellas. En este sentido las organizaciones empresarias, las sindicales, las iglesias, las universidades y las fuerzas armadas, tienen una lógica interna propia donde la legitimidad no siempre se expresa en valores propiamente políticos, sino en relación con la esencia misma de la institución y sus condiciones de existencia. Cuando se pone de relieve un estado de ilegitimidad en el sistema o cuando la *legitimidad envolvente* está seriamente dañada, se ponen de manifiesto las *legitimidades insulares*. En el caso que nos ocupa y en medio del estado de ilegitimidad sociológica y política en que estaba envuelto el gobierno constitucional, las instituciones –grupos sociales y profesionales- se replegaron en su propia legitimidad y en el caso específico de las fuerzas armadas –en su rol autoasignado de custodios de los valores vigentes- estas se afirmaron en esa función de custodios

últimos de la situación política promoviendo ante todo la unidad de la fuerza armada. Esta actitud permanente de las instituciones armadas conllevó siempre –desde 1930– un problema político y ético que es el que trae consigo el intento de cambiar un ciclo político por otro a través del uso de la fuerza. El proceso iniciado en junio de 1966 se tradujo inmediatamente en una revolución institucional llevada adelante por las fuerzas armadas en unidad y por la voluntad revolucionaria de un grupo de la sociedad civil que promovía el cambio, pero, la responsabilidad última de este acto fue siempre castrense. Este *nuevo orden* requiere cierta precisión acerca de los ideales y objetivos que justifican y legitiman la revolución así como su instrumentación. De otro modo, la voluntad revolucionaria se transforma en una simple exteriorización formal de dudoso contenido que –con el tiempo– suele conducir a una reversión política que reinstala modelos anteriores a modo de reacción en medio de la frustración por lo que no pudo ser.

2.3 Los instrumentos jurídicos de la revolución y sus orígenes.

Hasta junio de 1966 rigió en la República Argentina una Constitución originada en 1853, sobre la cual se habían realizado reformas parciales que derivaron en su vigencia desde 1860, aunque se vio alterada por diferentes circunstancias: una Convención Constituyente en 1949 aprobó otra Constitución luego dejada sin efecto por el gobierno provisional surgido de la revolución de setiembre de 1955. La siguieron tres períodos no constitucionales, es decir de regímenes de facto, que no fueron elegidos de acuerdo con las normas establecidas en ella. En otras palabras, nuestra vieja Constitución tuvo una vida bastante ajetreada y endeble.

Pero en aquel junio, los comandantes en jefe de las tres armas resolvieron constituir una Junta Revolucionaria, que asumió la suma del poder público, es decir, el poder político y militar de la República, destituir a las autoridades electas por aplicación de la Constitución en los ámbitos nacional, provincial y municipal y separar de sus cargos a los miembros de la Corte Suprema de Justicia. La misma Junta puso en vigencia el Estatuto y las Actas de la Revolución Argentina, liquidando de hecho la Constitución vigente y fijó los objetivos políticos y económicos de la Nación. El orden jurídico se había transformado esencialmente, lo ocurrido no implicaba una complementación ni una suspensión de la Constitución vigente, sino, simplemente su sustitución. Así lo demuestra la actitud de permanencia del régimen que se implanta, como así también la adopción de decisiones fundamentales que no aparecen en ningún momento como provisorias. Esta no parecía una revolución como las conocidas hasta entonces. Los movimientos de fuerza hasta aquel momento tenían su justificación en el restablecimiento del orden constitucional perdido, pero no era así en este caso ya que el gobierno constitucional derrocado no había cometido ningún acto avasallante de la Constitución vigente ni había ejercido poderes tiránicos que lo hicieran insoportable. Las causas alegadas por esta revolución fueron la pésima conducción de los negocios públicos, las fallas estructurales y la aplicación de métodos y técnicas inadecuadas a las realidades contemporáneas, la falta de orden y disciplina social y la quiebra del

principio de autoridad. Todas causales que superan el problema del mero orden constitucional. El orden institucional vigente en adelante en la República estaría sometido a los documentos fundamentales emanados de la Junta: el Acta de la Revolución Argentina y sus tres anexos: 1) Mensaje de la Junta Revolucionaria al pueblo argentino; 2) el Estatuto de la Revolución Argentina; y 3) objetivos políticos o fines de la Revolución.

Del conjunto surge la nueva estructura jurídica *in toto* del régimen revolucionario. En la cúspide se encontraban los fines, por debajo de estos el Estatuto y en tercer término, la llamada Constitución de la Nación Argentina, en todo lo que no haya sido derogada por los anteriores. La fuente de validez de la Constitución sería ahora la decisión de la Junta de hacerla subsistir parcialmente si lo deseaban, ya no era la decisión soberana de la convención que le había dado vida. Todos los documentos fundacionales surgidos de la revolución reconocen su origen en los principios de la doctrina política católica –que desarrollaremos más adelante– emanada de las encíclicas *Pacem in Terris* y *Mater et Magistra* y constituyen el *orden comunitario o corporativo* de cuño social cristiano como filosofía política de la misma.³

2.4 Ideología y modernización.

Si hubo un tema relevante en el proceso revolucionario de junio de 1966 que puede servir como punto de partida de una elaboración ideológica, este es el tema de la modernización y el desarrollo económico. Sin embargo, el tema de la modernización se encontraba condicionado por la inspiración cristiana que asumen los instrumentos jurídicos de la revolución y este condicionamiento no se resolvió con definición suficiente. La revolución estaba llamada a explicar con mayor suficiencia por qué el país debió modificar sus formas políticas para encauzar los cambios sociales, económicos y políticos subyacentes en la sociedad civil. Si la dirigencia revolucionaria ponía el acento en la modernización, esto sugiere e implica la aceptación de las exigencias de la tecnología y supone también una actitud mental lista para aceptar los cambios necesarios en pos de modificar una tradición compleja. La idea de modernización y desarrollo acelerado con el “hecho católico” manifestado por estos dirigentes, no parecían de un ensamblaje ideológico sencillo. Sin duda que la palabra modernización se utilizó en aquel momento como sustituto de “desarrollo” que tenía, por entonces, una clara connotación política partidaria.

El avance en la profesionalización militar, el sentimiento de logro organizacional y de superior capacidad, el alto grado de identificación corporativa y la ideología de la seguridad nacional, marcaron un proceso militar que requería de modernización y desarrollo económico para su propia existencia institucional.⁴ De este concepto devienen las cuatro primeras proposiciones de O'Donnell⁵ y sus presuntas características sobre los militares de los países en desarrollo, deduciendo que estos tienen capacidades superiores a las de los sectores civiles en términos de tecnología, eficiencia y racionalidad en la toma e implementación de las decisiones y motivaciones modernizantes. Hoy un *après coup* histórico nos deja ver que esa corriente teórica no

era la acertada, tal como lo manifiesta el propio autor más adelante. Este enfoque actuaría como un justificador acerca de que esa presunta superioridad dotaría a los militares de algo así como poderes especiales sobre la sociedad civil para conducirla y efectivizar el salto definitivo al desarrollo en los países en vías de desarrollo. Debe notarse que en casi todas las naciones en vías de desarrollo los militares han tratado de imitar los comportamientos operacionales y las organizaciones formales adoptadas por los militares de los países de más alto desarrollo –especialmente los Estados Unidos, pero no solo este- y han recibido entrenamiento, armas e influencia ideológica de la potencia dominante sobre su país. Pero aquellas características formales adoptadas distaban mucho de sus características reales como para asignarles esas supuestas aptitudes superiores. Los militares tendían a verse a sí mismos como el único sector que había logrado zanjar sus problemas y establecido una mayor cohesión interna, una identificación corporativa y eficacia castrense y habían emergido exitosos y fortificados de una fuerte convulsión interna.⁶ Pero esta mayor capacidad para dirimir sus problemas no era extrapolable como solucionadores de problemas de organizaciones externas, mucho menos para intervenir en los problemas políticos de la sociedad civil. Como años más tarde quedaría demostrado, la participación en los asuntos políticos del Estado –asumiendo su conducción- no hizo más que reintroducir la fractura al interior de las fuerzas y finalmente no solo pasaron a formar parte del problema que querían elucidar, sino que –en buena medida- pusieron en peligro su propia integridad institucional. La complejidad del contexto social y de la propia vida política del país –con los riesgos de incertidumbre que conlleva- no pudieron ser controlados solo con organización y orden como sí habían podido hacerlo dentro de su propia institución y, derrumbado el mito de la capacidad superior, debieron resignar la utopía de un proyecto político destinado a lograr una sociedad integrada y organizada que redujera a un mínimo la incertidumbre.

Las Fuerzas Armadas fueron –entre 1955 y 1970- básicamente las mismas, sin embargo, su comportamiento político difirió en cada intervención en aspectos fundamentales. Los procesos de cambio social a nivel global y nacional –y aun dentro de la propia organización militar- interactuaron, influyendo y dejándose influir por esos cambios que hicieron variar su comportamiento político, su ideología política y sus propias aptitudes disponibles para el logro de objetivos de políticas públicas que reclamaban y trataron de implementar.

2.5 Objetivos políticos y económicos de la Revolución.

El documento conocido como objetivos políticos integraba, como anexo 3, el *Acta de la Revolución Argentina*.⁷ En él se fijan los conceptos básicos que regirían el Nuevo Estado y es el más importante en materia ideológica de aquel cuerpo jurídico. Este documento se encuentra dividido en dos partes; 1) Objetivo político general; y, 2) Objetivos particulares.

En el primero se mencionan los valores espirituales y morales (de claro sesgo católico), la elevación del nivel educacional, científico y técnico y la eliminación de las causas

profundas del actual estancamiento económico (normalización y modernización con desarrollo acelerado), afianzar el bienestar social y asegurar la tradición espiritual inspirada en los ideales de libertad y dignidad de la persona humana, que son patrimonio de la civilización occidental y cristiana; (de inspiración conciliar influidos por la Doctrina Social de la Iglesia) como medios para restablecer una auténtica democracia representativa⁸ en la que impere el orden dentro de la ley, la justicia y el interés del bien común, todo ello para reencauzar al país por el camino de su grandeza y proyectarlo hacia el exterior.

En los objetivos particulares se mencionan: A) En el ámbito de la política exterior; mantener la soberanía nacional y la defensa de la integración territorial; desarrollar una política exterior ejecutada en continuidad de las tradiciones y compromisos internacionales. Asumir en forma irrevocable el compromiso de defender el mundo libre occidental y cristiano y contribuir al bien común internacional preservando las relaciones amistosas entre los pueblos afianzando las organizaciones jurídicas internacionales. B) En el ámbito de la política interna; restaurar en el país el concepto de autoridad, el respeto irrestricto a la ley y el imperio de la justicia en un régimen republicano en el que tengan plena vigencia los derechos y libertades individuales. Promover la consolidación de la cultura nacional inspirada en las tradiciones del país, pero abierta a las expresiones propias de la civilización cristiana occidental. C) En el ámbito de la política económica; eliminar las causas profundas que condujeron al país a su estancamiento actual, establecer las bases y condiciones que hagan posible una gran expansión económica y un desarrollo sostenido mediante el uso racional de los recursos físicos y humanos con que cuenta el país; asegurar el acceso a la mayor cantidad de bienes y servicios a todos aquellos que estén dispuestos a realizar un sostenido esfuerzo para obtenerlos, con la finalidad de procurar a todos los habitantes la mayor libertad, prosperidad y seguridad compatibles con el orden, la disciplina social y las posibilidades del país.⁹ D) En el ámbito de la política laboral; alcanzar un justo equilibrio entre los intereses de la Nación, del trabajo y de la empresa, manteniendo a las organizaciones dentro del marco específico de la función propia. E) En el ámbito de la política de bienestar social; crear las condiciones para el creciente bienestar de la población, desarrollando la seguridad social y elevando al máximo posible los niveles de salud pública y facilitando el acceso a una vivienda digna. F) en el ámbito de la política de seguridad; alcanzar la aptitud necesaria para alcanzar y asegurar los objetivos de los otros ámbitos.

Como puede apreciarse en los objetivos descriptos, las Fuerzas Armadas –antes aun al derrocamiento de Illia- fueron construyendo un discurso y una idea próxima al enfoque estructural. Sostenían que su intervención era necesaria no solo para disciplinar a las fuerzas sociales, responsables de la mayoría de los problemas nacionales, sino para impulsar la industria, fomentar la economía para así desactivar los focos de conflictividad social. La novedad introducida por la Revolución Argentina consistió en entender el progreso no solo como una necesidad socio-económica, sino como un objetivo de seguridad nacional. El Ejército incorporó a sus obligaciones tradicionales (defensa y territorio) el reto del progreso entendido en el sentido anterior. El país

parecía encontrarse camino a la disolución social y reclamaba la intervención eficaz de sus Fuerzas Armadas. La sociedad política constituida por los partidos políticos, los sindicatos y las organizaciones civiles debía dar paso a un cuadro profesional que se encontrara al margen de la partidocracia y fuera de los debates inconducentes. El crecimiento económico paso a formar parte del interés nacional y justificaba el uso de todos los recursos del Estado. Los militares construyeron su ideología del progreso, reformularon el rol de las Fuerzas Armadas en la sociedad y aspiraron a establecer, finalmente, un nuevo modelo de comunidad.¹⁰

NOTAS AL CAPÍTULO DOS

¹ Martinotti, Héctor; *Análisis y prospectiva de la Revolución Argentina*, Buenos Aires, Depalma, 1966, p.80

² Esta idea de las dos legitimidades fue acuñada por Carlos Floria y presentada en un Documento de Trabajo (D.T.) llamado *Ideología y modernización* para el Instituto de Ciencia Política de la USAL en 1966 poco tiempo después del golpe de Estado y funcionó como una justificación teórica de su legitimidad

³ Selser, Gregorio; *El Onganiato (I) La espada y el hisopo*, p.86, Buenos Aires, Hispamérica 1986.

⁴ O'Donnell, Guillermo; *Modernización y golpes militares*, *Desarrollo Económico* N°47, octubre-diciembre 1972, Buenos Aires. P. 539.

⁵ O'Donnell, Guillermo; *Modernización y...* pp. 540-544.

⁶ Por supuesto que esto lo habían logrado con fuertes enfrentamientos armados para dirimir las diferencias, que, en su momento, pusieron en vilo a la sociedad civil.

⁷ El documento revolucionario que sufrió los mayores cambios una vez Onganía se hiciera cargo de la presidencia fue el Anexo 3 en el que se definían las metas de la Revolución. Este anexo no fue publicado hasta dos semanas después de disuelta la Junta Militar, este hecho demuestra el desacuerdo entre los redactores originales del documento y los hombres de Onganía. El texto difundido era mucho más breve y la redistribución de sus puntos cambiaba el énfasis –cuando no el sentido- de la redacción. A modo de ejemplo, donde decía en el original: "restablecer una auténtica democracia representativa", el texto publicado comenzaban con: "consolidar los valores espirituales y morales". La palabra democracia, quedó perdida en un largo párrafo en donde se le daba más importancia a los adelantos científicos y técnico y la mejora de las condiciones laborales.

⁸ La democracia representativa que se proponía no era la democracia liberal de representación partidaria, sino la inspirada en las organizaciones intermedias de la sociedad civil, basada no en la representación por personas sino en un régimen de representación organizacional de primer grado, como asociaciones profesionales, empresariales, sindicatos, clero y otros grupos de interés representados en este tipo de federaciones. Este mismo tipo de modelo de representación política, - inspirada en el concepto de la comunidad organizada- en reemplazo de la legislatura bicameral de composición partidaria, sustentadas en corporaciones o asociaciones de la sociedad civil lo veremos más tarde repetido durante el breve tercer gobierno de Juan Perón como una propuesta de modificación legislativa en su inconcluso Proyecto Nacional que fuera gestionado en la secretaría privada ad hoc a cargo del coronel Vicente Damasco.

⁹ Los cambios más significativos –hechos por los hombres de Onganía- al Anexo 3, fueron, sin embargo, los objetivos de la política económica. Aquí aparecen las disminuciones al énfasis monetarista y de economía de mercado que Álvaro Alsogaray –de la mano de su hermano Julio, el general- había logrado introducir en el primer borrador. Las discusiones con Julio Alsogaray –en ese momento secretario General (interino) de la Presidencia- se zanjaron con la emisión de dos documentos, uno para ser emitido con la firma de los tres comandantes y otro –el definitivo- que aparecía por separado con la firma del ya presidente Onganía. El Anexo 3 difundido contaba con menos del 20% del texto original, omitía la "implantación plena, tan pronto fuera posible, de una economía de mercado con sentido social" y subrayó en cambio la necesidad de una gran expansión económica, nuevas políticas laborales, el fortalecimiento de los sindicatos, mejoras en la seguridad

social, salud y vivienda. Se cambió así el sentido orientado hacia la libre empresa, por uno orientado a la fuerte expansión económica con apoyo estatal.

¹⁰ En una entrevista con la revista *Siete Días*, Onganía afirmaba que: “una Argentina donde se hayan alcanzado los objetivos de la Revolución será un país donde se hayan superado las causas profundas del estancamiento, se haya alcanzado un elevado nivel cultural y científico y se haya conquistado definitivamente el destino de grandeza” En: *Siete Días* N°7, 27 de junio de 1967)

Capítulo 3. *La primera etapa. El Gobierno de Juan Carlos Onganía (1966-1970). Un gobierno de objetivos sin plazos.*

3.1. *Ecce Homo. La elección de Onganía como presidente. Las expectativas sobre su persona y la confrontación con la realidad.*

Mientras en la Casa de Gobierno se desarrollaban los últimos pasajes de la frustración radical de aquella mañana del 28 de junio, en la Secretaría de Guerra estaban reunidos los comandantes en jefe de las tres Fuerzas Armadas discutiendo los términos del estatuto y la proclama revolucionarios cuyo texto básico había sido redactado por los generales Alejandro Agustín Lanusse y Alcides López Aufranc, el teniente coronel Corbetta y el abogado José Manuel Saravia (h). Hubo acuerdo en proceder a la redacción definitiva de ambos documentos al día siguiente, pero, la reunión se prolonga por bastante tiempo. Según se afirma, la Marina habría manifestado cierta inquietud, sosteniendo que algunas de las designaciones propuestas por el Ejército recaerían en figuras de acentuado tinte nacionalista¹. Teóricamente, el general Onganía permanecía en esos momentos en su domicilio particular del barrio de Belgrano. Una versión autorizada indicaba que, vestido de civil, y acompañado por el general Lanusse ingresó –por esas horas- al edificio de la calle Azopardo² para mantener una reunión secreta con el general Pistarini. Una serie de nuevas y nerviosas entrevistas van a realizarse durante el día. Lo que en realidad sucede es que –en el primitivo proyecto revolucionario- los tres comandantes en jefe se harían cargo del gobierno durante un tiempo prudencial –alrededor de seis meses- durante los cuales serían adoptadas las medidas más drásticas e impopulares que los planes revolucionarios consideraban imprescindible llevar a cabo. El general Onganía sería mantenido como figura de reserva durante ese lapso y, finalmente, con el trabajo difícil hecho, se le ofrecería públicamente encabezar los destinos de la Nación. Pero los planes varían entre esa madrugada del 28 de junio y la del día siguiente. En el curso de esas reuniones se decide, finalmente, saltar la primera etapa del plan revolucionario para que, la figura nucleante de Juan Carlos Onganía se hiciera cargo del poder. A las once de la mañana del día 30 de junio la junta de comandantes en jefe lo proclamaba presidente de la Nación.

Cuando la lucha entre azules y colorados terminó –en setiembre de 1962- con la victoria azul, emergió la figura del general Juan Carlos Onganía como unificador y líder final del Ejército. Este general terminaría convirtiéndose –más tarde, hacia 1965- en el punto de confluencia de grupos de interés y buena parte de la opinión pública. En contraposición a la figura del entonces presidente Illia, que cada vez se desdibujaba más, se iba agrandando la suya porque había logrado sacar al Ejército del creciente desorden en que había estado sumido durante las presidencias de Frondizi y Guido y lo había encauzado en sus funciones específicas nuevamente. Ese hombre –de carrera poco destacada pero eficiente hasta su revelación en

1959 cuando fue ascendido a general de brigada- era el comandante en jefe del Ejército, el teniente general Juan Carlos Onganía, que luego de resuelta la cuestión entre azules y colorados había pensado en retirarse, pues consideraba su misión cumplida. Cambió de planes porque un amplio espectro del país lo consideraba la garantía de que se pudiera llegar a las elecciones y a la normalización institucional. Hasta se lo alentó para que aceptara la candidatura presidencial auspiciada por un frente partidario.³ Pero Onganía –comportándose con gran prudencia- sin decir que no explícitamente, tampoco alentó esos planes y no se dejó desbordar por los que intentaron persuadirlo de que él era *Ecce Homo*, el “*hombre del destino*”. Onganía y su Ejército azul, restauradores del orden, identificados con el desarrollo nacional, estarían en condiciones de representar el futuro tercer movimiento, moderno, en cuanto superador de los enfrentamientos iniciados en 1955. El nuevo líder interpretaba a la fuerza compuesta por el país “no partidario”; su conducción era la posibilidad de un futuro diferente a un presente dominado por los anacrónico partidos políticos y parecía el nuevo Lonardi ya que se proponía superar la antinomia peronismo-antiperonismo mediante la disolución de las estructuras partidarias y la cooptación en el Estado de las elites sindicales. Pertenecía al arma de Caballería que dominaba los puestos de alto mando y otros cargos claves en la conducción del Ejército luego de setiembre de 1962. Los oficiales de esta arma –en su mayoría- fueron siendo ganados por el organicismo social cristiano a través de los Cursillos de la Cristiandad y de las doctrinas autoritarias sembradas en la Escuela Superior de Guerra por profesores que exaltaban la organización de los intereses profesionales y del paternalismo contra el individualismo subversivo de la sociedad liberal; tenían un fondo común de antiimperialismo rejuvenecido salpicado con algo de tecnocracia industrialista. Los viejos contenidos maurrasianos adoptaban un aire de modernidad, la doctrina mussoliniana se proponía como sustituto de la democracia formal impotente y perimida. Todo ello halagaba evidentemente el misticismo redentor y la obsesión jerárquica de los oficiales de Caballería, de los cuáles Onganía era digno jefe. Los industrialistas del desarrollismo completaban el cuerpo de profesores de las escuelas militares.⁴

Según la perspectiva desde donde se mirara, Onganía podía ser: el militar nacional y popular que reeditara la alianza ejército-sindicatos, el conductor de un Estado autoritario y modernizador, el dictador nacionalista católico vitalicio, el fundador de una Segunda República o el primer monarca de una casa real argentina.⁵ Esta noción nobiliaria o providencial del primer presidente de la Revolución Argentina fue acentuada por el periodista Mariano Grondona al definirlo como el “Moisés” “porque tenía dimensión monárquica y quería ser aceptado por gracia de Dios. Nosotros pensábamos en De Gaulle y él pensaba en Franco. No podemos acusarlo de haber dado lo que no tenía, sino de lo que nosotros creíamos que tenía”.⁶ La parquedad discursiva del general era interpretada por los medios como una sutil forma de sabiduría e inteligencia. La opinión pública encontraba en su reconcentrado silencio las cualidades y capacidades de un verdadero “héroe

mítico". Pero, cuando asumió la presidencia todas las expectativas comenzaron a derrumbarse rápidamente, cada vez que pretendía resolver los problemas de la compleja realidad económica y social, pretendía hacerlo por la fuerza. Sus limitaciones y defectos se pusieron de relieve y contrastaron con la idea de héroe redentor que la prensa y la opinión pública le habían construido. La decepción y el desengaño se manifestaron con todo su esplendor cuando se pudo apreciar que su actitud recoleta y su mutismo no correspondían a un sabio superior y que su fascinante silencio no se correspondía con la reflexión profunda de un filósofo que acuñaba secretas formulas capaces de exorcizar las causas del estancamiento y la decadencia nacional, sino la carencia de proyectos, la vacuidad de ideas elaboradas y la imposibilidad de realizar análisis complejos de la realidad. Así, "el Mesías" de Grondona mostró lo que antes nadie quiso ver: un hombre simple, educado, respetuoso de las normas, un militar reglamentarista cultor del orden por el orden mismo, un hombre sobrio por costumbre que ocultaba una timidez innata bajo un aspecto severo, pero que era chistoso y ocurrente. Tenía apego a las formas, el funcionario que entraba y salía cinco veces de su despacho, era recibido de pie y con un apretón de manos cuantas veces entrara y saliera. Se preocupaba por temas que –por entonces- despertaban poco interés o escasa inquietud como: la preservación de la vicuña en La Rioja, el elefante marino de Chubut o el yacaré de Misiones. Puso fin al regalo de plazas para que las embajadas levantaran sus sedes y se hizo explicar detenidamente como los dorados remontarían la futura represa del Salto Grande.⁷ En definitiva un hombre común. Este general de 52 años nunca se mostró como no era, nunca mintió sobre sus capacidades y nunca trató de hacer lo que no sabía. No fue su culpa, fue el país quien lo sobredimensionó, idealizó y construyó sobre él –en medio de la desesperada necesidad de un líder- una figura de gigante que nunca fue la suya.

3.1.1 La Iglesia Católica y la Revolución Argentina. La Ciudad Católica, el Cursillismo Católico y el Ateneo de la República. La conformación de los cuadros dirigentes.

El factor religioso, y, específicamente el catolicismo, ha tenido siempre una fuerte influencia en la política argentina desde la misma organización nacional. Sin embargo, raramente, y a diferencia de los países europeos occidentales, los católicos argentinos nunca generaron fuerzas políticas autónomas. Más bien gestaron alianzas y afinidades positivas con diversas opciones políticas que sostenían un fuerte contenido religioso. También es cierto que el catolicismo desarrolló un cierto contenido defensivo –desde los orígenes de la Nación- de signo anti-liberal en lo político como reacción al liberalismo laicista de las elites que fundaron la República.⁸ En la medida que el liberalismo entra en crisis –hacia el final de la segunda década del siglo XX- el catolicismo primero promueve una gran concentración de fuerzas y luego emplea una estrategia sumamente ofensiva contra la democracia liberal, es decir, contra la política misma y los partidos

políticos en particular como forma de representación democrática. Es a partir de 1930 –con la primera interrupción revolucionaria- y en las siguientes interrupciones del orden constitucional, que la Iglesia Católica –institucionalmente- inicia un sistema de alianzas, negociaciones y reciprocidades corporativas con otra institución preponderante en el arbitraje de la política argentina: el poder militar. De esta manera se desarrolló una matriz que –siguiendo a Fortunato Mallimaci- puede denominarse como *catolicismo integral* y supuso una serie de ideas. Sus principales enemigos eran el liberalismo y el socialismo, en este *catolicismo integral* no había lugar para partidos políticos ni sindicatos y su proyecto de sociedad consistía en que los católicos dirigieran toda la actividad política, sindical y cultural del país. Así, los militantes católicos habían creado, para los obreros el *Círculo de Obreros Católicos*; para el ascenso social de los inmigrantes y sus hijos, la *Acción Católica Argentina*; para los ámbitos de la cultura cosmopolita los *Cursos de Cultura Católica*. Y un órgano de prensa de aquel tiempo: la revista *Criterio*, que bajo la dirección de Atilio Dell Oro Maini se pone en marcha en marzo de 1928. *Criterio* responde a un movimiento, afirma y defiende una doctrina, tiene un método propio. “*Criterio* nace de un movimiento de ideas católicas, es la expresión de la voluntad decidida de un grupo numeroso de ciudadanos católicos, que, estimulados por las más altas autoridades, aspira a satisfacer adecuadamente la apremiante necesidad de una organización, un órgano nuevo doctrinario y popular, para la difusión de la sana doctrina, para la exaltación de los principios esenciales de nuestra civilización, para la restauración de la disciplina cristiana en la vida individual y colectiva” (*Criterio* N°1, marzo de 1928). A partir de 1957 y, ante la coyuntura impuesta por la Revolución Libertadora, la revista perdió poder de convocatoria y su conducción pasó a manos de Jorge Mejía. La nueva gestión buscó suavizar el perfil claramente oficial de la publicación renovando parcialmente sus enfoques hacia las discusiones impuestas por el Concilio Vaticano II. A partir de aquí la atención de la revista se centró en la cuestión del desarrollo, uno de los temas que suscitó mayor interés en los núcleos intelectuales y políticos de entonces. El descubrimiento de que a Argentina –y en general Latinoamérica- le resultaba cada vez más dificultoso alcanzar un acelerado ritmo de crecimiento económico –al estilo europeo o estadounidense- colocó este tema en el centro del debate. *In illo tempore*, la irradiación de las ideas económicas desarrollistas provenientes de la CEPAL propulsada por Raúl Prebisch resultaban sumamente influyentes. Pero el desarrollismo no se limitó al campo de la economía, sino que se impuso como una lectura integral que abarcó asuntos tales como: la cuestión social, cultural, política y hasta religiosa. *Criterio* insistía que acabar con el subdesarrollo era una tarea impostergable. Las vías para lograrlo eran dos: el cambio gradual o la revolución. Asimismo, para los redactores de *Criterio* el problema del subdesarrollo estaba estrictamente relacionado con las falencias del sistema político. En la revista se cuestionaba incluso el valor intrínseco de la democracia.

El gobierno de Juan Carlos Onganía fue un emergente de aquella alianza entre la Iglesia Católica y el poder militar, en este caso referenciada por un grupo de católicos visceralmente anti-comunistas miembros de una organización denominada *Ciudad Católica*, su órgano de prensa que articulaba la problemática económica y social fue la revista *Verbo* que comenzó a publicarse en 1959 y su director era Mateo Roberto Gorostiaga, pero, el núcleo originario de Ciudad Católica fue formado por Juan Carlos Goyeneche.⁹ Goyeneche era un tradicionalista católico pre-conciliar con un largo itinerario militante, en la década de 1930 participó en los *Cursos de Cultura Católica*¹⁰, en publicaciones nacionalistas y –durante la 2ª Guerra Mundial- realizó alguna misión en Europa, donde fue recibido por Franco, Ribbentrop y Mussolini. Fue funcionario de Perón en su primer gobierno y también funcionario de Lonardi; un hombre de buenos contactos y referente máximo de su organización. Gorostiaga, en cambio, fue un protagonista permanente y un católico integrista ferviente, fue director de *Verbo* desde su aparición en 1959 hasta 1966, luego, como funcionario de Onganía ocupó la Secretaría de Promoción y Asistencia de la Comunidad (SEPAC) desde donde intentó plasmar las propuestas comunitaristas impulsadas por la *Ciudad Católica*.¹¹ La idea fuerza de esta organización integrista era establecer una sociedad católica orgánica, funcionalmente integrada donde trabajadores, empresarios y otras fuerzas de la sociedad civil, interactuaran y colaboraran, basados en sus vínculos “naturales” de jerarquía bajo el fundamento sagrado de Dios y el Reinado Social de Cristo. El método –con el cuál habían tenido éxito en algunos países- era expandir la organización por medio de la multiplicación de cuadros idóneos –seleccionando a los mejores en todas partes, en todas las capas sociales- para que formaran grupos de trabajo que –basados en la doctrina para articular la problemática contemporánea- pudieran ocupar todos los resortes del aparato del Estado.¹² Después del golpe de Estado de 1966, la revista *Verbo* –que era internacional y tenía su Oficina Internacional en Laussane, Suiza, a cargo del francés Jean Ousset- agregó un subtítulo “Formación para la Acción” que indicaba su disposición a reposicionarse en la política argentina vislumbrando las condiciones propicias para su cometido.¹³ Conforme se acercaba el golpe de Estado que derrocaría al presidente Illia, - y en medio de una campaña orientada a marcar el fin de los partidos políticos, la necesidad de un cambio de estructuras y afianzar el desarrollo y la seguridad nacional- esta revista se focalizó en promocionar el fortalecimiento de los cuerpos intermedios, la reorganización de la seguridad social, el nuevo régimen corporativo propuesto y la responsabilidad última de las Fuerzas Armadas. La confluencia en apoyo de la Revolución –liderada por un Ejército profesionalizado- de grupos liberales, nacionalistas, socialcristianos, desarrollistas y tecnócratas, tuvo varios puntos de contacto con los postulados y objetivos de *Ciudad Católica*: el realce de los “valores naturales” de jerarquía y orden social, la priorización de la familia como núcleo central de la sociedad, la necesidad de controlar la información y –finalmente- una reestructuración de la

comunidad que diera lugar a nuevas formas de representación, fundada en los intereses funcionales de los grupos socio-profesionales.¹⁴

Los *Cursillos de Cristiandad* consisten en jornadas de reflexión personal. En ellas un grupo de laicos -varones por un lado y mujeres por el otro- convive en un lugar apartado de la vida cotidiana y, durante tres días, un equipo de trabajo lleva adelante distintas pláticas acerca de temas religiosos poniendo especial énfasis en el valor testimonial, en general el equipo se compone por laicos guiados por uno o dos sacerdotes. La tónica es estrictamente religiosa y el objetivo consiste en proporcionar al católico laico la conciencia de sus responsabilidades ante la Iglesia y ante la sociedad en la que vive. En una palabra, se pretende que pase del estado pasivo de creyente a secas, al de católico militante, con conciencia de que ha asumido su condición de tal en plenitud y para siempre. De ahí que, salvo contadas excepciones, estos cursillos se impartan únicamente una vez y debe bastarle al cursillista para que –a partir de esta experiencia- pueda proyectarla en su vida privada y en la vida comunitaria.

La primera experiencia que dio lugar a los cursillos fue en Mallorca, España en 1945, el movimiento recién llega a la Argentina en 1962. Estos cursillos están forjados dentro del pensamiento católico integrista que ya hemos comentado y su objetivo de última instancia es la colonización del Estado para recristianizar a la sociedad. En el concepto elaborado por Fortunato Mallimaci el *catolicismo integral* rechaza quedar reducido a la sacristía y sale a disputar espacios y ámbitos disponibles más allá de lo estrictamente religioso. Así incursiona en la política, la economía y la cultura con la pretensión de resultar hegemónico. Estos cursillos no tienen las mismas características de los cursillos de espiritualidad de la *Acción Católica*, aunque reconocen allí su origen, ya que la Acción Católica española, en efecto, había organizado “encuentros breves” sobre temas espirituales en Santiago de Compostela y obtuvieron tan buen éxito que monseñor Juan Hervás –obispo de la Ciudad Real- les dio en 1950 forma institucional, designándolos con el nombre con el que hoy se conocen.¹⁵ Las actividades de *La Ciudad Católica* y los *Cursillos de la Cristiandad* fueron propulsados en el país –y especialmente en el Ejército Argentino- por el coronel Juan Francisco Guevara, un oficial de tempestuosas actividades políticas y arraigadas ideas religiosas. Guevara perteneció a la plana mayor del general Eduardo Lonardi, que sucedió precariamente al general Perón. Lonardi fue un general católico –que en la Fuerza no eran mayoría- bastante desdibujado que recibió su mayor impulso por pronunciarse contra Perón en los entredichos violentos de este contra la Iglesia Católica. Justamente por esta falta de mayoría católica en las filas fue que –luego del derrocamiento de Perón- el arma no estuvo dispuesta a pagar un precio confesional instituyendo un régimen católico. El confesional Lonardi fue despedido al cabo de cuarenta días. Fue aquella derrota la que marcó a los católicos la necesidad de sistematizar sus movimientos políticos dentro del Ejército. En este sentido aprendieron la lección hombres como Guevara, para él, la derrota de Lonardi se debía a que los liberales conspiraban mejor.¹⁶

Los radicales habían llegado al poder con Illia en 1963 con una dilatada historia de conflictos con la Iglesia y, lo que fue peor para ellos, fue que algunos radicales creyeron conveniente actualizar la historia. Así fue como la Iglesia chocó frontalmente con el gobernador de Córdoba y, al conmemorarse la Independencia Nacional –el 25 de mayo de 1964- las autoridades eclesiásticas no asistieron al acto oficial y el Obispo no invitó al gobernador al tedeum de rutina. El comandante del Tercer cuerpo de Ejército –general Guillermo Salas Martínez- decidió concurrir al acto oficial y no al tedeum. Este episodio introdujo el problema confesional en las relaciones del Ejército con el poder civil y –de hecho- convirtió en anticatólicos a algunos jefes superiores del arma que se propusieron evitar el golpe de Estado.¹⁷ En junio de 1966 –igual que en setiembre de 1955- fueron sectores influyentes – aunque no precisamente ultracatólicos- quienes hicieron notar la amenaza contra la Iglesia para movilizar a los católicos del Ejército contra el gobierno civil. Ya por entonces se encontraban en el núcleo central de *La Cité Catholique* tres generales, todos ellos ligados con el efímero gobierno de Lonardi, eran: Eduardo Señorans, Francisco Imaz y Eduardo Conessa. Paralelamente se estaban desarrollando los Cursillos de la Cristiandad entre los oficiales en servicio activo, cuyo liderazgo ostentaba el general Alejandro Agustín Lanusse. Recién en 1966 –poco antes del golpe de Estado contra Illia- el general Onganía ingresó en el cónclave cursillista, si bien mantenía alguna relación irregular con la *Cité Catholique* a través del general Señorans. Pero, en mayo de 1966 las dos tendencias de la derecha católica se vincularon definitivamente y este hecho fue referido por una revista con estas palabras: “El episodio ocurrió durante el último domingo de mayo: una treintena de hombres –varios de porte militar- irrumpió en el hall inundado de sombras del Seminario Mayor de Villa Devoto portando equipajes de mano. De pronto las luces se encendieron y otro grupo que aguardaba, al amparo de la oscuridad, saltó gozoso a confundirse en abrazos y saludos con el primero. Fue quizás la primera vez que el general de Brigada Alejandro Lanusse tuteó en público al teniente general Juan Carlos Onganía quién, desde cuatro noches atrás había permanecido recluido en La Montonera, la quinta que el Seminario posee en Pilar, junto con los demás miembros del grupo”.¹⁸ Aquella reunión secreta selló, sin duda, la suerte del gobierno radical porque por primera vez los conspiradores pudieron presentar una alianza tan fuerte como para serle impuesta al resto de la institución militar.¹⁹ En medio de los enfrentamientos internos en el Ejército durante la década de 1960 - que sesgó los gobiernos de José María Guido, Arturo Frondizi y Arturo Illia- y que culminaron con el enfrentamiento de las facciones de los colorados (nacionalistas) y los azules (liberales) –en abril de 1963, durante la administración Guido- para saldarse con el definitivo triunfo de la segunda y la unificación definitiva de la Fuerza tras la línea profesionalista impuesta por su líder –el futuro presidente Onganía- se funda y emerge –en setiembre de 1962- la organización más influyente del nacionalismo católico en Argentina: el *Ateneo de la República*. El *Ateneo* es un grupo que se organizó, no para la competencia electoral, sino para la preparación de los futuros cuadros dirigentes de un eventual gobierno nacionalista

surgido de un golpe de Estado. La mayoría de sus miembros ya contaban con experiencia de gobierno –algunos ya habían sido funcionarios durante las administraciones de Lonardi y Frondizi- y, casi todos ellos, provenían de una larga permanencia en organizaciones del laicado católico, principalmente, la *Acción Católica Argentina*. Todos los miembros compartían una particular característica: *malgré* de formar parte de distintas administraciones, ninguno había sido electo jamás para un cargo político. Los miembros fundadores se presentan –en su Acta de Fundación- como un grupo de ciudadanos interesados en el destino de la República.²⁰ Algunos miembros prominentes de la organización –como Santiago de Estrada y Raúl Puigbó- dejaron bien claro, desde el inicio, que no se oponían a golpes militares; era para esto que se habían preparado.²¹ Con la derrota del sector colorado, se diluyeron las expectativas de llegar al gobierno en lo inmediato y algunos grupos se sumaron a corrientes socialcristianas, otros en cambio, se aglutinaron en el Frente Nacional y Popular que trató –sin mayor éxito- de aglutinar al peronismo en la campaña presidencial de 1963. Sin embargo, después de la victoria de Arturo Illia, la mayoría de los miembros del Ateneo volvió a mirar hacia las Fuerzas Armadas como único recurso para el acceso al poder político sin pasar por elecciones.²² Después del golpe de Estado de 1966, cuando el general Onganía gozaba de su mayor prestigio y apoyo en la opinión pública, el *Ateneo* no solo apoyó el golpe sino que contribuyó a dotar con su grupo de tecnócratas el aparato del Estado. Figuras como Juan Martín Oneto Gaona, presidente de la Unión Industrial, o Pedro Real, futuro presidente del Banco Central durante el gobierno de facto serían ganados a las ideas ateneístas. Influenciado por la expectativa desarrollista, las viejas ideas del nacionalismo sobre la crisis del liberalismo y del sistema de partidos, se fundirían ahora con los temas desarrollistas del crecimiento económico y la industria pesada.²³ Pero, a poco de iniciada la experiencia revolucionaria, algunos de sus miembros comenzaron a tomar distancia del gobierno hacia fines de 1967. El arribo de Krieger Vasena al Ministerio de Economía significó la puesta en marcha de un plan de ajuste y una política sobre inversiones extranjera y desnacionalización de la economía y –con ello- el definitivo alejamiento del equipo de nacionalistas católicos. Hacia fines de 1968, el movimiento se atomizó al percibir que la sociedad argentina había cambiado y los proyectos corporativos ya no contaban con su apoyo. Algunos se agruparon en la *Guardia Restauradora Nacionalista* y desde allí criticaron el sesgo antinacional y liberal que había tomado el gobierno de Onganía tras la designación de Krieger Vasena. Otros como Marcelo Sanchez Sorondo enfocaron a la convergencia de otros grupos políticos en la búsqueda de una alianza superadora. También se generó la *Junta Coordinadora Nacionalista* que se encontraba anclada en el pasado y seguía girando en torno a concepciones tomistas preconciarias sin anclajes con la realidad.²⁴ Algunos grupos juveniles nacionalistas que tuvieron su apogeo durante la década de 1960 –como *Tacuara* y *Alianza Nacionalista*- de concepción integralista que surgieron de organizaciones como Acción Católica, devinieron –diez años más tarde- en organizaciones abiertamente

fascistas o ingresaron a la violencia armada en grupos como la *Alianza Anticomunista Argentina (AAA)*.

En el inicio del gobierno de Onganía, su primer gabinete ministerial se constituyó – básicamente- con los hombres de *Ciudad Católica* a la que pertenecían: el Ministro de Economía Jorge Salimei, que había sido empleador de los generales Señorans y Conessa; el de Bienestar Social, Roberto Petracca, industrial del vidrio quien falleció poco tiempo después; Roberto Gorostiaga en la Secretaría de Promoción y Asistencia a la Comunidad y el Ministro del Interior Enrique Martínez Paz. También fueron de la partida el general Señorans que tuvo a su cargo la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) y Cayetano Licciardo, el Secretario de Hacienda del hombre que signó al gobierno de Onganía, el Ministro Adalbert Sully Krieger Vasena. El coronel Guevara fue nombrado Embajador en Colombia y su gran amigo el general Mario Díaz Colodrero ocupó la Secretaría de Gobierno. La *Cité Catholique* encontró –rápidamente- dificultades para asentarse en el gobierno. Lo que seguramente ocurrió es que sus miembros recibieron una parte excesiva del poder sin tener un grado de desarrollo político suficiente para encarar, con éxito, la gestión de gobierno. Para este entonces, el desarrollo y consagración del *Concilio Vaticano II*, propulsado por Juan XXIII -clausurado en 1965 después de su muerte- terminó en el plano teológico la matriz tomista preconiliar que regía la arquitectura institucional y cultural eclesial argentina como en pocas otras iglesias. Al legitimar el ejercicio de la crítica teológica y por tanto los fundamentos sobre los que la Iglesia Argentina había construido su imagen, el Vaticano II infligió un golpe terrible a la proyección temporal de tal perspectiva teológica.²⁵ La Iglesia postconciliar –impulsada por la reunión del CELAM en Medellín en setiembre de 1968- pretendió proporcionar una apertura dialogante con el mundo moderno, actualizando la vida de la Iglesia sin definir ningún dogma, incluso con nuevo lenguaje conciliatorio frente a problemas actuales y antiguos. Se hizo más abierta, más dialoguista y participativa, las distancias entre el laico y el sacerdote se acercaron. El impulso al proyecto de *integrismo católico* propulsado por la Iglesia Católica y la Revolución Argentina quedó más cerca de las posiciones del *lefevrismo preconiliar* que de los nuevos vientos que impulsaron el aggiornamento vaticano.

3.1.2. Autoritarismo, modernización, los empresarios y el sindicalismo. La cuestión social.

Hacia el segundo quinquenio de los cincuenta y principios de los sesenta -de la mano del desarrollismo- se produjo en el país una importante ola de inversiones extranjeras directas (IED's) en el sector industrial y de servicios que implicaron una rápida internacionalización de la estructura productiva urbana.²⁶ A *contrario sensu* de las expectativas desarrollistas, esta industrialización repentina resultó en un aumento sorprendente de la demanda de insumos y bienes intermedios de origen importado que superó –más que proporcionalmente- la tasa de crecimiento del

producto de las exportaciones y de la producción agrícola- ganadera exportable. La solución posible para este estrangulamiento del sector externo –ya conocidos en este tiempo como los *stop and go* de las economías en desarrollo- consistía en un fuerte aumento en las exportaciones globales que permitieran proveer a la industria de las divisas suficientes para cumplimentar las importaciones que se correspondieran a un estadio deseado de desarrollo económico sostenido. Esto hacia necesario conseguir los medios técnicos, financieros y de infraestructura que permitieran un fuerte incremento de la producción exportable pampeana, y/o promover la reducción del consumo interno para generar más saldos exportables.²⁷ Esta estrategia de repetición permanente en los diferentes gobiernos del período en cuestión –dado que el problema era estructural y no coyuntural- se encontró con complicaciones y limitaciones políticas que activaron diferentes tipos de alianzas entre las fracciones de la burguesía urbana más débil y las clases populares en defensa del mercado interno frente a las alzas de precio de los productos agrícolas exportable. La lucha por la participación en el ingreso y la defensa del consumo interno, generaron –en los sectores populares- una mayor capacidad organizativa y de acción gremial y política de clara emergencia como grupo de interés. Estos procesos determinaron la aparición recurrente de un nuevo clivaje, al separar los intereses económicos y los objetivos políticos de la burguesía urbana industrial y de la burguesía pampeana, iniciando un ciclo de cambiantes alianzas que hacen a los orígenes de los ciclos económicos de nuestro país y fundamentan la lucha por el predominio hegemónico en la política argentina de aquellos años.²⁸

El golpe militar de 1966 inicia una nueva etapa que se caracterizó por la búsqueda de una solución de fondo para la crisis de autoridad política con la drástica modificación –*no lens volens*- de la relación de fuerzas imperante en la coyuntura. El nuevo gobierno – sin plazos definidos para su permanencia en el poder- se propuso acabar con la lucha por la apropiación de los ingresos saldando –en apariencia- el conflicto entre las fracciones de la burguesía local a favor de la preeminencia del sector industrial; al tiempo que pareció dirimir el empate hegemónico que asumía en la coyuntura la forma de vacancia hegemónica a favor de la gran burguesía industrial urbana, vinculada al capital internacional;²⁹ más adelante veremos cómo -en función de las medidas de gobierno y del propio discurso presidencial- esto no resultó tan así. La implementación de este tipo de modelo político y económico requería *stricto sensu* de la conformación de un Estado autoritario que concentrara la suma del poder público, asociando los núcleos de decisión económica con los de decisión política; esta nueva organización capitalista requería de un fuerte Estado intervencionista como elemento dinamizador de la economía. En este contexto, el Parlamento y los partidos políticos desaparecen o, en algunos casos apoyaron el golpe y pasaron a formar parte funcional de la lógica de concentración de poder y en su lugar aparece la autoridad presidencial. El ejercicio de esta autoridad se apoyo con un funcionariado tecnocrático que actuarían –a un tiempo- como funcionarios estatales y gerentes del poder económico en los más altos cargos de la burocracia

estatal. En la Argentina de 1966 las Fuerzas Armadas actuaron como el agente desencadenante al garantizar las nuevas condiciones de dominación; a esta nueva hegemonía se le agregaron otras dos fuerzas sociales: el “establishment” y la burocracia sindical.³⁰ Así se conformó una coalición inestable –en realidad de corto plazo cuando el proyecto requería solidez en el largo plazo- que enfrentados –más tarde- en confusas y desafortunadas contradicciones que abarcaban fracciones pertenecientes a la clase dominante y bolsones del emergente sindicalismo contestatario y antiburocrático que –combativamente- lograron expresarse sobre la cuestión social, tornaron los soportes ideológicos y socio-políticos del modelo en inestables y vacilantes. El rol jugado por la burocracia sindical en los conflictos llevó a una mayor radicalización de la lucha obrera que se transformó en el eslabón que permitió politizar la lucha económica, creando las condiciones para el surgimiento de un proyecto revolucionario dentro del movimiento obrero; surgió así una tendencia clasista dentro del movimiento sindical en abierta oposición a la patronal, a los líderes de los sindicatos burocratizados y a los propios militares. Fueron los obreros de los sectores más privilegiados de la industria –en particular los del gremio metalúrgico, del transporte automotor y de los mecánicos- los principales protagonistas de estos conflictos que –iniciados de forma espontánea- desbordaron todos los límites impuestos por las conducciones sindicales reconocidas y produjeron enfrentamientos de las bases obreras con sus jerarcas sindicales. Surgirían así tendencias clasistas y combativas que pretendieron expresar en forma organizada los intereses de estas bases obreras – la elite salarial del conglomerado industrial- que habrían de tener un fuerte protagonismo político hacia los primeros setenta.³¹ Hacia 1970 ya desestimados los objetivos originales y virando la política económica y social a destinos más nacionalistas y populares, volvió a crearse el mismo vacío de autoridad que este proceso revolucionario había venido a terminar. *In nuce*, el gobierno de Onganía pretendió cambiar la relación de fuerzas de la coyuntura imponiendo coercitivamente el liderazgo de los intereses de la gran industria sobre el conjunto de la sociedad, pero ello fue al precio de precipitar un conflicto de índole totalmente nueva. En lugar de resolver la crisis de hegemonía en el interior de la coalición en el poder, la coerción social imperante desencadenó el cuestionamiento de las clases subalternas y de los desplazados del modelo a los valores e instituciones del sistema de dominación, que puso a la orden del día la posibilidad de que las mismas se escindiesen de la ideología dominante; el modelo –rígido y carente de *pelegos*- demostró así su incapacidad para absorber estas disidencias y resolver la cuestión social dentro del sistema hegemónico imperante.

Sin embargo, al revisar la dinámica política del gobierno de Onganía *non sequitur* que la idea establecida de que el conflicto de intereses se hubiera saldado a favor de la gran burguesía industrial ya que tanto la burguesía mediana y pequeña como la gran burguesía corporativa tuvieron su reparto de cargos en el gobierno, a veces en forma consecutiva y otras a un tiempo. Recuérdese que el cargo de Ministro de Economía del régimen recayó, en primer lugar, en Jorge Néstor Salimei –

vinculado a la *Cité Catholique*- quien representaba los intereses de la pequeña y mediana empresa y estaba muy relacionado con la Confederación General Económica (CGE).³² Su gestión duró apenas ocho meses y fue reemplazado por Adalbert Sully Krieger Vasena –verdadero mentor de la política económica del Onganía- este sí representante del gran capital alineado con la Unión Industrial Argentina de Oneto Gaona y con el Consejo Empresario Argentino, por aquel entonces bajo la influencia de Martínez de Hoz. También las diferentes fracciones en pugna en el Ejército –paternalistas, nacionalistas y liberales- recibieron su cuota en los cargos en la administración. Las organizaciones empresariales prestaron *in toto* su apoyo al régimen, tanto en su etapa liberal como en la nacionalista. Así tanto La Acción Coordinadora de de Instituciones Empresariales Libres (ACIEL) de carácter claramente liberal, como la Confederación General Económica (C.G.E.) de sesgo nacionalista, a pesar de sus discrepancias apoyaron decididamente al régimen. La Unión Industrial Argentina (U.I.A.) por su parte estuvo compenetrada con el gobierno desde el principio apoyando la reconfiguración de la democracia representativa que intentaba llevar adelante el gobierno militar. El respaldo de las entidades empresariales tuvo su traducción a los hechos en la asistencia al acto de nombramiento de Jorge Néstor Salimei en el que se hicieron presentes representantes de la UIA, CGE, ACIEL, SRA y FAA, dando muestras del amplio apoyo a la nueva gestión. Por su parte, la dirigencia sindical dio un tácito apoyo al nuevo gobierno debido a su profunda antipatía hacia el gobierno radical al que consideraban tan ilegítimo como adverso a las necesidades de los trabajadores, al tiempo que simpatizaban con figuras militares que aparentemente compartían sus análisis de las soluciones necesarias para los problemas argentinos. Los contactos que tuvieron con las figuras militares que manejaban el golpe desde tiempo atrás junto al peso de la presencia sindical en el país pareció asegurar –*ab initio*- una alianza que les permitió el acceso a las más altas esferas del poder en el nuevo gobierno.³³

No obstante lo expuesto, -al reenfocar en retrospectiva- surgen algunas dudas sobre el supuesto acerca de la intencionalidad de lograr la síntesis intra-burguesa comentada. Si esto fuera así: ¿Cómo se suponía que se podía compatibilizar esa estrategia abarcativa *intra-clase* con la falta de amortiguadores (*pelegos*) que permitieran absorber las razonables peleas distributivas y de intereses al interior de la burguesía *in toto*?³⁴ En otras palabras: ¿Pudo pensar Onganía –o su entorno íntimo- en un juego de suma positiva en donde cada fracción de la burguesía ganara –en el mediano y largo plazo- más de lo que resignaba en ese juego? ¿era capaz el presidente de elaborar intencionalmente estos pensamientos en abstracto? La verdad es que la respuesta es fáctica. A nuestro entender, de las medidas de gobierno y de la discursiva del propio presidente surge desorientación acerca de los objetivos e incluso de la modalidad de implementación y gestión de los desacuerdos intra-burguesa ya comentados, como veremos –más adelante- al revisar la gestión de Salimei.

El discurso inicial sobre la *cuestión social* fue planteado desde una perspectiva liberal y negativa. La crisis –que justificó la revolución y llevó a Onganía al gobierno- se definió por temas tales como: el estancamiento económico, la indisciplina social, la inflación, la inoperatividad administrativa, la pérdida del rumbo del “ser nacional”, el fracaso de los partidos políticos y la representación eleccionaria republicana en crisis; todos estos términos de contenido negativo. Este discurso –fuertemente influenciado por la articulación de la Doctrina de la Seguridad Nacional con los temas del desarrollo económico- se materializó en los tiempos fundacionales de la Revolución: el económico, el social y el político. Así, se redujo la *cuestión social* a una condición preexistente del desarrollo económico. Estos tres tiempos se inscribían en el cambio de estructuras, indicando que, con el primero, se debían sentar las bases económicas para iniciar –en el segundo- la verdadera revolución. En el discurso de la cuestión social se mezclaron de manera ambigua –es decir sin definiciones precisas sobre el sujeto- la modernización, el desarrollo regional, el ataque frontal a la inflación, la transformación, las obras de infraestructura y el originario cambio de estructuras. Los ideólogos de la Revolución articulaban desarrollo con planificación y bienestar social, ambos conciliando con la seguridad nacional. Por un momento pareció que podía construirse –sobre esta narrativa- un proyecto hegemónico anti-demagógico y –tal vez- *bonapartista*.³⁵ Esta articulación entre cambio de estructuras, desarrollo económico y planificación estaba direccionada en forma clara con la *organización de la comunidad*. A su vez el lugar central en que se colocó a la planificación – como era de esperar- chocó frontalmente con el discurso liberal y, el punto central de vincular el desarrollo económico y social con el *comunitarismo*, terminó de establecer las diferencias y el alejamiento del liberalismo del proyecto revolucionario. El segundo tiempo, el *tiempo social* aparece –tempranamente- en el discurso de Onganía al compás de los conflictos obreros de los cañeros tucumanos, que fueron seguidos por manifestaciones sociales más amplias que se expresaron de la mano del estudiantado y los obreros clasistas ya a fines de 1968. Hacia mediados de 1969 Onganía inaugura oficialmente el comienzo del tiempo social diciendo: “*que una comunidad dividida engendra su autodestrucción, en tanto que unida multiplica su acción y asegura su eficiencia, neutralizando la aparición de los conflictos, muchas veces originados en el desequilibrio en la distribución de la riqueza*”.³⁶ El *tiempo político*, que llegaría –dos años más tarde- y en forma desordenada, estaría a cargo de Alejandro Agustín Lanusse con su intento de Gran Acuerdo Nacional (GAN), una vez fracasado el proyecto económico, social y político con el que la Revolución Argentina pretendió fundar una Segunda República.

3.2 El escenario internacional a fines de los sesenta y comienzos de los setenta.

Por estos años, el primer mundo enfrenta la crisis de acumulación del sistema capitalista que se expresa como un período con fuerte descenso en las tasas de crecimiento y también de la rentabilidad de las empresas. Ya desde principios de los sesenta comenzaron a notarse los desequilibrios en el sector monetario y financiero en las relaciones económicas internacionales en la esfera del primer mundo. Estos acontecimientos marcan el fin de la “edad de oro”³⁷ y de la etapa de posguerra con alto crecimiento económico y social liquidado –finalmente- por el fin de la convertibilidad del dólar en los primeros setenta y el considerable aumento de los precios del petróleo en 1973. También marca el final de la Guerra Fría más dura, que resulta reemplazada por la política de Coexistencia Pacífica bajo la vigilancia del empate en el poder nuclear regido por los acuerdos SALT. Pocos habrían predicho –en 1945- que el capitalismo estaba en Europa, Japón y los Estados Unidos, al borde de una época sin precedentes de rápido crecimiento económico y estabilidad política en el seno de las instituciones del Estado democrático liberal. El período que terminaba había producido una tasa de crecimiento poco menos que imposible, el producto bruto per cápita de los 56 países de la OCDE –para los que se cuentan con datos estadísticos confiables- aumento a razón de un 2.9% anual entre 1950 y 1973 y en los últimos diez años de ese período el producto per cápita ascendió al 3.3% anual, estableciendo un dinamismo tan increíble como impensable para los países desarrollados. Ni antes ni después hubo en el mundo una etapa de diez años consecutivos que asegurara un crecimiento semejante al del período 1963-1973.³⁸ Resulta notable que, entre 1965 y 1973, los salarios reales de la industria de los siete grandes países europeos, aumentaron a una tasa media del 6% anual, habiendo subido –en promedio- un 4.5% durante el período 1950-1965.³⁹ Este crecimiento excepcional estuvo asociado o más bien fue propulsado por tres circunstancias: a) La innovación tecnológica generada por la aplicación y uso comercial de la investigación y desarrollo aplicado al esfuerzo bélico que dio en denominarse keynesianismo militar; b) La enorme expansión del comercio mundial y su regulación a través de las instituciones de posguerra y; c) Los amplios movimientos de capital posibilitados por una política de corte neoliberal. Esta expansión generó un enorme mejoramiento de los ingresos y de los niveles de vida de la población, al cuidado de las instituciones del Estado de Bienestar.⁴⁰ En general, las crisis económicas capitalistas pueden deberse a “crisis de demanda” o a “crisis de oferta” que se corresponden a las categorías marxianas de “crisis de la realización de la plusvalía” y “crisis de la producción de la plusvalía” respectivamente; ambos tipos de crisis tienen su origen en las relaciones antagónicas del sistema capitalista y, estas economías experimentan, regularmente, ambos tipos de crisis. Aparentemente los acontecimientos económicos ocurridos durante los sesenta estuvieron basados en una “crisis de la realización de la plusvalía” o “crisis de

demanda” cuyo problema subyacente ha sido la desaceleración del crecimiento de la demanda, hecho que suele relacionarse con un supuesto crecimiento del nivel de concentración y centralización de la industria y la consiguiente redistribución de la renta en detrimento del trabajo y a favor del capital. Pero este retroceso de la demanda no puede atribuirse a una debilidad de la demanda agregada y, resulta curioso que trascendentes acontecimientos económicos y políticos de la década como: el mayo francés, la escalada de los salarios reales o la desintegración del sistema monetario de Bretton Woods en 1971; la inconvertibilidad del dólar estadounidense decretada por Nixon en 1971, o la enorme subida de los precios del petróleo en 1973; hayan ocurrido en un período de gran expansión de la demanda, de elevados niveles de la utilización de la capacidad instalada y de rápido crecimiento de la participación de los salarios en la renta nacional. El comienzo de la crisis económica –medido por el retraso de la tasa de acumulación– tuvo lugar en la mayoría de las naciones de la OCDE durante los años 1965 a 1974. En casi todos los países capitalistas avanzados la inversión neta alcanzó su límite y comenzó a disminuir posteriormente durante estos años. Sin embargo, en función de los incrementos de los salarios reales de la industria durante el período antes comentado, resulta dudoso que la desaceleración del proceso de acumulación de finales de los sesenta y principios de los setenta fuera provocada por una redistribución a favor de la renta que derivara en una insuficiencia de la demanda agregada.⁴¹

En resumen, la caída de la tasa de ganancia empresaria combinada con un estancamiento económico fue seguida por una baja en la productividad, mientras, al mismo tiempo se mantuvo una tendencia creciente en los salarios. Esta combinación explosiva trajo una inmediata consecuencia: una caída general de la inversión por parte de las empresas.⁴² Estas nuevas condiciones de la economía mundial –tan dramáticas y opuestas a las anteriores– se atribuyeron a diferentes causales: aumentos salariales superiores al crecimiento de la tasa de productividad, lo que da como consecuencia un mayor peso de la masa salarial que impacta sobre la tasa de ganancia y –posiblemente– al hecho de que el salto tecnológico produjo un cambio en la composición orgánica del capital.

Las instituciones de Bretton Woods, creadas al final de la Segunda Guerra, permitieron mantener el equilibrio multilateral –bajo el predominio estadounidense– en el orden económico y financiero mundial y fueron eficaces en su cometido hasta los primeros setenta y su mayor mérito fue el de posibilitar la coordinación de las políticas económicas de los países desarrollados.

A mediados de los setenta, el proceso de financiarización de la economía norteamericana y europea –originado en el exceso de capital disponible no destinado a la producción de bienes– producido por la fuerte expansión monetaria mundial –iniciada en los eurodólares y los petrodólares– tuvo destino final en el endeudamiento a tasas muy convenientes –al inicio– de los países del Tercer Mundo y, años más tarde, una vez producida la crisis de la deuda en estos países –que finalizó con la ingeniería financiera para su reestructuración– el nuevo

excedente, llevó a la rápida aparición de los primeros productos financieros, que terminaron desvinculándose de la economía real. Las economías de Japón y Europa comenzaron a estancarse y los Estados Unidos con la llegada en los ochenta de Ronald Reagan y su revolución conservadora a la presidencia estadounidense, comenzó el nuevo ascendente norteamericano, propulsado por dos pilares: la combinación de tecnologías con las ventajas de la productividad de los trabajadores norteamericanos y el agresivo apoyo político a la inversión internacional basado en un imponente complejo militar-industrial.⁴³ Así que los Estados Unidos salieron de la crisis del modo indicado por su nueva política neoliberal: fortalecimiento de la clase capitalista, restablecimiento de los beneficios empresarios y resurgimiento del proceso de acumulación capitalista, generando una nueva etapa de expansión y crecimiento, que lideró la segunda expansión en su calidad de guardián militar de Occidente.⁴⁴

3.3 La Doctrina de la Seguridad Nacional. Orígenes, ideología y principios.

La DNS encuentra su origen en la geopolítica, que irrumpe en la fase imperialista del capitalismo en expansión, que se basa en la teoría positivista del “espacio vital” y en una explicación organicista de la sociedad en su conjunto. Este “espacio vital” consiste en el expansionismo que propicia una nación alegando que requiere ese espacio para su existencia misma y le atribuye a la sociedad una similitud con los organismos vivos donde cada uno de sus integrantes deben cumplir una función determinada preestablecida como parte de un todo. En sus fundamentos tiene como objetivo garantizar el desarrollo integral del hombre y de la colectividad nacional toda, preservándola de perturbaciones sustanciales de cualquier origen. La DNS pivotaba básicamente en dos postulados: la bipolaridad y la guerra generalizada. Conceptualmente, el primero entendió al mundo como una división entre dos grandes fuerzas opuestas: el bien y el mal. El segundo sostenía una guerra permanente entre Oriente y Occidente –uno comunista y el otro cristiano- que se expresaba como guerras locales de baja intensidad que permitían la generación de conflictos que no implicaban riesgo de aniquilamiento total ni alteraciones profundas del equilibrio global; fue una especie de juegos de guerra bajo el control del equilibrio nuclear y la mutua destrucción garantizada. En este escenario se elaboró –en el primer mundo- el concepto de “Estado de seguridad nacional” que se utilizó para designar la defensa militar y la seguridad interna, frente a las amenazas externas e internas, la inestabilidad del capitalismo y la capacidad destructora de los armamentos nucleares. La ideología anticomunista imperante durante la “Guerra Fría”, le dio su sentido, y la desconfianza entre las naciones o bloques de naciones le proporcionó su dinámica. Con el uso extendido de esta categoría política, el plano militar se convirtió en la base de las relaciones internacionales y esto se manifestó a través del intervencionismo de las grandes potencias en los países del llamado Tercer Mundo.⁴⁵

3.3.1. La Doctrina de la Seguridad Nacional en América Latina.

En el contexto de la Guerra Fría y los sucesos de la revolución cubana de 1959, en la variante latinoamericana de la Doctrina de la Seguridad Nacional, el objeto de las “pequeñas guerras de baja intensidad” fue la subversión interna que –en la medida en que formaba parte del bloque político occidental- provenientes del enemigo comunista –identificado como las fuerzas del mal- ponían en peligro la seguridad interna y la estabilidad política de estos países –definidos culturalmente como occidentales y cristianos- atentando contra la sociedad misma y el hombre común que se encontraba inerme y era incapaz de enfrentar, por sí mismo, esa conspiración que intentaba arrebatarse su “ser nacional”, sosteniendo siempre la idea de que, a partir de la seguridad del Estado se garantizaba la de la sociedad.⁴⁶ Y eran a los militares –como custodios últimos de ese “ser nacional”- a los que no les quedaba más alternativa que asumir el control político del Estado y la autoridad total en estos países para actuar en defensa de los valores tradicionales y preservar la seguridad nacional.⁴⁷ Ahora bien, cuando decimos “los militares” no solo hablamos de los pertenecientes a las Fuerzas Armadas, sino también a aquellos civiles militaristas quienes pensaban que la solución de los problemas de la vida social debían regirse por las normas de la disciplina castrense. La ideología doctrinaria –que era el sostenimiento de los valores vitales de la sociedad que implicaban su desarrollo y seguridad- consideraron como un papel primordial de la Fuerzas Armadas el de constituirse como los organismos generadores del desarrollo económico y el progreso, reconociendo que los conflictos de carácter estructural se vinculaban directamente con la problemática de una cuestión social irresuelta, que comprendía en el campo económico; huelgas, movimientos estudiantiles y manifestaciones públicas y en el político, procesos electorales incompletos. Los instrumentos y herramientas de que se han valido los Estados Unidos para la puesta en práctica de la DNS en Latinoamérica han sido los convenios bilaterales con cada país, los tratados multilaterales en los organismos hemisféricos –como es el caso del TIAR⁴⁸ implementado dentro de la OEA- los cursos de defensa y adoctrinamiento ideológico dictados por la Escuela de las Américas⁴⁹ y las misiones especiales. Todo esto implementado por el complejo militar estadounidense y bajo el control político del Departamento de Estado.⁵⁰ Siempre como defensora de los valores occidentales y cristianos, la DSN tiene también –en Latinoamérica- una faceta religiosa, que se expresa a través del apoyo y promoción de instituciones de este carácter vinculadas a la Iglesia Católica; pero este cristianismo se mostrará como una reafirmación de los mitos, ritos y costumbres de la tradición judeo-cristiana más ortodoxa y bastante alejada del compromiso con la problemática de la cuestión social popular latinoamericana. Más bien se apoyó en los principios de autoridad y preservación de la propiedad privada, en el orden social establecido y –en general- en los postulados del conservadurismo. La DSN –siempre bajo el patrocinio estadounidense- propició también a principios de los sesenta el arribo a Latinoamérica de otras religiones

cristianas no católicas como el evangelismo protestante -de raíces luterana y calvinista- las que se consolidaron en un franco espectro político de derecha populista con el propósito de penetrar a los sectores sociales más postergados y políticamente maleables de la sociedad para encauzarles su capacidad de organización y lucha manteniéndolas dentro de un reformismo esperanzador.

Para consumir su objetivo primario –la lucha contra el comunismo- la DSN utiliza las acciones cívico-militares en cada país, consistentes en prestar asistencia social a vastos sectores necesitados de la población aprovechando la logística organizacional militar. Para esto se emplean los recursos militares llevando a cabo programas de mejoramiento económico y social que despiertan confianza y simpatía hacia las autoridades civiles y militares. El resultado que se pretende es el reconocimiento hacia el régimen y sus instituciones demostrando que el bienestar social y económico se puede lograr con orden social. Para ello se contaba, en ocasiones, con la coordinación entre los organismos gubernamentales y el clero local.

La implementación de la DSN en la región estuvo a cargo de dos países del Cono Sur: Brasil y Argentina, con posterioridad se incorporaron Chile, Perú y Ecuador con versiones un poco diferentes que aplicaban tendencias más desarrollistas. En Brasil la DSN sirvió para preparar el golpe militar contra Joao Goulart en 1964, que marcó el inicio exitoso de la aplicación de la doctrina en el Cono Sur. También sirvió en la Argentina para derrocar al gobierno constitucional de Arturo Illia en 1966 y al de Isabel Perón diez años más tarde para enfrentar a la guerrilla montonera. En Chile derrocó al gobierno socialista de Salvador Allende con la estrategia de “acecho y derribo” en 1973, liquidando la “vía pacífica al socialismo” intentada por el gobierno. El golpe institucional de 1973 en Uruguay encontró sus razones en la DSN y en la lucha contra la guerrilla tupamara. Perú fue un caso muy particular porque el gobierno militar acabó con el control férreo del poder que tenía la oligarquía, contrariamente a lo sucedido con las demás dictaduras de la región; Ecuador siguió sus pasos. El único caso muy particular fue el del Paraguay de Stroessner, que se asemejó más a las dictaduras latinoamericanas de viejo cuño y nada tuvo que ver con la DSN.⁵¹

La distensión mundial llegó a mediados de la década de los setenta de la mano de la política de *detente* y el cambio de la estrategia nuclear a bases móviles – se cambió a armadas misilísticas en lugar de silos fijos- impulsada por el salto tecnológico. En este cambio de escenario las instituciones armadas latinoamericanas no tuvieron casi participación por no contar con personal capacitado para operar los armamentos de nueva generación y porque los desarrollos tecnológicos aplicados a ellos dejaron a la región fuera de competencia. Con la llegada del presidente Carter la política estadounidense para la región puso su acento en las políticas de derechos humanos. Estos hechos marcaron la declinación de la DSN en el hemisferio, pero esta declinación duró poco, a finales de los setenta debido al triunfo de la guerrilla sandinista en Nicaragua, la iniciación de la guerra civil en El Salvador y la reanudación de la

Guerra Fría durante el gobierno de Reagan el tema de la seguridad nacional reapareció en la agenda latinoamericana.

3.3.2. La Doctrina de la Seguridad Nacional en Argentina. La conexión francesa.

Argentina fue el último país latinoamericano en pactar acuerdos bilaterales que le permitieran recibir de Estados Unidos el programa de ayuda militar en 1964, fue también el último en recibir a una misión militar americana. También el primero en emanciparse de ese programa para buscar armamentos en Europa por medio del Plan Europa en 1967 bajo el gobierno de Onganía. Los lazos del Ejército argentino con Europa fueron siempre más fuertes que en cualquier otro país latinoamericano.⁵² Argentina siempre fue, históricamente, el país más europeo y menos norteamericano en el Cono Sur de América. El Ejército Argentino –en la década de los cincuenta- tuvo fuertes vínculos con el Ejército francés, un hecho que le proporcionó toda la experiencia de la guerra de liberación de la Argelia francesa expresada a través de los cursos brindados –por los expertos de la guerra en Indochina y de la guerra antirrevolucionaria francesa- al Ejército argentino. La gradual reconversión y el estudio de este nuevo tipo de guerras no convencionales –es decir la lucha contra las guerrillas insurgentes- se inició en la Escuela Superior de Guerra (ESG), principal centro de formación teórica y ámbito natural de formación de los oficiales superiores que manifestarán más rápidamente el cambio doctrinario a partir de 1957,⁵³ lo que se reflejó, rápidamente, en su principal órgano de difusión, la *Revista de la Escuela Superior de Guerra*.⁵⁴ La misión militar francesa se incorpora a la ESG en 1957 y está formada por aquellos expertos militares fogueados en la guerra contrarrevolucionaria en Argelia, la dimensión ideológica de sus cursos de instrucción y adoctrinamiento marcó al Ejército argentino por sus próximos veinte años.⁵⁵ La misión contó con la colaboración de un grupo de oficiales argentinos que ya habían realizado cursos de capacitación en la *Ecole Supérieure de Guerre* de París.⁵⁶ A pesar de que cientos de oficiales argentinos pasaron por la Escuela de las Américas –en Panamá- bajo la supervisión de la Secretaría de Defensa y el Departamento de Estado norteamericano, –entre 1950 y 1970- el Ejército argentino nunca utilizó la terminología estadounidense para referirse a la lucha armada contra ejércitos irregulares insurgentes, que los americanos llamaban “contrainsurgencia”. Más bien prevalecieron los términos “guerra contrarrevolucionaria” y “lucha contra la subversión” propios de la *Ecole Supérieure de Guerre* de París y utilizados por el Ejército francés.⁵⁷ Por esta fuerte *conexión francesa* fue que el Ejército argentino adoptó las teorías del frente interno y de las fronteras ideológicas, así como la práctica de la guerra contra la subversión, antes que los norteamericanos siquiera la hubieran estudiado, ya desde 1959 todo esto era parte de la doctrina militar argentina. En cierta forma, la DSN de origen estadounidense no fue necesaria, porque los militares argentinos ya se encontraban formados –en un escenario

único, como fue la guerra contrarrevolucionaria en Argelia- doctrinariamente con su equivalente francés. Argentina, además, -a principios de los sesenta- ya había creado las instituciones políticas y administrativas que configuraron el sistema institucional de la DNS.⁵⁸ Es decir, *in nuce*: las mentalidades ya se encontraban muy bien preparadas para enfrentar los tiempos.⁵⁹

La sombra e influencia de la DNS y su variante francesa terminó -en Argentina- en final de la última y cruenta dictadura militar (1976-1983).

3.4. La Doctrina de Seguridad Nacional y el concepto del desarrollo económico acelerado en los regímenes militares en Latinoamérica.

Como consecuencia del éxito de la revolución cubana y la expansión de la guerra subversiva por Latinoamérica, los Estados Unidos, bajo el liderazgo de Kennedy, variaron su enfoque en la región y se volcaron a la promoción de gobiernos de tipo social-demócrata o demócrata- cristiano, de tinte reformista al estilo europeo. La prioridad pasó a ser la industrialización acelerada, la integración económica regional, la atención de la cuestión social en base a las reformas necesarias y, en general, todas aquellas políticas que promovieran el desarrollo económico y la democracia.⁶⁰ Para esto contó con dos herramientas: una política, la Alianza para el Progreso y la otra económica, la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) que funcionaría como un organismo proto-integrador de la región.⁶¹ La intención era superar al tipo de sociedad agraria vigente por otra moderna e industrializada que pudiera morigerar la pobreza y la miseria casi feudal poniendo en marcha una dinámica de tipo capitalista más avanzada. La idea original era intentar repetir en Latinoamérica la exitosa experiencia de recuperación económica europea de la posguerra del Programa de Reconstrucción Económica que fuera popularmente conocido como Plan Marshall en pos de la eliminación del peligro comunista. Urgía realizar las reformas sociales y a esto no fue ajena la Iglesia Católica que -en su ala liberal- tendió a coincidir con el modelo de la Alianza para el Progreso, en tanto que otra -de izquierda- comenzó a generar una corriente revolucionaria que coincidió con las tácticas que condujeran a una sociedad de tipo socialista. A mediados de los sesenta la región se tiñó de gobiernos militares que dieron una creciente importancia al estudio de los problemas del desarrollo económico y comenzaron a capacitar a sus oficiales en estas cuestiones, en este sentido, se incorporaron en las academias para la formación de oficiales materias como: sociología, economía, relaciones internacionales y planificación económica. Este tipo de militares -de característica desarrollistas- intentarían mantenerse en el poder en sus respectivos países -Argentina, Brasil, Bolivia y Perú- hasta completar el proceso de *modernización*.⁶² La formación -más sofisticada- de este grupo les permitió -durante el proceso de la Guerra Fría- mantener una actitud más independiente en relación a los Estados Unidos y de hecho en algunos países

–como fue en el caso argentino– se reforzó la relación con Europa para los programas de armamento y con el bloque socialista para el comercio. En estos regímenes la fundamentación del desarrollo económico está hecha en base a los preceptos de la “seguridad nacional”, bajo la consideración que, para que un país tenga fuerzas armadas poderosas es indispensable la existencia de una economía industrial moderna que permita la fabricación del armamento necesario –liviano y pesado– para preservar la seguridad del Estado y sus habitantes tanto fuera de sus fronteras como dentro de ellas. Desarrollo y seguridad, entonces, son las dos caras de una misma moneda, es decir, forman parte de la misma problemática. Sin seguridad, el desarrollo se ve amenazado desde adentro o desde afuera y sin desarrollo, el grado de seguridad que puede proveer el Estado se encuentra limitado por la modestia de los recursos económicos. Pero, en la práctica, estos gobiernos gastaron menos en armamentos que en el pasado y las relaciones con los vecinos geográficos fueron en extremo colaboracionistas y amistosas, en lugar de frías y agresiva. Así, la lógica belicista de la modernización contrastó con los hechos y echó por tierra la teoría que las vinculaba y que dificultaba el traspaso a los civiles, menos preocupados por los problemas de la seguridad nacional.

La educación tuvo uno de sus mayores avances de la década de los sesenta, las universidades aumentaron su calidad educativa y también la cantidad de estudiantes y un creciente número de de instituciones universitarias produjeron graduados –altamente capacitados– y capaces de proveer técnicas sofisticadas para analizar la problemática del subdesarrollo. Estos nuevos graduados educados en busca de la excelencia, –tanto en universidades regionales como del primer mundo– formaron los cuadros tecnocráticos que dieron soporte técnico a los militares desarrollistas. Hubo, sin duda una alianza natural entre tecnócratas y militares desarrollistas que se apoyaban mutuamente en la coincidencia de objetivos. En este sentido, puede decirse, que estos militares vinculados al concepto de desarrollo económico acelerado, actuaron como representantes políticos de aquellos tecnócratas y depositaron en ellos la capacidad para ejercer el gobierno y promover y ejecutar el necesario cambio de estructuras.

3.5 El vínculo entre la Doctrina de Seguridad Nacional y el desarrollo económico en Argentina.

Argentina tenía ventajas comparativas –que la hacían única– con el resto de Latinoamérica, se trataba de un país integrado nacionalmente, donde el proceso de incorporación del proletariado había sido realizado por Perón dos décadas atrás. Argentina poseía una industria intermedia bien desarrollada, elevados índices de alfabetismo y una renta per cápita de las más elevadas de América Latina, una organización sindical sólida y la inexistencia de marcadas diferencias sociales. Argentina, más que un país subdesarrollado podía caracterizarse como una sociedad capitalista estancada. El gobierno de Onganía trató de crear las

condiciones que permitieran generar un nuevo impulso a la actividad económica y, para lograrlo, puso más énfasis en la modernización que en la reforma de las estructuras. Sustentado en las condiciones singulares del país, el gobierno militar intentará la consolidación del capitalismo en base a la reconciliación y alianza entre los militares y el movimiento obrero organizado -los sindicatos- integrando a la clase obrera al sistema. En la certeza de que pretender gobernar por la fuerza sin un grado de respaldo en la población era históricamente imposible, intentó la creación de organizaciones de masas que asentadas en el concepto de “*comunidad organizada*” constituyeran la base popular que todo régimen político requiere para conservar el poder. Su idea parecía ser el mantenimiento de un poder presidencial fuerte que le permitiera convertirse en árbitro del conflicto de intereses entre las distintas fracciones en pugna. Como vimos, mientras los gobiernos militares anteriores habían venido a “restablecer el orden constitucional” y habían sido de naturaleza provisional, el gobierno de Onganía había insistido en que su administración era el agente de la “Revolución Argentina”, y que permanecería en el poder el tiempo necesario para gestionar la modernización, producir el desarrollo económico y generar el necesario cambio de las estructuras. Por primera vez, las Fuerzas Armadas tomaron la responsabilidad del desarrollo económico de la nación, y una de las mayores razones para asumir esta responsabilidad fue un cambio en la idea militar de seguridad nacional que les hizo unir este concepto con el del desarrollo económico. Durante la década de los sesenta algunos destacados militares habían dejado bien claro su concepto acerca de la relación que existía entre seguridad nacional y desarrollo y, por supuesto, la responsabilidad que les cabía a los militares en ambos aspectos. Algunos de estos oficiales ocuparon posiciones importantes en el régimen como: el general de división (RE) Juan Guglielmelli, un experto y consejero en estrategia y relaciones internacionales y director de la revista *Estrategia*, publicación especializada de la época y de fuerte prestigio en la región; el general de división Osiris Villegas, director del CONASE, y el general de división Juan Lavicoli, compañero y amigo personal de Onganía. En una alocución en el Centro de Altos Estudios Militares, Guglielmelli dijo: “*el desarrollo económico y social no solo es un imperativo de la solidaridad para crear trabajo y bienestar, es una necesidad impostergable de la seguridad nacional*”.⁶³ Osiris Villegas dijo en 1968: “*No puede haber seguridad sin desarrollo, como tampoco desarrollo sin seguridad*”.⁶⁴ La industrialización, entonces, era un medio para aumentar la seguridad nacional y es por esta razón que las más estratégicas industrias de base, como: petroquímica, siderurgia, energía, aceros, petrolera, naval y en general las industrias pesadas estuvieron – en ese tiempo- bajo la titularidad del Estado y fueron gestionadas –parcialmente- por la Dirección General de Fabricaciones Militares (FM) y otras sociedades mixtas como Sociedad Mixta Siderurgia Argentina (SOMISA) que tenía el monopolio de la producción de acero. El cometido de esta Dirección era de lo más variado y amplio: “elaborar materiales y elementos de guerra, realizar exploraciones mineras, evaluar las posibilidades industriales del país, construir la infraestructura necesaria para

esos cometidos y fomentar industrial afines”.⁶⁵ La generación de energía, tanto de origen hidroeléctrica como atómica, también estuvieron bajo control del Estado con sus emprendimientos: la represa hidroeléctrica de El Chocón-Cerros Colorados y la central nuclear de Atucha I. La seguridad nacional fue definida, por entonces, por los propios militares desarrollistas en los siguientes términos: “*La seguridad nacional es la situación en la cual los intereses vitales de la Nación se hallan a cubierto de interferencias y perturbaciones sustanciales*”.⁶⁶

Es decir que, una vez establecido el vínculo entre seguridad nacional y desarrollo, las Fuerzas Armadas asumieron un papel dominante en la problemática del desarrollo, lo que llevó a la idea de que el desarrollo es un prerequisite para la seguridad y, dado que la seguridad es una responsabilidad básica de la misión militar, los militares, en consecuencia, deberán asumir la misma responsabilidad frente al desarrollo.⁶⁷ Estos conceptos autorizan a pensar que, tal vez, no hubiese en realidad una “ideología militar” establecida bajo una doctrina filosófica, sino más bien un tipo de mentalidad, un estilo de pensamiento, sin demasiado contenido, sin pretensiones ni sofisticación, algo que no alcanza para definir una ideología.⁶⁸

3.6. Los militares y la idea de progreso. La utopía modernizadora de la Revolución Argentina.

Tras el derrocamiento de Arturo Illia, y más allá de las argumentaciones propias del momento político, las Fuerzas armadas fueron construyendo un discurso y una idea de cambio próximos al enfoque estructural. Su intervención era necesaria – sostenían- no solo para disciplinar a las fuerzas sociales –a quienes atribuían el atraso y la mayoría de los problemas nacionales- sino para impulsar la industria, fomentar la economía y desactivar –mediante el crecimiento- los focos de *conflictividad social*. El matiz introducido por la Revolución Argentina fue entender el progreso, no solo como una necesidad socioeconómica, sino también, como un objetivo de la seguridad nacional. El país –decían- se encontraba a un paso de la *disolución social* y reclamaba la intervención *eficaz* de las Fuerzas Armadas. El centro político, conformado por los partidos, los sindicatos y otras organizaciones civiles, debían dar paso a cuadros –de formación profesional y carácter *tecnocrático*- no influidos por la retórica partidista. El crecimiento económico pasó a formar parte del interés nacional y a justificar el uso de todos los recursos del Estado, en busca de la *grandeza de la patria*⁶⁹. Los militares construyeron así un ideario de progreso, reformularon el rol del Ejército en la sociedad y, aspiraron a establecer un nuevo modelo de *comunidad*. La prensa escrita de la época planteaba algunos interrogantes que reflejaban las preocupaciones, tanto de la corporación armada, como de la sociedad civil y los partidos políticos sobre el rol de las Fuerzas Armadas en la vida nacional. Se preguntaban: ¿Tienen los militares alguna misión que cumplir en los países dependientes de las grandes potencias? ¿Cuáles son las relaciones ideales entre el poder político y el poder militar? ¿Cómo influyen los ideólogos sobre los militares?⁷⁰. Las tres incógnitas encubrían

convicciones de las Fuerzas Armadas que marcarían su rol en los acontecimientos políticos y militares de la época: a) la tarea de rescatar a la patria de la subordinación al orden internacional; b) la intervención directa en la vida pública a través de la captación del Estado por sobre los mecanismos institucionales establecidos y; c) la producción de una cosmovisión sobre los caminos por los que el país alcanzaría su *destino de grandeza*. La concepción de que, frente a los gravísimos problemas que atravesaba la nación, y que amenazaban con *disolver el cuerpo social*, las Fuerzas Armadas encararían un protagonismo central en la búsqueda del progreso. Lo que fue definido –a mediados de los '60- como *Doctrina Sociológica del Ejército*. Esta posición, “*define al Ejército como un instrumento de acción económica y social, caracterizando las necesidades de la defensa nacional como no exclusivamente militares. Hace a la defensa nacional asegurar al país un mínimo de independencia, tanto industrial como económica, que impida quedar expuestos a la asfixia total*”⁷¹. Es decir, las Fuerzas Armadas comenzaron a verse como un vehículo para el progreso de la sociedad y a atribuirse una misión en la obtención del desarrollo nacional como condición para garantizar la independencia del país y fortalecer su posición externa. A pesar que Argentina ya había sufrido alteraciones en la vida institucional, esta particularidad se observó con énfasis a partir de la década del '60, cuando el sector militar comenzó a tener un verdadero protagonismo, no solo en la supervisión del régimen político, sino en la conducción misma del Estado⁷². Según esta concepción, los peligros a los que se enfrentaba el país, ya no se encontraban en la amenaza externa, sino en los síntomas de disolución –producto de la crisis de desarrollo- de la propia sociedad argentina. La misión de las Fuerzas Armadas era evitar esa desintegración, recomponiendo el tejido socioeconómico nacional y recuperando los valores tradicionales de la patria⁷³. Un coronel de la época comentaba “*en las naciones internamente realizadas la atención militar va dirigida hacia la política exterior y de defensa. La situación de nuestro país difiere en mucho de la de ellos. Por eso opinamos que las preocupaciones del Ejército deberían dirigirse hacia adentro*”⁷⁴. Antes de producirse el golpe de Estado que derrocó al presidente Illia, el entonces teniente general Onganía, participó de la inauguración de un tramo de ruta entre San Carlos de Bariloche y Cerro López, en la provincia del Neuquén. Onganía presentó allí ideas que iban a predominar en su futuro gobierno, más crucialmente, en el *ideario militar del desarrollo*. Onganía era fiel a la *Doctrina Sociológica del Ejército* y veía esencial la integración de esa fuerza a la problemática civil.

Las Fuerzas Armadas compartían la visión desarrollista con respecto a los dos grandes procesos políticos del siglo XX: el yrigoyenismo y el peronismo. Atribuían a ambas parte de la responsabilidad de lo que se percibía como una decadencia moral de la sociedad y el estancamiento económico. Ni el personalismo de Yrigoyen ni el fenómeno colectivo de Perón habían sido eficaces para romper la dependencia e iniciar en el país un proceso de desarrollo autónomo. Aun aceptando que hubo una cierta movilización de los recursos productivos y que la economía vivió procesos expansivos, solo se trató de intervalos cuyas expectativas

*“se frustraron sin trasponer el umbral del despegue”*⁷⁵. Estos procesos fueron estimulando –según la visión militar- una transferencia masiva de mano de obra productiva hacia sectores subsidiarios de la economía, distorsionando la estructura laboral y ejerciendo una enorme presión sobre el gasto público⁷⁶. El gasto disfuncional o improductivo impidió finalmente realizar una asignación de recursos eficaz, produciendo desviaciones de recursos hacia fomentos innecesarios, generando *“una impresionante usina de déficits presupuestarios y en agente principal de la inflación”*⁷⁷. La misión era terminar con el uso parasitario del Estado, dirigiendo el capital hacia el desarrollo de las actividades productivas. El objetivo político del Ejército consistió en propulsar un único y fundamental fenómeno: el crecimiento y el desarrollo concebidos en sentido estructural bajo la expansión de las industrias críticas. Esta visión contenía fuertes coincidencias con el desarrollismo frigerio-frondicista; no habría paz social sin progreso material previo. Así, al igual que el desarrollismo, las Fuerzas Armadas creían en una fuerte intervención del Estado como agente movilizador de esa transformación, se trataba de generar un *atajo hacia el progreso*, sorteando las dificultades que la experiencia histórica había registrado en los países industrializados. Se proponía un crecimiento inducido *“mediante la actividad deliberada de una generación de gobernantes apta, identificada con el desarrollo, lúcida con respecto a sus exigencias y consustanciada con las soluciones argentinas”*⁷⁸. La industrialización del país promovería dos aspectos cruciales para el ideario militar: a) la provisión de elementos y tecnología para la industria bélica y; b) el fin de la dependencia del sector externo en las políticas de seguridad. El desarrollo industrial era asimilado con la capacidad del Estado de *“proporcionar los materiales pesados de un moderno equipamiento, sustentado una logística bélica aceptablemente completa”*⁷⁹. Explica Herrera que los orígenes del industrialismo en las Fuerzas Armadas, pueden rastrearse en las hipótesis de conflicto que constituyen la *raison d’être* de la institución en tiempos de paz. Así, la intervención del Estado en la economía y en los planes de industrialización, se sustentaba en la posibilidad de la guerra y de los recursos que debían existir para afrontar el despliegue⁸⁰. Las amenazas de confrontaciones a gran escala hicieron que la industrialización fuera vista como un requisito indispensable de la defensa nacional. Para Herrera, es allí donde debe rastrearse los orígenes industrialistas de las Fuerzas Armadas en Sudamérica, producto de la transferencia del centro a la periferia⁸¹. Según el ideario de la Revolución Argentina, los tiempos del desarrollo se habían invertido durante las épocas anteriores. El peronismo había encarnado los tiempos sociales sin haber puesto las bases materiales para que ello tenga lugar. El producto fue una grave distorsión de las funciones económicas y las atribuciones del Estado, que tuvo que suplir –artificialmente- las expectativas generadas en la población. Esto supuso una absorción de los recursos del Estado en las actividades improductivas, actuando en función de los intereses políticos y al margen de la verdadera estructura económica. Esta insuficiencia iba a ser la causante de las presiones inflacionarias surgidas de una expansión monetaria descontrolada y

carente de sustento. Creían que hubo una justicia distributiva anterior al desarrollo básico en la que *“grandes sectores participaron del consumo de masas sin haberse producido el despegue y, tanto menos, alcanzado la madurez”*⁸². Siguiendo el concepto de Alain Touraine sobre las etapas del crecimiento económico⁸³ la Revolución Argentina respetaría la secuencia: una etapa de crisis en la que se tomaría el poder; una etapa de acumulación en las que se producirían las reformas productivas y; una etapa de participación en la que sobrevendría la distribución de beneficios. En efecto, esta idea de distribución fue lanzada por Onganía en la segunda parte de su mandato mediante el impulso de los llamados *Consejos Económicos y Sociales* que, distribuidos en cada provincia, debían recibir las demandas de los diferentes sectores sociales⁸⁴. Onganía siempre creyó más en la organización corporativa de la sociedad que en el protagonismo de las fuerzas políticas. El rol tradicional de los partidos sería mejor desempeñado por las federaciones que transmitirían al gobierno las demandas de la sociedad y actuarían como vehículo de aglutinamiento. Este planteo iba a ser crecientemente cuestionado por las propias Fuerzas Armadas que comenzarían a ver la necesidad de una salida constitucional al viejo estilo –es decir a través de los partidos políticos tradicionales- que resguardase al Ejército como reserva de la Nación⁸⁵. El ideario militar sobre el desarrollo descansó en la idea de que toda pretensión nacional de progreso debía basarse en el método de la estrategia militar. Sería a partir de esta concepción táctica que podría restablecerse el orden en la sociedad y encaminarla hacia un estado de desarrollo general. Onganía tenía en la estrategia militar una guía de actuación por la que el país podía recuperar su orientación y cumplir, paso por paso, los objetivos establecidos por la administración. El seguimiento de la estrategia no excluía los medios de coerción directos si estos contribuían a cumplir los objetivos trazados. El fundamento de la estrategia militar sufría –en consecuencia- una variación en la orientación de sus principios y también en su razón de ser: la necesidad de promover el desarrollo interno –como una cuestión de seguridad nacional- justificaba la utilización de argumentos tácticos, no solo para obligaciones de orden exterior, sino en función de la propia comunidad. En otras palabras, el Ejército se disponía a utilizar una lógica de acción preparada para el conflicto, hacia un proceso de orden interno, destinado al desarrollo económico y a la remodelación de la sociedad civil. Para Herrera, esta distorsión de los principios militares constituye el punto de partida de un proceso más profundo, de militarización de la vida política nacional. En ella, los parámetros convencionales de la vida civil comienzan a medirse a través de los fines militares. Se produjo un reemplazo de los mecanismos de negociación por una lógica ajena, solo entendida por los miembros de la corporación armada. De esta manera, las actividades esenciales de un país –la economía, la educación, la cultura, el orden interno- comienzan a verse como *frentes de una guerra*. De un conflicto que –ante la imposibilidad de verse resuelto por los medios tradicionales- implica la utilización de supuestas tácticas superiores. Para Herrera *“el militarismo no es sino una entre las muchas aberraciones de la sociedad moderna. Una expresión del proceso a*

través del cual un aspecto parcial de la vida social (las Fuerzas Armadas) es elevado a la condición de medida de todas las cosas. Es la confusión de un sector menor de la vida, con la vida entera”⁸⁶. El discurso táctico de las Fuerzas Armadas estaba influido por cuestiones geopolíticas predominantes de la época, mediante las que se debía “producir un aprovechamiento inteligente del propio territorio, buscando la armonización del Estado y preparando las bases de su cohesión”⁸⁷. El coronel Orsolini hablaba explícitamente de la aplicación de estrategias militares a los fines del desarrollo, estas debían contener: a) un objetivo político; b) una estrategia general; c) una resolución del comandante en jefe, y; d) una orientación del jefe de estado mayor. Es decir, el gobierno militar debía definir cuál sería la base de su proyecto de desarrollo, cuáles los planes de ejecución y, cuál el procedimiento de mando para que esto tenga lugar. El comandante en jefe (el presidente) debía dar instrucciones al jefe de estado mayor (la autoridad militar) para que sean las propias fuerzas quienes se encarguen de dirigir el programa de desarrollo. En la jerga militar: “debían existir lineamientos generales para la batalla de la directiva en un teatro de operaciones” (Orsolini 1965: 77). En el proyecto de Onganía, esta cadena de mandos estaba perfectamente diferenciada, se habían dispuesto dos organismos que se encargarían de coordinar las políticas de desarrollo, por un lado, y la estrategia de defensa por el otro. La particularidad de este nuevo organigrama residía en el accionar verticalista de las estructuras y en el carácter interno de su actuación. Ambas entidades, el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) y el Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) debían dedicarse a formular programas y planificar el desarrollo y a vincular estos proyectos con el fortalecimiento de la sociedad civil. En ambos casos la esfera de actuación quedaba sometida al ámbito del Ministerio del Interior, quien aseguraba de esta forma, la conducción militar de los asuntos del desarrollo. Todo estaba supeditado a lo que se llamó *Estatuto Nacional de Seguridad* por el que quedaba confirmada la visión militar del desarrollo y la relación entre este y la seguridad nacional. De esta forma, las apreciaciones de las Fuerzas Armadas, podían incidir sobre aspectos específicos de la vida civil, como cuestiones culturales, sociales, económicas, etc. Potash identifica cinco pasos en que los militares concebían la estrategia aplicada al desarrollo: 1) la definición de las metas; 2) el objetivo político; 3) la estrategia; 4) las etapas o plazos y; 5) el control de ejecución. En el caso de la Revolución Argentina la meta fundamental consistía en integrar a los sectores sociales a las demandas de la estructura productiva. Lo que Potash denomina control de ejecución, recayó, en el caso de la Revolución Argentina en los mencionados CONADE y CONASE. Estos organismos debían propiciar la influencia militar sobre la vida civil y constituir los centros desde donde se impulsara la transformación. El Ministerio de Economía impulsaba sus propias iniciativas y convivía de la mejor manera posible con este estamento militar. De todas maneras los Consejos tuvieron una cierta relevancia en el entorno político del presidente y actuaban –al menos formalmente- como organismos ejecutorios del programa⁸⁸. La cuestión productiva del desarrollo económico, fue uno de los

motivos por los que el gobierno militar ejerció el poder represivo del Estado. Siendo el desarrollo el principal objetivo político, aquello que constituyese un obstáculo quedaba expuesto a ser reprimido por las Fuerzas Armadas. Seguridad y desarrollo se convertían en una cuestión de Estado, unificados bajo el ideario militar. Oponer resistencia a las políticas del gobierno no solo equivalía a mostrar disconformidad, sino que atentaba contra la grandeza de la patria. El Ejército debía ser un elemento de disuasión ante quienes se declarasen enemigos del crecimiento. La institución militar, una vez definido el objetivo y trazada la estrategia debía: *“asegurar la continuidad de su ejecución y colaborar activamente en la eliminación de sus obstáculos estructurales y la derrota de las guarniciones del enemigo”* (Orsolini 1965: 279). Los impulsores de la doctrina militar hablaban de una *policía de prosperidad* mediante la que el Estado debía garantizar las condiciones para el progreso de la sociedad. El general Osiris Villegas –secretario del CONASE- aludía a una concepción que –durante los años de la Revolución Argentina (1966-1971)- predominó sobre la visión del Estado: un Estado entendido como un organismo vivo, en el que el todo armónico predomina sobre las partes y al que hay que aplicarle constantes estímulos. El objetivo de la supervivencia enfatiza los fines y deja las cuestiones de procedimiento en un segundo lugar. Las partes o los métodos son solo circunstancias que no deben entorpecer lo más importante: *“el organismo que hay que sobrevivir”* (Orsolini 1965: 263). Herrera argumenta que el surgimiento de esta concepción organicista se inscribe en la competencia que existía en América latina sobre la visión del Estado. En ella participaban: a) la visión liberal; b) la marxista leninista y; c) la propiamente organicista. Esta última ofrecía una opción que encajaba perfectamente en la concepción productivista del discurso militar, y permitía justificar –a riesgo de la desintegración del Estado- el uso arbitrario del poder (Herrera 1965: 223). Era una noción que –en el caso argentino- era funcional a los planes de la Revolución y daba contenido a su proyecto de gobierno. Bajo esta concepción, la Revolución Argentina, tendría lugar para evitar la disolución social en marcha y fomentar *“el cambio de espíritu que persigue el fin revolucionario”*⁸⁹. El *criterio organicista* por otra parte, puede identificarse con la noción de *Estado planificador*. La rehabilitación de la sociedad no podía quedar en manos de las fuerzas libres del mercado, sino que debía someterse a un Estado rector capaz de anteponerse a las dificultades a través del planeamiento. Es, justamente, dentro de esta visión organicista que el régimen militar comenzó a plantear la cuestión de la batalla antissubversiva. Según esta posición el cuerpo social estaba infectado por agentes que promovían su disolución y que, mediante la implementación de acciones extremistas, intentaban subvertir el orden de la República. Este agente disolvente estaba encarnado en el marxismo y en todo lo que representara el ideario comunista y todos los intentos de penetración de esa ideología en el ámbito nacional. El extremismo subversivo era percibido como un ataque al orden establecido y constituía un verdadero enemigo interno que –aprovechando las condiciones de estancamiento y conflicto- ejercía una labor de infiltración y

descomposición social. Los militares percibían la subversión como un fenómeno latente, que debilitaba la vida social, cultural y económica del país y pugnaba por la victoria del ideario comunista sobre el mundo occidental. La tarea de las Fuerzas armadas consistía, entonces, en producir un crecimiento revolucionario –superior que en el pasado- con el propósito de ampliar –cada vez más- las zonas liberadas de la alternativa marxista (Orsolini 1965: 163). El crecimiento económico-industrial –entendido hasta ahora como un medio de terminar con los desequilibrios del Estado- comenzó a tener un rol específico en la estrategia antsubversiva. La *rehabilitación de la sociedad*, implicaba además una visión escéptica de los militares con respecto al *centro político*. Este –constituido por los partidos políticos, sindicatos, asociaciones profesionales, nucleamientos sociales, etc- era visto como parte del problema y al que, transitoria o permanentemente, había que excluir de la esfera del poder. Eran, en gran medida, responsables del atraso y, en muchos casos, se encontraban asociados a la actividad subversiva. En especial, los partidos políticos, eran percibidos como estructuras faccionalistas decadentes que carecían de una perspectiva coherente de la problemática nacional. Sea por indecisión para abordar los problemas, sea por insuficiencia de apoyo popular o por su resistencia a tomar medidas necesaria pero impopulares, los partidos políticos debían quedar excluidos del elenco que protagonizara el despertar argentino. En síntesis eran una expresión insuficiente e inactual. La *lucha por la supervivencia* –esgrimida por Osiris Villegas- terminó con pedidos de las propia Fuerzas Armadas al general Onganía para que abriera el juego político y rehabilitara a las fuerzas democráticas tradicionales. La obstinación del presidente y la persistencia de enclaves *comunitaristas* prolongaron los tiempos de recambio, y terminaron llevando al país a un estado de confrontación inédita y a un agravamiento de la cuestión subversiva.

NOTAS AL CAPÍTULO TRES

¹ Algunos de estos hechos han sido relatados por la revista *Atlántida* N° 49 de agosto de 1966 en un artículo titulado “*La historia secreta de la revolución*”.

² Por aquel entonces allí se encontraba la Secretaría de Guerra.

³ En su candidatura puso todo su interés el ministro del Interior del presidente Guido, el abogado Rodolfo Martínez.

⁴ Rouquié, Alain; *Poder militar y sociedad política en la Argentina, 1943-1973*, Buenos Aires, Emecé 1982, Vol. II, pp.233-234.

⁵ Este tema del “primer monarca” surgió de una propuesta del general Julio Alsogaray al propio Onganía como una posible y novedosa salida institucional a la crisis de gobierno. La respuesta de Onganía fue: “¿Usted cree que yo soy Hirohito?” Publicado en revista *Panorama*, N° 150, 15 de diciembre de 1970, p.13

⁶ Extraído de un reportaje a Mariano Grondona, revista *Noticias* N° 800, 26 de abril de 1992, p. 56

⁷ Roth, Roberto, *Los años de Onganía*, Buenos Aires, La campana, 1980, pp. 74-75.

⁸ El sentido político del término liberalismo aplicado en nuestro país no se corresponde con el utilizado en la terminología anglosajona, más bien se contradicen por opuestos. Aplico este término refiriéndome a la denominada “generación del ‘80”, de alguna manera, los padres fundadores de la Argentina moderna

⁹ Los fundadores de la entidad francesa del mismo nombre (*Cité Catholique*) estaban vinculados a la represión francesa de OAS durante la guerra de liberación argelina. OAS, *Organisation Armeè Secrete* (1960) fue una organización extremista colonialista que se propuso mantener la *Algèrie Francaise* y llegó a desestabilizar a Francia atentando contra De Gaulle. Algunos de los militares franceses vinculados a esa organización entrenaron -más tarde- a oficiales argentinos en técnicas anti-guerrilla en el marco de la Doctrina de la Seguridad Nacional.

¹⁰ Estos cursos se encargaban de la *catolización* de los nacionalistas argentinos

¹¹ Durante la última dictadura militar argentina (1976-1983) fue funcionario de Ibérico Saint Jean cuando este fue gobernador de la Provincia de Buenos Aires.

¹² En relación a la formación de los cuadros dirigentes ver Rouquié, Alain, *Poder militar y sociedad política en Argentina*, Buenos Aires, Hyspamérica, Tomo II, Cap.6 y 7

¹³ Selser, Gregorio, *El Onganiato, La espada y el hisopo*, Buenos Aires, Hyspamérica, 1986, Tomo I p.94

¹⁴ Sin embargo, la gran divisoria de aguas de los católicos, en realidad, de la sociedad en su conjunto, será el peronismo. Muchos de los militantes católicos formados en la matriz del catolicismo integral y socializados políticamente en las variantes de los años treinta acompañaran la experiencia peronista. Otros la denostarán. Algunos –y este es el caso de Goyeneche- serán peronistas en los momentos iniciales, para luego pasarse a la oposición. También habrá aquellos que seguirán al peronismo hasta el final. El peronismo, en su secularización de los contenidos de la Doctrina Social de la Iglesia, producirá un verdadero disloque entre lo político y lo religioso.

¹⁵ Selser, Gregorio, *El Onganiato...* ob.cit, p. 11 a 13.

¹⁶ García Lupo, Rogelio, En: *Mercenarios y Monopolios en la Argentina de Onganía a Lanusse*, Buenos Aires, Achával Solo, pp.8-9.

¹⁷ Publicado en la revista *Marcha*, Montevideo, Uruguay, el 27 de diciembre de 1968.

¹⁸ El caso de los Cursillos de Cristiandad, *Análisis*, 18 de julio de 1966.

¹⁹ Entre los miembros cursillistas existían juramentos que –en algunos casos- eran verdaderos pactos de sangre. Tal el caso de los generales Lanusse y Martínez Zuviría. En 1966 una hija de Lanusse fue muerta por un disparo accidental hecho por el hijo de Martínez Zuviría. Este doloroso accidente, lejos de separar a los padres, los unió aun más. Juntos se retiraron a orar y meditar al Seminario de Pilar.

²⁰ En el Acta de Fundación se expresa que “en este grave período de crisis se hace necesario contribuir a su solución a través del estudio de los problemas urgentes de la hora”, entrevista a Máximo Etchecopar, presidente del Ateneo. Diario *Correo de la Tarde*, 17 de enero de 1967, Buenos Aires, Argentina.

²¹ “Ateneo de la República, tribuna de doctrina o futuro factor de poder” en *Primera Plana*, N° 4 del 4 de abril de 1962.

²² Ghio, José María, *La Iglesia Católica en la Política Argentina*, Buenos Aires, Prometeo, 2007, pp. 161-164

²³ Kvaternik, Eugenio, *El péndulo cívico militar. La caída de Illia*, Buenos Aires, Editorial Tesis, Instituto Torcuato Di Tella, 1990, pp. 21 a 26.

²⁴ Militaban en esta tendencia nada menos que Leonardo Castellani, Julio Menvielle y Virgilio Filippo; todos vinculados al clero preconiliar y al catolicismo más ultramontano. Ver “Nuevo Orden por esto salimos”, *Primera Plana*, N° 267 del 6 de febrero de 1968.

²⁵ Di Stefano, Roberto y Zanatta, Loris; *Historia de la Iglesia Argentina. Desde la conquista hasta fines del siglo XX*, Buenos Aires, Grijalbo-Mondadori, 2000, p.478.

²⁶ Referencias principales de estas modificaciones a la estructura económica vigente pueden encontrarse en: Guerchunoff, Pablo y Llach, Juan: “Capitalismo industrial, desarrollo asociado y distribución de ingresos entre los dos gobiernos peronistas, 1950-1972”. Buenos Aires, *Desarrollo Económico*, N° 57, Vol.15, abril-junio 1975

²⁷ Sobre la problemática de los ciclos stop and go puede verse: Sourrouille, Juan y Mallon, Richard: *La política económica en una sociedad conflictiva. El caso argentino*, Buenos Aires, Amorrortu, 1973; Ferrer, Aldo, et. al. *Los planes de estabilización en la Argentina*, Paidós, Buenos Aires, 1969; Canitrot, Adolfo, “La experiencia populista en la redistribución de ingresos”, *Desarrollo Económico* N° 59, vol.15, octubre-diciembre de 1975.

²⁸ O'Donnell, Guillermo, “Estado y alianzas en la Argentina 1956-1976”, Buenos Aires, *Desarrollo Económico*, N° 64, enero-marzo de 1977, pp. 532-533.

²⁹ Portantiero, Juan Carlos, *Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual*, Buenos Aires, editorial del cardo, 1972, p.11-15

³⁰ Portantiero, J.C.; *Clases dominantes...*, ob.cit., pp. 18 a 22. Si bien Portantiero no define aquí lo que entiende por “establishment”, puede comprenderse que, en ese momento histórico, se refería a las fuertes imbricaciones que existían entre las instituciones católicas, el empresariado nacional y las Fuerzas Armadas, fundamentalmente el Ejército, tal vez como nunca antes había ocurrido.

³¹ Algunos dirigentes de este sindicalismo clasista y combativo emergente fueron de los gremios metalúrgico y mecánico de Córdoba, Santa Fe, y Villa Constitución. Se destacaron como líderes del movimiento; Atilio López, Agustín Tosco y Alberto Piccinini, quienes, más tarde, conformarían la CGT de los Argentinos para discutir la dirección del movimiento obrero a los dirigentes del llamado sindicalismo burocrático. Esta lucha al interior del movimiento obrero fue zanjada en 1973 –de modo inapelable- por el propio Presidente Perón a favor de estos últimos.

³² Esta vinculación de Salimei con *Cité Catholique* es un poco confusa ya que se le asigna su presencia en los *Cursillos de la Cristiandad*, pero parece haber una confusión con los *Retiros Ignacianos*. Igualmente esta confusión no cambia la naturaleza del personaje. Ver Selser, Gregorio, *El Onganiato. La espada y el hisopo, Tº II*, ob.cit., pp. 11-18

³³ Cuando el 29 de junio de 1966 a las 11.45 horas dio inicio el acto de asunción a la primera magistratura de Juan Carlos Onganía, en el Salón Blanco de la Casa de Gobierno, entre la muy numerosa concurrencia, estaban presentes: Faustino Fano, presidente de la SRA; Jorge Oría, presidente de ACIEL; José Ber Gelbard, presidente de la CGE; Horacio García Belsunce, presidente de la Cámara Argentina de Comercio; Francisco Prado, secretario general de la CGT; Augusto Timoteo Vandor, secretario de la UOM; José Alonso del sindicato del Vestido; Juan José Taccone, secretario de Luz y Fuerza.

³⁴ Entendiendo que el concepto de *burguesía* incluye hacia su base a: trabajadores jerarquizados –ya sea por posición o remuneración- profesionales independientes, pequeños empresarios, líderes sindicales y hasta obreros con remuneraciones de elite y que todos presentaron –en algún momento- cierto nivel de conflicto; en nuestro supuesto de “*síntesis abarcativa intra-clase*” este conflicto debió ser absorbido y resuelto por organismos de negociación y conciliación y no con una movilización policial que los diera por terminados.

³⁵ El bonapartismo descansa en un régimen de paridad de fuerzas entre las diferentes clases y sus fracciones de clases con la clase dominante. Un individuo se eleva y prepondera sobre ese equilibrio y lauda sobre los mismos imponiendo su capacidad para influir en forma determinante sobre la opinión pública. Implica una desautorización a los sistemas de representación como el Parlamento, arbitra entre las clases y sostiene un presidencialismo de máximo poder.

³⁶ “Nuevos lineamientos para la acción gubernamental”, *La Nación*, 21 de junio de 1969, pp. 1-10

³⁷ La original denominación corresponde a Eric Hobsbawm quien la introduce en su obra *Historia del siglo XX*, Barcelona, Critica, 1998. P. 18 y pp. 235 a 398.

³⁸ Para más detalles ver el cuadro I.5: “Aspectos del crecimiento económico de cinco países de la OCDE”, en: Maddison, Angus, *La economía mundial en el siglo XX*, México, FCE, 1992.

³⁹ Bowles, Samuel; Gordon, David y Weisskopf; *La economía del despilfarro*, Alianza, Madrid, 1989, pp. 13-25.

⁴⁰ Guerchunoff, Pablo y Llach, Lucas; *El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentinas*, Buenos Aires, Planeta, 2003, p. 305.

⁴¹ Para una excelente discusión sobre este tema, ver: Samuel Bowles, David Gordon y Thomas Weisskopf: *La economía del despilfarro*, Alianza, Madrid, 1989.

⁴² Rapoport, Mario, *Historia económica, política y social de la Argentina*, Buenos Aires, Macchi, 2000, pp. 605-616.

⁴³ El crecimiento de los gastos de defensa en el presupuesto estadounidense, no resulta una novedad como propulsor de la recuperación económica. Este método fue denominado *keynesianismo militar*. El concepto fue desarrollado por Joan Robinson en 1971, y lo utilizó para describir cómo los gastos militares durante la guerra fría se volvieron la mayor fuerza en la economía estadounidense, desde 1947 aproximadamente el 75% del gasto público estuvo destinado a propósitos militares.

⁴⁴ La notable recuperación económica estadounidense de 1983-1984 fue anunciada como el fin de la década de 1970 y el retorno a los niveles de crecimiento de los sesenta. Pozzi, Pablo; *“El impacto económico de la Presidencia Reagan”*. En: *El impacto Reagan*, Buenos Aires, Fundación Centro de Estudios Americanos, 2006.

⁴⁵ “Los EE.UU. tienden a considerar que su seguridad nacional entraña el mantenimiento de condiciones en el exterior que permitirán que la economía funcione adecuadamente, es decir, obtener energía materias primas y mercados necesarios para su prosperidad. El acceso a estos ha sido, por lo tanto, incluido en la definición de los intereses vitales de los EE.UU. El alcance y la manera en la cual han sido definidos los intereses norteamericanos han dado como resultado una política de intervencionismo recurrente” En: Stanley Hoffman; Jano y Minerva. Ensayos sobre la guerra y la paz, Buenos Aires, Grupo Editor Latinoamericano, 1991, pp. 305 y 307.

⁴⁶ Brasil fue el primer país en elaborar un concepto sobre la seguridad nacional en América Latina con el trabajo del general Golbery do Couto e Silva. Ver: Rubinstein, J.C.; *El Estado periférico latinoamericano*, Buenos Aires, Eudeba, 1988, p. 240.

⁴⁷ Briones, Álvaro; *Economía política del fascismo dependiente*, México, Siglo XXI, 1978.

⁴⁸ Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de alto contenido anticomunista suscripto dentro del marco de OEA en Rio de Janeiro en 1947.

⁴⁹ “Esta Escuela, organizada en 1963, dictó cursos en español y portugués destinados a “brindar” a los militares latinoamericanos una formación que les permitiera contribuir a la seguridad militar de sus respectivos países. En estos cursos inculcaron una ideología anticomunista y una filosofía contrarrevolucionaria. Estas concepciones del Pentágono dedicaron un tiempo desmesurado al anticomunismo y al adoctrinamiento norteamericano”. Ver: Rouquié, Alain; *El Estado militar en América Latina*, México, 1984, FCE, p. 154.

⁵⁰ Entre los convenios y tratados se pactaron actividades militares conjuntas entre Estados Unidos y los países latinoamericanos como el operativo UNITAS, la Junta Interamericana de Defensa (JID), el Colegio Interamericano de Defensa y la Reunión Anual de Comandantes en Jefe. Entre las instituciones encargadas de formar a la oficialidad y suboficialidad latinoamericana se destacaron; la Universidad del Aire, la Academia Interamericana de las Fuerzas Aéreas, la Escuela para Comandantes de Escuadrón, la Academia de Comandos y Estado Mayor, la Academia de Guerra Naval y la Academia Interamericana de Policía.

⁵¹ El primer trabajo interesante, que mostró claramente las novedades de este fenómeno de la DSN fue el de José Nun. Ver; Nun, José; *“América Latina: la crisis hegemónica y el golpe militar”*, *Desarrollo Económico*, vol. VI Buenos Aires, julio-diciembre, 1966.

⁵² R.P. Comblin, José; *Ensayo sobre la Seguridad Nacional*, Arzobispado de Santiago de Chile, Vicaría de la Solidaridad, 1977.

⁵³ El verdadero inspirador de este giro hacia las doctrinas francesas de contrainsurgencia y nuevas formas de guerra –como la atómica- parece haber sido el Cnel. Carlos Jorge Rosas, oficial del arma de ingenieros y subdirector de la ESG. Fue designado en 1957, después de haber regresado de Francia, donde fue agregado militar argentino y alumno brillante de la *Ecole Supérieure de Guerre* en París.

⁵⁴ La ESG tenía una prestigiosa publicación propia, la *Revista de la Escuela Superior de Guerra*, dirigida a la alta oficialidad y a los expertos en temas de defensa. Esta revista fue la encargada de proveer todo el bagaje conceptual y doctrinal de la nueva DSN. Propulsada por el coronel Carlos Jorge Rosas –tal vez el mayor experto argentino en temas de contrainsurgencia- publicaron allí –entre 1957 y 1958- oficiales franceses como el Tte. Cnel. Patrice de Neurois y el Cnel. Francois Badié, veteranos de la lucha contra la OLAS durante la guerra de liberación argelina (1954-1962).

⁵⁵ Los oficiales más jóvenes, veteranos de Argelia y no de Indochina, que tomaron la posta de Badié y Nourois, fueron los Ttes. Coronales Robert Bentresque y Jean Nougés. El primero escribe un artículo llamado “*Método de razonamiento en guerra subversiva*” que resultó fundamental en este tema y fue publicado en la *Revista de la Escuela Superior de Guerra* N° 335, octubre de 1959, pp. 733-751.

⁵⁶ Entre ellos se encontraban nombres como: Tte. Cnel. Manrique Miguel Mom, Tte. Cnel. Alcides López Aufranc, el propio Cnel. Carlos Rosas –subdirector de la ESG- Ttes. Cneles. Pedro Tibiletti y Cándido Hure –director y subdirector de la ESG en 1960- y el Tte Cnel. Tomás Sánchez de Bustamante. Este último oficial escribió algunos artículos muy importantes sobre la guerra contrainsurgente como: “*La guerra revolucionaria*”, *Revista de la Escuela Superior de Guerra*, N° 339, setiembre 1960. “*La guerra revolucionaria comunista. La guerra de China*”, *Revista de la Escuela Superior de Guerra*, N° 343, octubre 1961.

⁵⁷ Si bien los términos “*contrainsurgencia*” utilizado por los estadounidenses y “*guerra contrarrevolucionaria*” de cuño francés reconocen su origen en conflictos de diferente naturaleza, terminaron con una significancia intercambiable. Las publicaciones de la revista de la Escuela Superior de Guerra muestran el uso indistinto de ambos.

⁵⁸ Argentina ya se había dado –anticipadamente para la época- instituciones como: el Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) y el Comité Militar Centro Nacional de Inteligencia (CNI).

⁵⁹ El nacionalismo de derecha, católico y tradicionalista, de predominio en el Ejército argentino, encontraba sus raíces en lo que –en lenguaje eclesiástico- se llamó *integrismo francés* vinculado a los preceptos preconciarios. Esta tradición católica –tan enraizada en la Fuerzas Armadas argentinas y compartida por el ejército de Francia- no tenía su equivalente en el Ejército estadounidense, menos aún al catolicismo conservador.

⁶⁰ Una de las críticas más importantes que se le hizo al programa de asistencia militar y económica norteamericana a la región en ese tiempo, fue que, lejos de propender a la democratización del sub-continente, estaba contribuyendo a la propagación de dictaduras militares. Las voces de estas críticas en el Congreso norteamericano fueron las de los senadores Fulbright y MacCarty.

⁶¹ Ambas instituciones tuvieron en la región un órgano de difusión que fue la revista *Visión* bajo la dirección de Mariano Grondona.

⁶² El término “modernización” fue muy utilizado por los científicos políticos norteamericanos para definir los procesos de los avances en la administración pública y el progreso económico dentro de los esquemas neo-capitalistas. Para conocer sobre el tema ver: Apter, David; *Política de la modernización*, Buenos Aires, Paidós, 1972.

⁶³ Publicado en la *Revista de la Escuela Superior de Guerra*, N° 356, 1964.

⁶⁴ Villegas, Osiris; “Seguridad, política y estrategia”, *Temas militares* I: 4, febrero de 1968.

⁶⁵ Esta Dirección fue creada el 26 de setiembre de 1941 por la ley N° 12.709. En su estatuto fundacional se encuentran estos difusos objetivos.

⁶⁶ De la Ley de Defensa Nacional N° 16.970 del año 1967, art. 2, 1967.

⁶⁷ Snow, Peter G.; “Desarrollo económico y seguridad nacional”, *Revista de Estudios Internacionales*, Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, año 5, N° 20, octubre-diciembre de 1972, pp. 67-74.

⁶⁸ Definimos como ideología a la doctrina filosófica basada en un conjunto de ideas fundamentales que caracterizan el pensamiento de una persona, colectividad o movimiento cultural, religioso o político, y que -de modo sistemático y coherente- operan sobre una realidad de sistemas existentes en la práctica de la sociedad respecto a lo económico, lo social, lo político, lo científico, lo moral, lo cultural y lo religioso, en la pretensión de conservar el sistema, (conservadurismo), lograr su transformación súbita (revolucionaria), paulatina y pacífica (reformista) o restaurar sistemas previamente existentes (reaccionaria).

⁶⁹ Esta expresión –*grandeza de la patria*- era normal en los militares de la época. Onganía la utilizaba para justificar los fines de la Revolución. “Una argentina donde se hayan alcanzado los objetivos de la Revolución –dijo Onganía- será un país donde se hayan superado las causas profundas del estancamiento, se haya alcanzado un elevado nivel cultural y científico y se haya conquistado definitivamente el destino de grandeza”. Reportaje publicado en revista *Siete Días* N° 7 del 27 de junio de 1967.

⁷⁰ De la revista *Poder Militar*, dirigida por Rogelio García Lupo. Publicado en *Primera Plana* N° 58 del 17 de diciembre de 1963.

⁷¹ Presentación de las Fuerzas Armadas en el *Congreso Internacional de Sociología* realizado en la provincia de Córdoba en setiembre de 1964. Ver *Primera Plana* N° 68 del 25 de febrero de 1964.

⁷² O'Donnell, Guillermo; *Modernización y Autoritarismo*, Paidós, Buenos Aires, 1972. En esta obra, puede verse el rol *sostén* de la institución militar cada vez que el país enfrentaba problemas internos de desarrollo o atravesaba crisis políticas agudas.

⁷³ Onganía se refería a los “valores morales de la sociedad occidental y cristiana”. Estos principios debían integrarse a la misión de la institución de “asegurar el orden público y la paz interior, propender al bienestar general y sostener el mantenimiento de las instituciones republicanas”. Discurso de Onganía publicado por *La Nación* el 4 de agosto de 1964. Aquí se ve con claridad la contradicción (del dicho: instituciones republicanas) con el reemplazo de la Constitución Nacional por el Estatuto Revolucionario (el hecho).

⁷⁴ Mario Orsolini fue uno de los oficiales que impulsó la *doctrina militar del desarrollo* durante los '60, adoptando una posición que puede calificarse como *nacional-desarrollista*. Poco después

del golpe militar contra Frondizi (en 1962), Orsini publicó el libro *La Crisis del Ejército* que envió a dos oficiales de su misma visión: los generales Onganía y Villegas. Tiempo después publicó *Ejército Argentino y Crecimiento Nacional* donde ofrecía una visión más depurada sobre la idea de desarrollo y estrategia militar. Estas posturas –muy nacionalistas- le costaron a Orsini el pase a retiro en 1960.

⁷⁵ Orsolini Mario; *Ejército Argentino y Crecimiento Nacional*; ediciones Arayú, Buenos Aires, 1965, pág. 103.

⁷⁶ Este discurso tuvo especial énfasis en la visión de Adalbert Krieger Vasena, segundo Ministro de Economía y Trabajo de Onganía, quien creía en la necesidad de una racionalización administrativa. Krieger sostenía una posición *liberal heterodoxa* que convivía con otras de tipo *paternalista* en el gobierno.

⁷⁷ Orsolini, Mario; *ob.cit.* pág. 99.

⁷⁸ Orsolini, Mario; *ob.cit.* p.160.

⁷⁹ Orsolini, Mario; *ob.cit.* p. 254.

⁸⁰ Herrera, Genaro; *El pensamiento político de los militares*, ediciones Arayú, Buenos Aires, 1965, pág. 221

⁸¹ Osiris Villegas incluye la necesidad de industrialización dentro del paradigma geopolítico. Para Villegas la única posibilidad de mantener una posición soberana frente a un mundo competitivo era acelerar el desarrollo con un aprovechamiento integral del territorio, extrayendo el máximo de sus posibilidades, de cara a una posición de fuerza con las potencias extranjeras. La geopolítica introduciría elementos racionales y técnicos en el Estado, absorbido hoy por una administración politizada y faccional.

⁸² Orsolini, Mario, *ob.cit.* pág. 201.

⁸³ Touraine, Alain; *Las sociedades dependientes*, Siglo XXI, México, 1978. Aquí Touraine advierte que es en la etapa de acumulación donde el proceso adquiere su verdadera dimensión. Para el autor, las economías dependientes fracasan en alguno de los tres procesos, haciendo que su desarrollo se torne incompleto y originando desbalances en la sociedad. Para ver más detalles, ver la obra mencionada, pp. 11 en adelante.

⁸⁴ Roberto Potash hace notar que la iniciativa de los Consejos fue impulsada más por el apremio político y la falta de diálogo a nivel gubernamental, que por una verdadera vocación de instaurar el tiempo social. Precisamente Potash se refiere a la experiencia de Córdoba donde -luego del estallido- la mesa de diálogo fue solo un paliativo, carente de legitimidad y boicoteada por todos los sectores; ver, Potasch, Robert, *El Ejército y la política en la Argentina 1962-1973 2da parte*, Editorial Sudamericana, pp. 135 a 141.

⁸⁵ Potash, Robert, *ob.cit.* pp. 134 a 139

⁸⁶ Herrera, Genaro, *ob.cit.* p. 53

⁸⁷ Herrera, Genaro, *ob.cit.* p. 148

⁸⁸ Roth, Roberto, *Los años de Onganía. Relato de un testigo*, Ediciones La Campana, Buenos Aires, 1980, pp. 132 a 133.

⁸⁹ Declaraciones del general Onganía del 16 de julio de 1967 al diario *La Nación*. Onganía asociaba el cambio espiritual de la nación a las condiciones de progreso que, en un plazo a definir, establecería la Revolución.

CAPÍTULO 4. Del consenso a la desilusión. Nacimiento y ocaso de un proyecto político.

4.1. Los primeros meses. Julio 1966 – Diciembre 1966.

“Paso a la Segunda República” fue uno de los titulares del semanario *Azul y Blanco* del 7 de julio de 1966 dirigido por Marcelo Sánchez Orondo que tenía como secretario de redacción a Juan Manuel Abal Medina. El editorial continuaba *“se inicia a partir de este 28 de junio un período constituyente fundacional, por eso este no es un gobierno “de facto” sino un gobierno revolucionario, con plenipotencia superior a la de los gobiernos constituidos. Es una primera magistratura dotada de atribuciones excepcionales, concebida para desempeñarla por tiempo indeterminado en el momento más difícil de nuestra historia. Aceptarla en tales circunstancias revela un valor intrépido y una templada serenidad. Pero el país le niega al teniente general Onganía el derecho a fracasar”*.¹

El mando presidencial dependía del poder militar, la base social del mando era en primer lugar el “partido militar” y el arraigo en la sociedad era expresado por la alianza corporativa entre el poder militar, el poder sindical, la Iglesia Católica y sectores importantes del poder económico. La Argentina proyectaba una suerte de *corporativismo de facto* que habíamos observado años antes como fenómeno en ebullición ahora traducido en una forma política.

En rápida acción el presidente de la Nación dispuso el 2 de julio, mediante la ley 16.894, dictada en virtud de las atribuciones que le confería el Estatuto de la Revolución Argentina, la prohibición de toda forma de actividad política o de actuación con fines políticos; y asimismo, la indisponibilidad de los bienes de los partidos, cuyos locales comenzaron a ser clausurados, porque los alcances de la ley incluían también a los símbolos, siglas y expresiones proselitistas de todo tipo. Bajo la supervisión de la DIPA (División de Informaciones Policiales Antidemocráticas) se clausuraron en todo el país los locales del partido comunista, sus organizaciones colaterales e imprentas y se detuvieron a numerosos militantes de izquierda. En este clima político fueron designados los nuevos miembros de la Corte Suprema de Justicia, doctores: Eduardo Ortiz Basualdo, Marco Aurelio Risolía, Luis C. Cabral, Roberto Chute y Guillermo Borda. Asumía también el 5 de julio en la gobernación de la provincia de Buenos Aires el general Francisco Imaz.

El 6 de julio en la cena anual de camaradería de las fuerzas armadas el nuevo presidente dijo: *“Ha culminado un ciclo en la historia argentina. En adelante nadie podrá excusar su despreocupación apelando a un pasado anónimo de cuya herencia se existía. La voluntad popular fue condenada a la impotencia y los cambios sustanciales, imperiosamente necesarios, convertidos en meras expresiones de*

deseos. *Las Fuerzas Armadas constituyeron el medio de expresión legítima de esa voluntad civil, reclusa por el artificio. De allí esta unanimidad y este consentimiento revolucionario expresado solamente en nuestra historia cuando fue necesario decidir sobre el destino nacional*". Como reafirmación de su discurso el 9 de julio todo el gobierno nacional se trasladó a Tucumán y, desde la Casa de la Independencia, el presidente dirigió un mensaje al país en el que anunció los primeros objetivos perseguidos por el régimen: *"Removeremos las causas profundas de nuestra actual situación y prestaremos preferentemente atención a tres aspectos fundamentales: la vivienda, la salud pública y la seguridad social. Además crearemos las condiciones que permitirán afincar a nuestros técnicos y profesionales; aceptaremos las críticas constructivas y rectificaremos nuestros errores tantas veces como sea necesario, pero los intentos disociadores que subordinan el interés general a las ventajas particulares, no serán tolerados*". En estos días ya se encontraba integrado el primer gabinete de ministros con: Enrique Martínez Paz en la cartera de Interior; Jorge Néstor Salimei en Economía y Trabajo; Nicanor Costa Méndez en Relaciones Exteriores y Culto; Antonio Roberto Lanusse, en Defensa; Carlos M. Gelly y Obes, en Cultura y Educación; Conrado José Etchebarne, en Justicia; Julio Argentino Teglia, en Comunicaciones; Lorenzo Adolfo Raggio, en Agricultura y Ganadería y Ezequiel Holmberg en Salud Pública. Hay un personaje clave en el elenco económico, el ingeniero Luis María Gotelli, designado secretario de Energía, miembro de la junta directiva de la Sociedad Rural, es un miembro permanente del trust energético y, como vice-presidente ejecutivo de SEGBA desde 1961 era una figura determinante en el área, justamente, por representar a esta empresa monopólica. Desde 1959 ocupaba el cargo de vicepresidente de AEG S.A. y su subsecretario en la cartera de Energía, el ingeniero Thibaud, había sido asesor del ministro Alemann durante la presidencia de Frondizi, además de ser su amigo personal.² El social-cristianismo se incorporó al gobierno en la figura de Felipe Tami, que asumió como presidente del Banco Central de la República Argentina (BCRA) el 26 de julio.³ Otros habitantes del Ministerio de Economía y Trabajo con función de asesores son Eduardo Zalduendo recibido en la Universidad de California y estudioso de la historia de los ferrocarriles argentinos y Alieto Guadagni, también graduado de la misma Universidad con una tesis sobre modelos para el cálculo de las tarifas eléctricas. Obviamente un antecedente meritorio, pero no necesario para ocupar el cargo era el de ser participante de los *Cursos de la Cristiandad*. Más tarde, el 24 de setiembre, al darse a conocer la Ley de Ministerios, se redujo su número de ocho a cinco y se aumentó a quince el número de Secretarías de Estado que tendrían a su cargo el despacho de la administración. Se puso así de manifiesto la particular disposición del presidente a manejar el gobierno a través de estas secretarías, cuyos titulares funcionaron como verdaderos filtros entre las propuestas ministeriales y las decisiones presidenciales.

4.1.1 El clima cultural, el Régimen y la Universidad.

Al instaurarse el régimen ya habían llegado a la Argentina los ecos del movimiento juvenil europeo y estadounidense que bajo el lema “amor y paz” surgía en las ciudades más desarrolladas del mundo, difundiendo premisas de altruismo, misticismo, alegría y no violencia, asociados a sentimientos de libertad sexual, cambios en la indumentaria y predilección por la vida al aire libre con cierto desprecio por lo material. Este movimiento juvenil se inclinaba a demostrar su insatisfacción con las reglas de la sociedad de consumo y en contra de lo que denominaban el *orden burgués*; en la Argentina se mezclaban estos sentimientos con el malestar frente al autoritarismo; esta moda cultural estaba marcada por el desparpajo personal frente a la autoridad y a la sociedad corrompida y se exteriorizaba en un vestir algo desprolijo, cabellos largos y actitudes contestatarias, dudosa limpieza y enfrentamiento con los padres. Las nuevas tendencias provocaban también reacciones en los que consideraban a este tipo de jóvenes como irresponsable y egoístas, sin conciencia nacional, eran vistos como una minoría resentida, peleados con el trabajo, y su discrepancia con los cánones vigentes en aquella sociedad que incluía una supuesta indisposición laboral y estudiantil. Se confundía así, en un todo indiferenciado, las críticas a la suciedad corporal con la evidente sensibilidad social que mostraban por un mundo mejor y la rebeldía romántica con la necesidad de que se convirtieran en hombre corajudos con conciencia nacional. Estos discursos se entrecruzaban con la sensación de peligro con que la sociedad percibía a estos nuevos actores en la escena del país. El gobierno, por su parte, vio en sus atuendos y costumbres y sobre todo en el cabello largo de los varones un motivo de sospecha y persecución. La presión del gobierno sobre este asunto llegó al punto que el Ministro del Interior, Guillermo Borda, convocó a los directores de las ocho revistas más importantes de información general para transmitirles la preocupación del Jefe de Estado por el avance de la descomposición de los hábitos de vida tradicionales atendiendo a la *“cristiana concepción presidencial de las costumbres”* destacando la perniciosa influencia de los medios de comunicación que reflejaban este creciente deterioro moral.⁴ Así las cosas, desde 1967 existió una dirección progresiva que fue del debate iniciado a causa de aquellos románticos, deseosos de cambiar la realidad con los ímpetus propios de la juventud, a la posterior queja sostenida contra el gobierno que no cesaba de ejercer sobre estos jóvenes una represión en una actitud políticamente poco comprensible. Dentro de este marco cultural y político, los senderos juveniles comienzan a bifurcarse, la revuelta cultural busca sus cauces dando lugar - cada vez más- al compromiso político y a la idea de revolución, que pocos años más tarde provocaría una tragedia de carácter nacional. En su discurso del 9 de julio el presidente decía: *“No permitiremos que acosen a nuestra juventud extremismos de ninguna naturaleza. Si fijamos con claridad el rumbo, nadie podrá apartar a la patria de su misión de grandeza”*. En tanto, al cumplirse el sesquicentenario de la independencia nacional, es decir, al tiempo que Onganía pronunciaba su discurso, el Rector de la

Universidad de Buenos Aires Hilario Fernández Long decía: *“La universidad no es una máquina ni una razón; es una voluntad decidida de iluminar los caminos más difíciles del hombre. Dentro de este espíritu, yo invito a todos los miembros de la comunidad universitaria para que, como los hombres de 1816, sepan responder a ese llamado del evangelio que promete el reino al que empuña el arado y mira solo hacia adelante”*. Antes, el mismo 29 de junio, Fernández Long había exhortado desde el rectorado: *“En este día aciago en que se ha quebrantado en forma total la vigencia de la Constitución, hacemos un llamado a los claustros universitarios en el sentido de que sigan defendiendo como hasta ahora la autonomía universitaria”*. Como respuesta, el 29 de julio –exactamente al mes de haber asumido la presidencia- Onganía puso fin a la autonomía universitaria, y dispuso la intervención de todas las facultades cerrando todos los centros estudiantiles contrarios al gobierno⁵. Al día siguiente comienza la resistencia, después de una fuerte protesta estudiantil y docente –severamente reprimida en la recordada “noche de los bastones largos”- en la misma noche de la intervención. Así se produjo la renuncia en masa y el éxodo docente más importante en la historia de la Universidad que abarcó a la mayor parte del personal directivo, técnico, artístico de la UBA y redaccional de EUDEBA⁶; en tanto el gobierno creaba el Consejo Asesor de la Enseñanza Universitaria Oficial, integrado por diez miembros que debían elaborar en un plazo máximo de dos meses el proyecto de la nueva Ley Universitaria. El diario *La Prensa*, en su edición del 30 de julio titula: *“Dejan sus funciones muchas autoridades universitaria”* y expresa *“como consecuencia de la ley 16.912, dictada el viernes por el presidente de la Nación en virtud de las atribuciones del Estatuto de la Revolución Argentina y por la cual quedó suprimido el sistema de gobierno vigente en las universidades nacionales, muchas autoridades de esas casas de estudio anunciaron ayer la decisión de alejarse de sus funciones, sin asumir las de carácter administrativo que les corresponderían en el futuro. Durante los incidentes ocurridos el viernes (29) por la noche en distintas facultades al conocerse la medida tomada por el Poder Ejecutivo, la policía detuvo a 130 personas de las cuales anoche 20 habían recuperado su libertad por disposición del juez de instrucción, Jorge A. Aguirre”*. El 1 de agosto el Poder Ejecutivo Nacional dispone un receso universitario de quince días y el Ministerio del Interior da un comunicado: *“La Universidad no ha sido avasallada. Es propósito del gobierno que las actividades universitarias se sigan desarrollando normalmente, y dará su más decidido apoyo a los profesores y estudiantes que en su inmensa mayoría desean continuar sus respectivas tareas en un ambiente de seriedad científica y de jerarquía y respeto recíproco. La ley 16.912 ha sentado las bases para que, bajo la dirección de sus actuales autoridades, la institución se encamine hacia formas de organización que le permitan alcanzar el más alto nivel académico, prestar a la comunidad los más eficientes servicios y excluir de su seno la influencia de elementos extraños a su natural sentido. Por ello el gobierno de la Nación deplora la actitud de algunos grupos de activistas que, en la noche de ayer, han*

pretendido alterar el orden y desviar a la Universidad del cumplimiento de su misión específica”.

La reacción de las autoridades universitarias es inmediata. El decano y vicedecano de la Facultad de Arquitectura y Urbanismo, arquitectos Horacio Pando y Méndez Mosquera, remiten un telegrama al Poder Ejecutivo denunciando los hechos del día 29 y manifestando bajo juramento que al momento de la irrupción de las fuerzas policiales se estaban desarrollando en la Casa las habituales actividades docentes en forma normal. La reacción de las autoridades de Medicina, también fue inmediata. En una reunión convocada por el decano, doctor Osvaldo Fustioni, y que contó con la asistencia de una treintena de profesores, se analiza la situación de la Universidad y de esa Facultad en particular. El decano anuncia su decisión de no aceptar el cargo administrativo, actitud que fue respaldada por todo el profesorado. El decano de la Facultad de Derecho, doctor Ismael Basaldúa (hijo) remite una nota al Ministerio del Interior donde dice que delega sus funciones en el vicedecano, doctor Federico Videla Escalada. Un grupo de consejeros de la Facultad de Ingeniería, integrado por los ingenieros Teseo Roscardi, vicedecano; Héctor Bautis, José Pedregal, Luis Bassani, Cristian Labruno y José Galante firman una denuncia por el avasallamiento al orden y al espíritu universitario y manifiestan: *“No reconocer otro gobierno universitario que el que libremente ha elegido la Universidad de acuerdo con sus propios Estatutos”.* En sintonía, las autoridades de la Universidad de La Plata fijan su actitud y en el departamento de Filología se reúnen el presidente de la Universidad, doctor Roberto Ciafardo y los decanos de las facultades de Agronomía, ingeniero Héctor Santa María; de Ciencias Fisicomatemáticas, ingeniero Conrado Bauer; de Ciencias Jurídicas y Sociales, doctor Bartolomé Fiorini; Humanidades y Ciencias de la Educación, doctor Joaquín Pérez; de Veterinaria, doctor Guillermo Gallo; de Química y Farmacia, doctor Héctor Fassano; de Ciencias Médica, doctor Luis Pianzola; de Ciencias Naturales y Museo, doctor Mario Teruggi y de Ciencia Económicas, doctor Pedro Delfino. Todos firman una declaración en donde: *“...decidieron por unanimidad no aceptar el ejercicio de las funciones establecidas por la ley 16.912, en virtud de que sustituye las normas del estatuto por las que fueron elegidos y suprime la autoridad universitaria”.* En cambio el Rector de la Universidad de Cuyo, doctor Carlos Saccone informa al Ministerio del Interior que ha decidido asumir las funciones administrativas determinadas por la ley 16.912, comunicando esta decisión al Ministerio por telegrama colacionado. La misma actitud fue tomada por todos los decanos y directores de institutos de esa Universidad. Debemos agregar que estas decisiones –en una controversial actitud- fueron respaldadas por la totalidad del cuerpo docente de la Universidad de Cuyo. La Universidad del Nordeste también da su acatamiento a lo dispuesto por el P.E.N. y en la ciudad de Corrientes no se registraron incidentes de ningún tipo. En una declaración suscripta por el Rector, ingeniero Ernesto Rodríguez y los decanos de Derecho, doctor Jorge García; Medicina, doctor Raúl Nicolini; Agronomía y Veterinaria, doctor Horacio

Mayer; de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, agrimensor Domingo Tasano; de Humanidades, profesor Ernesto Maeder; de Ingeniería, profesor Héctor Tamburini y de Ciencias Económicas, contador Mario Gianneschi; se hace constar que: *“ante la difícil situación que atraviesa el país, estimamos necesario contribuir a su pacificación y desarrollo con actitudes positivas en pro del bien común.”* Y agrega: *“que los términos de la ley 16.912 dentro de la circunstancial interrupción de la autonomía de la Universidad, los entendemos destinados a crear las condiciones que permitan su reestructuración.”* En consecuencia aceptan asumir las funciones de acuerdo con los términos del artículo séptimo de la ley 16.912 y así lo comunican al Ministerio del Interior. La Universidad de Rosario se expresa por la voz del decano de la Facultad de Ciencias Matemáticas, arquitecto Mario Segovia Meyer, quien después de una reunión con el Consejo Directivo produce la siguiente declaración: *“El decano, consejeros presentes y el consejo directivo de la Facultad de Ciencias Matemáticas declaran que solo reconocen como legítima autoridad la que surge de la voluntad libremente expresada por sus gobernados y se comprometen a afrontar la lucha que permita el establecimiento de la democracia en el ámbito nacional y universitario.”* El Rector de la Universidad Nacional del Litoral, ingeniero Cortés Plá, anuncia al periodismo que no permanecerá al frente de la casa de estudios y que no asumirá el cargo, y comenta: *“nosotros desconocemos la decisión del gobierno”*. En forma inesperada por sus autoridades, también se desata una crisis -ya latente desde 1955- en la Pontificia universidad Católica Argentina, donde 42 profesores y 80 alumnos del Departamento de Sociología de la Facultad de Ciencias Sociales y Económicas, hacen conocer su solidaridad con lo expresado por las autoridades de la misma Facultad de la UBA. El decano de la Facultad de Ciencias Sociales de la UCA, José Enrique Miguenz, no solo presenta su renuncia como director del Departamento, sino que sugirió que las presentaran otros dos profesores, los sacerdotes Justino O’Farrel y Alberto Sily. La actitud desembocó el 3 de agosto con la presentación de una nota -por parte de 42 profesores- que puso en peligro la continuidad misma del Departamento y concluyó en un enfrentamiento entre las tendencias pre-conciliares y el progresismo conciliar, asunto en el que se debaten vastos sectores de la Iglesia. Esta acción fue acompañada por el estudiantado y 78 alumnos y egresados publican una solicitada de solidaridad en la gacetilla de la Asociación de estudiantes de Sociología. Estos hechos - indudablemente emparentados- dieron lugar a que el Rector de la Pontificia Universidad Católica Argentina (UCA) monseñor Octavio Derisi -un jesuita conservador- amonestara a los profesores y sancionara la ordenanza 24 que prohibió mencionar el nombre de la Universidad en las declaraciones personales.⁷ Fue así que el régimen se convirtió en el archienemigo de los estudiantes y de los intelectuales. Un resentimiento particular del gobierno se percibió en disciplinas como filosofía, sociología y psicología (en algunos casos suspendiendo las carreras) que las autoridades veían como subversivas porque promovían conceptos de concientización

muy reñidos con los objetivos del gobierno para el ámbito, porque cuestionaban valores tradicionales de autoridad, jerarquía, disciplina y los métodos tradicionales de enseñanza.

Este fue el escenario en las Universidades Nacionales a las semanas de instaurada la autodenominada Revolución Argentina. La ley 16.912 y los actos de gobierno de ella emanados son la primera etapa del proceso de *recuperación universitaria*, es decir, el proceso que comenzó con la caducidad de las autoridades universitarias existentes desde antes de la revolución de junio de 1966, su transformación en una especie de brazos administrativos de un gobierno revolucionario y los episodios que culminaron con el cambio de la mayoría de aquellas autoridades, salvo las que aceptaron voluntariamente al nuevo régimen. La empresa de *renovación universitaria* necesitaba del instrumento legal adecuado a los objetivos revolucionarios que le fuera encargado al Consejo Asesor de la Educación Universitaria Oficial. El resultado de la actividad de este Consejo fue la ley 17.245 sancionada en mayo de 1967 casi un año después de su creación.

La censura, o mejor dicho las distintas variantes de censura puestas en marcha en los primeros tiempos de la administración Onganía contienen paradojas y contradicciones difíciles de explicar. La prohibición de la opera *Bomarzo* (Manuel Mujica Láinez-Alberto Ginastera) y la creación –en diciembre de 1968 del *Ente de Calificación Cinematográfica* (Ley 18.019), regulador de los subsidios oficiales a esa industria sucedió al tiempo que nombres consagrados de la literatura nacional publicaran con regularidad. Borges, Cortázar, Bioy Casares, Leopoldo Marechal, Bernardo Kordon, David Viñas, Marta Lynch, Juan José Saer, Héctor Tizón, Ricardo Piglia, Isidoro Blainstein y Rodolfo Walsh; realizaron su mejor producción por esos tiempos. En el ámbito cinematográfico directores como Torre Nilsson, Leonardo Favio, Ricardo Talesnik, Rodolfo Khun, Octavio Getino, Manuel Antín y Fernando Solanas generaron sus obras maestras también en esa época. Lo mismo puede decirse de David Viñas y Roberto Cossa como creadores y directores de teatro. ¿Cómo fue posible tanta creación fecunda bajo condiciones de autoritarismo y censura? Una posible explicación para estas aparentes contradicciones, podría ser que –todos estos escritores, cineastas y dramaturgos- pudieron coincidir en sus observaciones y exploraciones de amplios sectores de la sociedad argentina en una época de cambios globales muy dinámicos (militares, clase media y cambio cultural) y los registraron en su cine, sus textos y sus obras teatrales, dando así lugar a estas curiosas *dos caras de Janos* relacionadas con política y cultura bajo el régimen de Onganía.

4.1.2 Onganía y el movimiento obrero organizado.

4.1.2.1 El panorama del movimiento obrero organizado al arribo de Onganía. Vandorismo, Alonsismo y la izquierda sindical.

En agosto de 1963 –es decir tres años antes del derrocamiento de Illia- las 62 Organizaciones resumieron en un estupendo documento sintetizador las aspiraciones económicas y sociales comunes a los diversos programas y declaraciones ya conocidos del sindicalismo peronista al promediar la década de 1960-70. Las demandas económica incluían entre otras: una política de pleno empleo, control de costos, precios máximos, estimulación de la actividad privada de capital nacional, políticas de alto consumo para el trabajador, aplicación de medidas monetarias de fomento a la empresa pequeña y mediana de origen nacional, límites a las utilidades empresarias, control cambiario y fomento de la compra de productos de industria nacional, inversión en viviendas sociales y nacionalización de las industrias básicas. El documento fue un precursor de lo que –décadas más tarde- se llamaría responsabilidad social empresaria, incluyó también en su ideario los temas relativos a la atención de la salud y contención del ámbito familiar del trabajador. Reconoció la función social del capital y este fue –en aquel momento- un reclamo central de las 62 Organizaciones que, en términos prácticos se expresaba en la autogestión y reafirmó la índole no conflictiva que debía darse a la coparticipación gestionando a la empresa como una comunidad de intereses. Nunca más -durante esos años- el movimiento obrero coincidiría de ese modo en un documento tan sintetizador del ideario justicialista que abarcaba todo el arco de las organizaciones sindicales.⁸ En las modernas sociedades industriales, los sindicatos debían ir más allá de las cuestiones sobre salarios y condiciones de trabajo, tenían que hacer conocer su pensamiento sobre los asuntos de la Nación e incidir sobre la gestión de gobierno, trabajando sobre fines políticos con el fin de asistir integralmente al trabajador. José Alonso⁹ - Secretario General de la CGT desde 1963- quien junto a un grupo de asesores fue quien comenzó a pensar en los cambios que hacían falta en el país para alcanzar el desarrollo y la justicia social. En el documento titulado La CGT en marcha hacia el cambio de estructuras quedó sintetizada su filosofía desarrollista en lo económico, vinculada a un neocorporativismo¹⁰ explicado en su idea de crear un organismo específico con participación de los sindicatos y poder de decisión en los más altos niveles del Estado. Alonso pensaba que la transformación pacífica del país –es decir por vía no revolucionaria- debía basarse en el concepto de *sindicalismo múltiple*, es decir, concibiendo al sindicato como una organización poderosa integradora de toda la vida del trabajador afiliado. En su concepto, el sindicato –como una organización fuertemente constituida- debía otorgarle al trabajador y su familia, salud, esparcimiento y recreación, formación y cultura. Esta concepción llevaba hasta su límite lógico la idea de servicio social cumplido por el sindicato y –de paso- también resolvía el problema

político. En enero de 1965, al ser presentado el documento de Alonso al Comité Nacional de la CGT “*La CGT en marcha...*” los *vandoristas* se opusieron a esa línea, no tanto por discrepancias ideológicas sino por cuestiones tácticas. Vandor entendía que esa línea ya estaba completada en el programa del *Partido Justicialista* y su tratamiento fue aplazado *sine die*. Alonso se vio marginado por el poderoso jefe de la UOM y su tiempo se agotó, a la vez que Vandor acrecentaba su influencia –después de las elecciones de 1965- gracias a su control de las 62 Organizaciones.

Augusto Timoteo Vandor, jefe de la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) –apodado el lobo tanto por su astucia como por su natural sentido de la oportunidad- era una figura dominante dentro del aparato sindical argentino. Hombre conocedor de los métodos para controlar el aparato sindical, dotado de un sentido de la *realpolitik* poco común, un pragmático desideologizado, despertó en el peronismo de su tiempo reacciones extremas: tanto adhesión incondicional como odio. Dotado de una capacidad inagotable para la negociación con políticos, militares y empresarios; para él, los principios doctrinarios estaban sujetos a la cotidianeidad de los asuntos gremiales, por lo tanto, no era fácil de definir en cuanto a su posición doctrinaria y teórica, si es que tenía alguna. Poco dejó escrito y no hay documentos reveladores de su pensamiento íntimo, salvo los comentarios de algunos de sus hombres más cercanos. El *vandorismo* exhibía una brecha imposible de cerrar: su falta de ideología. Vandor era un oportunista, un aventurero de la política; sin embargo de su escaso legado se infiere que su pensamiento se ajustaba muy bien a la doctrina, es decir, que había un proyecto subyacente en la actividad vandorista.¹¹ Este proyecto representaba un intento de consolidar e institucionalizar el poder acumulado en manos de los sindicatos -como representantes del movimiento obrero organizado- e instalarlo como la principal expresión legalizada del peronismo cristalizado en la conformación de un “*partido obrero*” al clásico estilo de los modernos partidos social-demócratas de tipo laborista, no de un modo clasista sino comprometido con una conformación policlasista que consolidara a todos los factores de poder de la vida nacional; lo que incluía a la Iglesia, los empleadores y también a las Fuerzas Armadas. Esto implicaba –para Vandor- cierta pretensión de independencia respecto del propio Perón, pero, sus raíces históricas seguían siendo las derivadas de la experiencia peronista 1946-1955.

En tanto, la corriente izquierdista del peronismo se encontraba muy marginada dentro del movimiento obrero organizado, y más aún dentro de las 62 Organizaciones. Contaba con muy poca base desde la que pudiera oponerse a la dominación vandorista, su núcleo duro se centraba en el gremio textil comandado por Andrés Framini. Esta línea dura continuaba asentándose en la ortodoxia de los años de la Resistencia Peronista, en el sentimiento de nostalgia que esto despertaba en sus escasas bases, se definía a sí misma como defensora de esos valores y la principal amenaza que reconocían era, justamente, la burocracia sindical representada por

Vandor y este llegó a ser su principio fundamental. Privilegiaban la relación dialéctica entre el líder –Perón- y su pueblo como un símbolo del diálogo entre los trabajadores y el Estado, encarnado en la figura de su líder. Si bien Perón recreó a la izquierda sindical alentando la creación del Movimiento Revolucionario Peronista (MRP) bajo el control de Framini, este movimiento apeló siempre a la emoción y a las cualidades morales y éticas, careció siempre de una ideología y una línea política definida: era solo una necesidad táctica de Perón. (ver anexo cuadros e infografías).

4.1.2.2 La relación inicial con el movimiento obrero

El 4 de agosto Onganía realizó una reunión de prensa en casa de gobierno para anunciar planes de ordenamiento y transformación para el resto del año (1966) y afirma que: *“durante este año se alcanzará la materialización de un ordenamiento dentro de la actual situación, basado en el ejercicio integral de los principios de orden, responsabilidad y disciplina; la obtención de una amplia comprensión y comunidad espiritual en la población; el logro de una racionalización integral; la solución de los problemas de primera urgencia y la adopción de las medidas necesarias para un desarrollo efectivo en otras etapas posteriores.”* Una expresión voluntarista asentada en los primeros objetivos estatutarios, convalidada por la confianza generalizada en el régimen. Sin embargo este sería un programa de reordenamiento y transformación que precedería al Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad, encaminado a reimplantar el liberalismo económico y la economía de mercado mediante la creación del Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) que se ocuparía de todo lo relacionado con la seguridad nacional –creado por la ley 16.970 publicada el 8 de octubre de 1966- en estrecha ligazón con su gemelo dedicado a una tarea íntimamente ligada con aquella como es la del desarrollo, para lo cual se decidió la adecuación del Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) para insuflarle nueva vida y más amplias actividades: en su seno podría formarse el núcleo del futuro Consejo Económico Social, uno de los proyectos centrales del régimen para su tiempo político. En la reestructuración del CONADE que hiciera José María Guido –por decreto ley- se introdujo una cláusula facultándolo para formar equipos de trabajo con representantes de la actividad empresarial, sindical o de cualquier otro sector privado que pudiera resultar de interés atraer. Si esas condiciones se integraban, el Gobierno contaría con un cuerpo de asesoramiento distante de la idea de corporativismo que muchos se resistían a aceptar.¹²

“Ante la situación que vive la República, como consecuencia de un gobierno que pretendió dar al país la dimensión de un comité político, signado por la corrupción y en aventurerismo y el total desprecio hacia el pueblo y la Nación para servir intereses de minorías oligárquicas y antinacionales, las 62 Organizaciones cumple con el deber de ratificar su permanente posición en la defensa de los derechos populares y de los supremos objetivos de la nacionalidad. En tan dramáticas circunstancias donde las

fuerzas populares estaban impedidas de obtener por la vía del derecho sus ansiadas soluciones, sufriendo permanentes frustraciones y obligadas a la cruenta lucha social, el derrocamiento del gobierno por las Fuerzas Armadas constituye un hecho inevitable, que será coherente en la medida en que cumpla con su juramento de servir a la patria.”

¹³ Así se expresaba el comunicado de prensa de las 62 Organizaciones Peronistas, lideradas por Augusto Timoteo Vandor, quien el 29 de junio de 1966 junto a numerosos sindicalistas, se pondría saco y corbata para concurrir al juramento del Gral. Onganía como presidente de la Nación. Estaban presentes además de militares y sindicalistas, la Iglesia Católica representada por el cardenal Antonio Caggiano, cardenal primado de la Argentina, e importantes representantes del sector empresario. Entre ellos se encontraba Néstor Jorge Salimei, quien desde el Ministerio de Economía tendría la ímproba tarea de conformar a todos los sectores, que realizando este pacto corporativo, daban nacimiento a esta experiencia revolucionaria. El propio Arturo Frondizi, en declaraciones al periódico *Los Principios* de la provincia Córdoba, el 18 de julio, respaldó al régimen declarando: *“Esta revolución ha nacido con los objetivos establecidos por las nuevas generaciones de argentinos. La justicia social y especialmente el desarrollo económico, son dos metas que tenemos que alcanzar inevitablemente.”*

El nuevo gobierno contó desde su instalación con el apoyo entre cálido y expectante de la élite sindical peronista. La CGT encabezada por Francisco Prado (Luz y Fuerza) dio a conocer un comunicado en el que luego de señalar que el caos del gobierno había significado una verdadera ausencia de poder expresaba que: *“el movimiento que el 27 de junio tomó el poder constituye un hecho nuevo e históricamente asume una gran responsabilidad ante la atenta expectativa que indiscutiblemente ha concitado en el país.”*¹⁴ Proponía también una serie de medidas que los nuevos gobernantes debían realizar como: *“lograr la plena ocupación y el incremento racional y humano de los salarios y la defensa y promoción de nuestra industria nacional, la construcción de viviendas dignas y decorosas, el cumplimiento de las leyes de previsión y la realización de un vasto plan de obras públicas.”* Reflejaba también el emparentamiento ideológico con el sector del ejército en el gobierno cuando sostenía *“la necesidad impostergable de rehacer la unidad nacional destruyendo para siempre el concepto antehistórico de réprobos y elegidos, que desenterrando el odio sembrado por los ideólogos de la desunión reivindique la dignidad de los argentinos en la comunidad de los superiores intereses nacionales, dentro de un ámbito de libertad y justicia social.”* A las manifestaciones de la entidad gremial confederal le siguieron otras de algunos sindicatos en particular, por ejemplo la Federación Gremial de la Carne expresó que *“adelantaba su decidido apoyo a los enunciados contenidos en la proclama revolucionaria coincidiendo con la necesidad de asegurar la unidad total de los argentinos para encarar la transformación y modernización estructural del país.”*¹⁵ La Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) a las pocas horas de asumido el régimen, su

secretario general Raimundo Soto declaró que *“compartían el enunciado de la proclama de las tres armas y desea fervientemente el reencuentro del pueblo argentino en un clima de armonía y paz cristiana.”*¹⁶ Los llamados gremios independientes señalaron a su vez que *“La Revolución solo debe ser un paso de la transición para que –una vez cumplidos sus objetivos- se restablezca la plena vigencia de la Constitución y de las Instituciones Republicanas que ella consagra, único camino posible para el desarrollo fecundo de la acción del movimiento sindical libre y democrático que este nucleamiento representa.”*¹⁷ El MUCS Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical expresó que *“solamente en el ejercicio pleno de las libertades democráticas y de los derechos humanos fructificaran las necesarias para el mejor nivel de vida, asegurar las fuentes de trabajo y defender el patrimonio nacional.”*¹⁸ Independientemente de las declaraciones, lo cierto es que se había generado una corriente de simpatía y aprobación entre las cúpulas sindicales y el gobierno y se buscaron distintas alternativas de acercamiento. Así, un nutrido grupo de líderes sindicales participó en el acto de asunción del ministro de economía Néstor Salimei, entre los más conocidos estaban, José Alonso, Augusto Timoteo Vandor, Francisco Prado, Gerónimo Izetta, Adolfo Cavalli y José Pomares y una posterior velada de gala en el Teatro Colón facilitó el enlace entre los sindicalistas y Onganía.

Sin embargo, en esta etapa inicial, la política del gobierno osciló entre la dureza para unos y la permisividad y tolerancia para otros, lo que fue naturalmente delimitando las fracciones del movimiento sindical y –como una divisoria de aguas- ahondó y confirmó las divisiones existentes –ya comentadas- en años anteriores. Desde el Ministerio de Economía y Trabajo (unificados por el régimen) el ministro Salimei patrocinó una política ambigua e imprecisa que generó fricciones entre los sindicatos cegetistas en la medida que no encontraban un trato igualitario por parte de las autoridades. Estas ambigüedades generaron tensiones en una CGT cuyos miembros estaban siendo tratados de manera tan diferente, otros episodios fortificaron el ánimo de la burguesía y comenzaron a mostrar que la clase obrera y diversos sectores medios eran, más allá de las intenciones *equilibrantes*, netos perdedores en el tratamiento gremial y una señal importante de *disciplinamiento* por parte del gobierno fue la sanción de la ley de Arbitraje Obligatorio (ley N° 16.937 del 27 de agosto de 1966) cuyo laudo arbitral obligaba a todos los trabajadores y empresarios de la actividad, como si fuera una convención colectiva de trabajo. Un ejemplo de esta política ambigua fue que en el mes de julio el gobierno devolvió su personería gremial a la Federación Obrera del Caucho, la Asociación de Empleados de Farmacia la Federación Obrera de la Industria del Vestido, la Confederación de Obreros y Empleados Municipales, al Sindicato del Vestido de Buenos Aires y a la Unión de Recibidores de Granos. Al mismo tiempo intervenía los Sindicatos de Prensa y a los Vendedores de Diarios y Revistas, ambos orientados por dirigencia de corte comunista, en agosto le tocó a la Federación Obrera

Santiagoña de la Industria Forestal y a la Asociación Argentina de Telegrafistas, Radiotelegrafistas y Afines.

En la medida que el nuevo gobierno deseaba reorganizar el Estado y modernizar y transformar la economía –además de implantar el orden- se plantearon conflictos con numerosos sectores involucrados, algunos de estos conflictos duraron casi tanto como el propio gobierno. Uno de los principales gremios afectados por el impacto de las medidas fue el de los trabajadores del Estado como consecuencia de las medidas de racionalización adoptadas y se creó un serio conflicto, a pesar que la posición dialoguista y colaboradora de sus dirigentes. En octubre de 1966 se dictaron dos leyes, la 16.971 y 16.972 que establecían cambios normativos y administrativos en las condiciones de trabajo. El Sindicato Unido de Portuarios (SUPA) chocó frontalmente con estas normas al establecerse la Capitanía de Puertos que aparecía con facultades más o menos absolutas en la jurisdicción de los puertos nacionales y modificó absolutamente las condiciones y el régimen de trabajo, incluyendo el salario. La ley 11.544 y el decreto 2729 sustituyeron lisa y llanamente toda norma anterior y la reacción del SUPA no se hizo esperar, decretó la huelga general del sector. La respuesta gubernamental fue rápida: el decreto 2869 del 16 de octubre dictó la intervención del gremio. El decreto fue firmado por el ministro Salimei, el secretario de Trabajo Rubens San Sebastián y el propio Onganía. El secretario general del gremio – Eustaquio Tolosa- apeló a la solidaridad internacional y solicitó a la Federación Internacional de Transporte un boicot para los buques argentinos. Diecisiete meses más tarde, en marzo de 1968, este dirigente fue condenado a 5 años de prisión e inhabilitación absoluta por el delito de propiciar sanciones contra el Estado Argentino.¹⁹ Los ferroviarios –junto a los trabajadores del estado- fueron los principales objetivos de la racionalización y la reducción de personal; La Fraternidad y la Unión Ferroviaria –los dos gremios más representativos de la actividad- iniciaron un largo período de lucha que duró todo el período.

4.1.3 Salimei, el problema azucarero y el Operativo Tucumán.

El 21 de agosto de 1966, el ministro Jorge Salimei, mediante el decreto 16.926 establece el conjunto de políticas conocidas como “Operativo Tucumán” que tienen como objetivo declarado la racionalización y diversificación de la industria azucarera local. Es preciso señalar que, en aquella época, la industria azucarera era completamente dominante dentro del aparato productivo de la provincia de Tucumán. Este programa implicaba una forzada retracción de la producción azucarera, para lo cual se decidió intervenir y cerrar los ingenios, en teoría, menos eficientes, regular la producción de caña a partir de la expropiación de los cupos de producción a los pequeños productores rurales, en algunos casos de manera forzada y en otros de forma voluntaria. Se decidió mantener cupos de producción por ingenio y poner en marcha un plan de incentivos fiscales para la radicación de nuevas industrias.²⁰ Para

principios de setiembre habían sido intervenidos –previa ocupación militar- los ingenios La Esperanza, Bella Vista, La Trinidad, Lastenia y La Florida, Nueva Baviera y Santa Ana. A esto hay que sumar el cierre de acuerdos entre el estado y los propietarios de los ingenios Mercedes, Los Ralos y San José.²¹

Un párrafo aparte merece el caso de la Compañía Azucarera de Tucumán (C.A.T.). En 1966 circuló profusamente un informe de la Secretaría de Inteligencia del Estado (SIDE) que aseveraba que la compra del ingenio por parte de la C.A.T. en 1962 había sido efectuada con un millón de dólares financiados por la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas (U.R.S.S.); en tiempos de la guerra fría, la intriga del comunismo internacional obsesionaba a los militares y fue una de las razones fundamentales del golpe militar. La provincia de Tucumán era el caldero del diablo según titulaba una nota de Primera Plana a fines de 1965, una provincia donde el comunismo había infectado a la sociedad hasta su cúspide, estimulando el imaginario anticomunista de los militares y de la derecha argentina. De modo que la C.A.T. se convirtió en un objetivo en sí no solo económico sino también político en la prioridad anticomunista del gobierno. En el mismo día en que Salimei anunciaba el Operativo Tucumán anticipaba: *“en cuanto a los ingenios afectados serían Florida, Lastenia, Nueva Baviera y Trinidad, de la C.A.T. un grupo financiero en el que se creyó reconocer –tiempo atrás- una influencia frigerista y al que actualmente se sindicaba como izquierdizante....”*. La C.A.T. anunció en una solicitada en el diario La Prensa de Buenos Aires que iniciaría una querrela criminal contra La Nación (el diario de los Mitre) convocando como testigo a Nicanor Costa Méndez –entonces ministro de Relaciones Exteriores del régimen- que había sido el asesor letrado en la operación de compra-venta realizada en 1962 entre el Grupo Tornquist y sus actuales dueños. A juicio del régimen militar, la C.A.T. no se componía solo de comunistas, sino también de judíos, entre ellos: Goransky, Dustchatzky, Gelbart, etc. (este último, siete años más tarde, sería ministro de economía del tercer gobierno de Perón). Conviene recordar un episodio muy significativo; a fines del conflictivo año 1965, sembrado de huelgas azucareras y de duros enfrentamientos entre sindicatos y patrones, sumergida la industria en una severa crisis, por producir mucho y no poco, en un contexto en el cual El Poder Ejecutivo (todavía constitucional bajo la presidencia Illia) se retardaba en implementar una política azucarera nacional estableciendo reglas de juego equitativas para todas las zonas productoras, la ofensiva de los sindicatos contra la dirección de la C.A.T. presentó formas particularmente violentas y muy llamativas. A principios de diciembre de ese año, en el curso de un paro general, los sindicatos de la C.A.T. pertenecientes a la FOTIA (Federación de Sindicatos de Obreros azucareros) proclamaron que no se responsabilizaban por la vida de los administradores de los ingenios de la compañía, lo que pareció una velada amenaza y se interpretó como una señal colaboracionista con el régimen. A modo de ratificación de la sospecha, el viernes 17 de diciembre de 1965, finalmente, una partida de obreros y sindicalistas tomó por asalto y destruyó la sede de la C.A.T. en pleno

centro de la capital provincial: al mediodía de aquella jornada arribó una columna de obreros del ingenio La Trinidad, montados en tres camiones precedidos por un jeep, que ingresó a la Plaza Independencia para estacionarse frente a la sede de la C.A.T., a escasos metros de la casa de gobierno. El jeep que encabezaba la manifestación propalaba marchas militares, y los manifestantes portaban grandes carteles en los que podía leerse: *Ingenio La Trinidad – Hambre – Mueran los judíos*. La columna ingresó a la vieja casona donde funcionaba la administración de la C.A.T. (antigua propiedad de los Méndez) y saqueó a voluntad las oficinas y terminó realizando una fogata con el mobiliario frente a la plaza. Todo esto sucedió a veinte metros de la sede gubernativa tucumana, en ese entonces era el gobernador Lázaro Barbieri. Los directivos de la C.A.T., en suma, eran sospechados como agentes del comunismo internacional y repudiados por su condición de judíos, los sindicatos se habían sumado con entusiasmo a la caza de brujas. Salimei introdujo sus propios intereses en el asunto. El nombramiento de Salimei al frente del Ministerio de Economía produjo no poca sorpresa en gran parte de los sectores que apoyaron el golpe: esperaban ver a Martínez de Hoz o a Juan Alemann en el cargo, cuando apareció este joven de 40 años, educado en el colegio de La Salle, doctor en Ciencias Económicas y cabeza de segunda generación del conglomerado cerealero SASETRU creado en 1949 (acrónimo de los apellidos de sus fundadores; Salimei, Seitún y Trucco) una de las primeras multinacionales argentinas con sede en Ginebra. Los entendidos no sabían si se trataba de un nacionalista o un libre-empresista, en realidad era las dos cosas al mismo tiempo, como fue el confuso caso de la mayoría de los altos funcionarios del régimen. Arribó al poder apadrinado conjuntamente por el general Eduardo Señorans y por el capitán-ingeniero Álvaro Alsogaray ²²-ahora embajador ante los Estados Unidos-Señorans era compañero suyo en los *Cursillos de la Cristiandad* y también su empleado en SASETRU; Salimei había sido discípulo de Alsogaray en los cursos del Instituto de Economía Social de Mercado. Un tercer padrino era el coronel Juan Francisco Guevara, que comandaba la secta *La Ciudad Católica*, de corte integrista y fascista a cuyas filas pertenecía Salimei. Al llegar al poder el ministro supuso que tenía una excelente oportunidad para tender nuevas ramificaciones del grupo económico que comandaba, SASETRU, una vasta empresa económica bajo el control del *Opus Dei*, que comprendía al Banco de Boulogne, institución que manejaba las finanzas de la Iglesia Católica Argentina. Al *Opus Dei* pertenecía también el señor Virginio Pinali, amigo y pariente de Salimei, a quien este nombró Director Nacional de Azúcar. ²³ Con el favor del poder militar, SASETRU dio el gran salto y en los años '70 llegó a controlar el 5% de todas las exportaciones argentinas de alimentos, así como el 23% de todas las exportaciones de cereales.²⁴ El holding creció hasta conformar un conglomerado de 36 empresas, pero el nuevo régimen militar de 1976 decretó su ruina, y hacia 1980 presionado por otros grandes como Bunge y Born y Cargill inició su rápida desaparición. En el estilo de Salimei, absolutamente pragmático, se advertía ya la

modalidad de operación que pondría en práctica el Opus Dei en la política secreta y pública del país en las últimas décadas: el uso del poder para beneficiar sus negocios, la audacia sin escrúpulos y el libre-empresismo asociado sin problemas al cooperativismo y al corporativismo en todas sus formas. En suma, un programa de revolución cristiana de filiación franquista o falangista, que contó con numerosos entusiastas en la provincia de Tucumán, rápidamente encaramados en la función pública local. A esta cofradía pertenecían el gobernador Roberto Avellaneda, el Ministro de Gobierno Ramón Gamboa, el de Salud Pública, Carlos Landa, el Secretario General de la Gobernación, el Secretario de Agricultura, el Secretario de Trabajo, el Director de Promoción Industrial. La gama de adeptos cubría también al Ejército: general Aníbal Medina, comandante de la V Brigada de Infantería, la Corte Suprema Provincial, su presidente Miguel Ángel González, la Policía Provincial con su Jefe Eduardo Herrera, el Rector de la Universidad Nacional, Rafael Paz, el Director de *La Gaceta*, Enrique García Hamilton, el Intendente de la capital, Rodolfo Terán. A esta lista hay que agregar a dos dirigentes sindicales (de los Gráficos y de La Fraternidad), al presidente del Colegio de Abogados, Román Area y al presidente de la Federación Económica, José Chebaia. La red es tan prolija que toda la plana mayor del Ministerio de Salud Pública está regida por veteranos de la *cofradía cursillista*, Landa, su titular designó a cinco asesores (todos cursillistas) que controlan a los directores técnicos de la repartición (no cursillistas). *“Los Cursillos de la Cristiandad, de los que han surgidos todos los adalides actuales de la provincia, impulsan a la acción individual y a la piedad cristiana. Han logrado algunas conversiones resonantes –de hecho el gobernador admite que él es un converso- pero no parecen haber removido ni una migaja del polvo y la desolación que ensucian la cara de sus habitantes.”*²⁵ En la falda húmeda del Aconquija, la Casa de Belén es la catedral de los Cursillos de la Cristiandad en la Argentina, su pontífice es el presbítero aragonés Vicente Zueco Vásquez que rige desde hace cinco años la vida de Belén. *“A Zueco le inquieta la identificación entre Gobierno y Cursillos; supone que si aquél fracasa, sea la Iglesia la que soporte los ramalazos del desprestigio.”*²⁶

Tampoco pudieron sustraerse a la quiebra por falta de créditos los ingenios San Antonio, Amalia, San Ramón y Santa Lucía. Muchos de los dirigentes sindicales más combativos pertenecían a estos ingenios.²⁷ Para poner estas medidas en un marco referencial histórico y económico, es necesario conocer que la crisis de la industria azucarera tucumana era de larga data y en 1965 –durante el gobierno constitucional del presidente Arturo Illia- el Congreso Nacional ya había sancionado una ley de emergencia azucarera debido a las crisis de esta industria que habían puesto a Tucumán en el centro de la opinión pública nacional, esta ley se demoró y no alcanzó a aplicarse. Los industriales suspendieron el pago de los salarios obreros, de los contratos adeudados a los cañeros y de los créditos contraídos con el Estado; varios ingenios habían suspendido la zafra recientemente iniciada. La paralización de la

actividad azucarera traccionó a las demás actividades económicas y la propagación de la crisis hizo que hasta el propio Estado provincial entrara en cesación de pagos. Descontando el desenlace, la UCIT y la FOTIA –principales entidades gremiales del sector- habían firmado un pacto obrero-campesino que reclamaba al Estado Nacional que considerara el problema azucarero un problema nacional y proponía medidas de fondo como: la destrucción de los poderes monopólicos, la reforma agraria como medio para alcanzar la explotación industrial y agraria con verdadero sentido social, la incautación de ingenios y de toda fuente de producción o de trabajo que cometa lock-out patronal o niegue derechos sociales, el control obrero y cañero en la administración de la industria y en la comercialización de azúcares, la defensa de la economía del noroeste y la terminación de los intereses y privilegio de la oligarquía industrial. Era un programa que retomaba y profundizaba los principios básicos del modelo redistributivo reclamado desde 1955.²⁸ Las medidas tomadas por el gobierno de Onganía insertaban a Tucumán en la política económica que a nivel nacional había diseñado el nuevo bloque de poder, cuyos objetivos eran suprimir las causas de la puja política y social que, desde 1955, habían destruido los intentos por desarmar el modelo de desarrollo consolidado por Perón y sentar las bases de una reconversión económica de fondo asentada en la promoción de los sectores más eficientes y dinámicos de la economía, particularmente los ligados al capital transnacional.²⁹ Ya hacia fines de 1966 más de 9.000 pequeños cañeros habían perdido sus cupos de producción mientras que otros tantos seguirían el mismo camino al año siguiente. Para principios de 1967 el cierre de los ingenios y la reducción de personal en los que siguieron funcionando habían dejado en la calle a más de 17.000 trabajadores, es decir, un 35% del total ocupado a principios de 1966. Cientos de negocios cerraron sus puertas a causa de la profunda recesión provocada. El índice de desocupación en Tucumán para fines de 1966 llegó al 10% sobre el total ocupado a fines de 1965 y alcanzó casi el 15% entre 1968 y 1969, mientras que un plazo de tres años se constató un proceso migratorio que llevó a abandonar la provincia a más de 150.000 personas, sobre una población cercana a los 750.000 habitantes hacia fines de 1965.³⁰ Las nuevas industrias promocionadas tardaron varios años en llegar, pero cuando lo hicieron, apenas influyeron sobre los índices de desocupación.³¹ La presión de las bases obreras, tanto en Tucumán como en otras regiones del país, impulsó a la CGT a lanzar un plan nacional de lucha para el mes de marzo de 1967. El gobierno respondió suspendiendo la ley de negociaciones colectivas de trabajo y quitó la personería gremial y el control de sus fondos financieros a los sectores gremiales más combativos, entre ellos la FOTIA. La respuesta estatal sumió al movimiento sindical en una de sus crisis más profundas. La FOTIA entró en un proceso de desestabilización que sumado a la falta de personería y a la falta de fondos llevó a una serie de enfrentamientos entre obreros de fábrica y cañeros, entre trabajadores de ingenios cerrados y de los abiertos, entre los que empujaban a la profundización de las medidas de fuerza y los que comenzaban a cuestionarlas como

limitantes de su capacidad de negociación. Estas diferentes líneas divisorias a veces se enfrentaban y otras se superponían como consecuencia del caos en que se encontraban sumidas.³² La gremial de los pequeños cañeros (UCIT) corrió la misma suerte, dividida entre los que tenían sus cupos de producción y los que ya lo habían perdido. También se distanciaron la FOTIA y la UCIT a causa de la creciente dificultad de muchos pequeños cañeros para pagar a los peones del surco agremiados en la FOTIA. La represión desatada sobre los azucareros movilizados, la coerción sobre la actividad gremial, las tensiones internas junto a la implementación de algunos planes paliativos hicieron disminuir notablemente la conflictividad en la provincia a partir de marzo de 1967.³³ El golpe asestado por Salimei pretendió ser mortal, pero no pudo serlo. Por un lado porque el Poder Ejecutivo Nacional (PEN) en estos primeros meses de gestión aún pretendía actuar dentro de algún marco semi-legal y la querrela entablada por la CAT amenazada con volver en su contra la serie de medidas adoptadas; pero sobre todo porque el plan de Salimei había sembrado el caos en Tucumán y creado la posibilidad concreta de un estallido social sin precedentes. El gobierno de Onganía se preocupó por las posibles consecuencias de la querrela judicial iniciada por Figueroa Alcorta –por entonces presidente de la entidad- quien junto con Fernando Tornquist -dos apellidos poderosos de la época- se habían puesto al frente de la demanda judicial. Onganía, para tener un mejor conocimiento de la situación en la provincia envió a un comisionado de la SIDE para que le preparara un informe sobre el sostenimiento del plan de racionalización de Salimei; el informe fue corto y efectivo: no había como sostenerlo. De modo que el PEN se avino a un convenio con la CAT que permitió la reapertura de las dos fábricas, a cambio del desguace de la otras dos. Este arreglo incluyó una renegociación de las deudas de la firma, cosa que más tarde se pactó con todos los ingenios tucumanos. A cambio del convenio de reapertura, la CAT tuvo que aceptar la incorporación de Julio César Cueto Rúa como presidente, curiosa designación esta de un presidente que no tenía ni una sola acción en la firma y jamás se había desempeñado como empresario en el mundo azucarero. El desembarco de Cueto Rúa hay que rastrearlo en la complicidad de Cueto –bien conocida en la provincia- con el asalto a la industria azucarera, por su condición de socio de Krieger Vasena (próximo ministro de Economía del régimen) y por su reconocida autoría de los artículos que -desde la revista *Análisis*- predicaban desde mucho antes de 1966 el *cerrojazo* aplicado por Onganía y Salimei. A fines de 1966 Virginio Pinali –nuevo Director Nacional de Azúcar- desembarcó en Tucumán con los borradores de los convenios, que no eran otra cosa que documentos pseudo-jurídicos que presentaban como voluntaria una decisión unilateral del PEN y dictaban las condiciones bajo las cuales algunas industrias podría seguir operando. Algunos acuerdos otorgaban préstamos millonarios a los propietarios de los ingenios para que clausuraran voluntariamente sus fábricas, este fue el caso de Herminio Arrieta, que embolsó la suma correspondiente y procedió a desmantela de inmediato la fábrica que había

adquirido años atrás en la provincia. El PEN pagó sumas fabulosas a los industriales, con cargo –por supuesto- a las arcas de la provincia. Los decretos de Onganía que sancionaron los acuerdos fijaban una suma de 30 pesos por kilo de azúcar sobre los cupos autorizados para cada ingenio y los derechos de producción eran transferidos al PEN, quien dispuso de los mismos para realizar la zonificación que se proponía a favor del llamado Norte Grande. El valor fijado representaba unos 120.000 pesos por hectárea de caña, un precio que –según denunciaba el Colegio de Martilleros de Tucumán- ni la mejor tierra de la provincia podía valer. De manera que los industriales que aceptaron el cierre de sus fábricas obtuvieron el mejor precio por sus tierras, pero sin venderlas, y encima conservaron los cañaverales porque no se los obligó a decepar. Así que tales ganancias explican la callada aceptación de los empresarios tucumanos tan favorecidos por la intervención estatal. Lo concreto fue que –después de que Tucumán moliese 8.7 millones de toneladas de caña en 1965- en el país se habían molido 13.1 millones de toneladas; el año del crack de la superproducción la molienda de caña en la provincia alcanzaba para 1966 solo los 4.7 millones de toneladas sobre un total nacional de un poco más de 8.0 millones. La superficie sembrada con caña de azúcar se redujo notablemente desde las 210.00 hectáreas en 1965 hasta las 135.600 hectáreas en 1968, manteniéndose en cerca de las 140.000 hectáreas hasta 1970 (ver cuadro II) pero esta disminución no fue igual para todos los productores. Durante 1969 las superficies de hasta 3 hectáreas que antes de 1966 significaban poco más del 10% de la superficie y representaban algo más de la mitad de los productores cañeros, no tuvieron participación en el mercado legal, mientras que los cañeros cuya explotación tenía más de 25 hectáreas, representaba menos del 55% del total y significaban algo más del 50% de la superficie bajo cultivo y tenían una participación del 73% del mercado.³⁴ La producción de azúcar luego del récord de 1965 se redujo debido a las restricciones impuestas por la Dirección Nacional de Azúcar hasta unas 380.000 toneladas en 1967, aunque a partir de ese año se recuperaran levemente hasta rondar las 500.000 toneladas en 1970. En otras palabras: las disposiciones del gobierno de Onganía destinadas a reducir las superproducciones futuras –que devenían siempre en impactos traumáticos sobre la economía regional- había sido una medicina letal para Tucumán, sobre este parque industrial azucarero había recaído todo el peso de la corrección económica. Mientras que la producción de azúcar de los ingenios del norte del país casi no se redujo, en Tucumán había caído en casi un 50% luego de la intervención del tándem Salimei - Onganía.

4.1.4 Perón y el nuevo gobierno.

En la noche del domingo 26 de junio, Perón recibió en Puerta de Hierro un cable que decía textualmente: *“Llegaré a Madrid entre el veintiocho y el veintinueve, pero probablemente anticiparé el viaje veinticuatro horas”*. Era la comunicación oficial de que

el golpe contra Illia iba a estallar. El 30 de junio Jorge Antonio³⁵ le informó que el general Onganía asumiría la presidencia. Algo más tarde le dicen que los Estados Unidos suspenderían sus relaciones con Argentina. *“Es la gran ocasión que tienen estos muchachos para ganarse el afecto popular. ¿Sabe que haría yo en estos momentos? -le dijo al cronista- Lanzaría un llamamiento nacional explicando al país que Estados Unidos nos aisló y que somos lo bastante fuertes como para salir adelante solos. Ya vería usted como inmediatamente el pueblo no vacila en engrosar las filas detrás de Onganía”* El entusiasmo de Perón por la revolución lo había hecho levantar la voz, guiñar un ojo y levantar los brazos como en los buenos tiempos. *“Para mí este es un movimiento simpático porque se acertó una situación que no podía continuar. Cada argentino sentía eso. Onganía puso término a una etapa de verdadera corrupción. Illia había detenido al país, queriendo imponerle estructuras del año mil ochocientos, cuando nace el demoliberalismo burgués, atomizando a los partidos políticos. Si el nuevo gobierno procede bien triunfará. Es la última oportunidad de la Argentina para evitar que la guerra civil se transforme en la única salida. Si el nuevo gobierno apoya los intereses populares, nosotros apoyaremos al gobierno. La proscripción del peronismo no nos interesa porque es imposible proscribirnos por decreto. Tampoco nos interesa el acceso al poder porque no luchamos por nosotros sino por el país. Hemos aprendido a tener paciencia, será dentro de un año, dentro de diez. Creemos como Confucio, que una hormiga no puede matar a un elefante, pero puede comérselo. Tenemos buenos nervios”*. Perón habló largamente sobre el arte de la conducción y luego juzgó a Onganía de esta manera: *“Un conductor político es una cosa y un conductor militar otra. Este manda, vale decir obliga. El conductor político persuade. Para mandar se necesita voluntad y carácter; para gobernar, sensibilidad e imaginación, entonces el país saldrá adelante. No conozco suficientemente a Onganía. Es un hombre que habla poco, y por lo tanto, difícil de definir. Tengo la impresión de que es un buen soldado; sé que es un hombre patriota, bienintencionado y honesto, y esas son condiciones esenciales para un hombre político. Reconozco calidad a Onganía como hombre de mando en el Ejército. Si Onganía se comportase en el terreno político como en el terreno militar, el país podrá andar bien. Simpatizo con el movimiento militar porque el nuevo gobierno puso coto a una situación catastrófica. Como argentino hubiera apoyado a todo hombre que pusiera fin a la corrupción del gobierno Illia. La corrupción como el pescado empezó por la cabeza. Illia usó fraude, trampas, proscripciones; interpretó que la política era juego con ventaja; y en política, como en la vida, todo jugador fullero va a parar a Villa Devoto. El hombre que acabó con eso, por supuesto, tiene que serme simpático, pero no sé si también lo será en el futuro. El defecto del actual gobierno es no saber exactamente lo que quiere, pero la cosa va a ser cuando desate el paquete, porque ellos tampoco saben lo que hay allí. Argentina, cuando trabaja, equilibra en seis meses lo estructural y en dos años resuelve todos los problemas económicos. En economía no hay milagros. En economía*

la misión fundamental del gobierno es dar posibilidad a la gente para que se realice. El gobierno anterior fracasó porque intentó gobernar sin concurso popular. Pero para eso hace falta grandeza, olvido de las pasiones. Yo ya estoy más allá del bien y del mal. Fui todo lo que se puede ser en mi país, por eso puedo hablar descarnadamente. No tengo interés en volver a la Argentina para ocupar cargos públicos. Quiero, claro, volver a la patria pero sin violencias. Llegó el momento en que los argentinos deben ponerse de acuerdo. Si no habrá llegado el momento de tomar las armas y pelear. El camino de unidad es cada vez más difícil; el camino de las armas, cada vez más fácil. Los argentinos debemos ponernos de acuerdo porque la disyuntiva es la guerra civil. Si permanecí impassible durante diez años ante el retroceso nacional, es porque no creo en la violencia ni en la destrucción de las obras realizadas, porque lo que ya está hecho puede prosperar. Tuve importantísimos ofrecimientos de armas y tropas, pero me negué por no entregar el alma al diablo ni provocar derramamiento de sangre. El nuevo gobierno tiene una buena intención. El problema político solo se soluciona haciendo los padrones de nuevo. Deben también organizarse fuerzas políticas. Es tarea para un año y medio o dos. Hay que romper con los estatutos de la trampa y convocar luego a elecciones con la Ley Sáenz Peña o cualquier otra ley justa. Y quien sea que gane, nos comprometemos a ponerle el hombro todos. Si Onganía, luego de las elecciones, entrega el gobierno al ganador legítimo, pasará como prócer a la historia; si se quiere perpetuar, fracasará irremisiblemente. Pero el que haga bien al país contará con nuestro apoyo. El movimiento peronista no podrá ser destruido con proscripciones ni decretos. Los gorilas intentaron la destrucción por la violencia, Frondizi por la integración, Illia por la disociación: los tres fracasaron. La organización del peronismo tiene como base de adoctrinamiento la búsqueda del bienestar nacional". Luego Perón adelantó el mensaje que enviaría a través del periódico Retorno, que se publicaría en la siguiente semana, y dice: "Uno de los hombre más sagaces de la historia política argentina, el general Roca, decía que para que los radicales se hundieran bastaba con dejarlos gobernar" entonces Perón vaticinó: "Esta es nuestra última oportunidad, y por eso necesitamos que el nuevo gobierno tenga grandeza. En caso contrario, podemos desembocar en la guerra civil, y en esa guerra tendremos que entrar todos. Dios quiera iluminar a Onganía y sus muchachos, y que estos muchachos acierten a tomar la mano que la fortuna les está tendiendo". La noche había caído sobre Madrid y Perón, acompañado por Jorge Antonio partió en su automóvil por el Paseo de la Castellana. A pocos metros, el embajador argentino, Jorge Gauna, anunciaba que el gobierno de Illia había cesado y, con él, también su función.³⁶ Pero el enfoque de Perón también fue variando, el 27 de setiembre declaró: "quiera o no quiera (Onganía) está ahora en manos de las fuerzas que le han servido para llegar al poder, pero que tienen la misión de destruirlo y derribarlo" y sostenía que todas las acciones de gobierno de sus ministros "Caerían sobre las espaldas de Onganía, cuya influencia disminuirá proporcionalmente. Es que la fuerza militar sirve para llegar al poder, pero no para

gobernar". Dos años después, en diciembre de 1968, Perón -aunque moderada por esos dos años- mantenía cierta expectativa sobre Onganía. En una entrevista le preguntaban: *¿Pero cuál es su posición hoy frente a Onganía?* Respondía: *"Yo creo que Onganía es un héroe a la fuerza. Se necesita una etapa tranquila de gobierno administrativo. Que le dé tiempo a un grupo de hombres que prepare la verdadera Revolución. Se van a necesitar dos o tres años."* Pregunta: *¿Y usted jugará a favor de esa tranquilidad?"* Respuesta: *"¿No dije ya –apenas asumió Onganía- que hay que desensillar hasta que aclare?"* Pregunta: *¿Sigue manteniendo aún ese slogan martinfierrista?* Respuesta: *¿La verdad? No se...se ha perdido mucho tiempo*".³⁷ En otras palabras: A dos años de iniciada la gestión de Onganía, Juan Perón seguía sin ensillar. Pero Perón ya había hecho llegar en julio de 1966 una cinta grabada –de casi media hora de duración- dirigida a *los compañeros peronistas*, que parecía más destinada al mismísimo Onganía que a su propio *Movimiento*, en la cual anticipaba la inevitabilidad de una guerra civil después del inevitable fracaso del proceso golpista.³⁸ Perón no se hacía demasiadas ilusiones con Onganía, y, veladamente, solía referirse a él, no como un igual sino más bien como a un subordinado en servicio.³⁹ La distancia de la escena no le impedía colegir, a través de las primeras acciones revolucionarias, que el golpe no se había dado en su beneficio ni en el de su *Movimiento* y, tal vez intuyera que más bien, se había dado contra él y su partido.⁴⁰ Porque el verdadero temor de la facción militar era el fantasma del triunfo electoral –casi inevitable- del peronismo en elecciones libres.

A poco más de dos meses de iniciado el nuevo gobierno, John William Cooke⁴¹, en su carácter de secretario general de *Acción Revolucionaria Peronista*, elaboró un informe dirigido a las bases del *Movimiento* al que tituló *"El peronismo y el golpe de Estado"*. Su análisis era una crítica lapidaria: *"este gobierno es una mezcla de lo peor que tiene cada sistema – y afirmaba-: del liberalismo aplica el libre cambio y la libre empresa; del fascismo y variantes feudales diversas, el autoritarismo, las jerarquías consideradas como de orden divino; del cristianismo, la moralina ultramontana, el clericalismo, la utilización reaccionaria de los sentimientos religiosos"* y continuaba, con un estilo incisivo: *"Van a modernizar el país con una mezcla del siglo XII, siglo XIX y occidentalismo tecnológico. El país tendría maquinaria, capital monopólico, eficacia, productividad, patriarcalismo, jerarquías inconvencionales, beatería, orden, monotonía, censura, patriotismo, recato en el vestir, puritanismo, uniformidad. Se desea un país que produzca en medio del aburrimiento, la sequedad de espíritu, la estolidez conservadora; sin peronismo, sin pueblo ni rebeldía, sin parejas candentes en las plazas públicas"*. Por ese entonces (desde julio de 1966) la representación formal del Perón en Argentina estaba a cargo de Héctor Lannes – un apacible médico y hacendado de Lincoln- que renunció a su misión en marzo de 1967 para ser reemplazado en ese mismo mes por Bernardo Alberte.⁴² La renuncia formal de Lannes explicaba su fatiga en el cargo, pero algunos dirigentes políticos pensaban que el

médico no pudo soportar por más tiempo la dualidad de las instrucciones de Perón, que indicaban: la lucha contra el gobierno desde el ala gremial mientras retenía al sector político del justicialismo en el apaciguamiento expectante para articular un frente con los demás partidos políticos tradicionales. El peronismo –como un actor multifacético y controversial en la escena política argentina- mostraba a un tiempo todas sus caras, las palabras moderadas y expectantes de su líder, el claro rechazo de su ideólogo revolucionario y la actitud desde colaboracionista a conflictiva del movimiento obrero organizado en todas sus expresiones. En definitiva, decir de todo para no comprometerse en nada.

4.1.5 Onganía: su formación, sus hombres más cercanos y su estilo de gobierno.

En la elección de los hombres que lo acompañarían en su gestión de gobierno, el presidente parecía haber estado más influenciado por los valores y creencias compartidas con ellos que por la experiencia anterior en el gobierno, sus relaciones con personalidades o sus vinculaciones con la comunidad financiera internacional. Probablemente el único hombre del electo gubernamental que combinaba una amplia experiencia para el cargo y, al mismo tiempo contaba con una perspectiva católica moderada adecuada a las inclinaciones del presidente era el Canciller Nicanor Costa Méndez, fuertemente vinculado en el campo de las relaciones internacionales y ubicado en el ala liberal del gabinete. Sería erróneo creer que Onganía haya sometido a un fuerte ejercicio de filosofía personal o a un escrupuloso escrutinio la elección de cada uno de sus colaboradores, después de todo él no era un hombre de ideas intensas ni de lecturas muy amplias. A lo largo de su carrera militar, había demostrado más interés en trabajar con la tropa y en jugar al polo que en poner énfasis en los estudios. A pesar de haber sido seleccionado para cursar la Escuela de Guerra nunca completo los cursos para oficial de Estado Mayor. Sin embargo era un hombre de persistencia y tesón, con fuerte sentido de la autoridad, mucha autodisciplina, una fuerte dedicación al trabajo, un alto sentido de la solidaridad y el compañerismo, una astucia bastante desarrollada y una buena dosis de suerte dejaron su premio: el generalato de tres estrellas. También un claro ejemplo de que, en la carrera militar, a veces la perseverancia y el empeño dejan mejor renta que la inteligencia.⁴³ En fin, que la alineación de los astros lo colocó en posición de convertirse en una figura de alcance nacional. Sin embargo, ahora como Presidente tendría que enfrentarse a conflictos y a una variedad de personas –con sus propios intereses- a una escala como la que no había enfrentado nunca antes en su carrera militar. En contraste a su presencia adusta y directa que le daba –a pesar de su estatura apenas moderada- una imagen de líder y hombre fuerte, el presidente era –con sus colaboradores civiles- un hombre afable y cordial. En sus reuniones escuchaba atentamente y con cuidado todas las exposiciones y evitaba comentar sus opiniones, pero sus escuchas no significaban asentimiento.

Manejaba célebres silencios envolviéndolos en un halo de actitud reflexiva, después entendimos que lo hacía más como un acto de conciencia de sus propias limitaciones que como una actitud de comprensión esclarecida. Era más intransigente con sí mismo que con los demás, vestía con cuidado extremo y tenía buen ojo para el corte de un traje o la textura de una camisa y sentía satisfacción al llevar buena ropa. Apreciaba la buena pintura pero no tenía oído para la música. En la conciencia de saber que podía equivocarse evitaba tomar decisiones en forma directa, prefería sugerirlas o alentarlas para que otros las tomaran en su nombre. Era un hombre de una timidez innata que ocultaba bajo su aspecto severo, pero cuando la concurrencia era poca y de su confianza se tornaba en un hombre chistoso, de risa fácil, trato afable y conversación amena. Dominaba el gran cuadro, pero prestaba poca atención a los detalles. Sentía la confianza del hombre que había llegado solo, sin fortuna familiar ya que era de origen modesto, pero la soledad se le había pegado y le quedaban unos pocos amigos que lo tuteaban, reconfortaban y podían penetrar sus defensas, pero venían de muy atrás. Apegado a las formas y a cierto oropel, era hombre de costumbre y rutinas bien ajustadas. Llegaba a la Casa de Gobierno cerca de las siete de la mañana acompañado por su edecán de turno.⁴⁴ Entre sus colaboradores más cercanos y cotidianos estaba su propio yerno Ricardo Dold de 34 años al que hizo su secretario privado⁴⁵ La Secretaría General de la Presidencia la puso en manos de un amigo entrañable, el general (R.E.) Ricardo Repetto.⁴⁶ Repetto era un hombre de buen manejo con los números y muy conocedor del problema siderúrgico, había sido director de SOMISA y se manejaba con comodidad en los temas energéticos, fue –en su función– un claro impulsor de la construcción el Chocón-Cerros Colorados.⁴⁷ Como Subsecretario General de la Presidencia y segundo de Repetto fue nombrado el coronel Carlos Vidueiro, dotado de una inteligencia excepcional y entrenado en los caminos de la burocracia organizacional, más tarde este entrenamiento lo pondría en conflicto con toda la administración pública.⁴⁸ Roberto Roth⁴⁹ en la Subsecretaría Legal y Técnica, Mario Díaz Colodrero en la Secretaría General de Gobierno, Federico Frishknecht en la Secretaría de Prensa y Rizzieri Rabboni en la Subsecretaría Administrativa completaban el círculo íntimo y de influencia sobre el Presidente.⁵⁰ Estos hombres tenían –la mayoría de las veces– más poder que los ministros y decidían, en consecuencia, la suerte de sus proyectos. Fiel a su asepsia administrativa dejó en claro en una directiva que los oficiales que ocuparan cargos de gobierno debían regresar a sus destinos militares o pedir el retiro de las Fuerzas Armadas. Hubo unas pocas excepciones a esta regla y fueron aquellos cargos que estaban pensados como militares por naturaleza: el Jefe de la Policía Federal, general de división Mario Fonseca; el Secretario del Consejo Nacional de Seguridad (CONASE) general de división Osiris Villegas y uno o dos cargos más ligados a la Casa Militar. Sin embargo el Presidente no pareció tener mucha urgencia en nombrar a los gobernadores provinciales restantes ni otros cargos a nivel de gabinete nacional. Una explicación a la

demora podría ser que –en apariencia- el día elegido para el golpe lo habría tomado por sorpresa y a sabiendas que el Presidente era poco afecto a recibir presiones, es posible que no haya habido tiempo para hacer las consultas necesarias, sobre todo teniendo en cuenta que el golpe había contado con un fuerte apoyo civil y todos estos sectores reclamaban el control de una parte de la estructura del Estado: esa era la recompensa. Sin embargo, aquellas demoras y tribulaciones en la asignación de los cargos, pudieran significar –para los ciudadanos más avezados- el inicio de una duda acerca de si esta rebelión sería también una revolución.

Con la sanción de la nueva Ley de Ministerios (Ley 16.956 del 23 de setiembre de 1966) estos tendrían a su cargo la formulación de las políticas, pero la operación diaria de los diversos sectores quedaría a cargo de las Secretarías. Se eliminaron también las tres Secretarías de las Fuerzas Armadas y sus funciones quedarían a cargo de los Comandantes en Jefe de cada arma, pero, el Ministro de Defensa fue nombrado recién a fines de 1966, interinamente estaba a cargo de la cartera el Canciller Costa Méndez y, el Presidente, tenía contacto directo con los comandantes que actuaban como subsecretarios ad-hoc. El Sistema Nacional de Planeamiento y acción para el Desarrollo fue otra ley fundante que modificó la estructura y las funciones de gobierno, estableciendo el rol del Presidente y los funcionarios clave a nivel nacional, provincial y municipal en el proceso de planificación.⁵¹ La última ley que modificaba las estructuras del Estado fue el Estatuto Nacional de Defensa que vinculaba el desarrollo con la defensa nacional y definía –al igual que la anterior- las agencias y funcionarios clave para el sistema de defensa.⁵² Las agencias aludidas eran el CONASE, la Comisión Militar –constituida por el Presidente, el Ministro de Defensa y los tres Comandantes en Jefe- que planificaría las estrategias y operaciones militares junto con el Estado Mayor conjunto- y el Centro Nacional de Inteligencia.⁵³ En el Estatuto de la Revolución ya se autorizaba el empleo de las Fuerzas Armadas para casos de conmoción interna, disturbios, asonadas y desastres naturales, ellas podrían restaurar el orden interno y establecer zonas o territorios bajo el control militar, reconociendo así el papel que les cabría en el futuro para combatir las amenazas al orden interno. Pero el Presidente estaba decidido a mantenerse fuera de la influencia de las Fuerzas Armadas y a considerar a su gobierno, no como surgido de un acto de fuerza, sino de un consenso cívico y así asemejarse a un gobierno civil sostenido por el apoyo popular y con una amplia participación comunitaria, como lo evidenciaba el hecho de que nunca necesitó recurrir al estado de sitio.⁵⁴ Onganía quería dar a su gobierno una estructura funcional-militar dentro de la cual él obrara como un comandante en jefe asesorado por un estado mayor. Un comandante –de acuerdo con las tradiciones castrenses- no puede tener bajo sus órdenes directas a más de cinco divisiones. Y son cinco los Ministerios que ha implantado el nuevo régimen. Una inspección más profunda de los documentos y declaraciones, oficiales y oficiosas emitidas por la Casa Rosada, concuerda con este disciplinado esquema. Pero, a menudo, todas esas declaraciones y documentos

parecen ocultar una falta de planes precisos, de programas maduros; la tendencia al lenguaje retórico y de entonación militar, es una característica del Gobierno y acaso provenga de aquella indefinición en la cúpula. También de la falta de un ideólogo que encarne y encause la filosofía revolucionaria, todavía ingenua y contradictoria. Pero, ese ideólogo no es el hombre que intento equiparar la cadena de mando de un cuartel con la compleja administración de un país.

4.1.6 Las primeras fricciones. El fin del principio.

En la segunda semana de julio Onganía le había comentado a su amigo y camarada – durante una cena en Olivos- el general Osiris Villegas, por entonces jefe del V Cuerpo de Ejército, su decisión de observar y esperar los resultados de su equipos de gobierno: *“este es un gabinete piloto”* dijo. De ahora hasta fin de año *“se sabrá quienes están con la revolución y quienes guardan un as en la manga o especulan con el poder”*. Onganía utilizará esos primeros seis meses para experimentar a sus hombres y estimaba que el verdadero despegue tendría que producirse a partir de enero de 1967. La clave podría ser: el Presidente quiere experimentar a sus colaboradores, pero –en una suerte de doble examen- sus colaboradores también quieren ver a donde los llevan los nuevos rumbos. Los altos mandos del Ejército habían definido así la dinámica del nuevo gobierno: *“Las Fuerzas Armadas no actuarán por sí, sino a través de administradores que serán, en todos los casos, funcionarios civiles. Como en las sociedades anónimas, los dueños del capital no tienen porqué tomar directamente la conducción; pueden delegarla en un grupo de administradores que cumplan con las directivas generales; si los administradores andan bien se los confirma, si no se los releva”*. Pero no percibieron que los cambios de gabinete no son una salida que pueda emplearse todos los días, tampoco entendieron que el país no era una sociedad por acciones y, mucho menos, que no eran los *dueños del capital*.

Los lineamientos sobre *políticas del gobierno nacional*, dados a conocer a principios de julio, fueron enunciativos y generales, marcaban las grandes direcciones, pero no bajaban a las directivas ejecutivas concretas. Como ejemplo, en la conducción económica se decía que había que preservar *“la iniciativa, las energías y las libertades individuales”* pero luego, en sus instructivos se demostraba hasta qué punto se desconfiaba de la libre empresa. En general, los documentos no abundaban en mayores precisiones. Salimei, superministro de Economía y Trabajo, a pesar de los tres meses y medio de entrevistas diarias con el Presidente no pudo comprender cuáles eran sus directivas concretas para la acción. Sus asesores –todavía en proceso de nombramiento- no admitían y no entendían, como un gabinete económico carecía de un plan adecuado a las directivas políticas. Hubo que rastrear las intenciones en las declaraciones realizadas por el Ministro Salimei a una publicación internacional (no

había declaraciones a la prensa nacional): "Nos preocupa primordialmente el presupuesto nacional. Para nivelarlo y atacar el déficit hay solo dos métodos, aumentar los ingresos o disminuir el gasto. Algo de las dos cosas haremos".⁵⁵ Sin embargo, la realidad indicaba todo lo contrario, no solo no se aumentarían los ingresos, sino que lo que sí aumentaría sería el gasto. El pago de los salarios del sector público y la ayuda indispensable a las provincias durante el mes de julio (se había decidido no cortar con esta ayuda federal) hacia ver a algunos observadores –y también al Ministro- que el déficit de más o menos 80 mil millones de pesos no sería compensado con recursos genuinos: una emisión de ese monto sería inevitable. En los últimos días de junio el BCRA ya había anticipado a la Tesorería vía anticipos unos 18 mil millones.⁵⁶ El BCRA también colocó a fines de julio títulos por otros 12.5 mil millones de pesos. El Ministro –montado en un proceso que no controlaba- no tendrá más remedio que atender a las necesidades del país en lo que queda del año: la disciplina financiera comenzaría recién en 1967 cuando se presente a consideración un presupuesto nacional sobre bases propias. Salimei ya no estaría allí. Pero algo en lo que la realidad no desmintió al Ministro fue cuando afirmó: "Normalizaremos nuestras relaciones con el FMI y el mundo financiero" aunque quizá convenga recordar que las relaciones con el FMI nunca se interrumpieron y hasta habían llegado a ser cordiales en los últimos tiempos de la administración Illia. La Argentina no apeló a ese organismo en la medida en que estatutariamente pudo hacerlo cumpliendo ciertos compromisos de disciplina monetaria. El gobierno anterior ya había decidido el aumento de la cuota con el Fondo y ya tenía media sanción legislativa. A esto sin duda se refirió el Ministro. Con ese paso, la Argentina pasará de una cuota de 280 millones dólares a otra de 350 millones, de los 70 millones que debía aportar, el 75% era en moneda nacional y el otro 25% debía ser aportado en oro. Esto constituía una fuente potencial de recursos para atender necesidades derivadas de dificultades transitorias en la balanza de pagos. El Ministro –con esta perspectiva en mente- postergará decisiones vinculadas al mercado cambiario para cuando se consolide el nivel de reservas adecuado: nos referimos a la pospuesta liberación cambiaria. Otras preocupaciones del Ministro parecían ser: el arreglo con las dos empresas petroleras que no se habían allanado a los acuerdos extrajudiciales (Pan American y Cities Service) que eran las que mayor capacidad de extracción tenían; la aprobación del convenio de garantías de inversiones⁵⁷ con los Estados Unidos y la posible abolición del régimen del salario mínimo, vital y móvil.

En octubre las críticas comenzaron a aparecer. El generalato, a través del Estado Mayor del Ejército, hizo conocer sus dudas sobre el manejo de los temas sociales y económicos –sobre todo en la demora del tratamiento de la racionalización administrativa- cuestionando la actuación del funcionariado en estos tres meses, en esta posición lo acompañó la Marina. También cuestionó la gestión del Ministro Salimei; el cargo era que su secretario de Trabajo –José Tamboranea- participaba demasiado en la interna sindical, tema frente al cual los Comandantes en Jefe

pretendían mantener estrecha vigilancia; otro asunto sensible para los comandantes era el problema de la Universidad al que pretendían dar solución rápidamente, aunque eso significara regresarle la autonomía.⁵⁸ Con estas críticas en mente Onganía convocó el 4 de octubre a una reunión con los dieciséis máximos oficiales de las tres fuerzas y los confrontó con Salimei y Tamboranea. La consecuencia de la reunión fue la renuncia de Tamborenea⁵⁹ y la instauración –en su lugar- del nuevo Secretario de Trabajo sugerido por el Ejército: Rubens San Sebastián un hombre conocedor de la burocracia de la Secretaría y con buen manejo en el ámbito sindical. Con esto el generalato suponía al menos poder participar de las decisiones en el mundo del trabajo.⁶⁰ De paso, Onganía se deshizo del general Pistarini como comandante en Jefe del Ejército⁶¹ y nombró en su lugar al general Julio Alsogaray, esta maniobra no fue afortunada: despidió a un general profesional para instaurar a otro con fuertes aspiraciones ideológicas en la participación en las políticas.⁶² Su hermano el ingeniero Álvaro Alsogaray –ahora Embajador en los Estados Unidos- era un liberal ultramontano que proponía –al contrario de los gradualistas que estaban a cargo del área económica- la inmediata instauración de su Economía Social de Mercado y, como tenía interesante influencia en el ala liberal del gobierno, se ganó el exilio dorado como embajador en el país del norte.⁶³ De hecho produjo un fuerte incidente con el presidente del BCRA –Felipe Tami- un estructuralista que, desde ese organismo intentaba instalar algunas ideas heterodoxas en la conducción económica que algunos bautizaron como “*Proyecto Tami*” (ver nota N°3) a pesar que este funcionario contaba con cierta anuencia y simpatía por parte del Presidente; pero el ataque era en realidad un tiro por elevación para el Ministro Salimei.⁶⁴ En el anunciado discurso del 7 de noviembre el Presidente intento retomar la iniciativa - *-el 7 de noviembre vamos a poner en marcha al país había anticipado-*⁶⁵ anunció allí, entre otras cosas, lo que llamó la liberalización del mercado de cambio. Su ministro Salimei lo llamó “*ajustación del peso a su valor real*” y los círculos financieros lo llamaron simplemente: devaluación.⁶⁶ El *Economic Survey* –que prefirió aparecer un día más tarde para elaborar la noticia- interpretó cabalmente la opinión de la City: “*nadie esperaba, naturalmente, una liberación total y completa del mercado de cambios. El Presidente de la Nación fue bien claro en su formulación en cuanto a la vigilancia que continuaría ejerciéndose sobre las operaciones. Pero las medidas adoptadas y aún la propia terminología de las circulares del Banco Central se inspiran, inopinadamente, en una política distinta*”⁶⁷. Las medidas adoptadas eran –en definitiva- el establecimiento de una nueva paridad cambiaria fluctuante entre los 245 y los 255 pesos, es decir, una devaluación del 16% y una mayor flexibilidad para la transferencia de divisas originadas en ganancias del capital extranjero. Advertido de las diferencias entre lo expresado en el discurso y lo reglamentado por el BCRA, Salimei –en una conferencia de prensa del día 9 de noviembre por la noche- pretende explicar que las medidas adoptadas en el mercado cambiario estaban en el camino de una progresiva liberalización: “*para liberalizar el*

mercado cambiario, primero se debe adecuar la moneda a su valor real que ahora hemos establecido, entre los 245 y los 255 pesos por dólar. Y la liberalización está en relación directa con la entrada y salida de capitales, trámite que facilitó la circula 311 del Banco Central” dijo⁶⁶. Algunos observadores de la City concluyeron: alguien se equivocó. Si era tan evidente que el mercado cambiario no podía liberalizarse totalmente por falta de un nivel adecuado de reservas en el BCRA, entonces ¿Quién se equivocó? ¿Se habían equivocado las autoridades económicas al instrumentar las medidas de orientación progresiva hacia la liberalización o el redactor del mensaje presidencial al dar a entender que se iba más lejos? ¿Qué necesidad había de anunciar expresamente la nueva paridad cambiaria? Si el BCRA hubiera salido a comprar y vender a esos niveles sin anunciarlo, la plaza cambiaria hubiera sabido igual a qué atenerse y la opinión pública se habría enterado más lentamente sin observar las contradicciones. El resultado del enredo fue un ministro desubicado frente a los hechos consumados y los rumores sobre su fulmínea salida del gabinete. La consecuencia: dos economistas muy reconocidos, ambos embajadores con importantes destinos; uno en Ginebra ante el GATT –Adalbert Krieger Vasena- y el otro ante Washington –Álvaro Alsogaray- regresaban al país y no por casualidad.

La desorientación de Salimei⁶⁹ –jaqueado por todos los flancos- acerca de qué hacer con la economía, las políticas aplicadas al sector portuario, azucarero y ferroviario y –a principios de diciembre- las circunstancias del alejamiento del general Pistarini como Comandante en Jefe del Ejército eran incongruencias que habían tenido la virtud de dejar descontentos a todos. Mil novecientos sesenta y seis cerró con un nulo crecimiento del PBI y una caída en la tasa de inversión interna, la escasa devaluación no mejoró los guarismos de la balanza de comercial y tampoco la de pagos; la inflación continuó al ritmo heredado de la anterior administración y el alza de precios –denunciada a dúo por el gobierno y los sindicatos- reactualizó disposiciones sobre precios máximos y sanciones a empresas.⁷⁰

En tanto, el movimiento obrero organizado –en distintas entidades- no renunciaba a su política de dialogo con el gobierno y, mientras se intervenían algunas entidades y se devolvía la personería a otras, se dictaba la Ley de Arbitraje Obligatorio y se intervenían las cajas de jubilaciones, trató de regularizar su dirección convocando a un Congreso Ordinario Normalizador. Hasta entonces la central obrera se encontraba bajo el gobierno de un organismo provisorio presidido por Francisco Prado (ver punto 4.1.2). Ante la convocatoria el gobierno decidió enviar cinco veedores para verificar el padrón de afiliados y establecer la representación al Congreso. El informe de los veedores arrojaba cómputos distintos a los proporcionados por los sindicatos, este no era un tema menor porque alteraba el número de delegados enviados al Congreso por los gremios.⁷¹ Entre los grandes gremios los metalúrgicos se alineaban en el “vandarismo”, los mercantiles conformaban el núcleo de los independientes, ATE se inspiraba en el

“alonsismo” y FOTIA y marítimos integraban los “no alineados”. En agosto entraron en una ardua negociación los convenios colectivos de dos grandes gremios –Textiles y Metalúrgicos- que, por su conflictividad produjeron amenazas de huelga; el gobierno terminó arbitrando el conflicto en busca de soluciones de justicia social, el resultado fue que el empresariado quedó con la impresión de haber perdido la partida.⁷² El 20 de octubre de 1966 comenzó el Congreso Ordinario de la CGT con la presencia de 549 delegados y sin la presencia de los sindicatos nucleados en las 62 *organizaciones de pie junto a Perón*.⁷³ El fracaso de la reorganización del movimiento obrero y los vaivenes de la política gubernamental sumieron a la jerarquía sindical en una crisis, cada vez más honda, que se prolongaría más allá del gobierno de Onganía. Las contradicciones no era pocas: la tendencia paternalista del gobierno intentando unificar a los sindicatos en una CGT subordinada a su control y buena parte de la burguesía clamando por la derogación de la Ley de Asociaciones Profesionales y la instauración de la “libertad sindical”; estas ambigüedades generaron el desconcierto –ya comentado- en la central obrera y se comenzó a mostrar que la clase obrera y ciertos sectores de la clase media –a pesar de los esfuerzos paternalistas- aparecían como perdedores netos del modelo. El creciente problema de la credibilidad de las bases, la aparición de poderosos movimientos de oposición en el seno de los sindicatos y el problema de las divisiones internas, fueron los rasgos que pusieron al movimiento obrero en una crisis de identidad que tardarían en superar.

Menos de seis meses después del golpe el gobierno aparecía errático, desorientado, ajeno a la sociedad y solo sostenido por un poder militar con claros signos de impaciencia. ¿Cuáles fueron los factores que confluyeron para que –a apenas seis meses de su inicio- se generara la desilusión y el temprano descredito en la gestión del gobierno de Onganía? En un breviarío de estos pocos meses podemos individualizar: a) tendencias ideológicas y confrontación de intereses en pugna sin resolver al inicio del régimen: la pelea por el control entre liberales-tecnoburócratas, nacionalistas-desarrollistas y los enrolados con el sesgo paternalista y seudopopulista generaron un desconcierto que no fue arbitrado por el Presidente; b) arbitrariedad en las decisiones administrativas y violencia innecesaria aplicada en su instrumentación; c) una sobrevaluada autoconsideración sobre el poder político del régimen; d) un pobre conocimiento de la realidad del país y –como consecuencia- una mala evaluación de las medidas; e) la desafortunada intervención a las universidades –con una instrumentación inconsulta, muy autoritaria y violenta- malquistó de entrada a la *intelligentzia* con el régimen innecesariamente; f) una de las bases del régimen -su política económica- fue errática e inconsistente como consecuencia de la confrontación de ideologías e intereses mencionados en (a), y el completo fracaso –por su equívoco modo de ejecución- de las políticas de racionalización administrativa; g) la tendencia del Presidente a dejar en manos de sus secretarios y ministros la toma de las decisiones, unido a sus propias cavilaciones por su desconocimiento de la realidad

conspiraron contra su autoridad, asentando este principio solo sobre la autoridad en sí misma y resignando el consenso y reconocimiento que es su verdadera base; h) la desconcertante relación con el movimiento obrero organizado privó al régimen de un sustancial apoyo, y, finalmente; i) la soledad social en que flotaba la noción de “comunidad organizada” acoplada a la idea de la racionalización administrativa del Estado como ordenadora de la sociedad y posibilitadora de su organización comunitaria.

La caída en la popularidad de Onganía fue vertical, carecía de apoyo en la sociedad civil y contaba con un apoyo condicional del Ejército que ya no controlaba porque había malversado el cheque en blanco que le habían otorgado en junio. Era tiempo de abandonar el modelo de comunidad organizada y escuchar al ala liberal con su vocación democrática constitucional enfrentada a la idea corporativa. No era la idea reemplazar al Presidente, el costo del reemplazo hubiera sido mucho mayor que su dudosa utilidad, además de crear una grieta peligrosa en la unidad de la fuerza. Así que había que encontrar las bases de acomodamiento manteniendo a Onganía en la Presidencia con un vacilante apoyo condicionado. Se abrió entonces el proceso de sucesión en el ministerio clave, el de Economía y Trabajo. De los tres nombres más importantes mencionados desde hacía un tiempo, el de Moyano Llerena ya había sido borrado de la lista porque el Presidente no le perdonó el desdén con que declinó el cargo que le había ofrecido en el Consejo de Desarrollo. Álvaro Alsogaray no era alternativa para el Presidente porque participaba activamente en la política, de hecho lideraba una agrupación de carácter político, además era hermano de un general del Ejército, justamente su Comandante en Jefe (ver nota 63). En cambio, Onganía estimó la disposición con que Krieger Vasena había aceptado un cargo relativamente menos importante, la Embajada ante el GATT. Krieger era un hombre de una personalidad definida, poco altisonante, de contactos de primer nivel en el mundo financiero internacional, un intelectual de prestigio con sólida formación profesional. Así, Krieger Vasena –un liberal atenuado sin fundamentalismos y de un claro pragmatismo- asumió el control del poderoso Ministerio de Economía y Trabajo, una superestructura burocrática sobre la que se sustentaba toda la actividad económica y social del país.

4.2 El segundo comienzo y las tensiones ideológicas.

El jueves 29 de diciembre, exactamente seis meses después de haber jurado como Presidente, Onganía cerraba la primera etapa de su gobierno: con las cuarenta dimisiones en su poder el gabinete acababa de renunciar en pleno. Al cabo de estos seis meses de gobierno, solo la figura del Canciller Nicanor Costa Méndez aparecía sin mácula en virtud de un acertado y sensato manejo de los asuntos en su órbita. Los vespertinos del viernes 30 de diciembre ya pudieron anunciar los cargos ministeriales

más importantes luego de dos días de rumores y acertijos. La confirmación – como era previsible- de Costa Méndez en Relaciones Exteriores y Roberto Petracca –buen amigo del Presidente- en la cartera de Bienestar Social; el nombramiento de Guillermo Borda –hasta entonces juez de la Corte Suprema- al frente del Ministerio de Interior y de Adalbert Leslie Krieger Vasena en la poderosa cartera de Economía y Trabajo, a quien se le comunicó su nombramiento en Ginebra, su destino diplomático. La reforma del gabinete había dejado relativamente conformes a los altos mandos y al Presidente lo había oxigenado lo suficiente para recuperar la iniciativa en su gestión. Era la mejor conclusión posible, la misma a la que había llegado el propio Presidente: la posibilidad de que lo abandonaran sus colaboradores más competentes, la desesperanza de numerosos sectores del país ante la escuálida obra de gobierno, la atonía hecha de improvisaciones, desaciertos y rencillas internas convirtieron al sexto mes del golpe de Estado en un callejón con una única salida: el cambio de hombres, y una sola meta: la conducción ordenada y coherente del proceso revolucionario. El mensaje del Presidente el viernes 30 de diciembre fue solo una pieza de circunstancia, otro ataque al pasado reciente, otra reiteración de promesas. Pero, esta vez, el Presidente había sido un poco más amplio y flexible ; aún cuando defendió la disolución de los partidos políticos, rescató la personalidad de los políticos, sus méritos anteriores y su derecho a participar del proceso, dijo: *“El gobierno no va a producir nuevas divisiones.....No existe el pretendido corporativismo”*. Pero el cheque en blanco no se renovó y su autoridad – si bien no discutida- ya había bajado del Olimpo. En este juego de ganadores y perdedores desatado por las contradicciones internas de la primera etapa del régimen Salimei se fue como había llegado: sin proyecto ni plan y tan desconcertado como siempre estuvo.

4.2.1. La propuesta comunitarista o las organizaciones intermedias.

Pero, vale detenerse en el caso de Martínez Paz – ahora ex Ministro de Interior- quien sí se llevó un proyecto y un plan del que no fue su ideólogo sino su encomendado ejecutor: *la formación de las organizaciones intermedias de la comunidad para promover la participación de la ciudadanía en la orientación de la vida política*. Esta inédita experiencia política basada en organizaciones comunitarias intermedias constituía un intento de generar –a través de los sectores básicos de la comunidad- una nueva representación democrática excluyente de los partidos políticos tradicionales consagrados por el ideario constitucional republicano de la tradición liberal. Este proyecto de organización política no fue pensado por Onganía y mucho menos por su ministro saliente, sino que fue lanzado inmediatamente después del 29 de junio y era acorde con los objetivos propuestos por los documentos fundacionales de la Revolución Argentina y coherente con la consigna del *cambio de estructuras* una de las bases conceptuales del régimen y del propio Presidente en la decisión de liquidación

de la partidocracia. El rechazo y desarticulación de este proyecto por parte de los políticos y sus partidos parece natural porque ellos eran sus víctimas, pero, lo fue menos que hayan disentido con él las entidades empresarias y sindicales y otras organizaciones sectoriales o los propios altos oficiales de las Fuerzas Armadas que parecían destinados a cooperar con este tipo de organización política. Los teóricos del gobierno insistieron durante los primeros seis meses en apuntalar el proyecto comunitario bajo la forma de *promoción de la comunidad* y el propio Presidente creó una Secretaría de Estado (la Secretaría de Promoción y Acción Comunitaria) al efecto a cargo de Roberto Gorostiaga en consonancia con el apoyo de la Iglesia Católica que lo consideraba una variación del *comunitarismo católico y del cursillismo*. Para los teóricos, el *comunitarismo* bien podía ser la forma de democracia representativa que recomendaban los *Objetivos de la Revolución* para corregir las deformaciones políticas existentes. La primera mención de un Estado comunitario fue deslizada el 4 de agosto de 1966 –a poco de iniciar su gestión- en un discurso del Presidente en el que adjudicó al Ministerio del Interior la tarea de *“promover la participación de la ciudadanía en la orientación de la vida política a través de las organizaciones de la comunidad”*. *“El gobierno –aclaró luego Onganía- está estudiando la creación de un sistema de comunicación que permita a los distintos sectores expresar sus puntos de vista en la elaboración de planes y programas”*. Pero: ¿Buscaba el Presidente el apoyo ofrecido por las organizaciones sociales – no por los partidos políticos- bajo la forma de representantes de las fuerzas vivas? Enrique Martínez Paz se ocupó un mes después de aclararlo: *“La participación de la ciudadanía en el quehacer político, a través de los sectores básicos de la comunidad servirá para reordenar una auténtica representación política democrática”*⁷⁴. ¿Cuál sería la manera de incorporar a estos núcleos sociales e impulsarlos a asumir responsabilidades de gobierno y suplantar a la partidocracia tradicional? El propio Martínez Paz lo definió –el 8 de noviembre- cuando encomendó a la Asamblea de Gobernadores reunida en el antes recinto del Senado a: *“incluir en sus elencos a los líderes naturales de sus comunidades, porque la participación de la ciudadanía dentro del proceso revolucionario debe concretarse a través de sus organismos básicos”*. *“Estarán incorporados a esta democracia quienes hagan cosas concretas para mejorar la suerte de sus semejantes. La fortaleza del Estado está en relación con la de sus grupos intermedios y con la capacidad de estos para responder al reto de las circunstancias. Corresponde también que estos grupos crezcan y aumenten su gravitación mediante la labor que desplieguen para satisfacer las necesidades del conjunto humano que encarnan. Si ha sido desterrada la vieja política, lo fue para que unidos, el Gobierno y el pueblo acometan juntos esta política nueva”* exhortó Martínez Paz el 27 de noviembre. ¿Estaba el país, en ese momento, frente a un plan político encaminado a dar sustento y representatividad popular al nuevo gobierno? Parece que sí, es lo que se deduce de las palabras del Ministro. También por las que pronunció el entonces Secretario de Promoción y Acción Comunitaria –

Roberto Gorostiaga- en aquella Asamblea de Gobernadores dijo: “*Por promoción de la comunidad se entiende el estímulo a los grupos de ciudadanos organizados para que ellos puedan asumir soluciones propias. Estos grupos cumplen un rol informativo y representativo*”. ¿Se trataba entonces de un intento de sustituir el Parlamento bicameral por una única Cámara integrada por las organizaciones intermedias de la comunidad? No, no era un intento, era una decisión. La campaña comunitaria del gobierno se dirigió a provocar el esfuerzo comunitario a través del núcleo comunal: el municipio. El 19 de diciembre el Gobernador socialcristiano de San Luis – Luis Garzo- reunió un Congreso de Municipios y Comunas provinciales que reformó la ley comunal de la provincia, otorgando a las Intendencias mayor autonomía y la posibilidad a las Comunas de acordar entre ellos la realización de programas de interés común. A un tiempo, Eladio Vázquez –gobernador de Santa Fe- inauguró un cónclave similar y forjó un Plan de Acción Comunal destinado a la asociación entre comunas menores para encarar obras que contaran con el esfuerzo de los vecinos y lo dotó con un aporte financiero de 50 millones de pesos anuales, al mismo tiempo puso en marcha la construcción de edificios públicos y la ejecución de pavimentos, plazas y otras obras públicas pequeñas; aplicó a estos fines otros 100 millones más. “*En el seno de las comunas están las fuentes de la energía creadora, del trabajo y de la cultura*” dijo el gobernador. Cualquier definición ortodoxa de lo que es promoción de la comunidad la muestra como una técnica auxiliar de la evolución económico-social despojada de atributos políticos. Es un proceso de educación social que encierra dos finalidades: capacitar al hombre para su participación libre y consciente en la estructura social a la que pertenece y –a la vez- servir como canal de participación popular en el proceso de desarrollo. Esta corriente *comunitarista* tenía su reconocido mentor en el coronel retirado Juan Francisco Guevara -de clara raigambre nacionalista- y jefe del disuelto Movimiento Nacional Comunitario⁷⁵. El coronel nacionalista proponía –con fuerza- la disminución de la potestad del Estado a favor de los sectores intermedios de la comunidad (cooperativas, municipios, gremios de base, entidades de fomento y ligas vecinales) para disipar así la *proletarización* del individuo. Las ideas de Guevara –que había sido edecán de Lonardi antes que el *putsch* liberal lo derrocara en noviembre de 1955- le inducían a desconfiar de las fuerzas económicas e ideológicas que se movían dentro del poder y preveían que el movimiento del 28 de julio corría el riesgo de malograrse, la posición doctrinaria de este coronel, su conducta y su participación personal en la Revolución, llevó a mucho a pensar que iba a tener importantes funciones en la Argentina⁷⁶. Sin embargo, el gobierno, había preferido encomendarle una misión en el exterior, pero su impronta estaba presente. En la lucha por el poder que se desarrollaba en el centro y la periferia del gobierno –entre las agrupaciones políticas que algunos llamaron “*los partidos de la revolución*”- no era extraño que los nacionalistas avanzados –partidarios de una reforma total de la sociedad- difieran de otros grupos de la misma raíz, y se enfrentaran con la tendencia libre-empresista de

Álvaro Alsogaray⁷⁷ –trabada en lucha a su vez con el desarrollismo frondicista. Y que, todos, nacionalistas, frondicista-desarrollistas, socialcristianos de sesgo estatista y liberales se sintieran parte de la revolución y con derecho a orientarla e imponer su signo al Gobierno⁷⁸. Como comprendemos, la proscripción política alcanzaba a los dirigentes que se aferraban al antiguo régimen, no a la política, una actividad permanente que proseguía aún cuando había sido clausurada su etapa comicial. La revolución del 28 de junio se dirigía hacia un rumbo cada vez más desconocido y, la gestión de gobierno parecía demostrarlo: su ineficacia, las influencias económicas que lo orientaban probaban que subsistía intacto el gobierno invisible⁷⁹ cuyo dominio sobre el régimen había inutilizado –hasta ahora- el cambio estructural del país⁸⁰. Parecía que el país entero estaba dispuesto a transformarse, pero se ignoraba bajo que ideología se llevaría a cabo ese cambio⁸¹

En el ámbito internacional esta ideología ya estaba presente, el Presidente Eduardo Frei ya había creado en Chile –por entonces- la Consejería Nacional de Desarrollo de la Comunidad y también había ganado la protesta de los partidos políticos, incluido el suyo; Frei explicaba que la participación directa de los vecinos en sus propias obras públicas evitaba que estas pudieran ser utilizadas como bandera política y liquidaba la corrupción en los presupuestos de ejecución. El método se llevó a cabo en otros países como Yugoslavia e Israel con muy buenos resultados bajo el patrocinio nada menos que de la Fundación Ford. La Comisión Católica de la Campaña Mundial contra el Hambre mantenía programas de desarrollo comunitario en varios lugares del mundo y, localmente, en Escobar, Pilar y Berisso. ¿Podía etiquetarse esto como un intento de instauración fascista? No lo parece. El sistema comunitario reduce la capacidad individual de gobierno al círculo local, abandona el poder central. A la inversa le priva de interferir en los escalones inferiores: esta idea se filtra en la doctrina de la Iglesia a través de Pio XII en la Encíclica *Quadragesimo Anno*. Este es el *principio de subsidiariedad*: no se debe quitar a las comunidades inferiores lo que ellas pueden hacer y dárselo, como tarea, a una sociedad mayor, ya que toda acción de la sociedad debe prestar ayuda a los miembros del cuerpo social, pero no destruirlos o absorberlos. El *comunitarismo* pretende rescatar al hombre de su soledad frente al capitalismo y su sujeción al totalitarismo comunista; es un término medio. No resulta extraño que haya flotado en las ideas políticas argentinas durante años, antes de que Martínez Paz se animara a anunciarlo. Un documento de la Escuela Superior de Conducción Peronista prueba esta permanencia: “*La nueva constitución justicialista asegurará la unidad y continuidad del Estado en la persona de su jefe, situado por encima de los tres poderes y garantizará una auténtica representación popular a través de las comunidades intermedias y cuerpos constituidos de la Nación. Esto supone la supresión total y definitiva de los partidos políticos que constituyeron los instrumentos de engaño demoliberal*”. La cita data de 1949, y fue elaborado durante la primera presidencia de Juan Perón. Como para ratificar la vigencia de la idea -25 años más tarde- durante su

tercera presidencia, Juan Perón presenta su Proyecto Nacional; un plan que contiene el ideario de su pensamiento político. En la base del proyecto - en su núcleo duro- se encuentra el concepto de las *organizaciones comunitarias* como un ejemplo focal de la colaboración entre los individuos con base comunal. Pero, claro está: por aquella época, Martínez Paz era un afiliado conservador.

4.2.1.1. La creación del Ministerio de Bienestar Social. La idea comunitarista, sus raíces. Los católicos desarrollistas y católicos nacionalistas. Educación y planeamiento. La influencia franquista del desarrollo tecnocrático.

El escenario de crisis hegemónica o el “empate hegemónico” (Portantiero; 1977) en el que ningún actor político podía imponer su dominación fue el que posibilitó el golpe de junio de 1966. La caída del gobierno del presidente Illia significó, no su fracaso, sino el fracaso de la totalidad del sistema de representación liberal partidaria al no encontrarse preparado para poder gestionar la crisis y actuar –funcionalmente- como un neutralizador del golpe de Estado. En este escenario de incapacidad partidaria, el *clima de época* requería la construcción de un *consenso alternativo* para la reformulación de los principios mismos de legitimidad del poder político, fundamentando la necesidad de un nuevo orden. El descrédito hacia el sistema liberal instaurado por la Constitución de 1853 comprendía a la totalidad del arco político -esta fue una de las explicaciones por las que el gobierno de las FF.AA. asumió el poder, no como una transición hacia otro gobierno civil, sino para definir el rumbo del Estado en todos sus niveles: educación, cultura, relaciones exteriores y economía para encaminarse –según su ideario- a la búsqueda de nuevos consensos sociales que reemplazaran a la *representación partidaria* con la idea rectora de propender a la modernización y al desarrollo económico y social en un intento de destrabar aquella crisis hegemónica en la que estaba empantanado el país. La suspensión de la Constitución de 1853 y su reemplazo por el Acta de la Revolución dió carta blanca para diseñar un Estado a voluntad. Es, justamente, en el área de la política social donde se da –con la excepción de las transformaciones sociales del primer peronismo- una innovación en la estructura del Estado con la creación del Ministerio de Bienestar Social, un organismo sin precedentes hasta ese momento⁸². La gestión de este Ministerio estuvo –durante el gobierno de Onganía- sucesivamente a cargo de Rodolfo Petracca (junio 1966 a enero 1967); Julio E. Álvarez (enero 1967 a marzo 1967)⁸³ Conrado Bauer (abril 1967 a junio 1969) y, finalmente, Carlos Consigli (junio 1969 a junio 1970). El ministerio se conformó en base al antiguo Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública del que recibió la estructura burocrática; contaría con tres secretarías preexistentes; Salud, Vivienda y Seguridad Social y una cuarta nueva área, la Secretaría de Estado de Promoción y Asistencia a la Comunidad (SEPAC)⁸⁴. Un dato significativo es que –diez días antes del anuncio del nuevo esquema ministerial- se decidió la creación del MBS en el ámbito de

la provincia de Buenos Aires, pero a diferencia del nacional, este no contó con una Secretaría análoga a la SEPAC⁸⁵. De este modo cobra relevancia la asociación –en el nivel nacional- entre el proyecto *comunitarista* de la sociedad en la SEPAC y la presencia de los cuadros católicos. En general, las lecturas clásicas sobre el tema (O'Donnell, 1982) del *nacionalismo* en el gobierno de Onganía, no distingue vertientes identificadas con el catolicismo, pero en la oposición *liberales-nacionalistas católicos* se pierde la visión al interior de cada categoría, para esto hay que observar con detenimiento a los diferentes grupos que se identifican públicamente como católicos, sean liberales, nacionalistas, peronistas, democristianos, desarrollistas o militaristas; pero esto no significa que lo religioso no esté presente en otros grupos aparentemente secularizados. Algunos referentes del *liberalismo económico* de la época como: Álvaro Alsogaray, Krieger Vasena o Martínez de Hoz, eran también católicos practicantes aunque no adscribieran al *catolicismo integral*. Algunos trabajos –de tinte periodístico- interpretan que el golpe de Estado de junio de 1966 habría sido impulsado –casi exclusivamente- por el *partido secreto católico* que estaría compuesto por: la *Cité Catholique*, los *Cursillos de la Cristiandad*, la revista *Verbe* y la *Obra de Cooperadores Parroquiales de Cristo Rey*, entre otras⁸⁶. Es necesario revisar las heterogéneas vertientes de las que proviene el funcionariado de Onganía, entre las más importantes están las recién mencionadas y múltiples grupos y personas provenientes de la Democracia Cristiana. Varias figuras importantes participaron de más de uno de estos espacios, pero no hay que confundirlos, ya que diferían tanto en su organización como en su proyecto político. Por lo tanto no se los puede mezclar como integrantes de una misma red católica y se los debe tratar como grupos autónomos con núcleos propios organizativos e ideológicos. Así, en el control de los cargos del gabinete nacional, en el relevo de diciembre de 1966, los *ateneístas* reemplazaron a los vinculados con *Ciudad Católica*⁸⁷. Y esto no implica un enfrentamiento entre ambas fracciones, sino más bien el fracaso de los grupos católicos más tradicionales e intransigentes ante la imposición de un catolicismo moderno y más permeable al diálogo y concesiones frente al liberalismo. Más adelante se iría dando un proceso de conversión ideológica de lo que podría llamarse un nacionalismo oligárquico a un nacionalismo popular y de un catolicismo integrista a un cristianismo comprometido.

Para Floreal Forli y Luis Roggi⁸⁸ era un exceso atribuirle a la *promoción de la comunidad* un carácter exclusivamente político, temían que los tecnócratas o economistas la utilizaran al solo efecto de conseguir un desarrollo material, ya que el desarrollo comunitario es un *método educativo* en el sentido más moderno e integral, es decir, enriquece *espiritualmente* al hombre porque todas sus acciones están marcadas por un objetivo: su mejor desenvolvimiento en la comunidad. Pero Argentina no tenía comunidades fuertes, no tenía la tradición europea de gran vitalidad municipal emanada de siglos de autonomía. Si se quería implementar el *comunitarismo*, había que realizar una acción destinada a echar las bases para iniciar en el país la etapa de las

comunidades. El coronel retirado Juan Francisco Guevara –jefe del Movimiento Nacional Comunitario a quien ya nos hemos referido- impulsor y sostenedor de esta ideología en los inicios del régimen sostenía que, para echar las bases comunitarias en el país, la responsabilidad no debía estar en manos de un Estado todopoderoso ni en las de unas pocas, gigantescas organizaciones, sean ellas monopolios capitalistas o sindicales. Las comunidades, los grupos intermedios que ya existían, debían funcionar institucionalmente a fin de hacer posible la conformación de una estructura distinta de la existente. Los *cuerpos intermedios* debían vincularse entre sí horizontal y verticalmente. La *vinculación horizontal* reunía a los interesados en cada plano, en comisiones de contacto bajo la supervisión de autoridades; de esta manera se impediría que los fuertes absorbieran a los débiles. Mediante las *organizaciones verticales* se vertebraban los diversos cuerpos desde las entidades municipales a las cámaras nacionales. El factor característico era la *despersonalización en beneficio de la identidad comunitaria*. Así, los Consejos Deliberantes pasarían a representar al conjunto de asociaciones locales y esto permitiría –desde las bases- plantear una alternativa orientada a prescindir de la organización partidaria tradicional. La suma de organismos comunitarios, podría arrojar a nivel nacional, una suerte de Senado con facultades resolutorias. Y esto es lo que, justamente, proponía Guevara: la incorporación de todas las asociaciones o comunidades –tanto de oficios como de profesiones- en un *Consejo Nacional* y estos cuerpos deberían encuadrarse en un Estatuto de Derecho Público que delimitara responsabilidades. Para Guevara, los planes comunitarios del gobierno eran democráticos y no había *ninguna posible confusión con el fascismo*, que es una reacción autoritaria contra el liberalismo; este coronel retirado –adalid de este ideario- reconoce sus raíces ideológicas en Jaime María de Mahieu, un sociólogo francés que descreía del fascismo, había sido profesor de la *Escuela de Altos Estudios Corporativos* durante el régimen de Pétain y se había afincado en Argentina poco después del retorno de De Gaulle a Francia. Infatigable expositor y defensor del *comunitarismo*, se decía, que a él le debía Guevara toda su orientación comunitaria. Para Mahieu, el *comunitarismo* nada tiene que ver con el fomento de las comisiones vecinales sino que busca restablecer el orden social natural de las comunidades humanas. *El régimen de partidos –dice- es antinatural porque pone el gobierno de la comunidad a merced de asociaciones de individuos que responden a intereses particulares*, y continúa; “*Un Estado natural emana del conjunto orgánico de grupos sociales (familias, empresas, parroquias) asociados o federados en comunidades intermedias*”. Las comunidades pueden ser geo-sociales como el municipio o económico-sociales como el gremio o el sindicato o la federación de empresas, todos de una misma rama productiva; también puede ser religiosa y/o académica como es el caso de las Universidades. Para que cada *comunidad intermedia* pueda realizarse en plenitud se requieren fueros, por lo tanto, en cada ámbito, debe haber un poder legislativo y otro judicial, pero el Estado central debe mantener la autoridad suficiente para unificar las fuerzas de las *comunidades intermedias*.

Las diferencias que separan a *comunitaristas* y *políticos liberales* proviene de la polémica, separada por dos siglos, entre Charles Maurras (1868-1952) y Juan Jacobo Rousseau (1712- 1778) reconocido fundador de la *democracia representativa*. Rosseau definía a la sociedad como el producto de un pacto libre entre los hombres, una alianza destinada a que toda la fuerza común proteja a la persona, la libertad y los bienes de cada uno de los asociados. De este modo, el Gobierno, debe ser fruto de la voluntad concertada de la mayoría. Maurras cuestiona este concepto: según él, ningún hombre nace libre entre los hombres; es heredero de un capital cultural (ciencias, técnicas, bienes) y de una tradición con la que está inmensamente obligado. Entonces, su facultad de elegir un gobierno está condicionada a la porción de sus contribuciones hereditarias y personales en el torrente de la comunidad; puede gobernar en el plano de su comunidad, de su actividad únicamente. Por eso, para Maurras la democracia representativa comporta una falacia: grupos minoritarios someten a los escalones inferiores de la sociedad planes para la conducción total del Estado, algo que la mayoría de los habitantes no puede comprender porque excede el ámbito de su comunidad de oficio o profesión. De tal manera, se legaliza una pugna entre minorías políticas para determinar cuál de ellas se apropiará –por astucia o por demagogia- del poder del Estado. La solución es entonces que cada cual maneje el ámbito de su comunidad sin interferir en lo que corresponde a jerarquías superiores o inferiores. Copiándolo, el sistema comunitario reduce la capacidad individual de gobierno al círculo profesional; abandona el poder central a los ilustrados. Pero, a la inversa, le priva de interferir en los escalones inferiores.

La marcada tendencia a la planificación –propia de su tiempo- iba unida a la necesidad de controlar cualquier expresión de imprevisibilidad que pudiera marcar a la sociedad de la época, surgía así una especie de *culto a la modernización* combinada con la preocupación por la amenaza de lo imprevisto. En concordancia con ello y de acuerdo a los cánones económicos de moda en el mundo contemporáneo se estableció el *Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para la Seguridad Nacional* y la creación del *Consejo Nacional de Seguridad* (CONASE) que debía coordinar su actividad con el ya existente *Consejo Nacional de Planeamiento y Desarrollo* (CONADE). Estos organismos se definían a sí mismo como *tecnocráticos*⁸⁹. Los orígenes ideológicos de la tecnocracia pueden encontrarse en la Francia de los cincuenta y en la España de los sesenta, fuentes directas de inspiración para nuestra versión local⁹⁰. Para la definición de *tecnocracia* es bueno tener en mente que –a mediados del siglo pasado- la idea de planificación estaba más conectada con el sistema soviético que con los sistemas occidentales sustentados en la libre empresa, por esto, la *idea tecnocrática* se vinculaba más con países subdesarrollados que con las democracias desarrolladas occidentales. La excepción que confirma la regla fue la aplicación de las políticas del *new deal rooseveltiano* en los Estados Unidos y las consecuencias controversiales que produjeron sus instituciones. El problema tecnocrático es que toda sociedad humana implica un

principio de legitimidad, - la racionalidad burocrática no es un principio- y olvidan que no se puede elegir un modo de gobierno sin contar con el deseo de los hombres: es por esta razón que las nociones de planificación y tecnocracia asociadas a la idea de desarrollo económico están siempre vinculadas a regímenes autoritarios o a democracias de baja intensidad. Sin embargo, Karl Polanyi⁹¹, entendía que el sistema autoregulado del mercado era responsable de los cataclismos económicos capitalistas y que –justamente por eso- creía que era necesario planificar las economías de mercado con el fin social de salvaguardar la libertad del hombre y su progreso y reconocía la necesidad de una actividad reguladora del proceso económico. Para ello, postulaba la conservación de los factores positivos del liberalismo económico en lo que se refiere al equilibrio presupuestario y la estabilidad del crédito, ejes de la acción reguladora del proceso económico que debía extenderse al ámbito internacional como garantía de la funcionalidad general de la economía capitalista. En esto muestra su continuidad con las tesis keynesianas en el objetivo de mantener el equilibrio de la estructura para así vigorizar los mercados con la permanente creación de empleo. De esta forma se crearía un cuadro institucional ligado al correcto funcionamiento de la economía, velando así por el desarrollo en el contexto del orden público de la sociedad, evitando que intereses de grupo repercutieran negativamente en el progreso general con la mirada puesta en el *bien común*⁹².

4.2.1.2. La SEPAC: el instituto del desarrollo comunitario.

Creada en octubre de 1966 bajo la ley orgánica de Ministerios Nacionales (Nº16.956) recién en 1968 quedó aprobada su estructura administrativa. Estaba dividida en dos direcciones generales: Promoción Comunitaria y asistencia Comunitaria. De la primera dependían cuatro departamentos denominados Servicios Nacionales. De Desarrollo de Comunidades, de Cooperativas, de Deporte, Recreación y Turismo Social y de Asuntos Indígenas. La segunda comprendía los Servicios Nacionales: de la Minoridad, de la Familia y la Mujer, de Asistencia Social, de Mutualidades y Obras Sociales⁹³. El Servicio Nacional de Asuntos Indígenas⁹⁴ tenía como misión: *“intervenir en la protección e integración de los grupos aborígenes, ejecutando las medidas que contemplen los problemas específicos de su situación social y –para ello- debería aplicar los métodos de educación social que tiendan a la afirmación de la personalidad del aborigen y a su desenvolvimiento integral, impartiendo instrucción escolar, orientación profesional (sobre agricultura, comercio e industria) para mejorar el nivel de vida de su participación activa”*⁹⁵. El Servicio Nacional de la Minoridad se proponía: *“intervenir en la protección integral de los menores que se encuentran en estado de abandono o en peligro moral o material o afectados por situaciones conflictuales, actuando sobre estos en forma individual y en grupos dentro de la comunidad, asegurando su mayor bienestar social”*⁹⁶. En tanto, el Servicio Nacional de la Familia y la Mujer, tenía como objetivo: *“intervenir en*

*la protección de la familia y de la mujer, asegurando a la primera la estabilidad y la solidez que como comunidad social básica le es fundamental. Ejercer la educación de la familia para el mejor cumplimiento de su misión, propiciando en particular: a) la educación familiar en escuelas y colegios; b) la preparación para el matrimonio; c) consultorios matrimoniales; d) educación de la opinión pública acerca de las familias; e) crear procedimientos de reconciliación y brindar asistencia financiera directa a las familias y atender especialmente la reeducación y adaptación de la madre soltera, así como elevar a la superioridad los proyectos de leyes especiales relativas a la represión de nuevas formas de prostitución.*⁹⁷. La SEPAC fue pensada como una institución que se abocaría a la promoción social de sectores y regiones postergadas, trabajando en forma conjunta con la comunidad y los organismos públicos y privados y era –en definitiva- la oficina ejecutora de los *proyectos comunitaristas*. Entre los objetivos propuestos se destacaron: la creación y promoción de escuelas primarias, creación de centros culturales, mejoras en el nivel sanitario, perfeccionamiento y regulación del mercado de trabajo, mejoramiento de la distribución del ingreso, creación de viviendas dignas para impedir la formación de nuevas villas⁹⁸. Para el logro de los objetivos, era imprescindible contar con la participación activa de la comunidad, que solo se lograría satisfactoriamente con una administración descentralizada. Las funciones de los organismos centrales serían delegadas en los funcionarios locales. De este modo la comunidad local –a través de sus fuerzas sociales organizadas- tendrían un amplio poder de decisión y control para planificar y ejecutar sus propios proyectos. Esta perspectiva apuntaba a una revitalización del municipio –como núcleo duro del sistema- y al fortalecimiento del régimen federal. Las provincias se encargarían de fomentar y coordinar el desarrollo de las comunidades locales y a nivel regional trabajarían en la coordinación interprovincial para un armónico desarrollo intercomunal⁹⁹. Buena parte de las políticas formuladas por la SEPAC tendieron a desplazar la preocupación por el individuo como objeto de interés hacia la comunidad. Sin embargo, se consideró que la vitalidad de la comunidad se fundaba en el desarrollo de la individualidad y sociabilidad de sus miembros: *“esta moderna valorización del individuo nos lleva al nudo central de la promoción comunitaria. Por tal entendemos todo proceso de creación y mejoramiento de bienes y servicios, con la participación activa, directa y responsable de la propia comunidad, tendiente a su integración. Si bien el Estado acudirá en ayuda de las comunidades, tal ayuda no se volcará unilateralmente sino en acción conjunta con la comunidad. Cuanto más aporten los individuos de sus capacidades particulares y de su personalidad, tanto más rica y viva será la comunidad a la que pertenecen. Así el desarrollo de las personalidades individuales en la vida comunitaria se dará en relación directa al grado de participación y aporte al todo comunitario. Ello supone que, allí donde exista mayor grado de participación tanto más madura será la individualidad y más profunda y extensa las relaciones entre los hombres”*¹⁰⁰. Si bien lo que preocupaba era la comunidad, el punto central era la revitalización del individuo como agente

determinante para la reorganización de la estructura social a través de su participación en el desarrollo comunitario. Para lograr esto último, se propusieron cuatro pasos: el primero consistía en motivar a los individuos a partir del diálogo y la comunicación, para que tomen conciencia de las potencialidades del sentido de pertenencia a la comunidad y los beneficios del trabajo conjunto. El segundo implicaba el surgimiento de grupos naturales e instituciones representativas que canalicen la participación de los individuos respecto de los problemas de la comunidad y el alcance de sus soluciones. El tercero entendía la coordinación entre las instituciones comunitarias para determinar problemas y soluciones. Esta coordinación y agrupamiento, implicaba la formación de los *Consejos de la Comunidad* comprendidos en las intendencias municipales. El cuarto contemplaba la integración de las comunidades al orden gubernativo a través de una mayor vinculación entre los *Consejos de las Comunidades* (con facultades consultivas) y los gobiernos municipales.

Se pueden identificar –claramente- dos propuestas concretas desde la SEPAC que impulsaron el desarrollo comunitario mediante el fortalecimiento del municipio. La primera fue un proyecto de ley conocida como “*Ley de Desarrollo Comunitario*” que comenzó a formularse en octubre de 1966 e impulsó el “*plan comunitarista*”. Consistía en reunir comisiones vecinales para que identificaran las necesidades sociales y económicas de cada municipio, partido barrio o departamento y se propusieran un conjunto de soluciones a las comisiones primarias que respondían a una *Junta Central* a razón de una por provincia. Las Juntas elevarían un pliego –en tres períodos de un año- con las necesidades de cada sector. Luego un comité denominado “Comité de Evaluación de Subsidios y Subvenciones” (CESS) estudiaría las propuestas y, si coincidían en la áreas prioritarias fijadas por el gobierno central como, salud, educación, promoción y vivienda, el Consejo de Adjudicación emitiría una autorización para que el Estado distribuyera los fondos a los vecinos para que realizaran las obras públicas¹⁰¹. La segunda propuesta consistió en promover el mutualismo y el desarrollo de cooperativas, pensadas como entidades capaces de contribuir a la solución de problemas de ocupación, producción, servicios, consumo, comercialización y crédito a nivel local. Las cooperativas serían apoyadas técnica y económicamente mediante organismos de fomento cooperativo de nivel provincial, coordinando con el ente nacional respectivo la *política cooperativista* del país. La base educativa de la propuesta era que se enseñaran –en todos los niveles educativos- los beneficios de la economía comunitaria y solidaria: “*se estimulará la enseñanza en la escuela y otras instituciones, se recomendará el fomento del mutualismo y una gradual adecuación de las mutuales a un régimen integral de seguridad social. Recomendamos que las escuelas, municipios, dispensarios, parroquias, sindicatos y toda otra institución de bien público contribuyan a la activación de la comunidad dentro de sus respectivos programas*”¹⁰². Fue en este contexto que la Secretaría de Gobierno –a cargo de Díaz Colodrero- propuso reformar el sistema impositivo de las comunas, para permitir que estas pudieran asociarse formando

sociedades anónimas con capital estatal mayoritario, aportado entre la Nación y las provincias¹⁰³. El resto de la fuente de financiación debería ser generada entre los vecinos a través de la cotización de acciones y hasta podrían acudir a organismo internacionales de crédito. Esta novedosa propuesta nunca llegó a implementarse, la idea comunitaria no vivió lo suficiente.

Hacia fines de 1966, el plan comunitario impulsado por la SEPAC comenzó a extenderse en las provincias e intendencias. Onganía y Puigbó (en ese momento ministro del área) recorrieron algunas regiones marginales para promover el proyecto de organización comunitaria¹⁰⁴. La SEPAC impulsó la firma de convenios de desarrollo comunitario con los gobernadores de Santiago del Estero y Salta (generales Francisco Urondo y Héctor D'Andrea, respectivamente). El gobernador socialcristiano de San Luis –Luis Garzotorgó a las intendencias de su provincia mayor autonomía y las alentó a asociarse entre sí para el desarrollo de proyectos comunes y reunió un Congreso de Municipios donde reformó la Ley Comunal de la provincia. La misma acción realizó Eladio Vásquez en Santa Fe, creando un plan comunal para los ejidos menores. En Buenos Aires, Francisco Imaz promovió la implementación del *comunitarismo* y el *fomentismo* en varias intendencias. Creó la Dirección de Asuntos Municipales de la provincia, para asesorar a los municipios, controlar su funcionamiento e instruir a los jefes comunales sobre los objetivos del programa comunitario¹⁰⁵. En el municipio de San Martín (provincia de Buenos Aires) el intendente – coronel (R) César Fragni - dividió el territorio en doce sectores, cada uno a cargo de un delegado proveniente de núcleos de fomento, encargados de reunir los reclamos de vecinos. En Moreno, el intendente Augusto Dodero, alcanzó a delegar las facultades de recaudación de impuestos en las sociedades de fomento y destinó el diez por ciento de la tasa a la ejecución de obras públicas. El Centro de Estudios Municipales –creado en La Plata- estaba a cargo del abogado Luis Pollola, discípulo de Guevara, el cuerpo estaba constituido por economistas, abogados y arquitectos y fue una de las primeras manifestaciones de los llamados cuerpos intermedios¹⁰⁶. En la ciudad de Pergamino el intendente nacionalista Alberto Fererico de Nápoli –que había reemplazado a Ahumada, destituido luego de la conferencia de Imaz- - se encontraba vinculado a *Ciudad Católica*, creó un *Consejo de Promoción de la Comunidad* que estaba integrado por las cámaras locales de comercio, industria, agrarias, comisiones de fomento, cooperadoras escolares, cooperativas y juntas vecinales¹⁰⁷. El gobernador Imaz saludó con beneplácito la creación de este Consejo como un ejemplo de *organización intermedia* que le hacía falta al proyecto comunitario. En la provincia de Córdoba el proyecto comunitario estuvo a cargo –en una primera etapa- del gobernador Miguel Ángel Ferrer Deheza (1966-1967) y en la segunda etapa, con el gobernador Carlos Caballero (1967-1969). Se sancionó la Ley Orgánica de Municipios que institucionalizó los Consejos Consultivos Vecinales, integrados por representantes de la comunidad de los diversos sectores de cada municipio. Caballero – un católico de fuertes ideas corporativistas- favoreció la formación de organizaciones

intermedias e impulsó la creación de los *Consejos Económicos Sociales*, que nucleaba a los sectores representativos de las comunas de toda la provincia. En concordancia, sancionó la ley de Cooperación Intercomunal, que permitía la asociación de comunas y municipios para la ejecución de obras públicas de interés común. Para 1970, ya se había constituido en el país toda una red nacional de Desarrollo de la Comunidad que dependía de la Subsecretaría de Promoción y Asistencia Social del Ministerio de Bienestar Social de la Nación.

Onganía, en sus discursos, otorgaba especial significado al fomento de la participación social, al ordenamiento de la vida comunitaria y a la propia SEPAC, que, finalmente, resultó un organismo producto de una mixtura entre el corporativismo de cuño católico y el nacionalismo desarrollista. Pero, el presupuesto asignado al proyecto comunitario resultó escaso, por lo que buena parte de sus objetivos quedaron solo en la multiplicidad de proyectos presentados, aprobados y a la espera de ejecución. Las pujas al interior del poder entre *nacionalistas-desarrollistas corporativistas y liberales ortodoxos y heterodoxos* por el asunto de la modernización económica fue un tema de encuentros y disputas permanentes entre los funcionarios civiles y militares. Así, para los *nacional desarrollistas-corporativistas*, la modernización implicaba modificar la estructura del país, fortaleciendo el régimen federal a partir de una administración descentralizada que eficientizará la aplicación de los recursos propendiendo a la revitalización del régimen municipal. En tanto, los liberales, ortodoxos o heterodoxos, como ejemplo de los primeros, Álvaro Alsogaray de los segundos el propio Ministro Krieger Vasena; insistían en que la Revolución debía modernizar el aparato productivo, privilegiando la economía por sobre la política. La modernización liberal significaba: combatir la inflación, cooptar a los sindicatos y disciplinar a la naciente clase obrera combativa. Los desarrollistas-nacionalistas-corporativistas entendían que los salarios debían ser “razonablemente altos”, que se debía concretar algún tipo de distribución de la riqueza para producir un clima de bienestar social que permitiera integrar a los trabajadores a la modalidad de organización comunitaria.

4.2.1.3. Apuntes sobre la idea de democracia en el pensamiento político de los intelectuales cristianos: la polémica de dos siglos: Charles Maurras (1868-1952) – Juan Jacobo Rousseau (1712 -1778). El debate entre católicos nacionalistas y liberales en la Argentina.

La visita de Jaques Maritain a la Argentina en 1936, significó para la intelectualidad católica tanto un momento de alegría como el inicio de un doloroso debate dentro de sus filas que se prolongaría por muchos años. En aquel momento se planteaba cual era el papel que deberían cumplir en medio de la Guerra Civil Española, sin embargo, la discusión no se limitaba solo a la situación española. La discusión se tornó bastante

más profunda, lo que se ponía en duda era cual era el mejor sistema de gobierno que debía aplicarse en los países católicos. Mientras un número importante de intelectuales católicos defendían sistemas cercanos al totalitarismo y veían con agrado a Mussolini, Franco e incluso al propio Hitler, otros se oponían con vehemencia y defendían públicamente con vehemencia al sistema democrático como el más apropiado y respetuoso de la naturaleza humana. Santo Tomás de Aquino –filósofo por antonomasia del pensamiento católico de entonces- era utilizado, no solamente para las discusiones académicas sobre cuestiones metafísicas, sino también, en el plano de la política y –en su nombre- se defendían los sistemas corporativos enfrentados a la democracia liberal.

En nuestro país Rafael Pividal¹⁰⁸ fue uno de los más fervientes seguidores de Maritain en la década del treinta. Escribe artículos para la revista *Criterio* en defensa de la posición maritainiana frente a lo que él llama totalitarismo nacionalista. Pero, la posición que él y los suyos sostienen en *Criterio* en defensa de la democracia liberal resultó – para la época- minoritaria y poco después dejó de publicar en la revista. Siguiendo el esquema de Maritain, Pividal afirma que es posible distinguir tres momentos dentro de la historia social de Occidente luego de la llegada del cristianismo. El primer momento se asocia con la Edad Media –luego de la caída del Imperio Romano y en medio de una gran disolución social- la Iglesia asumió la misión de formar la estructura política; así organizó a la sociedad y estableció un orden cristiano: aquí hay una perfecta concordancia entre la fe y la estructura política. Lo político aparece como un ámbito que había sido hecho por lo religioso y lo temporal era un instrumento de lo espiritual. El segundo momento es lo que se llama la Modernidad, el orden social deja de ser establecido por la Iglesia y, en cambio, lo político empieza a ser configurado exclusivamente por las fuerzas humanas sin ninguna apertura a lo sobrenatural. Esto es lo que ha sucedido en los últimos siglos, pero Pividal –al igual que Maritain- creía que esto estaba llegando a su fin. Según su lectura de la Historia, la Modernidad, cerraba al hombre sobre sí mismo y ahogaba su deseo de trascendencia, era un callejón sin salida. Es en este marco general que se inserta la transformación social y el paso a un tercer momento histórico. Ahora que la política tenía cierta autonomía, y al mismo tiempo tenía que reconocer que no podía ser autosuficiente, era posible pensar en una *nueva cristiandad*. La definición de esta nueva cristiandad era un tema complejo y –sin duda- abierto al debate, pero debería ser entendida –sobre todo- como un momento de superación de la Modernidad y, también, de la cristiandad medieval. Lo más importante es que no puede significar una vuelta atrás. En otras palabras, este nuevo momento de la Historia tenía que generar un orden social acorde a los tiempos que se vivían. Había que asumir todo de una manera novedosa y esto implicaba rescatar lo mejor de cada una de las dos etapas anteriores.

Además de Maritain, sin duda su gran maestro, el pensamiento político de Pividal aparece fuertemente relacionado con Rousseau y Maurras, y es en la polémica con ellos que su posición queda claramente establecida. Para Pividal, los orígenes del liberalismo como ideología había que buscarlos en Rousseau. Este es quien mejor ha provisto a esta ideología de sustento intelectual. No cabía duda que su visión del hombre como un ser que nace bueno y al que luego la sociedad corrompe, es el origen de toda la teoría posterior. Aceptando este punto de partida es que se vuelve necesario volver al punto de partida, es decir, *volver al hombre primitivo y empezar de nuevo las cosas*. Como esta vuelta es imposible, es necesario que el orden de la sociedad política restituya, lo más acabadamente posible esta libertad original que ha sido perdida. De esta manera, es el individuo el que debe ahora ser consciente de que la sociedad es el resultado del libre contrato por él firmado. El contrato que es necesario pactar entre los hombres es la justificación última de la existencia de la sociedad. La idea de que es a través de la mayoría la única forma de resolver las discusiones sociales y la libertad religiosa y de conciencia, aparece como resultado lógico de todo lo anterior. Entonces, la única forma en que los individuos puedan establecer reglas generales será en base al número.

Maurras es –para Pividal- la reacción lógica al planteo rousseauiano. Frente a la reafirmación del individuo sobre la sociedad, Maurras afirma la superioridad de la sociedad: *“desde que nace el ser humano necesita de otros, de la madre y del padre; a ellos les debe la vida y el mantenimiento de la vida. La sociedad está compuesta por familias y no por individuos”* transcribe Pividal. Esta reafirmación de la sociedad sobre el individuo implica también la negación de las libertades de conciencia y de opinión –si así fuera- esto funcionaría como un elemento disolvente que llevaría –necesariamente- a la anarquía. El catolicismo se presentaría así como la religión oficial, aquello que garantiza la unión de los ciudadanos y evita el individualismo liberal. El sistema político que acompaña a esta profunda unión deseada por Maurras sería la monarquía o –más modernamente- la organización comunitaria. La fuerza de los seguidores de Maurras, no puede ser vencida solo con el liberalismo. Aunque rescatable en muchos aspectos, el liberalismo en estado puro es algo negativo, una completa indeterminación. La libertad de conciencia, la capacidad de comprender y de querer no son atributos del individuo sino de la persona. El ser humano, entonces, aparece en una doble perspectiva: desde el punto de vista individual, el hombre está subordinado a lo social, pues es allí donde encuentra su mayor desarrollo. Pero desde la sociedad no es el elemento máximo al que puede aspirar; más bien debe alzarse por encima de ella en la búsqueda de su realización personal.

4.2.2 La lucha por las ideas al interior del poder.

Estas luchas entre facciones coincidieron también con el desalojo del equipo socialcristiano –liderado por Felipe Tami- del gobierno, cuya contrapartida fue el discurso del Presidente (el 7 de noviembre) donde este pareció aproximarse a una salida liberal. Aparecieron claras las disidencias dentro del gobierno: la arremetida comunitaria iba a ser aventada por el empirismo económico de Álvaro Alsogaray¹⁰⁹ y la resistencia unificada de los partidos políticos para reconquistar el sistema republicano. La llegada de Julio Alsogaray a la Jefatura del Comando en Jefe del Ejército, luego de la salida de Pistarini –como ya dijimos, una mala jugada presidencial- fue la decisión que condenó el intento de organización comunitaria; pero, la victoria de Álvaro fue corta: para el Presidente lidiar con un Alsogaray era bastante, lidiar con dos ya era mucho¹¹⁰.

El nombramiento de Guillermo Borda en la cartera de Interior provocó cierto disgusto en la Marina, indudablemente por su pasado peronista. Conviene recordar que no todos los integrantes de la plana mayor del arma adhirieron al golpe del 28 de junio por considerar que sus conductores tolerarían un sesgo peronista con influencia gremial: no se equivocaban. De todos modos cerraron filas con la decisión del Presidente y, pese a que su nombramiento como Ministro estuvo raleado de jefes del arma, la Marina decidió liquidar el tema y, -como un gesto decidido a barrer sospechas- a la jura de los Secretarios de la cartera asistió un número respetable de altos oficiales del arma. En el Ejército el nombramiento de Borda fue recibido sin críticas –a pesar del fuerte sesgo antiperonista de muchos altos oficiales- y hasta se comentó *“que daba una imagen de aceptación política para no oler a gorila”*¹¹¹. La llegada de Krieger Vasena¹¹² a Economía y Trabajo fue aceptada -sin fisuras- por las tres fuerzas a pesar que estaba más sujeto a críticas por las materias de su Ministerio. Borda y Díaz Colodrero debían cubrir las espaldas políticas de Krieger; las relaciones con los sindicatos quedarían a cargo de Rubens San Sebastián que ya había conseguido entenderse con la CGT y había logrado un muy interesante equilibrio en las negociaciones con los gremios. Díaz Colodrero debería trabajar sobre algún tipo de acuerdo social -no eleccionario- con los sectores políticos que habían mostrado alguna vocación revolucionaria. Además tendría que resolver los relevos y confirmaciones entre los gobernadores provinciales; tenían asegurada la permanencia en el cargo: Imaz, en la provincia de Buenos Aires; Fravre en Entre Ríos; Blanco en Mendoza; Aliaga García en Tucumán y Vázquez en Santa Fe¹¹³. Pero fue el tercer nombramiento el que causó mayor sorpresa: Antonio Lanusse –saliente Secretario de Transporte- se convirtió en Ministro de Defensa¹¹⁴. La idea de Onganía era no colocar en el cargo ni a un político ni a un militar sino a un experimentado administrador¹¹⁵; la decisión fue tomada –sin explicaciones- por el Presidente. Pero lo que sí resultó inexplicable fue la continuidad de Gelly y Obes en la Secretaría de Educación y el nuevo Secretario de Seguridad Social, Samuel

Medrano¹¹⁶. Parecía haber alumbrado un nuevo compromiso entre las líneas nacionalista y liberal para orientar la revolución: Borda encarnaría la primera de estas corrientes y Krieger la segunda; los calificativos de las tendencias políticas a las que cada uno pertenecía debían aplicarse morigerados y sin exageraciones. Los recientes nombramientos acrecieron –claramente- el número e influencia de los *Atenistas* dentro del Gobierno; además de Borda, respondían a esta agrupación: el Subsecretario de Interior, Ernesto Pueyrredón; el Presidente del BCRA; Pedro Real y el nuevo Secretario de Asistencia y Promoción de la Comunidad, Raúl Puigbó¹¹⁷. El hecho de que una buena parte del Gabinete compartiera ideologías y afinidades lógicas de miembros del mismo club, -más allá de las capacidades personales de cada funcionario- parecía ofrecer una coherencia de base de la que carecía el anterior equipo. De ahí que se supusiera que –Ministros y Secretarios- estarían en inmejorables condiciones para trazar al Gobierno una orientación definitiva. La revolución contaba con suficientes documentos fundacionales en los que definía sus “objetivos”; podían resumirse en uno solo: modernizar la Argentina.

4.3. El tiempo de Krieger. Su origen ideológico y su fuente doctrinaria. Su política económica de heterodoxia neoliberal.

A Krieger¹¹⁸ no se lo podría definir como un liberal en sentido estricto, era más bien un pragmático. Como buen economista de la época tenía la fuerte dominancia de su formación keynesiana con énfasis en la inversión pública y el estímulo a la inversión privada. Si bien mantenía una muy buena relación de amistad y respeto con Raúl Prebisch, no era –filosóficamente- un cepalino; si bien aceptaba y promovía el industrialismo siempre que estuviera dirigido al crecimiento de las exportaciones, es decir, no era un industrialista con la vista puesta en la sustitución de importaciones. Para Krieger era absolutamente indispensable y prioritario el tema presupuestario, para él, cualquier programa económico debía basarse en un presupuesto que lo sostuviera y al que había que ajustarse. Krieger consideraba que no había política económica sin presupuesto previo y reconocía que –además de encontrar la estabilidad- Argentina tenía problemas estructurales que resolver. No veía la estabilidad como un fin en sí mismo sino como un medio para lograr la marcha hacia adelante de la economía en un proceso de crecimiento autosostenido sin perder de vista la equidad en la distribución de ingresos. Claro que tenía su lado liberal: era su fe y estímulo en el sistema de precios de mercado, es decir, precios libres; sin embargo no dudó en aplicar una política de control de precios cuando estos se desbocaban (lo hizo durante el primer semestre de 1967) pero, una vez encontrado el equilibrio en los precios relativos debía volverse al mercado competitivo. En política monetaria era partidario de una elevada liquidez, pero no a costa de emisión monetaria sino por el lado de un incremento positivo en los saldos de la balanza de capital, es decir, con el ingreso de nuevos

capitales y repatriación de capitales locales en el exterior: la recuperación de la confianza era la clave de su programa económico. Otra faceta liberal del ideario kriegeriano era su énfasis en la apertura de la economía en busca de eficiencia, modernización e integración con el mundo; demostró un gran interés por la ALALC como organismo integrador con Latinoamérica, pero los intereses de sectores militares nacionalistas trabaron el intento integrador¹¹⁹. La inversión pública como el principal elemento dinamizador keynesiano lo aplicó en la programación y ejecución de obras como: El Chocón-Cerros Colorados, Atucha I, obras viales, energéticas y planes masivos de vivienda, la idea era colocar al sector público en capacidad de ejecutar políticas de carácter anti-cíclico. Es decir, eran ideas fuertemente vinculadas a priorizar el crecimiento apuntando a la estimulación de la demanda agregada. La influencia directa –que el mismo Krieger mencionó- fueron las experiencias de Francia¹²⁰ y México con lo que manifiesta su preocupación e interés en que las políticas anti-inflacionarias no tuvieran un sesgo recesivo y posibilitaran el crecimiento. *“Pensé que los argentinos teníamos que hacer algo similar a lo que hicieron los franceses. Un acto de fé, consolidar la moneda, afirmarse (...) había que tirar el ancla bien adelante del barco y después aferrarse a ella y no moverse, dejar que la correntada pase y que el barco quede allí, por eso fue que la devaluación fue más de lo necesario”* dijo el propio Krieger¹²¹. En su estilo estaba mantener en reserva las medidas muy delicadas, por ejemplo, la devaluación de marzo de 1967 solo era conocida por Onganía, el Presidente del BCRA –Pedro Real- y por él mismo. El *establishment* confiaba en él porque lo consideraba uno de los suyos, pero también conocía su dureza, mantenía una buena relación con los organismos internacionales de crédito¹²² Creía y confiaba en sus amigos y en su mentor ideológico Carlos Moyano Llerena¹²³ en quien descansó para realizar la arquitectura del acuerdo de precios de su plan económico, la influencia de Llerena se nota en el sesgo heterodoxo de la gestión¹²⁴. Krieger se rodeó de funcionarios de alto nivel profesional y de su entera confianza; convocó para su súper ministerio a funcionarios de probada idoneidad y excelente nivel técnico como: Enrique Folccini, como Director de Políticas Económicas; el ingeniero Raúl Ondarts, como Subsecretario de Hacienda; el Dr. Pedro Real, como Presidente del BCRA; Egidio Ianella como gerente general del BCRA; Luis Loitegui en Obras Públicas; Gotelli en Energía; Alberto Solá en Industria y Comercio; Ressia en Transportes, Raggio en Agricultura y San Sebastián en Trabajo; Luis D’Imperio¹²⁵ y finalmente Cayetano Licciardo se ocuparon de la cuestión presupuestaria¹²⁶.

4.3.1. La situación económica previa a la instauración del programa de estabilización de Krieger.

Los dos años completos del gobierno radical -1964 y 1965- fueron de fuerte crecimiento del producto: 10,3% y 9,1% respectivamente; el consumo per cápita había aumentado

10% en 1964 y 7,4% en 1965. Estas tasas fueron posibles porque surgieron de los niveles de la fuerte recesión 1962-1963 (menos 3,1% y menos 3,2% respectivamente); además en el primer semestre de 1966 el crecimiento se había desacelerado por completo (ver cuadros e infografías: situación al inicio del régimen). Otras variables como la inversión bruta y el producto bruto interno habían decaído bastante y la tendencia parecía hacerse bastante negativa; la inversión pública también decreció y por lo tanto el producto bruto interno corrió la misma suerte. Los movimientos de la balanza de capitales fueron negativos, su saldo neto de largo plazo en 1964 fue de 2 millones de dólares estadounidenses; en 1965 de 4 millones y en 1966 de menos 105 millones. En lo referente al corto plazo: en 1964 fue de menos 39 millones de dólares; en 1965 de menos 177 millones y en 1966 de menos 76 millones. En lo referente al déficit presupuestario, a pesar de la caída en la inversión pública, los ingresos tributarios no alcanzaron para cubrir el total de la erogación (ver en cuadros 3 la situación fiscal). Además, en el mes anterior al golpe de Estado, las reservas internacionales del BCRA llegaban solo a 209 millones de dólares estadounidenses: equivalían apenas dos meses de importaciones. Las reservas internacionales a fin de cada año fueron: para 1961: 558 millones; 1962: 222 millones; 1963: 375 millones; 1964: 272 millones y 1965: 301 millones de dólares estadounidenses. Pero, durante el gobierno radical, esta relativa estabilidad fue lograda con una fuerte restricción a las importaciones (Boletines Estadísticos varios del BCRA)¹²⁷. Este cuadro de situación y su proyección negativa –entre otras razones sociales y políticas ya comentadas- resultó un apoyo para el golpe de Estado de junio de 1966¹²⁸.

4.3.2. El plan en sí. Los objetivos, el paquete de medidas, las etapas.

Se definieron como objetivos del programa: *“la eliminación de las causas profundas que condujeron al país a su estancamiento (inflación agravada por un estatismo insaciable) el establecimiento de bases y condiciones que hagan factible una gran expansión económica y un auténtico y sostenido desarrollo y asegurar el acceso a la disponibilidad de mayores bienes y servicios a todos aquellos que estén dispuestos a realizar un sostenido esfuerzo para obtenerlos”*¹²⁹. *“Hacer un país abierto competitivo y moderno que no descuide a los más débiles, pero tampoco premie, como ocurre con frecuencia, a los más ineficientes”*¹³⁰. En la primera parte del plan se adoptó una estrategia de corto plazo implementada en forma global y simultánea que pueden sintetizarse en cinco aspectos: 1) Eliminación del déficit fiscal mediante una drástica reducción del gasto, reestructuración de las empresas públicas y una política tributaria que aumente las recaudaciones sin deprimir la actividad económica con movilización de ahorros de la inversión privada y pública para absorber la mano de obra liberada por actividades ineficientes. 2) Una política monetaria firme que facilite la estabilización a corto plazo para que, una vez revertidas las expectativas inflacionarias, atienda la

consecuente demanda de liquidez por remonetización con el fin de sanear el sistema financiero. Se procura asegurar una tasa de interés positiva para ir elevando la monetización. 3) Una política de liberalización cambiaria que catalice rápidamente el proceso de estabilización evitando una recesión al constituirse en un pilar de confianza interna. La implantación de un tipo de cambio único y libre sin restricciones. 4) Una política de ingresos (precios y salarios) de corto plazo que esterilice el mecanismo de propagación de la inflación (efecto inercial) procurando evitar una nueva redistribución de ingresos en el sector privado. 5) Una política anti-cíclica que reactive la economía a través de inversiones y por transferencia de recursos a actividades de alta productividad, evitando comprimir el consumo de los sectores de bajos ingresos. La inversión privada tendría el liderazgo en el programa de inversiones, pero el Estado también haría su parte especialmente en infraestructura y energía e impulsando un plan de viviendas de bajo costo (una herramienta del keynesianismo).

La primera preocupación fue la elaboración del presupuesto de 1967, había que sanear el déficit fiscal, principal causa de la inflación. El presupuesto se estructuró con un déficit máximo de 75 mil millones de pesos, la mitad del de 1966 en términos nominales. Esta drástica reducción se ve más dramática si se recuerda que entre ambos ejercicios medió una inflación del 30% anual. La meta del déficit programado no alcanzaba el 14% del total de las erogaciones, era, sin duda, una meta muy ambiciosa. La eliminación del déficit tendría que ser paulatina ya que estaba limitada por los atrasos en los pagos de Tesorería. Lo más apropiado era el congelamiento del gasto corriente y se implementó un sistema de racionalización de personal cubierto por una indemnización importante que actuaba como un seguro de desempleo "ad hoc". Era necesario fortalecer las reservas internacionales, el mundo aún se regía por tipos de cambio fijos y no existían las fluctuaciones cambiarias y financieras de la década del '70 luego de decretada la inconvertibilidad del dólar estadounidense. El tipo de cambio fijo con reservas disuasivas sería la pieza clave en la ruptura de la inercia inflacionaria, pero el BCRA no disponía, por entonces, de esa masa crítica de divisas. Los organismos internacionales de crédito fueron invitados a interesarse en el programa y el primero en brindar asistencia fue el FMI, aprobando un *stand-by* de 125 millones de dólares. También se logró la atención de la Tesorería estadounidense y un préstamo conjunto de bancos europeos y norteamericanos. Finalmente el apoyo alcanzó los 400 millones de dólares y cumplió su efecto disuasivo por el mero anuncio, generando un rápido fortalecimiento del peso. Con esta masa de maniobra y el presupuesto aprobado, el plan se anunció el 13 de marzo de 1967 con una devaluación de una magnitud inesperada (tirar el ancla bien lejos) libertad cambiaria, reforma arancelaria e impositiva, saneamiento de empresas públicas, firme política crediticia, un adecuado manejo de la deuda externa y un fuerte estímulo a la inversión extranjera. La política de ingresos liquidó el espiral salario-precios implementando un aumento en los salarios nominales, acompañado por un acuerdo de precios para terminar su expansión. En una

segunda etapa durante 1968 se aceleró la preparación y negociación de proyectos de infraestructura de largo plazo como el Chocón-Cerros Colorado, se tendió a la reducción de la tasa de interés nominal para producir la expansión crediticia que requería la economía. En una tercera etapa (1969) se acentuó la inversión pública y privada asentándose en una aceptable estabilidad de los precios. Se sancionó la Ley de Hidrocarburos N° 17319 del 19 de junio de 1967 que permitió el ingreso de capitales movilizados de los recursos del país. La decisión clave para el restablecimiento de la confianza interna fue la adopción de un tipo de cambio único a un nivel inicial de subvaluación del peso (m\$ 350 por dólar) lo que significó una devaluación del 40% sobre el tipo de cambio anterior (de m\$ 250 por dólar); esta sería el ancla para mantener varios años una razonable estabilidad. El nivel del nuevo tipo de cambio fue fijado asumiendo que el aumento correctivo de precios esperado para 1967 sería de alrededor de un 25%, por lo tanto, a fines de ese año el peso debería quedar subvaluado en un 15%. Como el ajuste del tipo de cambio tendría un fuerte impacto de transmisión inflacionaria, lo que se anunció fue una *devaluación compensada con impuestos ad valorem* del 16%, 20% y 25% según el tipo de exportaciones, excluyendo las no tradicionales. Los derechos de importación se disminuyeron selectivamente y el nivel máximo de protección nominal se redujo del 325% al 140%¹³¹. El impacto fiscal de los derechos de exportación y la reforma fiscal, fueron significativos; la recaudación aumentó a m\$ 80 mil millones en 1967 y a m\$ 150 mil millones en 1968; la presión fiscal tributaria subió al 17,3% en 1967 y al 21,3% en 1968. El impacto de la devaluación en la cuenta de capitales fue drástico: las reservas netas del BCRA subieron en 1967 en U\$ 433 millones, tanto por saldo positivo en la cuenta corriente como por el ingreso de capitales. El ingreso de capitales llegó a los U\$ 276,7 millones en 1967 frente a los U\$ 367 millones ingresados en el período 1962/1966. El servicio de la deuda pública (amortizaciones más intereses respecto de las exportaciones) alcanzaba al 25% y equivalía a U\$ 450 millones durante los años 1967 a 1969. El programa procuraba también intensificar las relaciones con la banca pública internacional (Banco Mundial, Corporación Financiera Internacional y Banco Interamericano de Desarrollo) para obtener la financiación para la implementación de la segunda y tercera fases del programa de obra pública de gran magnitud con financiamiento de proveedores internacionales licitantes. El tercer componente del programa consistió en el ataque frontal al déficit fiscal del Gobierno Nacional y al sector público en general, que era, sin duda, el principal motor inflacionario¹³². La eliminación del déficit fiscal, además de reducir e intentar eliminar la inflación, procuraba aumentar el ahorro en el sector público para liberar los recursos necesarios para aumentar las inversiones y asegurar la absorción de mano de obra con la intensificación del programa de obras públicas al tiempo que permitiría el manejo de la política fiscal y monetaria. El Presupuesto Nacional aprobado en enero de 1967 redujo el déficit fiscal de m\$ 148 mil millones en 1966 a m\$ 75 mil millones en 1967, lo que resultaba un

14% de los gastos presupuestados para 1967; los coeficientes referenciados a 1966 eran del 34% y del 40% referenciados al período 1962/1965. La meta se logró con la combinación de reducción del gasto, racionalización administrativa para contenerlo y aumento de los ingresos tributarios por nuevos impuestos, aumentos en las tasas e incrementos tarifarios¹³³, sin duda, los derechos de exportación asociados a la *devaluación compensada* fueron los más importantes¹³⁴.

Los resultados del programa para 1967 –en su primer año de aplicación- fueron altamente satisfactorios. En el balance de pagos del BCRA las reservas internacionales llegaron a U\$S 433 millones, como resultado del ingreso masivo de fondos privados que –en algún tramo- correspondían a fondos en el exterior de ciudadanos argentinos. El impacto devaluatorio (del 40%) en los precios resultó bastante morigerado por la aplicación de derechos de exportación a productos tradicionales y la reducción de los aranceles a la importación¹³⁵. En 1967 el costo de vida aumentó un 27%, inferior al 30% de 1966; los precios mayoristas cayeron de un aumento del 23% en 1966 a un 20% en 1967. El déficit del Tesoro Nacional se redujo un 50% en precios corrientes y un 60% en valores reales, resultando una baja del 3.7% sobre el PBI del año 1966, al 1.4% del PBI en 1967; esto se logró por aumentos en los ingresos del orden del 66% en precios corrientes y un tercio en valores reales, mientras los gastos aumentaron el 27% pero permaneciendo estables en términos reales. El sector público –en su conjunto- generó un resultado operativo favorable equivalente al 4% del PBI: hay que recorrer muchos años de economía argentina para encontrar guarismos parecidos. Los recursos monetarios y cuasi-monetarios del BCRA aumentaron un 33%; unas 2/5 partes de la expansión monetaria fue en contrapartida de la recuperación de las reservas; los créditos del BCRA aumentaron un 20% en moneda constante, es decir, por debajo de la meta del programa. Anteriores experiencias argentinas habían asociado los programas de estabilización con la recesión y –entonces- generaban una fuerte oposición política a los ajustes efectuados bajo el monitoreo del FMI; pero este no fue el caso de este plan: la tasa real per cápita del crecimiento del PBI mejoró del -1.5% en 1966 al 0.5% en 1967, es decir, todos los fuertes ajustes habían sido adoptados sin poner a la economía nacional en recesión. Incluso el salario real del sector industrial no sufrió pérdida alguna en 1967¹³⁶.

La segunda etapa del programa (1968) puso su énfasis en la desaceleración del proceso inflacionario tanto por la vía presupuestaria de reducción de déficit como por la baja de las expectativas inflacionarias y la rápida reducción inercial; el aumento de la tasa de crecimiento económico se elevaba mientras se consolidaba la balanza de pagos. El programa –en esta fase- contó con el aporte de un segundo préstamo *stand-by* de U\$S 125 millones concedido por el FMI el 14 de abril de 1968, pero, al igual que en primer caso, no hizo falta desembolsar la ayuda¹³⁷. El año 1968 fue de sustancial progreso para el logro de los objetivos del programa original, la tasa de aumento de

precios se desaceleró agudamente: el costo de vida aumentó algo menos del 10% en términos anuales, comparado con el 27% de 1967; los precios mayoristas bajaron aún más, al 4% en 1968 comparado con el 27% del año anterior; aumentó la tasa de crecimiento del PBI, desde el 2% en 1967 hasta el 4.8% en 1968. Las reservas internacionales tuvieron un aumento de U\$S 150 millones. Hubo mayor expansión en la inversión tanto del sector público (17% en términos reales) como del sector privado (15% en términos reales); se recuperaron la construcción y la producción de maquinaria industrial. La tasa de inversión fija respecto del PBI mejoró del 18% en 1967 al 20% en 1968. Sin embargo el déficit –debido al aumento de la inversión pública- en relación al PBI, aumentó del 1.4% en 1967 al 1.7% en 1968. Los controles sobre los precios de alimentos ya no tenían significación en 1968; pero, aunque el déficit resultó algo mayor que el programado, la financiación del mismo por parte del BCRA disminuyó. Esto se logró por la exitosa colocación de Letras de Tesorería y Certificados de Cancelación de Deuda: estas financiaciones no estaban previstas en el presupuesto original. Se colocaron Títulos Públicos en el exterior por U\$S 100 millones y Bonos a tres años en el mercado interno por m\$n 27 mil millones, esto hizo posible una expansión del 35% en el programa de inversiones comparado con 1967; esto representó el 5% del PBI. Los intereses pagados por los intermediarios no bancarios y las tasas de préstamo –tanto del mercado bancario como del financiero- cayeron fuertemente a medida que se registraba la desaceleración en el ritmo de aumento de precios; sin embargo, el costo de los préstamos aumentó en términos reales, porque la reducción en el ritmo de los aumentos de precios fue más rápida que la caída en las tasas de interés. Para fortalecer la confianza en la estabilidad del peso argentino, se comunicó al FMI –el 14 de mayo de 1968- que se asumirían las obligaciones del artículo VIII, secciones 2, 3 y 4 del Convenio; de este modo, legalmente el peso resultó plenamente convertible, se comenzó a utilizar en las transacciones del FMI¹³⁸ con otros países y, la Argentina, se convirtió –por primera vez- en acreedora del FMI¹³⁹.

La tercera etapa del programa (1969) continuó con los objetivos del año anterior y redobló los esfuerzos para reducir más la inflación de precios, mantener la situación, muy positiva, del balance de pagos y fortalecer el proceso de crecimiento económico¹⁴⁰. En el área de la política de ingresos se autorizó –para el año 1969- un aumento en los salarios del 8% sobre los básicos del sector privado y se aumentaron las asignaciones familiares para hacer crecer el salario real. Se mantuvo el acuerdo de precios con las firmas líderes y se anunció una reducción –ya programada- en las tarifas de importación. El programa fiscal contemplaba un déficit del 1.2% en relación al PBI que era más o menos el 13% de las erogaciones fiscales. Se mejoró la administración de impuestos, sin embargo, se sancionó un nuevo impuesto sobre la tierra libre de mejoras que fue del orden del 1.6% sobre la valuación fiscal de ese año¹⁴¹. En lo referente a la política monetaria la expansión neta del BCRA debería aumentar solamente el 5% y el crédito del sistema se expandiría un 12% por el aumento previsto

de depósitos. Ya para mediados de 1969, la tasa real de crecimiento del PBI resultó del 7.5%; el costo de vida avanzaba a una tasa del 6.2% anual y los precios mayoristas al 6.6% anual, en tanto que los salarios reales se habían recuperado y la tasa de desempleo urbano declinó del 6.5% en 1966 al 4.1% a mediados de 1969. Mediados de 1969 marcó el hito de lo que había resultado un programa de estabilización suficientemente exitoso –con expansión de la actividad económica- y una caída sin precedentes –desde 1945- en las tasas de aumentos de precios con una impresionante mejora en las finanzas del sector público. Una crítica al programa fue sobre la poca flexibilidad en la política de ingresos pero, esta rigidez parecía más de forma que de sustancia¹⁴².

Uno de los temas que se debían resolver era el reconocimiento del proceso de sofisticación e innovación en operaciones del mercado financiero no canalizado por el sistema bancario institucional sino a través de nuevos instrumentos financieros e instituciones financieras no bancarias: la Ley 18.061 de Entidades Financieras, tuvo a su cargo la institucionalización y reconocimiento de estas nuevas construcciones financieras¹⁴³. Este reconocimiento del nuevo segmento en el mercado financiero, estaba destinado a colocar a estas nuevas instituciones bajo la tutela de la autoridad monetaria y, este objetivo queda claro en el artículo primero de la ley que dice: *“esta ley tiene como finalidad regular el funcionamiento de las entidades financieras comprendidas en sus disposiciones de acuerdo con los siguientes objetivos fundamentales”* y en su inciso (a) dice: *“Organización integral y desarrollo del mercado financiero, para contribuir al crecimiento autosostenido de las distintas regiones del país y; (b)”consolidación y eficiencia de las entidades financieras consideradas nacionales a los efectos de esta ley; adecuación de sus formas operativas a las necesidades del mercado, y fluidez entre los distintos sectores que la integran”* (c) *“captación óptima del ahorro público por las entidades financieras autorizadas para atender adecuadamente las necesidades crediticias de la producción, distribución, consumo y exportación de bienes y servicios.* Se trataba de adoptar un régimen financiero especializado para conceder a estas nuevas instituciones la realización de determinadas operaciones en el circuito no bancario. Esta ley concreta una serie de instituciones categorizadas –fuera de las tradicionales bancarias- y asigna operaciones activas y pasivas relacionándolas casi con exclusividad a cada una. Para esto, produce una clasificación en: bancos comerciales, de inversión, hipotecarios, compañías financieras, sociedades de crédito al consumo y cajas de crédito y, en consecuencia, las operaciones creaban en ámbito operativo consiguiente. La especialización era, entonces, en *stricto sensu*, el nudo central de la cuestión. Así, este concepto particular de especialización, en su punto sustancial estaba referida a los plazos, es decir al modo de relacionar imposiciones del público (ahorro) de corto plazo con las colocaciones (préstamos) de corto plazo, y las de mediano y largo plazo de la misma forma. Es decir no permitía el entrecruce de los plazos, cosa que, desde el punto de

vista del anclaje financiero pareció bastante razonable. También resultó bastante coherente –en lo que se refería a los bancos- la distinción entre bancos comerciales y bancos de inversión e hipotecarios. Los primeros dedicados al financiamiento de la industria, el comercio y los particulares en términos de corto plazo (no más de 90/120 días); los segundos –de inversión- que podrían emitir obligaciones, bonos y certificados de participación y recibir depósitos a plazos medianos y largos para financiar préstamos a iguales plazos. Los terceros –de carácter hipotecario- destinados a la financiación de préstamos hipotecarios o de vivienda y con capacidad para emitir cédulas, bonos y participaciones en préstamos con cuentas especiales de ahorro. Como consecuencia de esta orientación se eliminaron las secciones hipotecarias de los bancos comerciales. En cambio la delimitación no quedó tan clara entre compañías financieras, sociedades de crédito al consumo y cajas de crédito que terminaron mezclando los plazos financieros y confundiendo los límites de las operaciones. Cualquiera haya sido el éxito alcanzado por esta ley, en diseñar el sistema de plazos para los activos financieros, la tarea de institucionalización de las entidades no bancarias fue muy difícil y prolongada, sobre todo en lo concerniente a los plazos de autorización por parte de la autoridad monetaria¹⁴⁴. En el caso de las compañías financieras y sociedades de crédito al consumo, se necesitaron hasta dos años para obtener su oficialización y, para las Cajas de Crédito el plazo llegó a insumir hasta cuatro años. En el caso de los bancos de carácter hipotecario y de inversión, no se registraron incorporaciones para la primera categoría y en lo referente a la segunda – que debería haber tenido fuerte incidencia como propulsora del desarrollo del mercado de capitales- recién pudo efectivizarse en julio de 1974 con la aprobación del decreto N° 332 reglamentario de las disposiciones pertinentes de la ley N° 18.061.

4.3.3. La aplicación del programa de estabilización: restricciones iniciales, herramientas aplicadas, solidez, sustentación temporal y estrategia implícita. Límites y resultados del modelo.

Para entender este programa antiinflacionario o de estabilización hay que ubicar el concepto de estabilidad de precios dentro de los objetivos económicos del régimen. Estos objetivos fueron enunciados en sus documentos iniciales y, más específicamente, en el Anexo 3 del Acta de la Revolución Argentina, que decía: a) Eliminar las causas profundas que han conducido al país a su estancamiento actual; b) Establecer bases y condiciones que hagan factible una gran expansión económica y un auténtico y autosostenido desarrollo, mediante la utilización plena, al más elevado nivel de rendimiento posible, de los recursos humanos y naturales con que cuenta el país; c) Asegurar el acceso a la disponibilidad de mayores bienes y servicios de todos aquellos que estén dispuestos a realizar un sostenido esfuerzo para obtenerlos; con la finalidad última de procurar a los habitantes de la República la mayor libertad, prosperidad y

seguridad compatibles con el orden, la disciplina social y las posibilidades reales del país.

En lo que se refiere a las restricciones de tipo institucional, el documento indicó la necesidad de un clima de libre empresa, propiedad privada, pleno empleo de los recursos y estabilidad monetaria. Por eso, el gobierno entendió que alcanzar la estabilidad monetaria era una condición *sine qua non* para la consecución del resto de los objetivos económicos. Se consideraba entonces, que los desequilibrios fundamentales de la economía eran más fáciles de corregir a partir de la estabilidad que a partir de una economía inflacionaria; esta definición impuso una restricción temporal –de tipo político- al tipo de programa de estabilización que podía llevarse a cabo. Parecía que el gobierno no podría proponer al país un programa que necesitara varios años para preparar las condiciones de modernización y avance de la economía que había prometido¹⁴⁵. La idea surge de dos hechos: a) el primer equipo económico (hasta diciembre de 1966) propuso firmemente el *enfoque gradualista*¹⁴⁶ y; b) aunque no se fijó un período específico (el tiempo económico) fuentes privadas –muy conectadas con el funcionariado- solían hablar de un año, aproximadamente, como el tiempo necesario para que un plan antiinflacionario estabilizador diera resultados¹⁴⁷. Otra restricción inicial era que, cualquier tipo de programa tenía que tener en cuenta que –según dijo el propio Presidente- debía: *“Mantener el salario real de los trabajadores que es, precisamente, el principal objetivo de la Revolución Argentina”*¹⁴⁸. A diferencia de otros intentos estabilizadores este programa no debía contener herramientas de tipo recesivo, es decir, tenía que ejecutarse con la economía en crecimiento¹⁴⁹. En pocas palabras: el programa debía evitar violentas redistribuciones de ingresos entre sectores y mantener la economía en marcha hacia adelante¹⁵⁰

Las medidas clave de las primeras dos etapas se desarrollaron durante 1967¹⁵¹. La primera herramienta aplicada fue la devaluación imperfecta compensada, una medida aplicada por primera vez en programas de estabilización en Argentina. Una devaluación compensada es aquella en la que el costo en moneda nacional de los productos importados se mantiene constante después de la devaluación, la devaluación imperfecta es diferente en dos sentidos: en primer lugar, la compensación no se aplicó a determinados tipos de productos como servicio reales y transacciones financieras; en segundo lugar, en aquellos sectores en los que se efectuó la compensación, el nivel de la tarifa nominal no siempre fue ajustado de manera que compensara perfectamente el incremento en el costo en moneda local que resultaba de la devaluación. La reforma consistió en: a) El establecimiento de un nuevo tipo de cambio que elevaba la cotización del dólar estadounidenses a m\$n.350 por unidad; lo cual implicaba un incremento de casi el 40% sobre la cotización anterior; b) Se aplicó un impuesto –por una sola vez- a la tenencia de divisas que fue de m\$n.80 por dólar estadounidense; este impuesto estaba dirigido a la tenencia de divisas por parte de la

banca comercial. La idea fue apropiarse de la ganancia de capital causada por la devaluación (Ley 17.199); c) La imposición de derechos a la exportación sobre las exportaciones tradicionales con tasas de 25%, 20% y 16% según el tipo de producto; la idea era reducirlos luego en forma gradual¹⁵²; d) se eliminaron los reintegros a las importaciones no tradicionales que eran del orden del 6%, 12% y 18%; e) Se redujeron los derechos de importación por niveles de productos. El efecto combinado de la devaluación y los cambios en los niveles tarifarios nominales dio como resultado que los bienes intermedios que se importaban aumentaron su precio en moneda local en un 30% en promedio; los productos de algunas industrias básicas locales –como la siderúrgica- aumentaron el nivel de su protección efectiva entre un 25% y un 45%. Para los restantes insumos producidos en el país, el nivel de protección se redujo en magnitudes que oscilaron entre un 5% y un 20%; los bienes de consumo final –que en su mayoría eran producidos en el país- que tenían recargos entre 220% y 330%, experimentaron variaciones en los precios efectivos de importación que oscilaron entre aumentos del 5% y reducciones del 20%; los bienes de capital importados aumentaron sus precios en moneda local en el orden del 16%, mientras que los equipos producidos en el país vieron disminuir el precio de las importaciones competitivas en hasta un 15%¹⁵³. En promedio, el aumento de los precios en moneda local de los bienes importados, como resultado del efecto combinado de la devaluación y la rebaja de aranceles fue de un 25%; el promedio ponderado de las tarifas nominales de bienes de capital paso del 105% al 73%, con lo cual el aumento de precios internos de los bienes de capital importados fue del 16%¹⁵⁴. Por otra parte, la moneda argentina fue –deliberadamente- subvaluada para las transacciones financieras, con el fin de provocar una modificación de sesgo positivo en la balanza de capitales y desalentar expectativas sobre futuras devaluaciones¹⁵⁵. Además del aumento sustancial de las tarifas de los servicios públicos, se tomaron medidas de tipo fiscal para mejorar la recaudación: se aumentó la tasa del impuesto a las ventas de electrodomésticos, pasando del 10% al 20% y un aumento del 10% al 15% para automotores y bienes de consumo durables. Estas medidas conducirían a un aumento notorio en la recaudación tributaria sobre los niveles de 1966; en la carta de intención al FMI esa mejora era del 60% en moneda corriente.

En las economías acostumbradas a vivir con inflación y con expectativas *a priori* de que ningún gobierno tiene la suficiente fuerza política para sobrevivir a los costos de un programa antiinflacionario clásico (desocupación, recesión, quiebras) sería muy desacertado intentar controlar la tasa inflacionaria operando sobre, fundamentalmente, sobre la tasa de expansión monetaria, sin una acción directa sobre los elementos de costo del proceso inflacionario. Percatado de ello, en el programa, se sustituyó el proceso de discusión privada de los aumentos salariales (paritarias), por un mecanismo implantado por la ley 17.224. De acuerdo al mecanismo implantado, los aumentos en los salarios nominales vinieron a depender del mes en que se negoció el acuerdo en el

pasado, con una escala regresiva bimensual que iba del 31 de marzo de 1967 al 30 de noviembre de 1967 (según la fecha de firma del acuerdo) con incrementos decrecientes del 24% al 8% en ambos extremos. Los incrementos nominales sobre los convenios colectivos ya firmados no tenían –en verdad- relación alguna con la productividad del sector, sino simplemente con la eliminación del espiral salarios-precios. Como se ve, el nivel absoluto de los salarios es –hasta cierto punto- función del mes en que fue negociado el acuerdo. Estos incrementos se hicieron efectivos a partir del 1 de abril para aquellos acuerdos que finalizaban antes del 1 de junio, y desde el 1 de mayo para el resto. Para los empleados públicos hubo un aumento nominal del 15%. Por su parte, los obreros de la construcción (UOCRA) obtuvieron un acuerdo especial en función de la ley 17.258. Hay que tener en cuenta que –de acuerdo a la norma- no habría más aumentos de salarios nominales hasta el 31 de diciembre de 1968; esto no significaba que no pudiera haber aumento fuera de lo dispuesto, sino que, cualquier otro aumento adicional no podría ser trasladado a los precios¹⁵⁶. Una ilustración sobre las variaciones del salario real en relación a la productividad, y la participación del trabajo en el Ingreso Nacional en el período 1966-1969 puede verse en la infografía estadística del grupo de cuadros 4 en el anexo infográfico.

La política de precios, que acompañó a la política salarial, pivoteó en un acuerdo de precios, que condicionó a las empresas que participaron en el mismo a mantener –al menos durante seis meses- el nivel de precios de la fecha de incorporación al mismo, siempre que los precios derivados de la devaluación y los aumentos salariales mantuvieran una relación coherente. La única razón para un aumento posterior era un aumento en los precios externos (valores FOB de importación aforados) de los insumos importados¹⁵⁷. Como resultado de este acuerdo, las empresas participantes no podían aumentar sus precios cuando los costos se incrementaban, por ejemplo, por una caída en las ventas, cosa que de hecho ocurrió a fines de 1967. Tampoco podían aumentar sus precios como consecuencia del aumento en los precios de sus insumos nacionales cuando eran abastecidos por proveedores que no participaban del acuerdo¹⁵⁸. A las empresas participantes se les ofrecieron beneficios especiales como: a) Las compras del sector público se le realizarían solamente a empresas que estuvieran incluidas en el acuerdo; b) Se instauraron líneas de créditos personales, pero, en lugar de entregarse el dinero a los beneficiarios, se les entregarían bonos que serían aplicados a la compra de los bienes producidos por esas empresas, a su vez estos bonos –que funcionaban como moneda- podían ser utilizados por las empresas para pagar a otras de la cadena de valor que también estuvieran acogidas al acuerdo. El acuerdo solo funcionaba a nivel de las empresas fabricantes de los bienes, no abarcaba la intermediación mayorista o minorista¹⁵⁹.

La política monetaria expansiva durante 1967 fue consecuencia de dos orígenes: a) del sector externo por vía del superávit comercial o bien; b) por vía del ingreso de capitales

o de préstamos de organismos internacionales y durante 1968 –básicamente- vía reducción de encajes bancarios¹⁶⁰. Al mismo tiempo se produjo un significativo incremento de la tasa de interés real –activa y pasiva- debido a una leve caída en la tasa nominal frente a la drástica caída de la tasa de inflación interna. Se esperaba que el crecimiento de la oferta monetaria fuera mayor que el aumento previsto de los precios debido a la magnitud de la devaluación compensada y el aumento nominal de salarios, combinados con una baja en la tasa de inflación. También se esperaba una menor participación del Estado en la toma de créditos del BCRA¹⁶¹

Las tasas anuales de crecimiento de la oferta de dinero en términos nominales fueron del 29.8% durante 1967 y del 26.8% durante 1968 y –a pesar de su apariencia monetarista- se trataba en realidad de un programa heterodoxo porque el plan tenía en cuenta que –en la Argentina- la inflación se debía principalmente a dos causas: la presión de los costos y, en mayor medida, las expectativas inflacionaria¹⁶². No se pensó en una inflación debida al exceso de demanda, de hecho, no se tomó ninguna medida para reducir la demanda, sino que se incentivó de varias maneras; entre otras, con la propia expansión monetaria y la tasa de interés. No se tuvo en cuenta el supuesto clásico de inflación estructural ni la inflexibilidad a la baja de los precios absolutos: fue por esta estrategia utilizada en el programa que fue caracterizado como heterodoxo (ver anexo cuadros e infografías: aumento de la cantidad nominal de dinero). Otra parte fundamental de la estrategia estuvo orientada a la contención de la presión de los costos en la inflación y se atacó en un doble frente: en la determinación de los salarios nominales por un lado y en los precios absolutos por el otro; estimulándose –al mismo tiempo- la demanda de consumo por medio de las políticas monetaria y fiscal y la demanda agregada a través del programa de inversión pública. Así, a la reducción de los efectivos mínimos de los bancos –que permitió una expansión del crédito de aproximadamente un 45% en términos nominales- se le agregó el incremento de la inversión pública de aproximadamente un 40% en términos reales; de manera que, en la aplicación del programa, la idea era que –en realidad- la inflación argentina no se debía a un exceso de demanda. De manera que, la reducción de los desequilibrios no se debió a una reducción del gasto en términos reales, sino que obedeció –fundamentalmente- a la aplicación de los derechos de importación, es decir, al aumento de los ingresos tributarios durante 1967, y durante 1968 se explica por el ingreso de capitales internos y externos. Como estos rubros integran los ingresos y no los medios de financiamiento por créditos, la reducción del desequilibrio se debió más a medios genuinos que no generaban inflación por exceso de demanda, que a los ingresos de capital correspondientes a 1968 que no podían ser considerados como genuinos desde ningún punto de vista¹⁶³.

Los resultados que el programa de estabilización produjeron sobre la economía argentina fueron –en el corto plazo- relativamente satisfactorios (ver anexo cuadros e

infografías: tasas anuales de inflación; evolución del déficit fiscal). Se notaron aumentos continuos en los niveles de producción y empleo –en 1968 y 1969 a buen ritmo- y dado que el plan antiinflacionario se aplicó sobre el pico del ciclo anterior, este crecimiento no fue meramente cíclico; nótese que al ser abandonado el plan hacia mediados y fines de 1969, los índices se disparan y ya para 1970 la tasa de inflación se elevaba considerablemente. A pesar de la reducción en tasa de inflación, la aplicación de la política salarial por aumentos pautados en el tiempo produjo reducciones en el salario real y también en la participación del salario en el ingreso nacional; este fue un efecto regresivo y muy negativo del programa (ver anexo cuadros e infografías: incremento de los salarios nominales y evolución de las principales variables económicas; salario real). El éxito parcial de los primeros dos años se sostuvo – fundamentalmente- sobre la inversión pública, el incremento de la inversión privada por el ingreso de capitales, no tuvo la importancia ni el efecto esperado sobre el nivel de actividad¹⁶⁴. En el grupo de cuadros 4 (resultados del programa) se muestra el balance de pagos de 1967, donde se ve que el ingreso de capital externo con por inversiones directa (ID) fue de alrededor de 10 millones de dólares, mucho menos que lo requerido por el plan al momento de su estimación¹⁶⁵, lo que hace dudar sobre la solidez del presupuesto técnico y las expectativas tenidas en cuenta al inicio del programa¹⁶⁶. Las exportaciones totales disminuyeron 100 millones de dólares en 1967 comparado con 1966 y, en 1968 decrecieron otros 100 millones comparando con 1967; recién en 1969 crecieron unos 244 millones de dólares comparadas con 1968, llegando a un total exportador de 1.612 millones de dólares en 1969. Las exportaciones no tradicionales – principal objetivo del programa en comercio exterior- representaron apenas alrededor de un 6% del total (lo que era más o menos la tasa promedio de los últimos años) y cerca de un 0.7% del PBI. Hacia fines de 1968, Krieger podía vanagloriarse de que la tasa anual de inflación había sido reducida a menos de un 10%, las reservas netas de divisas habían aumentado casi en 600 millones de dólares, se había evitado un serio receso económico, estaba en una tasa de desempleo del 5% compatible con la actividad industrial sin capacidad ociosa y la economía se expandía a paso acelerado. Pero esto fue apenas una tregua de poco más de dos años; no logró producir esa asociación de intereses suficientemente fuerte e imprescindible como para mantener a un gobierno en el poder¹⁶⁷ y el programa no pudo sostenerse en el largo plazo, bien por razones políticas (el despido de Krieger) o bien por razones de trasfondo técnico básico; la coincidencia del cambio de rumbo político de Onganía con el fin de los aspectos positivos del plan hacen difícil una respuesta, pero esta parece estar más cerca de la segunda razón. No obstante, los éxitos económicos relativos del programa - interrumpido por los sucesos de mayo de 1969- avanzaban, según sus propias premisas, hacia una mayor ortodoxia¹⁶⁸.

NOTAS AL CAPÍTULO CUARTO

¹ Publicado en *Azul y Blanco*, año I, nº 1, II época, 7 de julio de 1966.

² Gotelli era tan importante en el gabinete que su colega, el secretario de Finanzas, decía –de forma risueña- que era más fácil que el Banco Mundial le prestara dinero al propio Gotelli que a la República Argentina.

³ Miembro del Instituto Di Tella y de la Universidad Católica Argentina, doctorado en Ciencias Económicas y participante en cursos de post-gradó en universidades estadounidenses. Tami es el técnico puro que había anunciado Salimei para el cargo de Presidente del BCRA. Buen estructuralista, entiende que la inflación no debe reducirse bruscamente. Es partidario de emisiones controladas para volcar el dinero al sector productivo y no directamente al consumo. También era partidario de frenar el déficit de las empresas públicas, pero teniendo en cuenta que, en algunas de ellas, el déficit era necesario para cumplir su función. Tami fue quien disuadió al Ministro Salimei de su idea de dismantelar el CONADE. Fue él quien recomendó a Lorenzo Sigaut (más tarde en 1981 Sigaut fue Ministro de Economía de otro régimen militar) para la subsecretaría de coordinación del ministerio. Tami renunciara a la presidencia del BCRA el 3 de noviembre de 1966 y con él abandonará el gobierno el sector socialcristiano; la oposición encontrará en ese grupo un nuevo aliado.

⁴ Se trataba de las revistas: *Análisis*, *Atlántida*, *Confirmado*, *Extra*, *Gente*, *Primera Plana*, *Siete Días* y *Panorama*.

⁵ La Ley 16.912 suprimiendo la autonomía universitaria se dictó el mismo día en función a las atribuciones del Estatuto de la Revolución Argentina.

⁶ Sobre las renunciaciones de los profesores ver; *La Nación* del 2 y 5 de agosto de 1966. Un repaso de la situación en las Universidades lo da la revista *Primera Plana* del 3 de enero de 1967. La mayoría de los elencos de EUDEBA serían congregados, meses más tarde, por el naciente Centro Editor de América Latina (CEAL) bajo la guía de Boris Spivacow.

⁷ Hay que mencionar también los casos de 3 alumnos de la UCA: Eduardo Saguier, Enrique Amadasi y Juan José Llach; que sufrieron sanciones y reprimendas por realizar protestas a viva voz contra el régimen.

⁸ *Justicialismo*, octubre de 1963; documento emitido por la Mesa Coordinadora de las 62 Organizaciones el 23 de agosto de 1963.

⁹ Alonso tenía su base personal en el débil gremio del Vestido y no pudo con Vandor respaldado por el gremio más fuerte del país: la poderosa UOM.

¹⁰ Alonso era un descreído en los partidos políticos; sostenía que –en la Argentina- no existían cualitativa ni cuantitativamente, partidos políticos que pudieran aducir representatividad. Opinaba que –en cantidad de afiliados- eran mucho más representativos los sindicatos que los partidos políticos de la democracia liberal.

¹¹ Ver; Rodolfo Walsh: *¿Quién mato a Rosendo?*; p.175 a 179.

¹² La idea del CONADE convertido en el Consejo Económico Social era fuertemente resistida por Álvaro Alsogaray y su grupo, que preferían una comisión de precios y salarios. En el grupo que sí aprobaba la conformación del Consejo Económico-Social, se contaban el general Alcides López Aufranc y el ingeniero Agustín Merello; esta posición contaba con el apoyo y respaldo intelectual del Centro de Investigaciones y Acción Social que dirigía el padre Alberto J. Sily. Este grupo consideraba que el Consejo Económico-Social podía llenar el vacío político dejado por la supresión de los partidos políticos

y servir, además, como medio de institucionalizar al empresariado y al movimiento obrero; había una denominación propuesta: Consejo de la Comunidad Argentina.

¹³ Todo es Historia, N°230, julio de 1986. *Economía y Trabajo durante el gobierno de Onganía*, p.28

¹⁴ La Nación, 30 de junio de 1966, p.8

¹⁵ La Nación, 1 de julio de 1966, p.4

¹⁶ La Nación, 30 de junio de 1966, p.8

¹⁷ Santiago Senén González, *El sindicalismo después de Perón*, Editorial Galerna, Buenos Aires, 1971, p.90

¹⁸ Ídem.

¹⁹ La Nación, 23 de marzo de 1968, p. 4.

²⁰ Para un mayor desarrollo y análisis del tema ver; Oscar Pavetti, "Azúcar y Estado en la década de 1960", en Luis M. Bonano (coord.) *Estudios de Historia Social de Tucumán*, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 2001; Yolanda Orquera, "Azúcar amargo y campo cultural: Tucumán 1966-1976", ponencia presentada en las XI Jornadas Interescuelas/ Departamento de Historia, Tucumán setiembre 2007; Lucía Mercado, *El Gallo Negro, vida pasión y muerte de un ingenio azucarero*, Santa Lucía, Tucumán, 1997.

²¹ En la mayoría de los casos las patronales recibieron sumas importantes de dinero de acuerdo a lo estipulado por la ley de expropiación o de los acuerdos firmados por las partes. Solo la Compañía Azucarera Tucumana (C.A.T), propietaria de varios ingenios afectados y vinculada al P.C., inició acciones legales contra la intervención estatal, pero sin éxito.

²² El capitán-ingeniero Álvaro Alsogaray, al tiempo que amigo de Salimei- titular de Indo S.A., era su competidor en la actividad aceitera, al tiempo que también obtenía créditos del Banco de Boulogne. Pero la actividad de su empresa –Indo S.A- ya se veía relegada por el franco crecimiento de SASETRU. El nombramiento de Álvaro Alsogaray –hermano del general Julio Alsogaray, personaje relevante en el cuartelazo a Illia- como Embajador en los EE.UU, pareció como un exilio dorado destinado a retirarlo de la escena nacional.

²³ SASETRU era la perla de una membresía a la que pertenecían: Inalruco S.A., Santa Elisa S.A., El Siglo Cia.de Seguros S.A., Ofir S.A., y otras menores que completaban el número de 36 compañías. En el Banco de Boulogne figura como miembro del directorio Evaristo Piñón Filgueira, flamante integrante del equipo económico de Salimei; el general Eduardo Señorans –nombrado por Onganía como titular de la SIDE- fue director-gerente de la Cia. Avellaneda de Transportes, otra empresa controlada por el grupo Salimei. Francisco Aguilar –secretario de Hacienda- es director de Huemul S.A. una empresa a la que pertenecen otros partícipes de Salimei, José María Villarino y Juan Vidal Roselló.

²⁴ Salimei es nombrado ministro el 30 de junio de 1966. Desde el 29 rige el feriado bancario y cambiario. Cuando este cesa, las acciones de SASETRU en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires saltan de 44 a 75 pesos, con un movimiento de 30.660 acciones. El 1º de julio aumentan a 90 pesos con un movimiento record de 40.270 acciones.

²⁵ Primera Plana, N° 319, 4 de febrero de 1969, p.60

²⁶ Primera Plana, N° 319, 4 de febrero de 1969, p.61

²⁷ Algunos de ellos fueron: Leandro Fote del ingenio San José, Benito Romano de La Esperanza, Atilio Santillán del Bella Vista, Esteban Zelarrayán del Santa Lucía, Bernardo Villalba del San Ramón, entre otros. Los tres primeros figuran en la nómina de desaparecidos durante la dictadura militar instaurada en 1976.

²⁸ Para ahondar y profundizar sobre este tema ver; Schvarzer, Jorge, *La industria que supimos conseguir*, ediciones cooperativas, Bs.As., 2000; Santamaría, Daniel, *Azúcar y Sociedad en el Noroeste Argentino*, IDES, Bs.As., 1986; Rofman, Alejandro y Romero, Luis Alberto, *Sistema socio-económico y estructura regional en la Argentina*, Amorrortu, Bs.As., 1997; Aronskid, Ricardo, *El país del desarrollo posible* en James, Daniel, (comp.), *Nueva Historia Argentina*, Sudamericana, tomo IX, Bs.As., 2003.

²⁹ Sobre este punto, ver el trabajo de Aronskid, Ricardo, ob.cit. *El país del desarrollo posible*.

³⁰ Este proceso implicó también un índice negativo en la tasa de crecimiento vegetativo de la población tucumana y permitió el rápido crecimiento de las tasas de pobreza y mortalidad infantil, así como la desaparición de muchos pueblos y ciudades dependientes de los ingenios. Ver Pavetti, Oscar ob.cit. *Azúcar y Estado....*; Healey, Mark, *El interior en disputa: proyectos de desarrollo y movimientos de protesta en las regiones extrapampeanas*, en James, Daniel, (comp.), *Nueva Historia Argentina*, Sudamericana, Tomo IX, Bs.As., 2003.

³¹ Bonano, Luis M. (coord.) ob.cit. *Estudios de Historia Social de Tucumán*, Facultad de Filosofía y Letras, Universidad Nacional de Tucumán, Tucumán, 2001.

³² *La Gazeta*, Tucumán, ediciones del 3, 10 y 17 de abril de 1968; Primera Plana, 16 y 23 de abril, 13 y 20 de agosto de 1968.

³³ Entre los planes paliativos, cabe destacar la decisión de crear un *Régimen de Trabajos Transitorios* cuyo objetivo era dar trabajo en la administración pública provincial a parte de los obreros azucareros cesanteados.

³⁴ Boneo, H; Cavarozzi, M; Lavergne, N y Picabea, G (1973). *Análisis y evaluación del plan de transformación agro-industrial de la provincia de Tucumán. Informe final. Serie técnica N° 17*, Consejo Federal de Inversiones, Buenos Aires, 1973. El hecho que los productores de menos de 3 hectáreas no participaran en el mercado legal no significaba que desaparecieran del mercado, sino que se creó un mercado negro en el que esos productores sin cupo vendían su producción a otros con cupo o a los ingenios, a valores que rondaban entre un tercio y la mitad del mercado oficial.

³⁵ Empresario, asesor, financista e influyente amigo personal de Juan Perón. Vivió en Madrid un largo exilio de 20 años. Presentó al futuro presidente Menem a Perón en 1964.

³⁶ Entrevista de Perón con Tomás Eloy Martínez para la revista *Primera Plana*, publicado el 30 de junio de 1966.

³⁷ Extractado de la entrevista concedida por Juan Perón a Bernardo Neustadt, publicado en la revista *Extra*, año IV, diciembre de 1968.

³⁸ El contenido de la cinta se reproduce en *Marcha* – semanario nacionalista y de izquierda independiente de Montevideo- del 29 de julio de 1966, cuyo ingreso a la Argentina es prohibido por decreto del día 26.

³⁹ Onganía era un teniente coronel dedicado a la equitación cuando Perón era derrocado por Lonardi. Ambos, Perón y Onganía, eran del arma de Caballería.

⁴⁰ En una carta dirigida a un amigo, Perón decía el 22 de julio, refiriéndose a Onganía: *"Creo que de este mozo habrá que decir lo que decía Agustín Álvarez de Lavalle: ¿Quién lo metió al general Lavalle a reformador institucional, asunto que no era del arma de Caballería?"*

⁴¹ John William Cooke fue el más importante ideólogo de la izquierda revolucionaria peronista, responsable de la penetración marxista en el Movimiento Nacional Peronista.

⁴² Alberte había sido edecán de Perón, su presencia era claramente identificable con un oficial de infantería. En 1945, cuando era teniente, intentó sublevar una compañía de Campo de Mayo para rescatar al coronel Perón, detenido en Martín García tras los sucesos del 9 y 10 de octubre de 1945. Había participado en la revuelta del general Juan José Valle el 9 de junio de 1956 y fue dado de baja del Ejército en aquella ocasión. Escapó de la represión asilándose en Brasil.

⁴³ El surgimiento de Onganía -bajo la presidencia de José María Guido- como jefe de la facción azul -de carácter legalista- se originó en el sorpresivo apoyo recibido por un grupo de coroneles entre los que se contaban: Manuel Laprida, Alcides López Aufranc, Julio Aguirre y José Herrera. Contando con el apoyo del coronel Alejandro A. Lanusse y el general Julio Alsogaray, constituyeron algo así como un Estado Mayor clandestino, con los coroneles Alejandro Lanusse, Jaime Toscano y Julio Hang a cargo de los departamentos de inteligencia, operaciones y logística respectivamente. El general Onganía había difundido hacia poco un memorándum en el que criticaba al Secretario de Guerra -por entonces Cornejo Saravia- por adoptar políticas que no comulgaban con la posición legalista y que, además, aumentaban las divisiones en el arma. Como consecuencia había sido relevado de su cargo y se encontraba en situación de disponibilidad y sin destino en su domicilio. En estas circunstancias este grupo de oficiales le hizo la invitación -que él aceptó- para liderar el *Movimiento Azul* en el Ejército.

⁴⁴ Los edecanes eran tres: Alfredo Saint James, un teniente coronel del arma de Caballería que ya había servido con él entre 1962 y 1965; el vice comodoro Hugo Moitre y el capitán de fragata Mario Olmos.

⁴⁵ Ricardo Dold estaba casado con Sara Elsa Onganía, hija del Presidente. Este matrimonio le dio nueve nietos

⁴⁶ Fue nombrado en reemplazo de Julio Alsogaray. Su carrera había sido muy distinguida y culminó cuando fue nombrado Secretario de Guerra, después del triunfo Azul.

⁴⁷ El Secretario General se tuteaba con el Presidente y tenía -como él- un dormitorio en la planta principal de la Casa de Gobierno.

⁴⁸ Onganía confió a Vidueiro buena parte de la racionalización administrativa del Estado. Uno de los primeros problemas que enfrentó fue el censo de empleados estatales y, como no se sabía cuántos empleados trabajaban en el Estado, Vidueiro encontró la fórmula para contar empleados públicos: los censaban cuando iban a cobrar.

⁴⁹ La influencia de Roberto Roth en las decisiones presidenciales fue sobreestimada. Se decía que -ya avanzado el gobierno de Onganía y frente a la renuncia de Krieger Vasena- el Presidente había delegado en él ofrecer el Ministerio de Economía al "alendista" Jorge Wehbe. Pero, si bien Roth no era el Rasputín de Onganía, tampoco era el Sancho Panza y, sí le cupo la difícil tarea de frenar los proyectos con los que el Presidente no estaba de acuerdo.

⁵⁰ La Ley de Ministerios 16.956 publicada el 27 de setiembre de 1966 reducía a los Ministerios de ocho a cinco, eran: Interior, Exterior, Economía y Trabajo, Defensa y Bienestar Social y aumentó a quince las Secretarías de Estado que tendrían a su cargo la administración los asuntos de la Nación. El presidente ponía así de manifiesto su intención de despachar los temas de gobierno a través del grupo de

Secretarías que actuaban en el ámbito de la presidencia. En el recién creado Ministerio de Bienestar Social se designó a Roberto Petracca, empresario del vidrio y de relación personal con el Presidente.

⁵¹ Ley 16.954 Sistema Nacional de Planeamiento y Acción para el Desarrollo del 30 de setiembre de 1966.

⁵² Ley 16.970 (Ley de Defensa Nacional) del 10 de octubre de 1966.

⁵³ Desde un punto de vista teórico ya hemos tratado la vinculación de la defensa nacional con el desarrollo acelerado en el capítulo 3 puntos 3.4 y 3.5.

⁵⁴ Esta intención del Presidente de mantenerse fuera del alcance de la presión militar fue más una expresión de deseos que un hecho real. Este punto de vista de considerar a su gobierno como legitimado civilmente fue ideado y sustentado por el Secretario General de Gobierno, Díaz Colodrero y apoyado por militares como el general Julio Alsogaray. Años más tarde –una vez derrocado- reconoció que la intervención a las universidades nacionales y el enfrentamiento con los intelectuales y la *intelligentzia* nacional había sido un error, que no compartió la decisión, que esta había sido una imposición militar y que este hecho le había restado apoyo inicial a su gobierno. La decisión política y de la intervención a las universidades fue tomada por el Ministro del Interior e interino de Educación doctor Enrique Martínez Paz, aunque este había presentado una débil oposición. La dirección operativa estuvo a cargo del Jefe de la Policía Federal general Mario Fonseca, quien tuvo una influencia definitiva en este tema sobre Onganía, sabiendo que el Presidente desconfiaba de las autoridades universitarias. Martínez Paz fue también un adalid de la causa corporativa con su insistencia de formar las *organizaciones básicas de la comunidad* en reemplazo de los partidos políticos. Cf. *La Nación* del 30 de julio de 1966 ofrece detalles de las acciones combinadas del Ejército y la Policía Federal en lo que se recordaría como “*La noche de los bastones largos*”.

⁵⁵ Declaraciones al *Economic Survey*, edición de la primera semana de julio 1966.

⁵⁶ En apelación al artículo 49 de su Carta Orgánica.

⁵⁷ El convenio se encontraba trabado desde 1963 por la cláusula jurisdiccional para litigios –fijada en el exterior- que avasallaba la soberanía nacional.

⁵⁸ Sobre el punto ver revista *Confirmado* del 6 de octubre de 1966.

⁵⁹ Tamborenea se había reunido el 14 de julio con los secretarios de la CGT, Francisco Prado y Rogelio Coria. Ese mismo día el funcionario se entrevistó con el secretario general de la Federación Gráfica Bonaerense, Hugo Nuñez y los señores Osvaldo Vignas y Héctor Iapichino. El 20 de julio los dirigentes de la CGT concurren al despacho del Ministro Salimei para entregar un resumen de las inquietudes de la entidad.

⁶⁰ Según la revista *Confirmado* del 20 de octubre de 1966, el Ejército había tenido participación en el nombramiento del Secretario de Vivienda, ingeniero García Olano; aceptaba el nombramiento de Díaz Colodrero en la Secretaría de Gobierno y disenta con el nombramiento de Roberto Petracca en Bienestar Social. A pesar de la evidencia el Presidente insistía en que las Fuerzas Armadas no debían intervenir ni participar en las acciones de gobierno.

⁶¹ Fue Pistarini quién pronunció el discurso de censura al gobierno constitucional del 29 de mayo de 1966 –frente al Presidente Illia- donde anticipaba públicamente la inminencia del golpe de estado.

⁶² Sospechaba de Pistarini que era –tal vez- el hombre que más había influido para su nombramiento como Presidente y colocó en su lugar al general Julio Alsogaray –hermano del ingeniero Álvaro Alsogaray- un hombre con amplia inclinación política. Lo que seguramente sucedió es que el nombramiento de Julio Alsogaray no significaba grandes movimientos en el tablero del generalato.

Seguramente también evaluó que Alsogaray había cargado con el costo de la destitución del Presidente Illia, y ese costo político debía ser recompensado. Sin embargo el cambio le produjo a Onganía más costos que beneficios y no está muy claro si alcanzó a advertirlo.

⁶³ Álvaro Alsogaray era un capitán ingeniero –devenido en economista- discípulo de Von Mises y Ludwig Herard. Era el propulsor del Instituto para la Economía Social de Mercado que, de hecho, funcionaba como el único comité político permitido por el gobierno. Alsogaray era un político extrovertido con una osadía que le permitía franquear límites, ya había sido Ministro de Economía del Presidente Frondizi, contaba con un hábil manejo dialéctico que le permitía una comunicación nada desdeñable con la opinión pública. El propio Ministro Salimei –a consecuencia del *incidente Tami*- debió pactar con él un *gentlemen's agreement* a fin de permanecer –aun que poco- en el poder.

⁶⁴ La rivalidad entre Álvaro Alsogaray y Felipe Tami había comenzado cuatro años antes -durante la presidencia de José María Guido- cuando Tami era el asesor económico del socialdemócrata Guillermo Fernández Gill. Esa rivalidad ideológica seguía vigente, y cuando Salimei aceptó (en el *gentlemen's agreement* indicado en la nota 63) ciertas ideas restrictivas de Alsogaray que colisionaban con la política de Tami en el BCRA, este debió abandonar la presidencia del BCRA y arrastró consigo la renuncia de todo su equipo: el vicepresidente segundo Eduardo Zalduendo; los asesores Alberto Petrecolla y Gustavo Miranda Gallino; el Síndico Francisco Valsecchi y hasta la del Interventor en el Consejo Federal de Inversiones, Alieto Guadagni. El conflicto se desató el 13 de agosto en una entrevista entre Salimei y Alsogaray, donde este criticó las opiniones de Tami que advertía que los indicadores de coyuntura indicaban que la etapa recesiva iniciada en 1965 se extendería hasta bien entrado 1967. Conociendo la política monetaria gradualista de Tami, Alsogaray le respondió que si el gobierno se comprometía a realizar un corte drástico del déficit él conseguiría 250 millones dólares en créditos en los Estados Unidos. Tami –antes de partir a la reunión de gobernadores del FMI, le elaboró un informe al Presidente sobre sus diferencias con Alsogaray antes que estas tomaran estado público. En un memorándum explicó a Onganía lo peligroso que sería comprimir fuertemente la expansión monetaria y liberalizar el mercado de cambios. Tami obtuvo, en esa oportunidad, el visto bueno de Onganía. Para ver más; *Primera Plana*, N°204 del 22 de noviembre de 1966: *Socialcristianos: después de la caída*, pgs 23 a 25.

⁶⁵ Ver Primera Plana N° 201 del 1° de noviembre de 1966, p.12

⁶⁶ El diario *La Razón* en su 6ta edición tituló “no hay liberalización del mercado de cambios: ha sido una devaluación”

⁶⁷ *Economic Survey*, edición del 9 de noviembre

⁶⁸ Primera Plana N° 203 del 15 de noviembre. P.12

⁶⁹ Uno de los empresarios extranjeros que participaron en la Bussines International – Aurelio Peccei de Olivetti International- reunidos por aquel momento en Buenos Aires, definió al ministro de esta manera: “Es un hombre de pensamiento netamente dirigista que se desespera por dar la imagen de un liberal”.

⁷⁰ La variación del PBI a costo de factores en 1966 comparado a 1965 fue del 0.7%. Datos BCRA *Sistema de Cuentas del producto e ingreso de la Argentina, Vol. II, cuadros estadísticos*, Buenos Aires, 1975. La variación 1966-1965 en la inversión interna bruta fue del -7.1% y la posición neta de reservas del BCRA era de 176.9 millones de dólares, que fueron menores a los 208.9 millones de dólares del mes de mayo de 1966, es decir, el mes anterior al golpe de Estado. El promedio mensual de costo de vida en el segundo semestre de 1966 fue de 3.5%; la tasa promedio de los últimos semestres de los dos años anteriores (1965 y 1966) fue del 3.3%, es decir casi sin variaciones. *Cf mismo cuadro*.

⁷¹ Las disparidades más notorias se dieron en la UOM que declaraba 219.000 afiliados y los veedores comprobaron 121.295; UPCN, daba 190.000 y 106.041; ATE, 150.000 frente a 70.000; UTA, 50.000 y 8.646; Mercantiles, 200.000 y 171.772; FOTIA, 36.354 y 19.142; SOMU, 20.000 y 13.117; solo en la UF

las diferencias fueron mínimas: 198.239 y 186.828. Ver *Análisis N°290 del 3 de octubre de 1966 y Análisis N°288 p.25.*

⁷² El Convenio Colectivo de Trabajo con los metalúrgicos fue firmado en presencia de Onganía en la Casa Rosada. Al tiempo que la UIA se quejaba de las presiones que decía haber recibido por parte de la Secretaría de Trabajo, que, poco más tarde le costarían el puesto al Secretario Tamborenea. En línea con este comentario hay que hacer notar que el 27 de agosto de se había sancionado la Ley de Arbitraje Obligatorio (Ley 16.936).

⁷³ En octubre de 1966 se eligieron nuevas autoridades de la CGT, no participaron el sector de Alonso y del Partido comunista; Prado fue reelecto Secretario General. A pesar de las tendencias –ya muy marcadas- a la resistencia de no pocos de sus propios sindicatos, las autoridades electas manifestaron su voluntad de dialogar con el gobierno y el empresariado y pidieron participar en el gobierno de la Revolución.

⁷⁴ *Primera Plana* N° 210 del 03 de enero de 1967, p.15 y 16.

⁷⁵ El coronel Guevara había sido nombrado por Onganía como Embajador en Colombia. Otro modo de retirarlo de la actividad política local.

⁷⁶ Estas ideas comunitarista era compartidas por el grupo Verbo que inspiraba el presbítero Raoul Grasset, ex asesor espiritual de la OAS y alguna vez confesor de Onganía. A Grasset se le atribuía el ingreso en el Gabinete del Secretario de Promoción y Acción Comunitaria, Roberto Gorostiaga.

⁷⁷ Álvaro Alsogaray –propulsor de un Consejo Regulador de Salarios y Precios- disintía fuertemente con un destacado jefe militar de preponderancia en aquel momento: el general de división Alcides López Aufranc, que defendía la creación de un Consejo de la Comunidad conformado por empresarios, organizaciones obreras de primer piso y organizaciones de la sociedad civil para reemplazar al Parlamento.

⁷⁸ Un solo grupo nacionalista había prestado un respaldo incondicional al Gobierno: el *Ateneo de la República*. El *Ateneo* representaba a una corriente nacionalista que se adhirió al Frondizi en 1959. Entre sus socios podían contarse al Canciller Nicanor Costa Méndez; el Embajador en Brasil, Mario Amadeo; el Secretario de Gobierno, Mario Díaz Colodrero; el Director de Política de la Cancillería, Enrique Peltzer; el Director de Asuntos Culturales de la Cancillería, Máximo Etchecopar y el Subsecretario de Gobierno, Enrique Pearson. Para ver más; *Primera Plana N°203 pp.18-20.*

⁷⁹ Un interesante artículo sobre el gobierno invisibles y los lobbies subyacentes en el régimen puede leerse en: *CGT, boletín n° 11* del 11 de julio de 1968, Buenos Aires.

⁸⁰ *El Ateneo de la República* cumplía una función asociadora entre los “partidos de la revolución” que se agolpaban en torno al Gobierno. Todos habían expresado su voluntad unificadora –aunque de distintas maneras- y todos tenían punto de contacto en el Ateneo. Díaz Colodrero, Secretario de Gobierno, parecía tener a su cargo la fundación, con todos estos elementos un “Partido de la Revolución”. No era un secreto que de este centro habían salido la mayoría de los funcionarios del nuevo gobierno. Este grupo había sido constituido a semejanza del *Club del Plata*, que funcionó en los días previos al motín de 1943 y de sus salones había surgido una amplia mayoría del funcionariado de entonces.

⁸¹ Curiosamente, en el *nacionalismo* milita un *grupo neoliberal*, el que edita la revista *El Príncipe* y que integran; Jorge Meyer, César Villamayor, Mario Sanguinetti, Carlos Quintero y Saturnino Zemboráin. Todos con fuertes contactos en el Ejército y la Marina. Se oponían a *los liberales clásicos*, conservadores o radicales y apoyaban –con restricciones- a Onganía, porque estimaban necesario un cambio absoluto de las estructuras dirigentes y del manejo de la economía nacional. Por principio, parecería absurdo que una tendencia liberal apoyara a un gobierno surgido por la fuerza. La explicación pareciera ser que como una *nueva derecha*, culpaban de todos los males al radicalismo y al peronismo,

que se habían enquistado en el poder con las herramientas políticas del liberalismo, entonces, era necesario una revolución conceptual para desalojarlos definitivamente.

⁸² Los fundamentos de la creación del Ministerio evidencian la importancia que ocupaba en el marco de este proyecto político, sobre todo en relación a los *aspectos desarrollistas* de la revolución en marcha. Al analizar cuál era la representación acerca de la política social que construía el gobierno se ve que la intervención social del Estado, si bien podía focalizarse en alguna necesidad material insatisfecha, siempre tenía un objetivo mayor relacionado con la *transformación estructural*: el desarrollo en un sentido amplio, es decir, económico, político, cultural, social y también *espiritual*. Todos estos aspectos debían estar presentes y anudados en cada acción que se realizara. Y si bien esto estaba, en parte, relacionado con el *clima revolucionario* en el que se creía inmerso el gobierno, también revelaba una de las características del *discurso comunitarista*. A la comunidad que se imaginaba, con sus *cuerpos intermedios* relacionándose armónica y naturalmente en busca del *bien común*, se le adjudicaba cierta incorruptibilidad originaria que los intereses económicos y políticos egoístas y particulares habían logrado corromper. En un Boletín del Ministerio de MBS de 1969 llamado “*El bienestar social como objetivo del desarrollo*” tomaban distancia crítica del asistencialismo, se estaba haciendo referencia a la manera en la que consideraban la política social del peronismo, con su carácter economicista y también clasista. En este sentido se enfatizaba el contraste entre las dos posibles maneras de pensar la intervención social: la *simplemente asistencialista* y la del *desarrollo social armónico y solidario*.

⁸³ Al asumir Julio E. Álvarez, tuvo como objetivo la creación de un Consejo Asesor de Bienestar Social integrado por estudiantes, obreros, empresarios profesionales, consumidores, amas de casa y jubilados. Ver Primera Plana N°250 del 10 de octubre de 1967.

⁸⁴ Como ya comentamos, Roberto Gorostiaga estuvo a cargo de esta Secretaría hasta enero de 1967, para ser reemplazado por Raúl Puigbó (1967-1969) conocedor del tema en cuestión, publicó; *La Evolución del Sindicalismo Argentino (1973)*; *Historia Social y Económica Argentina (1964)*; *La evolución del desarrollo de la comunidad (1973)* y, *Formas comunitarias de producción en América Latina (1976)*. Fue un militante nacionalista y participó de la *Alianza Libertadora Nacionalista*, politólogo y sociólogo, se doctoró en Ciencias Políticas en la U.N.L. y fue decano de la Facultad de Ciencias Políticas de la Universidad del Salvador. A Puigbó lo reemplazó –por un breve período- Pedro Martínez Segovia, quien, a su vez, fue reemplazado por Santiago de Estrada hasta junio de 1970 en el final de la gestión de Onganía. Santiago de Estrada volvió a ocupar el mismo cargo durante la última dictadura militar (1976-1983). En la instauración democrática, Raúl Alfonsín lo designó como Embajador ante la Santa Sede. Durante la presidencia de Carlos Menem estuvo a cargo del área de Seguridad Social del PAMI (1989-1991). En 1998 fue Subsecretario de Desarrollo Social. En el año 2000 comenzó su etapa de legislador porteño, presidiendo la legislatura desde el macrismo. De originaria formación social-cristiana, defendió –durante su gestión- el criterio de subsidiariedad del Estado y pugnó por el fortalecimiento de las organizaciones intermedias.

⁸⁵ El organismo que organizó y llevó adelante la política comunitaria durante la gobernación del general Francisco Imaz, fue la Dirección General de Asuntos Municipales –creada en enero de 1967- que en realidad cumplió con la tarea funcional de la omitida SEPAC en la provincia. Francisco Imaz fue un hombre fuerte del régimen, de orientación falangista y enemigo acérrimo del general Pedro Eugenio Aramburu. Durante la llamada Revolución Libertadora en setiembre de 1955, el presidente *de facto* Eduardo Lonardi fue relevado por Aramburu el 13 de setiembre mediante un golpe de palacio. La explicación que se dio en el comunicado oficial de renuncia y relevo de Lonardi era que: “*la crisis reciente del gobierno provisional se debía a la presencia -en el seno del mismo- de grupos influyentes en el espíritu del general Lonardi que orientaron su política hacia un extremismo totalitario, incomprensible con las convicciones democráticas de la Revolución Libertadora. Esas personas y no otras intentaban colocar a la Nación, en una peligrosa senda, a cuyo término solo podía esperarse una nueva dictadura*”. El comunicado fue el resultado de una lucha de facciones dentro del Ejército y las personas a las que aludía este comunicado oficial eran los más cercanos colaboradores de Lonardi: los generales León Bengoa, Eduardo Señorans, Juan José Valle, Mario Rubén Fonseca, Juan Tito Guevara y Francisco Imaz. Cuando Lonardi fallece –en marzo de 1956- los generales mencionados juraron vengarse al pié de

su tumba. Como se podrá notar, todos ellos fueron designados en altos cargos durante el gobierno de Onganía. Es decir, Onganía designó en los más altos cargos del Estado a viejos enemigos de Aramburu. Sin duda, el líder de ese grupo era el general Francisco Imaz. Esto destaca su importancia personal en las decisiones de gobierno en la provincia de Buenos Aires y –más tarde- en el Ministerio del Interior que tuvo a su cargo y donde le tocó actuar, justamente, durante el secuestro y muerte –a manos de Montoneros- de su enemigo: Pedro Eugenio Aramburu. Parte de este texto fue publicado por el diario *Tiempo Argentino* en su edición del 24 de octubre del 2010, bajo el título: *El debut armado de la guerrilla peronista*.

⁸⁶ Estas teorías conspirativas se manifiestan en algunos ensayos de corte periodísticos como es el caso de García Lupo; *Mercenarios y Monopolios en la Argentina...ob.cit.* de donde surge la idea del *partido secreto católico*.

⁸⁷ *Ciudad Católica* tuvo fuerte penetración en las FF.AA. Algunos de los principales jefes del Ejército, como los generales Eduardo Señorans, Eduardo Conesa y Francisco Imaz, adherían a la cosmovisión político-religiosa de ese grupo católico. En el caso concreto de CC, sus apreciaciones parecen siempre remitidas a la doctrina social de la Iglesia, a la necesidad de retornar al pasado hispánico en donde primaba la descentralización y una verdadera participación vecinal en los cabildos y a las disposiciones adoptadas por la Corona, previas a la llegada de los Borbones al trono. La CC apuntaba más a difamar el sustento contractualista del régimen liberal, el ideario comunitarista –ponderado como una vuelta a *las antiguas libertades*- contenía facetas políticas, económicas, sociales y morales interrelacionadas en un todo complementario. Se trataba de vencer al liberalismo por medio de la organización profesional y municipal, tal como era concebida por el grupo. La articulación de los intereses individuales con los grupales debía fundarse en la “*reedificación de la convivencia mediante la reconstrucción de los organismos intermedios autónomos de finalidad económico-profesional, creados libremente por los respectivos miembros, y no impuestos por el Estado*”. Así, los vínculos humanos se restablecerían en una comunidad estructurada en la que la intervención estatal quedaría restringida y los lazos sociales reposarían en los vínculos funcionales y la convivencia moral. Conforme con la propuesta tendiente a realzar la comunidad, la CC aplaudía las políticas concretas encaminadas hacia los productores y negociantes zonales, a través de los Centros de Estudios Municipales –CEM–, impulsados desde la SEPAC.

⁸⁸ Floreal Forli fue un sociólogo adscrito a la Universidad Católica Argentina y activo participante en las investigaciones del Centro de Cultura Urbana, una organización de buen prestigio en ese tiempo. Muy afecto a la actividad comunitaria, sostenía que “*la promoción de la comunidad era la manera de llevar adelante un programa de gobierno que mejore el nivel de vida, logrando para ello la participación activa del beneficiario*”. Luis Roggi era un joven sociólogo e investigador especializado en temas comunitarios, opinaba que el *comunitarismo era un proceso de educación social* destinado a capacitar al hombre para su participación libre y conciente en la estructura social a la que pertenece, y a la vez servir como un canal de participación popular en el proceso de desarrollo económico y social.

⁸⁹ El Sistema Nacional de Planeamiento puede vincularse con el Plan de Estabilización y Liberalización español de 1959 –aceptado por Franco a regañadientes- cuyos objetivos eran: detener la inflación, permitir el ingreso de capitales y dar más libertad al comercio exterior. Contempló una devaluación importante de la peseta e impuso también una tímida reforma fiscal.

⁹⁰ España también consiguió la ayuda del FMI y de la Organización Europea para la Cooperación Económica (OECE). A diferencia del programa de estabilización de Krieger, el plan español de estabilización tuvo malos resultados en el corto plazo: la productividad de las empresas cayó, el salario real se derrumbó, el costo de vida aumentó y el número de personas paradas se incrementó (durante

1959 el número de parados pasó de 91.000 a 200.000) y como consecuencia se produjo una emigración masiva. Los efectos positivos del plan comenzaron a notarse recién a mediados de 1961, es decir, a más de dos años de su implementación. El Plan de Estabilización de 1959 marcó el inicio del llamado "milagro español" (1963-1973) fue un período de gran crecimiento económico que terminó con la crisis del final del régimen franquista (1973-1975). En 1959, Franco incorporó al gobierno a los llamados *tecnócratas* cuyos principales exponentes fueron Alberto Navarro Rubio en el Ministerio de Hacienda y Alberto Ullastres en el Ministerio de Comercio junto a Laureano López Rodó en la Secretaría General Técnica de la Vicepresidencia (la vicepresidencia estaba a cargo del Alte. Carrero Blanco, sucesor inmediato del Generalísimo). Más tarde López Rodó sería designado Comisario de Ejecución del Plan de Estabilización; todos pertenecían al Opus Dei (Obra de Dios). Estos funcionarios –llamados *la tecnocracia*– fueron los autores y gestores del Plan de Estabilización y Liberalización de 1959 sancionado por el Decreto-Ley de Nueva Ordenación Económica del 21 de julio de 1959.

⁹¹ Polanyi, Karl; *La gran transformación. Crítica del liberalismo económico*. La Piqueta, Madrid, 1989, p.65.

⁹² *Ibidem*, p. 269.

⁹³ *Boletín Oficial* N°21461 del 21.06.68 p.5.

⁹⁴ Más tarde convertido en Departamento de Asuntos Indígenas (1969) dependiente siempre de la misma Secretaría y que, en 1970 paso a depender de la Dirección General de Protección Comunitaria. Esto señala la indefinición que ocuparon los indígenas dentro de la comunidad.

⁹⁵ *Boletín Oficial* N°21.461 del 21.06.68 p. 7

⁹⁶ *Ibid.* p. 9

⁹⁷ *Ibid.*, p. 10

⁹⁸ Junta de Gobernadores de la Región de Desarrollo Área Metropolitana, Buenos Aires, 5 y 6 de julio de 1967.

⁹⁹ Ministerio de Bienestar Social, *La participación social en el proceso de desarrollo de la comunidad*, La Plata, 1968, p.10

¹⁰⁰ Ministerio de Bienestar Social, *La participación social.....ob.cit.*, pp 13 a 20

¹⁰¹ Primera Plana N°250, del 10.10.67, p. 15.

¹⁰² Discurso pronunciado por el subsecretario del área Adolfo Critto, I Reunión Nacional de Promoción y Asistencia de la Comunidad, 27 al 31 de mayo de 1967.

¹⁰³ Primera Plana N°258, del 05.12.67, p. 14.

¹⁰⁴ El presidente visitó la provincia de Formosa y organizó en el Chaco la Reunión de Gobernadores de la Región Nordeste. Primera Plana N°228, 09.05.67, p. 12.

¹⁰⁵ El gobernador Imaz siguió muy de cerca el tema del desarrollo comunitario en su provincia. En una Junta de Intendentes, realizada en Dolores el 7 de marzo de 1967 afirmó: "*existen ciertas comunas que no han llegado a cumplir con plenitud los objetivos de la Revolución, y como de eso se trata, y no de la situación personal de cada uno de nosotros, probablemente algunos intendentes van a ser cambiados*". Aludía a Otto Lancelli de San Pedro; a Julio Ahumada de Pergamino y a Wilberto Wheler de Roque Pérez.

¹⁰⁶ Pollola –discípulo de Guevara- sostenía que los Consejos Deliberantes deberían representar al conjunto de asociaciones locales y prescindir de los partidos políticos.

¹⁰⁷ Primera Plana Nº 210 y 256 del 03.01.67 y del 21.11.67, p.18 y p.15

¹⁰⁸ Rafael Pividal nació en Buenos Aires en 1896 y falleció –en la misma ciudad- en 1945. Estudió derecho en la Universidad de Buenos Aires para luego partir a París, donde realizó su doctorado en Ciencias Políticas en la Sorbona. A su regreso fue profesor de Filosofía y ejerció la docencia en la Universidad de Buenos Aires como profesor adjunto. Reconocido referente del catolicismo, conoció a Maritain y estableció una duradera amistad con él. Autor de: El renacimiento del catolicismo en Francia (1931); Defensa de Maritain (1937); Católicos fascistas y católicos personalistas (1938); La balanza y la espada (1939); Orden Cristiano (1941)

¹⁰⁹ Para una profundización sobre la historia de la familia Alsogaray en Argentina, ver: *Revista Inédito*, Buenos Aires, 11 de octubre de 1967

¹¹⁰ Hay que recordar que Álvaro Alsogaray a diferencia de su hermano –el Tte.Gral. Julio Alsogaray- había sido un simpatizante del bando colorado en el enfrentamiento interno del Ejército en setiembre de 1962. Esta es una de las razones, quizá la más fuerte, por la que, el ahora Presidente Onganía –líder de la facción azul gananciosa-, lo había enviado a la embajada en USA.

¹¹¹ Ver; *Primera Plana Nº 211*; “comentarios de un general de división”, p. 12

¹¹² Para ver con profundidad el perfil empresarial de Adalberto Sully Krieger Vasena como representante de empresas extranjeras en la Argentina revisar: *CGT, Boletín informativo del 12 de diciembre de 1968*; donde se realiza un detallado análisis de las actividades del reciente ministro.

¹¹³ Finalmente solo 6 de los 23 Gobernadores provinciales fueron desplazados: en Corrientes, Revidatti fue reemplazado por Garay Sánchez; en Jujuy, el general Héctor Puente Pistarini fue reemplazado por Darío Arias; en La Pampa, el contraalmirante Elvio Gouzen en lugar del capitán de navío Carlos González; en La Rioja fue nombrado Guillermo Iribarren en cambio por el comodoro Julio Krause; en San Luis, el coronel Matías Laborda Ibarra reemplazó a Luis Garzo y; en el Chaco, el coronel Miguel Basail por el general Rafael Torrado.

¹¹⁴ El puesto de Ministro de Defensa estuvo vacante hasta ese momento y lo ejercía –interinamente- el Canciller Costa Méndez.

¹¹⁵ La permanencia de Antonio Lanusse –primo hermano del general y dueño de una afamada casa de remates ganaderos- pareció estar vinculada a la persistencia de la línea dura en el Gobierno, ratificada por el ascenso de su segundo –Victor Ressa- a la Secretaría de Transportes.

¹¹⁶ Ambos inscriptos en la extrema derecha junto a Martínez Paz, ministro saliente de Interior.

¹¹⁷ Si bien hasta hacía un tiempo los nacionalistas ortodoxos se mantenían alejados del *Ateneo de la República*, sus -casi en pugna- conductores habían logrado reconciliarse: Juan Carlos Goyeneche desde la entidad y Marcelo Sánchez Orondo luego de su expulsión. El acuerdo se había sellado con el nombramiento en la Presidencia de la entidad de Máximo Etchecopar, actual Director del Instituto del Servicio Exterior de la Nación. El propio Canciller Nicanor Costa Méndez había precedido a Etchecopar en la presidencia del *Ateneo*. Tal la influencia de esta agrupación en el funcionariado revolucionario.

¹¹⁸ Krieger ya había ocupado el cargo de Ministro de Hacienda durante la llamada “Revolución Libertadora” bajo el gobierno de Pedro Eugenio Aramburu, entre el 2 de mayo de 1957 y el 30 de abril de 1958 (el 1º de abril asumió Arturo Frondizi). Tuvo la influencia –en ese momento- del Dr. Raúl Prebisch quien en carácter de consultor aconsejara al gobierno de facto la política económica a seguir en el llamado “Informe Prebisch”. Al asumir Krieger como Ministro de Economía y Trabajo de Onganía hace

–casualmente– un diagnóstico sobre los males de la economía muy semejante al que hiciera Prebisch para Aramburu. En ambos casos el diagnóstico de la situación era: un lento ritmo de crecimiento del producto, inflación crónica, tensiones distributivas, mala infraestructura, una industria muy protegida y un gigantesco déficit fiscal.

¹¹⁹ Debe recordarse que un conflicto bélico con Brasil estaba presente en el escenario geopolítico de los militares de la época.

¹²⁰ Explícitamente, Krieger se inspira en la experiencia francesa de 1958, en la que Francia bajo la presidencia de De Gaulle atravesaba una situación parecida a la Argentina. Con el programa Rueff-Pinay –en conjunto con el FMI– establecen una importante devaluación –del orden del 40%– como política de shock previa a la estabilización. México había sufrido devaluaciones periódicas durante las décadas del 30 y del 40; luego del ajuste de 1954 con una fuerte devaluación del peso mexicano, disfrutó de un período de alto crecimiento económico y notable estabilidad, manteniendo el tipo de cambio de ME\$2,50 durante un período de 22 años.

¹²¹ Moyano Llerena, Carlos; *Vigencia de una visión*, Fundación Banco de Boston, Ed. Sudamericana, Buenos Aires, 1994, p.38 a 40.

¹²² Estas relaciones e influencia en el mundo empresarial y los organismos internacionales le permitieron a Krieger disponer de un importante caudal de poder político dentro del gobierno

¹²³ Sobre el carácter doctrinario de Moyano Llerena vale la pena ver las ideas desarrolladas en la Revista “*Panorama de la Economía Argentina*” publicada durante el período 1957-1970. Se puede ver su libro “*Vigencia de una visión*” Fundación Banco de Boston, Editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1994.

¹²⁴ Moyano Llerena venía analizando en la revista *Panorama de la Economía Argentina* los problemas de la economía argentina, en particular la inflación. Allí proponía lo que llamó “*acuerdo de precios*”. Luego Krieger le encargaría la misión de su implementación.

¹²⁵ Luis D’Imperio falleció en su despacho de un ataque cardíaco a los 9 días de asumir. Lo sucedieron rápidamente y en breves gestiones Carlos Becerra y César Bunge, pero fue finalmente Cayetano Lucciardo quien continuó en la función hasta la salida de Krieger.

¹²⁶ El equipo de Economía y Trabajo se completaba con una segunda línea de alta capacitación técnica y probada idoneidad como son: Ing. Jean Pierre Thibaud en la Subsecretaría de Combustibles; Ing. Carlos Robertson Lavalle en la Subsecretaría de Energía; Manuel San Miguel como Subsecretario de Economía Internacional; Enrique Carrier como Coordinador General del Ministerio y Alfredo Durán en la Secretaría de Prensa.

¹²⁷ Di Pietro, Sergio; *Seis décadas de Políticas Económicas en la República Argentina. Señales, logros, dudas y peligros de cada período. 1943-2003*. Ediciones Pueblos del Sur; Belgrano complejo educativo. Rosario, Argentina, 2004; cuadros e infografía pp.209 a 224

¹²⁸ O’Donell, Guillermo; *El estado burocrático autoritario 1966-1973*; Prometeo, 2009, Buenos Aires, Argentina; pp.61 a 66

¹²⁹ Política Económica Argentina. Ministerio de Economía y Trabajo, 1968, p. 106

¹³⁰ La Política Económica Argentina. Presidencia de la Nación, 1967, p. 29.

¹³¹ El muestrario proteccionista se componía de unos 200 escalones distintos que amparaban fuertemente a los 7.500 productos catalogados.

¹³² Krieger Vasena, Adalbert; *Anales de la Academia Nacional de Ciencias Económica*, VOL. XXXII (1987); *El Programa Económico Argentino 1966-1969*.

¹³³ Se gravó con un 1% y por un año a las propiedades urbanas y rurales que superaran los m\$ⁿ100.000.- de valuación fiscal; se ajustaron los impuestos internos y el impuesto a las ventas y los suentuarios llegaron a tasas de entre el 15% y 20%; se gravaron los aceites lubricantes con tasas de hasta m\$ⁿ 50.- por litro y se aumentó el precio de los combustibles. La participación de la Nación en los impuestos coparticipados con las provincias pasó del 54% al 59%. El impuesto a las ventas cambió su sistema de recaudación al método "pay as you go".

¹³⁴ Krieger Vasena, Adalbert; *Programa Económico.....ob.cit*; pp. 401 a 403.

¹³⁵ Las exportaciones no tradicionales aumentaron sus ingresos en un 22% y los precios de las importaciones se incrementaron alrededor de un 25%.

¹³⁶ FIEL, Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas, Buenos Aires, Boletín Estadístico del 21 de febrero de 1968.

¹³⁷ Krieger Vasena, Adalbert; "Argentina construye, Programa Económico para 1968". Alocución televisiva del 18 de enero de 1968.

¹³⁸ Para un análisis profundo de las relaciones entre el FMI y la Argentina ver: Brenta, Noemí; *FMI: Historia de la relaciones entre Argentina y el FMI*; Eudeba, Buenos Aires, 2013.

¹³⁹ Krieger Vasena, Adalbert: "Resultados en 1968 del esfuerzo Argentino y perspectivas para 1969". Discurso en la Bolsa de Comercio de Buenos Aires del 18 de noviembre de 1968; "Política de Ingresos para una nueva etapa en la Economía Nacional" en el discurso del 23 de noviembre de 1968; "Reseña del Programa Económico Argentino" en discurso en el CIAP el 17 de febrero de 1969, Washington D.C.

¹⁴⁰ Hacia el primer trimestre de 1969 –en los prolegómenos del Cordobazo- el crecimiento económico había alcanzado el techo de la capacidad industrial instalada y la desocupación –medida como porcentaje del total de la fuerza de trabajo- era del 4.5%: el registro más bajo del período 1966-1973 según datos del Ministerio de Economía y Trabajo. Esto cambió la situación de importante subutilización de la capacidad instalada de la que había partido Krieger y había creado un nuevo e inesperado problema al equipo económico.

¹⁴¹ "Hasta el 10 de noviembre de 1968, todos los enemigos del régimen estaban en la izquierda y en el centro. Desde ese día Onganía –que gobierna la Argentina sin limitaciones- se ha permitido el verdadero lujo de estrenar un nuevo frente de oposición. Los dueños de la tierra –el conjunto de intereses más poderoso del país- ha saltado a la escena para impedir que el gobierno nacional sancione un nuevo régimen de impuestos para la propiedad rural....."; García Lupo, Rogelio; *El general topa con la oligarquía*; artículo publicado en *Marcha*, Montevideo, 29 de noviembre de 1968. Reproducido en: García Lupo, Rogelio; *Mercenarios & Monopolios en la Argentina: de Onganía a Lanusse 1966-1971*; ed. Achával Solo, Buenos Aires, 1971.

¹⁴² Las políticas de Krieger Vasena a favor de la inversión tuvieron muy buenos efectos en 1969. En ese año, la mayor parte de las estadísticas como: PBI, inversión, precios, salarios y distribución de ingresos, mostraron signos muy positivos....Guido Di Tella; *Perón-Perón 1973-1976*; editorial Sudamericana, Buenos Aires, pág. 248.

¹⁴³ La ley de Entidades Financieras N° 18.061, fue sancionada el 15 de enero de 1969, durante la tercera etapa del programa.

¹⁴⁴ Para una mayor comprensión y detalle sobre las causas y efectos de la ley de Entidades Financieras N° 18061, puede acudir a: Arnaudo, Aldo; *Cincuenta años de política financiera argentina*. En nuestro

caso revisamos la versión preliminar para comentarios, editada en copia mimeográfica con permiso del autor por la Universidad de Córdoba en 1986, previa a la primera edición del libro.

¹⁴⁵ En contra de la opinión generalizada sobre la imposibilidad de que, un gobierno sujeto a elecciones periódicas de corto plazo, pueda resolver cuestiones económicas, este gobierno eligió un tipo de estrategia similar a los surgidos por elecciones sin estar sujeto al mismo tipo de restricciones.

¹⁴⁶ Que fuera propuesto por Felipe Tami, el socialdemócrata inicialmente a cargo del BCRA.

¹⁴⁷ En general, los economistas consideran que, para asegurar el éxito de un programa de estabilización, el período de reajuste y la transferencia necesaria de recursos no debe ser muy largo para evitar el debilitamiento del consenso político que se necesita para el proceso de estabilización.

¹⁴⁸ Alocución de Onganía del 24 de octubre de 1966.

¹⁴⁹ *“Esta estrategia no tiene carácter recesivoestoy convencido que nadie habrá de sufrir grandes padecimientos”*; declaración del Ministro Krieger Vasena; Ministerio de Economía y Trabajo, Informe Económico, pág. 27, Buenos Aires.

¹⁵⁰ A modo de anticipo, algunas de las ideas del *Plan de Estabilización, Normalización y Modernización*, pueden ya esbozarse de la conferencia pronunciada por Krieger Vasena el 18 de mayo de 1964 en el salón de actos del Colegio de Abogados de Buenos Aires, en un acto patrocinado por la Asociación Argentina de Derecho Fiscal, como parte del programa titulado *IV Jornadas Latinoamericanas de Derecho Tributario*.

¹⁵¹ Una lista completa de las medidas de política económica tomadas entre enero de 1967 y setiembre de 1968 puede verse en: *“La Argentina construye”*; Ministerio de Economía y Trabajo, programa económico para 1968, Buenos Aires, 1968.

¹⁵² Los porcentajes se calcularon sobre valores índices y no sobre precios de mercado, por lo tanto, los derechos de exportación no eran impuestos *ad valorem*, salvo que los valores índices y los precios de mercado –raramente- coincidieran.

¹⁵³ Nótese que, en general, no hay un efecto sustitución claro entre los bienes de capital de origen extranjero y los producidos en el país.

¹⁵⁴ Para un completo detalle sobre la incidencia de la reforma en los bienes de capital véase: FIEL (Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas); libro de FIEL N° 1, págs. 133-194.

¹⁵⁵ La dosis un poco excesiva en la devaluación ayudo mucho a frenar las expectativas inflacionarias y devaluatorias hacia el futuro.

¹⁵⁶ Recuérdese que, al mismo tiempo, se realizó el acuerdo de precios con los empresarios, que había quedado en manos de Moyano Llerena. De ahí la imposibilidad de trasladar a precios los aumentos fuera de la pauta (ley 17.224).

¹⁵⁷ A esos precios había que decrementarlos en un 3% que era el aporte con que cada sector contribuía al éxito del programa.

¹⁵⁸ Si bien la participación –por parte de las empresas- en el acuerdo de precio era voluntaria, les resultaba muy difícil no participar porque se corría el riesgo de quedar fuera de la cadena de valor del mercado.

¹⁵⁹ El acuerdo fue muy exitoso y para noviembre de 1967, un total de 1.961 participaban en el acuerdo y estaban en el listado todas las empresas productoras importantes del país.

¹⁶⁰ Una parte de estos encajes se difirió a 1969 porque los bancos, durante 1968, retuvieron una porción de las reservas excedentes.

¹⁶¹ De Pablo, Juan Carlos; *Política Antiinflacionaria en la Argentina, 1967-1970*; Amorrortu, Buenos Aires, 1970, pág.33

¹⁶² Debe tenerse en cuenta que -en el caso argentino- el elemento básico de la inflación de costos, está siempre proporcionado por los aumentos salariales nominales.

¹⁶³ Para una explicación sobre la cuestión de genuinidad de los ingresos de capital, puede verse la mecánica utilizada para estos casos en: De Pablo, Juan Carlos; *"El plan antiinflacionario del setenta y siete"*; Revista Desarrollo Económico N° 57, abril-junio de 1975; pág. 69.

¹⁶⁴ Algunos economistas opinaron que la expansión de corto plazo se debió, más que a las virtudes del plan, al hecho de haber sido iniciado este durante un período de estancamiento económico y no durante un período de rápida expansión. Además, el ingreso de capitales durante el segundo semestre de 1967 se dio bajo la forma de *hot money*, es decir de corto plazo, con lo cual había que cuidar las reservas para prevenir alguna posible salida rápida de los mismos.

¹⁶⁵ Esto parece significar que los ingresos de capital externo dirigidos a la inversión directa, estaban más relacionados con decisiones de inversión ya tomadas hacia algún tiempo, que a las bondades y expectativas del programa.

¹⁶⁶ O'Donnell, Guillermo; *El estado burocrático autoritario, ob.cit*; dice en relación a la balanza de capitales: *"Pero la principal contribución a esa mejora en la posición de divisas, se debió al ingreso de capital privado del exterior. Nada mejor para explicar la confianza del capital transnacional (y del que por ese medio repatriaban capitales residentes locales) que ese ingresos. Pero, también nada mejor para indicar las limitaciones de esa confianza.....porque los ingresos de capital privado extranjero en concepto de inversiones directas y préstamos a largo plazo fueron casi nulos.....la Argentina pasaba a ser una plaza atractiva para el capital financiero"*; pág. 159-160.

¹⁶⁷ Mallon, Richard y Sourrouille, Juan V.; *La política económica en una sociedad conflictiva. El caso argentino*; Amorrortu, Buenos Aires, 1973. Pág. 37-39.

¹⁶⁸ El programa de Krieger había sido -a todas luces- mucho menos ortodoxo que el de Campos-Bulhoes en el Brasil de 1964 y, sin duda, muchísimo menos que el de Chile post-1973.

Capítulo 5. *Las luces y las sombras: avances y desventuras del proyecto político y económico de la Revolución Argentina. Las acciones concretas de Gobierno.*

5.1. *En busca del tiempo perdido. El costo del desgaste y el segundo comienzo. Krieger Vasena y Guillermo Borda, la clave del nuevo gabinete.*

El 28 de diciembre de 1966, dos Ministros y cinco Secretarios de Estado abandonaban el gabinete, el Presidente no tuvo más remedio que despedirlos: se agotaba el plazo de medio año, que él mismo les había concedido para demostrar sus aptitudes¹ En ese instante, el desaliento –en casi todos los niveles del país- estaba alcanzando el pico mayor desde su llegada a la Presidencia. La malversación del segundo semestre de 1966, acortaba los tiempos de entrenamiento y experimentación del nuevo gabinete y, todas las expectativas estaban puestas en el primer trimestre del nuevo año (1967): el gobierno ya no podría mostrar –otra vez- las manos vacías: sin duda, la primera mitad de 1967 estaría marcada por el signo económico. Para marcar el clima del momento, el general Lanusse presentó –el 27 de febrero- un examen de la obra de gobierno, realizado por los altos mandos del Ejército, nombrando solo al Canciller Costa Méndez y al nuevo Ministro de Economía y Trabajo Krieger Vasena como figuras coherentes y de alta capacidad técnica. Cuando el Presidente decidió reemplazar al inexperto Salimei, le comentó al Canciller “*quiero que Krieger sea mi Ministro de Economía*”² Cuando Krieger recibió en Suiza –el 28 de diciembre de 1966, justo el día de los inocentes- la propuesta del portavoz oficial del presidente -Nicanor Costa Méndez- para asumir el Ministerio de Economía y Trabajo, sabía que se haría cargo de una tremenda superestructura (según decía el propio Costa Méndez el ministerio era un elefante blanco). Pero, finalmente, después de reunirse personalmente con el presidente –el martes 2 de enero del nuevo año- decidió aceptar el cargo. Previamente, había enviado al Presidente –el 29 de diciembre- un memorándum con un borrador de su programa económico y algunas condiciones mínimas para aceptar el cargo, el documento fue entregado a Onganía por el propio Costa Méndez. El Presidente lo leyó y consideró justas las condiciones –que no eran otras que la libertad de acción del futuro ministro- sus planes le parecieron muy apropiados para la Revolución y no dudó en designarlo en el cargo. Asumida la función, en veinticuatro horas Krieger cubrió todas las Secretarías de su ministerio: confirmó a cuatro secretarios renunciantes (Raggio, Aguilar, Gotelli y San Sebastián) y nombró a los tres restantes (Solá, Ressa y Loitegui). La más espectacular de sus designaciones fue –sin duda- la de Alberto Solá en la Secretaría de Industria y Comercio³. Otro antiguo colaborador de Krieger –Francisco Aguilar- había integrado el gabinete de Salimei y era un técnico que conocía muy las cuentas del país y un experto en presupuestos. Así comenzó la primera tarea concreta del nuevo Ministro. Quienes esperaban medidas

concretas tuvieron que esperar hasta marzo la presentación del *Programa de Estabilización, Desarrollo y Modernización* que ya hemos analizado. Por el momento el objetivo de Krieger era la confección del nuevo Presupuesto, tarea asignada, justamente, a Francisco Aguilar⁴. Pero: ¿Porqué el Presupuesto? Porque este era la piedra angular del *Plan de Estabilización* que anunció públicamente al poner en funciones al nuevo presidente del BCRA, Pedro Real. Por eso el Presupuesto era de tanta importancia, debería reflejar no solo una disminución en el gasto improductivo, sino también un incremento en las inversiones. Era probable que el déficit esperado para 1967 (de unos 90 mil millones de pesos) no variara, pero se trataría de absorberlo con recursos genuinos o financiamiento y reducir la proporción de los recursos inflacionarios. Con la permanencia de los funcionarios anteriores –ya confirmados- y de los nuevos designados, Krieger se aseguraba una revisión a fondo y sin demoras. Conscientes de la preponderancia del tema económico, dentro del PEN creció la consigna: *hay que dejar trabajar a Krieger*. El Ministro, trabajando contra reloj, preparó un esbozo del Presupuesto y del Plan Económico y partió hacia los Estados Unidos para restablecer el contacto con los organismos internacionales de crédito y la banca privada norteamericana. Poco más tarde (el 21 de febrero) se vieron los primeros frutos de su gestión: Felipe Herrera –Presidente del Banco Interamericano de Desarrollo- aprobó un paquete de préstamos por unos 85 millones de dólares. También a fines de febrero, Krieger lanzó un paquete de reforma impositiva que, si bien no era de fondo, implicaba aumentos del mínimo no imponible, un aumento de la alícuota del impuesto a las ventas y un inmobiliario de carácter excepcional⁵. El programa de Krieger –tal como se presentó en marzo de 1967- parecía un plan de manual, relativamente sencillo, pero sus implicaciones eran profundas. La operación quirúrgica que proponía sin duda traería secuelas y, –para el propio Krieger- era verdaderamente arriesgado y, había algunos antecedentes que harían temer, incluso, por la propia estabilidad del Ministro⁶.

Otro de los Ministros clave del régimen –Guillermo Borda en el Ministerio del Interior- provenía de una familia radical y reconocía su adhesión peronista⁷. Esta vocación peronista podía haberle ocasionado antipatías en el seno del Gobierno, pero no fue así, incluso las Fuerzas Armadas recibieron bien su designación –tal vez- por su conocido corte nacionalista. Su método de trabajo era el diálogo, y su voluntad era reunir –en torno al Gobierno- las opiniones necesarias para consolidarlo, un ideal al que muchos Ministros de esa cartera aspiraron, pero que pocos pudieron lograr. Borda estaba en esa cartera para avenir criterios dispares –un arte que solo dominan los políticos- porque a solo seis meses del golpe, el Gobierno seguía huérfano de sustentación. La apertura que intentaría Borda incluye a gremialistas y empresarios y no deja de lado a dirigentes de las viejas agrupaciones nacionales (léase dirigentes de la política partidaria) confrontando con el apoliticismo que proclamaba su antecesor (Martínez Paz). Esto parecía un indicio del propósito de comprometer al Gobierno con la realidad, de proporcionarle alianzas con otras fuerzas y cuadros militantes, no solo funcionarios y

administradores. Esta actitud manifiesta, además, las contradicciones en las que había venido debatiéndose el régimen, con la mezcla de premisas que aún lo inundaban y con el choque de tendencias –que aún no se había apagado- dentro de él. Borda heredaba los males que le había infligido al país la falta de un conductor político y de una meta política resumida en la falta de ideología. Las revoluciones, a falta de representatividad electoral, necesitan apoyo popular, algo que el Ministro sabía hacía mucho tiempo⁸, y le preocupaba el éxodo de los simpatizantes de Onganía hacia las antípodas de la Revolución, lo alarmaba la orfandad política en que se hundía el Gobierno. Esto era explicable: todo poder surgido de forma ajena a la voluntad popular –es decir por fuera del sistema *partidocrático* de la democracia liberal expresada en forma de comicios- necesita de un grupo político auxiliar, un movimiento que exprese entre sus gobernados, las ideas y los objetivos del Estado, a la vez, debe ser un instrumento idóneo para transmitir –hacia la cúspide- las aspiraciones populares. Hasta ese momento, el Gobierno surgido del pronunciamiento del 28 de junio- rebosaba de funcionarios y técnicos, pero carecía de militantes. Maneja la administración pública, pero le faltaba un partido –propio o ajeno- que aportara el consentimiento –siquiera- de una fracción del país. Su antecesor había intentado armarlo con su idea: modificar totalmente la estructura institucional del país, otorgar representatividad a las *organizaciones intermedias, sociedades de fomentos y cooperativas*, en resumen; las *organizaciones comunitarias*, para conferirles actos de gobierno en sus propias esferas. A estas alturas, parecía evidente que ese viaje hacia la *organización comunitaria* se había precipitado junto con Martínez Paz: era una pirueta institucional, aunque tentadora y atractiva, muy difícil de implementar y demasiado riesgosa. Para Borda, la revolución tenía un justificativo histórico en el fracaso de los sectores liberales antiperonistas y también en el propio Perón, que durante diez años no habían podido llegar a un acuerdo para darle gobernabilidad al país. Perón no había dejado –en estos diez años- de enfrentar a todos los gobiernos tejiendo alianzas y pactos políticos y gremiales para desestabilizar al gobierno de turno. Es aquí donde la función de Borda adquiere relieve: era necesario producir una síntesis de todo lo que era rescatable en la política argentina, se tratara de quien se trate. Por supuesto que era de una tarea política de largo aliento, pero esas eran las bases políticas reales sobre las que había que fundar la revolución. Todo dependía del asentimiento que le prestaran los factores de poder real: gremios, políticos, empresas, regiones; algo que implicaba una dinámica de acuerdos siempre renovada. Sin embargo, la disolución de los partidos era un hecho y solo podía pensarse en una conciliación de voluntades en torno de un programa de reconstrucción nacional. La llegada de Borda al Ministerio era un hecho político interno de la revolución, la victoria, al menos provisional, de la línea más flexible que integraban Mario Díaz Colodrero, desde la Secretaría General de Gobierno, Nicanor Costa Méndez desde la Cancillería y Rubens San Sebastián desde la Secretaría de Trabajo; contra los duros salientes, Martínez Paz de Interior y Salimei de Economía y Trabajo. El éxito del actual gabinete dependía – antes que nada- de una inteligencia muy coordinada entre Krieger Vasena y el propio

Borda, a la que debían subordinarse las decisiones políticas para articular el modo y la oportunidad en la introducción de las reformas pensadas por el Gobierno. Lo que no se sabía aún era como Borda concretaría su nueva política de gran alianza para alcanzar su objetivo: bien podría aprovechar las simpatías de Krieger por el sistema francés de planificación sugiriéndole la creación de un *Consejo Económico Social* representativo de las fuerzas vivas, los factores de poder y los grupos de presión donde se debatirían las decisiones de gobierno y donde los políticos pudieran actuar como una especie de *Consejo Asesor*. O podría propiciar la reforma constitucional previa a un llamado a elecciones que serviría para legitimar a Onganía en el poder por el voto popular. O bien, si Borda carecía de un plan específico que fuera más allá de la apertura del diálogo. Lo que sí se sabía, era que el Ministro no contaba con una carta blanca auténtica aún. El Presidente le había contrariado el deseo de relevar a todo el elenco de mandatarios provinciales, como ya explicamos en el capítulo anterior, solo seis de los veintitrés gobernadores fueron reemplazados. Pero de los seis nuevos nombramientos, uno contaba con su simpatía y apoyo: el gobernador de La Rioja Guillermo Iribarren –un ex candidato a Senador- por su permanencia en la provincia coincidían las fuerzas vivas y los funcionarios del Gobierno Nacional⁹. Pero el Ministro Borda exhibió algunas actitudes que parecían demostrar el acuerdo social que pregonaba: se reunió con delegaciones de la CGT y de la CGE y con la Federación Agraria; también hizo lo propio –en plena huelga ferroviaria- con la UF y La Fraternidad; un hecho que le acarreó no pocas críticas de los sectores duros del Gobierno. La gran política a la que aspiraba el Ministro, implicaba salir de los despachos oficiales y conquistar las adhesiones en la propia fuente de los acontecimientos: la dinámica que ponía de manifiesto se imbricaba con el corto tiempo que restaba para obtener resultados.

5.2. Obras Públicas: del programa a los hechos. La asignación presupuestaria y el financiamiento.

El Presidente y Krieger habían recibido ya –en la última semana del año 1967- los ejemplares de un informe que la Secretaría de Obras Públicas (SEOP) les elevó y que resumía la actividad cumplida por la cartera durante ese año y las que cumpliría en el transcurso de 1968. Acaso el Secretario de Obras Públicas –Bernando Loitegui- haya sido uno de los pocos capaces de afrontar, sin problemas, un balance de sus realizaciones, tal vez, porque siempre es más fácil invertir y más difícil recaudar. La innovación recaudadora –plasmada en la Ley de Peaje- había dado una fisonomía novedosa al rubro¹⁰. Para Loitegui esta era la única manera de romper el cuello de botella en que se encontraba la infraestructura del país. La razón: el Estado no contaba con el financiamiento suficiente para acometer la tarea¹¹. El Secretario ya había propuesto a la Casa Rosada otros proyectos de ley como: a) Caminos de Fomento Agrícola para la reparación y construcción de caminos interiores por medio de un

consorcio que integraran los propios agricultores y el Gobierno; para ese fin, el BCRA debería retener el 0.50% de las exportaciones provenientes del sector agrícola. Esto debería aplicarse una vez aliviada las cargas de las actuales retenciones a la exportación. b) Ley de Vialidad que apuntaba a redistribuir el impuesto a las naftas – aplicado a la construcción de caminos- también sobre los demás combustibles y aceites lubricantes. c) Ley de Obras Públicas, iniciativa de los Ministros provinciales del ramo, que consistía en uniformar los sistemas de contratación de los trabajos. Loitegui¹² –un ingeniero en caminos con buena vocación organizativa- creó, en la órbita de la Secretaría, dos Direcciones suplementarias: la Dirección de la Zona Metropolitana y la de Servicio de Peaje. Estas se agregaron a las cinco tradicionales: Arquitectura, Obras Sanitaria (OSN), Construcciones Portuarias, Vialidad (VN) y Elevadores de Granos. Por supuesto que la cercana amistad Krieger-Loitegui facilita su gestión y el común criterio en materia de gastos, facilita la aplicación de los recursos, así, durante 1967 se licitan trabajos por 19.600 millones de pesos; hasta fines de 1967 se licitarán otros 33.850 millones, haciendo un total de 53.450 millones para ese año. Es decir, unos 15 mil millones de dólares aplicados al rubro de Obras Públicas, lo que significaba un 14% más para el rubro, que el asignado por el Presupuesto Nacional de 1965. Estos recursos serían aplicados: en Vialidad Nacional (VN) una partida extra de 9.500 millones de pesos para recuperación y construcción de rutas nacionales, a su vez, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) contribuía con 33 millones de dólares para tender el puente Barranqueras-Corrientes y los empalmes de la ruta 34 con Bolivia de la ruta 7 con Chile. En el primer semestre (1967) fueron concluidos el puente sobre el río Colastiné (provincia de Santa Fe) e el tercer tramo de acceso norte a la Capital Federal y partes de la ruta 188 y 35; se iniciaron el cuarto y quinto tramo del acceso norte y la conexión con Pilar. Se comenzó el estudio de la traza del acceso oeste que presentaba serias dificultades de expropiación. Al presupuesto de Obras Sanitarias se le adicionaron 6.000 mil millones de pesos correspondientes al Plan de Emergencia gestionado por Loitegui, que tendía a proveer a 70 ciudades y 19 provincias de infraestructura demorada, básicamente: cañerías alimentadoras de agua, colectores generales de cloacas y el ensanchamiento de otras redes domiciliarias. A un tiempo, avanzaba la construcción del río subterráneo que, partiendo de la Capital Federal, se extendía hasta Lanús y proveería 700 mil metros cúbicos más a varios partidos del sur. Con créditos del por 17 millones de dólares se licitaron y pusieron en marcha obras para la construcción de Elevadores de Granos en las grandes terminales portuarias de Ingeniero White y Bahía Blanca. La Dirección de Arquitectura puso marcha obras por 2.900 millones de pesos, aplicados a escuelas, hospitales y nuevas oficinas públicas a lo largo de todo el país. Este año también se inicia la obra preparatoria de las dos mayores obras públicas de esta gestión: la represa de El Chocón-Río Colorado y el Túnel Subfluvial Hernandarias que uniría la provincia de Santa Fe con la de Corrientes integrando definitivamente a la Mesopotamia con el territorio nacional¹³. Se finalizaron las obras, y se puso en marcha, la presa de Río Hondo, que es la llave que regulará el caudal del Río Dulce en Santiago

del Estero, que posibilitaría rescatar más de 100 mil hectáreas de tierras áridas para ser entregadas a la colonización. En usinas térmicas generadoras de energía se comienzan los trabajos de la Usina de Concepción del Uruguay (Entre Ríos) con lo que se agregaría una potencia instalada de 15 mil kilovatios. Lo propio se realizó para la Usina Sorrento, en Santa Fe, con una ampliación de 35 mil Kw; a la usina de Barranquera (Chaco) se le agregaron 30 mil Kw nuevos y se agregó una pequeña central nueva en Pueblo Viejo (Tucumán) que entregará solo 7.200 Kw. La Subsecretaría de Construcciones Portuarias fue la más magra en la asignación de presupuesto y ejecución de obras: asignó a la Administración General de Puertos (AGP) un exiguo presupuesto de 6.900 millones de pesos para el estudio de racionalización de las condiciones de ejecución de tareas y 1.400 millones para la ejecución de obras imprescindibles de reparación y mantenimiento que pedían los 70 puertos del país¹⁴. En cambio, en lo que hace a Vías Navegables, la SEOP, parece haber hecho mucho más: obtuvo la profundidad de 28 pies y un ancho de 50 metros para actualizar y adecuar las condiciones de navegabilidad en el canal de ingreso al Puerto de Buenos Aires (Canal Mitre); en Punta de Indio se logró mantener la profundidad de 29 pies en una franja de 100 metros de amplitud¹⁵. Loitegui creó también un Laboratorio Nacional de Hidráulica, destinado a estudiar los regímenes de los ríos argentinos e instaló al Comité Técnico Metropolitano: con la participación de los Gobiernos de Entre Ríos, Buenos Aires y la Comuna porteña, el organismo sería el encargado de coordinar los planes de obras públicas de la región.

5.2.1. Las disyuntivas y críticas sobre el Presupuesto 1968.

La inclusión –en el Presupuesto de 1968- de una inversión para el desarrollo acelerado de obras públicas de unos 300 mil millones de pesos trajo no poca polémica. El presupuesto 1968 tenía previsto –inicialmente- un déficit de unos 100 mil millones (en moneda corriente) que –como se advierte- era producido casi enteramente por el programa de obras¹⁶¹⁷. Es que –en la Argentina- suele prestarse más atención al nivel del déficit fiscal que a la estructura del gasto, siendo que, el primero, solo gravita como factor inflacionario en condiciones de pleno empleo de la economía (que, por cierto, no eran las del momento por) y el segundo siempre influye como factor fundamental del crecimiento, y en última instancia, de la estabilidad. Se ve aquí el rasgo heterodoxo de la política presupuestaria de Krieger que coincidía –parcialmente- con la opinión del Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES) y contrariaba a los grupos liberales más duros, representados por la Cámara Argentina de Comercio, la Unión Industrial Argentina y la Sociedad Rural que presionaban por contraer el gasto público improductivo en el corto plazo, reducir los gravámenes para posibilitar la capitalización rápida del sector privado y acelerar la racionalización administrativa para reducir el gasto corriente, evitando el financiamiento del déficit por parte del BCRA; argumentaban que toda expansión monetaria por parte del BCRA al Tesoro, restringía la posibilidad de

expansión privada a través de los bancos y que –mientras el Tesoro continúe recurriendo al BCRA- no podrían bajar los efectivos mínimos, se mantendrían las distorsiones del sistema financiero y no bajarían suficientemente las tasas de interés. Sin embargo, el IDES, no es benévolo con el último año de conducción económica, cuando considera –en su informe- que la situación de la economía argentina se caracterizaba por un agudo desempleo de los factores productivos, una extraordinaria discrepancia entre la estructura de precios relativos internos y los precios internacionales y una inflación –aunque morigerada por la aplicación del Plan de Estabilización- que aún resultaba alta para los estándares internacionales. Paradójicamente, el IDES coincidía con las entidades empresariales cuando opinaba que la política fiscal había gravitado negativamente sobre la demanda global y formula observaciones sobre los resultados de una incierta política de ingresos en función a un progresivo aflojamiento de los derechos de exportación, la incidencia negativa de la capacidad ociosa en la eficiencia de la economía y la ausencia de medidas para reducir los márgenes de comercialización. Esto sucedió justo cuando Krieger –en una nueva muestra de heterodoxia- implementó una breve política coyuntural de precios máximos para algunos productos sensibles. Como siempre, no se puede conformar a todos al mismo tiempo, siempre hay que optar: los precios siempre fueron un problema complejo y de difícil solución. Tampoco la Fundación de Investigaciones Económicas Latinoamericanas (FIEL) dejó de opinar sobre el tema impositivo y presupuestario¹⁸. Acertaba en su crítica a Krieger por no haber modificado –en forma alguna- la estructura regresiva y deficiente del sistema tributario argentino y al sostener que la insistencia acerca de que la inflación era un efecto de las expectativas, había servido para mantener un régimen de impuesto a los réditos en el que las empresas se veían obligadas a pagar impuestos sobre ganancias inflacionarias, que en muchos casos habían sido pérdidas reales, lo que significaba un verdadero impuesto al capital. Los desencuentros de ambos institutos – IDES y FIEL- se producían en relación a la transitoria y controversial política de precios máximos implementada por Krieger, que horrorizaba a FIEL, porque creía que la propensión marginal al consumo – que según ellos conspiraba contra el plan de estabilización- que crecía día a día impulsada por la imposibilidad de defender los ahorros contra la inflación generaba una anticipación del gasto, a veces destinado a un consumo superfluo. Pero esta misma política de control de precios era bien recibida por IDES que la consideraba una medida para acotar los márgenes de comercialización, muchas veces excesivos en la intermediación. Las críticas no impactaban en los asesores del Krieger: según uno de los artífices del proyecto presupuestario, las previsiones presupuestarias para 1968 consistirían en reducir el gasto corriente a los niveles de 1967, aumentar la inversión pública en un 50% para mantener un importante factor de promoción del desarrollo –en un año que se esperaba algo recesivo- y reducir el déficit a solo 50 mil millones de pesos¹⁹.

5.2.2. La Obra Pública: una cuestión estratégica.

El impulso de la obra pública fue –sin duda- una de las medidas principales del plan económico implementado por Krieger. Sin embargo, los diversos planes diseñados durante su paso por el Ministerio se mantuvieron e incluso se ampliaron a lo largo de las distintas gestiones gubernamentales que le sucedieron hasta 1976. En este sentido, es posible afirmar que las obras ejecutadas y los proyectos que dejó, constituyeron un legado que hizo que la obra pública alcanzara en aquellos años el rango de una intervención estratégica de largo plazo. Esta decisión –tomada a nivel nacional- daba claras señales a los agentes económicos privados de la preocupación gubernamental por mejorar las condiciones de reproducción del capital, por eso, las principales obras públicas se orientaron a sectores estratégicos y de infraestructura; tales como caminos, puentes, represas, diques, puertos, viviendas y escuelas. La decisión de poner en marcha esta política implicó que, ciertas reparticiones estatales –como Vialidad Nacional (VN) y el BHN- pasaran a jugar un rol relevante como administradoras del proyecto y la ejecución que –debido a su envergadura y al volumen inusitado de obras- - llevaría varios años. Ahora bien, el total de obras proyectadas podría clasificarse en varios rubros, el primero y más destacado de ellos eran los denominados grandes emprendimientos que cambiarían la dotación de la infraestructura del país para propulsar su desarrollo, y eran muy importantes, no solo por su enorme impacto económico, sino también, por cuestiones de estrategia geopolítica; entre ellas se destacaron:

- 1) La conformación de Hidroeléctrica Norpatagónica (HIDRONOR) mediante el Decreto 7925/67 creada para el proyecto, ejecución y explotación de la represa hidroeléctrica El Chocón-Río Colorado en la región del Comahue²⁰.
- 2) La realización de obras de urbanización en la costanera norte de Buenos Aires, a través del Decreto-Ley 17.344/67.
- 3) La construcción del Puente Internacional sobre el río Pilcomayo, en forma conjunta con Paraguay, mediante las leyes 17.345/67 y 17.346/67.
- 4) Ampliación de la red de subterráneos de la ciudad de Buenos Aires, por medio de la Ley 17.510/67.
- 5) La aprobación del Convenio Puente Paysandú –Colón, suscripto con Uruguay el 8 de julio de 1968 y promulgado por Ley 17.959/68, para concretar la ejecución del puente.
- 6) Ampliación de la central Térmica en Zapala, provincia del Neuquén.
- 7) La construcción de la represa del Embalse General Belgrano, en Cabra Corral, provincia de Salta.
- 8) La elaboración del proyecto y el inicio de ejecución para construir la Central Nuclear de Atucha, provincia de Buenos Aires.
- 9) La construcción de la represa de Salto Grande, en la provincia de Entre Ríos.
- 10) La construcción de la represa de Futaleufú, en Chubut.

En otros rubros, puede verse que la obra vial creció notablemente a partir de 1968, en coincidencia con el lanzamiento del Plan Vial Trienal 1968-1970, elaborado en forma conjunta por la Dirección Nacional de Vialidad (DNV) y el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) que se instrumentó mediante la Ley 17.961/68²¹. La construcción de viviendas a cargo del BHN también se incrementó –significativamente– cuando en octubre de 1968 se implementó el Plan Federal de Viviendas. Estas obras estaban financiadas principalmente por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y se distribuían en todo el territorio nacional. Si bien se trata de obras de menor envergadura económica comparadas con las del rubro anterior, hay que destacar la importancia que estas tenían por los efectos positivos que generaron sobre el nivel de empleo y sobre todas las ramas de las industrias vinculadas a la construcción.

5.3. La promoción de las ramas estratégicas de la industria.

Para promocionar el desarrollo del sector industrial, el Estado orientó sus intervenciones estratégicas en dos direcciones complementarias. Por un lado, apoyó a las empresas industriales privadas existentes a través de diferentes mecanismos de promoción como: líneas de financiamiento a tasas preferenciales, concesiones impositivas (diferimiento de impuestos y/o desgravaciones) y participación directa del Estado en el paquete accionario de las firmas. Por otro lado fomentó la creación de nuevas empresas industriales –privadas, mixtas y estatales– para que operaran en las ramas que, por entonces, se consideraban estratégicas. Estas intervenciones, sumadas a la realización de las grandes obras de infraestructura y al otorgamiento de beneficios tendientes a estimular las exportaciones industriales no tradicionales (líneas de pre-financiamiento, avales, acuerdos comerciales de apertura o ampliación de mercados) constituyeron los pilares de la política de fomento industrial de la época. Todos los gobiernos de 1966 hasta 1975, mantuvieron –con distinto énfasis– estas medidas para superar las restricciones que se habían generado en la dinámica de acumulación durante los primeros años de la segunda fase de la estrategia sustitutiva²². Entre 1967 y 1969 la política industrial estuvo signada por criterios *eficientistas*; la idea era priorizar solo aquellas actividades complejas que, generalmente, estaban a cargo de grandes firmas nacionales o extranjeras, de esta forma, se buscaba incrementar el grado de concentración en el sector a manos de los más importantes. Pero, al mismo tiempo y contradiciendo estos mismos preceptos *eficientistas*, se implementó una Ley de Rehabilitación de Empresas (Nº 17.507/67) como modo de evitar las quiebras de las empresas privadas que se encontraban en serios problemas financieros o en cesación de pagos. Este régimen de beneficios otorgado por el Estado, tenía como contrapartida un mayor control del Estado sobre las empresas. La idea era destinar esas ventajas hacia aquellas empresas consideradas relevantes por su tipo de actividad o por sus aspectos regionales o sus implicancias sociales. Durante los años de Onganía, los

principales funcionarios del área económica creían en la idea de armar *polos de desarrollo* que permitieran concentrar la aplicación de los medios disponibles en pocos lugares seleccionados, que por su localización y dotación de infraestructura –tanto física como económica y social- fuesen grandes centros potenciales de desarrollo económico²³. Fue en esos años que se concibieron los grandes proyectos industriales en los sectores siderúrgicos, celulósicos y petroquímicos, que se concretarían –más tarde- en otra gestión gubernamental. Efectivamente, como ejemplo, fue durante el gobierno peronista (1973-1976) que se puso en funcionamiento el *Complejo Petroquímico General Mosconi*. Para tener una idea, baste señalar que el Estado impulsó –entre 1966 y 1973- la creación de, al menos, 15 grandes emprendimientos industriales que requirieron una enorme inversión en activos fijos, todos en las ramas consideradas claves para el desarrollo nacional (celulosa, petroquímica y siderurgia)²⁴. Más de la mitad fueron empresas de capital privado nacional pertenecientes a los grupos más importantes del país y, -en menor medida- mixtas, estatales o de capital extranjero, como, por ejemplo, el *Polo Petroquímico de Bahía Blanca*²⁵. Entre todos los proyectos encarados durante esos años, se destacó el caso de PBB, ya sea por la magnitud del proyecto como por la complejidad operativa del mismo y porque puede pensarse como el tipo ideal de emprendimiento fuertemente promocionado por el accionar estatal para integrar cadenas de valor y desarrollar zonas geográficas económicamente postergadas²⁶.

El instrumento clave para el financiamiento industrial durante la gestión de Krieger fue –por entonces- el Banco Industrial de la República Argentina (BIRA 1967-1979). En este período se favoreció a las empresas privadas existentes, tanto para la ampliación de los activos fijos como para la financiación de operaciones relacionadas con la provisión de bienes y servicios a las empresas públicas o reparticiones estatales. Con la implementación de líneas de crédito específicas y promocionadas, el Estado esperaba promover la ampliación de mercados, ciertas mejoras tecnológicas y la generación de economías a escala que permitieran optimizar los costos de producción de las empresas. En este sentido, el BIRA, juntamente con el CONADE y la Secretaría de Industria, estableció una serie de actividades consideradas prioritarias para la promoción industrial, a fin de orientar los créditos hacia los sectores petroquímicos, celulósicos, construcciones, reparación de material ferroviario, construcción de plantas industriales, fabricación de maquinaria vial y otros sectores considerados de importancia estratégica; la mayoría de estos créditos –naturalmente- eran otorgados a largo plazo con el fin de financiar activos fijos. También se hizo un amplio uso de líneas de crédito con el exterior –con participación del EXIMBANK- para facilitar la incorporación de maquinarias importadas –nuevas o usadas- para la instalación de plantas industriales, o para su reequipamiento o ampliación²⁷. Sin embargo, en la práctica y a pesar de la normativa, la mayoría de estas líneas terminaron utilizándose para financiar operaciones de empresas que proveían bienes y servicios al sector público, es decir, que las empresas acudían al

financiamiento público para abastecer al sector público y esto resultó en una verdadera desviación en la orientación de los fondos disponibles del BIRA. En efecto, a pesar que la propia normativa del BIRA, aconsejaba –explícitamente- que para la provisión al Estado fuera la banca comercial la que financiara, la entidad terminó desestimando estas prescripciones y flexibilizó los créditos a las empresas²⁸. Ejemplo claro de esto es que el régimen de préstamos para financiar las ventas a plazo de bienes de producción nacional a organismos oficiales, se mantuvo hasta mediados de 1968²⁹. Para comprender este particular comportamiento de la entidad crediticia hay que tener en cuenta que los mismos miembros del empresariado –al mismo tiempo- ocupaban posiciones de importancia en la función pública y -en su mayoría –sobre todo en el período 1967-1968- ocupaban los cargos directivos de la entidad crediticia³⁰. A partir de 1970 –bajo el breve interludio de Levingston- el BIRA fue convertido en el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) por Ley N° 18.899/70. En definitiva, el ingreso de inversión extranjera directa (IED) –bajo la forma de *greenfield*- al que apuntaba la gestión de Krieger para obtener el *socio capitalista* propulsor del desarrollo no sucedió, ya que este ingreso de capitales tomó la forma de *hot-money*, es decir, que el BCRA debió asistir –en el corto plazo- a la salida de los mismos en caso de inestabilidad política o económica (cosa que sucedió a partir de junio de 1969). Por su parte, el giro nacionalista implementado por Levingston (a cargo de Aldo Ferrer) tampoco logró los frutos esperados: la mayoría de las inversiones en activo fijo realizada por capitales nacionales durante su gestión estuvieron fuertemente subsidiados por el Estado.

5.4. La política nuclear.

Si bien Argentina –a principios de la década de 1960- ya contaba con dos reactores de investigación, el hito histórico de la energía nuclear en Argentina se produjo el 17 de enero de 1958, cuando el primer reactor atómico –el RA-1- alcanzó el estado crítico. Este reactor y sus elementos combustibles habían sido producidos en el país a partir de los planos que consiguió Quihillat del reactor tipo Argonaut, que había sido desarrollado apenas hacía unos meses en el Argonne National Laboratory de Chicago (EE.UU). Al poco tiempo, el know-how de los elementos combustibles del nuevo reactor fueron vendidos a la empresa alemana Degussa-Leybold en lo que fue la primera venta de tecnología nuclear de la Argentina³¹. Hacia 1960, alrededor de 20 graduados ya habían pasado por lo menos dos años en laboratorios como el Physical Metallurgy Department de la University of Birmingham, el Max Planck Institut für Metallforschung en Stuttgart, la Ecoles des Mines en París o la Metallurgy Division del Argonne National Laboratory. La división Metalurgia -fundada por Jorge Sábato- contaba por entonces con 25 científicos, 50 técnicos, 1.500 metros cuadrados de instalaciones y más de 40 millones de pesos en equipo³². En diciembre de 1966 fue terminado el RA-2, diseñado para realizar estudios preliminares que permitieran la construcción de un reactor de mayor potencia³³. Esto se

concretó con la inauguración del RA-3, en diciembre de 1967, en el Centro Atómico de Ezeiza³⁴. En los años siguientes se trabajó en modificaciones del RA-1 y el RA-3³⁵. En noviembre de 1969, la República Federal de Alemania donó un cuarto reactor de investigaciones Siemens SUR 100, que –finalmente- fue instalado en la facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Rosario en 1972³⁶. La equivocada decisión del gobierno de Onganía (que ya comentamos en el capítulo anterior) de intervenir las Universidades públicas, si bien produjo el éxodo de prestigiosos científicos no afectó en forma directa a la CNEA que –sin embargo- padeció el declinamiento general de las actividades científicas³⁷.

Para 1964 ya estaba instalada la posibilidad de construir la primera planta nuclear de potencia. La CNEA contó para esto con la asistencia de la *Commisariat à l'Energie Atomique* de Francia para determinar la factibilidad del proyecto. Con los informes previos de la CEPAL y de la IAEA (Agencia Internacional de Energía Atómica), los expertos franceses concluyeron que –para 1972- serían necesarios en Buenos Aires –que se encontraba muy alejado de las fuentes de potencia hidroeléctrica- entre 300 y 500 MW de potencia nuclear. Aceptadas las estimaciones que afirmaban que la potencia eléctrica del Gran Buenos Aires-Litoral se incrementaría en 1.300 MW en el período 1966-1972, se decidió que la central nuclear debía instalarse en esa región. La CNEA propuso no contratar una empresa extranjera para que realizara el informe de factibilidad y fue autorizada a realizarlo con su propio personal³⁸. El informe de factibilidad fue realizado en poco más de un año, y fue marcadamente favorable a la instalación de una planta nuclear de entre 300 y 500 MW, en el área de Atucha 100 km al noroeste de la capital federal. Antes del llamado a ofertas la CNEA ya había considerado una desventaja decisiva la utilización de reactores alimentados a uranio enriquecido, por el hecho que este combustible tenía un solo proveedor: los Estados Unidos. Si bien el uranio enriquecido no fue descartado, se pensó en favorecer las ofertas basadas en reactores alimentados con uranio natural³⁹. El uso de agua pesada también implicaba cierta dependencia del exterior pero, se trataba de un compromiso a corto plazo, mientras que la necesidad de uranio enriquecido implicaba un compromiso mayor y de mucho más largo plazo. Una menor dependencia compensaría el mayor costo de los reactores a uranio natural. Finalmente, debido a que la Argentina no era rica (por las reservas conocidas entonces) en fuentes convencionales de energía como petróleo, gas o carbón, la posibilidad de incorporar fuentes de uranio natural local fue considerada un paso a la diversificación de las fuentes de energía⁴⁰.

El último día de julio de 1967, diecisiete ofertas habían sido presentadas por compañías francesas, canadienses, alemanas y estadounidenses. El proceso de selección fue conducido por el mismo grupo que había estado a cargo del proyecto de factibilidad. La decisión fue elevada al PEN en diciembre. La selección favoreció a la alemana Siemens que ofreció el 100% de financiamiento incluido los costos locales. La característica más desfavorable de la elección era que la central ofrecida sería la primera en su tipo. La

firma alemana solo contaba con un prototipo en operación de 50 MW y esta central sería de 300 MW, casi siete veces su potencia. El costo de la planta era de 70 millones de dólares, pero, el agua pesada y el combustible no estaban incluidos, con este adicional el costo se elevaba a 105 millones. Finalmente, el 31 de mayo de 1968 la CENEA y Siemens suscribieron el contrato para la construcción e instalación de una central eléctrica de 319.000 KW de potencia neta (319 MW) alimentada por un reactor nuclear, que debería entrar en funcionamiento el 15 de julio de 1972 en Atucha, un paraje sobre el río Paraná de las Palmas, distante unos 100 kms de la Ciudad de Buenos Aires. En palabras de Sábato: *“La firma de este contrato es el hecho de mayor importancia ocurrido en el desarrollo de la energía atómica en la Argentina y constituye una etapa fundamental del proceso de inserción de la ciencia y la tecnología nucleares en la trama misma de esta sociedad”*⁴¹.

5.4.1. El ingreso al Club Atómico: átomos para la paz?

Salvo por algunas ambigüedades o expresiones desafortunadas efectuadas durante el período dominado por la figura de Richter, la Argentina insistió, desde un principio, que su programa nuclear contemplaba únicamente aplicaciones pacíficas⁴². Sin embargo, la enérgica defensa que Argentina realizó –desde mediados de la década de 1960 hasta 1980- ante los foros internacionales a favor de mantener abierta la posibilidad de realizar explosiones con fines pacíficos significó una permanente fuente de conflicto. Un elemento de tensión fue la percepción argentina del problema nuclear relacionado con el pensamiento geopolítico en una época en que, buena parte de América Latina había quedado en manos de gobiernos militares⁴³. La característica clave que dominaba la perspectiva geopolítica argentina –al menos hasta la primera década de 1980- fue el expansionismo de Brasil y la rivalidad histórica en la carrera por el liderazgo y la hegemonía en el Cono Sur⁴⁴⁻⁴⁵. Pero, la Argentina participó en el proceso de desnuclearización de América Latina que se originó en la declaración –formulada en abril de 1963- por los presidentes de Bolivia, Brasil, Chile, Ecuador y México, por la que se comprometían a no fabricar, recibir, almacenar ni ensayar armas nucleares. El entonces presidente constitucional –José María Guido- respondió a la invitación en el mes de julio. La Argentina se encontró entre los firmantes del anteproyecto de resolución titulado “desnuclearización de la América Latina” que fue tratado y aprobado por la Asamblea General de las Naciones Unidas en noviembre de 1963⁴⁶. Luego de largas y complicadas negociaciones a lo largo de tres años, el 14 de febrero de 1967, se abrió a la firma el Tratado para la Proscripción de las Armas Nucleares en la América Latina – Tratado de Tlatelolco- que la Argentina suscribió finalmente el 27 de febrero de 1967⁴⁷. Antes de la firma del Tratado, sin embargo, en el seno del COPREDAL (Comité Preparatorio para la Desnuclearización de América Latina) se había discutido intensamente la definición de que era un arma nuclear. Este punto dio como resultado el

artículo 5 del Tratado, donde se decía que no solo el artefacto debía ser susceptible de liberar energía nuclear en forma no controlada, sino que también debía tener “un conjunto de características propias del empleo con fines bélicos”. Esta última condición era fundamental para países como Argentina y Brasil, que buscaban preservar el derecho a desarrollar y emplear explosivos nucleares con fines pacíficos. Desde el mismo día de la aprobación del Tratado de Tlatelolco, el artículo 18, combinado con el 1 y el 5 fueron objeto de controversias. No quedaba claro si el Tratado autorizaba las explosiones pacíficas o si esto ocurriría solo cuando existiera un mecanismo para distinguirlas de la explosiones con fines bélicos. Para no dejar dudas de su posición, el gobierno argentino, al suscribir el Tratado formuló una declaración. Sostuvo que el artículo 18 *“reconoce el derecho de las partes contratantes a realizar, por sus propios medios o en asociación con terceros, explosiones de dispositivos nucleares con fines pacíficos, inclusive explosiones que presupongan artefactos similares a los empleados en el armamento nuclear”*⁴⁸.

El Tratado de No Proliferación de Armas Nucleares (TNP) fue discutido en Ginebra en julio de 1967 y Argentina –a pesar de los esfuerzos- no logró formar parte del Comité de Desarme (conformado por dieciocho naciones). Un año más tarde –en julio de 1968- el TNP se abrió a la firma con las abstenciones de Argentina, Brasil, India, Israel, Pakistán y Sudáfrica, entre otros. Resultaba claro que el TNP, mientras no planteaba problemas para países que no habían logrado un desarrollo apreciable en el terreno nuclear, al mismo tiempo, representaba un verdadero conflicto para aquellos pocos países que poseían una industria nuclear relativamente avanzada y que no eran capaces de ninguna alianza militar. A este grupo pertenecían la Argentina, Brasil o la India, que habían creído –durante la década de 1950- el discurso de las potencias industriales respecto de las promesas y las potencialidades de la energía nuclear. Ahora, cuando los sacrificios parecían comenzar a rendir sus frutos, el TNP exigía de ellos los mayores renunciamientos. El presidente de la CNEA (Oscar Quihillalt) que había sido electo para el año 1968 como presidente del Consejo de Gobernadores de IAEA, pensó que una posición de rechazo al TPN podía ser un paso peligroso para el programa nuclear argentino. Quihillalt se reunió entonces con Onganía y Costa Méndez para convencerlos de que Argentina adhiriera al TPN, pero sin resultados concretos. En tanto, Costa Méndez había viajado –a principios de 1968- a Brasil para tratar de discutir una estrategia conjunta frente a la inminente conferencia de la U.N. (Naciones Unidas) en que se discutiría el TPN. En 1969 se creó la Organización para la Prohibición de Armas Nucleares en América Latina (OPANAL) con el objeto de asegurar el cumplimiento del Tratado de Tlatelolco, la Argentina resolvió negociar con la IAEA un acuerdo de salvaguarda antes de ratificar el Tratado. La negociación finalmente fracasó porque se volvía a repetir la controversia sobre la posibilidad de realizar explosiones pacíficas. Hay que comprender que el TNP era anterior y distinto del Tratado y no podía imponerse a

este un sistema de salvaguarda derivado del TNP⁴⁹. La Argentina dejaría pasar muchos años antes de ratificar el Tratado⁵⁰.

El balance en el terreno de la energía nuclear al comienzo de la nueva década era que – a comienzos de 1970- de los 10 reactores de investigación instalados en América Latina, 4 de ellos se encontraban en Argentina y 3 en Brasil. Todos operaban con uranio enriquecido provisto por los Estados Unidos. En 1967, mientras se llevaban a cabo las negociaciones por la central Atucha I, la CNEA había iniciado el estudio de factibilidad de una segunda central del doble de potencia, destinada a proveer de electricidad a la región central del país. Así que al inicio de 1971, además de la construcción de la central de Atucha, de 320 MW, la segunda central nuclear –de 600 MW- se encontraba en proceso de licitación y la tercera –de 1.000 MW- estaba programada para 1979, es decir hacia fines de la década. Para ese entonces, Levingston era el presidente que aprobaría estos planes y Lanusse –que lo reemplazó al poco tiempo- anunció que la segunda central de potencia –a un costo aproximado a los 150 millones de dólares- sería construida en Rio Tercero, provincia de Córdoba. A fines de la década de 1960, las autoridades de la CNEA entendieron que uno de los aspectos más positivos que podían exponer ante la comunidad internacional en Ginebra era su capacidad de formación de científicos y técnicos. Para ese entonces, el Instituto Balseiro⁵¹ se había convertido en el principal centro de formación de físicos en el área nuclear y era uno de los Institutos más prestigiosos en América Latina y uno de los mejores del mundo.

5.5. La reforma educativa

La ideología propia de la derecha católica en la Argentina, siempre había propiciado la descentralización y privatización del sistema educativo y, sobre todo, la privatización escolar primaria y secundaria. Bajo Onganía, esta voluntad reformista se expresaría en el avance de la reforma de cada uno de los espacios educativos, con la significación y las formas institucionales que eran consecuencia de la idea de racionalización administrativa, eje central de las primeras etapas del gobierno. La primera avanzada se dio en la Universidad y fue marcado por dos hitos: a) La intervención a las Universidades nacionales –el 1º de agosto de 1966- a menos de dos meses de la asunción de Onganía (un tema ya tratado en este trabajo) y; b) La sanción de la Ley Orgánica de Universidades, casi un año después⁵². El 5 de setiembre de 1968 se sancionó la Ley N° 17.878 que posibilitó la descentralización del sistema educativo, autorizando al PEN a transferir establecimientos escolares primarios a la órbita de las provincias⁵³. Esta cesión implicaba que la Nación trasladaba el control sobre los establecimientos primarios, es decir, el dominio del inmueble y todas sus instalaciones a cada una de las provincias. Este proceder se hacía extensivo a los contratos de locación, obras y contratos edilicios. De esta manera, las provincias, incorporaron unos 1.180 nuevos establecimientos,

registrando la mayor incorporación de establecimientos –entre años- hasta ese momento⁵⁴. Si bien esta descentralización se fundaba en criterios eficientistas, la idea última era alentar un proceso de descentralización y la decisión más profunda apuntaba a llevarlo hasta la mínima esfera de poder territorial, no ya a las provincias, sino, llevar a la inmediatez el gobierno escolar, es decir, a los municipios⁵⁵. En octubre de 1968 – mediante la Resolución N° 994- se dio a conocer una nueva estructura para el sistema educativo primario. El punto central del cambio consistió en la reducción de la escuela primaria a 5 años y la creación de un ciclo de 4 años denominado “escuela intermedia” que incorporaba los dos últimos años de la escuela primaria más los dos primeros de la antigua secundaria, la escolaridad obligatoria se extendía dos años, pasando de siete a nueve. Posteriormente –en 1970- se sancionó la Ley Orgánica cuya misión era dotar de un carácter más abarcativo y ordenado al proceso de reforma que se venía implementando en esos años. El proyecto de “escuela intermedia” no alcanzó a desarrollarse debido a la oposición docente y fue desarticulado en 1971⁵⁶. También en el área de educación para adultos se encararon varios programas de reforma; entre ellos, el Programa Regional de Desarrollo Educativo y el Plan Experimental Multinacional de Educación de Adultos. Se crearon diferentes centros educativos como los Centros Educativos Comunitarios (CEC), los Centros Educativos Móviles (CEM), los Centros Educativos de Nivel Secundario (CENS)⁵⁷. Con relación a la formación de docentes, con la sanción de la Resolución N° 1.111 del 1° de noviembre de 1968, se suprimió la inscripción al primer año del ciclo del magisterio de la Escuelas Normales, un mes después –el Decreto N° 8.051 del 16 de diciembre de 1968- lo suprimía definitivamente y daba lugar a la reforma en este ámbito. Esta consistió en el pasaje de la formación de los maestros –que se desarrollaba hasta entonces en el nivel medio- al nivel superior. De esta manera, la formación docente, fue prácticamente tercerizada. La resolución N° 2.321/70 –sancionada el 2 de octubre de ese año- dotó de una estructura y un plan de estudios a los nuevos *Institutos Superiores de Formación Docente* y en mayo de 1971 comenzaron a funcionar 116 nuevos institutos en todo el país⁵⁸.

El proceso de reformas iniciado por la Revolución Argentina –como una intervención política de larga duración- implicaba la necesidad de conocer aquello que se pretendía reformar. En el área educativa esta tarea fue impulsada –fundamentalmente- por la Oficina del sector Educación del CONADE. Esta Oficina se encargó de elaborar estudios sistemáticos donde se exploraba la totalidad de los aspectos que componían el sistema educativo: población escolar, origen de clase de los alumnos, rendimiento del sistema (repetencia y deserción) docentes, estado de los edificios, gasto y presupuesto educativo, entre otros. Durante Onganía esta información se dio a conocer a través del documento *Educación, Recursos Humanos y Desarrollo Económico y social del año 1968*. Este documento –bajo la apariencia de un diagnóstico técnico- observó negativamente la capacitación docente, entendiendo que no tenía los contenidos de modernidad, etiquetando la práctica docente como insuficiente. El diagnóstico del equipo de trabajo

esta Oficina ya había propuesto y acompañado la transferencia a las provincias del nivel primario y había decidido el avance sobre una paulatina transferencia del nivel medio. En el marco político del régimen de Onganía, el pasaje a nivel terciario pretendía profesionalizar la formación por la vía de la prolongación en el tiempo, ya que se requerían dos años más de permanencia en los institutos, para una mayor adecuación pedagógica. Se buscaba enfatizar el carácter profesional del trabajo docente, implementando una capacitación específica habilitante en el manejo de técnicas y conocimientos instrumentales que garantizaran una labor educativa más eficaz. La idea central de que se nutrían estas reformas era la pretensión de una mayor profesionalización. En los hechos, esta Oficina actuó como una verdadera usina de ideas para la formulación de una intervención de largo plazo a través de políticas públicas concretas. Hay que puntualizar que, la Oficina del Sector Educación se inició al mismo tiempo que el CONADE y tuvo un fuerte influjo sobre todos los gobiernos –tanto constitucionales como de facto– a partir de su fundación⁵⁹.

5.5.1. La reforma en la Universidad

Uno de los problemas más identificados y referenciados de las universidades nacionales era su alto grado de politización y, en este sentido, fue sancionada la Ley N° 16.912 que establecía el gobierno provisional de las universidades nacionales. Dentro de esta ley pueden destacarse dos puntos; por un lado, si bien se establecía que los rectores y decanos de las facultades permanecían en sus funciones, estos solo asumirían tareas administrativas. El Ministerio de Educación ejercería directamente las funciones establecidas y reservadas por el Estatuto Universitario. Asimismo, el ejercicio de las tareas administrativas por parte del personal directivo de las universidades, no sería inmediato, esto quedaba supeditado a que los rectores y decanos confirmaran –dentro de las 48 horas siguientes a la promulgación de la ley, la asunción de las tareas que esta les confiaba (ya hemos desarrollado con detalle este punto en capítulo anterior). El segundo punto medular de la ley giraba en torno a la prohibición de los centros de estudiantes a realizar cualquier tipo de actividad política, bajo pena de disolución. Este marco legal se sancionó después de la represión del 29 de julio de 1966 conocida como “la noche de los bastones largos”⁶⁰. En su acta de asunción, la Revolución Argentina ya había alertado sobre el peligro de la infiltración marxista en algunos estamentos sociales y específicamente en la universidad, no es de extrañar entonces, que una semana después de la incursión policial se encaminara a encontrar una solución que le permitiera combatir la politización estudiantil en forma más general, creando el 4 de agosto (1966) un Consejo Asesor de la Enseñanza Universitaria Oficial (decreto N° 543/66), cuya misión consistía en la elaboración –en un plazo no mayor a sesenta días– de un proyecto de Ley de Universidades Nacionales. El proyecto se convirtió en ley el 25 de abril de 1967 con el nombre de Ley Orgánica de Universidades Nacionales (Ley N°

17.245). En ella se indicaba que la meta en materia universitaria sería restituir los fines “cabales” de las universidades, *“haciendo cesar el estado de subversión interna que las desgarraban, eliminando los factores que pretendían transformarlas en focos de perturbación pública”*. La ley tendía a establecer una serie de equilibrios; por ejemplo, se defendía la autonomía, pero también se incluían mecanismo de intervención del PEN en aquellos casos en que resultara necesario (arts.6 y 7). La ley fijaba claramente cuáles eran los fines de la universidad: en primer lugar, *“la formación de universitarios capaces de actuar con responsabilidad y patriotismo al servicio de la Nación”* (art.2). Su acción debía orientarse con *“auténtico sentido social, al servicios de los intereses fundamentales de la Nación y contribuir a afianzar el espíritu cívico”*. Las universidades debían, también, atender las necesidades regionales y generales del país, vinculándose estrechamente con la realidad de su medio. El art.10 explícitamente establecía: *“Prohíbese en los recintos universitarios toda actividad que asuma formas de militancia, agitación, propaganda, proselitismo o adoctrinamiento de carácter político”*. La alteración de la norma, autorizaba, legalmente, al ingreso policial a los claustros si la autoridad nacional lo consideraba necesario. También permitía el cesanteo de docentes con “incompatibilidad moral” (art. 34 d). Para el estudiantado, la prohibición alcanzaba tanto las formas escritas como las orales, las asambleas, las demostraciones y las reuniones informales (art.98). En los órganos a gobierno solo participaban los rectores, decanos y profesores siempre y cuando fueran de nacionalidad argentina. Los profesores copaban los siete asientos del Consejo Académico, cinco titulares y dos adjuntos (arts. 43 a 64). El estudiantado podía tener un delegado con voz pero sin voto en las sesiones, solo podían ser elegidos alumnos con los dos tercios de la carrera aprobados y con promedio equivalente a bueno. Se incluyó también el curso o el examen de ingreso a las carreras (arts. 81 y 82) y se perdía la condición de alumno regular si no se aprobaba al menos una materia por año lectivo (art.88). Las autoridades quedaban facultadas para arancelar las materias recursadas o la no aprobación de una cantidad mínima de ellas, como así también los exámenes repetidos de materias no aprobadas (art. 92). Estos ingresos irían a parar a un fondo financiero universitario liberado de impuestos, que podía destinarse a becas de estudiantes no pudientes que tuvieran calificaciones destacadas (art.105).Se organizaron las carreras por ciclos de titulación independiente y en algunos casos (aun de grado) consecutivos (art.85) promoviéndose la departamentalización y la agrupación de materias afines en una unidad pedagógica. Coherente con la sanción de la Ley Orgánica fue seguida –meses más tarde- por la Ley N° 17.401 del 25 de agosto de 1967 de represión al comunismo; allí se establecía, por ejemplo, que la calificación de comunista estaba a cargo de la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE)⁶¹. Un año más tarde –hacia julio de 1968- fueron aprobados los Estatutos de las Universidades Nacionales (Decreto N° 1.529) donde se retomaron todos los puntos de la Ley Orgánica⁶². Algunos de los problemas más serios que acarrearba la universidad de la época eran: a) el altísimo índice de abandonos: solo en la UBA sobre una matrícula cercana a los cien mil alumnos inscriptos se producían unos cuarenta y siete mil casos

de deserciones, lo que equivalía a un índice del 47%, un verdadero despropósito. En la universidad de La Plata ese indicador era muy parecido al de la UBA, trepaba al 42.5%; b) un altísimo índice de estudiantes crónicos (unos 70 mil) que significaban un enorme despilfarro de recursos humanos y financieros. Algunas universidades producían -como profesionales- apenas el 12% de los ingresados el primer año. Sin embargo, el problema residía en otro lugar: mientras que el secundario argentino enviaba a las universidades el 82% de sus egresados, en los EE.UU esta proporción alcanzaba apenas al 35%. Es decir que los egresados del secundario se desviaban en exceso hacia estudios universitarios en desmedro de otros tipos de formaciones terciarias o especializadas; c) una configuración absurda de la matrícula con una sobrepoblación –muy desmedida- en las carreras tradicionales (medicina, abogacía, ciencias sociales) incompatible con las necesidades de un país que debería privilegiar la orientación del estudiantado hacia profesionales en ciencias más duras con prioridad en la investigación aplicada (ingenierías, químicas, economía, ciencias exactas y biología)⁶³. No obstante, si bien estas eran razones para explicar las desviaciones y deserciones del sistema, las universidades tenían una estructura sumamente rígida, lo que explicaba que las decisiones desacertadas en materia de la elección equivocada de carreras fueran muy difíciles de corregir. Por ejemplo las universidades carecían de un cuerpo de consejeros pre-universitarios para el asesoramiento del futuro estudiante. Entre las soluciones aportadas estaba la organización de ciclos cortos, con otorgamiento de títulos intermedios (tecnicaturas) que permitieran un rápido y seguro ingreso en el mundo del trabajo. Al mismo tiempo, había que flexibilizar los planes de estudio para facilitar el sistema de pasaje de los alumnos entre las universidades. En la reforma había que desalentar la formación de universidades sobredimensionadas –como la UBA- promoviendo la creación de universidades regionales que permitieran generar centros de estudio de no más de 15 a 20 mil estudiantes; en este caso se generaba un efecto colateral no deseado como era la formación de un cuerpo de profesores estable en la región. Como toda esta ambiciosa reforma requería tiempo y financiamiento, la Oficina para el Sector educativo del CONADE había propuesto solicitar la asociación y la asistencia técnica y financiera de la UNESCO, el BID, la OEA y la OCDE. Esta colaboración internacional –tan común en los '90- en la década de 1960 era toda una innovación. Como vimos, la reforma en el ámbito universitario –lejos de ser un producto improvisado- se valió de diversos estudios y cooperaciones que profundizaron algunas de sus líneas directrices y relegaron otras. De este modo se recreó un clima de ideas que, décadas más tarde, fue implementado naturalmente por la comunidad de estudios bajo la forma de convenios para la cooperación universitaria internacional⁶⁴.

5.6. La política exterior: el mundo bipolar, la guerra fría. Argentina en el Bloque Occidental bajo la influencia estadounidense: una inestable dualidad entre el acuerdo y la confrontación. Las relaciones con América Latina.

Los años transcurridos entre la explosión de las bombas atómicas y la caída de la Unión Soviética no constituyeron un período de la Historia Universal homogéneo y único. El constante enfrentamiento de las súper potencias surgidas de la Segunda Guerra Mundial -Estados Unidos y la URSS- convirtió al mundo en escenario de potenciales batallas futuras y conflictos bélicos convencionales para definir hegemonías territoriales en la periferia de la denominada "Guerra Fría"⁶⁵. Por esos años -y en el gran escenario global- en el campo de las relaciones internacionales, se produjo el traspaso de un mundo multipolar a un mundo bipolar, el que se caracterizó por la constante amenaza de los dos polos de poder que constituían el Nuevo Orden Mundial. En este contexto de confrontación ideológica, se era capitalista o comunista, los diferentes países del denominado "Tercer Mundo" se reconocían dentro de uno u otro bando, pasando a configurar los territorios periféricos en los que se desarrollaba verdaderamente el conflicto. La Argentina -como el resto de los países del Bloque Occidental- estaba bajo la influencia de la primera de las ideologías ya que nuestro país no integraba -bajo este régimen- el movimiento de los No Alineados. Juntamente con los avatares de la situación internacional, Argentina -como la mayoría de los países latinoamericanos- se encontraba convulsionada internamente en su vida institucional por las utilización de prácticas violentas por parte de algunos actores sociales (la insurgencia armada revolucionaria), los militares, además, habían adquirido una notable importancia en la vida política de estos países. En Latinoamérica durante la década de 1960 y los primeros setenta también se impuso, desde Washington, la Doctrina de Seguridad Hemisférica, más conocida como Doctrina de Seguridad Nacional⁶⁶. Los gobiernos estadounidenses - desde Truman hasta Reagan- tuvieron una actitud favorable -desde el punto de vista político- hacia los regímenes militares en América Latina. La victoria de la revolución cubana y su evolución hacia el socialismo planteó una nueva problemática para las relaciones interamericanas. La influencia de la ideología *castro-soviética* que penetraba una zona de influencia tradicionalmente reservada a los EE.UU. y el entusiasmo revolucionario que parecía extenderse en varios países del continente, representaban una amenaza para los intereses públicos y privados norteamericanos⁶⁷. La intervención militar de los EE.UU. -justificada en el concepto de *fronteras ideológicas*- en los casos de Cuba (1961) y Santo Domingo (1965) produjo en América Latina una respuesta que no tardó en hacerse sentir: se dividió el hemisferio entre los partidarios de la *"intervención militar"* y los sostenedores del principio de *"no intervención"* en los asuntos internos de otros Estados. Dentro del contexto, el presidente Nixon -una rara mezcla entre pragmático político y fundamentalista ideológico- nombra a Henry Kissinger como Secretario de Estado (1968). Kissinger reconocía las limitaciones del poder estadounidense, porque tanto él como Nixon percibían que los equilibrios mundiales

estaban cambiando y que nuevas fuerzas socavaban el -hasta ese momento- indiscutible poder de las dos súper potencias. Los problemas hemisféricos para los EE.UU. en esta etapa (Nixon) se vuelven algo más significativo: ya no constituía un ambiente de relaciones meramente formales sino que pasaba a crear un ámbito más amplio en el cuál su política exterior encontraría su razón de ser. En la década de 1960 la política estadounidense hacia América Latina partía de la creencia de que solo el desarrollo económico evitaría la efervescencia revolucionaria y que -en este contexto- la adquisición de armamento moderno resultaba secundaria. El papel principal de los gobiernos militares de la región debía consistir en garantizar la seguridad interna y en generar programas de acción que aseguraran el desarrollo económico y social. Sin embargo esta apreciación sobre el papel de los gobiernos militares, no fue compartida por las fuerzas armadas de algunos países de la región. Debe destacarse en particular la importancia de los golpes de Estado en Brasil (1964), Argentina (1966) y Chile (1973) que modificaron el equilibrio geopolítico en América del Sur en aquellos momentos. Si los primeros años de la década de 1960 se caracterizaron por una efervescencia de la política latinoamericana, -como consecuencia del impacto continental de los acontecimientos cubanos- para la segunda mitad de la década, la militarización de la política en los países más importantes de América del Sur se iría convirtiendo en el hecho más significativo de fines de los sesenta⁶⁸. En los últimos años de la década de 1960, el Congreso norteamericano adoptó medidas tendientes a restringir la venta de armamentos sofisticados a países en vías de desarrollo. Esta política tuvo como consecuencia que los principales países de América del Sur diversificaran sus fuentes de abastecimiento militar, siendo Europa -con tecnología de punta y sin restricciones políticas- el principal beneficiario⁶⁹. Argentina fue un actor dual dentro de este escenario: adhirió -con entusiasmo y convencimiento ideológico- a la doctrina de la seguridad nacional y al postulado de fronteras ideológica, pero nunca participó -en esos años- de acción militar alguna fuera de las fronteras del país. Tampoco resultó atraída por el programa de aprovisionamiento de material militar de baja tecnología por parte de los EE.UU. y -más bien- optó decididamente por el llamado *Plan Europa* -sin restricciones tecnológicas- para su reequipamiento militar.

Entre el 28 de junio de 1966 y el 8 de mayo de 1970, la política exterior de la Argentina fue conducida por el gobierno del general Onganía, con la colaboración de dos Ministros de Relaciones Exteriores: Nicanor Costa Méndez y Juan Bautista Martín; y tres de Economía: Jorge Salimei, Adalbert Krieger Vasena y José María Dagnino Pastore. Como es natural en tiempos de paz externa, las decisiones y realizaciones más importantes de la política exterior de un país del nivel y ubicación internacional de la Argentina estuvieron referidas a los temas económicos. En esos temas el papel principal es desempeñado por el Ministro de Economía y por su equipo. La Cancillería debió acompañar y respaldar la gestión cumplida desde enero de 1967 y hasta julio de 1969, por Krieger Vasena.

La preocupación central en el Ministerio de Relaciones Exteriores, fue la de llenar un vacío; en el entendimiento de que la Argentina se desempeñaba en el escenario internacional sin tener una línea política orgánica y sin contar con un instrumento diplomático de la eficacia que se suponía habían logrado los países con los que nuestra relación era más intensa y podía ser más conflictiva. En el intento de cubrir esa carencia, el Ministro Costa Méndez tuvo el más amplio respaldo del Presidente y la cooperación plena del personal de la Cancillería. Con este objetivo en mente, se procuró trabajar en tres direcciones: 1) mediante la creación de un modesto mecanismo destinado a realizar –en la Cancillería- la parte correspondiente a una labor general de planeamiento encomendada a los distintos ministerios dentro de los sistemas CONADE y CONASE. El modelo estudiado a esos efectos fue el brindado por la oficina de planeamiento de la Secretaría de Estado de los EE.UU; 2) en buena medida, se cerró la posibilidad de nombrar funcionarios diplomáticos a candidatos ajenos al plantel del ministerio. El Canciller –con unos pocos colaboradores de su confianza política- cumplió su cometido con el personal existente. Por supuesto que esta restricción no alcanzó el nivel de las jefaturas de misión, en las que, como es habitual, se designaron numerosos embajadores políticos, y; 3) se realizó un gran apoyo y consolidación del *Instituto del Servicio Exterior de la Nación* (ISEN) bajo la dirección del Embajador Máximo Etchecopar, hasta convertirlo en un organismo docente apto para la capacitación de los aspirantes al cuerpo diplomático del futuro, con el propósito de constituirlos en la única vía de acceso a los cargos permanentes de la carrera⁷⁰.

La política exterior del gobierno argentino –durante la atapa de la Revolución Argentina- puede ser vista desde una perspectiva de enfrentamiento entre dos visiones respecto a las relaciones con los países – especialmente vecinos- de Sur América: el esquema tradicional –que llevaba a cabo la Cancillería- y el esquema o visión geopolítica que se establecía en el seno de las Fuerzas Armadas. Desde lo ideológico, hubo un período claro de adhesión al concepto de *fronteras ideológicas* –propulsada durante el gobierno de Onganía- y también hubo otro de cierta apertura al *pluralismo ideológico* durante el breve interludio de Levingston. Ambos adscribieron al concepto del *desarrollo económico acelerado* por la vía del reconocimiento de pertenecer al hemisferio. Durante la etapa de Onganía, la política exterior argentina se centró –más claramente- en la posibilidad de un alineamiento con los EE.UU. y el posible enfrentamiento con los países latinos como contrapartida. Costa Méndez –su primer Canciller (diciembre 1966-junio 1969)- sostuvo una posición abiertamente crítica al régimen castrista, en consonancia con el sesgo anti-comunista del régimen militar argentino. Pero también compartía con Onganía la adopción de un perfil de política exterior que equilibrara los intereses de los sectores liberales y nacionalistas, es decir, que no solo procurara normalizar las relaciones con Washington para ganar credibilidad externa, sino que también dejara lugar a una política exterior propia, no subordinada a los intereses de los EE.UU. La inclinación pro-occidental del Canciller no lo privó de reclamar para la Argentina un trato igualitario

frente al gobierno estadounidense, como lo hizo durante el incidente en torno al reconocimiento del régimen de Onganía entre junio y julio de 1966⁷¹. La común identificación de Costa Méndez con las autoridades del Departamento de Estado respecto de la necesidad de implementar medidas multilaterales para combatir la insurgencia castrista en el continente, lo llevó a que –una vez descartado el proyecto estadounidense de crear –dentro de la estructura de la OEA- una fuerza supranacional como la FIP (Fuerza Interamericana de Paz)⁷² impulsara la creación de un *Comité Permanente de Consulta* en la OEA⁷³. Costa Méndez también rechazó el esquema integracionista promovido por Colombia, Chile, Ecuador, Perú y Venezuela que firmaron la *Declaración de Bogotá* en agosto de 1966, basado en ideas de la CEPAL y avalado por el Departamento de Estado. En la segunda etapa del gobierno de Onganía, se hizo evidente una actitud más pragmática acorde con el contexto global de *detente*. Esto se hizo visible en actitudes como: a) La posición de no firmar el *Tratado de No Proliferación Nuclear* de 1968; b) El desarrollo del *Plan Europa* de renovación de armamentos y; c) la gira efectuada por Costa Méndez (marzo-abril de 1969) a países de la Europa del Este (Rumania) y a la España de Franco, con un régimen político que en Onganía despertaba cierta simpatía. También visitó Alemania Occidental y Francia que no estaban alineadas con el Departamento de Estado⁷⁴. Por cierto que la gira de Costa Méndez estaba inserta en su estrategia –compartida por el presidente- de aliarse con los países que conformaban lo que él llamaba la *clase media mundial*, que incluía naciones tan diversas ideológicamente como: Canadá, Unión Sudafricana, España, Alemania, Rumania, Francia, Italia e Israel. Una alianza con ellos podía producir posibles beneficios en un comercio integrado y procuraría un equilibrio entre los reclamos de los países grandes y los llamados chicos. Esta estrategia propia del Canciller argentino fue bautizada –por parte de los especialistas- el nombre de *occidentalismo heterodoxo*, un término que se había puesto de moda en algunos despachos del gobierno y fue expuesta al periodismo político en una declaración del Canciller⁷⁵.

Pero, durante el gobierno de Levingston esto se revierte, con el propósito de reafirmar el *pluralismo ideológico* se abren los mercados hacia países del este europeo, el reconocimiento de China comunista y el acercamiento con los países latinoamericanos. Las tensiones con Brasil y Chile se fueron moderando, principalmente con el primero, donde el enfrentamiento se daba por el predominio sobre la Cuenca del Plata y sus países adyacentes (Paraguay y Bolivia)⁷⁶. Las relaciones con Brasil y Chile encontraron a la Revolución Argentina inmersa en una especie de juego cruzado, por el cual se buscaba balancear el poder generado por las relaciones Argentina-Perú-Bolivia por un lado y Brasil-Chile Argentina, por el otro. El primero resultó el eje más adecuado para la reafirmación de los principios de cooperación hemisférica, no intervención, auto determinación de los pueblos y los aspectos relativos a la integración y el desarrollo continental⁷⁷. La relación Argentina-Brasil-Chile estaba –dentro de los sectores militares- mucho más impregnada del condicionante geopolítico, que llevaba siempre a

intereses contrapuestos con alguno de esos países⁷⁸. Las discrepancias con Brasil no fueron pocas por aquellos años. No se pudo unificar posturas respecto de la *Fuerza Interamericana de Paz* (FIP), y en el asunto del límite de soberanía continental, Brasil no apoyaba la extensión a 200 millas. En la duodécima reunión de consulta de la OEA (1967) Costa Méndez sostuvo la intervención armada de cuño estadounidense, mientras que Brasil respaldó la posición no intervencionista de Chile⁷⁹. Por último, en lo que se refería a cuestión antártica, Brasil no renunciaría a las expediciones, pero aceptaba no sobrepasar los límites donde la Argentina tenía instaladas bases militares y/o científicas, a fin de evitar roces con Buenos Aires. Sin embargo no todo fue confrontación: las tensiones entre los gobiernos militares de Argentina y Brasil convivían –sin embargo- con la implementación de lineamientos comunes: el combate contra la subversión en el marco de la DSN, la apertura del mercado y la alineación con Occidente. Humberto Castelo Branco coincidía con Onganía en la tesis de las fronteras ideológicas y, a principios del onganiano, se avanzó hacia una cierta afinidad entre ambos países porque estaba latente la posibilidad de conformar una alianza militar entre Argentina-Brasil-Sudáfrica, que tendría como objeto contener al comunismo y –para nuestro país- tendría el beneficio adicional de contener a Brasil en su avance sobre la región, al tiempo que acercarse a Washington para obtener la confianza estadounidense que estaba volcada a favor de Brasilia⁸⁰. Otro aparente punto de coincidencia había sido el apoyo dado a la ALALC que parecía ser visto por ambos países con un instrumento útil para un esquema de integración flexible⁸¹.

Los problemas con Chile fueron siempre de carácter limítrofe y trataron de ser evitados por Onganía con una carta enviada a Eduardo Frei donde manifestaba su propósito pacífico y negociador sobre las controversias. Pero las relaciones se tensaron con el fallo británico sobre la zona de Río Encuentro que le otorgó a Chile el 71% del control territorial del área. Finalmente esta cuestión limítrofe encuentra una solución favorable en la Declaración de Salta, firmada entre Lanusse y Allende en 1971. El tema de las 200 millas complicó más la cuestión limítrofe era la zona del Beagle⁸². En una decisión desacertada por parte del gobierno argentino, en función de un acuerdo firmado en Londres en 1971 (bajo la presidencia de Lanusse) se acepta –nuevamente- el arbitraje británico, ya muy descalificado éticamente por la del laudo de Río Encuentro y por la cada vez más conflictiva disputa entre Argentina y el Reino Unido por la cuestión Malvinas.

Tras la segunda reestructuración ministerial del gabinete de Onganía en junio de 1969, - un mes después de la protesta social conocida como El Cordobazo- con un régimen sorprendido y desconcertado por los acontecimientos y bajo la mirada de las Fuerzas Armadas, asumió como sucesor de Costa Méndez, Juan Benedicto Martín, que continuó el sesgo del *occidentalismo heterodoxo* que su antecesor evidenciara en su reciente gira europea. En enero de 1970, en una comida que celebrara la Asociación de Prensa Extranjera en su honor, el Canciller manifestó que: “*la política exterior argentina es una*

política nacional, independiente, realista y abierta a distintos niveles de colaboración con los países integrantes del sistema internacional". Señaló también que la Argentina había tenido siempre *vocación universal*, y que su gobierno estaba dispuesto a "*mantener vinculaciones económicas o científico tecnológicas también con países extra continentales de otro signo ideológico, sobre la base del respeto recíproco y de la exclusión de toda interferencia política*"⁸³. Incluso anunció su participación –hacia fines de abril de 1970- como observador en el *Movimiento de Países No Alineados, en la Conferencia de Lusaka*⁸⁴.

Del análisis de la política exterior desarrollada durante el período 1966-1970 podemos extraer algunas conclusiones: a) el gobierno argentino intentó –muy seriamente- la reinserción del país en el esquema entonces vigente de relaciones internacionales. Para ello debía introducir modificaciones muy grandes en su sistema económico y financiero; las políticas aplicadas lograron algunos éxitos apreciables pero carecieron de continuidad en los gobiernos posteriores; b) la búsqueda de una relación central con los EE.UU. no encontró los temas sustantivos que pudieran sustentarla y reaparecieron los antiguos esquemas centrados en Europa; c) el papel de Argentina en el plano latinoamericano, en el que contaba con potencialidad política y económica suficiente para desempeñarlo, se vio neutralizado por problemas derivados de los condicionamiento geográficos: ríos, islas y mares, a los que trató de enfrentar con herramientas jurídicas tradicionales que no aportaron soluciones en tanto no había voluntad política para zanjarlos.

5.7. La política oculta: los sindicatos y el gobierno en la trastienda de la prohibición formal.

5.7.1. El Plan de Acción del 3 de febrero de 1967. La batalla que no se quería pelear.

El martes 24 de enero de 1967, mientras el Secretario General de la CGT –Francisco Prado- disfrutaba de unas vacaciones en Cosquín, en la ciudad de Córdoba –a sesenta kilómetros de allí- el plenario de delegados de la CGT-Regional Córdoba conducido por Julio Petrucci y Lino Verde, decidía, tras dramática discusión, dar a luz un plan de combate para enfrentar la crítica situación producida por las cesantías en Industrias Kaiser Argentina (IKA) en su planta de Santa Isabel; la estrategia era: movilización general de la clase obrera cordobesa y paro de 24 horas en el curso de la semana. El miércoles 17 de enero el plenario de la CGT-Regional Córdoba escucho los llamados de SMATA (el gremio de los mecánicos) que ya habían sido advertidos por IKA que la decisión de despedir era irrevocable⁸⁵. Se aprobó una declaración de apoyo a los mecánicos (y otra de respaldo a los cañeros cesantes tucumanos) y se exigió al Consejo Directivo de la CGT la convocatoria del Comité Central Confederado en un plazo máximo

de 15 días. Sino la propia Regional Córdoba se encargaría de citar por su cuenta a una conferencia de todos los gremios argentinos en la ciudad de Córdoba. Los miembros del Secretariado Nacional postergaron la reunión del C.C.C. hasta que se expidiera la Comisión de los 12, el organismo asesor dedicado a redactar el proyecto de declaración que estudiaría el C.C.C.: el plazo para la Comisión era el 31 de enero. El martes 18 de enero, SMATA decretó un paro de protesta por 24 horas en Santa Isabel. Los manifestantes intranquilizaron el centro de Córdoba⁸⁶. El mismo día, la empresa Atanor despedía, en la localidad de Río Tercero, un total de 350 operarios y todo el gremio se declaró en huelga. El sábado 21 de enero comenzaron a llegar a los domicilios de los mecánicos los telegramas colacionados que notificaban los despidos. Las cesantías alcanzaron a 750 operarios y 200 empleados, sin vacilar se declaró la huelga por tiempo indeterminado: la tormenta arreciaba. Al día siguiente, un clima de agitación bordeó el camino que conduce del centro de Córdoba a la planta de IKA; pese a las consignas policiales que se colocaban cada 300 metros, una multitud de clavos *tipo miguelito* regó la calzada y, algunos incidentes entre obreros y funcionarios de la firma ocasionaron detenciones. El lunes 6 de febrero, 4.000 obreros de IKA en asamblea general ratificaron el paro, al finalizar el día SMATA contabilizaba 5.300 cesantes. En vistas de las circunstancias, viajaron –separadamente- a la Capital Federal, el gobernador de Córdoba Miguel Ángel Ferrer Deheza y el secretario del SMATA Elpidio Torres⁸⁷. El martes 24 por la noche el pleno de los gremios cordobeses aprobaba la movilización y una huelga general de todos los sindicatos para la siguiente semana. En la Capital Federal, en tanto, SMATA declaraba un paro de 24 horas a nivel nacional, que se cumplió –puntualmente- el viernes 27. San Sebastián declaró que el caso IKA era de su competencia y lo encuadró en orden nacional, quitándole el peso al gobernador. Al mismo tiempo la empresa continuó con su política despidiendo a 800 dependientes más, mientras se multiplicaban los disturbios en Santa Isabel. Finalmente, San Sebastián, decretó la conciliación obligatoria de las partes, que deberán negociar algún entendimiento en Córdoba, en forma inmediata con el delegado ministerial Francisco Guido. Los despidos en IKA tienen una gran importancia en la recomposición de las tendencias sindicales; hasta ese momento, los gremios más deteriorados por la política del gobierno habían sido los vinculados a los servicios provistos por el Estado (portuarios, ferroviarios, administración pública) en razón de la ley de racionalización. Pero ahora, se sumaban sindicatos industriales vinculados a la actividad privada que apuntalaban la estrategia conciliadora de la Central Obrera. El caso Córdoba –ahora que la crisis había llegado a la gran industria- podía demostrar la endeblez de la estrategia, obligando a organizaciones “amigas” a pasarse a la línea dura.

Cruzado por los sucesos, el Comité Central Confederal lanza –el 3 de febrero de 1967- un plan combativo que llamó *Plan de Acción*, que se implementaría entre febrero y marzo de 1967. El plan produjo más dudas que certezas en el seno del C.C.C. Se enfrentaban a un gobierno dispuesto a quitar personerías y a iniciar una escalada de

medidas represivas que podía llevar a la detención lisa y llana de la dirigencia ya que – de acuerdo a la normativa vigente- las actividades del plan afectaban la seguridad interior e incurría en prácticas subversivas⁸⁸. Las represalias del gobierno incluyeron que el BCRA asumiera el control de los fondos depositados en varias instituciones adheridas a la CGT, como La Fraternidad, la Unión Ferroviaria y la Federación Obrera Tucumana de la Industria Azucarera. El ministro Krieger Vasena, advirtió sobre la ilegitimidad del propósito cegetista y responsabilizó a los delegados y a las comisiones de fábrica del abandono de las tareas y recordó a los trabajadores que las normas vigentes permitían despedir a quienes participaran de esas prácticas⁸⁹. Entre dudas y titubeos, el C.C.C. intento –desde el inicio- disponer un eventual levantamiento de la medida, pero era necesario encontrar una salida honrosa, así surgió la idea de encontrar un mediador - aceptable por las partes- que pudiera negociar un “alto el fuego” por treinta días. En principio –tanto Timoteo Vandor como Francisco Prado y Eleuterio Cardoso- intentaron interesar a propio Secretario San Sebastián para esa gestión, dada la buena relación y la influencia que mantenía sobre el presidente, que implicaría recuperar el diálogo que el CONASE había declarado oficialmente roto. Pero San Sebastián se sintió rebalsado por los sucesos y le dijo a los dirigentes que: se había ido demasiado lejos y él solo podría presionar con su renuncia porque el presidente lo único que podía aceptar era la rendición incondicional. En cuestión de horas el C.C.C. creyó encontrar al mediador en el Arzobispo de Buenos Aires –Cardenal Antonio Caggiano- se pensó que su posible exhortación a la conciliación en defensa de la paz social sería obligatoriamente aceptada por el gobierno, incluidos sus sectores duros. La respuesta del Arzobispo no se hizo esperar: *“no existen, por el momento, bases elementales para establecer un acuerdo que el cardenal pueda proponer exitosamente”* dijo el Secretariado de la Curia. El terceto cegetista –en medio de una impaciencia desesperada- se sintió tentado de encargar la imaginada misión al arzobispo de Avellaneda–Monseñor Gerónimo Podestá- pero, en la asamblea de Secretarios Generales, estas gestiones no salieron a la luz para no mostrar lo abrumador de la situación. En medio del desconcierto, Lorenzo Pepe y Vandor, se mostraron favorables a llevar adelante el plan, pero otros como Liberato Fernández (portuario de extracción desarrollista), Cardoso (carne), Peralta (vitivinícola), Coria (construcción), Cavalli (petroleros) y Gerónimo Izzeta (municipales) querían continuar con el intento negociador. El miércoles 22 de febrero de 1967 le suspendieron la personería (como parte del escalonamiento) a la Unión Ferroviaria (UF) y anunciaron que harían lo mismo con la UOM y el SMATA. Igual suerte correrían Luz y Fuerza (L y F) y la FOTIA; y si no suspendían el paro del 1º de marzo intervendrían la CGT. La situación en el C.C.C. era expectante y de cierto temor, pero vandoristas y peronistas ortodoxos estaban dispuestos a caer unos sobre otros apenas alguien se atreviera a confesar su flaqueza⁹⁰. Para conciliar la realidad con los objetivos de la lucha el plenario no tuvo más opción que caminar sobre la línea dura⁹¹. La estrategia de escalonamiento por parte del gobierno debía realizarse gradualmente y con mucha cautela: ¿Cuáles eran concretamente las medidas que podía adoptar el gobierno para impedir el desborde y en

qué momento se aplicarían? La respuesta giraba en torno a la Ley de Asociaciones profesionales, de la congelación de los fondos sindicales y del procesamiento de los infractores a las normas vigentes del derecho del Trabajo, hasta llegar a las inhabilitaciones permanentes de la dirigencia inculpada. La Ley 14455 (de Asociaciones Profesionales) era consecuencia del pacto Perón-Frondizi de 1958, si la CGT perturbaba, lo que correspondía al gobierno era desarmar el aparato de privilegio gremial. El primer tornillo lo había quitado la reunión del CONASE, que al congelar los fondos de tres sindicatos, atemorizó a los otros y los indujo a retener el dinero en sus cajas por si la tormenta arreciaba. El gobierno se preguntaba: ¿Cuál es la causa de la agitación gremial permanente? La respuesta: todos los gobiernos han querido hacer política con la CGT, requiriendo el apoyo sindical para consumir sus objetivos. Si el gobierno se proponía ser neutral y no utilizar a los trabajadores para sus fines, entonces, se podría contar con la pacificación del movimiento obrero para que cumpliera su función profesional. Un arma sumamente persuasiva para esa pacificación se suponía era la modificación o derogación de la ley de Asociaciones Profesionales, liquidando la obligación patronal de retener parte del salario con destino al sindicato⁹². Pero, la realidad era que –cualquiera haya sido la intención de los protagonistas- el diálogo estaba roto, la grieta era ya muy ancha y ninguna de las partes parecía querer dar un paso atrás: los más preocupados por su debilidad eran los sindicalistas. La CGE y la Unión industrial se involucraron tratando de aportar posibles soluciones, intentando cumplir –algo tarde- aquel papel de mediador. El sábado 25 de febrero –después de una discusión de ocho horas- más de un centenar de secretarios generales de gremios argentinos, perforando la barrera de temores personales, descartó un par de esquemas tácticos que desaconsejaban la lucha y se precipitaron hacia la etapa decisiva del Plan de Acción, desafiando los dispositivos oficiales de represión que podían llegar hasta el desmantelamiento del sector laboral. La conferencia fue convocada merced a las presiones de un sector que juzgaba muy peligroso pasar más adelante, hacia los paros generales del 21 y 22 de marzo. Ese mismo sábado el gobierno sancionó la ley 17.192 que creó el “servicio civil de defensa” en virtud del cual, el gobierno podía movilizar y someter a fuero militar a toda persona mayor de catorce años⁹³. La esperada intervención de la CGT aún no se produce para evitar dar al exterior una imagen muy impopular, pero se anunció que se empezaba a estudiar la anteúltima etapa del escalonamiento: la modificación de la ley de Asociaciones Profesionales por una con total libertad sindical. En la sede de la central obrera –en Buenos Aires- finalmente y después de encendidas alocuciones, se impuso el criterio de no modificar la posición táctica adoptada el 3 de febrero. Lorenzo Pepe y Augusto Vandor fueron sus sostenedores más firmes. La situación que se venía arrastrando penosamente en una maraña de tibiezas y claudicaciones tenía por delante un abismo cargado de brumas, porque si las huelgas programadas tenían éxito el país se podía quedar sin central obrera y el gobierno, podía quedar girando sobre sí mismo, ajeno al calor que le prestaron –hasta hace poco- las organizaciones del trabajo. Era un escenario sin

ganadores, todos perdían. Después del cortejo de la CGT con organizaciones empresarias como CGE, UIA y ACIEL y SRA para que intentaran paliar la situación intentado colocar un escudo entre la central obrera y el gobierno, el dirigente marítimo Liberato Fernández propuso a Vandor –en una carta abierta- el cambio de la táctica obrera. El documento causó una inmensa conmoción entre los caudillos sindicales, no tanto por la importancia de su sector marítimo, sino porque su autor interpretaba los deseos de las bases y los cuadros medios: evitar el arrasamiento de la central obrera y sus dirigentes a manos del gobierno⁹⁴. Las medidas tomadas por el gobierno dirigidas a presionar al C.C.C. y forzar la postergación o suspensión de la última etapa del Plan de Lucha: los paros generales por 48 horas del 21 y 22 de marzo resultaron efectivas porque al dividir aguas dentro de la central obrera (entre participacionistas y combativos) lo debilitaron. Finalmente, el 9 de marzo el C.C.C. arrojó la toalla de su plan de acción sin cumplir la última etapa del mismo y coronó el primer triunfo del grupo que se empezaba a conocer como participacionista. Algunos leyeron los hechos como un paso atrás de la CGT para salvar su vida y sus dirigencia. Otros creyeron que allí se había sellado la muerte de la CGT y que el gobierno quedaba sin enemigos⁹⁵. El dilema ante el cual el régimen ponía a la cúpula sindical era claro: por una parte, si se resistía a la política gubernamental su existencia como institución podía correr serio peligro, por otra parte, los dirigentes se exponían a perder crédito ante sus afiliados a medida que estos experimentaran los impactos de la política oficial. El fracaso del Plan de Lucha había probado que la tradicional política sindical de movilizar y negociar era ya impracticable. Sin embargo, la historia reciente mostraba que los regímenes militares –tarde o temprano- debían llegar a un acuerdo con el movimiento obrero. Para la principal corriente del sindicalismo peronista –agrupada en torno a Vandor- la mejor estrategia parecía consistir en la tradicional, o sea, oponerse en general a las políticas del gobierno sin tensar demasiado la cuerda y mantener abiertas las líneas de comunicación por las que pudiera llegarse a eventuales negociaciones. En el corto plazo esto significaba guardar cierta compostura, no proporcionando al régimen más pretextos para debilitar aún más la estructura gremial. Tal estrategia pragmática no carecía de coherencia con el tono general de desmovilización de los trabajadores que siguió al fracaso de las tentativas por resistir al régimen de Onganía (Plan de Lucha) durante los diez primeros meses de su gobierno. Ese movimiento gremial –debilitado y dividido- fue una condición fundamental para el logro de la paz social que impuso el régimen en los tres años siguientes al golpe de junio de 1966.

5.7.2. Después del diluvio: el largo y difícil camino hacia un Congreso Normalizador.

Después de fracaso del *Plan de Acción*, los peronistas ortodoxos, comunistas y un sector independiente lograron que el Consejo Directivo (C.D.) de la C.G.T. llamara a un

nuevo *Congreso Nacional*, para que la conducción de la central presentara su renuncia y se eligieran nuevas autoridades. Aquel viernes 17 de marzo de 1967 los integrantes del “*comando de la derrota*” accedieron a convocar al Congreso Nacional de la C.G.T. (el mismo órgano que los había ungido hacía apenas cinco meses) para entregar a los 771 delegados sus renuncias a la conducción del movimiento obrero. Visiblemente, fueron los *independientes* quienes sirvieron de ariete a peronistas ortodoxos y comunistas en la tarea de preparar la salida de la conducción actual fundamentalmente *vandorista* y *no alineada*⁹⁶. El C.C.C. se reunió –finalmente- el 14 de abril y formalizó la citación del Congreso para el 29 y 30 de mayo⁹⁷. Hasta el lunes 13, la negociación de un Congreso destinado a renovar autoridades la había llevado adelante la *Comisión de los 8* un grupo de trabajo erigido por el C.C.C. el 9 de marzo último, cuando se decidió dar por terminado el *Plan de Acción*. Desde ese momento se delinearon tres posiciones: a) el *vandorismo* y parte de los *no alineados* deseaba retener los cargos directivos porque –de alguna manera- no se sentía culpable de la derrota; hasta el 3 de febrero habían formado parte de la línea conciliadora con el gobierno y, solo se habían plegado a la acción por el empuje de la línea rival que había predicado la violencia que –finalmente- no se manifestó en los hechos y a la cual el vandorismo atribuía la derrota⁹⁸; b) Para las *Organizaciones de Pié* se aproximaba la ocasión tan esperada: derrotar a Vandor, en función a las órdenes de Perón⁹⁹; c) los *independientes* se aprestaron a enfrentar a Vandor porque sabían que –ante la posibilidad de renovación de autoridades- ellos se convertirían en árbitros de la situación¹⁰⁰.

El escenario entonces, se dejaba ver así: mientras la alianza *peronistas ortodoxos, comunistas e independientes* presionaba para obtener la convocatoria al Congreso, el *vandorismo* y la conducción de la central obrera buscaban –desesperadamente- restablecer el diálogo con el gobierno. La idea dialoguista iba en busca de lograr la devolución de la personería a los sindicatos que habían sido cancelados, para robustecer su posición en el comando, pero, básicamente buscaban encontrar una línea negociadora que les permitiera detener las secuelas del paro del 1º de marzo pasado, que había culminado con despidos masivos y congelamiento de los fondos sindicales¹⁰¹. La composición del futuro Secretariado estaba pendiente de la actitud –inflexible o compasiva- del gobierno. Si la posición gubernamental era de dureza, el próximo Congreso estaría compuesto de dirigentes opacos, de bajo perfil, para ofrecer el menor flanco posible a la dureza oficial y organizar una resistencia silenciosa, pasiva, para evitar el enfrentamiento liso y llano con el Ejército, evitando producir el caos en las filas sindicales. Por el contrario, si la actitud gubernamental era dialoguista y conciliadora, se ubicaría en el Comando un equipo de primera clase: este sería el modo de renovar la colaboración con el oficialismo¹⁰². Dentro del gobierno también había algún desconcierto sobre cómo actuar, la situación ya no era la misma que antes del fracaso del *Plan de Acción*, en el enfrentamiento su ruta –con lógica militar- había sido fácil: obtener la victoria. Pero ahora, una vez derrotado un enemigo con el que había que convivir:

¿Cómo entenderse con él? A pesar del halago a la lucha del vencido y, aún después de declarar que el gobierno no quería hacer de esto una victoria sobre la clase obrera: el vencedor, a pesar de que halague al vencido, sigue siendo el vencedor. Final; que dentro del gobierno –como siempre- se armaron los dos eternos y clásicos cuadros: los conciliadores y los intransigentes¹⁰³. Con todo, la convocatoria al *Congreso Nacional de la CGT* abría para el gobierno la perspectiva de ver como se compondría: si era una primera línea con los dirigentes veteranos y consumados en la gestión o una de segunda línea de más sencillo manejo. Como se ve, en ambos bandos las expectativas eran un juego de espejos, en definitiva unos esperaban la jugada del otro. El escenario posterior a la derrota cegetista era, para ambos bandos, un juego de suma cero. Sin embargo, en poco más de dos años los acontecimientos dirían que ni la victoria del gobierno había sido tan arrasadora ni la derrota de la CGT tan dura.

El 25 de mayo –después de haber coreado el Himno Nacional- los 88 miembros del C.C.C. dotaban a la CGT de su cuarto gobierno en quince meses: el plan de supervivencia intentaba zanjar la larga crisis interna, o disimularla al menos, frente a la tutela que la Casa Rosada se esforzaba en imponer. Para evitar un salto al vacío, optaron por lanzarse en paracaídas y-en lugar de la fuerte Comisión anhelada- colocaron las riendas de la CGT en manos del Comité Central, en 20 de cuyos integrantes delegaron su administración y conducción¹⁰⁴. En la conformación conciliadora del Consejo de veían las consecuencias de un *Plan de Acción* –que había durado 42 días- y había mostrado la poca disposición de las bases por enfrentar las barreras represivas de un gobierno que amenazaba con despedazar al movimiento gremial. El jueves 1º de junio de 1967 se extrajeron cuatro nombres para el *Secretariado General* en representación de cada uno de los sectores del movimiento obrero: José Notaro (62 Organizaciones), Agustín Cuello (62 de Pié), Benito Bruzzone ((independientes) y Amancio Pafundi (No Alineados). Pero, el reconocimiento oficial del *Consejo de los 20* tendría que sortear el escollo del Decreto 969 –reglamentario de la ley de Asociaciones Profesionales- porque varios de sus miembros tenían sus personerías canceladas por las sanciones aplicadas por el PEN durante el *Plan de Lucha*. Su suerte ahora podía quedar atada al comportamiento que la delegación sindical tuviera en las deliberaciones de la 51ª Conferencia de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra¹⁰⁵. En esta estrategia de rendición y pacto –urdida entre el gobierno y el Consejo de los 20- la CGT tenía la difícil tarea de, sino callar, por lo menos conceder el beneficio de inventario a los actos del gobierno de Onganía –muy cuidadoso de su imagen internacional- en el informe de práctica ante el plenario del organismo internacional: abrigaban la esperanza de que se postergara *sine die* un pronunciamiento oficial sobre la legalidad constitutiva del Consejo¹⁰⁶. Si bien la Comisión nunca fue reconocida por el Secretario de Trabajo –Rubens San Sebastián- se logró mantener la conducción provisoria bajo la promesa de no agresión fundada en una deliberada actitud de tolerancia y en el comportamiento que tuviera la delegación obrera en Ginebra. Nadie

se inquietaba demasiado: la Comisión debía durar al menos hasta que expirara su gestión y el C.C.C. volviera a reunirse a mediados de agosto¹⁰⁷.

Las primeras semanas de 1968 no fueron muy favorables al *sindicalismo participacionista*: el discurso presidencial del 29 de diciembre, rebozó de promesas, pero estuvo huérfano de concesiones efectivas. Las huestes sindicales que apuntalaban al gobierno habían esperado –vanamente– un aumento de última hora en los salarios. Pero, superar estos baches era –sin duda– una habilidad que debía reconocerse a San Sebastián¹⁰⁸. El Secretario de Trabajo acudió en auxilio del *participacionismo* y obtuvo de Onganía la Ley 17.494 que obligaba a las fábricas a discutir con los sindicalistas la reorganización de los talleres¹⁰⁹. No fue extraño que el primer temario correspondiera a las fábricas de electricidad: al fin y al cabo Luz y Fuerza (L y F) con su Secretario –Juan José Taccone¹¹⁰– a la cabeza, era el decano del *participacionismo*¹¹¹. También en ayuda del *participacionismo*, San Sebastián había urdido un plan de restitución de personerías sindicales a las entidades que las habían perdido –diez meses atrás– durante el fracasado *Plan de Acción cegetista*¹¹². Durante enero (1968) el CCC debía fijar –según los estatutos– el temario que discutirían los miembros del Congreso ya convocado, para elegir –en la segunda semana de marzo– a las futuras autoridades de la máxima central obrera. Pero el Consejo de los 20 le había dado al Congreso el carácter de extraordinario, pues bien, un Congreso extraordinario no estaba autorizado –reglamentariamente– para elegir autoridades. Pero: ¿Cómo fue posible que esta desinteligencia sucediera? Sencillo: la CGT se debatía constantemente entre las tres tendencias bien conocidas: *colaboracionistas*, *vandoristas* y *opositores*. Las dos primeras tendían (junto con la Secretaría de Trabajo) a postergar el Congreso hasta mediados de año, prorrogando la conducción provisoria actual. Los opositores –en cambio– deseaban ver constituidas las autoridades lo más rápidamente posible, sino se corría el peligro que se integraran en una confederación paralela a la actual¹¹³. El problema central para el *participacionismo* – y paradójicamente también para San Sebastián– era su pérdida de credibilidad por la ausencia de aumentos salariales que reforzaran su posición de colaboración¹¹⁴. Desde luego el prestigio de la tendencia *participacionista* mermó y con ello, se desvanecieron sus sueños de conquistar la CGT. Tal era la división reinante que el viernes 22 de marzo, entre los jefes obreros nadie se atrevía a anticipar si sesionaría o no el *Congreso Normalizador* citado por el *Consejo de los 20* –en noviembre último– para sesionar el jueves 28 de marzo. El Secretario de Trabajo intentó aplazar por 90 días la unción del nuevo Congreso, temeroso que, si el organismo se reunía en esos días –y sus acólitos gremiales no aseguraban el control– su primera actitud fuera consistiera en pedir al gobierno aumentos masivos de salarios¹¹⁵. El administrador de la política oficial estimaba peligroso que el cónclave se iniciara siquiera, temía que –una vez constituido el Congreso– este escapara de las manos de los grandes líderes y marchara hacia la constitución de un comando opositor. Si esto sucediera, San Sebastián, se limitaría a no reconocer su legalidad constitutiva: podía

vetarlo con solo citar la presencia de los proscriptos en la reunión (los gremios sin personería) o por la forma de designación de los delegados, ajena a lo dispuesto por el Decreto 969/66. El solo hecho de que el Secretario aún no había devuelto la personería a los siete gremios intervenidos, era otra forma de pedir la postergación del Congreso hasta que este rescate ocurriera.

El Congreso Normalizador de la CGT, finalmente se reunió entre el 28 y el 30 de marzo de 1968. Augusto Timoteo Vandor¹¹⁶ –para evitar la conformación de una central obrera autónoma, fuera de su control- impugnó el Congreso de la entidad y retiró sus delegados. El sábado 29 –ya sin la influencia de Vandor en el Congreso- los asambleístas ungieron un flamante Secretariado que encabezó el gráfico Raimundo Ongaro –fiel a Perón y opositor a la Casa Rosada- mientras el *vandorismo* formaba otra CGT, que denominaría de *Azopardo* por el edificio histórico de la central obrera de la calle Azopardo 802 en el que funcionaría. La conducción de Ongaro tomaría el nombre de *CGT de los Argentinos* o de *Paseo Colón*¹¹⁷ Una vez más, la clase obrera argentina se encontraba dividida¹¹⁸. El *vandorismo* tardó en acomodarse al nuevo escenario de *hegemonía disputada* que presentaban ahora ambas centrales obreras. Su estrategia dialoguista no podía pasar por los partidos políticos tradicionales (ahora prohibidos) sino por la restauración de una *alianza pueblo-fuerzas armadas* en busca de un lugar de participación política en un gobierno que, creyeron, compartía elementos con aquel que había forjado tal alianza veinte años antes.

5.8. La cuestión política y el debate institucional. El gobierno en su laberinto: ¿Quo vadis Revolución?

En la noche del jueves 6 de julio de 1967 –un año después de iniciado su gobierno- y ante 800 oficiales de las Fuerzas Armada y en la cena de camaradería, Onganía declaraba cerrada la primera fase de su gobierno: la menos creadora. En su discurso dijo: *“Toda gran empresa necesita una etapa de preparación. Esta acaba ahora. Pronto la República va a ser lanzada a su destino. Las energías de la Nación entera serán movilizadas y puestas en marcha”*. El mensaje fue, también, una rendición de cuentas sobre un año de gestión pública y un trazado de las perspectivas. En realidad el copioso discurso se asemejaba a los mensajes que los Presidentes constitucionales daban ante el Parlamento para hacer su rendición de cuentas sobre el estado de la Nación. Claro que había una diferencia; el Presidente le hablaba a los miembros de un solo partido: el *partido militar*, es decir, el oficialismo. Una de las claves del discurso –acaso la más vigorosa- fue la clausura que impuso a las fantasías sobre una salida institucional al viejo estilo. En un tono tajante, que jamás había empleado, el Presidente dijo: *“Sabemos en qué consisten los planes políticos: en un estatuto de los partidos y en un calendario electoral, cumplido el cuál todo seguirá como antes y la República volverá a vivir con la*

mentira de una democracia que hace tiempo no practica. Hemos ensayado este camino tres veces en el pasado inmediato (1946, 1958 y 1963) y no cometeremos el mismo error por cuarta vez. Volveremos a la democracia, pero no a la ilusión de la democracia". Desautorizaba así a su Ministro del Interior y a su Secretario de Gobierno (en ese momento Borda y Díaz Colodrero), que apañaban cierta defensa del sistema imperante hasta junio de 1966. Onganía fue más lejos aún: *"Hay una generación política que no puede insistir en la búsqueda de soluciones que no supo encontrar en su momento. La unidad espiritual del país exige el gesto cívico de su renunciamiento"* dijo. Parecía como que, de pronto, la insistencia de muchas de las figuras políticas en intentar obtener del Gobierno una promesa electoral o las alianzas que entre ellas tramaran, hubieran mostrado al propio Gobierno la imposibilidad y la inutilidad del diálogo que ellas y los propios funcionarios intentaban establecer. En los bastiones políticos impactó fuerte la dureza del discurso¹¹⁹, porque, en esta ocasión, pareció bajar una maciza cortina sobre el tema; el 29 de junio había dicho: *"...la Argentina campestre, la Argentina fácil, el país de las vacas y del trigo a quedado atrás"*. Ni una sola palabra estuvo dedicada al desemboque institucional del proceso; para referirse al futuro Onganía recargó las tintas mesiánicas: *"La revolución no es un plan político, ni un calendario electoral..., no es un plan petrolero, ni un plan económico....., es mucho más que eso.....es un estado del espíritu"*. La obsesiva redundancia mostraba ya su extravío. El Presidente parecía no haber advertido que hacía ya un año que gobernaba y ningún resultado concreto podía ser mostrado, en realidad se trataba de un año casi perdido. Cuando en junio de 1966, las Fuerzas Armadas depositaron en Onganía los símbolos del imperio militar sobre la Nación, muchos partidarios de la democracia formal de tipo liberal habían vaticinado horas aciagas: un sistema –desconocido y peligroso- llegaba, según ellos, para sustituir el tradicional liberalismo constitucional argentino. Por su parte, los adversarios del sistema liberal, los propagadores del reemplazo de estructuras, los que impulsaban la transformación en la manera de convivir y en las relaciones jurídicas, habían anunciado una verdadera revolución refundadora de la Nación. Un año después de aquellos días, resultaba difícil aún conceder razón a unos u otros: ni en la Argentina regía una cruel dictadura, ni aparecían los signos que –históricamente- definían a cualquier revolución. Juzgar el proceso era una tarea compleja. Tal vez debía comenzarse con la comparación entre lo que las Fuerzas Armadas quisieron hacer entonces y lo que en realidad consiguieron un año después. Las ilusiones fundadoras estaban cuidadosamente enumeradas en el *Anexo 3 del Acta de la Revolución*, un documento que el Presidente –apenas nombrado- se apresuró a ampliar con un comentario titulado: *Políticas del Gobierno Nacional*. Entre los *Objetivos Generales* del documento suscripto por la Fuerzas Armadas, se citaba, como primer propósito del esquema político nacional: *"promover un espíritu de concordia, de solidaridad y tolerancia entre los argentinos"*. No parecía que la solución dada al conflicto azucarero y a los conflictos con los sindicatos portuarios y ferroviarios hubiera conducido a tal propósito. Si bien –como decía Díaz Colodrero, Secretario de Gobierno- *"el orden, la paz y la seguridad fueron alcanzados"*,

esto se logró con un fuerte precio: congelar los derechos de reunión y la libre asociación para fines políticos. Pareciera ser que la conciliación auténtica del país –que el Secretario creía ver- no era otra cosa que el temor a las sanciones y reprimendas o –en todo caso- a una total indiferencia de la población. Restablecer una auténtica democracia representativa también había sido uno de los enunciados de los Comandantes, por entonces mandantes del Presidente. Costó mucho lograr una definición acerca de que se entendía en las altas esferas del Gobierno por *representatividad*¹²⁰. Ciertos funcionarios y dirigentes allegados al Gobierno pretendieron promover la vigencia de los *grupos intermedios* como nuevos representantes de la comunidad, algo que aparecía –en principio- con un cierto sabor corporativo y bastante emparentado con el populismo. Una breve revista de los actos oficiales en materia económica –los únicos que, sin embargo, revelaban coherencia- permitía sostener que – en definitiva- no se había logrado aún erradicar las causas profundas que habían llevado al país a un supuesto estancamiento; no había aún planes innovadores en materia energética, ni todavía se había implementado el planeamiento en materia hidroeléctrica. En defensa del Gobierno debe decirse que aún era muy temprano para esperar resultados del plan de Krieger, que en realidad –para entonces- llevaba apenas seis meses en el Ministerio. Con todo, existían elogiosas opiniones del sector privado acerca de la voluntad del Gobierno de establecer las bases para una mayor expansión económica, aunque los métodos utilizados –devaluación, recargos, retenciones y mayor carga impositiva- que comprometían el protagonismo de la clase media ya comenzaban a generar conflictos y protestas en vastos sectores del trabajo¹²¹. El justo equilibrio – preconizado por el Anexo 3- no parecía estar garantizado: los intereses patronales parecían haber desbordado conquistas obreras que eran admitidas casi con unanimidad por el mundo del capital y del trabajo. En otros casos –como el ferroviario- el interés sectorial parecía prevalecer sobre el interés nacional, al sostener un déficit que superaba los 70 mil millones de pesos anuales. La impaciencia parecía señorear el país. Frente al Gobierno, se erguían –aislados a veces, unidos otras- los grandes partidos políticos nacionales, la CGT y el movimiento estudiantil universitario, en una actitud que solía ser amenazadora. Por supuesto, para la Casa Rosada, estas eran las estructuras del pasado, lo que había que superar. Un año atrás estas organizaciones parecían destruidas, pero, errores del Gobierno y sus desajustes internos, la falta de una orientación política original y moderna que otorgara sentido a todo el proceso y lo arrancara de las simples divagaciones declamatorias parecieron volverlas a la vida. En otro tipo de balance podría tomarse en cuenta que, en un año hubo dos gabinetes y por lo tanto dos crisis y que, los primeros seis meses pasarían a la historia como la sumatoria de un cúmulo de torpezas y contradicciones. Como defensa, podría decirse que la revolución –al llegar- tenía objetivos y no plazos, y que es absolutamente lícito equivocarse y reiniciar. Es cierto, pero para los gobernados, objetivos y plazos significaron lo mismo cuando –un año atrás- una mayoría abrumadora le había dado la bienvenida a lo que parecía ser una revolución transformadora.

Quizá Onganía no advirtió –aquella noche del jueves 6 de julio ante sus camaradas de armas- que estaba pronunciando un discurso político y no una arenga doctrinaria. El uso de la primera persona del plural (no nos equivocaremos) demostraba que el Presidente daba por descontado –en su defensa de la revolución- que había obtenido el asentimiento del país entero¹²². En varias oportunidades descontó el apoyo de sus gobernados: *“La decisión de lanzarnos al futuro está tomada por todo el pueblo argentino y para todo el pueblo argentino”* sentenció, y agregó: *“La falta de representatividad que caracterizó a los regímenes anteriores desaparecerá –decide Onganía, per se- porque el actual proceso es, precisamente, un crisol de representatividad”*. Entonces, ante la mirada incrédula y sorprendida de sus camaradas, agregó: *“La democracia no se confunde con el acto mecánico y obligado de la votación, ni con los partidos políticos, hoy disueltos”*. *¿Acaso la democracia no se expresa también –propone en su discurso- en la parsimonia con que el pueblo aguarda los resultados de la obra de este Gobierno?* La acción revolucionaria parecía dirimirse –en síntesis- en procurar ganar el tiempo perdido en el pasado inmediato y poner el país al día lo más pronto posible, abriéndole la puerta hacia una marcha eficaz y armónica. El Presidente – que no podía vislumbrar una posible tormenta- sin embargo intuyó que debía avalar sus promesas sobre la esperanza y las ambiciones de los gobernados. La ruptura en su discurso ante sus camaradas, lo obligaba a que –de ahora en adelante- la vaguedad debía ceder paso al realismo. El mismo Onganía lo reconoció al final de su mensaje, a modo de César dijo: *“La suerte está echada”*¹²³.

La intención contenida en el Anexo 3 de *“promover un espíritu de concordia, de solidaridad y tolerancia entre los argentinos”* poco tenía que ver con la sanción de la Ley 17.401 de Defensa contra el Comunismo, sancionada por el PEN el 25 de agosto de 1967, que, con sus dos decenas de artículos era capaz de desatar –en manos descuidadas o resentidas- justamente lo que el Gobierno aspiraba a evitar: la división entre los argentinos¹²⁴. Los mayores esfuerzos para su sanción estuvieron a cargo del Secretario de Informaciones del Estado –el general Eduardo Señorans- pero el curado del texto fue cuidadosa obra del Ministro de Interior Guillermo Borda, pero, en realidad, esta era una vieja aspiración de las Fuerzas Armadas, fue curioso que haya demorado 14 meses en sancionarse¹²⁵. En los fundamentos de la Ley, Borda es más tajante que Osiris Villegas (Secretario del CONASE) al sostener que: *“la penetración comunista es muy profunda y difundida y operaba con recursos que eran muy difíciles de controlar por los medios normales que el Estado tenía a su disposición, así que le ley era necesaria para custodiar el orden público y la salud espiritual de la Nación”*. El Ministro ofrece el ejemplo de buena parte de América Latina, pero en América no todos los gobiernos pensaban lo mismo: las autoridades brasileñas ya habían declarado que les bastaba con la legislación vigente y las propias fuerzas de seguridad para contrarrestar las acciones subversivas¹²⁶.

En la semana del 11 al 16 de setiembre, sectores extraoficiales creyeron descubrir el nacimiento de un plan político dentro de la mismísima Casa Rosada. Las especulaciones se basaban en dos hechos ciertos: el paso por la Argentina de profesores europeos especializados en la *democracia de participación* que desdeñaba el sistema de partidos y predicaba el fortalecimiento de las *organizaciones intermedias* y la incubación del *congresalismo*, un movimiento espontáneo que, por el momento, conocían solo los funcionarios del Ministerio de Interior¹²⁷. Es posible que no llegaran a la Argentina para dar recetas o propiciar sistemas: pero las tenían¹²⁸. Sus opiniones se sustentaban en que, los partidos políticos debían, a menudo, consultar a sindicalistas, empresarios u otros dirigentes de la comunidad; y estos a su vez, a los políticos: se trataba, en definitiva, de legalizar a esos grupos y darles una cuota de poder¹²⁹. Esas ideas tuvieron, también sus teóricos en Argentina¹³⁰. La incipiente aparición del *congresalismo* –como modo de denominación- se dio como aversión a los términos *comunitarismo* y *corporativismo*, que se juzgaban un tanto confusos, arcaicos o irritantes por las manchas que les había aplicado la Historia en los años de la década de 1930; pero en realidad solo era cuestión de formas. Como prueba de su vocación instauradora, para fines de octubre de 1967, se celebraría en el valle del Comahue (provincias de Neuquén y Río Negro) el primer *Congreso Representativo de la Producción, el Comercio y el Consumo*, que eran reuniones regionales de la que saldrían delegados a una asamblea nacional¹³¹. Para toda esta movida –fogoneada por el ala *nacionalista* del gabinete- hacía falta –sin duda- la anuencia del Gobierno, y esta pasaba por la construcción de un nuevo edificio institucional y hasta por la reforma de la Constitución. En este sentido, las opiniones se encontraban –como siempre- divididas: algunos calculaban que el Gobierno no se atrevería a tanto y se contentaría con leves reformas y maquillajes al viejo sistema. Otros suponían lo contrario: el gobierno necesitaba, con urgencia, una base política y estos Congresos podían proporcionársela juntamente con una legitimación: a cambio de ellos debería pagar el alto precio de montar un orden institucional distinto. Desde luego, si el Presidente estuviera por tomar decisiones tan dramática, debería contar con la anuencia del pleno de las Fuerzas Armadas o imponerles su criterio a como diera lugar¹³². Sin embargo, ninguna de las dos cosas sucedió. No fue ajeno a esta ofensiva *nacionalista* el coronel Juan Francisco Guevara (ya citado en este trabajo como adalid del *comunitarismo* en la Argentina) que había llegado a Buenos Aires a fines de agosto – desde su destino como Embajador en Colombia- para mantener contactos con militares y miembros del Gobierno, su regreso formal era para reunirse con el Presidente¹³³. Sobre este tema de la representación, es útil aclarar que –por entonces- existía en el país un prejuicio acerca del *corporativismo*, el *comunitarismo* las *organizaciones intermedias* de la comunidad: no debía extenderse a considerar *fascismo* a cualquier tipo de acercamiento entre los grupos de intereses; era lícito y aconsejable que el Gobierno los utilizara para asesorarse¹³⁴. Pero por el momento, la autoridad debía seguir residiendo en el *facto* y el *consentimiento* de los gobernados debía desecharse, como correspondía a la más elemental teoría del derecho revolucionario. Parecía que en este

escenario político dos alternativas se planteaban: o volver a la democracia formal –de fraude real- o construir un Estado corporativo como el que había sido pulverizado en la Segunda Guerra Mundial. Las elecciones negarían a la Revolución y la formación de un Estado corporativo no parecía ser tolerado por el país: las Fuerzas Armadas, las fuerzas obreras y la clase media, tan celosa esta última de sus instituciones democráticas, no parecían tolerarla. Una solución podía haber consistido en desenvolver hasta el fin las posibilidades internas de la Revolución y, lejos de luchar contra ellas, habría que combatir por ellas y contra las contradicciones, errores y luchas internas que la venían socavando. Pero, habría que tener cuidado: detrás de cada salida política se podía ocultar una nueva estafa, porque las coyunturas realmente democráticas solo se producen como consecuencias de los procesos revolucionarios y no como forma de renunciar a ellos. Hacia fines de 1967, Onganía parecía encaminarse a una apertura populista propulsada en su gobierno por el ala nacionalista, como muestra, la Secretaría de Comercio publicaba el Decreto 9.204 de precios máximos para los alimentos básicos, acordado con Krieger¹³⁵. La congelación no fue la única muestra que le confería al fin de año un sabor demagógico, También influyeron la aparición del presupuesto de recursos y gastos para 1968 –con una disminución del déficit de unos 50 mil millones de pesos- y un incremento en la inversión pública de 211 mil millones de pesos y reservas para el pago de la deuda del orden de los 60 mil millones; para atender los gastos globales – unos 650 mil millones de pesos- la Nación no apelaría a aumentos de tasas de impuestos en vigencia ni a la aplicación de nuevos impuestos extraordinarios: todo un logro, si se cumpliera, claro. Lo cierto era que –por el momento- la ambigüedad para Onganía, parecía haber resultado una táctica útil en una estrategia destinada a postergar –todo lo posible- las definiciones políticas.

5.8.1. La hegemonía cuestionada: el largo camino del día hacia la noche.

Durante 1968 el régimen da muestras de desgaste y debilitamiento, en un clima popular de cierto escepticismo generalizado que, desde luego, no podía cambiarse con los discursos oficiales. El programa económico de Krieger se convirtió en blanco de críticas cada vez mayores, no solo desde el sector combativo del movimiento sindical –que se oponía a él desde el principio- sino también por parte de los voceros de sectores económicos que veían sus intereses afectados. Unieron también sus voces de crítica dos grupos políticos que se habían identificado con la Revolución: uno de ellos fue el desarrollismo *Frigerio-Frondecista* que atacaba a Krieger por sacrificar el desarrollo a la estabilidad económica y por abrir la economía a la dominación extranjera¹³⁶. El otro punto de vista –bastante diferente- fueron las críticas expresadas por Álvaro Alsogaray que se quejaba de que Krieger había abandonado el enfoque de economía de mercado que se había expresado en la declaración original de los objetivos revolucionarios –o sea Anexo 3- y había montado una forma híbrida (se refería a la heterodoxia económica de

Krieger) de economía que –según él- nunca podría alcanzar las metas enunciadas¹³⁷. A pesar de las críticas, el Presidente siguió apoyando a Krieger y también lo hizo la mayoría del Ejército¹³⁸. A principios de 1968, el viernes 12 de enero más precisamente, el Gobierno ordenó el arresto del general de brigada Adolfo Cándido López, devenido – desde hacía un tiempo- en adalid de la salida democrática partidista¹³⁹ y lo liberó 15 días más tarde, una especie de globo de ensayo para ver la reacción de la oposición política tradicional¹⁴⁰. Pero el ensayo podía salir mal, el arresto del iluminado general -ahora democrático- podía tener un efecto contrario al deseado: su consagración como jefe de los opositores. No fue así, y López dejó la actualidad periodística con la misma rapidez con que había llegado^{141/142}. Sin embargo, las consecuencias políticas del *episodio Lopequista* no resultaron un tema menor para el Gobierno, que vio sacudirse a la tradicional oposición político partidaria alrededor del torbellino causado por este general nacionalista. Lo cierto es que la suya fue la primera voz disonante en el Ejército y un polo de interés para los fatigados líderes partidarios.

A fines de abril de 1968 –más precisamente el miércoles 24- el Ministro de Interior – Guillermo Borda- en una alocución en la poderosa Asociación de la Prensa Extranjera, dijo: *“Es necesario agregar, para que no se nos entienda mal, que la participación comunitaria no reemplaza ni excluye el ejercicio de los derechos políticos tradicionales, tales como las elecciones y los partidos políticos. Por el contrario, los afirma y remozza”*; era la primera vez que una alta jerarquía oficial ensalzaba al antiguo régimen: tres días antes, el Presidente había dicho en Trenque Lauquen a sus oyentes: *“Con fe y confianza tendréis esa democracia representativa que tanto ansiáis”*. Por eso, la ratificación –por parte del Ministro- de las palabras del Presidente sugirieron una síntesis entre los polos institucionales dentro de los cuales el Gobierno oscilaba: el pluripartidismo tradicional y el sistema comunitario o de entidades intermedias. Las declaraciones del Presidente y su Ministro no parecían haber sido presionadas ni por la poderosa prensa extranjera ni por la jerarquía militar; tal vez el oficialismo estuviera repitiendo las maniobras dilatorias que tan buen resultado le habían dado el año anterior: que la idea comunitaria no hubiera logrado plasmar en los 22 meses que llevaba la Revolución, parecía demostrar su carácter meramente proselitista. Si bien también era cierto que el apoyo de las fuerzas vivas solo se conseguiría a cambio de algo y, en esta etapa económica, el Gobierno no tenía mucho para ofrecer, según el plan económico de Krieger. Fuera como fuese, la promoción oficial del *comunitarismo* –aún vestido con ropajes democráticos- provocaba siempre la irritación del poderoso sector liberal. El Gobierno intentaba retener las alianzas logradas con un sector sindical (vandarismo) y algunos grupos empresarios, frente a una oposición que –por momentos- intentaba presentarse como sólida, con la intención de capturar a la gran masa pasiva que se suponía en manos de Onganía. Que el equilibrio no se modificara parecía ser, por el momento, la estrategia oficial^{143/144}. Las declaraciones de Borda causaron conmoción en el ambiente político y empresarial de corte liberal ya que, por cierto, el Presidente, sin duda, compartía las ideas esbozadas

por su Ministro, el mismo las había desgranado ante los mandos del Ejército en octubre pasado. Por otra parte, era muy difícil imaginar que un Ministro no sometiera al Presidente las líneas generales de su exposición¹⁴⁵. Este movimiento pendular –poco congruente- es el mismo que se encontraba en el gabinete, donde un ala liberal –tal vez liderada por Krieger- choca con el ala nacionalista liderada claramente por Borda. El Presidente parecía utilizar este choque como un filtro, la necesaria discusión de la que – finalmente- saldría la luz; pero, a pesar de su autoridad incuestionable y su continuo arbitraje, el filtro se había convertido en incoherencia. Si se medían los actos del Gobierno, aparecía como triunfante el ala liberal, pese a la fama nacionalista de Onganía.

El viernes 5 de julio de 1968, el Presidente –en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas y a casi dos años de haber asumido- leyó un discurso impalpable, edulcorado y poco concreto ante un desconcertado auditorio de 500 camaradas de armas. Se esperaba algo más concreto: la falta de resultados trascendentes, el acrecentamiento de las tensiones internas justificaban una pieza oratoria de envergadura, no el disparo de fuegos de artificio. Onganía prefirió lo segundo y, tal vez por eso, no recibió el aplauso de los contertulios. Una vez más, los apotegmas circunstanciales o las metáforas ya conocidas fueron incapaces de encender la euforia que el Presidente esperaba: a dos años de ingresar a la Casa Rosada, el Presidente parecía seguir pensando que su única tarea era la de tutelar a los argentinos y no la de conducirlos. Según dijo: *“El mundo está convulsionado por acontecimientos que pretenden apartarlo de sus objetivos de paz y progreso”*. ¿Cómo defender a la Argentina de esta onda demoníaca? El Gobierno tenía la solución: Onganía declaró –a modo de homilía- que los argentinos debían integrarse en lo físico y lo espiritual y; *“la juventud asumir la propia responsabilidad de su porvenir y enriquecer el patrimonio cultural, la economía subordinarse al ser humano y así liberarlo. No hay más que un cemento para erigir este edificio: la solidaridad, adormecida demasiadas veces en nuestra historia por el avance del espíritu agresivo y crítico, aunque salvada por el mismo pueblo que las refugió en cooperativas y sociedades de fomento. Se llegará así a la comunidad solidaria en que cada ciudadano tiene el derecho de expresar sus ideas, en que el ejercicio de la oposición no impide ni descalifica para contribuir al progreso común. La comunidad solidaria es el corazón del Tiempo Social – insistió Onganía- el segundo de los fijados por el Gobierno, antes habrá que estabilizar la economía y entonces, en tercer término, amanecerá la fase política. Nuestra misión no es demoler las instituciones construidas durante siglo y medio de vida argentina, sino perfeccionarlas. No podemos marchar hacia la democracia representativa bajo la divisa de una facción”*. Desde luego, el Presidente no especificó que entendía por democracia representativa y llenó su alocución de vaguedades e incoherencias. Hacía exactamente un año y en el mismo evento –solo que ante 800 camaradas- había dicho que la etapa preparatoria había concluido y que la Nación se lanzaba a sus grandes destinos. Todo seguía sonando a promesas lejanas, porque –en el último año- poco había cambiado en

el país, salvo algunas prudentes y conservadoras medidas administrativas. En todo caso, el discurso de Onganía-de ese viernes 5 de julio ante sus camaradas- por su orfandad de definiciones y reincidencia en abrir expectativas nunca cumplidas, era una historia de desencuentros y tribulaciones que autorizaba a preguntarse: ¿Adónde va el Gobierno?

Nunca -salvo en los fastos de junio de 1966- la Casa Rosada había registrado un ceremonial tan solemne como el del viernes 31 de enero de 1969. Por la mañana, el Presidente, el Ministro de Economía (Krieger Vasena) y el Secretario de Trabajo (San Sebastián) engalanaron el Salón Sur de la Casa Rosada para escuchar a 46 líderes sindicales adictos al Gobierno (*colaboracionistas o participacionistas*) quejarse por la política económica del oficialismo¹⁴⁶. Que el Gobierno los hubiera convocado y los haya estimado capaces de transmitirle las inquietudes laborales del país, constituía -para ellos- un espaldarazo formidable. Más que un resumen de las críticas obreras, importa señalar el contenido simbólico de aquella reunión: esta era la primera audiencia concedida por el Presidente a los trabajadores argentinos desde que el Plan de Acción movió al Gobierno a clausurar el diálogo. El Gobierno parecía indicar que solo trataría con quienes adhirieran a sus planes administrativos y estrategia política; la audiencia de ese viernes indicaba que la reorganización definitiva por negociaciones con los distintos sectores internos, solo sería posible si -a través del *participacionismo*- se activaba la luz verde para el renacimiento de la CGT¹⁴⁷. Por entonces, el Gobierno parecía conforme con la unidad sindical indicada por Juan Perón desde Madrid, cuyo liderazgo recaía en Vandor. El Secretario San Sebastián, también predicaba la unidad (al igual que Perón) pero intentaba el ingreso del peronismo sindical a la órbita del régimen, al tiempo que, el vandorismo también soñaba con integrar a Onganía a su *sanedrín*. Tarde o temprano -pensaban- el Presidente necesitaría legitimarse en el poder al costo de un referéndum popular y, el apoyo justicialista, le aseguraría dar pelea al liberalismo^{148/149}. La tesis del nacionalismo favorecía las conversaciones -que en voz baja- se desarrollaban entre un oficialismo que necesitaba legitimación y un peronismo necesitado de influencia¹⁵⁰. Quedaba dicho entonces los términos del tácito acuerdo: negociar con los gremialistas, para evitar que sus bases se deslizaran -en una coyuntura imprevista- hacia la subversión, regalándoles a cambio de su colaboración una nueva CGT¹⁵¹. Aquel 31 de enero -ante los dirigentes sindicales- Onganía había arengado: “*Deseamos que a breve plazo se constituya una CGT fuerte*”. En respuesta -el 19 de marzo- la central vandorista de la calle Azopardo ofrecía a las demás organizaciones abrir sus cuadros mediante una reunión del CCC, que permitiera escoger nuevas autoridades y, obviamente, incluir en ellas a los representantes de las entidades que aceptaran incorporarse¹⁵².

Costaba creer que el Presidente hubiera reunido a sus Ministros y Secretarios de Estado -aquel viernes 28 de marzo de 1969- solo para justificar el origen de su Gobierno. En medio de un protocolo rimbombante y decimonónico -del gusto del Presidente- les

ordenó a sus funcionarios: “*En toda decisión es necesario que intervenga la comunidad. Incluimos a la comunidad en la conformación del Estado, al que no concebimos como instrumentación de órganos e instituciones exclusivamente públicas, sino también privadas. Deberán prevalecer hombres nuevos, que provendrán de del moderno ámbito de la real actividad cultural, social y económica del país, único lugar donde se dan hoy los grandes dirigentes*”. La exhortación imperiosa a los Ministros, Secretarios y Directores Nacionales era para que activaran la integración de los *Consejos Asesores* y, el Presidente, les dio un plazo de treinta días para programarlos¹⁵³. Desde luego que este exordio alarmaba –cada vez más- a los liberales, la proclama sonaba muy parecida a la consigna mussoliniana: *dentro del Estado todo, fuera de él nada*. Acaso había sido la contención poderosa del liberalismo –ahora bastante atenuada por su desgaste en la acción de Gobierno- lo que había detenido la mano del oficialismo durante los últimos 33 meses: el Gobierno –en todas sus proclamas- había amagado, sin pasar del límite, con instituir el *comunitarismo* como la institución central de un *Nuevo Estado*¹⁵⁴. Hacia el otoño de 1969, las condiciones políticas en el país parecían haber cambiado fundamentalmente: había variado la relación de fuerzas entre el Gobierno y la oposición. Esto explicaba –suficientemente- porque Onganía se lanzaba a extender el *consejalismo* a todos los rincones del país: si hacía dos años cualquier alegato a favor de la participación despertaba una enconada protesta del liberalismo y el temor de una parte del sindicalismo, ahora que los líderes sindicales estaban impacientes por integrar los *Consejos* de la mano con los empresarios, el liberalismo ya había atenuado su influencia y los partidos políticos diluido su existencia, era el momento apropiado para lanzar el anillo de *Consejos Asesores* –en sus diferentes niveles- que conformaban las *organizaciones intermedias*. Pero, a pesar de las circunstancias favorables que le daba la coyuntura política del momento, el Presidente parecía creer –en su terca, desacertada convicción- que las palabras serían –tarde o temprano- más poderosas que los hechos.

5.8.2. La interna militar, el relevo del general Alsogaray y la inesperada llegada de Lanusse.

Durante el otoño de 1968, las relaciones entre el Comandante en Jefe del Ejército –el general Julio Alsogaray- y el Presidente Onganía ya habían comenzado a deteriorarse. Las diferencias venían de largo tiempo atrás, desde que Onganía no aceptara las sugerencias de Alsogaray sobre la participación o la opinión de las Fuerzas Armadas en la gestión de Gobierno. Pero Alsogaray no era un general más, él había sido el organizador mismo del movimiento militar que había derrocado a Arturo Illia, lo había expulsado –personalmente- de la Casa Rosada y había encumbrado a Onganía en la Presidencia de la Nación. Como jefe de la fuente militar de la que emanaba el poder sentía que tenía el derecho y el deber de presentar la posición del Ejército sobre los

temas de políticas y de nombramientos¹⁵⁵. Por eso, la causa específica del deterioro de la relación era de carácter eminentemente político: la insatisfacción de Alsogaray con los nacionalistas, atrincherados en el Ministerio del Interior y la Secretaría General de Gobierno (bajo el control de Borda y Díaz Colodrero) y la influencia que parecían ejercer sobre el Presidente. Alsogaray se sentía comprometido con la eventual restauración de un sistema democrático representativo liberal al estilo tradicional que surgía de la constitución y de los documentos de la Revolución. El general y su hermano Álvaro – Embajador en los EE.UU.- eran especialmente sensibles a declaraciones o acciones que reflejaran ambivalencias sobre las futuras instituciones políticas del país. Justamente, durante fines de 1967 y en el primer semestre de 1968, el Ministro del Interior, el Secretario de Gobierno y el propio Presidente, habían pronunciado discursos o hecho declaraciones que combinaban el menosprecio hacia los partidos políticos con propuestas –no muy precisas- sobre nuevos mecanismos e instituciones para la participación política. También generó desconfianza en ambos hermanos –de claro sesgo liberal- que, el Presidente –acompañado de su ala nacionalista- intentara crear una base personal de legitimidad con apoyo en la CGT¹⁵⁶. El discurso de Borda en la Asociación de la Prensa Extranjera –aquel 24 de abril- dejó paso a lo que dio en llamarse la *crisis de mayo*, en lo que pareció ser un enfrentamiento entre Alsogaray y el Presidente, que finalmente no resultó tan grave. Alsogaray sabía que –pese a su disgusto personal- era muy limitada la cantidad de oficiales de alta graduación que compartían su profunda preocupación por la escalada *nacionalista* en el Gobierno. Y la verdad era que, entre los oficiales de graduación intermedia, no se tomaba el tema *corporativista* muy en serio ya que –Borda y Díaz Colodrero- no parecían tener la menor idea acerca de cómo poner en práctica sus ideas *comunitarias*. En todo caso, el general Alsogaray no insistió con el tema al extremo de escalar en un enfrentamiento con el Presidente y la atmosfera de crisis se disipó¹⁵⁷.

Onganía eligió la tercera semana de agosto –precisamente el 23 de agosto de 1968- cuando los oficiales más importantes participaban de la “Operación Alborada” –un ejercicio de fuerzas combinadas organizado por el Estado Mayor Conjunto- para hacer su movimiento. Ya tenía decidido no solo desplazar al general Alsogaray sino también a los otros dos comandantes en actividad¹⁵⁸. En declaraciones a la prensa – el 30 de agosto, una vez desplazado- el general Alsogaray manifestó que la ligazón entre las tres fuerzas y el Presidente se encontraba rota por los relevos dispuestos, seguramente, porque dos de los nuevos miembros de la Junta de Comandantes –Pedro Gnavi en Marina que relevaba a Benigno Ignacio Varela y Jorge Martínez Zuviría en la Fuerza Aérea que sucedía a Adolfo T. Álvarez - no figuraban en el reducido grupo de hombres dentro del cual Alsogaray tenía especiales derechos por haber sido el autor material de la destitución del anterior Presidente constitucional¹⁵⁹. En adelante, el general (R.E.) Julio Alsogaray junto a su hermano Álvaro delinearían el programa político neoliberal que buscaría el retorno a la normalidad constitucional a través de las urnas¹⁶⁰. Un dato

interesante es que, todos los relevos se realizaron el 23 de agosto, sin aguardar al 4 de octubre, que era el plazo tradicionalmente dispuesto por las fuerzas para la entrega de los comandos¹⁶¹: la intención del Presidente era impedir a los comandantes relevados arreglar los pases, ascensos y designaciones de acuerdo a sus planes personales y asegurarse que los nuevos comandantes consultaran con él los nombres resultantes en las juntas de Calificaciones que disponían el nuevo escalafón.

El jueves 29 de agosto de 1968 -en los cuarteles del Regimiento de Patricios en el barrio de Palermo- el general Alejandro Agustín Lanusse, recibía de manos del Ministro de Defensa -Emilio Van Peborgh- el bastón de comando sobre el Ejército¹⁶². Los cenáculos liberales, que vieron a Alsogaray en desgracia, se precipitaron a la vera de Lanusse, pero el comandante no pactaría con ellos: a la inversa de su antecesor, al *Cano* (apodado a Lanusse por sus compañeros de armas, precisamente por su cabellera prematuramente canosa) le sobraban fuerzas en el Ejército para poder apoyarse¹⁶³. La experiencia de Alsogaray estaba, todavía, demasiado viva como para que Lanusse cometiera los mismos errores. El ex Jefe del Ejército había tramado una vasta red de contactos civiles por medio de los asesores de su hermano Álvaro y estaba en comunicación con el general (RE) Pedro Eugenio Aramburu, la nomenclatura de políticos tradicionales como Ricardo Balbín, Jerónimo Remorino, conservadores, social demócratas y hasta el propio vandomismo¹⁶⁴. Alsogaray urdía la posibilidad de convocar a elecciones luego de un interinato de Aramburu. Resultó curioso que Onganía le diera batalla precisamente en el campo de la política: a principios de 1967 ya había rechazado las sugerencias del general Alsogaray para despedir al Ministro Borda y a los Secretarios Frinshknecht y Eduardo Señorans; la firmeza de Onganía convenció a los oficiales del Ejército de que los planteos del Comandante en Jefe no surtirían efecto¹⁶⁵. Con la llegada de Lanusse parecía que, para Onganía y los cuadros superiores de las Fuerzas Armadas, ya no existían problemas en la interna militar. El Presidente creía haberlos solucionado con la instalación en la cima del Ejército del teniente general recién llegado al Comando en Jefe: un Comandante duro para los próximos diez años, un caudillo en ciernes, en suma: el poder situado detrás del trono para protegerlo. Para el Presidente este fue un momento de triunfo, al eliminar los últimos vestigios de la Junta Militar que lo había nombrado había consolidado su posición como Jefe de la Revolución. De allí en adelante -debe haber pensado- podría gobernar sin tener que escuchar las quejas y sugerencias de un Comandante en Jefe de las Fuerzas Armadas; podría seguir su propio concepto de las metas revolucionarias, confiando en su propio juicio para establecer la dirección de sus políticas y definir los límites de su poder. Pero: ¿sería Lanusse el guardaespaldas militar de Onganía? ¿O interpretaría Lanusse -por el contrario- que su deber consistía en controlar al Gobierno? Estos serían los dos caminos que tendría por delante el nuevo titular del Ejército: el elegido por Lanusse se revelaría un año más tarde.

5.8.3. Un suceso (in) trascendente en Tucumán. La proto-insurgencia armada revolucionaria en la Argentina de los sesenta.

A principios de 1967, la provincia de Santiago del Estero estaba al mando del general Carlos Uriondo. A la sombra de este gobierno filo-católico, prosperaron las corrientes políticas que tenían una inclinación confesional. Conducía la iglesia de Santiago un obispo ultra conservador y elitista, Monseñor Manuel Tato, quien había sido severamente cuestionado por Perón. Junto a él había encontrado refugio otro sacerdote, aún más reaccionario y golpista: Monseñor Castellanos. Con este paraguas económico-político-confesional se consolidaría en esta provincia la Universidad Católica de Santiago del Estero. Sería en este centro de estudios –todavía flamante- donde nacerían los principales conflictos universitarios en Santiago del Estero, cuya conducción muy pronto aglutinarían los grupos de izquierda moderada y revolucionaria. En este período, los hermanos Francisco René, Amílcar y Mario Roberto Santucho combinaban la organización de pequeñas agrupaciones de hacheros –en los pueblos más inhóspitos del campo santiagueño- con el trabajo político en los sindicatos de obreros azucareros en Tucumán. Acosados por la represión vivían prácticamente en la clandestinidad. La librería Dimensión –regentada por Gilda Roldán- esposa de Francisco René, comienza a convertirse en un foco de actividad revolucionaria. Junto a la librería Nuevo Norte –que nucleaba a los militantes peronistas de izquierda- constituyen muy pronto los motores ideológicos que conformarían los primeros núcleos de los movimientos guerrilleros revolucionarios¹⁶⁶. En este contexto, se formarían las *Fuerzas Armadas Peronistas*, conducidas por Envar El Kadri, que –en un largo comunicado- explicaron su decisión de desarrollar la lucha armada: poco después de esa proclama, los revolucionarios de las FAP lanzarían su guerrilla rural en Tucumán. En agosto de 1968, se reunían varios jóvenes militantes peronistas en distintos puntos del país. Traían un extenso ejercicio de luchas político-militares en movilizaciones, huelgas, toma de fábricas y colocación de caños (bombas caseras). Habían nacido en la *Resistencia Peronista* –que se había iniciado en 1955- contra quienes habían derrocado al Presidente Perón. La Resistencia fue pasándose la posta durante las dictaduras de Aramburu, Onganía, Levingston y Lanusse. Aquellos jóvenes venían unidos por la voluntad de incorporar –de un modo militarmente organizado- la lucha guerrillera –rural y urbana- a esos trece años de *Resistencia Peronista*. Algunos venían de una práctica revolucionaria en el Movimiento Peronista, otros del cristianismo, unos cuantos de la organización Tupamaros y de Palabra Obrera, un grupo trotskista liderado por Ángel Bengoechea: este grupo, finalmente, ingresaría al PRT-ERP. Desde el inicio se plantearon dos concepciones: construir una *herramienta político-militar* o el *foco rural*: el método guevarista conocido como *foquismo*. Varios militantes de ese grupo inicial se propusieron instalar un foco guerrillero rural en Tucumán, siguiendo la experiencia de los *Uturuncos*. Con este intento de lanzar la guerrilla rural en Taco Ralo –en la selva tucumana- las Fuerzas Armadas Peronista salieron a la luz el 19 de setiembre de 1968¹⁶⁷. En la madrugada de ese 19 de

setiembre, nueve personas fueron detenidas por la policía de la provincia de Tucumán, en las cercanías de Taco Ralo, una localidad de menos de dos mil habitantes. La presencia de los forasteros había sido denunciada por los lugareños, convencidos de encontrarse frente a una banda de contrabandistas. Por el contrario, se trataba de una guerrilla de buena preparación para-militar, formada por activistas peronistas, en varios casos de probada actuación anterior. El descubrimiento provocó contradictorias interpretaciones, especialmente sobre la verdadera finalidad de los guerrilleros, es decir, si su actuación buscaba realmente desarrollarse en el sentido clásico de este tipo de operaciones, o solo se proponía el estallido de la publicidad consiguiente. En 1954 y en 1964, en la Argentina ya se había asistido a episodios similares y los habían recibido con una desconfianza generalizada, sin embargo, a la postre, resultó que en ambas ocasiones los guerrilleros *habían procedido con completa honradez* y, lo que tornaba sospechosa su actividad era el contexto político en que habían irrumpido¹⁶⁸. Coincidentemente el 18 de setiembre, fuerzas policiales fueron desplazadas hacia el norte, para, finalmente recalar en Tucumán. A un tiempo, el Ejército realiza unas extrañas maniobras, también en Tucumán. El 19 de setiembre hubo dos noticias en los diarios de la tarde: el descubrimiento de los guerrilleros en Taco Ralo y la conferencia de prensa convocada por el Jefe del Ejército para informar cual sería la posición que la Argentina sostendría en la VIII conferencia de Ejércitos Americanos: el apoyo irrestricto a la creación del Sistema Militar Interamericano (SMI) para combatir la agresión del comunismo internacional. El episodio de Taco Ralo sonaba –definitivamente- como un intento guerrillero real pero ingenuo, debidamente infiltrado y propulsado por los servicios de inteligencia del Ejército, con el propósito de apoyar la gestión de Lanusse en la Conferencia¹⁶⁹.

5.9. El '69: fin de la “Pax Onganía”. La posición de la Iglesia y el último intento comunitario.

En la última semana de abril, en la Quinta Loyola, en el suburbio porteño de San Miguel, se reunía el Consejo Episcopal Argentino para iniciar sus deliberaciones. El sábado 26, un hombre mayor descendía de una limusina azul para ingresar a los claustros, su vestimenta escarlata lo identificó rápidamente: era el Cardenal Primado Antonio Caggiano (80 años) Arzobispo de Buenos Aires. Antes de ingresar al edificio se detuvo a estrechar la mano de unos 10 muchachos de sotana que habían estado allí durante la semana de deliberación del Episcopado Nacional. Esperaban que su protesta fuera tenida en cuenta por el sínodo: eran los curas progresistas que representaban a la Iglesia de la liberación del movimiento tercermundista, ya era conocidos como los curas del Tercer Mundo. No era extraño que Caggiano confraternizara con ellos: el sínodo evidenciaría el giro más ponderable que la jerarquía del catolicismo argentino haya adoptado en los últimos diez años; los documentos que emanaron de esa reunión

denotarían un compromiso entre el Obispo y los pobres; más claramente: la Iglesia se alineaba en la lucha contra el capitalismo, esto es, contra las prácticas económicas del gobierno de Onganía¹⁷⁰. El viraje podía adivinarse cuando –el viernes 2 de mayo- Caggiano dio a la prensa el texto de algunos de los trabajos elaborados durante el sínodo¹⁷¹. El Cardenal Primado había sostenido que los partidos políticos eran indispensables en la vida nacional y que debían contar con una absoluta libertad de acción: toda una muestra del giro copernicano de la Iglesia, frente a la lectura de la realidad social que siempre supo capturar con nitidez¹⁷². Es cierto que la amplitud de las definiciones emitidas por los prelados en el cónclave de San Miguel, obedeció también a cierta presión de las bases, cuya manifestación saliente fue la rebelión de los curas rosarinos. Pero también era cierto que –al enarbolar las consignas de sus enemigos de ayer- se pretendía borrar a la oposición interna y encabezar la rebeldía. Los principios básicos de las epístolas fueron: a) En nuestro país se ha llegado a una estructura injusta debido a la concepción moralmente errónea de la empresa que hace del lucro su única razón de ser, y a la subordinación de lo social a lo económico; b) La liberación deberá realizarse, pues, en todos los sectores en que existe injusticia: el jurídico, el político, el cultural y el social; c) Reafirmamos el derecho del pueblo a crear sus organizaciones de base; urgimos el establecimiento de canales institucionalizados de auténtica participación, para que todo el pueblo pueda hacer oír su voz y tener parte activa en las decisiones que atañen a la comunidad; d) Llamamos a los empresarios para que, superando intereses, promuevan un eficiente desarrollo económico liberador que asegure la creación y continuidad de las fuentes de trabajo; e) La Iglesia debe acercarse especialmente a los pobres, oprimidos y necesitados, por lo tanto su acción, no debe ser orientada únicamente hacia el Pueblo, sino también y principalmente, desde el Pueblo mismo. Las epístolas y las manifestaciones de Caggiano se rezumaban simplemente en esta opción: o bien la Casa Rosada abría sus filas al pueblo para la empresa común, ya sea a través del *consejalismo*, la vía comunitaria; o para su mal, Onganía debería alejarse de toda posibilidad de contacto con las masas. En estas circunstancias, más valía recurrir a las urnas.

Que el Presidente conocía el problema, lo probaba su nuevo intento de extender la *democracia de participación* que tenía como marco la *Conferencia de Gobernadores* que se realizaba –durante la primera semana de mayo, iniciaba el lunes 5- en el majestuoso Sierras Hotel en Alta Gracia (Córdoba). Nunca como en ese momento el Gobierno precisaba tanto de esa apertura que buscaba rodear a Onganía con una muralla de adhesiones populares capaz de blindarlo y disuadir a cualquier movimiento subversivo, militar o civil¹⁷³. Los gorilas atribuían el desorden a la debilidad oficial y a los deseos gubernamentales del pacto de tregua con Perón y el liberalismo encontraba los motivos para unírsele en esa guerra santa. Atrapado en esta trampa mortal, el Gobierno no podía sino buscar la salida hacia el pueblo: única tabla de salvación del régimen. Pero el Gobierno –en esta primera etapa- no ofrecía demasiado; quienes soñaban con este

régimen de organizaciones intermedias –gremios, corporaciones, industriales, Clero y Fuerzas Armadas- pretendían poder real; por ahora, el Gobierno apenas les otorgaba poder de consulta¹⁷⁴. Le tocó a Díaz Colodrero y Guillermo Borda; Secretario de Gobierno y Ministro de Interior respectivamente) la descripción –ante los asistentes- del documento con las alianzas y las estructuras que conformarían los Consejos Asesores que darían lugar a la fijación del mecanismo liminar del Nuevo Estado. Para abonar sus conceptos, Borda, echó mano de las conclusiones emitidas por el reciente Sínodo Episcopal; con todo, los Obispos fueron más amplios que el Gobierno; hablaron de participación en el nivel de las decisiones. Sin embargo, Borda insistía en que la participación cubriría todos los campos, desde el más trascendente, hasta la más pequeña obra de barrio. El miércoles 7, el cónclave se agotó con una charla – excesivamente técnica- del Secretario del CONADE, José María Dagnino Pastore. Ya era público para entonces que en la noche del domingo 4, seis enmascarados habían asaltado –nuevamente- a las fuerzas de seguridad; esta vez fue el turno de una pareja de centinelas policiales que custodiaban la mismísima Residencia Presidencial de Olivos: les fueron robadas sus armas. En la madrugada del lunes 5, un par de sujetos no identificados se tiroteó con los guardias de la compañía de servicio del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército, en Rosario (Santa Fe). La policía y la justicia estaban desorientadas, y esto lo demuestra la detención –el sábado 3- del líder sindical rebelde Raimundo Ongaro (CGTA), finalmente Ongaro fue liberado el lunes 5. El hecho causó tremendo revuelo en los sectores obreros. El domingo 4, las fuerzas de seguridad festejaban la detención de una nueva célula terrorista tucumana que encabezaría Ernesto Andina Lizárraga, una pintoresca figura justicialista de esa provincia –amigo del revuelo y el escándalo- a quien nadie creía capaz de incursionar seriamente en la violencia¹⁷⁵.

5.9.1. *Tiempos borrascosos. Los preludios de mayo.*

En este período (1967-1969) se había ido conformando lo que podría llamarse una cultura de la resistencia, que recogió las distintas variantes del peronismo en la resistencia y las discusiones internas de la izquierda que llevaron a cuestionar el sistema liberal de partidos y a privilegiar vías de acción más directas. Córdoba fue –sin duda- donde más se manifestó esta cultura sindical en su vertiente anti-burocrática y también anti-porteñista, alimentada por la corriente ortodoxa del peronismo, que no aceptaba la línea negociadora vandorista y por algunos sectores de la izquierda sindical no peronista. Entre todos habrían hecho posible el fuerte apoyo prestado a la posición combativa y opositora al Gobierno sostenida por Raimundo Ongaro –secretario del gremio gráfico y de la CGTA- constituida en marzo de 1968. Para la época en estudio era la industria automotriz uno de los sectores de punta de la economía argentina y Córdoba era su centro más dinámico donde sostenían un pelea por los afiliados dos

sindicatos nacionales SMATA y UOM¹⁷⁶. Otro sindicato líder en Córdoba era Luz y Fuerza (L y F) que nucleaba al personal de la Empresa Provincial de Energía (EPEC) justamente el sector energético comenzaba a ser otro de los propulsores de la economía. La conformación de este tipo de sindicatos, bastante autónomos del poder sindical nacional, fue una alternativa al modelo existente donde los sindicatos nacionales predominaban en las vías de negociación con el Estado central, modelo este que había conseguido afirmar una dirigencia bastante distanciada de sus bases. Si bien estos nuevos sindicatos combativos y localizados en su región se movilizaron –en principio- por problemas específicos a su rama industrial, ya para el final de la década las reivindicaciones fueron adquiriendo un carácter cada vez más político, lo que permitiría explicar movimientos sociales que trascendieron lo meramente económico o sindical y deben ser comprendidos dentro de un contexto formado por la conciencia y prácticas colectivas muy arraigadas –particularmente en la Córdoba de la época- que apuntaban a una acción más directa y a la movilización de las bases. Las condiciones económicas y políticas creadas por el régimen de Onganía sirvieron como catalizador y precipitador de los procesos previos que llevaron –en esa coyuntura- a provocar las reacciones que, en los hechos, sucedieron. Tres conflictos puntuales –de alta repercusión pública a nivel nacional- dieron cuenta de las diversas estrategias con que las dirigencias sindicales nacionales pretendieron dar solución a los diferendos que conformaron los prolegómenos de las luchas que precedieron a la explosión cordobesa y la instalaron como el centro de la lucha y enfrentamiento con el régimen:

A fines de setiembre de 1968 se desarrolló uno de los conflictos más importantes anteriores a los sucesos obrero-estudiantiles de Rosario y Córdoba. El 25 de setiembre de 1968 más de siete mil obreros petroleros de La Plata, Berisso y Ensenada, comenzaron una huelga por tiempo indeterminado contra el aumento de la jornada laboral (de 6 a 8 horas diarias) la reforma de la jubilación del sector con 45 años de edad y 25 años de servicio para el personal marítimo y contra la nueva ley de hidrocarburos, que permitía –nuevamente- la explotación privada. La huelga pronto pasó a ser un enfrentamiento global contra el gobierno de Onganía, los monopolios y los dirigentes sindicales participacionistas (Cavalli, importante dirigente participacionista era –por entonces- secretario general del sindicato de petroleros SUPE). La intransigencia empresarial y gubernamental hizo que el conflicto se prolongara por más de dos meses y su saldo final fuera de dos mil obreros cesanteados y los reclamos insatisfechos. El desarrollo de esta huelga encontró al sindicalismo peronista dividido en tendencias irreconciliables. Los sectores que, en el peronismo, lideraban la tendencia negociadora, participacionistas y combativos intentaron reafirmar sus posiciones. La dirección del SUPE cerró filas en torno a la creación de la Nueva Corriente de Opinión en enero de 1969, con su búsqueda de participación en el gobierno, única posición en la que –entendían- podían resolverse los conflictos. El vandomismo sostuvo que la huelga fracasó porque el movimiento obrero estaba dividido y prosiguió la búsqueda de la unidad entre

la CGT y las 62 Organizaciones (con el aval de Perón y Paladino). El sector combativo del peronismo fue el más involucrado en el desarrollo de la huelga y, tras la misma, fue el único de los tres que en lugar de reafirmar su posición, buscó redefinirla. Para este sector comenzó un paulatino convencimiento de que a la dictadura no se la podía combatir con los métodos institucionales del sindicalismo, es decir, con huelgas o paros generales, sino que debía oponérsele nuevas formas de lucha, incluida la lucha armada¹⁷⁷.

En las regionales del sindicato de Vandor (metalúrgicos UOM) se desarrollaron durante el segundo semestre de 1968 y el primero de 1969 el conflicto por las quitas zonales, que no eran otra cosa que un derecho patronal para aplicar en algunas provincias reducciones salariales sobre el salario pactado en las convenciones colectivas. De acuerdo al convenio metalúrgico de 1966 tenían que haber sido eliminadas paulatinamente, pero no se efectivizó¹⁷⁸. Durante agosto de 1968 se produjeron las primeras protestas por el incumplimiento del convenio y el 12 de noviembre la UOM Córdoba declaraba el estado de alerta¹⁷⁹. El 30 de noviembre se realizó un congreso de delegados cordobeses, con la presencia de Vandor, y se resolvió un paro provincial para el 6 de diciembre y uno nacional para el día 13; ambos de 24 horas. Antes del paro Vandor se reunió con el Secretario de Trabajo –Rubens San Sebastián- el 9 de diciembre, para analizar el conflicto, y el 11 de diciembre –dos días antes del paro nacional- la Secretaría de Trabajo de la Nación emitió una resolución donde se afirmaba que no habían sido derogadas las disposiciones de ningún convenio, por lo cual las quitas zonales debían eliminarse. Un día después las autoridades de la UOM decidieron levantar la medida de fuerza¹⁸⁰. Sin embargo, los empresarios del sector –en Córdoba- no acataron la resolución, esto llevó a que a fines de 1968 se sucedieran reuniones de las seccionales de la UOM en Córdoba, Tandil y Bahía Blanca que resolvieron realizar paros zonales como medida previa al paro general. Como las tratativas con el sector empresario no avanzaban el secretariado nacional de la UOM que, después de agotadas las instancias legales para el acatamiento de la resolución de la Secretaría de Trabajo, se realizarían dos paros; uno para el 7 de marzo (1969) por 24 horas en las ciudades de San Francisco, Río Cuarto, Villa María, Leones, Tucumán, Santiago del Estero, Salta, Resistencia, Bahía Blanca y Tandil; y el segundo también para el 21 de marzo y por 24 horas¹⁸¹. Los paros se desarrollaron normalmente en las ciudades mencionada, pero la situación no mejoró; el 14 de marzo (1969) se ratificó el paro convocado para el 21 de marzo y Vandor acusó a los empresarios de no querer resolver el conflicto al no acatar la resolución¹⁸². A pesar de los esfuerzos el conflicto no pudo resolverse porque la Federación Argentina de la Industria Metalúrgica del Interior denunció el acuerdo entre la Secretaría de Trabajo, la UOM y los empresarios metalúrgicos de la Capital Federal y desconoció la resolución con el argumento que esa cámara empresaria no tenía competencia sobre los asuntos de Córdoba y criticaron a San Sebastián por haber realizado un acuerdo acomodaticio. El conflicto –que también incluía la unificación de las

48 horas semanales que comprendía la eliminación del sábado inglés- continuó, los empresarios ofrecieron compensar las quitas zonales con la eliminación del sábado inglés, que poco después fue abolido por ley. Los días pasaron sin solución del conflicto hasta llegar a las jornadas del 29 y 30 de mayo.

El 15 de febrero de 1969 la Federación Gráfica Bonaerense declaró un paro general por tiempo indeterminado por el conflicto con la compañía Fabril Financiera, en protesta por los despidos de 45 operarios –que incluían delegados- por la supresión de los beneficios sindicales de convenio¹⁸³. Ambas partes –patronal y obrera- fueron convocadas por la Secretaría de Trabajo para retrotraer la situación al día anterior al conflicto, pero la empresa exigió que se abandonara la medida de fuerza, la Secretaría intimó a la empresa a reincorporar a los cesanteados, pero esto no sucedió; la huelga continuó, se reincorporaron algunos operarios de alta calificación y Fabril anunció la incorporación de personal nuevo. A los pocos días de iniciado el conflicto –que involucró a 1.300 trabajadores- el número de despidos alcanzaba a más de 300 operarios que en pocas semanas llegaron a 800¹⁸⁴. A tres meses de iniciado el conflicto el Arzobispo de Buenos Aires –Juan Carlos Aramburu- exhortó al diálogo entre las partes, pero la intermediación no obtuvo resultado alguno¹⁸⁵. La Asamblea General Extraordinaria de los gráficos –el 7 de abril- decidió una serie de paros en apoyo a los trabajadores de Fabril Financiera, el primero, el viernes 11 de abril en Capital Federal y GBA por 24 horas, al tiempo que llamaba a un paro general para el 30 del mismo mes¹⁸⁶. El paro del 11 de abril alcanzó un acatamiento del 80% y la FGB resolvió un quite de colaboración general en el sector y salir el 1º de mayo a la calle junto con la CGTA¹⁸⁷. Los acontecimientos estudiantiles en Corrientes, que alcanzarían su clímax en Córdoba opacaron la atención sobre el conflicto gráfico que concluyo –igual que los anteriores- sin el resultado esperado por los trabajadores y el sindicalismo, los conflictos simplemente se extendían en el tiempo, perdían su impulso inicial y se disolvían. Esto mostró que el sindicalismo combativo aun no podía gestionar la huelga como arma de lucha; la búsqueda de su reemplazo por otras alternativas marcó los primeros pasos de lo que –más tarde- se conocería como *Peronismo Revolucionario*, que no debe confundirse con las organizaciones armadas peronistas^{188/189}.

5.9.2. La hora de la violencia: del comedor estudiantil a la guerra urbana. Siete días en Mayo.

En este escenario, hacia fines de abril el gobierno nacional decretaba la prohibición de cualquier acto conmemorativo del 1º de mayo. A pesar de ello la CGTA –delegación Rosario- convoca a una concentración frente a su sede. Desde las primeras horas del día la policía rodea el local y la plaza que se encontraba a pocos metros, impidiendo la realización del acto. Horas más tarde en la zona del barrio de Arroyito, unos 50 jóvenes -

identificados con el Movimiento de Acción Revolucionaria- llevaron a cabo un acto relámpago con consignas de adhesión a la CGTA, finalmente son dispersados por la policía que logra detener a una docena de participantes¹⁹⁰. En Buenos Aires la CGTA declara: *“Es la misma situación que viene padeciendo la clase trabajadora hace más de trece años. La clase obrera lucha por las reivindicaciones inmediatas al mismo tiempo que lucha contra sus opresores políticos y económicos”*. La CGT Azopardo declara que: *“la desocupación viene avanzando, la insuficiencia de los salarios es cada vez más pronunciada, la enajenación del patrimonio nacional asume proporciones sin parangón”*. Ambas denuncian *“el divisionismo prefabricado por la acción directa de quienes tienen a su cargo las relaciones del gobierno con el movimiento obrero”* y convocan –frente a la situación- a la unidad de las organizaciones gremiales¹⁹¹.

El inicio de este movimiento general de estructuras sociales en acción se localizó en la línea Resistencia-Corrientes y giró alrededor del precio del ticket del comedor universitario. El aumento del precio de la comida de los estudiantes –consecuencia directa de la privatización del comedor estudiantil- era de capital importancia para la mayoría de la población estudiantil de la región, compuesta, en su mayoría, por hijos de la pequeña y mediana burguesía local, y esto sucedió en un momento en que esta fracción social estaba siendo afectada por las transformaciones que se estaban operando en la estructura económico-social como consecuencias de la política económica aplicada por el gobierno¹⁹². El aumento en el precio de la comida diaria, para algunos, podía significar el abandono de sus estudios y, con ello, la pérdida de las expectativas respecto a la posición a ocupar en el mercado de trabajo y en la sociedad. Así se explica que –para los estudiantes y sus familias- no fuera un hecho intrascendente el aumento del ticket del comedor universitario y que, el movimiento de protesta contra esa medida lograra la adhesión y simpatía de la mayoría de los sectores sociales de la región¹⁹³. Es bajo estas condiciones y en estas circunstancias de protesta que –el 15 de mayo- es reprimida por la policía una movilización de protesta estudiantil en la ciudad de Corrientes y resulta muerto el estudiante Juan José Cabral. Este suceso desencadenó una rebelión popular en la ciudad de Corrientes, la que contó con la adhesión de una amplia gama de fracciones que habían apoyado al régimen: desde la unión de comerciantes locales hasta el mismísimo Jockey Club condenaron el asesinato, pidiendo la renuncia del Rector y la restitución a la esfera pública del comedor. Ni bien llegó la noticia del asesinato de Cabral llegó a los combativos estudiantes de Rosario, estos desplegaron una vastísima movilización que terminó en enfrentamientos con la policía. En medio de esa atmósfera –recordaba una mujer que salía de la confitería La Fragata- “los muchachos no desentonaban, parecían un poco excitados, pero eso era todo, el ruido de los vidrios rotos ya se había calmado”. Fue entonces cuando un patrullero surcó la calle, llevaba las puertas abiertas y desde adentro, los ocupantes disparaban sus Colt 45 hacia las cornisas. Allí murió otro estudiante: Adolfo Bello^{194/195}. Mientras el cadáver de Bello era trasladado a Las Rosas y el Comité de Lucha donaba

cien mil pesos a la familia para el sepelio, el Juez Domingo Rodríguez Meleandi no conseguía interrogar al oficial Lescano, la policía pretextaba que estaba internado con conmoción cerebral y múltiples lesiones. Pero el Juez insistió y finalmente debieron franquearle el paso, el mismo domingo 18 de mayo logró ver al matador: estaba ileso. La ciudad empezó a velar sus armas, en la filial de la CGT –que respondía al sector de Raimundo Ongaro- el movimiento estudiantil era incesante. Se trataba de un desafío abierto al Gobierno: la sede sindical estaba separada por treinta metros del Comando del Segundo Cuerpo de Ejército y al frente –plaza de por medio- de la Jefatura de Policía. El Comité de Lucha estudiantil, que había logrado unificar todas sus fuerzas (ocho agrupaciones) concertó con los líderes sindicales una Marcha de Protesta y Repudio, que se efectuaría el miércoles 21 y un paro general para el viernes 23 de mayo. En la tarde del lunes 21, los rosarinos advirtieron –estupefactos- que habían logrado unir –de un modo casi mágico- todas sus fuerzas dispersas: el Plenario de la CGT –presidido por Héctor Quagliaro e integrado por representantes de 25 miembros (incluidos vanderistas e independientes) aprobó por unanimidad la huelga¹⁹⁶ la Universidad Católica adhirió al duelo por Bello; los editoriales de los tres diarios rosarinos instaron a la población a participar de la Marcha¹⁹⁷. El martes 20 la ciudad amaneció empapelada con afiches que invitaban al pueblo a sumarse a la protesta. Aunque pegados con cuatro tiras de *durex*, los cartelones fueron preservados –cuidadosamente- de cualquier desgarró¹⁹⁸. Para la media tarde del martes 20, el Comité de Lucha había organizado ya los detalles de la Marcha¹⁹⁹. Se constituyeron unos 200 grupos de 10 hombres cada uno –con jefe y coordinador- que respondían simultáneamente a dos mandos centrales, sincronizados entre sí: uno funcionaba en la CGT, el otro en alguna parte de la ciudad. Todos los grupos fueron bautizados con un solo nombre: Adolfo Bello, y sus miembros fueron provistos de una cartilla de comportamiento que preveía todas las dificultades de un encontronazo con la Policía²⁰⁰. El Comité de Lucha instó también a que las familias de la ciudad invitasen a comer a un universitario por lo menos; de ese modo se resolvía el cierre del comedor luego de los disturbios del sábado 17 y se permitiría a los jóvenes explicar, personalmente, a las familias las razones de la lucha²⁰¹.

La Marcha estaba anunciada para las seis de la tarde del miércoles 21, pero ya a las cuatro, las tropas policiales en uniforme de fajina, habían desalojado todos los vehículos de las 140 manzanas céntricas y ocupado todas las esquinas estratégicas. Monner Ruiz –el Jefe de la Policía local- había establecido un cordón de fuerza a lo largo de la calle Córdoba y proyectaba dividir allí a las columnas estudiantiles²⁰². A las seis de la tarde unos cien manifestantes se concentraron –de un modo repentino- en la esquina de Córdoba y Maipú y, apenas cargó la Policía se sentaron en la calle –en gesto de paz- tratando de ganar terreno hacia la plaza 25 de Mayo. Doscientos agentes rodearon la cuadra donde los estudiantes esperaban sentados en la calle, sin moverse. Nerviosa, la Policía lanzó un ultimátum: les dio medio minuto para desconcentrarse, sabiendo que era un plazo de imposible cumplimiento. Monner Ruiz desató entonces la represión.

Durante dos horas diez mil personas se reunieron, se dispersaron y volvieron a reunirse, hostigando a las tropas aquí y allá, con una velocidad desconcertante²⁰³. Durante ese lapso se contaron 37 manifestaciones diferentes y simultáneas, solo en los alrededores de la calle Córdoba: un plan bien concebido. Pero eso no era todo: una columna de tres mil hombres ocupaba –al mismo tiempo- la Avda. Pellegrini –lejos del centro- y se mantenían a la espera, mientras las tropas gastaban en una línea limitada su provisión de gases y agua coloreada y la energía de sus perros y caballos²⁰⁴. Hacia las once de la noche, asaltaron el edificio de LT8²⁰⁵ –filial de radio Belgrano- procurando emitir una proclama desde la cabina de transmisión: desde la planta central, el técnico de turno logró cortar la voz²⁰⁶. La toma de la Radio fue, en verdad, consecuencia de la segunda muerte rosarina: la de Luis Norberto Blanco, un estudiante secundario de 15 años, que a la vez, era operario metalúrgico²⁰⁷. Otras víctimas surgían en la ciudad, casi al mismo tiempo: uno fue el cabo primero Miguel Fernández, herido en la espalda y convertido por los partes oficiales en un símbolo del martirio policial; otro fue Daniel de Laoz, un estudiante de 27 años, que murió atropellado por un ómnibus, mientras escapaba de los gases lacrimógenos; la tercera era una mucama –Nilda Vilma Martínez- de 21 años, a quien alcanzó un cartucho, en plena cara, cuando salía a comprar el diario. Al mediodía del jueves, el Comité de Lucha contó sus víctimas: más de doscientos heridos y 23 estudiantes arrestados después de las tres de la mañana; a todos ellos los alcanzaría la Justicia Militar²⁰⁸. También contaron sus victorias: parecía difícil que el Jefe de Policía de Rosario pudiera sostenerse en su cargo, a pesar de las felicitaciones que le hiciera llegar el gobernador Eladio Vázquez; claro, también su cabeza estaba por caer²⁰⁹. El avance del Ejército se perfila el mismo miércoles 21, a las 22 horas, mientras unas 20 mil personas rechazaban a la Policía en el casco urbano, el Jefe del Segundo Cuerpo de Ejército, general de división Roberto Aníbal Fonseca, dispone el alistamiento de sus efectivos tras lo cual se comunica con el Comandante en Jefe del arma –Alejandro Agustín Lanusse- que se encontraba en Buenos Aires²¹⁰, para decidir la ocupación militar de Rosario²¹¹. Aquel jueves 22 de mayo más de seis mil personas llegaron a pié desde las cuatro orillas de la ciudad, para congregarse en el lejano cementerio de La Piedad donde se enterraría a Luis Norberto Blanco. En medio de semejante atmósfera, era impredecible lo que podría suceder con el paro general decretado para el viernes 23 de mayo. En tanto, en Buenos Aires, al atardecer del jueves 22, luego de una asamblea del CONADE, el Presidente retuvo junto a sí a los Ministros –que integraban el Consejo- e invitó a los Comandantes de las Fuerzas Armadas a sumarse a la reunión: se analizó la crisis y, cuando el concilio terminó, Onganía mantuvo una charla de 20 minutos con Lanusse²¹². La intervención militar de Rosario fue resistida por el cuerpo de asesores jurídicos de la CGT y el Colegio de Abogados. Una delegación del Colegio de Abogados hizo pública una declaración donde impugnaba a los Consejos de Guerra y exhortaba a las autoridades militares a poner fin al estado de emergencia y retornar a las jurisdicciones naturales a los ciudadanos sometidos a proceso militar, mientras que un Juez de Instrucción –el Juez Domingo Rodríguez Maliandi- rechazaba un recurso de

habeas corpus y la excepción de falta de competencia –presentada por los abogados de la CGT- entendiendo que, el general Fonseca, tenía carácter de autoridad nacional y competencia y capacidad para detener²¹³. El 22 de mayo, el Intendente Municipal de Rosario –Luis Beltramo- dirigió un mensaje a la población expresando su pesar por los momentos vividos y exhortando a la reflexión y a la cordura, recordando que: *“la grandeza del país solo se logra con la tranquilidad de los espíritus y el trabajo fecundo de todos los argentinos”*. El Rector de la Universidad Nacional de Rosario lee un mensaje televisivo a la ciudadanía, donde dice: *“queremos abrir cuanto antes la Universidad”* y, en relación a los acontecimientos, aclara que: *“ni la ciudad, ni menos aún la Universidad están dispuestas a aceptar que la muerte de los estudiantes fueron justas o necesario y tampoco pueden comprender que para asegurar el orden hubiera sido necesario pagar un precio tan alto”*. Finalmente anuncia que el día 26 se reabrirá el comedor universitario, los establecimientos secundarios, los servicios hospitalarios y asistenciales, los institutos de investigación y las oficinas administrativas, pero no dio fecha para la iniciación de los cursos en la Universidad. Los días 22 y 23 se suceden actos relámpago y movilizaciones en la ciudad y se ataca con piedras a patrulleros²¹⁴. Durante la noche del 22, mientras la Policía patrulla la zona céntrica, es atacada con armas de fuego desde las terrazas, lo que presuponía la existencia de francotiradores²¹⁵. La huelga general del 23 de mayo se hizo efectiva en una ciudad bajo ocupación militar, donde regía la jurisdicción de los Tribunales Militares y los Consejos de Guerra y con la vigencia de la pena de muerte. Todas las actividades de la ciudad se encontraban paralizadas. El comunicado militar N° 13 informaba que: *“en virtud de las facultades conferidas por el Estado de Emergencia, los detenidos serían puestos a disposición de los Consejos de Guerra”*. Sobre los detenidos no se contaba con mucha información²¹⁶. Acompañaron la huelga –convocada por la CGT unificada- unos 400 jóvenes estudiantes, que se manifestaron por el centro de la ciudad hasta llegar al lugar donde había caído Bello, una vez concentrados –junto con los obreros- cantaron el Himno Nacional al tiempo que aparecía en escena la Gendarmería Nacional. Los que conducían la marcha ordenaron la desconcentración evitándose así un enfrentamiento con las fuerzas de ocupación. El paro general del día 23, se combinó con el sepelio de Blanco y a las ocho de la mañana una multitud se concentró en el Barrio Sarmiento para acompañar los restos del estudiante obrero, las 87 cuadras que separaban la casa de Blanco del cementerio fueron recorridas por varios miles de obreros, estudiantes, profesionales de clase media y todo tipo de simpatizantes. La Unión Ferroviaria se hizo cargo de los gastos del sepelio de Blanco y el Frente Estudiantil Nacional organizó una colecta para la familia. La huelga general, el sepelio, las movilizaciones y los actos de protesta, se llevaron a cabo en una ciudad ocupada por el Ejército; donde abogados, jueces y la CGT con el comando unificado se expidieron contra los Consejos de Guerra, declarando a las Fuerzas Armadas como fuerzas de ocupación. Finalmente, los Consejos de Guerra no tomaron decisiones que –más adelante- se pudieran lamentar y constituyeron poco más que una amenaza; pero la amenaza, a veces, es más fuerte que

la ejecución. Pero lo cierto es que, el 21 de mayo de 1969, una alianza de clases específica –en la convicción de la legitimidad de sus luchas- lograba expresarse como fuerza social, creando un hecho inédito: una situación de masas que, a través del enfrentamiento, rechazaba la opresión política y social del régimen: finalizaba, así, la batalla de Rosario.

5.9.3. Protestas y radicalización obrera. Córdoba en la convergencia obrero-estudiantil.

El 29 de mayo de 1969 entra en acción el movimiento obrero por medio de una huelga general activa con movilización y concentración, decretada por la CGT local. Las movilizaciones del movimiento obrero cordobés fueron simultáneas al ascenso del activismo estudiantil. Los casi 30 mil estudiantes universitarios de la ciudad habían reaparecido como fuerza política con su colaboración en las campañas sindicales de la CGTA. En la comunidad estudiantil, peruanos, bolivianos, paraguayos y de otros países vecinos, se mezclaban con los argentinos, con lo que se dio forma a una cultura estudiantil izquierdista nacida de una común identidad latinoamericana. Otro factor que daba un mayor significado al activismo estudiantil era el papel que desempeñaba la Iglesia Católica en el estímulo de la militancia y el disenso de los estudiantes²¹⁷. Luego de la Conferencia Episcopal Latinoamericana de Medellín y la reunión de Sacerdotes del Tercer Mundo en Córdoba, en la Iglesia argentina crecía la simpatía hacia el clero activista. Los teólogos de la liberación –si bien aún minoritarios- cobraron notoriedad y centraron su actividad en Córdoba. Como la Universidad, la Iglesia seguía siendo una fuerza poderosa en la provincia y en la sociedad cordobesa. La influencia política de esta, fue reafirmada por la aparición de los teólogos de la liberación²¹⁸. Pero, lo que contribuyó a la trascendencia política de los estudiantes fue –sin duda- el hecho de que su número y su poder latente hicieron posible la alianza obrero-estudiantil que llegaría a su apogeo en la ciudad de Córdoba por esos días²¹⁹. Los acontecimientos de Corrientes y Rosario, fueron la chispa de una protesta estudiantil nacional en la cual –estudiantes y CGTA- marcharon por las ciudades del país. Con la muerte de los estudiantes Juan José Cabral en Corrientes y la de Adolfo Bello y Luis Norberto Blanco en Rosario comenzó lo que algunos llamaron la “*semana rabiosa*”²²⁰. A partir de ese momento, los hechos se precipitaron uno tras otro: la marcha del silencio en Rosario, el paro general decretado por la Delegación Rosario para el 23 de mayo y una serie de manifestaciones de adhesión y protesta en distintos puntos del país.

Los sindicatos que tuvieron mayor participación y grado de organización fueron –sin duda- el SMATA –bajo el liderazgo local de Elpidio Torres- que concentraba la filiación de la mayor parte de los obreros de la poderosa industria automotriz cordobesa, fundamentalmente en la planta de IKA en Santa Isabel (en los suburbios de la ciudad) y

Luz y Fuerza, bajo la conducción local de Agustín Tosco²²¹ cuyo mayor padrón de afiliados provenía de la Empresa Provincial de Energía (EPEC); contaron con la estratégica importancia de la UTA –bajo el liderazgo de Atilio López- en el paro dispuesto por la CGT unificada²²². Ambos –Torres y Tosco, junto con sus gremios- fueron protagonistas –casi excluyentes- de aquellos históricos sucesos²²³. Contaron con cinco lugares –ya previstos de concentración y puntos de repliegue. Como la organización inicial del movimiento se encuentra en relación a la huelga general con movilización, los obreros y empleados, parten –organizados en columnas- desde sus puestos de trabajo. El desplazamiento se inicia a partir de las once de la mañana y lo hacen organizadamente en columnas, para avanzar hacia la zona céntrica de la ciudad de Córdoba. Fiel a su costumbre, Elpidio Torres, llegaba a la planta de IKA (hoy Renault) a las 6.30 hs. Allí –junto a los integrantes de la comisión directiva del gremio- mantuvieron un diálogo con sus compañeros delegados, activistas y afiliados en general, para ordenar el abandono de la fábrica y comenzar la marcha. Las columnas del SMATA–las más compactas y numerosas de toda la movilización- tomaron por la Ruta 36 (hoy N°5) y luego de pasar el puente del canal maestro y entrar en la zona más poblada del barrio Las Flores, se fueron agregando trabajadores de provenientes de distintos talleres de la zona. Cuando llegaron a la rotonda que divide los caminos a Despeñaderos y Alta Gracia, se encontraron con una verdadera concentración esperándolos. Allí estaban los trabajadores del vidrio (CIVE), los trabajadores metalúrgicos de la fábrica De Carlo (automotriz afiliada a la UOM) y los compañeros de la Fábrica Argentina de Engranajes (FADE) y los de muchos otros talleres, también estaban allí los trabajadores de ILASA Vélez Sársfield, afiliados a SMATA. Luego de una arenga en el lugar y del reacomodamiento de la enorme columna, se reinició la caminata. Cuando pasaron por enfrente del Hogar Escuela Juan Domingo Perón –más tarde sede del Ministerio de Salud y Acción Social de la provincia- se podían contabilizar unos doce mil trabajadores. Allí, fueron reprimidos por una fuerte dotación policial: Guardia de Infantería, Guardia de Caballería y Compañía de gases²²⁴. Ante esta situación, la columna se dividió en dos por razones tácticas, ya que el objetivo no era dar batalla en un lugar alejado al punto de concentración. Una de las columnas –conducida por dirigentes, delegados y activistas del mismo SMATA- cruzó los terrenos de la ciudad universitaria y bajó por Hipólito Yrigoyen, a esta columna se agregaron numerosos estudiantes entre los que se contaban los pertenecientes a las facultades ubicadas en las calles Obispo Trejo, Duarte Quiroz y Avda. Vélez Sarsfield²²⁵. La columna que encabezaba Elpidio Torres bajó por barrio Güemes y Bella Vista, siguiendo el recorrido: Avda. Naciones Unidas, Paso de los Andes, Elpidio González (ex Avda. La Plata) bajando por Julio A. Roca hasta Arturo Bas y Boulevard San Juan. Al llegar a la última intersección –y en el mismo momento que aparecía la columna- un policía de la Guardia de Caballería, montado en un caballo blanco, levantó la pistola –que ya tenía desenfundada- y disparó al bulto. Allí cae –herido de muerte- el operario Máximo Mena con un balazo en el tórax²²⁶. Mientras sucedían estos hechos, otra columna del SMATA

había llegado a la vieja terminal de ómnibus –en Vélez Sársfield al 600- la que se veía engrosada por una importante presencia de estudiantes universitarios, trabajadores de AOMA (Asociación Obrera Minera Argentina) provenientes de la fábrica CorCemAr, de Luz y Fuerza (de la planta ubicada camino a San Carlos), empleados no docentes de la Universidad y operarios de Transax (afiliados a SMATA). Cuando llegaron los manifestantes al lugar, la policía abrió fuego sin miramientos: mueren tres estudiantes y se repite la misma situación de indignación popular, reacción y repliegue y huída de las fuerzas policiales. Ante el ímpetu de los trabajadores y estudiantes y el completo repliegue policial, los manifestantes se apoderaron de las calles²²⁷. Mientras tanto, unidades policiales habían impedido que la columna obrero-estudiantil de Tosco avanzara hacia la sede de la CGT, por lo que los manifestantes intentaban llegar a Vélez Sársfield por La Cañada. Encabezada por los trabajadores del sindicato de Luz y Fuerza, esta columna también incluía contingentes de sindicatos legalistas como la UTA (Unión Transporte Automotor) –liderada por Atilio López²²⁸- y los estatales de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ya había sido atacada por las fuerzas policiales –con gases lacrimógenos- en los alrededores de las oficinas de la Empresa Provincial de Energía (EPEC) donde se habían congregado para la marcha. A la furia de los afiliados del SMATA se sumó la ira de estos trabajadores de LyF a medida que se abrían paso hacia Vélez Sársfield. Al alcanzar allí a los trabajadores mecánicos, la columna de Tosco se confundió en la protesta general. En tanto, con el mismo objetivo, desde el camino a Pajas Blancas marchaban las columnas integradas mayoritariamente por hombre y mujeres del SMATA, que provenían de la planta de matrices de IKA e ILASA, a los que se sumaron trabajadores de concesionarias automotor y talleres mecánicos y metalúrgicos, del SUTIAGA y gráficos en su recorrida al centro por Avda. Castro Barros y, Avellaneda y Colón²²⁹. Por doquier, a medida que corría la noticia sobre el ataque policial, la protesta se convertía en una rebelión que abarcaba toda la ciudad. Cerca de las dos de la tarde, la policía había sido completamente desbordada, retirándose a su Central, para quedar allí acantonada, impotente ante los hechos. La ciudad había quedado –literalmente- en manos de la gente²³⁰. Para el momento en que entró el Ejército –entre las 18 y 19 horas- los focos se habían concentrado en algunos barrios, entre ellos el de Clínicas que ya tenía una estrategia planeada para su toma, ensayada a través de prácticas anteriores. Allí la resistencia siguió durante toda la noche. El Ejército había tratado de demorar su intervención –el gobernador Caballero la había pedido a mediodía- para tratar de calmar los ánimos de la gente²³¹. Obreros y estudiantes, ayudados por los vecinos, copaban en ese momento unas cincuenta manzanas de los barrios Alberdi y Clínicas, al Noroeste. Resistieron –a pié firme- la embestida del Ejército: un comunicado del general Sánchez Lahoz, Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba así lo reconocía a las 19 horas²³². La táctica del general Jorge Carcagno –Jefe de las fuerzas de ocupación- fue sencilla: cortar en dos la zona a través de la Avda. Colón, tan amplia que dejaba lugar para el transporte de la artillería liviana: ningún sublevado se atrevería a pasar por allí en esas condiciones. La

situación se agravó –al menos para el Ejército- a las 20 horas cuando un apagón dejó sin luz a la ciudad, salvo por la de los disparos y las fogatas; los soldados avanzaban pegados a los muros, debieron precaverse aún más. Es que las casas del barrio Clínicas se comunicaban a través de los fondos, así que era fácil, para grupos pequeños, diseminarse en distintos domicilios para burlar a las tropas de ocupación. A las 20.30 horas, Sánchez Lahoz implanta el toque de queda hasta las 6.30 del viernes, solo a las 22 retornó la electricidad²³³. Esa noche, nadie durmió en Córdoba. Ni siquiera el Gobernador, a quien la CGT responsabilizó por el uso del Ejército: la mañana del viernes 30 no trajo la calma, porque media Córdoba se lanzó a la calle: como un alud. Hubo cruces de efectivos disparando al aire, como cow-boys. Pero no faltaban algunos, de entre la multitud, que desenfundase un revolver y contestase el fuego. Abundaron las corridas y las víctimas inocentes, tal vez porque no hay nada más certero que una bala perdida. La tarde iba a extinguirse con el mismo ruido de los disparos y las mismas estampidas de los civiles. Para las 18 horas, el Ejército se había adueñado de la ciudad, en un embate final en el que se impusieron las ametralladoras pesadas, al costo de decenas de heridos, sin embargo, durante la noche del viernes al sábado, aún podía escucharse el estruendo de las detonaciones: como en una pesadilla²³⁴.

El Comandante en Jefe del Ejército –Tte.Gral. Alejandro Agustín Lanusse- desembarcaba, al mediodía del sábado²³⁵ en la ciudad devastada; algunos comercios abrieron sus puertas, algunos taxis se aventuraban por el centro, una nube de curiosos inspeccionaba las barricadas deshechas, en una ciudad bajo el control de las patrullas²³⁶. Reinaba la tranquilidad –era cierto- pero a un costo excesivo, feroz. Una de las primeras noticias que conoció Lanusse fueron las condenas –dictadas por los Consejos de Guerra- contra los líderes indiscutidos de la sublevación: Elpidio Torres y Agustín Tosco²³⁷. Era la última respuesta a una sublevación popular que el Ejército ahogo, con una severidad desconocida luego de 1919, cuando el arma también salió a las calles de Buenos Aires, para reprimir la llamada Huelga Sangrienta, que se inició –justamente- en la planta metalúrgica de Vasena²³⁸. Como un raro presagio, tres semanas atrás, el Presidente, -al concurrir al cónclave de Gobernadores de Alta Gracia- había enviado sus mejores votos de felicidad y progreso al pueblo cordobés.

5.9.4. Apuntes sobre el Cordobazo.

Durante cerca de una década, desde la creación en Córdoba y en el Gran Rosario de las nuevas industrias –automotores, siderúrgica y petroquímica- su fuerza laboral de había mantenido tranquila, en gran medida al margen de los torbellinos de la principal corriente sindical. Las empresas –muchas de ellas multinacionales- que operaban en esos sectores podían y preferían pagar salarios superiores al término medio y mantener así una mano de obra apropiadamente entrenada y dócil. Por otra parte y, en general,

existía además mayor estabilidad de ocupación en esos sectores que en otros más tradicionales de la economía²³⁹. Colateralmente, esas compañías habían adoptado una política laboral que trajo consigo amplios cambios en la estructura de las negociaciones colectivas en la Argentina. Estos sindicatos obtuvieron –primero de Frondizi y después de Illia- dos innovaciones decisivas: la primera fue conseguir del gobierno permisos para establecer –en ciertos casos- sindicatos por empresa, algo insólito en la estructura gremial peronista tradicional. La otra innovación de la política laboral –relacionada con la primera- fue la insistencia de las empresas establecidas en esos nuevos sectores en el sentido de negociar en el nivel de cada empresa. Lo cierto fue, que la negociación colectiva, pero descentralizada, contribuyó –inicialmente- a crear una fuerza laboral dócil en el sector más dinámico de la economía argentina. Además debilitó el poder de la estructura gremial nacional, puesto que alejó el centro de la negociación salarial –en áreas cruciales de la economía- del plano nacional, para llevarlo al plano de las empresas.

Si bien, durante los tres primeros años el gobierno de Onganía había alcanzado éxitos considerables en cuanto a tranquilidad sindical y sofocación de la oposición social, bajo la superficie no dejaron de generarse tensiones. La política económica de Krieger Vasena había perjudicado a muchos sectores: los comerciantes pequeños y medianos, los empresarios regionales, los propietarios rurales y los asalariados urbanos (con el congelamiento salarial) formaron parte de ese amplio espectro social que vio deteriorarse sus posiciones –aunque no siempre en términos absolutos- por lo menos en relación con las fortunas de los grandes intereses industriales y financieros del sector moderno de la economía. A la insatisfacción de esos grupos económicos se sumó –en 1969- una oposición civil generalizada al autoritarismo absurdo del régimen de Onganía. La suspensión de los canales e instituciones normales de la sociedad civil y política –verdaderas válvulas aliviadoras de las tensiones sistémicas- le enajenó la voluntad de buena parte de la sociedad argentina²⁴⁰.

Lo cierto es que, el año 1969 marcó el inicio de la descomposición del régimen de la Revolución Argentina que se manifestó como un cuestionamiento generalizado por parte de los diversos sectores sociales. Puso también de manifiesto una crisis de autoridad que coincidió con la aparición del estudiantado, como un actor colectivo dispuesto a llevar a cabo una reparación moral. La lucha por la conducción estratégica y de las masas cuya génesis refiere a mayo de 1969, constituyó un hito en el proceso histórico económico-social argentino, y lo fue, porque refiere a un espacio-tiempo en el que se habían creado las condiciones de una situación revolucionaria; pero, si bien es imposible que una revolución se dé si no existe una situación revolucionaria, esta situación no conduce, necesariamente, a una revolución²⁴¹. Este proceso –que se venía conformando desde principios de los años '60, encontró en el Cordobazo el escenario para una redefinición desde abajo, motorizada por la Resistencia peronista, perseverante, permanente y reivindicativa en su accionar, que había caracterizado la etapa anterior;

creando el marco para que de esa Resistencia se pasara a la acción colectiva, en la convicción de que era posible modificar las condiciones a partir de la acción. Si bien este pareció un suceso revolucionario, hay que marcar las contradicciones y los límites – también percibidos por sus protagonistas- que tuvo la difusión de un proyecto revolucionario liderado por una clase obrera predominantemente peronista²⁴². El sindicalismo combativo (no usamos el término como sinónimo de clasista)²⁴³ se caracterizó por ser un sindicalismo que descentralizó las negociaciones laborales, buscó el control obrero de los procesos productivos e impuso una activa participación de sus bases en la lucha, fue el resultado de las peculiaridades de la industria y de la clase obrera cordobesa y de su lucha laboral y sindical en los años sesenta. Los trabajadores de las industrias automotrices parecían ser, en principio, de origen rural, no calificados, sin previa experiencia sindical y política, que ingresaron a las plantas en la época de la Resistencia Peronista, cuando la burocracia sindical era débil, el liderazgo peronista que se conformó en la Resistencia tuvo más autonomía y menos burocratización²⁴⁴. Los rasgos de los protagonistas habrían permitido –sobre todo en el SMATA- la constitución de una tradición sindical distinta a lo largo de las luchas laborales de la década del sesenta. Estas prácticas y conciencia sindicales se conformaron en el ámbito de la fábrica y el sindicato en respuesta a las prácticas empresarias. A esta lucha se sumó la penetración de un discurso contestatario, difundido por panfletos peronistas de la Resistencia y de grupos de izquierda en el ámbito fabril. Así, aparece como posible que fueran tres los factores que fueron conformando esta tradición sindical combativa cordobesa: los rasgos y características de sus actores sociales, la experiencia de la propia lucha sindical y la difusión de una cultura contestataria en las plantas. En Buenos Aires, el movimiento gremial –tanto en el sector moderno, como en el tradicional- se mantuvo, antes de 1973, en gran medida al margen de la conmoción reinante en el interior. La fábrica no ocupaba –en la gran ciudad- un sitio tan central, pues formaba parte de una vasta estructura urbana donde se diluían tanto los contrastes como las solidaridades que se generaban en los lugares de trabajo. Esto se reflejaba claramente en el inferior nivel de solidaridad comunitaria prestada a las movilizaciones particulares de la clase trabajadora. Los motivos de queja y reclamo y la conciencia colectiva, formados en el punto mismo de producción, se diluían en el conglomerado urbano de la metrópolis. Esto significaba que si bien las fuerzas de oposición surgente podían encontrar eco en Buenos Aires, allí no lograban inspirar las actitudes de desafío a los empleadores o a los dirigentes sindicales que asumían en el interior la forma de una protesta comunitaria generalizada. En la industria automovilística, por ejemplo, los grupos opositores existentes en las plantas de Buenos Aires dirigieron muchas huelgas. Pero no fueron capaces de desafiar a sus empleadores o a sus dirigentes gremiales en la forma en que pudieron hacerlo en Córdoba los obreros de la misma industria.

Una consecuencia novedosa de carácter político-gremial de los sucesos de Rosario y Córdoba, fue que la crisis en que se vió envuelto el régimen, sumada a la creciente y

permanente agitación –sobre todo en el interior del país- proporcionó un espacio donde los activistas políticos de extrema izquierda pudieron moverse y alcanzar –en importantes sectores de la clase trabajadora- una influencia que les era negada desde hacía 30 años. Maoístas, peronistas revolucionarios, comunistas y una variedad de grupos marxistas de la nueva izquierda, alcanzaron –en el lapso 1969-1973- considerable influjo en el movimiento de oposición interna de las filas sindicales. La rebelión de las bases del interior pareció anunciar el advenimiento de una vanguardia proletaria capaz de lanzar un ataque –tanto económico como político- contra las estructuras del capitalismo²⁴⁵. El Cordobazo fue mitificado como preludio de una inminente revolución que solo necesitaba la vanguardia armada para precipitarse a la toma del Palacio de Invierno, próximo paso para el asalto al poder y la lección que muchos creyeron sacar (guerrilla, antiguerrilla, dirigentes sindicales miembros del aparato del Estado y no pocos intelectuales) fue la de la suprema eficacia de la violencia. Lo que en un primer momento fue audaz expresión de los agravios de un pueblo, no tardó en ser transformado en la cara monstruosa de una generalizada y creciente violencia que habría de convertirse en una característica constitutiva de la vida cotidiana en la Argentina por venir.

Otro mito que cayó –como secuela del Cordobazo- fue la idea del consenso tácito que parecía haber validado –ampliamente- las políticas económicas y sociales en curso. Prueba de ello fue el profundo sacudimiento de la confianza de la burguesía, diversos indicadores económicos lo señalaron: 1) luego de un saldo positivo neto de capital externo a corto plazo de 268 millones de dólares estadounidenses en 1967 y de 150 millones en 1968, en el año 1969 esos saldos positivos debían reafirmarse o crecer. Sin embargo, inmediatamente después del Cordobazo, hubo una salida muy rápida del capital externo a corto plazo, que determinó que el segundo semestre de 1969 cerrara con un saldo negativo de 44 millones; 2) la oferta de divisas en el mercado oficial de cambios –por parte de las firmas exportadoras- disminuyó 112 millones de dólares en 1969, respecto al año anterior; 3) se produjo un aumento en las remesas al exterior por concepto de servicios reales que en 1969 llegaron a 320 millones, cuando en 1968 solo había sido de 116 millones de dólares; 4) otro concepto que se vió fuertemente incrementado fue el de los servicios financieros y otros movimiento de capital, que pasaron de 587 millones de dólares en 1968 a 845 millones en 1969; 5) las reservas del BCRA que habían alcanzado su punto más alto en abril de 1969 (694 millones de dólares), a principios de junio habían bajado a 665 millones y a fines de ese mismo mes ya eran de solo 446 millones; 6) si bien el ingreso de capital externo a largo plazo cerro en 1969 con un saldo positivo de 52 millones de dólares, prácticamente todos estos ingresos fueron realizados antes de los sucesos de Córdoba. Estos datos hacen evidente que los sucesos de Rosario y Córdoba interrumpieron severamente las tendencias anteriores que –de no haber existido los sucesos- y si la coyuntura internacional –ya muy cambiante- lo hubiese permitido, podrían haber continuado²⁴⁶.

Así, el Cordobazo significó también el desbarranque definitivo de los logros de la política económica del período 1967-1969²⁴⁷. Finalmente, el efecto combinado del debilitamiento de la balanza de pagos y las nuevas tensiones inflacionarias llevó a una notoria sobrevaluación del peso y fue en esta situación, poco oportuna, que, luego de largas demoras, hizo su aparición –en febrero de 1970- el *Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad* que debería regir para los años 1970-1974²⁴⁸.

Lo cierto fue que la contundencia de las movilizaciones en ciudades del interior – iniciadas ya a fines de 1968- que culminaron con la protesta masiva de mayo de 1969 - reclamando entre otras cosas el regreso a los convenios colectivos de trabajo- mostró al gobierno la necesidad de modificar su orientación, instalando en su agenda las prioridades establecidas por la protesta. En este sentido, basó su política sindical en dos ejes principales: la paulatina normalización de la CGT, para intentar obtener apoyo para sus planes y el restablecimiento –aunque fuere en forma condicionada- del mecanismo de concertación colectiva, flexibilizando así su posición frente a los sindicatos. Otra medida que actuó como incentivo para atraer a ciertos sectores de los trabajadores, reanudar un diálogo sistemático con las cúpulas sindicales y mantener latente el espíritu de la negociación, fue la nueva ley de obras sociales, propuesta por el gobierno a principios de 1970. Una conquista que ni el propio Perón hubiera podido imaginar. Se fueron abriendo así los canales para la participación, lo que por un lado evidenciaba la crisis del régimen, pero que por otro, también evidenció las divisiones –dentro de las élites gobernantes- entre los que querían mantener la ortodoxia del proyecto de la Revolución Argentina y los que comenzaban a ver la necesidad de buscar apoyo en las organizaciones sindicales²⁴⁹.

5.10. Las consecuencias: crisis en el Gobierno y un Gabinete cuestionado.

Aquel miércoles 4 de junio –poco antes de la emisión radial del discurso del Presidente- todos los Ministros y Secretarios ya habían puesto sus renuncias a disposición del Presidente y los siguieron varios gobernadores. Notoriamente, las Fuerzas Armadas, tras haber prestado al Presidente el servicio de reprimir los desórdenes, buscaron interpretar la inquietud de las masas. Para los militares, no todo había sido obra de agitadores profesionales, sino también la consecuencia de una política económica y social desacertada. Pero el discurso del Presidente reveló una extrema severidad hacia el inconformismo y la rebeldía populares y una absoluta condescendencia a las sugerencias de las Fuerzas Armadas. Onganía comenzaba esta etapa –que debía ser renovadora- desconociendo los errores cometidos y subestimando la actuación de las Fuerzas. Otra vez, su obtusa lectura de la realidad y la excesiva valoración en sí mismo, mostraban a un Presidente en el rumbo equivocado. No alcanzaba a comprender que su legitimidad no era monárquica –ya que no había llegado allí como heredero de un trono-

ni era democrática, ya que nadie lo había votado: su poder emanaba de las Fuerzas Armadas y descansaba sobre ellas y, llegaría hasta donde las Fuerzas lo apoyaran y consintieran.

En la semana del 9 al 14 de junio, Onganía aprovechó el error de las Fuerzas Armadas – que días atrás le habían sugerido cambios en el Gabinete, en lugar de pedirle un nuevo programa- e impuso un equipo sustancialmente parecido al anterior, con un predominio aún más acentuado de la línea nacionalista que ahora representaba el nuevo Ministro del Interior, el general (RE) Francisco Imaz, un hombre que – políticamente- se encontraba a la vera de Perón²⁵⁰. Pero el arribo de Imaz –bajo el patrocinio del coronel Francisco Guevara- del que era su cara visible, significaba la permanencia de la teoría comunitaria y del consejalismo que, como se había visto, no entusiasmaba al pueblo. En el campo económico, tras ser aceptada la renuncia de Krieger, asumió como nuevo Ministro de Economía y Trabajo José María Dagnino Pastore, proveniente de la Secretaría del CONADE²⁵¹. El viernes 6 de junio, Onganía había tenido –objetivamente- ante sí tres caminos y recibía también tres presiones en el mismo sentido: a) La de los militares, que pedían un cambio en el equipo político, con Borda a la cabeza y el reemplazo de Astigueta –un medievalista que había sembrado cizaña con su dichosa Ley Orgánica de Educación y al que muchos responsabilizaban de los desmanes estudiantiles. A estos nombres muchos altos oficiales agregaban el nombre de Krieger, al que responsabilizaban por su inflexible política económica estabilizadora que era –en parte- responsable de los hechos de mayo y postulaban la instalación en Economía de Carlos Moyano Llerena, una figura afín con Krieger, pero capaz de flexibilizar los métodos; b) la tendencia desarrollista –cercana a Frondizi- que pedía una transformación de la política económica y era fogueada por los jóvenes asesores de Onganía – especialmente Roberto Roth- y que contaba en el Ejército con la adhesión del general Enrique Guglielmelli; c) La facción social-cristiana, encabezada por el coronel Francisco Guevara, cuyo candidato era Imaz, acompañado desde la gestión en Economía por Dagnino Pastore, que ya había sido Ministro del general Imaz durante su gobernación en la provincia de Buenos Aires. Sin vacilaciones Onganía se decidió por esta tercera opción, presentada por sus amigos socialcristianos. En realidad se había tratado de rechazar la sugerencia militar e imponer a su propia gente²⁵². El domingo 8 de junio Onganía había recibido en Olivos a varias personalidades socialcristianas: Imaz, César Cao Saravia (un empresario) y Felipe Tami, entre otros. Con Tami tuvo una entrevista definitiva; el ex titular del BCRA –que Salimei había inmolado en la hoguera alsogaraísta- le propuso al Presidente restablecer el control de cambios. Pero Onganía se negó a permitir la intervención del Estado en el valor de la moneda; esa misma tarde Krieger le anunció que su intención de irse era definitiva (el Presidente quería mantenerlo en el cargo) entonces el Presidente –con el consejo de Imaz- citó a Olivos a Dagnino Pastore, para entonces, Onganía ya contaba con la renuncia de todos los gobernadores²⁵³. Las versiones sobre la instalación del equipo socialcristiano

fomentaban toda clase de tendencias alcistas, el BCRA ya había vendido entre cinco y ocho millones de dólares diarios para sostener el peso, a ese paso en un mes se liquidarían las reservas monetarias genuinas, pero este era un plazo rumoreado para tramitar la reorganización del Gobierno. Para frenar la incertidumbre, el Presidente –ese mismo día 10 de junio, al mediodía- anunciaba la designación de Dagnino Pastore en Economía. Ese día estuvo plagado de rumores, algunos voceros radicales, sostenían que, al amanecer, Lanusse habría consultado a los oficiales superiores en Campo de Mayo para resistir la llegada de Imaz al Ministerio del Interior. Pero la entrevista más áspera de esa jornada, la tuvo Onganía con el almirante Pedro Gnavi quien le explicó que Imaz no contaba con la anuencia de la Armada. También a Martínez Zuviría le tocó darle el “no” al Presidente sobre el nombramiento de Imaz: *“No se puede sacar del Ministerio a un peronista para poner a otro. La intencionalidad del cambio solo podrá ser demostrada a través de la renovación del staff presidencia y de la modificación de la imagen del Gobierno”* habría dicho el brigadier general. Mientras el Ejército decía: *“no queremos ver a oficiales retirados en los cargos públicos, pues ellos brindan la apariencia de un Gobierno militar, cuando, en realidad, nuestra Fuerza no manda”*. Los oficiales superiores consultados por Lanusse, descartaban –por la mañana- que Imaz asumiera, pero lo cierto fue que a Imaz lo convocaron desde la Presidencia para su jura, ese mismo día a las 20 horas²⁵⁴. Frente a la intransigencia del Presidente, la táctica de las Fuerzas Armadas consistiría en advertir a Onganía que ellas ya no garantizarían la seguridad del Gobierno, con semejante Gabinete a cuestas. Entonces, ante cualquier traspie, el Presidente caería, solo, de la Casa Rosada. El jueves 12, Onganía aceptó la renuncia del Ministro de Bienestar Social –Conrado Bauer- y designó en su reemplazo al médico cordobés Carlos Consigli, otro comunitario que había sido colaborador –en el mismo cargo- del gobernador Caballero. A mediodía fue relevado el Canciller –Costa Méndez- y en su reemplazo se designaba al Embajador en Japón, Juan Bautista Martín. A las 15 horas, después de un almuerzo de los tres comandantes en el edificio Cóndor de la Fuerza Aérea, se discutió si seguirían en sus cargos los miembros del círculo áulico del Presidente: Héctor Repetto, Adolfo Vidueiro, Roberto Roth y Federico Frischknecht; Ricardo Dold, su yerno y Secretario Privado ya había renunciado. El Presidente se mostraba renuente a sustituirlos. Dagnino Pastore aceptaba las renunciaciones de Carlos Carrera en Hacienda, Rafael García Mata en Agricultura y confirmaba en sus cargos a Armando Ressi (Transportes e interino de Obras Públicas); Luis María Gotelli (en Energía); Elbio Baldinelli (en Comercio Exterior); Rubens San Sebastián (el irremplazable Secretario de Trabajo) y Raúl Peyceré (en Comercio Interior). De Mendoza llegaba el nuevo Ministro de Educación Dardo Pérez Guilhou –en reemplazo del irritante Astigueta- ex Rector de la Universidad de Cuyo, partidario del diálogo con los alumnos; en Defensa fue nombrado –el 28 de junio- el abogado entrerriano José Rafael Cáceres Monié: todos acompañarían al Presidente hasta el último día de su gestión; con la particularidad que Cáceres Monié, continuaría en el Ministerio de Defensa durante las gestiones presidenciales de Levingston y Lanusse. Luego de la tormenta, Imaz visitó a

los tres Comandantes y les aseguró que estaba dispuesto al diálogo con todos los sectores. Esa tarde se iniciaba la tregua²⁵⁵.

Pese a todo, el Jefe de Estado no podía quejarse: en los sucesos del 29 de mayo había conseguido el respaldo militar. Durante los últimos tres años había podido despedir a dos Comandantes en Jefe del Ejército y a los Comandantes de las otras fuerzas; había podido imprimir su estilo personal al proceso, se había permitido alentar curiosas teorías sociales de tipo participacionista; había estimulado inconscientemente el surgimiento de una confusa ideología antiliberal; había avanzado en el desarrollo de concepciones representativas cercanas al corporativismo, entusiastamente propulsadas por los integrantes de un sector ubicado en su confianza e intimidad. Y cuando comenzaron a verse, en forma literalmente explosiva, los resultados de la confusión política a que había llevado el entusiasmo de sus colaboradores más cercanos, el Ejército se limitó a respaldarlo y a reiterar su paciencia, insinuando que esta tendría un límite²⁵⁶. Pero, el Presidente pareció no entender, atrincherado en su propia realidad, tendía a explicar los hechos como producto de una acción subversiva deliberada y subvaloraba –o no comprendía- la incidencia de los factores políticos y sociales²⁵⁷. En estas circunstancias, con un cambio cosmético en su Gabinete –que nada cambiaba- Onganía comenzaba a transitar –sin saberlo- los últimos 363 días de su Gobierno. Esta supervivencia de Onganía, de casi un año después del Cordobazo, solo puede explicarse por las dificultades de la gran burguesía y el liberalismo para ponerse de acuerdo sobre una táctica que permitiera salvar lo logrado durante 1967 a 1969.

5.10.1. Las Fuerzas Armadas y los políticos en el nuevo escenario: Onganía bajo vigilancia.

Los viejos políticos –tan apagados en los últimos tiempos- no habían dormido en la noche del miércoles 11 de junio: esperaban la caída del Gobierno en cuestión de horas. Y seguirían aguardándola. Aunque los hechos no se precipitaran con velocidad, los políticos aguardaban el fin de Onganía a manos de las Fuerzas Armadas, un interregno militar –de corte liberal- y la ansiada vuelta a las urnas. El elenco balbinista, había deslizado algunos consejos –en esos días- en los oídos castrenses. Se trataría –de acuerdo con la hipótesis de Ricardo Balbín, el líder radical- de que los Comandantes delegaran el poder en un general capaz de ofrecer garantía para un reencuentro institucional en un plazo relativamente corto; entre tanto, los partidos políticos se declararían en estado de asamblea para una reorganización y un posterior llamado a elecciones. El esquema consistía en montar tres o cuatro nóminas de candidatos, como máximo. Una de ellas, la peronista, sería obnubilada –aunque no por la clásica receta proscriptiva- sino por un acuerdo frentista que sumaría votos para vencer a la presunta mayoría: un plan poco novedoso y con tufillo a la vieja Unión Democrática, el frente que

había pretendido vencer a Perón en 1946. La otra opción era la unción de un militar salvador: se pensaba en Pedro Eugenio Aramburu. La figura de Aramburu contaba con la simpatía de los jóvenes oficiales del Ejército, pero los oficiales superiores y el generalato lo miraban con recelo²⁵⁸. A pesar de que el radicalismo balbinista contaba con un ala revolucionaria que en una reunión en La Cumbre²⁵⁹ había clausurado la etapa de la evolución reformista y había declarado la “*infaltable*” revolución latinoamericana; el Comité Nacional prefirió seguir en la brecha negociadora, al conocer que un ex senador había sido consultado por algunos militares para elaborar un desenlace constitucional inédito y razonable. Vandor partía a Madrid a encontrarse con Perón, llevando el aval de la unidad obrera, lograda en las delegaciones del interior durante las jornadas de mayo; pero jugaba a dos puntas: por un lado destronar al gráfico Raimundo Ongaro; y por el otro, empujar a Onganía hacia sus huestes: una quimera. En los gremios insurrectos del interior el ongarismo había crecido lo suficiente como para sostenerse solo; y Onganía – que aún apañaba al participacionismo- podía intervenir la CGT Azopardo y demoler la organización vandorista cuando quisiera. Pero Vandor –siempre astuto- ya había comprendido que apuntalar a Onganía era una ingenuidad y que enfrentarlo era redundante: ese papel lo estaban jugando los militares. El martes 10, Ongaro, en una jugada de anticipación, había propuesto un paro en común con la CGT Azopardo –con fecha a establecer- la Federación Universitaria ya le había ofrecido su participación.

Si los sucesos de Córdoba habían destruido el mito del consenso, que en algunos sentidos habían legitimado la presidencia de Onganía, también habían incentivado las diferencias dentro del personal militar –en actividad y retirado- alentando el surgimiento de proyectos rivales para el futuro cercano. Onganía era consciente que necesitaba –si quería mantenerse en el poder- algún tipo de acuerdo con los gremios. El miércoles 25 de junio nombró –en la Secretaría de Información y Turismo- al coronel (RE) Luis Premoli, un oficial de extracción peronista con amplios contactos en el movimiento sindical y amigo personal de Vandor. Aunque Vandor no había tenido nada que ver con los sucesos del mayo cordobés, el descrédito del sector participacionista –que se habían opuesto a la exitosa huelga- y el debilitamiento de la CGT de Paseo Colón, ante la presión del Gobierno, hacían surgir a Vandor como el único líder nacional que podía ser capaz de devolver la unidad al movimiento sindical. Se trataba de revivir el entendimiento sindical que había existido en los primeros meses del Gobierno de Onganía, y había interlocutores bien dispuestos entre los oficiales del Ejército muy preocupados después del Cordobazo, por la evidente falta de apoyo público al gobierno y que estaban interesados en elaborar un acuerdo que pudiera ser presentado al Presidente²⁶⁰. Un almuerzo entre asesores del Presidente y el líder sindical fue agendado para el lunes 30 de junio. En esa ocasión, Vandor y los representantes militares iban a elaborar los detalles del acuerdo en preparación, para una reunión con el Presidente el jueves siguiente, donde se firmarían los documentos pertinentes: Vandor nunca asistió al almuerzo del 30 de junio; poco antes del mediodía, tres hombres

armados –que fingieron ser policías- entraron en las oficinas de la UOM y lo asesinaron, dejando tras sí una bomba que destruyó parte del edificio. Este acto de violencia –sin precedentes en la Argentina de los años '60- fue un trágico augurio de lo que le esperaba al país en la siguiente década y golpeó –como un latigazo- al conjunto de la sociedad. El Gobierno reaccionó decretando el Estado de Sitio en todo el territorio nacional, pero lo cierto es que nunca se descubrió a los autores.

La incesante deliberación a que se entregaron los mandos militares por la represión que había tenido que realizarse en Córdoba – a su propio costo- para reimplantar el orden social, unida a la tirantez que se había instalado –con el Gobierno- por la falta de consulta sobre la reorganización ministerial, indicaban que un cierto hielo se había levantado entre el Presidente y las Fuerzas Armadas. Los episodios de episodios de Córdoba habían instalado la necesidad de ordenar la intervención militar de la provincia como un modo de recomponer el orden y reemplazar –provisoriamente- a un gobernador ya muy desprestigiado. Para asumir el cargo de Comisionado Federal en la provincia, Lanusse había elegido al general de brigada Jorge Raúl Carcagno, que fue designado por Onganía el 16 de junio²⁶¹. Esto indicó un sutil cambio en la estrategia de las Fuerzas con el Presidente. Carcagno, un hombre sin experiencia política, presentaría, ante los ojos de los cordobeses y del resto del país a un Ejército distinto y resultaba evidente que actuaba bajo instrucciones del Comando en Jefe de su Arma y no por su cuenta. El Comisionado Federal inauguraría -el jueves 19- el tiempo social antes que el Presidente²⁶². Esta actitud, entraba en colisión con el mensaje presidencial del 4 de junio: el paro de Córdoba –entre ese martes y miércoles- reclamaba cambios y el Comisionado Federal no tuvo empacho en elogiarlo²⁶³. Se instauraba así, una especie de Gobierno paralelo con el Ejecutivo central; parecía que las Fuerzas Armadas deseaban presentar una especie de opción al país entre ellas y el Gabinete²⁶⁴. Mientras el plenario de la CGT unificada confirmaba –el mismo lunes 16 de junio- el paro de 36 horas decretado para el martes y miércoles, pero sin la movilización prevista –lo que le quitaba presión a la protesta- el gobierno provincial, decidía desplegar el máximo posible de policías, sin intervención del Ejército: finalmente, el feriado nacional –decretado para esos días- y las negociaciones llevadas adelante por las partes morigeraron –en mucho- la intensidad de la protesta²⁶⁵. El paro fue total y con un alto porcentaje de ausentismo, casi no se registraron incidentes; y el Interventor Federal estimó que los obreros habían ejercido su legítimo derecho a través de la huelga y que esta se había desarrollado en orden²⁶⁶.

5.10.2. La Política Armada: la subversión en escena. La hora del miedo.

En un hecho confuso –el 27 de junio- durante una serie de manifestaciones estudiantiles, ya de rutina, en la zona de plaza Once dos patrulleros policiales habían perseguido e intentado detener a Emilio Mariano Jáuregui²⁶⁷, un brillante ideólogo marxista adherido a la CGT de Paseo Colón. El episodio –muy controversial- terminó con la muerte de Jáuregui bajo las balas policiales. Dos días más tarde, el Jefe de la Policía Federal –general Mario Fonseca- intentaba colgarle el sayo subversivo en base a una cartilla sobre el manejo de explosivos encontrada en su domicilio. El Ministro del Interior –Francisco Imaz- calificó al manual encontrado como *“tremendamente peligroso. Una verdadera doctrina para la conducción de la lucha explosiva. Este tratado es un verdadero manual completo –dijo, en declaraciones al periodismo- de la lucha de guerrillas y de la lucha con material explosivo”*. La oscuridad cubrió el informe oficial sobre la muerte de Jáuregui. Era posible que, quienes quebraran el orden fueran una minoría, como gustaba declarar al Ministro Imaz. Pero lo cierto fue que –entre el jueves 26 de junio y el sábado 5 de julio- en la Capital Federal y en el interior hubo 55 atentados con explosivos, uno de los cuales se abatió sobre la delegación de la SIDE en la ciudad de Mendoza; un asalto a cuatro infantes de Marina –el lunes 30- a los que les robaron las armas reglamentarias y los uniformes; un hecho similar sucedió en la comisaría de Berrotarán, un pueblo cordobés. El martes 1° de julio –en Tafí Viejo, en Tucumán- la Policía arremetía contra un grupo de obreros huelguistas, el saldo: una niña de 4 años muerta –Elba Susana del Valle Guerrero- en la atropellada policial; era la víctima número 25 en la lista de muertes –directas e indirectas- de los hechos que asolaban al país.

La conmoción por la muerte de Jáuregui se diluyó 48 horas más tarde. En el mediodía del lunes 30 de junio, Augusto Timoteo Vandor caía asesinado en el primer piso de su despacho de la UOM²⁶⁸. Ya fuere por la trascendencia de su figura en la vida política nacional o por el asombro de ver que las reacciones populares degeneraban en abierta violencia, muchos habitantes creyeron abierta una fase de inseguridad absoluta: a la hora de la violencia, sucedía la hora del miedo²⁶⁹. Las reacciones del Gobierno no se hicieron esperar; el mismo lunes 30 –ya entrada la tarde- deliberaría el CONASE durante una hora y media, el resultado: la instauración del Estado de Sitio en todo el territorio nacional, con el total acuerdo de los tres Comandantes en Jefe²⁷⁰. Esa misma noche fue intervenida la central sindical de Raimundo Ongaro, allanadas sus oficinas y –el propio Ongaro- fue detenido en Bialeto Massé, provincia de Córdoba²⁷¹. Tal como sucedieron las cosas, el Gobierno trató de crear una base sindical unificada –mediante una mezcla de coerción y persuasión- empleando la excepción del Estado de Sitio para disolver la CGT de Paseo Colón, nombrando un interventor delegado de la CGT Azopardo y ofreciendo a los líderes sindicales la perspectiva de controlar fondos de bienestar social muy aumentados. Ninguna de estas medidas –sin embargo- pudo impedir las huelgas y protestas que siguieron en ciudades del interior y que –en algunos momentos- exigieron nuevamente la presencia militar para conservar el orden²⁷². Pero algo era seguro: la

muerte de Vandor había cambiado para siempre el destino nacional. Había interrumpido la formación de los que podría haber sido una poderosa alianza política; una alianza que podría haber cambiado la orientación y el destino del Gobierno y, tal vez, le hubiese permitido a Onganía soportar presiones de otros sectores²⁷³. El asesinato de Vandor había herido de muerte al régimen y, justamente un año más tarde –el 1° de julio de 1970- otra muerte la del general Pedro Eugenio Aramburu- a manos del grupo *Montoneros*, habría de asestarle a Onganía el golpe final.

Como una manera de suavizar la situación, el 14 de julio, fueron liberadas 59 personas que habían sido detenidas por los sucesos de junio y, al día siguiente, recuperaron su libertad 217 personas más. El general Eduardo Labanca –Jefe de la poderosa Décima Brigada de Infantería Mecanizada- con asiento en Palermo, en la Capital Federal, pidió su retiro cuando se descubrió que una conspiración estaba en marcha. Las figuras principales fueron un grupo de coroneles nacionalistas – los más importantes eran los coroneles Carlos Luzuruaga y Ramón Molina, considerado el cerebro del movimiento conspirador- que estaban a cargo de unidades estratégicas en la provincia de Buenos Aires: al parecer, su plan, respaldado por Labanca, era ofrecer su apoyo a Onganía si él actuaba para reemplazar a Lanusse²⁷⁴. Labanca pidió su retiro el 24 de julio cuando quedó en descubierto su situación y Lanusse, rápidamente, nombró en su lugar al general José María Díaz –hombre de su confianza- que había estado sirviendo como Jefe de Inteligencia del Estado Mayor General. El caso del general Labanca tuvo repercusiones, porque se daba la circunstancia de que ese alto jefe militar, había advertido –admonitoriamente- al Presidente de la Nación sobre el peligro de un insensible desplazamiento que llevaría a una salida liberal clásica, aunque se invocase la continuidad revolucionaria formal²⁷⁵. Para alejarse de estas prevenciones, Lanusse explicó ante los generales de división aprovechando la ocasión de la inauguración –el 7 de agosto- en el Estado Mayor del Ejército de una serie de conferencias para oficiales retirados, todos los pasos de ese proceso y terminó su exposición con claras palabras: *“El Comandante en Jefe del Ejército no tiene deseos ni intenciones de ocupar otros cargos y, se compromete ante sus pares, a ser y continuar siendo ni más ni menos que el Comandante en Jefe del Ejército”*²⁷⁶. En medio de especulaciones de la prensa acerca de que Lanusse estaba comprometido en una ofensiva contra Onganía –el 5 de agosto- se había clausurado el semanario *Primera Plana*, acusándolo de llevar adelante una campaña basada en informaciones inexactas destinadas a crear un clima de confusión y división en las Fuerzas Armadas. Una semana más tarde también se prohibiría el semanario *Ojo y Periscopio* que había intentado sustituirla²⁷⁷.

5.10.3. La larga sombra de Lanusse en el ocaso de Onganía.

Las relaciones entre el Presidente y el Comandante en Jefe del Ejército se habían deteriorado e ingresado en lo que podría llamarse un equilibrio inestable. Ninguno quería hacer un movimiento que pudiera destruir la unidad del Ejército que tanto trabajo había

costado conseguir en el pasado reciente. También estaban preocupados por la continuación del Gobierno y trataban de mantener una apariencia de cooperación. Sin embargo –en especial entre los colaboradores de los equipos respectivos- se respiraba un clima de mutua desconfianza. Los colaboradores del Presidente veían que las decisiones de Lanusse sobre las promociones, nuevos cargos y retiros –en ese fin de año- estarían destinadas a vaciar de partidarios de Onganía a las posiciones estratégicas. A su vez, dentro del Estado Mayor General del Ejército- se estaba en la creencia que el Ministro del Interior –Francisco Imaz- y el Secretario de Informaciones del Estado –general Señorans- estaban orquestando una campaña contra Lanusse²⁷⁸. Para fines de 1969, Onganía demostraba no tener en cuenta las críticas que se le habían hecho –en carácter de asesoramiento- y hasta descartaba las mismas reflexiones que los principales protagonistas de la situación le habían formulado. La oposición se iba haciendo cada vez más enérgica y, Jefes y oficiales de las tres armas, comenzaban a ver con creciente preocupación el proceso; era necesario evitar el estado deliberativo que había operado en el arma durante 1962 y 1963 y, para eso, había que mantener la unidad. Era difícil –sin embargo- persuadir a Onganía de modificar la forma en que estaba encarando las cosas²⁷⁹.

En tanto, el movimiento obrero, había decidido iniciar un proceso de unificación a nivel nacional, inmediatamente después de la muerte de Vandor. Este proceso sería una cuestión exclusiva del núcleo azopardista, los participacionistas y quienes se habían retirado de la CGTA para participar de la normalización de las 62 Organizaciones. El jueves 10 de julio de 1969, el plenario de Secretarios Generales de la CGT Azopardo reunió a 65 dirigentes, que conformaron una Comisión Intersindical de 20 miembros que aceptaba dirigir la central obrera²⁸⁰. Cada sindicato elegiría su representante y luego se asignarían en una Comisión que tendría mayoría de las 62. Pero el nombramiento del Interventor Delegado –Valentín Suárez- que entró en funciones el 4 de agosto, modificó la situación y su primera tarea fue convocar a los dirigentes sindicales para tratar la situación de la central. El encuentro con Suárez, se realizó el jueves 7 de agosto. Por la Comisión de los 20 estuvieron presentes 14 representantes, el resto estaba de gira normalizando las regionales del interior. La Comisión sacó una tranquilizante conclusión de la reunión: el Gobierno reconocía a los representantes de la CGT²⁸¹. Así, tras tres años de falta de diálogo con representantes legítimos de la CGT, al fin se reconocía a uno de ellos. A pesar de esto, algunos miembros de la Comisión propusieron que debería haber un nuevo paro, porque Suárez solo podría tratar la normalización, pero no los reclamos; así, de las deliberaciones al interior de la Comisión, surgió el paro nacional de 24 horas para el 27 de agosto (ver nota 267). Curiosamente, por un lado, si bien el Gobierno había perdido –tras los sucesos de Córdoba- la imagen de orden y autoridad, por el otro, avanzaba –más que antes- en el frente gremial: intervenía sindicatos, detenía dirigentes, designaba interventores delegados y creaba Consejos y Comisiones Asesoras en las Secretarías de Estado, según directivas de Onganía –del 29 de julio-

para la participación de la comunidad. Estas nuevas instituciones deberían comenzar a funcionar el 1° de setiembre y el Gobierno decidiría quien las integraría, según pedido de los interesados en participar²⁸². Después del paro del 27 de agosto, comenzaría – finalmente- una de las medidas del postergado tiempo social: las discusiones paritarias. Estas abarcarían únicamente a las actividades del sector privado, porque en el público, los aumentos para 1970 ya habían sido fijados por el Decreto 1020/69, que había establecido la escala para los próximos cinco años; la novedad era que el Gobierno no pondría tope a las negociaciones, tras tres años de sacrificios, a los trabajadores se los compensaría con paritarias y aumentos salariales, claro que las empresas no podrían trasladarlos a los costos; es decir, deberían impactar sobre la renta empresarial. Pero el sector empresario –en el II Congreso Nacional de la Industria, en la ciudad de Salta- puso en duda la negociación sin tope. Los desacuerdos al interior de movimiento obrero continuaron dos paros nacionales fueron convocados y luego levantados –el del 4 de setiembre y los del 1° y 2° de octubre- lo que indicaba el nivel de desacuerdo en la Comisión de los 20. Sin embargo, fue en esta atmósfera, que Onganía se reunió –el 26 de setiembre- con los líderes sindicales y acordó las medidas conciliatorias destinadas a fortalecer a los sindicalistas ante sus seguidores y alentarlos a cooperar con los planes del Gobierno. Fue durante octubre que se autorizaron –en la práctica- los aumentos salariales y, se ordenó la libertad de los sindicalistas detenidos bajo las condiciones del estado de sitio. Se dictó también –el 27 de noviembre- una amnistía para quienes habían sido condenados por los tribunales militares después de los disturbios de mayo²⁸³.

Para comienzos de 1970 convivían tres sectores sindicales relevantes. La Comisión Normalizadora de la CGT, integrada por el grupo denominado de los 8 (expulsados de las 62 que se agrupaban en un nuevo nucleamiento), Los No Alineados (NA) y la Nueva Corriente de Opinión (NCO) cercanos al Gobierno y que estaban a la espera de una favorable Ley de Obras Sociales bajo el control de las organizaciones sindicales²⁸⁴. Las 62 habían comenzado el proceso de unidad y endurecimiento encomendado por Perón, en virtud del cual habían expulsado al L8 (grupo de los 8) que por primera vez no formaban parte de la conducción de la CGT. Mientras, las Regionales, buscaban mantener la llama de la lucha desde el interior, junto a los sindicatos y agrupaciones que se mantenían en la CGTA –ya muy deteriorada- para ser parte del sostenimiento de la oposición a Onganía. La Comisión de la CGT llamó a la normalización de la central obrera para fines de mayo, en realidad para el día 29 de mayo en coincidencia con el día del Ejército. Estaba claro que a la nueva CGT la integrarían diferentes vertientes del peronismo (L8, las 62, la NCO y los NA) y que quedarían al margen el peronismo combativo y los GI y el MUCS, que durante los 60 habían participado en los Consejos Directivos²⁸⁵.

En el ámbito universitario -a tres años de la “*intervención necesaria*”- el tercer Secretario de Educación y sus colaboradores, hallaban trabas para comenzar el proceso nunca iniciado: reconstruir la Universidad, más aún, el ascenso a Ministerio de la Secretaría

seguía sin realizarse. En pocas palabras, todo se encontraba a fojas cero. Así, la Ley 17.245 –del 21 de abril de 1967- el instrumento diseñado para la reforma universitaria, había quedado en letra muerta y los Estatutos con que cada casa de estudios reglamentó la Ley, habían corrido la misma suerte. La entrega de la Universidad y su gobierno a los profesores –método que reemplazaba al anterior sistema tripartito- se encontraba todavía sin implementar. Las Universidades se encontraban aún a disposición del PEN, en una situación anómala y dañina, porque ello indicaba la tozudez del Gobierno en no otorgar la libertad académica prometida y en someter a sus arbitrios políticos a una fuerza a la que –curiosamente- decían querer despojar de fines políticos. Paradójicamente, Luis Botet primer conductor de la UBA, había cumplido su papel con bastante honestidad, y hasta se había esforzado por sustraer a la Universidad de los manejos del Gobierno; sus disidencias con el –por aquel entonces Secretario Astiguetay el ex Ministro Borda- lo habían obligado a marcharse a mediados de 1968. Su reemplazante –por entonces- Raúl Devoto, un inexperto, no había alcanzado siquiera a comprender –durante el año y medio que insumió su gestión- el aparato burocrático universitario y fue incapaz de ordenar las estructuras y establecer una universidad de futuro. La gestión de Devoto, solo había logrado hundir el nivel de la UBA –la mayor Universidad argentina- hasta profundidades nunca antes conocidas: hacia mediados de 1969, la UBA atravesaba su más bajo nivel en tres décadas. El resto de la Universidades nacionales, tampoco resistía el análisis: ninguna había cumplido las especificaciones de la ley 17.245 y el Consejo de Rectores –el organismo directivo- no había demostrado su eficacia.

El nuevo Secretario de Educación, arribado en la reconversión del Gabinete de junio y julio de 1969, Pérez Guilhou, ex Rector de la Universidad de Cuyo, enrolado en una línea de pensamiento nacional habría una esperanza, parecía haber llegado para cumplir con la Ley: debía garantizar la libertad académica, constituir los claustros y establecer una política nacional para las Universidades y aspectos relacionados con la futura “democratización” de la enseñanza. El propio Presidente pareció encender la luz verde a la gestión del nuevo Ministro; el lunes 7 de julio (1969) en un discurso a las Fuerzas Armadas había prometido: “Haremos nuevas Universidades”. Tres días después –el 10 de julio- Perez Guilhou fue más explícito: reconoció que era necesario fundar centros de enseñanza superior para aliviar la presión demográfica estudiantil y remozar la caduca infraestructura universitaria²⁸⁶. La solución era un plan integral, su autor, Alberto Taquini, Decano de la Facultad de Farmacia de la UBA; el plan contemplaba fundar cinco nuevas universidades: del Paraná, de Nuestra Señora de Luján, del Rio de la Plata, Pampeana y Austral. También se contemplaba la preparación de nuevos docentes y el impulso de comisiones zonales que favorecieran la instalación en las áreas elegidas, junto con el régimen legal que impulsara su creación y desarrollo. La puesta en marcha del proyecto demandaría entre cuatro y seis años a partir de su aprobación por el Gobierno²⁸⁷; contando los tiempos de los estudios de factibilidad y el desarrollo del

proyecto, se llegaría –con justeza- a la inauguración de las cinco Universidades hacia principios de 1980. Onganía pensaba que aún tenía todo el tiempo por delante.

5.10.4. La Junta de Comandantes retoma el poder y destituye a Onganía: el papel de Lanusse en los sucesos que desembocaron en el relevo. Los hechos.

Hacia principios de 1970 el Gobierno era francamente minoritario y solo tenía el apoyo de algunos curiosos ateneos poco representativos, además de los respaldos que había logrado conseguir en base a el juego de intereses tanto políticos como económicos. La diversidad de los problemas que enfrentaba el país era cabalmente comprendida por la oficialidad del Ejército, que estaba desplegada a su largo y a su ancho: entendían perfectamente que no era posible gobernar –simultáneamente- sin legitimidad y sin consenso. El Gobierno sobrevaloraba la autoridad real del Presidente porque la relación de fuerzas favorables era beneficiosa para el sistema de cosas imperantes: solo que siempre ocurre así. Cuando el poder está unificado –es decir, cuando el poder civil no está separado del poder militar- la relación de fuerzas siempre beneficia al sostenimiento del estado de cosas anterior a la crisis. Pero, siempre también, esa relación se invierte súbitamente en los hechos y es para los muy entrenados políticamente tener la capacidad de advertir los primeros síntomas, casi imperceptibles²⁸⁸. La unidad es imposible sin una doctrina que unifique y, las Fuerzas Armadas, ya comenzaban a percibir la bifurcación del poder: este fue el problema esencial que se planteaba hacia fines de 1969, especialmente en el Ejército. Previamente, el 18 de setiembre, Lanusse había realizado una purga entre los oficiales jóvenes del Ejército para reacomodar a su estilo y autoridad a los mandos intermedios²⁸⁹. Los sucesos del último semestre de 1969, especialmente en noviembre y diciembre, convencieron a Lanusse y a su círculo de asesores de que un choque con el Presidente –aunque no necesariamente inminente- era inevitable²⁹⁰. Desde esta perspectiva era lógico pensar en planes de contingencia y Lanusse aprobó –en principio- la idea de emitir instrucciones a la rama de planificación política del Estado Mayor General (Jefatura V) para que hiciera un estudio de las medidas que el Ejército debía adoptar en caso que hubiera que reemplazar a Onganía. También le pidió al coronel Cornicelli –su asistente personal- que estudiara los elementos esenciales para una salida política. Se llegó a la conclusión mutua que solo una democracia sin limitaciones podía ofrecer seguridad de estabilidad política. En la misma conversación –del 19 de noviembre- Lanusse le preguntó a Cornicelli si tenía sugerencias para una posible y futura conformación del Gabinete²⁹¹. Mientras tanto, un grupo de figuras políticas de los partidos tradicionales –junto con un conjunto de altos oficiales retirados del Ejército- esperaban el deterioro y no la mejoría de las relaciones entre el Presidente y Lanusse. Autodenominándose Movimiento de Afirmación Republicana (MAR), (el grupo de había formado en diciembre de 1968), apoyaban la idea de hacer que el ex Presidente *de facto* Pedro Eugenio Aramburu, reemplazara a

Onganía –en calidad de Presidente provisional- para restaurar un Gobierno constitucional de sesgo liberal, bajo el sistema de partidos²⁹². Onganía –enterado del intento de Aramburu- le dio tan poco crédito a las posibilidades del general retirado que ni siquiera hizo un esfuerzo para que sus movimientos fueran vigilados de cerca²⁹³.

El 27 de febrero de 1970, el general Lanusse se dirigió al personal militar superior en una alocución en el Colegio Militar de la Nación. Allí aludió a quienes: *“aprovechando la función pública han tratado de desvirtuar los principios de la Revolución, para acomodarlos a sus intereses o tendencias particulares. En el fondo –comentó- lo que buscan es disociar a la ciudadanía de las Fuerzas Armadas, como primer paso hacia la toma del poder. Ni la demagogia irresponsable, ni los estallidos de violencia orquestados por los traficantes del caos, ni la sensualidad de un poder que jamás ambicionamos, alterarán una conducta basada en el sistema de valores que estoy tratando de bosquejar, y que, estoy seguro, anima a los cuadros de este Ejército, al que hoy, más que nunca, estoy orgulloso de pertenecer”*²⁹⁴. La alocución mereció una calurosa aprobación del Presidente, lo que pareció mejorar en algo la relación²⁹⁵. Como señal de buena voluntad, Onganía sacudió su oficina presidencial: aceptó la renuncia de Roberto Roth, Secretario para Asuntos Legales y Técnicos²⁹⁶. Reemplazó al Secretario General de la Presidencia, General Repetto, cuyo particular estilo probablemente hubiera contribuido al aislamiento del Presidente y su curiosa percepción de las realidades políticas. Nombró para ese puesto al general (RE) Iavicoli, que había servido con Jefe de Estado Mayor, lo cual el propio Lanusse vio como un paso positivo para facilitar una relación armoniosa entre el Presidente y el Ejército. Un tercer cambio, que parecía otro paso en la dirección correcta, tuvo lugar a mediados de abril, cuando el general (RE) Señorans –Jefe de la SIDE- renunció después de una controversia con el general (RE) Fonseca –Jefe de la Policía Federal- durante una reunión del CONASE. Para reemplazar a Señorans fue elegido el general Gustavo Martínez Zuviría un oficial nacionalista como su antecesor²⁹⁷. Pero ese acercamiento entre el Presidente y el Comandante en Jefe no fue considerado con mucho entusiasmo por todos los círculos del Ejército; el propio general Guglielmelli describió el discurso de Lanusse como un apoyo a la política económica vigente y sostuvo que eso era perturbador para el cuerpo de oficiales²⁹⁸. El 10 de marzo de 1970, el Comandante de Institutos Militares –general José Rafael Herrera- se dirigió a los oficiales superiores (coroneles y generales) de su jurisdicción para decirles que había observado que existía –en la Fuerza- una profunda preocupación por las indefiniciones del Gobierno. Recordó que los objetivos de la Revolución Argentina eran: *“crear las condiciones básicas esenciales para el desarrollo del país, en el marco de una auténtica democracia”* y agregó que: *“La Revolución culminaría cuando haya creado las condiciones que permitan el despegue y el libre juego de los mecanismos de la democracia”* y continuó citando la definición de Lanusse sobre los puntos de vista del Ejército, diciendo: *“la pasión por la libertad y por la democracia es imprescindible porque constituye la sólida garantía de que el Ejército será el más firme bastión de los derechos*

de sus conciudadanos y de que jamás se transformará en una guardia pretoriana, al servicio de intereses subalternos de pura concepción totalitaria del Estado. La salida solo puede ser considerada en base a la democracia clásica de partidos, con un encuadramiento más acorde a las conveniencias del país, teniendo en cuenta la sensibilización demagógica en que aún se encuentra la población²⁹⁹. Toda una definición para el momento que se vivía³⁰⁰. El ex Presidente Arturo Frondizi emitió –el 22 de abril- un documento que generó una reacción en cadena; Frondizi, reconoció que la situación se agravaba, que los signos de agotamiento ya eran muy visible por partes de muchos sectores sociales, como no podía ser de otra manera, por la persistencia del Gobierno de mantener una política económica impopular con un modo despótico del ejercicio del poder. Según expresaba en el documento existía una tremenda confusión respecto de los planes institucionales de la Revolución³⁰¹. Conociéndolo a Frondizi su actitud no pasó desapercibida ni para los políticos ni para la cúpula militar, entonces, Onganía y Lanusse se reunieron –el 11 de mayo- para conversar sobre la posibilidad de una reunión con el cuerpo de oficiales jefes de las tres Fuerzas para evaluar el escenario político y social y los planes del Gobierno para darle solución. Finalmente –el 19 de mayo- se fijó fecha para la reunión de la que participaría solo el generalato en actividad del Ejército. Sin duda, la reunión despertó mucho interés e inquietud entre la alta oficialidad, que esperaba importantes anuncios por parte del Presidente: sería en Olivos, en la mañana del martes 27 de mayo³⁰². Pero: ¿Qué era lo que Lanusse esperaba de este encuentro? Seguramente, esperaba que el Presidente reaccionara de modo positivo al análisis del cuadro de situación hecho por el Ejército y que cambiara la orientación de su Gobierno en el sentido de promover un debate público sobre la manera en que se podría llegar –en el menor tiempo posible- a la restauración de un Gobierno electo³⁰³. La exposición del Presidente en la reunión del 27 de mayo de 1970 en Olivos, fue una verdadera catástrofe nacional. Onganía, en lugar de proponer un llamamiento a las grandes transformaciones revolucionarias o llamar a recobrar la democracia en una movilización de las energías patrióticas en torno a una empresa emancipadora o presentar planes concretos y accesibles para superar la coyuntura de crisis, después de cuatro años de parálisis, solo atinó a presentar curiosos organigramas triangulares con las funciones del método participativo y su ordenamiento administrativo³⁰⁴. Con la Nación a punto de estallar, el Jefe de Estado, se dedicó –ese 27 de mayo- a dibujar pirámides jerárquicas que indicaban la nueva estructura participativa. El Presidente le dijo a sus camaradas de arma en esa oportunidad: *“Soy completamente optimista en cuanto a la marcha del proceso, cada día el camino es más claro. Yo digo que en cuatro años de la Revolución Argentina, nos hallamos próximos a lanzar políticas y planes con un estado de consenso que no existía en 1966”*. No fue posible imaginar el asombro del generalato ante esta declaración: la desconexión del Presidente con la realidad parecía ya francamente alucinante e irreversible. Estaba claro que el Presidente se encontraba influido por las formas políticas del *franquismo* y del *fascismo*: solo que se trataba de un franquismo sin guerra civil y sin el apoyo de medio país o de un fascismo sin *Duce* y sin

multitudes fanatizadas en las calles viviendo a su líder: un fascismo desapasionado y burocrático³⁰⁵.

Dos días después del desconcertante discurso del Presidente ante los mandos y -por si algo faltaba- aquel viernes 29 de mayo de 1970, Lanusse habló –en el Colegio Militar de la Nación- ante los mandos en el día del Ejército. Terminada su alocución, Lanusse, el Presidente y los otros dos Comandantes en Jefe –el almirante Pedro Gnavi, Jefe de la Marina y Presidente de la Junta de Comandantes y el brigadier general Carlos Rey de la Fuerza Aérea- que estaban presentes, fueron invitados por el Jefe del Instituto militar a realizar un brindis en privado y conversar sobre la reunión del día 27³⁰⁶. Fue como un símbolo: en el mismo lugar y al mismo tiempo, el Presidente se enteró que carecía de todo apoyo entre los mandos del Ejército y que el ex Presidente Aramburu había sido secuestrado. Aún más que la muerte de Vandor, pocas cosas podían conmover tan profundamente al país y terminar por destruir la imagen de orden y seguridad sobre la que, el Gobierno, había centrado sus logros; la desaparición del hombre a quien muchos veían como la única figura nacional capaz de presidir una transición a un gobierno democrático estable, llegó como un shock y una sorpresa para la opinión pública en general³⁰⁷. El secuestro de Aramburu, pareció constituir la gota de agua que faltaba para desbordar el vaso y marcó el punto exacto de la escalada subversiva que se estaba viviendo y el fracaso político de un proceso que había obtenido solo buenos resultados en el campo del ordenamiento y de las obras públicas³⁰⁸.

Solo después que pasaron casi seis semanas y de que el propio Onganía hubiera sido depuesto, llegó a conocerse la identidad de los participantes de esa acción subversiva³⁰⁹. Después de las investigaciones, se volvió evidente que los asesinos habían sido, en su mayor parte, jóvenes de clase media alta con antecedentes de activismo en organizaciones católicas y nacionalistas y sin vínculos conocidos con el peronismo³¹⁰. Todo tipo de especulaciones se realizaron sobre los hechos, desde la desafortunada declaración del Ministro del Interior, en el sentido de podría tratarse de un autosequestro, apoyada por parte de los servicios de inteligencia, hasta la sugerencia de que se trataría de una operación al interior del Gobierno para proteger a Onganía de un golpe militar. Más tarde, cuando la evidencia del secuestro era irrefutable, las autoridades tuvieron que enfrentar el tema de si se negociaba o no la libertad de Aramburu con los secuestradores. Tanto el Presidente con Lanusse estuvieron de acuerdo en que –por los principios- el Gobierno no podía permitirse debilitar su autoridad haciendo concesiones bajo presión y que no se haría ninguna declaración pública sobre esta decisión. Pero los secuestradores –más tarde autoidentificados como grupo *Montoneros*- no tendría la intención de negociar la libertad de Aramburu, sino la de juzgarlo por un tribunal revolucionario³¹¹. El 1° de junio se resolvió convocar a una reunión del CONASE para el día siguiente: la reunión del 2 de junio fue tan desordenada como nerviosa; se debatieron las declaraciones de Jorge Daniel Paladino –delegado de Perón- en el sentido de condenar el secuestro, pero responsabilizar al Gobierno y una

posible apertura al diálogo con los partidos políticos –propuesta por Lanusse- que había sido –en principio- rechazada por el Presidente³¹². Pero el Presidente, finalmente, pidió a los Comandantes que estudiaran la preparación de un plan político, dijo incluso, que la cuestión no podía demorarse: parecía que el Presidente comenzaba a buscar el apoyo de la Junta. El jueves 4 de junio a las nueve de la mañana, los tres Comandantes en Jefe –es decir la Junta de Comandantes en Jefe en pleno- se reunieron en el salón de situación del Ministerio de Defensa Nacional, asistía también el Jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier mayor Ricardo Salas: el temario central era el plan político en sí mismo. En la reunión, no se habló del derrocamiento del Presidente –al menos no expresamente- pero el tema estaba presente. Sin embargo, basados en la suposición probable de que los esfuerzos por convencer al Presidente del curso de acción aconsejado por la Junta fracasaran, y se hiciera necesario su relevo, Lanusse presentó a la Junta una cantidad de pasos a seguir que, finalmente, fueron un anticipo de lo que sucedería en pocos días³¹³. En esa reunión –tan trascendente para lo que vendría después- los tres Comandantes coincidieron en la necesidad de que el Gobierno delineara el plan político e implementara la urgencia de comenzar –de inmediato- el despliegue de la estrategia política. Los tres estaban de acuerdo en que el Gobierno nacional, en el proceso de elaborar ese plan, no debía excluir la posibilidad de consultar a figuras representativas de los distintos sectores de la vida nacional, pero excluían de la consulta a los voceros de los antiguos voceros partidos tradicionales y, aunque el acta suavizaba los planteos de Lanusse en la reunión, conservaba el concepto central de comprometer al gobierno a abrir el escenario político. Sin embargo, la elección del momento en que se anunciaría a la población se la reservaron al Presidente. Los resultados de la reunión –que duró cuatro horas- fueron comunicados de inmediato a Onganía por medio del Presidente de la Junta de Comandante, almirante Pedro Gnavi. Poco después Onganía le hizo saber que los recibiría al día siguiente –el viernes 5 de junio- un rato antes de la nueva reunión del CONASE. Ese viernes, a las cinco de la tarde, el Presidente rechazó de plano sus conclusiones y mostró sus discrepancias, diciendo que –según lo convenido en junio de 1966- él era el responsable personal del ejercicio del gobierno, por lo que se reservaba el derecho de adoptar los cursos de acción que considerara convenientes, finalmente les pidió que volvieran a estudiar el asunto, pero que, de todos modos, sus opiniones no tendrían más valor que un elemento de juicio más³¹⁴. La reunión del CONASE –que comenzó inmediatamente después- no mejoró la situación, habían estado presentes –a pedido de Lanusse- dos Ministros civiles: José Rafael Cáceres Monié (Defensa) y Conrado Etchebarne (Justicia)³¹⁵. *“El plan político son las políticas y las políticas son el plan político”* dijo el Presidente en la reunión y agregó: *“El plan político que ustedes quieren se hará cuando exista consenso sobre todo esto. Si hablamos de concretar las políticas que convenimos oportunamente, tenemos que hablar, más o menos, de diez años”*. Estaban en un callejón sin salida. El sábado 6 se estaba ante una muy grave crisis de gobierno y, aprovechando la boda de la hija de un general –en Bella Vista- Lanusse y Gnavi se reunieron y, en una total

coincidencia acerca de la inevitabilidad del relevo presidencial, esbozaron un plan de acción inmediato para la contingencia, porque el Presidente los había citado a una reunión para el próximo lunes 8 de junio a las once de la mañana. Aunque no habían logrado que el Jefe de la Fuerza Aérea se les uniera, la idea fundamental era que Gnavi se reuniera con sus altos mandos –temprano por la mañana del lunes 8- y les explicara la situación; lo propio haría Lanusse con el Ejército³¹⁶. El 8 de junio, a primera hora, se ponía en marcha el operativo que llevaría, irremediablemente, al derrocamiento del general Onganía. Los acontecimientos desencadenaron rápidamente: Onganía –a las 9 de la mañana- había inaugurado el Panel Internacional de Expertos en Recursos Hídricos en una dependencia de la municipalidad y regresado a su despacho en Casa de Gobierno para esperar a la Junta con la que debía reunirse a las once. A las 11.20 horas Radio Rivadavia daba lectura al primer comunicado del Comandante en Jefe del Ejército y –cuarenta minutos más tarde- se dio a conocer el primer comunicado de la Armada Nacional³¹⁷. Para evitar fisuras en la Junta, Lanusse y Gnavi, se reunieron con el brigadier general Carlos Rey –Jefe de la Fuerza Aérea- para sugerirle que evaluara - con su plana mayor- la situación de crisis institucional en que se encontraban y respaldara la decisión de ambos. Rey se reunió con su plana mayor por casi dos horas y, a las 13.30 horas, volvió al Ministerio de Defensa (donde estaba reunida la Junta) para comunicarle a Lanusse y a Gnavi que la Fuerza Aérea los respaldaba por completo. A las 14.15 horas, los tres Comandantes y el brigadier mayor Salas (Jefe del Estado Mayor Conjunto) firmaron un acta que estipulaba que: *“Por este acto, la Junta de Comandantes en Jefe, asume el Gobierno de la República Argentina y destituye como Presidente de la Nación Argentina, al señor teniente general don Juan Carlos Onganía”*. Simultáneamente –en un cruce de comunicados y decretos- el Presidente disponía el relevo de los Comandantes; el comunicado presidencial introdujo un párrafo sorprendente, decía: *“La era de los golpes y los planteos ha concluido y no volverá”*. Mientras, en la calle, el ciudadano común parecía indiferente a los sucesos; para la población esta era una pelea de palacio sin consecuencias para su vida personal. A esto se había llegado: una ciudadanía ganada por el desinterés de muchos, la apatía, el sarcasmo y la prescindencia. Onganía, dentro de la Casa de Gobierno, ni siquiera intentó una resistencia, ya había tomado la decisión de no consultar a las guarniciones del interior sobre la fidelidad a su persona: quizás el principal logro de su carrera política había sido restaurar el principio de verticalidad en el Ejército y era demasiado riesgoso conculcarlo, ni siquiera en beneficio propio. A las 22.30 entró al despacho presidencial el confesor de Onganía –el padre Mariano Castex- y poco después se supo que el Presidente presentaría su renuncia. Después de despedirse de sus colaboradores más cercanos, Onganía se dirigió –acompañado por su edecán naval- al Ministerio de Defensa³¹⁸. Después de una breve discusión con Lanusse, todo había concluido.

5.11. Apuntes y conclusiones sobre Onganía y su gobierno.

Pocos gobernantes argentinos pueden contar en su historial un cúmulo tan grande de fracasos y de frustraciones como Juan Carlos Onganía al finalizar –abruptamente- sus cuatro años de gestión. Había llegado al poder de la mano de un golpe militar incruento que se había propuesto modernizar la vida política, económica, social y cultural del país. La crítica formulada por el poder militar al gobierno civil, ponía énfasis en señalar los defectos del electoralismo partidocrático, origen de la división que afectaba a los argentinos; se denunciaba la infiltración marxista en la Universidad y la desvirtuación de los valores nacionales de la cultura. Pero la llamada Revolución Argentina tuvo una característica original dentro de los golpes militares en Argentina: las Fuerzas Armadas no gobernaron directamente, sino por intermedio del Presidente de facto, quién concentró responsabilidades que iban, desde la designación de los miembros del Tribunal Supremo de justicia a la designación de gobernadores de provincia, además de sancionar decretos con el nombre de leyes a modo de poder legislativo. Es decir, el Presidente concentraba la suma del poder público. El gobierno de Onganía contó –según encuestas que circularon una semana después del golpe- con un apoyo de la ciudadanía que estimaban en un 60 o un 70% de respuestas que apoyaban la decisión de los Comandantes³¹⁹. Declaraciones de políticos como Oscar Alende (UCRI) y Arturo Frondizi (MID) demostraron una expectativa optimista, que compartieron gremialistas como José Alonso y Augusto Vandor, eclesiásticos como el Cardenal Antonio Caggiano y hasta intelectuales de izquierda como Jorge Abelardo Ramos. Entidades empresarias como ACIEL y la SRA junto a sus voceros económicos, estaban de parabienes. El propio Perón se sumó –desde Madrid- a ese coro de elogios y calificó a Onganía como un brillante soldado y señaló que con el apoyo de todos los argentinos, el país saldría adelante en poco tiempo³²⁰. Pero, más allá de las declaraciones, los apoyos comenzaron a esfumarse a medida que cada agrupación política perdía la esperanza de controlar –en beneficio propio- el proyecto militar. El gobierno de la Revolución Argentina contó con ámbitos muy reducidos de reclutamiento de sus colaboradores civiles, sobre todo dentro de los grupos católicos integristas, que estaban en contacto con la oficialidad del Ejército a través del cursillismo, un ámbito que se prestaba al diálogo. Pero, ninguno de ellos, tenía experiencia en la militancia política de base y, la mayoría, representaba intereses concretos de grupos empresarios o religiosos afines al espíritu de las Fuerzas Armadas. Otra expectativa del gobierno fue el intento de lograr la colaboración de los dirigentes gremiales –de raíz peronista, pero rivales de Perón- es decir *alonsistas* y *vandoristas* y aprovechar la disposición al diálogo y a la participación de los burócratas sindicales para mantener la paz social. Sin embargo este esquema de gobierno sufrió varios embates desde los primeros meses de su aplicación. Desde la ortodoxia económica liberal se boicotearon los intentos del empresariado nacional –representado por Salimei, primer Ministro de Economía del régimen- y fue preciso reemplazarlo por Adalbert Krieger Vasena, artífice de una propuesta que convocaba a los grandes empresarios nacionales

y transnacionales. También desde el ángulo político –del liberalismo tradicional- se obstaculizaron los proyectos más o menos velados – del nacional-populismo- de hacer una experiencia del tipo fascista-corporativo en la Argentina³²¹. En 1967 y 1968 este proyecto militar alcanzó su mejor momento: había aumentado el Producto Bruto Interno (PBI) y las inversiones extranjeras, refrenando la inflación y domesticando a los jefes sindicales, que quedaron desalentados luego de la dura represión de la huelga portuaria y el fracaso del Plan de Lucha. Se consideraban proyectos importantes en el área de infraestructura, comunicaciones, energía y vialidad. El régimen estaba dispuesto a prolongarse pues –contrariamente a lo ocurrido en 1930, 1955 y 1962- no tenía siquiera previsto llamar a elecciones. El encumbramiento de Raimundo Ongaro en el Congreso Normalizador de la CGT celebrado en marzo de 1968 fue, quizás, la primera voz de alarma en el sentido de que el proyecto oficial tenía opositores enconados. La incipiente rebelión gremial se combinó con la reacción de los partidos políticos tradicionales, que habían sido excluidos por la Revolución Argentina: algunas de estas agrupaciones entraron en contacto con militares del ala liberal disconformes con el proyecto corporativo de Onganía; pero el Presidente frenó la ofensiva aparentemente destinada a encumbrar a Pedro Eugenio Aramburu como Presidente provisional y –después de algunos relevos de altos mandos en agosto de 1968- reafirmó su autoridad, de carácter casi monárquico. La falta de canales reconocidos de participación ciudadana se encuentra en los orígenes del Cordobazo: la más grave explosión social ocurrida en el país desde la Semana Trágica de 1919. Así, tras la aparente calma del *onganiato*, se había generado un proceso que hizo peligrar la estabilidad no solo de la dictadura militar, sino también, de la estructura económica capitalista en la Argentina. La nueva oposición –generada por el propio régimen- tenía su núcleo duro en el campo del sindicalismo antiburocrático y combativo, junto a los estudiantes universitarios y los intelectuales. La Revolución había hecho pasar a la clandestinidad a los partidos políticos tradicionales y –por lo tanto- congelado a sus dirigentes, que ensayaban diversas tácticas para *aggiornarse* y miraban, alternativamente, hacia alianzas eventuales con gremios y con sectores afines a las Fuerzas Armadas, mientras los nuevos líderes canalizaban las inquietudes políticas de la hora. En el campo del catolicismo argentino postconciliar debe buscarse la génesis de esta nueva oposición: uno de sus más notables representantes fue el Movimiento de Sacerdotes para el Tercer Mundo, formado en 1967 sobre la base de las propuestas formuladas en la Conferencia Episcopal de Medellín. Su proyecto político y social difería –esencialmente- del *integrista católico* que apoyaba a Onganía. Pero la vertiente más radicalizada del pensamiento católico postconciliar se expresaría en las publicaciones como *Cristianismo y Revolución*, cuyo primer número apareció en setiembre de 1966. La rigidez y la ausencia de diálogo se mencionaron constantemente como el punto débil de la administración militar iniciada en junio de 1966 y que –tres años más tarde- fue sorprendida por la ola de protesta social y de ensayo de lucha revolucionaria, ocurrida en Córdoba a fines de mayo de 1969. El Presidente emergió muy debilitado de esas

jornadas de protesta que evaporaron la confianza que la alta clase empresarial nacional y transnacional había depositado en su régimen y, fueron las divisiones internas de las Fuerzas Armadas las que prolongaron un año más el tiempo de Onganía. El 8 de junio de 1970, los Comandantes militares depusieron su gobierno: los años de Onganía terminaban amargamente, la sociedad se había rebelado contra el gobierno. Durante cuatro años, mientras la Argentina oficial hacía alarde de formalismo y etiqueta, los argentinos Vivían otras experiencias. Lamentablemente, parte de los hábitos autoritarios e intransigentes del gobierno militar habrían de potenciar una de las peores características de los años siguientes: la violencia y el recurso de la fuerza. De alguna manera, esas peligrosas execrancias fueron el subproducto menos querido de los años de Onganía.

Pero: ¿Por qué perdió el poder Onganía? ¿Cuál fue la lógica de su caída? La propia explicación del ex Presidente, así como la de varios de sus funcionarios, ha sido siempre la de personalizar el tema en Lanusse y achacarle las razones del derrumbe de su gobierno³²². Sin entrar a analizar el papel que jugó la ambición personal del general Lanusse, la evidencia indica que el Comandante actuó también en representación de su Arma, lo mismo sucedió en la Armada (téngase en cuenta que el almirante Gnavi fue quien tuvo los más duros conceptos para con Onganía) y –más tarde- hizo lo propio la Fuerza Aérea. Es decir, que el tema del derrocamiento excedió en mucho la sola decisión de Lanusse y fue representativa del más amplio espectro de los oficiales superiores de las tres Armas. Además, había en la posición de Onganía una contradicción en origen que nunca pudo superar: su gobierno se debía a la acción conjunta de las Fuerzas Armadas –es decir a la Junta de Comandantes en Jefe- que derrocaron al Presidente Illia; Onganía ni siquiera participo en los sucesos, sino que fue elegido por la propia Junta para detentar el poder, así que, Onganía funcionaba –de todos modos- como mandatario de la Junta, que era el verdadero origen del poder de facto. Distinto hubiera sido el caso si Onganía hubiese legitimado su poder por medio de un plebiscito popular –que seguramente le hubiera sido favorable- durante el primer año de su gobierno. Esto le habría permitido despegar de la tutela de la Junta ya que la fuente de su autoridad hubiese provenido de la voluntad popular y no del origen deslegitimado de la Junta³²³. Pero Onganía nunca se consideró un líder político y no fue proclive a someterse a la voluntad de las urnas, incluso en el punto más alto de su popularidad.

Probablemente, Onganía, haya sido el único presidente *de facto* del siglo XX argentino que, con la suma del poder público en sus manos y con su prestigio personal bien alto, pudo haber legitimado su poder al inicio de su gobierno y – superando las contradicciones internas - hubiera podido modificar la secuencia repetitiva de hechos políticos y económicos que llevaron a la interrupción de varios gobiernos constitucionales; para iniciar una etapa fundacional con la instalación de un nuevo orden consensuado. Su particular concepción monárquica del poder, la obcecación de su

pensamiento y su completa falta de sentido político no se lo permitieron. Creyó posible gobernar –simultáneamente- sin legitimidad y sin consenso, llevando al país a un punto de frustración igual o peor que el que había venido a sanar. Seguramente, dos hechos positivos se recordarán de su gestión y serán –sin duda- el impulso, el énfasis y la continuidad que puso en la política de obras públicas, es decir: la continuidad en la expansión de la inversión pública como generadora del desarrollo acelerado a través de la infraestructura vial, que integró el territorio nacional y el desarrollo de la energía hidroeléctrica y nuclear, que en el futuro posibilitaría el Sistema Interconectado Energético Nacional (SIEN) y la implementación de las Obras Sociales sindicales (Ley 18.610) un sistema único en el mundo que sustentaría, años más tarde, el bienestar de la clase trabajadora argentina.

Onganía fue un hombre común, al frente de una situación extraordinaria; pero, a veces, un hombre común que se encuentra ante una situación extraordinaria puede transformarse en un hombre extraordinario, no fue el caso de Onganía. En la comprensión de que la historia es una sucesión de acontecimientos, y cada acontecimiento es una sucesión de circunstancias y de instantes y cada instante es una concentración de múltiples posibilidades entre circunstancias múltiples, en las cuales también el azar puede tener una importancia decisiva; los hombres extraordinarios, son los que tienen esa capacidad de percibir ese huidizo instante de la historia –esto es el momento en que la decisión humana interviene en las circunstancias para elegir que senda seguir, sin tener certeza alguna acerca del resultado, pero a la vez sabiendo que no puede evitarse la elección- y comprender que –bajo su influjo- se puede modificar el desenlace de los acontecimientos para así cambiar el curso de la historia.

NOTAS AL CAPÍTULO CINCO

¹ El Presidente explico la salida de sus colaboradores de una manera diplomática y respetuosa, dijo: “*es el resultado del desgaste natural y, a veces inevitable, de la tarea de Gobierno*” y no como lo que fue: una falta de adecuación a la realidad, de capacidad negociadora y de imaginación para resolver los problemas que ellos habían venido a enfrentar.

² Así, el hombre que, pocos meses atrás, había declinado la oferta del Presidente para dirigir el BCRA, y que se desempeñaba por entonces como Embajador ante el GATT (relativamente un cargo sin mucha importancia) iba a ser elevado al cargo de Ministro de Economía y Trabajo del régimen: una especie de ***primus inter pares***.

³ Solá ocupaba en ese entonces la Secretaría Ejecutiva de la Asociación Latinoamericana de Libre Comercio (ALALC) y ya había sido colaborador de Krieger durante la gestión de este como Ministro de Hacienda (1956-1958) ocupando el cargo de Subsecretario de Finanzas.

⁴ Aguilar era un viejo amigo de Krieger y fue, justamente, apelando a esa amistad y a su solvencia técnica –muy necesaria en ese momento- que logró retenerlo en el cargo.

⁵ Para una mayor profundización sobre el tema ver: Bértora, Héctor Raúl; *Ensayos sobre la reforma impositiva*. Boletín del C.P.C.E.; marzo de 1967.

⁶ Bastaba con mirar hacia el pasado reciente para ver lo verdaderamente arriesgado del plan: a) En 1957, Roberto Verrier, sucesor de Eugenio Blanco, elaboró y expuso un plan de estabilización y saneamiento de la economía que no pudo ejecutar, porque el Gobierno, asustado por la impopularidad del plan, lo dejó renunciar. Justamente tocó a Krieger sucederlo, y entonces se esmeró en especificar: “vengo a ejecutar un programa ya trazado”; b) A fines de 1958 se decide un cambio sustancial de la política económica; Donato del Carril se sacrifica: devalúa fuertemente el peso, dimite y deja paso a Alsogaray.

⁷ El Ministro Borda había nacido en un hogar yrigoyenista, su padre Julio César Borda, había sido vice-gobernador de Córdoba en 1916 y luego había llegado a la Gobernación de la provincia en 1917 y hasta 1920, tras la renuncia del titular Eufasio Loza. Borda había sido llevado al sitial de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por el propio Onganía, quién lo nombró –apoco de asumir como Presidente, en julio de 1966- luego de conocerlo y haber conversado con él una sola vez.

⁸ Pocos días antes de asumir como Ministro del Interior y desde su sillón en la CSJ, envió a Sánchez Sorondo –director del periódico Azul y Blanco- una carta donde exhortaba a su viejo amigo a suavizar su oposición. Recuérdese, que al asumir Onganía, ese periódico lo había saludado con esta frase en su titular: “*paso a la Segunda República*”

⁹ El gobernador Iribarren elevaría -en marzo de 1967,- apenas sesenta días después de designado en el cargo- al Presidente una larga misiva denominada “*La Rioja existe y le asiste el derecho de no ser ignorada*” donde manifiesta que: “*es menester que La Rioja sea comprendida y gobernada con sentido de la realidad y que se le conceda un tratamiento de excepcional y decidido apoyo que, en justicia, la Nación le debe*”. Expresa en el mensaje que: “*la provincia continuará postergada y aislada del territorio nacional mientras no se adopten para ella soluciones de fondo, generosas y revolucionarias en su concepción, ágiles en su aplicación y adecuadas a sus necesidades y a sus actuales condiciones de trabajo*”. En su parte final el mensaje decía: “*En esta empresa me siento alentado por las expresiones de V.E. que, referidas a La Rioja, la calificaron como una mancha en el país, llamada a desaparecer si no se adoptan medidas adecuadas y prontas para integrarla al ser nacional*”. Acompañaba un ambicioso plan en el que articulaba soluciones de acción inmediata y acciones de largo alcance. Este proyecto convertiría a La Rioja en una especie de provincia piloto para la experiencia de desarrollo regional del gobierno nacional.

¹⁰ La Ley de Peaje significaba otorgar a concesionarios particulares tarifas para realizar, por su cuenta, obras públicas y luego rescatar la inversión de lo cobrado en el plazo acordado. Un sistema de financiamiento inconcebible dentro de la estructura económica y legal de aquel momento.

¹¹ Redes camineras, sanitarias, viaductos, tuberías de aguas y cloacas, conexiones territoriales como puentes y túneles, eran esenciales para posibilitar los planes de desarrollo del gobierno.

¹² Bernardo Loitegui era un antiguo y conocedor funcionario de Obras Públicas: asesor del Ministro Pedro Mendiondo en 1956, y Subsecretario en 1957, renunció entonces por discrepar con el lugar de instalación del futuro Túnel Subfluvial. En 1958 colaboró, fugazmente, con la Administración de Arturo Frondizi ocupando el cargo de Presidente de Obras Sanitarias para terminar dirigiendo la Secretaría de Transportes en 1959. Ya entonces, Loitegui, aparecía liderando el célebre *equipo de ingenieros* que rodeó a Pedro Eugenio Aramburu –por entonces candidato de UDELPA- con grandes posibilidades de llegar a Presidencia por el voto popular. Este grupo de técnicos conocido como el *equipo de ingenieros* había implementado un plan para renovar la infraestructura nacional y Loitegui ocupaba, por entonces, puestos de vanguardia. Es en ese medio donde conoce a Krieger y, desde entonces, fomentan una relación muy cercana.

¹³ La obra del Túnel Subfluvial estuvo largamente paralizada: recién en mayo de 1964 la administración de Arturo Illia aportó unos 600 millones de pesos que fueron rápidamente devorados por los mayores costos y los trabajos se detuvieron otra vez. Por fin, el Gobierno de Onganía decidió otorgar al túnel privilegios similares a los del proyecto El Chocón-Río Colorado y –el 02 de mayo de 1967- promulgó la Ley 17.257 que disponía la coparticipación del erario federal en las obras: la Secretaría de Hacienda financiaría un 50% del monto total de la obra y el resto quedaría a cargo de ambos Estados provinciales. Esta era una obra faraónica para la época y su construcción definitiva una decisión de geopolítica nacional.

¹⁴ A este respecto, debe tenerse en cuenta la sensible situación en la que se encontraban las tareas portuarias como consecuencia de la huelga –tal vez la más fuerte- a que se haya enfrentado el Gobierno como consecuencia del plan de racionalización.

¹⁵ En el operativo participaron 8 grandes dragas y 500 hombres, con un presupuesto de 600 millones de pesos y se extrajeron alrededor de 11 millones de mts³ de lino. Sin embargo, las obras deberán continuar, para adecuar las condiciones de navegabilidad a la capacidad de los nuevos buques de carga, cada vez de mayor tonelaje. Una de las inversiones imprescindibles fue la construcción de la barcaza 400C – construida en el país, que dejó expeditos los puertos de Rosario y Santa Fe.

¹⁶ El *Economic Survey* en un informe de fines de 1967 decía: “*la inversión en obras públicas y principalmente en viviendas, obras viales y obras de arte de ingeniería como los puentes, no son absolutamente productivas o lo son en muy largo plazo*”. Por esta razón es que esta usina de pensamiento estaba en contra de la aceleración de los trabajos y recomendaba moderar la inversión derramándola en varios períodos consecutivos para evitar el efecto inflacionario que producía el déficit fiscal. Obviamente este criterio retrasaría la ejecución de las obras y su puesta en marcha.

¹⁷ Al mismo tiempo que aparecía el informe del *Economic Survey*, desde el otro lado de la opinión, el *Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES)* en un trabajo coordinado por el economista nacionalista-desarrollista Aldo Ferrer –más tarde Ministro de Economía y Trabajo de Levingston- citaba entre los factores determinantes del crecimiento y la estabilidad de un país la transformación de la estructura del gasto público, con una sustancial elevación de la eficiencia de las empresas públicas, la restricción de los gastos corrientes en actividades de baja utilidad social, y un fuerte aumento de la inversión pública reproductiva y de los servicios esenciales como salud, educación y tecnología.

¹⁸ El FIEL, tenía, por entonces, un joven economista –Armando Ribas- que era uno de los investigadores jefe del Instituto que fue quien actuó como vocero del Instituto.

¹⁹ Este especialista en presupuesto y uno de los artífices del proyecto presupuestario era Lorenzo Sigaut, que trece años más tarde sería Ministro de Economía de otro Presidente de facto de muy corta actuación, el general Roberto Viola.

²⁰ En el largo proyecto de esta obra –que llevaba ya más de treinta años, sus orígenes databan de 1938- nunca se había llegado tan lejos. La constitución de Hidroeléctrica Norpatagónica (HIDRONOR S.A.) mediante el dictado de la Ley 17.318/67 contaba con mayoría estatal. El principal objetivo fue la construcción del Complejo El Chocón-Cerros Colorados a efectos de moderar las crecidas y regular los caudales de los ríos Limay, Negro y Neuquén y generar energía eléctrica para atender la demanda regional y, en especial, las zonas de Gran Buenos Aires y el Litoral. Como meta estatutaria se precisó: “construir y explotar obras hidráulicas y eléctricas en la región del Comahue (provincias del norte de la Patagonia) incluyendo las líneas de trasmisión e instalaciones complementarias destinadas a llevar energía desde las centrales hidroeléctricas hasta los sistemas y centros de consumo que se autoricen”. Su primer directorio contó en la presidencia con el general Olascoaga, pero el puesto clave fue el de su vicepresidente ejecutivo, el Ingeniero Raúl Ondarts que dejaba su cargo en la Subsecretaría de Economía. Las otras autoridades eran: Mario Aranguren, Julio Gonzales del Solar, Jorge Pegoraro y Enrique Ruiz Guiñazú; en su calidad de Directores Titulares; Emilio Van Peborgh y Carlos Ballester, como Directores Suplentes; Rafael Castro Videla y Humberto Bossio como Síndicos Titulares y Agustín Rodríguez Jurado y Carlos Mari como Síndicos Suplentes. Se eligió a la firma inglesa Gibb & Partners como consultores del proyecto y a las tres empresas argentinas asociadas a estos: Fernández Long y Reggini, Gandolfo y Cotta y Arturo Bignoli. El 3 de junio de 1966 –pocos días antes de su derrocamiento- el Presidente Arturo Illia había promulgado la Ley del Chocón (Ley 16.882). Un año y medio más tarde –el 18 de diciembre de 1967- se publican en el Boletín Oficial los estatutos de HIDRONOR S.A. y el 22 de diciembre se sanciona la Ley 17.574 que le otorga la construcción y explotación de la obra y la dota de recursos financieros para su funcionamiento: un impuesto al petróleo que se elabore en el país del orden del 3% y un impuesto a la electricidad del 5% sobre la tarifa vigente. Las represas en proyecto y construidas por HIDRONOR S.A. se agrupan en tres complejos: a) Chocón-Cerros Colorados, que incluye los diques de Portezuelo Grande y Planicie Banderita; b) Alicopa y c) Limay Medio. Las represas que integraban el complejo Alicopa (Alicurá, Piedra del Águila y Collón Curá) se ubicaron en la alta cuenca del río Limay y sobre el río Collón Curá. Por su parte el complejo Limay Medio está integrado por las represas de Pichi Picó Leufú, Michihuao y Pantanitos. El gigantismo de este emprendimiento queda evidenciado en la simple enumeración de las principales características de la Gran Obra –que insumió casi 10 años- que incluye una presa de hormigón de gravedad de 167 mts de altura máxima sobre la fundación de una extensión de 820 metros que insumió 3.5 millones de M3 de hormigón y una casa de máquinas con cuatro grupos turbo-generadores de 350 MW cada uno. La generación anual de energía del complejo de obras, con las cuatro turbinas funcionando, es de 5.5 millones de KW/h. El sistema de trasmisión eléctrica transportaba 500 KW y una extensión de 6.867 kilómetros. En la actualidad –con la totalidad de las obras ya en funcionamiento- el Complejo Hidroeléctrico cuenta con una capacidad instalada de 1.330 MW, que representa una capacidad de generación media anual de 3.600 GW/h, lo que equivale aproximadamente al 5% de la generación del Sistema Interconectado hoy. El conjunto de obras fue financiado por el Banco Mundial (BIRF) y por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y constituyó el préstamo más importante de estas dos instituciones internacionales de crédito público para un proyecto individual.

²¹ En términos presupuestario a moneda constante, la obra vial creció entre 1966 y 1972 un 166%.

²² Rougier, Marcelo; *Industria, finanzas e instituciones en la Argentina. La experiencia del Banco Nacional de Desarrollo 1967-1976*, Buenos Aires, Editorial de la Universidad Nacional de Quilmes (UNQUI), 2004. Para resaltar la continuidad del período, Rougier señala: **“Aunque el peronismo por razones políticas se niegue como heredero del gobierno militar, no por ello es menos cierto que está inaugurando obras que constituyen la fructificación de los esfuerzos hechos por aquel en el campo de la infraestructura : El Chocón y Atucha, los nuevos puentes que unen la Mesopotamia con el resto del país y el segundo Alto Horno de SOMISA, la planta de aluminio de Puerto Madryn (se refiere a ALUAR S.A. Aluminios Argentinos) y la de papel de Misiones, son ejemplos muy claros al respecto”**. Citado en p.232, nota 2. El destacado es nuestro.

²³ Rougier, Marcelo; *ob.cit.*, p. 106.

²⁴ Entre las empresas públicas, privadas y mixtas, en formación o creadas en esos años pueden mencionarse: a) Propulsora Siderúrgica (TECHINT); Alto Paraná S.A. (CELULOSA ARGENTINA); Papel de Tucumán (BRIDAS) y Álcalis de la Patagonia (ALPAT) (de conformación mixta, por la parte privada CIADASA); Ipako, petroquímica (GARAVAGLIO Y ZORRAQUIN) y Petroquímica General Mosconi (YPF y DGFM).

²⁵ Schvarzer, Jorge; *Estrategia industrial y grandes empresas; el caso argentino*, Desarrollo Económico, Nº 71, octubre-diciembre, 1978.

²⁶ El 51% del paquete accionario de PBB quedaba en manos del Estado Nacional distribuido en partes iguales entre, Gas del Estado, YPF y Fabricaciones Militares (FM). El 49% restante quedaba en manos privadas: 21.23% para Ipako, 10.62% para Electroclor, y el resto para Iton & Cia. Argentina el 9%; Indupa 5.5%; CIDASA 1.6% e Isaura 1%. El proyecto –finalmente- se concluyó en 1988 y terminó ocasionando graves problemas de abastecimiento y producción de algunos insumos como consecuencia de la tardía puesta en marcha de empresas satélite. Este ejemplo, permite ver que, más allá de la existencia de problemas en las finanzas públicas, las políticas destinadas a la creación de grandes empresas, tuvieron serios problemas de gestión que contribuyeron a erosionar la calidad de la intervención estatal.

²⁷ Por supuesto que para acceder a estas líneas de créditos blandos, las empresas, debían cumplir con una serie de requisitos, como ser: a) producir bienes destinados al abastecimiento adecuado del mercado interno; b) contar con buenos antecedentes y capacidad administrativa, técnica, económica y financiera acorde con el apoyo solicitado; c) participar con fondos propios en los proyectos para los que se solicitaba financiamiento; d) tener una política adecuada de distribución de utilidades, que permitiera el repago del préstamo en los plazos acordados y, que además, propendiera a privilegiar la capitalización de la empresa.

²⁸ Como ejemplo, baste señalar, que una de las líneas de redescuento otorgadas por el BCRA –por unos 25 millones de pesos corrientes de 1968- se utilizó para otorgar créditos a Cometarsa y SIAM, con el objeto de financiar la construcción de vagones de carga para Ferrocarriles Argentinos; a Dálmine- Siderca, para proveer cañerías a YPF y a FIAT para proveer coches de pasajeros y locomotoras a Ferrocarriles Argentinos. Con las empresas constructoras de obras públicas, sucedió otro tanto: el BIRA terminó financiando –con créditos de corto plazo- los descuentos de certificados de obra y los anticipos de acopio para la ejecución de los trabajos.

²⁹ Cfrt: Rougier, Marcelo; *ob.cit.*, pp. 141-142.

³⁰ Baste a modo de ejemplo que: Emilio Van Peborg era Presidente de Rigolleau S.A (1967-1968); Carlos Pérez Companc era Presidente de la Cia. Naviera Pérez Companc (1968-1971); Enrique Patrón Costa, Director de San Martín del Tabacal (1969-1970); Rodolfo Martelli, Presidente de Ducilo (1968-1969); Alejandro Bulgheroni, Presidente de Bidas S.A (1968-1970); Jorge de Carli, Presidente de Vialco S.A.(1967-1969). Todos formaron parte del Directorio de la entidad crediticia en algún período.

³¹ El contralmirante ingeniero Oscar Quihillat fue un director histórico de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA). Ocupó el cargo desde 1955 y permaneció en el –salvo durante el gobierno de Arturo Frondizi- hasta 1973, ese período incluyó al gobierno de Onganía que lo mantuvo al frente de la CNEA.

³² Sábato, Jorge; *Quince años de metalurgia en la Comisión Nacional de Energía Atómica*; Revista Ciencia Nueva, año III, Nº 15, Buenos Aires, 1972.

³³ El 17 de mayo de 1967 se puso crítico un símil del núcleo del reactor en el RA-2 con el objetivo de verificar la configuración de elementos combustibles. Completado exitosamente el ensayo, se prosiguió aceleradamente con los trabajos necesarios para poder inaugurar el RA-3 en la fecha estipulada: 20 de diciembre de 1967. El reactor fue inaugurado en la fecha establecida, con una potencia de 0.5 MW.

Durante 1968 se completaron detectores de radiación y blindajes y el segundo circuito de refrigeración, y en 1969 el reactor comenzó a operar regularmente a su potencia máxima de 2,5 MW. *A 40 años de la inauguración del RA-3: anécdotas, historias y algunas enseñanzas*; Revista de la CNEA, año 7, N° 27-28, julio-diciembre del 2007.

³⁴ Se trató de un reactor de 5 MW de potencia térmica. Todos sus componentes fueron manufacturados en la Argentina, incluyendo el 90% de la electrónica y el equipo de control. Con la puesta en marcha del RA-3 los radioisótopos, que antes debían importarse, comenzaron a ser producidos en el país. Pero quizá la faceta económica no sea la más importante: con el RA-3 el Estado garantiza que el mercado de radioisótopos se mantenga con el abastecimiento adecuado. Se trataba de una variable crucial para la salud pública. Como consecuencia de su puesta en marcha, 1971 fue el primer año en que la producción nacional superó a la importación.

³⁵ Como muestra de la importancia que se daba en esa época –tanto en el ámbito nacional como en el internacional– a los proyectos de uso de la energía atómica en forma pacífica, baste comentar una anécdota: A comienzos de la década del '60, como muchos otros países que se embarcaron en el desarrollo nuclear, la Argentina recibió el ofrecimiento de un subsidio de U\$S 350.000.- del estadounidense “*Atoms for Peace, Program Grants for Research Reactors*” (programa creado por la administración Eisenhower en 1953) para la construcción de un reactor de investigación de 5 MW a ser provisto por General Dynamics. La CNEA respondió que, en lugar de comprar el reactor, lo iba a diseñar y construir, ante lo cual los estadounidenses –uniendo escepticismo a un dejo de apuesta– resolvió que si la CNEA tenía éxito en su empresa, recibiría el subsidio. El acto de inauguración de la primera etapa del Centro Atómico Ezeiza, del cual el reactor RA-3 era la instalación más significativa, evidenció el contexto nacional e internacional del momento. Fue presidido por el Presidente Onganía, el Cardenal Caggiano, el gobernador de la Provincia de Buenos Aires, general Imaz, los presidentes de las Comisiones de Energía Atómica de Brasil, Israel y Chile y el representante de EE.UU Louis Saccio. Luego de las alocuciones de Onganía y Quihillat (presidente de la CNEA) Mr. Saccio hizo entrega del subsidio de U\$S 350.000.- para la operación del reactor RA-3 proyectado y construido enteramente en el país. La apuesta había sido ganada. Ver: *Revista de la CNEA*, año 7, N° 27-28, diciembre 2007.

³⁶ Rapoport, Horacio; *Una reseña de los reactores de investigación y su utilización en la República Argentina*. Trabajo presentado en el encuentro del décimo aniversario de la sección latinoamericana de la American Nuclear Society, Rio de Janeiro, Agosto 1985. www.scielo.org.ar

³⁷ Como ejemplo, podemos citar la línea de investigación en Isótopos Alejados de la Línea de Estabilidad, que se inició durante este período en el Departamento de Física Nuclear de la CNEA. Inicialmente se esperaba contar con la partición de los grupos de física teórica y física nuclear del Departamento de Física de la Facultad de Ciencias exactas y Naturales de la UBA, pero la intervención y éxodo posterior impidió la participación de estos últimos.

³⁸ En abril de 1964, la Comisión de Coordinación de Grandes Obras Eléctricas aprobó la realización del estudio de factibilidad de una central nuclear a ser instalada en la región.

³⁹ “*Energía Nuclear: Definición nacional*”, Confirmado, N° 139, febrero de 1968, p. 16.

⁴⁰ Sábato, Jorge; *Para el prontuario del Plan Nuclear Argentino*, Ciencia Nueva, año 1 N° 1, Buenos Aires, pp. 32 a 46, 1970.

⁴¹ Sábato, Jorge; *Energía atómica en Argentina*, Estudios Internacionales, Informe 1985, p. 332.

⁴² Sobre la actuación de Ronald Richter durante el primer gobierno de Juan Perón en la inmediata 2da post Guerra Mundial (1947-1952) puede verse: Mariscotti, Mario; *El secreto atómico de Huemul*, Planeta, Buenos Aires, 1985; Sorín, Daniel; *El hombre que engañó a Perón*, Sudamericana, Buenos Aires, 2008 y Primera Plana; *Un sabio atómico*, N° 240.

⁴³ Child, Joshep; *Geopolitical thinking in Latin America*, Latin America Research Review, vol. 14, Nº 2, pp. 89 a 111, 1979. Refiriéndose a la revista *Estrategia* sostiene: “Desde 1969, el Instituto Argentino de Estudios Estratégicos y Relaciones Internacionales (INSAR), bajo la dirección del general retirado Juan Enrique Guglielmelli, ha estado produciendo la que es –claramente- la revista más sofisticada y penetrante de geopolítica de América Latina y, posiblemente, del mundo”.

⁴⁴ Esta carrera se dirimió finalmente –a favor de Brasil- hacia mediados de los '80. Pero hacia 1968 el proceso integrador de la región mesopotámica (las provincias de Entre Ríos, Corrientes y Misiones) iniciado con la puesta en marcha de las obras del Puente Paisandú-Colón y el Túnel Subfluvial Hernandarias (que uniría Santa Fe con Paraná, Entre Ríos) hacia desaparecer el límite natural impuesto por el río Uruguay y el río Paraná frente a cualquier avance militar de Brasil, que anteriormente se suponía contenido por estas barreras naturales con la resignación territorial de la isla mesopotámica. La posibilidad atómica de Argentina imponía ahora un nuevo escenario de estrategia defensiva.

⁴⁵ La competencia por el liderazgo del Cono Sur de América Latina fue, definitivamente, ganada por Brasil a nuestro entender por la continuidad de sus políticas de Estado. La construcción del entramado de instituciones y organismos estatales ha estado íntimamente ligada a la sucesión de distintas estrategias de desarrollo económico, y a la adaptación de estas estructuras a los objetivos de crecimiento y evolución de la economía nacional. Sobre todo desde la implantación de la estrategia de industrialización sustitutiva a mediados del siglo XX, el Estado brasileño ha experimentado diversos procesos de creación y de reforma institucional encaminados a mejorar su capacidad. El objetivo de estas reformas fue –en primer lugar- implantar un extenso parque industrial nacional y, posteriormente, mejorar la productividad y competitividad de la economía nacional. A este respecto, cabe destacar el primer gran momento de construcción de las capacidades estatales en relación con la estrategia del desarrollo y que, -iniciado el proceso de ruptura con la etapa anterior- tuvo distintas consecuencias a lo largo del tiempo. Se trató del proceso iniciado tras la caída del proceso agro-exportador y el subsiguiente colapso del Estado liberal y oligárquico de carácter patrimonialista en la década de 1940. Desde ese momento y en forma continuada a lo largo de cuatro décadas, se generaron las bases institucionales para la instauración de un Estado fuertemente intervencionista y de profundo carácter desarrollista, con la creación de un conjunto de estructuras estables encaminadas a apoyar un exitoso proceso de industrialización por sustitución de importaciones. El segundo momento de construcción de las capacidades estatales en relación con la estrategia de desarrollo se produjo –precisamente- durante el intento por superar la crisis de la estrategia del proceso ISI en la década de 1980, que había sumido al Estado desarrollista en una situación de colapso y disfuncionalidad. La implantación de una nueva estrategia liberal –a partir de la década de 1990- trajo aparejado un proceso de reforma del Estado, dotándolo de los medios e instrumentos para –en lugar de intervenir directamente en la economía- ejercer funciones de regulador de los mercados. Por último, un tercer momento de construcción de las capacidades estatales en relación con la estrategia del desarrollo se produjo una vez superado el proceso de las reformas y los ajustes macroeconómicos de la década de 1990, con el proyecto de superación de las limitaciones impuestas por el paradigma neoliberal precedente, a través de una nueva agenda de crecimiento y desarrollo económico. En esta nueva etapa, ni el cambio de los objetivos nacionales acerca del desarrollo económico fue tan profundo, ni las estructuras y funciones del Estado sufrieron un proceso de reforma tan radical como anteriormente. Sin embargo, se exploraron nuevos mecanismos para aumentar la presencia y la eficiencia de la intervención pública, mediante la creación de nuevos organismos de coordinación entre actores públicos y privados, o el rescate del papel desarrollista de algunas instituciones públicas que habían sobrevivido al proceso de desmantelamiento del Estado del período anterior (p.ej. el BANDES). Así que la disputa por el liderazgo fue ganada por Brasil no por un hecho determinado, sino en función a los tres momentos descritos con la clara estrategia de etapas de rupturas y continuidades –llevado a cabo a lo largo de casi 50 años- que conformó un proceso estratégico de crecimiento y desarrollo único en la América Latina.

⁴⁶ Una señal, por lo general poco percibida de la intención de uso pacífico de la energía nuclear por parte de la Argentina, fue que –durante esas décadas- no se puso en marcha ningún programa de vectores misilísticos. No fue sino hasta bien entrada la década de 1990 que la iniciativa del Plan Cóndor de vectores misilísticos fue desarticulada por el gobierno de Carlos Menem frente a la presión estadounidense y a la política de relaciones carnales promovida por esa administración.

⁴⁷ El Tratado de Tlatelolco fue abierto a la firma el 14 de febrero de 1967, pero entró en vigor el 24 de junio de 1969. Este Tratado no entraba dentro del contexto del programa Átomos para Paz –promovido por el Presidente Eisenhower en 1952- ni de la OEA. Prohibía el desarrollo o producción de armas nucleares y la recepción e instalación de las mismas como también la instalación de bases con armas de ese tipo. La intención del Tratado fue crear una zona libre de armas nucleares en un contexto internacional signado por las negociaciones SALT de armas estratégica, cabezas nucleares y limitación de vectores misilísticos.

⁴⁸ La posición fue defendida en su argumentación por el delegado argentino Luis Santiago Sanz, bajo instrucciones cuidadosamente preparadas por el Canciller Nicanor Costa Méndez.

⁴⁹ El TNP fue firmado por la Argentina en julio de 1968, pero su vigencia data de 1970.

⁵⁰ El Tratado de Tlatelolco finalmente fue ratificado por la Argentina el 5 de agosto de 1992, bajo la presidencia de Carlos Menem en medio de la estrategia de política exterior de relaciones carnales con los EE.UU ideada por el Canciller Guido di Tella.

⁵¹ José A. Balseiro era –hacia 1953- un joven físico que –junto con los matemáticos Alberto González Domínguez y Luís Santaló- organizaron cursos de verano sobre reactores nucleares destinado a jóvenes investigadores. El presidente Perón le solicitó que formara parte –en 1952- de la comisión para auditar el Proyecto Huemul, dirigido por el controvertido físico alemán Ronald Ritcher. Balseiro fue el primer director del Centro Atómico Bariloche creado como consecuencia del *affaire Ritcher*. Después de su muerte en 1962 el Centro tomó su nombre.

⁵² La Ley Nº 16.912 determina la intervención de las universidades nacionales, quedando estas bajo la dependencia directa del PEN. El 21 de abril de 1967, se sanciona la Ley Orgánica de las Universidades Nacionales. En ella se establece como forma de gobierno únicamente la asamblea de profesores.

⁵³ Las reformas educativas confluyen dentro del proceso de racionalización administrativa general sancionado por la Ley Nº 18.586.

⁵⁴ Las provincias pasaron a controlar 15.598 establecimientos frente a los 13.899 que ya tenían. La reducción de la incidencia de la jurisdicción nacional se extendió hasta 1971. En este año bajo control nacional había 12.714 establecimientos y en control provincial 16.100 establecimientos educativos. En cuanto a la planta docente –entre 1968 y 1969- la Nación disminuyó su nómina en 5.995 trabajadores docentes. Hacia fines de 1970, la planta docente nacional estaba compuesta por 125.638 trabajadores y las provinciales ascendían a 139.927. En el mismo período el alumnado transferido alcanzó a los 2.333.861 estudiantes. Fuente: *Departamento de Estadística*, Ministerio de Educación; publicado en *Anuario CEIS, Nº 1*, Buenos Aires, Ediciones r y r, 2007.

⁵⁵ Aquí se evidencia la relación entre la idea política *comunitaria* y su articulación con el sistema educativo.

⁵⁶ El proyecto de escuela intermedia se encontraba teñido de intereses privatistas. Específicamente porque en su artículo segundo se establecía: “*el derecho constitucional de enseñar y aprender puede ser ejercido en forma privada*” lo que produjo la reacción del gremio docente, muy ligado a la educación pública. Sin embargo, durante los gobiernos de la Revolución Argentina, la participación del sector privado en el nivel primario solo se incrementó un punto porcentual (1%) en materia de gestión de establecimientos y solo tres puntos (3%) en control de alumnos y contratación de docentes. Para un mayor información sobre este tema, ver; De Luca, Romina; *Brutos y baratos. Descentralización y privatización en la educación argentina 1955-2001*; ediciones r y r, Buenos Aires, 2008.

⁵⁷ Un elemento es común de todos ellos fue su articulación con empresas, casi todas de carácter estatal o sindicatos; algunas de ellas fueron: ENTEL, Ferrocarriles del Estado, Sindicato de Luz y Fuerza, Sindicato Único de Petroleros del Estado (SUPE), Corporación Argentina de Productores (CAP).

⁵⁸ Recién el 11 de setiembre de 1969, el Subsecretario de Educación Emilio Fermín Mignone, expuso que, en lo sucesivo, se implementaría un nuevo programa de formación, perfeccionamiento y actualización docente. Casi un año demoró su aplicación y recién hacia fines de 1970 se comunicó el sistema alternativo que regiría para el ingreso a la carrera a partir de 1971. Así, la instauración de esta nueva modalidad dio lugar al surgimiento de los Institutos de Formación Docente y la aprobación de la nueva currícula surgieron como procesos convergentes en los últimos años de la década de los '60 y principios de los '70. Un elemento en sintonía residió en la provincialización de los Institutos, ya que, de hecho, recayó en las provincias y en lo concerniente a la Nación su concentración se dio en el sector privado dando lugar a la llamada tercerización.

⁵⁹ Cabe puntualizar que el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE) fue un producto de la *Alianza para el Progreso*. Recordemos que el documento fundacional de la Alianza sugería a los países miembros avanzar en la construcción de organismos que fomentaran el desarrollo económico y social. En la Argentina, durante su gobierno Arturo Frondizi firmó el decreto N° 7.290 del 30 de agosto de 1961 que instituyó el CONADE como organismo dependiente de la Presidencia de la Nación, cuya finalidad sería la programación y planificación de políticas para el desarrollo nacional. Los diagnósticos de la Oficina del Sector Educación fueron influyendo en políticas específicas que se desarrollaron en distintos niveles y modalidades educativas. Uno de los elementos centrales que se reiteraba en los diagnósticos –a lo largo de todos los gobiernos- eran los déficits organizacionales adjudicados a la ausencia de una ley general de educación.

⁶⁰ El término fue acuñado por la revista *Primera Plana* en su edición del 30 de julio de 1966.

⁶¹ Esta calificación inhabilitaba para la obtención de la ciudadanía, la ocupación de cargos públicos y el ejercicio de la docencia, obtener becas del Estado (para el caso de los estudiantes e investigadores), desempeñar cargos directivos en asociaciones profesionales o administrar radios, canales de televisión o imprentas, entre otras cosas.

⁶² La Ley Orgánica de las Universidades Nacionales no fue un producto improvisado. Intervinieron en ella diversas instituciones y organismos a través de estudios, diagnósticos y propuestas para su moldeado definitivo. Entre los que, sin duda, influyeron en el desarrollo del texto definitivo, pueden rastrearse: *Los recursos humanos de nivel universitario y técnico de la República Argentina*, elaborado por el Instituto Di Tella (1965); *Recursos humanos y desarrollo económico y social. Situación presente y necesidades futuras (estudio preliminar)* y *Diagnóstico de la situación educativa*, ambos elaborados por la Oficina del Sector Educación del CONADE (1966-1967) y *Education, Human Resources and Development in Argentina*, realizado por la Organización Europea para el Desarrollo Económico (OCDE). La Fundación Bolsa de Comercio también elaboró un informe denominado *Capacidades profesionales y aprovechamiento en la Argentina (1963)*. La Oficina del Sector Educación, elaboró –con posterioridad a la sanción de la ley- algunos estudios tales como: *Evaluación tentativa de carreras prioritarias para el desarrollo argentino*, *Bases para un plan integral de educación superior y universitaria* y *Universidad y desarrollo*.

⁶³ Esta elección sobredimensionada en las carreras tradicionales –sin embargo- tenía una explicación bastante sencilla: la mayoría de los jóvenes estudiantes solo conocía unas diez carreras de las 204 que brindaban las universidades nacionales. La solución era también bastante sencilla: las universidades debían enviar a los colegios secundarios una gacetilla informativa, garantizando así la difusión de las alternativas curriculares que brindaba las universidades. Esta sería también una manera de eficientizar recursos tanto humanos como financieros, centrando el sistema en las elecciones del alumnado informado en lugar de hacerlo solo sobre el rubro de presupuestos y gastos. En los informes de la OCDE se encontraba que, sobre un total de 80.4 miles de estudiantes de las carreras especializadas en ciencias sociales y letras, se registraban casi un 40% de deserciones.

⁶⁴ Extrapolando la neurosis anti-comunista, anti-castrista y anti-marxista que ocupó el clima político de la región en medio de un mundo bipolar signado por el enfrentamiento de la guerra fría, la reforma

universitaria no era más que el compilado del conjunto de recomendaciones, informes y diagnósticos de las oficinas dependientes de organismos internacionales, institutos especializados –europeos y norteamericanos- y organizaciones locales interesadas en el tema. El resultado estuvo basado en la mejor experiencia mundial sobre educación recogida hasta ese momento, tanto en Europa (por entonces occidental) como en EE.UU y Canadá. La enorme diferencia de origen con esos modelos se basó en la igualdad de oportunidades garantizada por la gratuidad del sistema, que nunca estuvo en duda y que constituía un derecho firmemente consolidado en el país. Muchos de los funcionarios del régimen eran el resultado de esa educación estatal libre y gratuita. Lo que incorporaba la reforma eran obligaciones razonables que originaba ese derecho, algunas de ellas: a) una prueba de nivel para el ingreso que consistía en un curso de nivelación con exámenes durante un cuatrimestre; b) mantener el carácter de alumno regular con la aprobación anual de un mínimo de materias o asignaturas; c) evitar el estancamiento crónico pautando un tiempo entre el ingreso como estudiante y el egreso como graduado de la carrera. El estado estudiantil es un pasaje, no un modo de vida; d) arancelado de las repitencias en los exámenes (a partir del segundo examen final no aprobado o cursada no aprobada) con un régimen de arancel que además era de carácter creciente y de bajo costo unitario; e) orientación de la currícula hacia carreras consideradas de interés nacional estratégico, que a su vez, serían promocionadas con sistemas de becas de trabajo. En pocas palabras, el sistema estaba dirigido a premiar el esfuerzo y poner en marcha el mérito, sancionando la laxitud y el estancamiento. Un proyecto que revoloteó sobre los despachos del Palacio Pizurno (Ministerio de Educación) sobre todo en el despacho de Mignone –por entonces Secretario de Educación- pero que no llegó a plasmarse en la reforma, era la idea que los graduados de las universidades públicas se comprometieran a permanecer en el país –trabajando en empresas del Estado o privadas afincadas en el país- por un período igual al término normal de su carrera. Si querían emigrar podían hacerlo, previa devolución al Estado –bajo la forma de un impuesto o gabela- de los costos estimados de su formación profesional. Es decir, devolverle a la comunidad –de alguna manera- el esfuerzo tributario que había realizado para su formación. Este también era un proyecto de avanzada para la región.

⁶⁵ “La singularidad de la guerra fría estribaba en que, objetivamente hablando, no había ningún peligro inminente de guerra mundial. Más aún: pese a la retórica apocalíptica de ambos bandos, sobre todo del lado norteamericano, los gobiernos de ambas súper potencias aceptaron el reparto global de fuerzas establecido al final de la segunda guerra mundial, lo que suponía un equilibrio de poderes muy desigual pero indiscutido”. Hobsbawm, Eric; Historia del siglo XX, Crítica, Madrid, 1998, p. 230.

⁶⁶ La política exterior de los EE.UU. combinaba las doctrinas de la *seguridad nacional* con la de las *fronteras ideológicas*; según esta teoría, si el enemigo ideológico estaba dentro de las fronteras geográficas, se justificaba combatirlo militarmente.

⁶⁷ Para un amplio y profundo conocimiento sobre la infiltración castro-soviética a través del adoctrinamiento, espionaje, inteligencia y entrenamiento militar de la insurgencia armada revolucionaria en Sud América y en la Argentina en particular durante la década de 1960, puede verse el muy completo trabajo de: Yofré, Juan Bautista; *Fue Cuba*, Sudamericana, Buenos Aires, 2014.

⁶⁸ Charles Meyer, Secretario Adjunto para Asuntos Interamericanos, señaló –en 1969- la sensible disminución de las actividades guerrilleras, así como de la subversión, en la región. El personal militar estadounidense en América Latina se vio reducido de 800 agentes en 1967 a 505 en 1970 y la ayuda militar se debía reducir a un 75% de la otorgada en 1966 cuando había alcanzado la cifra de 80.7 millones dólares. Meyer reconoció que la orientación de los programas de ayuda militar en el curso de los años sesenta había estado concentrada en el reforzamiento de la capacidad de los ejércitos latinoamericanos para afrontar los movimientos subversivos apoyados por la ideología comunista castro-soviética. Sin embargo, la derrota de la guerrilla del Che Guevara en 1967 frente al ejército boliviano, pareció llevar a

Cuba a seguir una política más cautelosa en lo que se refería a la creación de focos de insurgencia armada en el hemisferio.

⁶⁹ La desafortunada medida del Congreso estadounidense provocó un agrio debate entre el Ejecutivo y el Congreso, sosteniendo el primero que la limitación de venta de armas a América Latina implicaba la pérdida de un importante mercado de exportación, en un momento en que la balanza de pagos norteamericana sufría severas dificultades (1968-1971) y asimismo una posible pérdida de influencia en América Latina en provecho de países europeos y aun de la URSS. La competencia europea en un mercado tradicionalmente reservado a los EE.UU. llevó al gobierno de Washington a revisar la política seguida, y a la administración de Nixon a adoptar una actitud muy flexible, que culminó en julio de 1973, al ser derogada la restricción para la exportación de armas de alto contenido tecnológico a países en vías de desarrollo.

⁷⁰ Las tres líneas de acción de la Cancillería son mencionadas por: Peltzer, Enrique; *La política exterior del gobierno de Onganía*, en *La política exterior argentina y sus protagonistas (1880-1995)*, compilación de Jalabe, Silvia, Consejo Argentino de Relaciones Internacionales (CARI), Grupo Editor Latinoamericano (GEL), Buenos Aires, 1996, p. 206.

⁷¹ *Así que pasen dieciocho días*, Primera Plana N° 186, p. 20, Buenos Aires.

⁷² La iniciativa de institucionalización de una posible fuerza de paz –la FIP- dentro del área de la Junta Interamericana de Defensa (JID) que fuera sostenida con muy poca fortuna por la delegación argentina en la Conferencia Interamericana de la OEA realizada en Buenos Aires en 1967. Se opusieron –con energía- los gobiernos democráticos de Colombia, Chile, Venezuela y Costa Rica y se mantuvieron indiferentes las delegaciones de los EE.UU., Brasil y la mayor parte de los Estados allí representados. La votación puso de manifiesto el error de apreciación cometido por sectores de las fuerzas armadas argentinas, que habían postulado esa política en el convencimiento de que se podía contar con apoyos que, a la hora de la verdad, se diluyeron o nunca habían existido. Este episodio, unido al recuerdo del discurso pronunciado por el general Onganía en West Point (la emblemática Academia Militar estadounidense) el 7 de agosto de 1964, cuando aún era Comandante en Jefe del Ejército –durante la presidencia de Arturo Illia- dio pie para el encasillamiento de toda la política exterior del gobierno militar bajo la etiqueta de las llamadas fronteras ideológicas.

⁷³ *El mundo. OEA: Ser o no ser*, Confirmado N° 119, setiembre de 1967, p.19, Buenos Aires. Ver también: *Cancillería. Las razones de Costa Méndez*, Confirmado N° 90, marzo de 1967, pp. 17-18

⁷⁴ Hay que recordar que los gobiernos de Alemania Occidental y Francia no entendieron la *détente* en los mismos términos que la administración estadounidense de Nixon y Kissinger. Los líderes europeos vieron en la *détente* una oportunidad para intensificar los vínculos comerciales con la URSS y Europa del Este, debilitando la estrategia de vinculación, por la cual Kissinger quería contener la expansión de la URSS y llevarla a negociar en el terreno de los armamentos nucleares, utilizando como arma su vulnerabilidad tecnológica y económica (negociaciones SALT I y SALT II). Tampoco coincidían los intereses de seguridad franco alemanes, por un lado, y los estadounidenses por el otro, en las actitudes a adoptar frente al conflicto árabe-israelí de 1973.

⁷⁵ Declaraciones del Canciller Costa Méndez a Primera Plana, citadas en: *Diplomacia: Peregrinación a las fuentes*; Primera Plana N° 330, abril de 1969, pp. 9 y 10.

⁷⁶ En este campo, debe recordarse lo explicado anteriormente sobre la ejecución –por parte de Argentina- de obras de infraestructura que producirían -a su finalización- una integración territorial de la región mesopotámica que alteraría la concepción geopolítica de contención o frontera natural por la insularidad de ese territorio frente a un posible avance brasileño. La integración territorial tenía necesariamente como contracara un aflojamiento de las tensiones con Brasil, o lo que era mejor, una clara alianza política y comercial con él.

⁷⁷ Argentina tardó en reconocer al nuevo gobierno peruano de Juan Velasco Alvarado en 1968. Si bien este no era un régimen ideológicamente cercano a la orientación de Onganía, se logró un acuerdo importante en lo relativo a las 200 millas de soberanía marítima.

⁷⁸ El desencuentro con Brasil –generado principalmente por el predominio en la Cuenca del Plata- tuvo su origen en la represa de Itaipú. En los inicios del proyecto (durante el gobierno de Illia) había sido un emprendimiento conjunto entre Argentina, Brasil y Paraguay, pero se convertiría en un conflicto con la llegada de los militares al poder en Argentina y Brasil (con apenas 2 años de diferencia). Finalmente, Argentina –en una decisión que finalmente lamentaría- se alejó del emprendimiento hidroeléctrico. Argentina y, –ya fuera del proyecto- comenzó a tomar una actitud defensiva y a construir una jurisprudencia sobre la utilización de los recursos hídricos de cuencas compartidas. El Canciller Costa Méndez cerró el proyecto de la Cuenca del Plata (en abril de 1969) iniciado por el gobierno radical. Posiblemente esta haya sido una de las decisiones de política exterior y geopolítica más equivocadas de la época. En la *Declaración de Asunción* -firmada en junio de 1971- Brasil acepta sus responsabilidades por el perjuicio sensible que pudiera ocasionar con los recursos hídricos compartidos. Pero, el problema suscitado llega aun hasta estos días.

⁷⁹ Cabe recordar que Nicanor Costa Méndez se había alejado del gabinete del Canciller de Frondizi – Miguel Ángel Cárcano- precisamente por no compartir la posición del gobierno desarrollista que, esgrimiendo el *principio de no intervención*, se abstuvo en la votación que excluyó a Cuba de la OEA en la Conferencia de Punta del Este en enero de 1962.

⁸⁰ En 1970 el presidente Nixon había manifestado claramente que hacia donde fuese Brasil iría el resto de Latinoamérica.

⁸¹ Bajo la apariencia del acuerdo, la verdad es que en los países más significativos que podrían haber puesto en marcha un proceso serio de integración regional (la ALALC surgió del programa del Tratado de Montevideo de 1960) no existía la voluntad política indispensable para ello. Ni la Argentina ni Brasil ponían empeño para lograrlo. El punto de vista de la diplomacia brasileña era ya conocido. La ALALC padecía de un pecado original insalvable: su excesiva amplitud abarcadora de realidades tan diversas y tan alejadas como eran las de México, Colombia y Venezuela. Aun la presencia de Chile y Perú –desde ese punto de vista- podía ser considerada como prematura. Lo ideal habría sido comenzar por un convenio entre Argentina y Brasil al que, muy poco a poco, se podrían haber incorporado algunos otros países. La posición argentina, en cambio, desde los comienzos del proyecto, había abierto las puertas a todos los países latinoamericanos con el argumento jurídico de la igualdad de derechos y con el consabido recurso de la retórica idealista. En la coyuntura de 1966 las cosas ya no se podían enmendar y el Grupo Andino (formado por seis países con predominio de regímenes democráticos) mostró una mayor voluntad integradora. Este grupo terminó de consolidarse cuando el gobierno de Eduardo Frei comprobó –en los comienzos de la gestión de Onganía- que iba a ser muy difícil avanzar con más velocidad en la integración con Argentina y optó por el entendimiento –económicamente mucho menos interesante, pero políticamente más viable- con los Estados del área andino-pacífico.

⁸² Este conflicto se venía desarrollando lenta pero firmemente desde los primeros años del siglo, con algunos incidentes menores como el del islote Snipe en los inicios de la presidencia de Arturo Frondizi. Pero la aplicación de la tesis de las 200 millas otorgó a la disputa sobre las tres pequeñas islas una importancia inusitada, dado que a lo largo de sus costas se debería trazar la línea de base para la amplia zona de jurisdicción marítima del país, al que las islas, en definitiva pertenecieran. En marzo de 1970, el CONASE emitió instrucciones que encuadraron la etapa decisiva de las tratativas y que habrían de llevar al gobierno de Lanusse al arreglo de Londres en 1971 que culminaría en el arbitraje británico de 1977.

⁸³ *Expuso Martín la política exterior, La Nación*, 5 de enero de 1970, pp. 1 y 7.

⁸⁴ *Declaraciones del Canciller Martincitadas en Clarín* 28 de abril de 1970, p. 19.

⁸⁵ Todo comenzó en agosto de 1966, cuando IKA amenazó con despedir al 20% de su personal debido a la retracción de las ventas. SMATA amagó con ocupar la planta industrial de la firma en Santa Isabel, en los suburbios de Córdoba. Las partes habían llegado –en aquel entonces- a una solución transaccional: IKA se avino a postergar los despidos hasta principios de 1967 y los obreros aceptaron una suspensión por una semana.

⁸⁶ Estas manifestaciones obreras intranquilizaban mucho a la ciudad, siempre sensible desde la revuelta estudiantil de setiembre de 1966, donde fue muerto Santiago Pampillón, un delegado gremial de SMATA.

⁸⁷ El gobernador se entrevistó con el Secretario de Trabajo –Rubens San Sebastián- firmemente comprometido con la política negociadora. El Secretario se contactó inmediatamente con Torres y McCloud (presidente de IKA). Este aceptó reincorporar a los 4.000 huelguistas, pero no toleró la incorporación de primeros 950 cesanteados.

⁸⁸ El martes 14 de febrero, al cabo de una reunión en la Casa Rosada que presidió Onganía, el CONASE se expidió con la amenaza de tomar represalias escalonadas, proporcionales a los disturbios que se originen, y dispuso interrumpir toda clase de diálogo con las autoridades de la CGT. Debe recordarse que los sindicatos –que tenían una particular posición al interior del movimiento peronista- fueron una de las instituciones no prohibidas por el gobierno de la Revolución Argentina.

⁸⁹ En una conferencia que congregó a los 105 Secretarios Generales –ese 16 de febrero- se reflejó claramente el temor a que *el Plan de Lucha* fuera arrollado por la embestida gubernamental. Sobre detalles del *Plan de Lucha*; ver; Dawyd, Darío; *Sindicatos y política en la Argentina del Cordobazo. El Plan de Acción de la CGT de 1967, el escalonamiento represivo y la normalización económica*, editorial Pueblo Heredero, Buenos Aires, 2011, pp. 40 a 45.

⁹⁰ Quizá por eso, los dirigentes mostraron una fuerza que no tenían y el jueves 16 de febrero dieron a conocer un documento que ratificaba el Plan de Acción. Señalaba que el orden interno había sido subvertido por la presión de intereses monopolistas y no por la CGT. *“Esas tendencias vuelven a manifestarse en el gobierno al decidir interrumpir el diálogo con las organizaciones sindicales y amenazar con la represión”* decía el comunicado. *“La CGT tiene el deber de indicar al gobierno que los sectores antipopulares encubiertos en sus filas están arrastrándolo a su total aislamiento del resto de la comunidad”* concluía. A un tiempo, el vandomismo sin Vandor, se reunía con la asistencia de Castillo, Peralta, Coria, Cavalli, Izzeta y Cardoso y estimaron, contra lo que ellos creían, que Onganía se seguía fortaleciendo y por ello era mejor pactar antes que los destruyeran definitivamente. El poder de fuego del gobierno se veía arrasador.

⁹¹ En el plenario, Ángel Bono (La Fraternidad) pidió que ni se mencione la palabra tregua. Antonio Scipione (UF) comentó por lo bajo: *“me cortarían las dos manos si Bono no está en las tratativas”*. Más gráfico fue Vandor cuando le comentó a otro metalúrgico, mientras mostraba el salón repleto de secretarios: *“todos estos vinieron porque creían que la tregua era un hecho; fijate las caras de miedo que tienen ahora”*.

⁹² Este bagaje de posibilidades persuasivas fue explicitado en la mencionada reunión del CONASE del martes 14 de febrero. El jefe de la SIDE –general Eduardo Señorans- hizo una apreciación de la situación social de la que *“surgía la necesidad de tomar medidas drásticas”*. San Sebastián brindó un informe que parte de los presentes consideraron desapasionado y otros algo flojo, el comenario fue: *“San Sebastián fue desbordado por la situación de extrema gravedad; el solo es un hombre en la negociación, por ahora no es la solución”*. El Ministro del Interior –Guillermo Borda- opinó que lo mejor sería decretar el Estado de Sitio para que no se diera la impresión de estar atacando exclusivamente a la CGT, el presidente lo desestimó de plano. El ministro de Defensa –Antonio Lanusse- abogaba por la intervención de la central obrera. Krieger participaba de la estrategia del escalonamiento cuidadoso, interpretando en esta posición también al ausente Canciller Costa Méndez. A pesar de la redacción del comunicado final por parte de Osiris Villegas (Secretario del CONASE) decidiendo interrumpir el diálogo, Borda y Díaz Colodrero no muy de acuerdo con el texto, lograron introducir un párrafo conciliador que decía: *“La Revolución Argentina no fue*

hecha contra la clase trabajadora". La frase contó con el apoyo decidido del presidente, razón suficiente para que los sectores duros (Señorans) no pudieran excluirla del documento.

⁹³ Sobre la ley de "servicio civil de defensa" ver; *Primera Plana* N° 219 del 7 de marzo de 1967, p. 14.

⁹⁴ El documento decía: *"La condición de un dirigente responsable es saber avanzar a la cabeza de sus hombres, y saber replegarse cuando la batalla se ofrece desfavorable. Existen en el país muchos que quisieran empujarnos a una política tremendista, de ruptura y enfrentamiento: si nos dejamos presionar por ellos iremos a la lucha aislados, y el aislamiento es la derrota"*. Pero, una vez puestas en marcha las medidas recomendadas por el CONASE, Fernández –un correntino de 43 años foguista de la flota petrolera estatal y directamente vinculado a Frondizi- advertía que *"había que cambiar de táctica frente a esta nueva coyuntura. Hay que convocar a los sectores sociales afectados por la recesión y reconsiderar nuestra táctica manteniendo los 5 puntos de nuestras reivindicaciones, hay que hacer un alto. En los hechos esto significa un ofrecimiento de reapertura del diálogo. Si el gobierno lo rechaza, será suya toda la responsabilidad, pero entonces, frente a ese rechazo, el país entero estará de nuestro lado"*. Los 5 puntos reivindicatorios a los que se refería Fernández eran: plena ocupación, mantenimiento del poder adquisitivo, contención del costo de vida, participación obrera en las decisiones de política económica y en la reglamentación del trabajo. CGT, reuniones del Comité Central Confederal, documentos, discursos y alocuciones, Buenos Aires, 1967.

⁹⁵ La derrota de la CGT y su Plan de Lucha frente al gobierno de Onganía fue –sin duda- la más dura capitulación –sino la única- frente a un gobierno en la vida institucional de la central obrera. Indicó también – en los años posteriores- su enorme capacidad de reorganización.

⁹⁶ Solo ellos contaban con representantes en el Consejo Directivo (CD). La ortodoxia peronista había rechazado esos cargos en octubre de 1966 y el comunismo no había logrado ninguno.

⁹⁷ Según los términos del Decreto 969 (reglamentario de la Ley de Asociaciones Profesionales) el Congreso no podía reunirse antes de los 30 días a partir de la fecha de citación. De esta manera se abre otro paréntesis durante el cual se negociará la integración del nuevo directorio, o acaso, la permanencia del saliente con ciertos cambios. Finalmente, el Congreso se realizaría durante 1968 y, realizado dos veces, consagraría a Raimundo Ongaro en la CGT de los Argentinos y a Vicente Roque en la CGT de Azopardo.

⁹⁸ Ninguno de ellos pensaba que Francisco Prado pudiera mantenerse sin introducir reformas en el C.D. Proponían una renovación a largo plazo. Uno de los dirigentes –Miguel Gazzera- proponía conducir la crisis y no pervertirla. *"Si renunciamos ahora –como quieren los independientes y las Organizaciones de Pié- daríamos la sensación de abandonar el barco que se hunde"* decía. *Primera Plana* N° 221, 21 de marzo de 1967, p. 12.

⁹⁹ Estas órdenes en realidad no eran otras que: provocar al gobierno e inducirlo a golpear, con una fuerza tal que destruyese u obligase a fracasar a Prado. El desprestigio de este –según los ortodoxos- haría caer al Directorio de la CGT en manos de José Alonso.

¹⁰⁰ Justamente, en febrero de 1967, Perón designaba a su nuevo delegado en Argentina: Bernardo Alderete, en reemplazo de Héctor Lannes. Con él Perón efectuaba un nuevo avance contra lo que quedaba de la hegemonía vandorista, herida tras la ruina del Plan de Acción. Así pensaba concretar la unidad de las agrupaciones de la Juventud Peronista (JP) para comenzar el *trasvasamiento generacional*. Perón, en una carta a Raimundo Ongaro – fechada el 12 de enero de 1967- afirmaba que: *"frente a la defección de muchos, que no tienen incentivos porque no hay cargos a la vista o porque temen a la represión o están cansados de la larga lucha, pienso en la necesidad de un trasvasamiento generacional, con el fin de poner en acción a la Juventud Peronista"*.

¹⁰¹ Sorprendentemente, encontraron esa línea negociadora en la persona del ministro del Interior – Guillermo Borda- quien el viernes 10 de marzo recibió al dirigente de Luz y Fuerza Juan José Taccone, a

quien dijo: *“El gobierno no tiene intenciones de hacer de esto (el fracaso del Plan de Acción) una victoria sobre la clase obrera”*. El lunes 13 el Ministro recibió a Prado y a Cavalli. Prado al salir del ministerio declaró al periodismo que: *“la reunión había sido una tentativa de la central obrera por recuperar el diálogo con el gobierno nacional”*. Ver; Primera Plana, Nº 221 del 21 de marzo de 1967, p. 13.

¹⁰² En el caso de encontrar una actitud conciliadora y dialoguista en el gobierno, la idea era integrar un *Consejo Económico y Social* juntamente con empresarios y técnicos. Esta idea había sido fogoneada, hacía algún tiempo, por el Secretario de Gobierno –Díaz Colodrero- por el general Señorans y por el primer Ministro del Interior del régimen, Martínez Paz.

¹⁰³ Como otra muestra de flexibilización el Ministro del Interior, de modo inesperado, ante corresponsales extranjeros, el jueves 16 de marzo, tomo la bandera de la pacificación y dijo: *“No asume (el gobierno) postura de triunfador ni es su propósito hacer sentir sobre ningún sector el peso de su condición de tal. Insiste, simplemente, en cumplir sus planes políticos y económicos sin admitir presiones”*

¹⁰⁴ El llamado *Consejo de los 20* estaba integrado así: Por los *vandoristas*: Jorge Luján, Alfonso Millán, José Notaro, Vicente Roqué, Heber Urruti, Antonio Vitale y Carlos Rodríguez. Por los *alonsistas*: Carlos Cabrera, Otto Calasse, Agustín Cuello, Pedro Agostini y Enrique Micó. Por los *independientes*: Marcos Almozny, Perfecto Barcia, Benito Bruzzone, Hipólito Ciocco y Amancio Pafundi. Por los *no alineados*: Albino Dorato, Héctor López y Alberto Rampelberg. Se leía en las designaciones una voluntad apaciguadora.

¹⁰⁵ La delegación enviada a Ginebra por el movimiento obrera estaba formada por: Maximiliano Castillo, Francisco Racicky y Roque Azzolina. Llevaron la consigna de mantener –a toda costa- la tregua pactada con el gobierno. Limitarían su actuación a una enumeración –despojada de toda crítica- de las medidas más erosivas para los gremios. Ver; *Primera Plana* Nº 233 del 13 de junio de 1967.

¹⁰⁶ Así las cosas, el martes 20 de junio, en Ginebra el delegado Maximiano Castillo, en un juego de ingenio, con palabras que no hirieran y con un juicio que no desbordara en ponencias de censura la actitud del gobierno, en la espera de un reconocimiento a esta actitud, el delegado recitó las acusaciones de estilo para salvar honrosamente la presencia sindical en la Conferencia.

¹⁰⁷ La tregua sustentada en la promesa de no agresión no pudo durar. Por la presión de sus bases, los, metalúrgicos y los textiles la rompieron por las cesantías que se registraban en ambos gremios. La Comisión de los 20 siguió funcionando con la prórroga de su mandato y, como sabemos, el Congreso fue finalmente citado para la última semana de marzo de 1968.

¹⁰⁸ Rubens San Sebastián (44 años, casado, dos hijos) era nieto de Guillermo San Sebastián, fundador de La Fraternidad y funcionario de la Secretaría de Trabajo desde 1956. Cfrt; *Primera Plana* Nº 256, p.14. *Habla San Sebastián*.

¹⁰⁹ Las reglas del juego eran: cada firma presenta a Trabajo sus planes de ajuste, luego San Sebastián fija los puntos que podrían discutirse y –previo acuerdo de las partes- obreros y empresarios debatirían durante 60 días la futura organización. Si no había unidad de criterio dirimía la Secretaría.

¹¹⁰ Juan José Taccone – líder de Luz y Fuerza e ideólogo del *sindicalismo de participación*- era un ferviente partidario del régimen. Fue un aliado eficaz en los trámites previos al derrocamiento de Illia. El símbolo de la alianza entre los sindicalistas –con Taccone a la cabeza- y los altos mandos, fue una reunión que se realizó el 18 de marzo de 1966, a tres meses del golpe de Estado, en la sede de L y F en la calle Callao, a la que asistieron –entre otros- el general Alejandro Agustín Lanusse y Augusto Timoteo Vandor.

¹¹¹ La Resolución Nº 9/68 de la Secretaría ordenaba también a las empresas a dialogar con sus operarios en materias tales como: la reorganización de las oficinas y depósitos, los cursos de capacitación, el sistema de servicios sociales y las normas de enlace entre patrones y obreros.

¹¹² San Sebastián estuvo en su despacho durante toda la última semana de diciembre (semana de vacaciones ministeriales) forjando el plan de restitución de personerías que alcanzaría a: metalúrgicos, textiles, químicos, canillitas, azucareros y prensa. También, en cumplimiento de una Resolución de OIT, daría participación a los estibadores en la reorganización del SUPA. La idea de la Secretaría era lograr la normalización de los sindicatos en cuestión ante fines de marzo, fecha de citación para el Congreso Normalizador. Las autoridades esperaban –con estas medidas- que en las bases de los gremios normalizados estallara una actitud *participacionista*.

¹¹³ La posición *vandorista* y *colaboracionista* de postergación –en acuerdo con San Sebastián- no era descabellada: siete importantes gremios carecían de personería gremial o estaban intervenidos: Unión Ferroviaria, Federación de Obreros y Empleados Telefónicos, Federación de Obreros Químicos, Unión Obrera Metalúrgica, Asociación Obrera Textil, Federación Tucumana de la Industria del Azúcar y Sindicato de Prensa. Existían además numerosos sindicatos de primero y segundo grado que debían adaptarse aún al régimen del decreto 969/66. Cf. *Primera Plana* N° 265, del 23 de enero de 1968, p. 15.

¹¹⁴ El hecho era que Krieger mantenía su posición del no a los aumentos no pautados, según lo disponía la Ley 17.224 de congelación salarial. En una reunión en el despacho de Onganía –el jueves 8 de febrero- para discutir la marcha de las negociaciones obrero-estatales sobre racionalización en las empresas del Estado, a la que asistieron –además del Presidente- el Secretario de Energía (Luis Gotelli) y el Secretario de Trabajo, acompañado del Subsecretario Héctor Villaveirán y el Director de Relaciones Jorge Spada. En la reunión prevaleció la posición de Krieger y la facción *participacionista* con su adalid –Juan José Taccone- se vio seriamente comprometida porque se quedó sin oferta para sus afiliados. El gobierno jugaba así la suerte –dejándolo sin sustento- del sector gremial que lo que lo apoyaba.

¹¹⁵ Además, San Sebastián presidiría la Asamblea General de la OIT –que se reuniría el próximo 5 de julio en Ginebra- pero el manejo de la Asamblea anual se haría imposible si los delegados obreros locales se oponían a las posturas de San Sebastián o desprestigiaban su gestión. La única solución posible era designarlos de oficio (entre los *colaboracionistas*) antes que arriesgarse a la posibilidad de obtener una delegación obrera de dudosa fidelidad.

¹¹⁶ El martes 26, el Colegio Electoral Metalúrgico, había reelegido a Vandor como Secretario General por dos años más. *El Lobo* (apodo con que se conocía a Vandor, por su astucia negociadora) cosechó 165 de 171 sufragios posibles. Entonces libre ya de luchas internas- se dedicó al inminente Congreso. El miércoles 26 se reunió –en la sede de los molineros- con José Alonso (textiles), Tomás Uncal (mercantil) Juan Racchini (aguas gaseosas), Maximiano Castillo (vidrio), March y Ángel Buono (maquinistas ferroviarios) y con el anfitrión Vicente Roqué (molineros). Ese día, Vandor computaba 254 sufragios para los suyos y cerca de 230 para los opositores. Ahora bien, el Congreso tenía 771 delegados teóricos, muchos de ellos delegados de pequeños gremios del interior del país, en general no alineados. ¿Cómo asegurarse el triunfo? Era necesario obtener de Lorenzo Pepe (ferroviario) líder de los impugnados (los gremios con personería cancelada) –pero que igual asistían al Congreso- la seguridad de que no reclamarían su derecho a voto. También ese día el *vandorismo* recibió un duro golpe: ocho sindicatos con 55 delegados –todos discípulos de Taccone y por tanto *colaboracionistas*, que votaban con el *vandorismo*- optaron por no presentarse a la reunión. Consideraban –igual que San Sebastián- que era sumamente riesgoso confiar en la promesa de Lorenzo Pepe. El Congreso podía descontrolarse y los opositores apoyados por una mayoría circunstancial, convalidarían una elección que después, seguramente no aceptaría la Casa Rosada. El jueves 28 a las once de la mañana, se abrieron las puertas del cine Alba (sede del Congreso) en los fondos del local de la UTA, y los 64 delegados ferroviarios –a las órdenes de Lorenzo Pepe, Antonio Scipione y Víctor Vázquez- forzaron el ingreso al local, seguidos por los telefónicos liderados por Julio Gullán. Todos rebasaron los controles y no se pudieron acreditar credenciales. Pero: ¿Qué había fortificado de ese modo a Lorenzo Pepe? Dos cosas: las instrucciones de Perón que había indicado –en carta a Raimundo Ongaro- la creación de una CGT opositora que resistiera al oficialismo y la condena a Eustaquio Tolosa (44 años y padre de una hija casi ciega, condenado a 5 años de cárcel) dictada por el juez Miguel Incháusti el jueves 21 (más tarde, en mayo, Onganía –en muestra de buena voluntad- le concedería el indulto fogueado por San Sebastián). Los directivos (Comisión de los 20)

accedieron a reconocer la presencia de los gremios impugnados. Al finalizar la votación para elegir a la Comisión de Poderes, surgió una Comisión netamente opositora. También el Congreso había entrado en la ilegalidad al conceder el voto a los siete gremios sin personería. Así el Congreso ingresó en el área condenada por San Sebastián y, desde allí los hechos se precipitaron. Vandor vio que se descontrolaba el Congreso y entonces dijo: “*No convalidaremos con nuestra presencia el Congreso*” y tomó el camino de la impugnación.

¹¹⁷ El martes 2 de abril, Ongaro intentó ingresar en el edificio oficial de la CGT –ahora ocupado por la central vandorista- pero la entrada le fue impedida por el grupo *oficialista-colaboracionista* ya instalado allí. El nuevo Secretario entonces, fijó la sede de la CGT que surgió del impugnado Congreso en el local de la Federación Gráfica Bonaerense, en Paseo Colón 731.

¹¹⁸ Desde luego, el Ministerio de Economía y Trabajo no reconocería la asociación dirigida por Ongaro. El escenario tan temido se había conformado. En cuanto a Vandor, si bien pudo mantenerse lejos de la controversia, debió elegir entre una CGT legítima a ojos de sus afiliados y otra que se organizara de acuerdo con los reglamentos oficiales y contara con la tolerancia del gobierno. Eligió esta última. Cfrt; *Primera Plana* N° 275, 2 de abril de 1968; *La división de la CGT*.

¹¹⁹ La firmeza este discurso llamó la atención, porque en las declaraciones que el Presidente había hecho al *New York Times* el 7 de junio parecía leerse su creencia en la necesidad de la reaparición de los partidos políticos en la Argentina.

¹²⁰ Este trance de lograr definir el sentido de la *representatividad* había consumido toda la gestión del primer Ministro del Interior de Onganía, Enrique Martínez Paz.

¹²¹ Sin embargo, una sombra de descontento exterior se sumó al clima general cuando se filtró un despacho de la *Associated Press*, en el que se decía que el movimiento de inversiones destinadas a la Argentina –una de las claves del plan económico de Krieger Vasena- no sería rápido y –en parte- estaría condicionado a que las autoridades de Buenos Aires resolvieran los problemas políticos del país. Dicho de otro modo, hasta que la Casa Rosada no implementara un programa electoral. Publicado en *La Nación*, en su edición del 14 de julio de 1967.

¹²² Dentro del propio gabinete continuaban brotando pensamientos muy conectados. Pese a las agresivas declaraciones de Onganía ante las Fuerzas Armadas –el 6 de julio- contra toda salida institucional a la vieja usanza, algunos funcionarios solían opinar –en la intimidad- que el Gobierno no debía seguir más tiempo sin insuflar una orientación política a su labor. Esa orientación política, no tendría porque copiar a las ideologías en curso ni entrafñar la resurrección del sistema democrático utilizado hasta hacía un año atrás. Se trataba de que, una misma línea guiara el enfoque de todos los problemas, desde el déficit ferroviario a las votaciones en la UN. Había que crear una mística; sino, el Gobierno será una máquina y terminaría por alejarse de las inquietudes del país. Cfrt; *Primera Plana*, N° 238, del 18 de julio de 1967, p.12.

¹²³ Los párrafos en cursiva fueron extractado del discurso completo que pronunció el Presidente en la cena de camaradería de las Fuerzas Armadas, el 6 de julio de 1967, y publicado por la Secretaría General de la Presidencia a cargo del general Héctor Repetto.

¹²⁴ La Ley 17.401 disponía en su Art.1: “*Serán calificadas como comunistas todas las personas que realicen actividades comprobadas de indudable motivación ideológica comunista, para lo cual se podrán tener en cuenta actividades anteriores*”. En su Art.2 decía: “*La calificación de comunista estará a cargo de la Secretaría de Informaciones del Estado*”; art.3 “*El trámite para esta calificación será secreto y el afectado podrá recurrir por vía jerárquica ante el PEN y luego ante la Justicia Federal*”. Como se ve era una Ley de procedimientos secretos y poco indicada para los propósitos declamados en el Anexo 3.

¹²⁵ El mismo viernes 25 de agosto, en una exposición que dictó en la Escuela Superior de Guerra, el general Osiris Villegas –Secretario General del CONASE- dijo: “*la seguridad nacional lleva implícito*

impedir, por todos los medios, que el comunismo pueda actuar impunemente en nuestro territorio". La subversión comunista "intenta aprovechar bajos standards de vida para someter a su esfera de acción a nuevos países". Aseveró que las interferencias y perturbaciones sustanciales que detenían el progreso argentino eran: "la existencia de grandes espacios vacíos, la irregular distribución territorial de la población y la escasa explotación de sectores básicos (minería, siderurgia, petroquímica y química pesada)".

Es curioso que –en este sentido- se mostrara un contraste con el mundo. Mientras Rusia y los EE.UU. estaban en plena *détente* intentando consolidar sus relaciones, Alemania Federal se vinculaba con la Europa del Este y España mantenía relaciones con Cuba y Europa Oriental, la Argentina, cuyos gobernantes se habían comprometido a modernizar el país, prefirieran dar un paso atrás y desempolvar la herejía anticomunista.

¹²⁶ A este respecto, el miércoles 23 de julio el diario La Razón había revelado la intención de realizar una asamblea de altos jefes militares del continente para intercambiar informes y tratar en profundidad el tema de las guerrillas. Según el vespertino la iniciativa era de los ejércitos de Argentina y Bolivia y el conciliábulo se realizaría en Santa Cruz de la Sierra (Bolivia). Finalmente, frente a la resistencia de Chile, Perú y México y a la previsible negativa de Brasil, esta conferencia nunca se realizó.

Sin embargo, el intento tuvo su lógica: el Comandante en Jefe del Ejército –por entonces el teniente general Juan Carlos Onganía- luego de una visita a Brasil –el 31 de agosto de 1965- propuso la reunión de los ejércitos americanos para derrotar a "*este enemigo tenaz, fluido y sinuoso: el comunismo*". Acababa de entrevistarse –entonces- con el Ministro de Guerra de Brasil –el general Arthur Da Costa e Silva. Habiendo llegado, como su colega Onganía, a la primera magistratura, ya no pensaba igual que en 1965.

¹²⁷ La peregrinación a Buenos Aires de los profesores europeos comenzó a fines de agosto con la llegada de Pier Luigi Zampetti, de la Universidad de Trieste, continuó con la visita del español Rodrigo Fernández Carbajal y prosiguió con el arribo –a principios de setiembre- del profesor francés George Bourdeau, de la Universidad de París. Cf. *Primera Plana* N° 245, p. 17.

¹²⁸ El italiano Zampetti acababa de editar *La Representatividad Pública*, publicado por la revista italiana *Relazioni*. Formaba parte del comité directivo de la revista el sacerdote argentino Julio Meinvielle, uno de los propulsores de las *organizaciones intermedias* en el país. El catedrático rechazaba el término corporativismo y prefería la denominación anglosajona representatividad funcional, que aludía al hecho de que las representaciones funcionaran sin implicancias de dudosa intención.

¹²⁹ Preconizaban la formación de un Parlamento donde –como hasta ese momento- continuaran reuniéndose los dirigentes políticos surgidos de una elección popular, pero que estuviera integrada también por delegados de los núcleos sociales y económicos, mezclando ambas representaciones.

¹³⁰ Uno de ellos, Arturo Palenque Carreras, acababa de agruparlas en un libro editado por Peña y Lillo: *La Revolución que nos aguarda*, cuyos conceptos no parecían –en principio- muy compatibles con el famoso Anexo 3. Fue –sin duda- su libro el vínculo que lo contactó con el congresalismo, un movimiento que estaba comenzando a aparecer, de pensamiento muy parecido a la formación de un Parlamento mixto, propulsado por los pensadores europeos. Cf. *Primera Plana* N° 210.

¹³¹ Para este fin, se aprovecharían las organizaciones sociales ya existentes como: la Unión Industrial, la Sociedad Rural, la Confederación Económica, la Federación Agraria Argentina, la Bolsa y las Cámaras de Comercio. También participarían los dirigentes políticos más destacados de la región, pero no los partidos.

¹³² En las celebraciones y homenaje a la sublevación antiperonista de 1955 –realizadas justamente durante ese mes de setiembre- se había producido una avalancha de críticas gorilas contra el gobierno: los almirantes (R.E.) Toranzo Calderón e Isaac Rojas y el general (R.E.) Federico Toranzo Montero, en cartas y discursos habían derramado feroces ataques contra el régimen y solicitado el inmediato restablecimiento de la actividad política.

¹³³ En la noche del 28 de agosto, Guevara estuvo con el Presidente y le entregó un memorándum en el cuál analizaba, con severos juicios, la gestión desarrollada por el régimen en su primer año de vida, y deja

sentada su completa discrepancia con la conducción económica impuesta por Krieger. En su entrevista con el Presidente, Guevara consideró que Onganía estaba aislándose –cada vez más- de sus gobernados; supuso, además, que las distintas dependencias del Gobierno no le brindaban información adecuada. Cfrt; *Primera Plana* N° 246, p. 13.

¹³⁴ Guevara había propuesto una apertura al oficialismo: consistía en entregar el manejo de las Comunas (Municipios) a núcleos de vecinos respetables; y el de las Provincias, a federaciones de vecinos, hasta constituir en la cúspide un Consejo Asesor del Presidente, incorporando así las instituciones representativas de la producción. La filosofía de Guevara pivotaba sobre el principio de subsidiariedad enunciado por Pio XII, según el cual, el Estado no debía monopolizar las tareas que podían cumplir los estamentos intermedios. *Cruz, espada, arado y arma*; era el slogan del Embajador en Colombia, un discípulo del teólogo francés Jean Ousset.

Cfrt; *Primera Plana* N° 258, p.13.

¹³⁵ El contenido del decreto fue obra del Ministerio a cargo de Krieger y con su total consentimiento, decía que era una herramienta de política económica transitoria, pero ahora era necesario usarla. Fue una clara muestra de su *heterodoxia liberal*.

¹³⁶ Para un ejemplo de las denuncias de Frondizi a la política económica de Krieger; ver; *La Nación* del 28 de mayo de 1968.

¹³⁷ Para las crítica, más controladas, de Alsogaray, ver sus declaraciones a *La Nación* del 1° de noviembre de 1968.

¹³⁸ En un informe de la Embajada de los EE.UU. en la Argentina a su Departamento de Estado, fechado el 15 de mayo de 1968 (bajo la forma de Aerograma N° 810) se decía que: *según el punto de vista de los oficiales del Ejército, en su gran mayoría, aprobaba la actuación de Krieger Vasena y lo consideraban el único integrante indispensable del gabinete*. Tal vez un motivo para esta explícita tolerancia militar con el Ministro haya sido el desplazamiento de fondos de los gastos operativos a las inversiones de capital. Esto permitía a las Fuerzas Armadas seguir con proyectos de construcción de armamentos y continuar la adquisición programada de nuevo equipamiento a través del Plan Europa.

¹³⁹ El general López –al finalizar su arresto de 15 días- divulgó, por fin, su proyecto de retorno a la democracia electoral que, en síntesis constaba de dos etapas: A) El gobierno debería convocar a un plebiscito en el cual se votarían programas, ideas, soluciones y no antiguas divisas: si triunfara la boleta del oficialismo, este quedaría legitimado para dirigir la Argentina durante cuatro años. Al cabo de ellos podría reclamar, otra vez, por un nuevo lapso el referéndum popular. Si en cambio venciera el Movimiento Nacional de López, el Presidente tendría que asumir la plataforma opositora y desarrollarla. Requería –mientras tanto- la formación de un Consejo Económico y Social –de carácter asesor- con el fin de que el Estado no perdiera por completo el contacto con el pueblo. B) en los primeros cuatro años, el Gobierno iría devolviendo, gradualmente, las instituciones a la ciudadanía, a partir de comicios municipales; también sugería López una reforma constitucional para orientar la Carta hacia una democracia social.

El esquema del general López no era para nada novedoso. El plebiscito era una vieja aspiración castrense que copiaba el derrotero del general Charles de Gaulle en 1958 y la recuperación de la legalidad por tramos ya había integrado un plan que los *aramburistas* habían publicitado durante 1962. En su momento fue conocido como “*Plan Thedy*” porque había sido ideado por el político Horacio Thedy. Thedy fue candidato a vicepresidente de la Nación acompañando en la fórmula a Pedro Eugenio Aramburu –por el partido Unión del Pueblo Argentino (UDELP)- en las elecciones presidenciales de 1963 que ganó la UCR del Pueblo con Arturo Illia como candidato a la Presidencia.

¹⁴⁰ El general Adolfo Cándido López, cumplió su arresto en un departamento del séptimo piso del Comando en Jefe del Ejército y sus visitantes más asiduos durante la primera semana del arresto fueron: Marcelo Sánchez Sorondo, el general Carlos Augusto Caro (R.E.) y el general (R.E.) Carlos Aníbal Peralta

que –se creía- era un emisario del general (R.E.) Pedro Eugenio Aramburu, ex Presidente *de facto* y con aspiraciones a su elección democrática.

¹⁴¹ El general Adolfo Cándido López, se había convertido en el problema más molesto para el Jefe del Ejército el Teniente General Julio Alsogaray. López que había sido retirado de la guarnición de Campo de Mayo, estaba tratando de lanzar un movimiento político para obligar a unas elecciones anticipadas. En tres ocasiones –separadas por pocos meses- Alsogaray creyó necesario colocarlo bajo arresto disciplinario. López intentó conseguir el apoyo de Juan Perón, pero la valoración escéptica de Perón clausuró su idea. Para una transcripción completa del texto de la carta de Juan Perón acerca de su valoración de López: Ver; *Primera Plana* N° 264 del 16 de enero de 1968.

¹⁴² En definitiva, el proyecto político de Cándido López no prosperó. Durante el par de semanas que permaneció recluso los dirigentes opositores –a cuya voluntad él se había aferrado- le dedicaron toda suerte de juicios irónicos y malévolos. Pocos se atrevieron a comulgar con él, temerosos de incurrir en credulidad y malquistarse con el Gobierno, incluso algunos lo consideraron un espía de la Casa Rosada. El santafesino Agustín Rodríguez Araya dijo de él: *“He decidido salir al encuentro de este general, porque en los actuales momentos de quiebra es cuando aparecen los aventureros, disfrazados de hombres providenciales. Cabe preguntarse qué pensaba López cuando empuñó el arma para derribar gobiernos elegidos por ese mismo pueblo que hoy lo preocupa”*. Para una mayor información sobre el episodio López; Cfrt: *Primera Plana* N° 264 y 266.

¹⁴³ A los dos días de pronunciado el mensaje de Borda ante la Asociación de Prensa Extranjera, en el que pretendió velar el cadáver del liberalismo, el representante de ACIEL (uno de los baluartes del liberalismo empresarial) –Manuel Fontecha Morales- declaraba: *“Nos oponemos a una transformación profunda de las instituciones del país, sobre todo cuando no se dice cuál será la medida y la intensidad que ella tendrá”*.

¹⁴⁴ En un editorial del domingo 28 de julio, el matutino La Prensa se sumaba a las críticas. Para el matutino, el esquema institucional ofrecido por Borda configuraba el delito de lesa peronismo y fascismo y se preguntaba si sería cierto que el Presidente compartía esa orientación. Pero el latigazo más significativo provino del Instituto de la Economía Social de Mercado, el centro de estudios que inspiraba el Ing. Álvaro Alsogaray, de neto corte liberal que operaba como el brazo político del Embajador en los EE.UU. El martes 30 de abril el Instituto divulgó una solicitada bajo el título *“¿Cambió de rumbo la Revolución Argentina?”* donde señalaba: *“No podemos compartir al crítica del Ministro (Borda) generalizada a la filosofía liberal, ni las ambiguas soluciones propuestas en el plano político que, además, nos preocupan profundamente”*.

¹⁴⁵ Parecía posible, además, que el propio Onganía hubiera incitado a Borda a tocar un tema tan sensible. Las entrelíneas políticas de su sermón de Olivos –el 5 de marzo pasado- en que declaró que: *“Las Fuerzas Armadas y la clase obrera eran los pilares de la Revolución”* y las instrucciones a los mandatarios provinciales, instándolos a fortalecer los municipios con la creación de consejos vecinales, probaban que, en última instancia, el Ministro del Interior fuera tan solo un eco de las palabras presidenciales. Sin embargo, la reciente represión del 1º de mayo en San Justo y Tucumán, parecía decir que el Gobierno, no desea participación sino, solo docilidad.

¹⁴⁶ Entre los más importantes líderes *colaboracionistas* se contaban: el albañil Rogelio Coria, el sastre José Alonso y el electricista Félix Pérez. Pero no asistió quién fuera socio político de San Sebastián: Augusto Timoteo Vandor, ahora asociado a la unidad dispuesta por Juan Perón.

¹⁴⁷ En tanto, la unidad sindical dispuesta por Juan Perón desde Madrid, crecía a pasos agigantados, en pocas semanas aglutinaba 50 líderes sindicales y Jorge Paladino –delegado personal de Perón- volaba a Madrid con varios sindicalistas vandoristas.

¹⁴⁸ Este modo de pensar del vandomismo, por supuesto descontaba que se produciría un enfrentamiento entre el actual Jefe del Ejército –Alejandro Agustín Lanusse- de neto corte liberal. En este escenario, ellos probarían que eran capaces de luchar contra el liberalismo.

¹⁴⁹ Que Perón buscara la amistad de Onganía no debía extrañar: fracasado en el intento de coligar a la oposición (pacto Perón-Ilia) su única chance de influir en el proceso argentino, residía en ofrecer sus favores al oficialismo: una CGT adicta a Onganía podría ser el primer paso para convertir a Perón en socio del Gobierno

¹⁵⁰ Según el N° 115 del boletín *Prensa Confidencial*, El Comandante en Jefe del Ejército –Alejandro Agustín Lanusse- habría efectuado –a mediados de enero de 1969- un planteamiento al Jefe del Ejecutivo: le habría exigido –de acuerdo con la versión- que se desligara, públicamente, de las gestiones conducidas en Madrid por representantes oficiosos del Gobierno.

¹⁵¹ El mayor enemigo de las negociaciones conducentes a su legitimación –paradojalmente- resultaba el propio Presidente, que le había impuesto a San Sebastián un requisito de imposible cumplimiento: rearmar la nueva CGT sin los jefes actuales que, según él, resultaban tan obsoletos como los políticos tradicionales.

¹⁵² En aquel momento, Juan José Tacone –líder de Luz y Fuerza y adalid del colaboracionismo- integrante del grupo de los 46 sindicalistas que acudieron a la reunión del 31 de enero en la Casa Rosada, dijo: “*La filosofía de la participación no debe confundirse con la del consentimiento; personalmente creo que, si el Gobierno convoca a los trabajadores organizados a integrar Consejos Asesores con poder real, habrá encontrado una salida política lógica para el país*”.

¹⁵³ Los Ministros y Secretarios convocados recibieron la arenga presidencial con una sonrisa: en realidad, creían que en la reunión recibirían un reto presidencial por sus desaciertos de 1968. Concluida la reunión muchos de ellos desbarrancaron alegremente hacia la guarnición de Campo de Mayo, donde los esperaba un asado con guitarreado cuyo anfitrión era el general Alejandro Agustín Lanusse.

¹⁵⁴ Para los críticos del Gobierno, el *comunitarismo*, el *participacionismo* y el *consejalismo* –primos hermanos ideológicos entre sí- eran simples métodos de reclutamiento que tienen por objeto rodear a Onganía con la adhesión de sindicatos, cámaras empresarias, instituciones de fomento y comunas. Lo más grave era que –de este modo- el compromiso eludía así el sufragio universal por medio de las urnas y creaba una complicidad entre los dirigentes de esas entidades y el oficialismo.

¹⁵⁵ Como sabemos, Onganía pensaba justamente lo contrario: las Fuerzas Armadas no debían inmiscuirse en la acción de gobierno a fin de preservarlas como última instancia. Onganía insistía –cada vez más- en que sus reuniones de los miércoles con el jefe del Ejército se limitaran, exclusivamente, a asuntos puramente militares.

¹⁵⁶ Por su parte, el Ministro Borda –en su alocución ante la Asociación de la Prensa Extranjera el 24 de abril de 1968- había dejado bien claro que el Presidente era el “Jefe de la Revolución”, implicando por lo tanto, que las Fuerzas Armadas en lugar de ser las originadoras y custodias de la Revolución eran, simplemente, subordinadas de Onganía. El discurso de Borda desencadenó –entre el general Alsogaray y el Presidente- un virtual estado de crisis no declarado. Ver: *La Nación*, edición del 25 de abril de 1968. Para una crítica liberal al discurso de Borda ver la columna *Semana Política*, *La Nación*, edición del 28 de abril de 1968. Para un intento de defender a Borda de las acusaciones de corporativismo, ver; “*El desafío de Borda*” en *Confirmado* del 2 de mayo de 1968.

¹⁵⁷ Para las actitudes de los oficiales de graduación intermedia ver las fuentes citadas en nota 138. El que fuera Jefe de Operaciones del Estado Mayor en 1968 –general (R.E.) Von Stecher- insistía en que el general Alsogaray nunca consideró el derrocamiento de Onganía y que nunca se había preparado un estudio para tal ocasión.

¹⁵⁸ Esto se hizo evidente cuando le pidió a Costa Méndez tres embajadas de primera clase y le explicó a su ministro que las necesitaba para los tres comandantes que iban a ser relevados. Así Costa Méndez fue el primero en enterarse de la decisión presidencial. También avisó por adelantado al general Lanusse – que en ese momento era comandante del tercer cuerpo de ejército en Córdoba- que planeaba nombrarlo como sucesor de Alsogaray, y le pidió que lo mantuviera en secreto. Ver; Potash, Robert; *El Ejército y la política en la Argentina*, Sudamericana, segunda parte 1966-1973, 1994, p.61.

¹⁵⁹ La conversación entre Onganía y Lanusse –anterior al relevo de Alsogaray- puede ayudar a explicar porque el general Alsogaray no pudo recoger el apoyo suficiente de los generales colegas para presionar por el derrocamiento de los nacionalistas del Ministerio del Interior. Lanusse compartía la antipatía de Alsogaray hacia el corporativismo, aunque, raramente, sentía cierta simpatía hacia la acción comunitaria en el nivel municipal. El saberse el elegido para asumir la jefatura del Ejército, le habría dado suficientes motivos para no meterse en la controversia de Alsogaray con el Presidente.

¹⁶⁰ Resultaría asombroso comprobar que el general Julio Alsogaray descubriera las bondades de la Constitución 22 meses después de haber derrocado a un mandatario legal; puesto que él había conspirado ya en 1951 y en 1966 contra mandatarios constitucionales como Juan Perón y Arturo Illia, que –aunque fuera parcialmente- representaban a mayorías populares. Era preciso atribuirle el deseo de implantar una democracia restringida, es decir, oligárquica. La operación de relevo de Alsogaray había resultado relativamente sencilla para el Presidente, por el fuerte peso negativo del hermano del general: el capitán ingeniero Álvaro Alsogaray. Tal vez, si su hermano Álvaro no hubiera existido, el relevo no habría resultado tan sencillo. Por otra parte, la estrella de Alsogaray se apagó con rapidez, porque su fuerte descenso fue simultáneo al ascenso de una figura impetuosa, acompañada por intereses económicos poderosos y líder indiscutido de la secta de Caballería: el peso de Alejandro Agustín Lanusse ayudó a Onganía a desprenderse de Alsogaray.

¹⁶¹ Con la única excepción hecha en la Marina, donde el almirante Pedro Gnavi sucedió al almirante Benigno Ignacio Varela el 4 de octubre tal como lo mandaba el reglamento. Seguramente porque Varela iría a suceder a César Urien en la Embajada en España, un premio presidencial a su conformidad en el relevo de sus otros dos colegas. Varela fue el único control que Onganía tuvo sobre Alsogaray en el corazón mismo de la Junta de Comandantes y, acaso, le haya sugerido al Presidente las formas del cambio.

¹⁶² No se explica muy bien porque Onganía eligió a Lanusse para ser el próximo Comandante en Jefe del Ejército. Consciente de que había tres generales de división antes que él en el escalafón (los generales Lavicoli, Osiris Villegas y Juan Guglielmelli que pidieron su pase a retiro). El propio Lanusse preguntó al Presidente porque habían sido pasados por alto: la respuesta de Onganía fue que necesitaba un Comandante “con barbas” un líder militar duro que pudiera controlar al Ejército. Pero, si era cierto que la caída de Alsogaray significaba poner coto a cualquier intento de cogobierno por parte de las Fuerzas Armadas de la Junta de Comandantes; y si era conocida también la decidida vocación política del general Lanusse –el último fundador del *azulismo* que seguía en actividad- era preciso concluir, que el Presidente, lo había ubicado en la cima del Ejército para controlarlo. Ahora cualquier giro político de Lanusse podría significarle un final parecido al de su antecesor; salvo, claro está, que ese primer gesto le sirviera para descabezar a Onganía. Como finalmente sucedió. Ver; *Primera Plana* N° 297 del 3 de setiembre de 1968.

¹⁶³ El caso del general Lanusse tiene un interés histórico especial, ya que, por primera vez en la larga cadena de gobiernos militares argentino, el mayor poder militar estaba en manos de un representante del poder económico: de un miembro caracterizado de la oligarquía. Alejandro Agustín Lanusse era miembro de una familia comercialmente poderosa y biológicamente prolífica, dos elementos indispensables para procurar insertar en las redes del poder a sus miembros; el general, por lo tanto, había sido la culminación de este proceso de conquista del poder, en este caso: del poder militar. El eje económico de la familia era la sociedad anónima Pedro & Antonio Lanusse –fundada en 1872- donde hacían sus primeras armas los jóvenes de la familia y donde se hilvanaban las combinaciones familiares (por enlaces) y financieras que prolongaran su dominio en el tiempo. Era hijo de Antonio Lanusse (Antonio de tercera generación) y Albertina Gelly Cantilo y uno de siete hermanos. Uno de sus hermanos –Guillermo Lanusse- era director

de la compañía inmobiliaria Carzú S.A. donde compartía asientos con Alejandro Ayerza, Ignacio Zuberbühler, Enrique Schoo Lastra y Hernán Bunge. Guillermo era –al mismo tiempo- director de Pedro & Antonio Lanusse, la empresa familiar. Otro de sus hermanos, Luis Lanusse, estaba casado con Raquel Martínez Castro. Este matrimonio tiene una importancia fundamental para la época, porque Enrique Martínez Castro (hermano de Raquel y cuñado de Luis Lanusse) fue un personaje decisivo en la trenza de intereses que se movían en el Gobierno militar. Enrique era director de un complejo de yerbatales, La Misionera; de una compañía de seguros, La Austral; y de una empresa inmobiliaria, Cangallo S.A. donde acompañaba a conocidos representantes locales de empresas extranjeras, especialmente norteamericanas; algunos de ellos era Roberto Lobos y Jorge Boló. Pedro Martínez Castro (también hermano de Raquel y el otro cuñado de Luis) tenía como compañero de asientos a Adalbert Krieger Vasena en dos sociedades comerciales: Carabelas S.A. y Celavón S.A. Este hermano le permitió al general Lanusse un raro snobismo extremo, confirmado por los vínculos de sangre: en efecto, por el casamiento de su hermano con Raquel Martínez Castro –hija de María Luisa Guevara Lynch- y de Martín Martínez Castro, Luis Lanusse se convirtió en esposo de una prima hermana del *Che*. María Teresa Lanusse (otra hermana del general) estaba casada con Ignacio Aleman (hermano de Juan y Roberto Aleman) quién tenía como socios –entre otros- a Carlos María Peña y Carlos Peña Fauvety, socios a su vez de Nicanor Costa Méndez en la Corporación Ganadera S.A. Otro primo hermano del general –Rodolfo Jorge Lanusse- se encuentra en la sociedad familiar Lanusse y Olaciregui S.A., pero, donde su presencia resulta reveladora de la trama de intereses es en la Compañía Financiera Investaires S.A. en donde vuelve a aparecer un Lanusse en sociedad con Adalbert Krieger Vasena y otros de los miembros de la familia del ministro, como Andrés Chopitea (hermano de la esposa del ministro, casado con Daisy Chopitea) y Carlos Otto Franke, alto funcionario del Ministerio de Economía y operador del ministro. Antonio Roberto Lanusse –primo hermano del general- casado con Martha Zuberbühler, había sido designado por Onganía Secretario de Transporte de la Nación y más tarde Ministro de Defensa. Ezequiel Holmberg Lanusse –otro primo hermano del general- fue Ministro de Salud Pública durante los gobiernos de Onganía y Levingston. Todos los negocios de la familia Lanusse se apoyaban en actividades agrícolas ganadera, más que como productores, en carácter de intermediarios del trabajo de los ganaderos, como agentes de venta de campos y de hacienda; esto le valió al *Cano* (apodado a Alejandro Agustín) ganarse el mote –entre sus compañeros de armas- de *general de ganadería*. Quedaba claro que la trascendencia de los negocios no podía desarrollarse sin la colaboración de la política. Extractado de; García Lupo, Rogelio; *Mercenarios y Monopolio en la Argentina, de Onganía a Lanusse 1966-1971*, Achával Solo, 1971. Cap. XXIII.

¹⁶⁴ Había trascendido que –el 23 de agosto (1968)- el Comandante relevado había sometido a los jueces de la Corte Suprema de la Nación –Marco Risolía y Luis Cabral- la cuestión de: ¿Puede Onganía relevar a los Comandantes que le dieron el poder? Los magistrados respondieron que sí porque: a) La Junta Revolucionaria se había disuelto tras la jura presidencial de 1966; b) si bien los tres Comandantes mantenían el derecho de nombrar un sucesor de Onganía en caso de muerte o incapacidad, en ningún texto decía que debían ser precisamente aquellos jefes quienes tomaran la medida y; c) nadie podía negar a la Casa Rosada el derecho a remover jefes militares, cualquiera fuese su jerarquía. Alsogaray carecía de tropas adictas, estaba jaqueado por el almirante Varela en la Junta y ahora, era desahuciado por los jueces. Un solo camino le quedaba entonces: ser un caudillo civil de la oposición.

¹⁶⁵ A mediados de abril de 1967, el nombramiento de Van Peborgh en el Ministerio de Defensa –sin consulta previa- había irritado al general Alsogaray. El Ministro Borda había arremetido contra el liberalismo –religión cívica del Comandante- y se esperaba un pronunciamiento del general para el día del Ejército. Pero, el 5 de mayo –día de la Armada- el almirante Varela dio un discurso de neto corte nacionalista, que conmovió a la opinión pública lo suficiente como para evitar la arenga liberal del Comandante. Este era el acuerdo defensivo que Onganía –el instigador de Borda- ; había forjado con el almirante Varela, al precio de la promesa de reequipar a la Armada y de sentar al almirante en la Embajada en Madrid; ver nota 160.

¹⁶⁶ El peronismo revolucionario tuvo en John William Cooke a su ideólogo principal. Este joven dirigente – que provenía de las clases acomodadas de Buenos Aires- trató de insertar el pensamiento de izquierda dentro del movimiento peronista, el método de penetración fue conocido como *entrismo*. Cooke había sido

colaborador de Eva Duarte durante el primer gobierno peronista. Posteriormente se había desempeñado como secretario de Perón y delegado personal del líder durante sus primeros tiempos en el exilio.

¹⁶⁷ El 10 de setiembre –en una notable y casual coincidencia- el diario *La Nación* publicó una información de su corresponsal en Tucumán –Héctor Domingo Padilla (h)- que escribió una columna sobre Taco Ralo y sus termas. Allí podía leerse que ese nombre (Taco Ralo) quería decir, en lengua quichua, “árboles secos”. Que la localidad se encontraba a 1.149 kms de Buenos Aires, a 8 kms de la frontera con Catamarca y Santiago del Estero y a 120 kms de la capital tucumana. Taco Ralo contaba, también, con una pista de aterrizaje para aviones livianos utilizada en el tráfico de contrabando.

¹⁶⁸ En todo caso, podía admitirse que en el grupo de Taco Ralo podían existir una o tal vez dos personas dudosas, lo que también era una semejanza más con las experiencias anteriores, puesto que, tanto en la guerrilla del comandante Uturnco, como en la del periodista Jorge Masetti estuvieron infiltrados uno o dos agentes secretos de la inteligencia policial. El problema parece inseparable de toda guerrilla, si se tiene en cuenta que el mismo Che Guevara –tal vez por su consabida ingenuidad política- no pudo adivinar a simuladores que se preparaban para venderlo. Pero, independientemente de la integridad de intenciones de los guerrilleros de Taco Ralo, hay que admitir que, desde mediados de agosto, los servicios de inteligencia militar estaban preparando el clima público para descubrir un campamento guerrillero y hasta habían decidido que lo encontrarían en la provincia de Tucumán. Esta atmosfera se tejió a medida que fueron trascendiendo los temas que el Jefe del Ejército –Alejandro Agustín Lanusse- plantearía a sus colegas en la Reunión de Rio de Janeiro –convocada para el 22 de setiembre de 1968- acerca de la conformación de una fuerza interamericana para combatir la insurgencia armada en América Latina.

¹⁶⁹ Para una información muy completa y detallada sobre el episodio de Taco Ralo y sobre los inicios de la insurgencia armada revolucionaria, la penetración ideológica y las técnicas de entrenamiento cubano-soviética en la Argentina, recomendamos ver: Carreras, Julio; *La política armada*, Buenos Aires, Quipu editorial, 2001; García Luppó, Rogelio; *ob.cit. Mercenarios y Monopolios.....*, Achával Solo, Buenos Aires, 1971; Carnovale, Vera; *Los Combatientes*, Siglo XXI, Buenos Aires, 2011; Anguita, Eduardo y Caparrós, Martín; *La Voluntad*, tomo I 1966-1973, editorial Norma, Buenos Aires, 1998, y el muy completo y documentado trabajo de investigación sobre la influencia cubano-soviética en la subversión armada en Argentina: Yofré, Juan Bautista; *Fue Cuba*, Sudamericana, Buenos Aires, 2014.

¹⁷⁰ Algunos indicios presagiaban ese alejamiento que la Iglesia se imponía respecto del Estado: era usual que al terminar los concilios obispaes, sus miembros efectuaran una visita de cortesía al Presidente: esta vez los dignatarios decidieron no concurrir a la Casa Rosada.

¹⁷¹ Ante una pregunta periodística, el Cardenal –con esa seráfica alegría que solía fingir- decía: “*Personalmente, pienso que hay -en la Argentina- un gobierno transitorio, de facto, aunque legítimo, y confío que en el futuro se restablecerá la normalidad y que podrán actuar, nuevamente, los partidos políticos. El país tiene que volver a la normalidad, es decir, a un régimen constitucional y democrático*” Cfrt; Primera Plana Nº 332, del 6 de mayo de 1969.

¹⁷² Las palabras de Caggiano sorprendieron, sobre todo viniendo de un hombre al que muchos –por su investidura y edad- consideraban bastante alejado de la realidad. Pero era un hombre con una sólida formación eclesial, posiblemente su giro se viera influenciado en una versión inconfirmable: el 11 de abril el Canciller Costa Méndez había peregrinado al Vaticano a una audiencia con el mismísimo Pablo VI, quién le habría deslizado –con toda diplomacia- la sugerencia de realizar una consulta popular en la Argentina.

Otra circunstancia que no dejó de llamar la atención fue que –el miércoles 30 de marzo- el Nuncio saliente (Embajador del Vaticano en Argentina) entregara a Miguel Ángel Zavala Ortiz –Canciller del gobierno de Illia- las insignias vaticanas de Caballero Gran Cruz de la Orden Piano y a su Secretario de Relaciones Exteriores –José Noguero Armengol- la banda de San Gregorio Magno. Seguramente premios para los esfuerzos que el radicalismo había efectuado para que la Argentina cediera sus derechos al Patronato, una institución de control fundada en el siglo XV por Isabel de Castilla. Fuera o no premeditada la ceremonia del 30 de abril, esta se convirtió en un acto político, que remozó las diluidas figuras de: Arturo

Illia y Arturo Mor Roig, que se codearon –en esa oportunidad- con los prelados: Monseñor Juan Carlos Aramburu, Antonio Plaza y Antonio Caggiano.

¹⁷³ Los Comités Asesores que se imponían en Alta Gracia eran más de dos mil y se esperaba reunir unas cuatro mil personalidades. La medida se hacía necesaria –en ese momento más que nunca- debido a la ola de atentados contra regimientos, oficinas de radio y policías, que denotaban cierta impaciencia general y vulneraban seriamente la imagen de seguridad que pretendía ofrecer el Gobierno. Lo peor era que, en la inútil pesquisa de los terroristas, se desató la represión sobre el peronismo y la izquierda. Si estos planes de participación se prolongaban demasiado, era posible que el peronismo rompiera su tregua con Onganía ya que solo la esperanza de ingresar al Gobierno los mantenía quietos.

¹⁷⁴ Algunos gobernadores se atrevieron a objetar –frente a Onganía- la forma de imponer la participación: no estaban seguros de hallar eco en las fuerzas económicas y sociales de sus provincias. Según el mandatario tucumano –Roberto Avellaneda- en esa provincia tan solo podrían invitar a los clubes deportivos, puesto que los industriales y los sindicatos estaban en contra de la política azucarera del Gobierno. Guillermo Iribarren –de La Rioja- rechazó el sistema de listas –ideado por Guillermo Borda- para que cada organización ofreciera sus delegados: postuló la elección directa desde los Palacios de Gobierno provinciales.

En un diálogo programado que se desarrolló entre los Gobernadores y el Presidente –el mismo lunes antes del receso de mediodía- Onganía aclaró conceptos sobre la centralización de poder que era necesario mantener mientras se organizara el nuevo federalismo. Cfrit; *Primera Plana* N° 333, pp. 8 a 10.

Las atribuciones, el formato y las categorías y funciones de estos Consejos ya han sido tratadas en nuestro Cap.4. y en este capítulo punto 5.8 cuarto párrafo y nota 154.

¹⁷⁵ Es más: el mismo domingo 4, los delegados de la clase media peronista –naturalmente proclives al Gobierno- eran desalojados, pistola en mano, por las fuerzas de seguridad cuando pretendían congregarse en una asamblea bonaerense en el Edén Hotel de Tandil. *“Estamos en los umbrales de momentos decisivos: el Movimiento Justicialista no puede entrar en componendas y está frente al Gobierno.”* Dijo, en esa ocasión, Daniel Paladino, delegado de Perón.

¹⁷⁶ Los operarios de las empresas automotrices eran conscientes que representaban un estrato diferente y económicamente superior al de los obreros de las ramas más tradicionales. Este hecho y la identidad política peronista de la mayoría de las bases, las llevaron a desarrollar una gran combatividad y firmeza organizativa en el plano de las conquistas económico-gremiales, lucha que –al mismo tiempo- servía para exteriorizar el descontento y frustración por la proscripción del peronismo. Véase: Gordillo, Mónica; *Los prolegómenos del Cordobazo: los sindicatos líderes de Córdoba dentro de la estructura de poder sindical; Desarrollo Económico*, V.31, N° 122 julio-setiembre de 1991, p.172.

¹⁷⁷ Dawyd, Darío; *La huelga santa de los petroleros de Ensenada. Petróleo, peronismo y política en el '68 argentino*. En Basualdo V. (coord.) *La clase trabajadora en la Argentina del siglo XX: experiencia de luchas y organización*; Buenos Aires, Cara y Ceca, 2011.

¹⁷⁸ La eliminación progresiva en tres etapas de las quitas zonales fue establecida en el artículo 4° del convenio 140/66, donde la UOM obtuvo un aumento apenas inferior al de otros sindicatos que también renegociaron su convenio. El plan económico de Krieger afectó de manera particular al sector metalúrgico, produciéndose despidos, suspensiones, reducciones de la jornada laboral y cierre de establecimientos. Esto muestra que la actividad metalúrgica fue una de las más castigadas, a lo que se sumó el conflicto en torno de las quitas zonales.

¹⁷⁹ En agosto Vandor y Alejo Simó (titular de la UOM Córdoba) fueron recibidos por el gobernador. Aquel les informó que tenía el tema en su conocimiento, tras lo cual se informó que el Departamento del Trabajo se encargaría del asunto. *La Razón*, viernes 30 de agosto de 1968. Después de unos meses con el problema sin solución la UOM Córdoba se declaró en estado de alerta. *La Razón*, martes 12 de noviembre de 1968.

¹⁸⁰ Lo que en realidad sucedió es que la Secretaría obvió la aplicación del artículo 3º de la Ley 17224 al convenio colectivo metalúrgico 140/66. El convenio colectivo había sido efectivamente derogado por una ley superior que había suspendido la vigencia de todos los convenios colectivos.

¹⁸¹ *La Razón*, jueves 3 de febrero de 1969.

¹⁸² *La Razón*, sábado 15 de marzo de 1969.

¹⁸³ Entre los beneficios suprimidos se encontraba el pago de licencia por enfermedad y la eliminación del comedor. El paro afectó la publicación de cerca de 40 publicaciones. *La Razón*, miércoles 15 de enero de 1969.

¹⁸⁴ *La Razón*, miércoles 19 de marzo de 1969, lunes 24 de marzo de 1969 y martes 25 de marzo. A fines de febrero, las autoridades de la FGB dieron una conferencia de prensa, donde Ongaro –el líder gráfico- afirmó que esta era “una operación piloto orquestada en la Secretaría de Trabajo para destruir al movimiento sindical argentino”. *La Razón*, jueves 27 de febrero de 1969. La CGTA emitió –más tarde- un comunicado donde Ongaro decía que: “Ahora el Gobierno combinado con la patronal (Fabril Financiera) trata de destruir la dirección de la gráfica y estos métodos descubren la esencia del corporativismo que se ensaya”. *La Razón*, lunes 3 de marzo de 1969.

¹⁸⁵ Aramburu asumió la posición de mediador sin que nadie se lo solicitara y por esto se retiró del conflicto aunque manifestó que el despido de los delegados de la comisión interna –sin precisar cargos concretos- era una violación del derecho indiscutible de los trabajadores a la agremiación. *La Razón*, jueves 3 de abril de 1969.

¹⁸⁶ La cultura opositora y anti-burocrática de la CGTA quedó expresada en la Declaración de Córdoba del 31 de marzo de 1969, donde se afirmaba que la provincia atravesaba una pésima gestión a favor de grupos de privilegio y con estructuras corporativistas. El Consejo Asesor del Poder Ejecutivo provincial había sido creado a fines de febrero de 1969 por decreto del gobernador Caballero. Para revertir la situación la CGTA convocaba a los sindicatos no participacionistas y a todas las organizaciones sociales a sumar los mayores esfuerzos para emprender el camino de la liberación nacional. Véase; *Declaración de Córdoba; Regional Córdoba de la CGTA, Córdoba 21 de marzo de 1969*.

¹⁸⁷ *La Razón*, viernes 11 de abril, sábado 12 de abril y miércoles 16 de abril de 1969.

¹⁸⁸ Mientras el vandorismo buscaba permearse en sindicatos de la CGTA y participacionistas, el peronismo revolucionario –desde Córdoba- apuntaba a fortalecer el bastión de la CGTA: el interior del país. Resultó muy significativo que la Mesa Ejecutiva nacional provisoria del Bloque de las Agrupaciones Gremiales y Organizaciones Políticas Peronistas, que buscaba la confluencia entre el sector político y gremial más combativo hubiera decidido reunirse en la ciudad de Córdoba, que para entonces, se había convertido en uno de los focos más importantes de la resistencia sindical al régimen. Véase: Gordillo, Mónica; *Córdoba en los 60, la experiencia del sindicalismo combativo*, Córdoba U.N.C. 1999, p.198.

¹⁸⁹ El 11 y 12 de enero de 1969, se realizó el Plenario Nacional del Peronismo Revolucionario –en la ciudad de Córdoba- con la presencia de dirigentes peronistas sindicales y políticos de todo el país con un total de 87 agrupaciones y 220 delegados en representación de 12 provincias, para cumplir lo que consideraban el verdadero llamado de Perón: unidad desde las bases. *La Razón*, martes 28 de enero de 1969.

¹⁹⁰ En lugar del acto programado, la CGTA llama a una conferencia de prensa, contándose con la presencia del dirigente de la Unión Ferroviaria (U.F.) Lorenzo Pepe quien –refiriéndose al acto relámpago realizado horas antes frente a la sede sindical dijo que: “Ello sirvió para ratificar los principios enunciados por esta central obrera en 1968”. Cfrt: Balvé, Beba y Balvé, Beatriz; *El '69. Huelga política de masas*, Razón y Revolución-CICSO, ediciones ryr, Buenos Aires, 2005, p.54.

¹⁹¹ Los secretariados de las dos CGT resolvieron decretar un paro por 24 horas, a partir de las cero horas del día 23 de mayo, en repudio a la política del gobierno: Balvé, Beba y Balvé, Beatriz; *ob.cit* "El '69....." p. 82-83.

¹⁹² La existencia de comedores estudiantiles en las Universidades del interior del país provenía del hecho de que la mayoría de la población estudiantil estaba compuesta de jóvenes provenientes de localidades del interior de la provincia y, también de otras provincias cercanas. Este es un elemento muy importante de diferenciación entre la población estudiantil del interior del país y la población de la U.B.A., diferencia que –seguramente- incidirá en sus comportamientos. Las familias del interior debían solventar los gastos de estadía de sus hijos en la ciudad donde se encontraba la Universidad. La situación de sueldos congelados y los precios en aumento precarizaban ya bastante sus condiciones, tomando inelásticas las partidas destinadas a la educación. Es por esto que un aumento en el valor del ticket del comedor afectaba tan fuertemente el presupuesto mensual del estudiantado.

¹⁹³ Balvé, Beba y Balvé, Beatriz; *ob.cit*. "El '69...." P. 47-48.

¹⁹⁴ Luego de una agitada concentración de estudiantes -que se habían reunido en un comedor estudiantil de la ya clausurada U.N.R.- en un acto relámpago de protesta anti-sistema para promover la unidad obrero-estudiantil, al ser desconcentrados por la policía rosarina, un grupo pasa frente al banco Transatlántico y la Bolsa de Comercio y otro se dispersa por la calle Córdoba. En ese instante entra –a velocidad- un patrullero por la misma calle. Un oficial bajo de la patrulla y apuntó su arma contra un estudiante y disparó, causándole la muerte: el estudiante era Adolfo Bello y el oficial fue identificado después como Juan Agustín Lescano.

¹⁹⁵ En medio del disturbio la mayoría de los paseantes buscaron refugio en la galería Melipal –sobre la calle Córdoba- eran las 12.20 horas y tres agentes bajaron del patrullero con las armas reglamentarias en las manos. Detrás marchaba el comisario de la seccional 3ra. Adolfo Bagli y –a su lado- el oficial inspector Juan Agustín Lescano. Los policías gritaron a la gente que se dispersara y repitieron sus balazos al aire, mientras los estudiantes corrían de una punta a la otra de la galería Melipal buscando vías de escape. Fue en esas escaramuzas que Lescano y el estudiante de Ciencias Económicas de 22 años, que había nacido en el pueblo de Las Rosas cerca de Rosario, Adolfo Ramón Bello, se encontraron frente a frente. Lescano gatillo su Colt y le descerrajó un balazo en la frente a Bello, el plomo salió por la nuca. Las versiones sobre el hecho difirieron, pero el corresponsal del diario *La Prensa* recogió la versión de un funcionario público y dos arquitectos: según ellos la policía atacó sin ser provocada; luego de balear al estudiante, Lescano subió a un Jeep, acompañado por dos agentes. Su aspecto no revelaba signos de lucha. Bello murió en la Asistencia Pública seis horas después de haber sido asistido. Ver: *Primera Plana*, N° 335, del 27 de mayo de 1969, pp. 15-16.

¹⁹⁶ Mientras las CGT nacionales cruzaban acusaciones en torno al libro de Rodolfo Walsh, ¿Quién mató a Rosendo? (en la primera quincena de mayo de 1969), en el que se acusaba al vandorismo por la descomposición del sindicalismo peronista; cuarenta sindicatos de integrantes de ambas CGT de Rosario se fusionaron y llamaron a un paro general para el día 23 de mayo. Solicitaron a ambas CGT nacionales que decretaran paros generales nacionales y adoptaran la misma actitud de unidad en la lucha que ellos. *La Razón*, jueves 22 de mayo de 1969.

¹⁹⁷ La mayoría de las versiones coincidían en que el propio general Fonseca –Jefe del Segundo Cuerpo de Ejército- trató de evitar que la marcha se reprimiera y que fue el gobernador Eladio Vázquez quien dio la orden de frenarlo a toda costa, obedeciendo las instrucciones del Ministro Guillermo Borda.

¹⁹⁸ Un periodista que recorría la ciudad, durante una caminata por el centro, pudo observar como los transeúntes reparaban, con nuevos trozos de cinta, los desprendimientos de unos doce letreros.

¹⁹⁹ Paralelamente, los hechos se sucedían en el país: desde Mar del Plata –el miércoles 21 de mayo- el *Congreso de Delegados Metalúrgicos* repudiaba el *consejalismo* un instrumento de falsa imagen. Al cierre de la Asamblea, Vandor fustigó con dureza las masacres; velozmente *El Lobo* se sumaba a la oposición –

una actitud de la que podría retornar- según era su costumbre, al tiempo que permitía –aunque fuera solo a este efecto- el milagro de una CGT unificada.

²⁰⁰ Los diez puntos de la cartilla recomendaban: 1)dejar registrado el nombre para que luego pudiera verificarse quien había sido encarcelado; 2) evitar el arresto de cualquier compañero, ayudándolo contra la Policía, si el auxilio fracasaba, el detenido debía gritar su nombre y la Facultad en la que estaba inscripto; 3) llevar documento de identidad; 4)exigir el traslado a la Asistencia Pública en caso de lesión; 5) normas sobre la clase de actas policiales que pueden ser firmadas; 6) negarse a responder a preguntas de orden confesional; 7) no entrar en ratoneras –cines, bares- sino dispersarse; 8) informar al cuerpo de abogados de la CGT sobre cualquier detención; 9) en caso de apremios ilegales, rectificarse ante el Juez y efectuar la denuncia; 10) no mencionar jamás a terceras personas o agrupaciones estudiantiles ni llevar encima otro número de teléfono que el de la CGT.

²⁰¹ El mismo martes, el mismo Héctor Quagliaro, -que había presidido el plenario de CGT unificada; declaraba en su oficina del puerto de Rosario: *“La CGT se ha puesto al servicio de los estudiantes. La lucha en común tiene todas las posibilidades para triunfar. Si a eso se agrega la unión sindical –aunque solo sea para esta acción- iremos hacia adelante. El momento es único. Todos los rosarinos están disconformes con el gobierno”*

²⁰² Si había que señalar a un responsable del descrédito, la Policía de la provincia se llevaba el trofeo. La indignación de los rosarinos se había cebado en ella hacía poco menos de un año: su calamitoso trabajo durante las inundaciones, las represiones a mansalva que había ejecutado durante el pleito con los Jueces y los incidentes en la Facultad de Ingeniería, hacía apenas dos meses, habían agotado muchas paciencias. Consciente del resquemor –el Jefe, tte. cnel. (R.E.) Raúl Monner Ruiz- retiró al personal de las calles el lunes y el martes y confió en la eficacia de pequeñas patrullas. Supuso, a la vez, que habría solo una 500 personas en la Marcha del miércoles (los estudiantes descontaban que habría más de 20 mil) y decidió que 1.800 agentes bastarían para disolver la manifestación. Los hechos habrían de demostrarle que su confianza estaba apoyada en el agua. Ver: *Primera Plana* N° 335, del 27 de mayo de 1969.

²⁰³ Desde un análisis socio-político, es decir, de los estamentos sociales y económicos como de la militancia de los grupos participantes de la movilización, podemos decir que: la composición de la fuerza que social que libró los enfrentamientos estaba compuesta de estudiantes secundarios, empleados, estudiantes universitarios y obreros, ahora bien; en la unidad y el tipo de acción establecida, juegan un papel fundamental los estudiantes secundarios. Son los que más contribuyeron a otorgarle la fisonomía de rebelión a la fuerza social. Su condición de jóvenes poco ciudadanizados, sin organización corporativa o con muy bajo nivel de corporativización y muy baja, o casi nula influencia en la sociedad, crea las condiciones y la posibilidad de iniciar la ruptura de la relación de miedo hacia la presencia de fuerzas uniformadas. Su bajo grado de miedo guarda relación con su bajo grado de ciudadanización. Cuando estos entran en contacto con quienes se descorporativizan en el momento de los enfrentamientos, el resultado da una fuerza compacta con alta capacidad de lucha y bajo nivel de miedo. En el enfrentamiento, se produce entonces, una amalgama entre fracciones de la burguesía y fracciones del proletariado, y el nexo, se encuentra personificado en los estudiantes; y esto había constituido una alianza novedosa de nuevo tipo.

²⁰⁴ Hacia las diez de la noche, ninguno de los 1.800 hombres desplazados por Monner Ruiz se atrevía a alejarse de su centro de operaciones. Dos horas más tarde toda la tropa estaba concentrada en la Jefatura.

²⁰⁵ Las acciones se suceden a efectos de despejar el camino hacia la sede de la CGT, ubicada a escasos metros de las emisoras radiales LT-8 y LT-3, la Jefatura de Policía de Santa Fe y el Cuerpo Central de Bomberos, los Tribunales, el Rectorado de la Universidad y la sede del Comando del II Cuerpo de Ejército.

²⁰⁶ Los estudiantes emplearon técnicas de manual para guerrilla urbana: lanzaron carritos con pequeñas hogueras contra la caballería; coparon las tomas de agua y alejaron a los bomberos con palas y piedras y cerraban las esquinas con alambres de púa.

²⁰⁷ Blanco y dos de sus amigos se habían acercado al epicentro de la batalla a las 20.30 horas. Participaron de algunas corridas y decidieron, al fin, dispersarse hacia la calle Corrientes, a pocos metros de LT8. Allí fue alcanzado por un balazo disparado a mansalva, en plena espalda, que le salió por el pecho. La Policía cargó sobre los que intentaban ayudarlo y desató sus sables contra Blanco. Saña inútil: el muchacho ya estaba muerto. *“Un médico, que pasaba circunstancialmente por el lugar, atinó a llevar al estudiante-obrero al sanatorio más cercano, pero la Guardia de Infantería avanza sobre él con los sables desenvainados. El médico relató luego que, cuando estaba en la puerta del sanatorio se vio obligado a abandonar al herido para defenderse de los sablazos que recibía. Este no fue el único herido de sable; los que entraron a hospitales y sanatorios, en su mayoría, tenían heridas cortantes en varias partes del cuerpo. No cabe duda que fue frente a LT-8 donde la batalla fue más encarnizada”*. Relatado en: Balvé, Beba y Balvé, Beatriz; ob.cit, “El '69...” pp. 99-100.

²⁰⁸ Si el bando del general Fonseca se cumplía escrupulosamente, los esperaban penalidades de uno a seis años.

²⁰⁹ El proceso de luchas políticas y sociales, cuyo punto de partida acababa de realizarse, construiría la consigna que mediría la escala del período que se iniciaba: “ni golpe ni elección: revolución”. Acababa de hacerse efectivo un enfrentamiento de carácter estratégico, que marcaría el tiempo por venir en los próximos siete años; otorgándole a los hechos la calidad de génesis de una situación pre-revolucionaria.

²¹⁰ En la comunicación se sucede el siguiente diálogo: Fonseca: La situación es muy peligrosa y voy a intervenir para que vuelva el orden. Lanusse: Usted califica la situación de grave? Fonseca: Sí mi general. Lanusse: intervenga nomás. De inmediato Lanusse llama a Onganía y le anuncia que ya autorizó la intervención militar en Rosario. Es una barbaridad, respondió el Presidente. De inmediato Lanusse convoco a sus dos colegas, el brigadier Jorge Martínez Zuviría, Jefe de la Aeronáutica y al contraalmirante Constatino Argüelles, accidentalmente a cargo de la Marina, debido a la gira de inspección del Comandante Pedro Gnavi que se encontraba en el Sur. Una vez juntos, los tres Comandantes revisan los informes sobre la batalla rosarina y confirman a Fonseca la orden de reprimir y restablecer el orden. También envían un telegrama a Gnavi quien vuelve de inmediato a la Capital Federal. Martínez Zuviría y Lanusse van a Olivos a ver a Onganía, para explicarle los alcances del operativo y pedirle que respalde a Fonseca. Onganía seguía pensando que era una locura. Los Comandantes lo convencen de la inutilidad de enviar más policías y que era necesario actuar bajo la hipótesis de combate y sin pérdida de tiempo: el Presidente decide darle un decreto de respaldo a la intervención militar de Fonseca. Onganía encomendó –el jueves 22- al Secretario de Difusión –Federico Frischknecht- la confección del Decreto para autorizar la ocupación militar de Rosario. Sea por ineptitud del Secretario o por renuencia del Presidente, la norma se conoció recién a las 21.20 horas.

²¹¹ En tanto, Fonseca había desplazado sus tropas en torno de la ciudad convulsionada, donde terminó de ocupar posiciones a las dos de la madrugada del jueves 22; minutos más tarde emitía un bando militar que colocaba a los perturbadores bajo el Código de Justicia Militar (ver nota 207).

²¹² El Comandante en Jefe del Ejército le brindó al Presidente tres consejos claves: 1) Afirme su autoridad antes que nada; 2) Pasado un tiempo prudencial desde la finalización de los tumultos, reorganice el Gabinete y el equipo de interventores provinciales; 3) De inmediato tienda verdaderos canales de comunicación con el pueblo. Al retirarse Lanusse, pasó a la oficina de Onganía el antiguo Comandante de la Fuerza Aérea –Teodoro Álvarez- a quien le ofreció la Gobernación de Santa Fe. Cfrt: *Primera Plana* N° 335 pp. 11-12.

²¹³ Por aquel tiempo se venía produciendo un enfrentamiento institucional entre el Poder Judicial de la provincia y la Policía provincial. El Juez Rodríguez Maliandi había sido –unos días antes- apartado de jurisdicción y cesanteado en su competencia en función del Bando militar N°1 emitido por el Segundo Cuerpo de Ejército. Sin embargo, horas después la jurisdicción y competencia le fueron devueltas, en virtud que los hechos en que estaban involucrados los estudiantes habían sucedido antes de las 3 de la mañana, hora en que se inicia la ocupación militar y comienza a regir el Tribunal Militar. Es en estas

circunstancias en las que el Juez emite la Resolución en cuestión. Cfrt: Balvé, Beba y Balvé, Beatriz; *ob.cit. "El '69...."* pp. 109-110.

²¹⁴ El 23 de mayo, el general Fonseca –por medio del Bando N°2 instaura la pena de muerte y prepara la conformación de los Consejos de Guerra, nombrando un Tribunal Militar presidido por el teniente coronel Ledesma. Pero, este pidió ser relevado de su cargo, pues según dijo: “en mis funciones no entre juzgar a personas honestas”. Fonseca le respondió: “Usted teniente coronel tiene dos caminos, o preside el Tribunal o se pega un tiro”. El teniente coronel Ledesma fue intervenido quirúrgicamente por un balazo que le penetró en la cabeza, con orificio de salida en el entrecejo. Esto llamó la atención del cirujano que lo intervino, por esa forma extraña de penetrar la bala. No era habitual que los suicidas orientaran el arma hacia ese lugar. Nada se dijo en las versiones oficiales. De todos modos, los Consejos de Guerra se constituyeron y, paradójicamente, dictaron sentencias que recién se conocieron ante la proximidad de la huelga del 30 de mayo. Ver: González Trejo, Horacio; *“Argentina, tiempo de violencia”*, editor Carlos Pérez, Buenos Aires, 1969, pp. 47 y siguientes.

²¹⁵ La verdad, es que en la liturgia propagandística de los distintos medios de difusión se incluyeron la “proclama revolucionaria” junto a la figura del “francotirador furtivo”, pero nunca pudo encontrarse prueba de que esto formara parte de una acción planeada y sistemática de combate.

²¹⁶ Resultaba evidente que las detenciones realizadas durante el día 22, resultaban de carácter preventivo, en relación a los actos que se llevarían a cabo durante la huelga del día 23. Los que fueron detenidos durante el transcurso de la huelga, fueron puestos a disposición de los Consejos de Guerra. Se puede decir que el 21 de mayo de 1969 nace una nueva categorización a partir de la figura del *agitador*, luego del *extremista*, el *subversivo* y finalmente el *enemigo subversivo*. Una categorización que duraría años en la Argentina por venir y que llega hasta nuestra actualidad. A través de denuncias hechas por la CGT se podía inferir que se habían detenido apenas uno o dos obreros –en la noche del día 22- uno perteneciente a la Asociación de Trabajadores del Estado y dos dirigentes del gremio telefónico, detenidos el día 23. Todos fueron llevados al Segundo Cuerpo de Ejército y luego derivados a la Policía Federal.

²¹⁷ En la Federación Universitaria de Córdoba (FUC) coexistían diferentes agrupaciones cercanas al llamado pensamiento nacional, como el FEN, el MALENA –liderado por Ismael Viñas- la AUN, seguidora de Abelardo Ramos, el MNR, que respondía a Guillermo Estévez Boero, la juventud comunista (JC), la Franja Morada y otras agrupaciones trotskistas. Este sector estudiantil, estaba fuertemente compenetrado con reivindicaciones populares concretas y compartía la militancia con la CGTA. A partir de 1966, huelga, movilización popular conflicto o Plan de Lucha, eran cuestiones ya familiares para los estudiantes de la época. Los grupos universitarios de la izquierda radicalizada, no participaron de las movilizaciones de mayo, porque la huelga que dio origen a aquella pueblada fue convocada por las dos CGT unificadas, a las que consideraban burócratas y personeros del régimen.

²¹⁸ Encabezados por el cura Milán Viscovich, los teólogos de la liberación locales intentaban reformular la doctrina de la Iglesia convirtiéndola en lo que los simpatizantes católicos del lugar comenzaron a llamar socialismo cristiano. Incapaces de participar abiertamente en política, los estudiantes pudieron encontrar un foro para la discusión y el debate político en los grupos de estudio católicos que surgieron en diversas facultades a partir de 1966. Cfrt: Brennan, James y Gordillo, Mónica; *“Córdoba Rebelde. El Cordobazo, el clasismo y la movilización social”*, editorial de la campana, Buenos Aires, 2008, pp. 87-89.

²¹⁹ Trabajadores y estudiantes también encontraron una causa común en su oposición al gobierno provincial de Córdoba. El gobernador designado por Onganía –Carlos Caballero- procuraba sofrenar al indócil movimiento obrero mediante un esquema de tipo corporativo, para permitir que representantes del trabajo se sentaran, junto con las empresas, la Iglesia y las Fuerzas Armadas en los Consejos Asesores –meramente formales que, con bastante ingenuidad, creía, calmaría los ánimos de la clase obrera (Reunión de Gobernadores en Alta Gracia del 5 al 7 de mayo de 1969). Tuvo exactamente el efecto contrario, todos los grandes sindicatos de la ciudad desdeñaron la propuesta.

²²⁰ El rótulo de semana rabiosa apareció por primera vez en: Villar, Daniel; *“El Cordobazo”*, Centro Editor de América Latina (CEAL), *“La Historia Popular”* N° 32, Buenos Aires, 1971

²²¹ En los años posteriores a los sucesos se ha observado –cada vez con mayor nitidez- la tendencia a presentar a Agustín Tosco como una figura excluyente del Cordobazo junto a un grupo de organizaciones políticas, gremiales y estudiantiles de izquierda. A mediados de la década del 1960 Tosco era un líder sindical intermedio, cuyo accionar estaba circunscripto a un sindicato privilegiado de Córdoba, integrado por gran cantidad de técnicos y profesionales, más cercanos a la clase media que a los obreros industriales. El mundo político de Tosco era más bien el de la izquierda antiperonista: el Partido Comunista, el Partido Revolucionario de los Trabajadores, el Socialismo y alguna franja del peronismo radicalizado. En sus escritos se reivindica como revolucionario en oposición al reformismo que encarnaba el peronismo y el propio Perón. En aquel paro del 29 de mayo, nada hacía prever el gigantesco enfrentamiento de los manifestantes, con la Policía primero y con el Ejército después, como tampoco la profunda conmoción social que causó la marcha de los trabajadores a la que se sumaron los estudiantes y, finalmente, todo el pueblo cordobés. Nadie puede adjudicarse la conducción u organización de los eventos de ese día. En todo caso, si alguna organización gremial, política o estudiantil puede emerger por sobre las otras o el pueblo en general, ese fue el SMATA bajo la conducción de Elpidio Torres. Sobre Agustín Tosco, Torres dice: *“con Tosco teníamos notables diferencias ideológicas, pero no puedo desconocer que era un gran luchador sindical. Un dirigente defendiendo los intereses gremiales de los trabajadores que representaba el accionar político de su orientación. Las comparaciones son siempre odiosas y mucho más si uno las explica en primera persona. Pero creo, sin soberbia, que en relación a una vida de lucha en torno a las conquistas logradas, mi actividad fue más significativa, no por mi actitud personal, sino por el apoyo de ese gran gremio que me respaldaba. Existía plena armonía entre ambos. Toda mi vida vestí saco y corbata. Recuerdo a un dirigente del PC que conocí en 1957, su nombre era Jesús García y pertenecía al SMATA. Me criticaba diciendo que no podía ser que un dirigente obrero vistiese saco y corbata. Me mostraba con eso el viejo concepto anarquista o de izquierda, muy acendrado, según el cual para ser un buen dirigente había que andar de mameluco, alpargatas y un parche en el trasero. En lo personal siempre tuve claro un concepto: el hábito no hace al monje. Tosco era un hombre que siempre vestía igual que yo. En alguna oportunidad, en un abandono que se hizo en el taller al cual pertenecía, el Gringo, estando en mameluco, salió a la calle creo que sin ninguna especulación de su parte. En esa ocasión se tomó la foto, que más tarde, se usó en forma permanente. Pienso que en lugar de alabarlo deformaron la realidad, porque Tosco no usaba mameluco. Fue el folclore de izquierda quien pretendió crear el mito. El Gringo era un tipo duro en la concepción de sus ideas. A él le molestaba tener que contemporizar conmigo porque no era de su laya política. Ambos nos soportábamos porque sabíamos que no teníamos otro remedio. De una u otra manera teníamos que hablar de cómo íbamos a enfrentar a nuestros enemigos comunes: los empresarios explotadores, los capitalistas y la dictadura de turno”*. Torres, Elpidio; *ob.cit*; *“El Cordobazo...”* pp.127 y 128.

²²² Elpidio Torres, protagonista casi excluyente –junto a Agustín Tosco (LyF) y Atilio López (UTA)- de los sucesos del mayo cordobés, colisiona con James Brennan y lo cuenta así: *“La historia del Cordobazo ha sido tergiversada, se han cambiado los hechos, quienes fueron sus actores y los principales protagonistas. Esto forma parte de las mitificaciones de importantes etapas de lucha del movimiento obrero y, especialmente, la del 29 de mayo en Córdoba. Los que “tocaron de oído” fueron muchos. El último libro que leí, bajo estas características, es la reciente publicación del norteamericano James Brennan, profesor de la Universidad de Georgetown (Washington). En este libro del “criollo” Brennan, nuevamente se comete el tremendo error de intentar modificar la historia, solo quiero mencionar la barbaridad indicada en la contratapa que dice: “los grandes dirigentes de los sindicatos cordobeses, los de SITRAC-SITRAM, René Salamanca, Atilio López y Agustín Tosco...”. Es, lisa y llanamente, un despropósito histórico. Como protagonista del Cordobazo tengo la autoridad suficiente para explicar porque: primero, los sindicatos de la empresa FIAT CONCORD y FIAT MATERFER, SITRAC-SITRAM, no participaron del Cordobazo. Ellos abandonaron la planta a las 15 horas de aquel 29 de mayo de 1969, solo porque la empresa dispuso que la gente se fuera, cuando tuvo conocimiento del volumen de los hechos en el centro de la ciudad. Ni los clasistas, ni los no clasistas, resolvieron adherirse al paro decretado por las dos CGT. Otro de los graves errores que comete Brennan, es mencionar en esa etapa a René Salamanca. Nunca participó. Se ha*

tenido la intención tergiversadora que marcamos o un total desconocimiento de la realidad. Los más buenos escritores de la historia real, hablaron de una mesa de tres patas, formada por: Atilio López, Agustín Tosco y yo”. Cfrt: Torres Elpidio; “El Cordobazo Organizado – La Historia sin mitos”; editorial Catálogos, Córdoba, Argentina, 1999, pp.70-71.

El trabajo de James Brennan al que alude Torres es “El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba 1955-1976”, editorial Sudamericana, Historia y Cultura, Buenos Aires, 1996. Al revisar el trabajo de Brennan, surge a lo largo de su lectura, el error cronológico denunciado como intencional por Elpidio Torres. Los sindicatos clasistas SITRAC-SITRAM, fueron una **consecuencia de los hechos de mayo y no su causa**. Entendemos que el error del autor norteamericano –si bien notorio en la contratapa de su trabajo- tiene que deberse a una confusión cronológica sobre los sucesos en sí y no a una tergiversación intencional o sesgada de los sucesos.

Torres, en el apartado “La Historia sin mitos” correspondiente a su trabajo reafirma: “Es fácilmente comprobable la existencia de algunas publicaciones que han desvirtuado los conceptos de esta rica historia que tanto atrajo a los que, “tocando de oído” demostraron un total desconocimiento de la partitura que ejecutó la orquesta aquel 29 de mayo. Así como, intencionalmente, pretendieron desconocer muchos de los aspectos sustanciales de la historia, también contribuyeron a la formación de mitos sobre algunas participaciones y acciones de sectores radicalizados. Por ejemplo, ni los representantes gremiales de la empresa Fábrica Italiana de Automotores Turín (FIAT): ni el Sindicato de Trabajadores de Materfer (SITRAM), ni el sindicato de Trabajadores de Concord (SITRAC), tuvieron la más mínima participación en las jornadas que desembocaron en el 29 de mayo. Aún más grave es la NO participación en aquel día. Ni la tibia conducción pro-patronal de ambos sectores, ni los autodenominados combativos, hicieron el más mínimo esfuerzo para producir el abandono de esas plantas industriales de Ferreyra, pese a que, columnas de manifestantes, desde los portones, los invitaban a salir. La patronal de ambas plantas, en conocimiento de lo que estaba ocurriendo en otros sectores de la ciudad, dispuso asueto de todo el personal ante el temor que pudieran ocurrir accidentes con trabajadores de otros establecimientos de la zona”. Torres, Elpidio; *ob.cit.*; “El Cordobazo....” pp. 103-104.

“Otro de los errores graves que se cometen, es mencionar, durante el Cordobazo, la presencia de René Salamanca. Nunca participó, se ha tenido la intención tergiversadora –que antes marcamos- o un total desconocimiento de la realidad” *Ibidem*, p.70.

Ciertamente, Salamanca ni siquiera era dirigente sindical en esa época. En aquel momento era obrero metalúrgico y afiliado de la UOM y si tuvo participación en los sucesos, lo fue a título personal como un manifestante más. Tuvo sí, una participación notoria en el Vitorazo, dos años más tarde en la misma ciudad, durante el breve gobierno de Roberto Marcelo Levingston. Organizó la agrupación metalúrgica Felipe Vallese, de la que fue su principal dirigente, y solo cuando comienza a trabajar en la planta IKA –la más importante automotriz de la provincia- pasa su afiliación al SMATA. Se incorporó al Partido Comunista Revolucionario en 1968 y, ya en IKA, construyó la agrupación Clasista 1º de mayo, el Movimiento de Recuperación Sindical y armó la Lista Marrón del SMATA, con la que derrotó al torrismo sin Torres en las elecciones para el Secretariado General de la Sección Córdoba del SMATA. Pero esto fue en 1972, es decir, tres años después de los sucesos del mayo cordobés, durante el gobierno de Alejandro Agustín Lanusse, ya en la definitiva etapa de salida de lo que quedaba de la Revolución Argentina.

²²³ “El comienzo de diversas reuniones en el campo sindical, también señalaban que algo estaba por ocurrir, ya que más allá de lo acordado en el SMATA y la UOM, había una inquietud latente por buscar puntos de coincidencia que permitiera conciliar posiciones para, de esa manera, convenir un plan de acción conjunto del movimiento obrero. Durante varios meses, yo había planteado la necesidad de encontrar el camino que nos condujera a la unidad gremial para poder realizar un paro general. Ese era el clamor de las bases sindicales. Evidentemente, esa unidad debía darse entre ambas CGT, la de Azopardo y la de los Argentinos”. Cfrt.: Torres, Elpidio; “El Cordobazo organizado-La Historia sin mitos”; editorial Catálogos, Córdoba, Argentina, 1999.p.91-92.

²²⁴ Relatado en: Torres, Elpidio; *ob.cit.* “El Cordobazo organizado...” pp. 95-97.

²²⁵ Una explicación de la relación del movimiento estudiantil con las organizaciones gremiales en Córdoba la da Elpidio Torres en su trabajo, en el acápite “Los Universitarios y el Movimiento Obrero” dice sic: “Como ya hemos señalado al comenzar este capítulo, en los años anteriores al Cordobazo y en general a

finis de la década del '60 y comienzos de los '70, los estudiantes, se habían convertido –tanto en el ámbito político como social, en una fuerza que cuestionaba, profundamente, el orden establecido. Se ha dicho que el espíritu de los '60 era la vanguardia de la conciencia colectiva” y bajo el título “Desde la periferia al centro” decía: “Este riquísimo proceso de progresiva convergencia de las agrupaciones estudiantiles con el movimiento nacional y las organizaciones gremiales ya se había manifestado en 1964, especialmente en Córdoba y otros centros universitarios del interior”. Cfrt. Torres, Elpidio; ob.cit, “El Cordobazo....” pp.73 y 77.

²²⁶ La desesperación y la impotencia, ante el hecho consumado, produjo la inmediata reacción de los trabajadores, quienes –sin medir consecuencias- avanzaron decididamente sobre las fuerzas policiales. Los efectivos policiales –al ver el ánimo y el número de los hombres que buscaban vengar la muerte de su compañero, optaron por huir hasta La Cañada esquina Belgrano. Allí estaban estacionados los transportes de tropas a los que preparon todos los efectivos, mientras que la Caballería escapó a galope tendido hacia la plaza San Martín, donde se encontraba la Central de Policía. De allí no se atrevieron a salir hasta aproximadamente las 18 horas cuando fueron informados de la presencia del Ejército y la Gendarmería en las calles.

²²⁷ Desde ese momento, los manifestantes quedaron en control de gran parte de la ciudad, que incluía los barrios: Güemes, Nueva Córdoba, Centro y alrededores hacia el sector Sur, contando con la colaboración mayoritaria de los vecinos –a esas alturas de los hechos sumados completamente a la causa- que arrojaban elementos en desuso desde los techos para que los manifestantes pudieran formar barricadas y evitar así la circulación policial. Elpidio Torres bautizó a esto como “el día de los techos limpios”. Hasta pudo verse a las monjas del Buen Pastor, arrojar trastos viejos a la calle, ante el vitoreo de los manifestantes. Los incendios callejeros por las barricadas fueron la nota particular de esta postal de guerra entre las armas del régimen y una sociedad disconforme. Relatado en: Torres, Elpidio; ob.cit. “El Cordobazo Organizado....”

²²⁸ En relación a la actuación de la Unión Tranviarios Automotor (UTA) en la movilización, Elpidio Torres relata: “Tampoco puedo dejar de comentar, a fuerza de ser honesto en la narración de lo acontecido, la situación de la UTA en torno al paro del 29 de mayo. El gremio que encabezaba el querido “negro” Atilio López, en un principio no estaba decidido a participar activamente. Luego de una serie de conversaciones mantenidas con una comisión del Cuerpo de Delegados de nuestro gremio, la situación cambió radicalmente y al día siguiente se efectivizó la medida. Pero no se dio la sincronización programada, por la que el transporte pararía cerca de mediodía. La UTA adelantó la medida, poniendo en serio riesgo la llegada de las columnas al lugar céntrico prefijado. El espíritu de lucha manifestado hizo que ese inconveniente fuera superado y que cientos de compañeros provenientes de distintas plantas, caminaran – como en el caso de la columna de IKA que me tocó encabezar- más de 9 kms ante la ausencia prematura de transporte”. Torres, Elpidio; ob.cit; “El Cordobazo...” p. 104.

²²⁹ Para una mejor comprensión de la capacidad organizativa de los sindicatos y la magnitud de la movilización, puede verse: Torres, Elpidio; ob.cit; “El Cordobazo...” pp. 92 a 102.

²³⁰ Pero el humor general en Córdoba era más eufórico que vengativo. La mayoría destacó que –más allá de ciertos hechos puntuales que pudieron haberse producido- no se registraron actos de saqueo o pillaje. La gente destruía las cosas, pero no las robaba. Para los habitantes de los barrios, la radio servía de nexo, los ponía al tanto de lo que estaba ocurriendo, en otros lados, y los incentivaba a participar, sabiendo que la reacción era generalizada, lo que llevó a que luego se diera la orden de suspender las transmisiones radiales. En otras palabras: la rebelión se alimentaba a sí misma. Cfrt.; Brennan, James y Gordillo, Mónica; ob.cit. “Córdoba Rebelde....” p. 95.

²³¹ A las 14 horas, una escuadrilla de aviones se halagaba con vuelos rasantes y en picada atemorizaba a la multitud, inquieta por dos comunicados del Tercer Cuerpo de Ejército –al mando del general de división- Eliodoro Sánchez Lahoz- que presagiaban su inmediata intervención. Esta se realizó a las 17 horas, con tropas del Segundo Batallón de Paracaidistas, el 14 de Infantería Aerotransportada , el escuadrón local de Gendarmería Nacional y servicios terrestres de la Aeronáutica; en total, unos 3.000

hombres armados y pertrechados para combate a quienes más tarde se añadieron grupos de artillería liviana. Los conducía el general de brigada Jorge Carcaño. Este general –años más tarde- sería Jefe del Ejército, bajo la gestión constitucional de Isabel Perón. *Primera Plana* N° 336.

²³² Los sucesos de Córdoba no fueron sorprendidos para la comunidad de inteligencia. El general (RE) Señorans –por entonces Jefe de la SIDE- recuerda haber sido informado, alrededor del 15 de mayo, por el Jefe Regional de la SIDE en Córdoba, que tenía fuentes confiables en los sindicatos, de que Córdoba iba a ser sacudida por actos de violencia en el Día del Ejército, justamente el 29 de mayo. Por su parte, el Ministro del Interior –Guillermo Borda- una semana antes de esa fecha, había recibido en su despacho de la Casa Rosada al gobernador Caballero, que había ido a Buenos Aires a presentarle un informe de los planes de la rebelión, a la que él llamaba un “Bogotazito”. La corroboración de que Borda y Señorans tenían información bastante precisa y suficiente, provenía de Dardo Pérez Guilhou –por entonces Rector de la Universidad de Cuyo- quien había estado en la casa del Ministro Borda donde se manifestaba “la cosa se está preparando y va a estallar en unos ocho días”. Es decir que el Gobierno en general y Onganía en particular estaban en claro conocimiento de lo que iba a suceder. Citado en: Potasch, Robert; *El Ejército y la política en la Argentina 1962-1973*, Segunda parte, editorial Sudamericana, Buenos Aires, 1994, p.86.

La gravedad de la situación en Córdoba fue completamente subestimada tanto por el Presidente como por el gobernador Caballero. En la tarde del 28 de mayo una reunión de la comunidad de inteligencia –en la Ciudad de Córdoba- que comprendió a oficiales del Ejército y la Fuerza Aérea, la Policía de la provincia el Ministro de Gobierno y los Rectores de las Universidades Nacional y Católica, estudió la situación y concluyó que al día siguiente habría una manifestación masiva, pero que las fuerzas policiales serían suficientes para mantener el control. El propio gobernador Caballero se lo expresó al Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, general Sánchez Lahoz. *Ibidem*, p.88.

²³³ Un balance extraoficial anunciaba: seis muertos, 20 heridos, 30 arrestados, 50 automóviles quemados, destrozos en media docena de comercios y en la futura estación terminal de ómnibus; asaltos al Ministerio de Obras Públicas, la odiada Dirección de Rentas, la comisaría 9ª y el Círculo de Suboficiales de Aeronáutica. Sánchez Lahoz calculó los perjuicios en 1.500 millones de la época. El sábado, un segundo inventario de la lucha enunciaba: una docena de muertos, un centenar de heridos de bala y unos 130 detenidos.

Ver: *Primera Plana*, N° 336 “La hora de la violencia”.

²³⁴ Para las 18 horas del sábado, ya se conocían las primeras dos sentencias del Consejo de Guerra: 8 años de prisión para Miguel Guzmán y 3 para Humberto Videla, ambos obreros del SMATA. También se divulgó la detención –practicada en la sede de sus organizaciones gremiales- de Agustín Tosco (Luz y Fuerza-Ongarista) Y Elpidio Torres, Jefe del SMATA y vándorista.

²³⁵ El general Lanusse ya había dicho, el 29 de mayo, día en que el Ejército Argentino cumplía 159 años, y que coincidió con la revuelta: “*El Ejército, hoy ha de ser el brazo armado que respalde el nacimiento de una nueva edad de la patria*”; *Primera Plana* N° 336, p.10.

²³⁶ Ese mismo sábado 31 de mayo, al finalizar con éxito la huelga general de 24 horas, la CGT de Azopardo envió –a cada uno de los Comandantes de las Fuerzas Armadas- un telegrama en el cual exhortaba a que “*no se ejecuten actos que puedan provocar un abismo insalvable con el pueblo, ya que la conjunción de ambos es imprescindible para lograr la grandeza nacional*”. *Primera Plana* N° 336 del 3 de junio de 1969.

²³⁷ Tosco fue condenado a 8 años y 3 meses de cárcel y Torres a 4 años y 8 meses.

²³⁸ Desde luego, resulta difícil sustraerse a la tentación de recordar que, a juicio de los obreros, en uno y otro acontecimiento las culpas recaen en la inflexibilidad de dos personales con igual apellido: Alfredo Vasena ayer; Adalbert Krieger Vasena hoy. Al hacer tal comparación se corre el riesgo de caer en el siguiente *calambur*: si en 1919, los militares salieron a proteger los derechos asegurados a las empresas –entre ellas la del magnate Vasena- por la Constitución liberal, cincuenta años después, su propósito

consiste en defender la organización de un Nuevo Estado, de alta eficiencia tecnológica, cuyo manejo quedaría en manos de ellos mismos y de los financistas por un lapso que, – al momento- era desconocido: en esa flamante sociedad, Krieger Vasena sería un funcionario: el administrador de los bienes comunes.

²³⁹ Un análisis de las diferencias intersectoriales hay en: Pablo Gerchunoff y Juan Llach “*Capitalismo industrial, desarrollo asociado y distribución del ingreso entre dos gobiernos peronistas. 1950-1972*”. *Desarrollo Económico*, vol. 5, Nº 57, 1975, p.3-54.

²⁴⁰ James, Daniel; “*Resistencia e Integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina*”; Siglo XXI editores, Buenos Aires, 2010; pp. 294-299. En franca colisión con las opiniones de las hermanas Balvé, James habla de tres años de paz social y califica la situación como producto de las disconformidades sectoriales, y esto no es por cierto la gestación de condiciones pre-revolucionarias.

²⁴¹ Las hermanas Balvé presentan -desde una posición política de izquierda no peronista- las características pre-revolucionarias a que se había arribado en aquel momento, y dicen: *Cabe preguntarse: ¿Cómo se llegó a esta situación? ¿Qué fue lo que la hizo posible? ¿Qué hizo que se extendiera a lo largo del tiempo y cubriera una gran cantidad de espacios sociales? Atribuir a las personas lo que es producto de los procesos sociales, constituye un obstáculo epistemológico en el proceso de construcción de conocimiento acerca de los procesos sociales, habida cuenta que las personas son personificación de relaciones sociales articuladas por estructuras en procesos regidos por las leyes sociales. Desde esta perspectiva teórica, no hay espacio para la intencionalidad, solo capacidad para distinguir intereses de clase antagónicos y comportamientos y alineamientos en relación a los intereses en juego.* Balvé, Beba y Balvé, Beatriz; *ob.cit*; “el ’69....” p. 33.

²⁴² También explica el comportamiento social y político de los trabajadores cordobeses los cambios en los procesos de la industria automotriz. Sin negar otros factores de tipo político, tales como la presencia de la izquierda, es central la presencia de estos cambios como generadores de la protesta obrera. Las industrias automotrices cordobesas, desarrollaron a mediados de los sesenta una serie de reformas en la organización de la producción y de los métodos de trabajo, encuadrados en una política empresarial de reducción de costos, que originaron el descontento obrero. Así surgió –más tarde- un liderazgo clasista cuyo consenso se nutrió en su capacidad para satisfacer las demandas obreras originadas en estos cambios en la producción. La identificación entre trabajadores y líderes se habría dado, no por cuestiones políticas, ya que los trabajadores continuaron siendo predominantemente peronistas, sino por cuestiones meramente gremiales y laborales. La lógica de la argumentación sería que mientras los cambios en las condiciones objetivas del trabajo exacerbaban la identidad de clase, la izquierda influyó –en forma directa- en el surgimiento de una militancia obrera clasista.

²⁴³ El término “*combativo*” tiene una fuerte significancia en el ideario político peronista, en tanto que el término “*clasista*” tiene una significancia más revolucionaria y es producto de un ideario de izquierda no peronista que enfrentaba al peronismo por ser una ideología de claro corte reformista. Finalmente el *hecho maldito del peronismo* (una definición de J. W. Cooke) a mediados de la década del setenta, habría de sesgar, transversalmente, todas las categorías de la pirámide socio económica -de arriba abajo- y todo el arco político –de izquierda a derecha- a modo de cruz, en un solo movimiento abarcativo de casi todo el pensamiento político, cultural y social nacional.

²⁴⁴ Pero: ¿Es posible pensar que, por venir del campo, estos trabajadores no estaban politizados? ¿Qué impacto tuvo el peronismo en estos trabajadores rurales luego devenidos en obreros fabriles? Algunos indicios indican que, estos trabajadores ya habían estado ocupados en el comercio y el transporte antes de migrar hacia las plantas automotrices, es decir que tenían experiencia previa laboral y urbana y contaban con una idea de la cultura sindical. En cuanto a la influencia de la lectura panfletaria de la Resistencia peronista, aquí nos encontramos con el eterno problema de los estudios de la cultura popular: la brecha que existe entre lo que es leído o visto por los actores y la significación que ellos le asignan. La hipótesis sobre las características de clase, la ruralidad y la no iniciación política de los nuevos trabajadores automotrices, es abonada por Mónica Gordillo en su trabajo: “*Los sindicatos mecánicos de Córdoba en los ’60: conciencia sindical y cultura de resistencia*”. Dirección de Publicaciones de la UNC; Córdoba, 1996.

²⁴⁵ James, Daniel; *“Resistencia e integración: el peronismo y la clase trabajadora argentina”*; Siglo XXI editores, Buenos Aires, Argentina, 2010, p. 308

²⁴⁶ Información oficial extractada de varios *Boletines del BCRA* del año 1969 mostraban condiciones bastante auspiciosas para la continuación de la tendencia mostrada. Si bien era cierto que el escenario internacional ya no era el mismo: la Libra británica se había devaluado en 1967 y el Franco francés siguió la misma suerte en 1969. Por su parte, los EE.UU ya tenían un importante déficit fiscal como consecuencia de la guerra de Vietnam y los programas sociales iniciados por el Presidente Lyndon B. Johnson con su política de la Gran Sociedad. Esto conduciría un par de años más tarde (en 1971) a que el Presidente Richard Nixon decretara la inconvertibilidad del dólar estadounidense.

²⁴⁷ Además de las consecuencias directas del Cordobazo, el Gobierno tuvo la mala suerte de enfrentarse con dos importantes complicaciones: la primera, fue que después de casi dos años de depresión de precios y liquidación de stocks, se revertía el ciclo ganadero con una gran retención de vientres y tendencia ascendente de los precios de la carne vacuna. En segundo lugar, el crecimiento económico ocurrido había llegado a tocar el techo de la capacidad instalada. Esto había permitido una etapa de crecimiento fácil y de gran ocupación de la mano de obra. En abril de 1969 la tasa de desempleo, medida como porcentaje del total de la fuerza de trabajo, era del 4,5%. Este fue el registro más bajo del período 1966-1973. Ministerio de Trabajo, *Boletín de Estadísticas Sociales, N° 14*, Buenos Aires, 1972. Esto cambiaba la situación de importante subutilización de la capacidad instalada de la que había partido Krieger y obligaba a realizar inversiones de largo plazo en máquinas y herramientas para la producción y también inversiones de tipo *greenfield* para el aumento de superficie de instalación fabril.

²⁴⁸ En el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad, seguía apareciendo el Estado como el principal inversor en infraestructura y principal motor del desarrollo y reservaba a la inversión privada solo las grandes inversiones productivas.

²⁴⁹ La predisposición favorable a la apertura y el mantenimiento de los canales de negociación, fue particularmente clara en la Córdoba del post-cordobazo, sobre todo a partir de mediados de 1970 con la designación del gobernador Bernardo Bas.

²⁵⁰ No se sabe por qué escaso margen el Presidente hizo valer su criterio personal ante la voluntad de los militares: el Alto Mando deliberó toda la semana, pero no logró impedir la asunción de Imaz en el Ministerio del Interior. El nuevo Ministro político, se encontraba patrocinado por el Embajador en Colombia, Francisco Guevara. Sucedió que, las Fuerzas Armadas, tampoco tenían un esquema de contingencia o recambio con el cual proseguir la llamada Revolución Argentina; si derrocaban a Onganía deberían convocar a elecciones sin pena ni gloria. Tendrían que esperar que el Presidente se equivocara nuevamente, aunque tampoco en ese caso estaba la idea de deponerlo. Simplemente se negarían a sacarlo del atajo, como habían hecho el 29 de mayo en Córdoba un antes en Rosario.

²⁵¹ El jueves 12 de junio, Dagnino Pastore –nuevo Ministro de Economía- en una declaración que leyó a la prensa junto a su antecesor decía: *“vengo a continuar con la política económica de mi antecesor, a acentuar los aspectos del crecimiento y a consolidar y mantener el programa de estabilización de precios”*. *Primera Plana, “Seis agendas para el nuevo Ministro”, Primera Plana N° 338, p.20.*

²⁵² Onganía insistía en que las Fuerzas Armadas no gobernaban ni co-gobernaban: “Yo no les trasladaré jamás el Poder, porque no quiero que el Ejército vuelva a ser el de antes” dijo en una entrevista periodística en el Salón de Invierno de la Casa Rosada. Por supuesto que estas fueron declaraciones de afirmación de su autoridad que ya no condecían con la realidad.

²⁵³ Juan Martín Oneto Gaona, un industrial del tabaco, rechazó la invitación para asumir la cartera de Defensa y Narciso Ocampo, titular del Banco Ganadero hizo lo propio con la gobernación de la provincia de Buenos Aires. Ahí fue cuando el Secretario de Informaciones del Estado (SIDE) –general Eduardo

Señorans- sugirió para la provincia el nombre se Saturnino Llorente (su ex empleador) quien sí aceptó el cargo. También Señorans propuso a Raúl Cuello para un sugerido Ministerio de Hacienda. Pero Dagnino Pastore ya había hablado con el Presidente; si Hacienda se constituye en un Ministerio fuera de la órbita de Economía no sería posible dirigir la actividad económica del país sin contar con el control de las finanzas públicas, le dijo: fue un golpe mortal para la promoción de Cuello. *Primera Plana "Un Gabinete cuestionado"*, pp. 11, 12 y 20

²⁵⁴ Ese martes 10 de junio almorzaron los tres Comandantes en Jefe, alguno expresó que había que resignarse y esperar, otro que había que deponer a Onganía. Prevaleció la opinión de Lanusse: *"No tenemos libreto para continuar la obra revolucionaria y sin él, cualquier resistencia es vana; tendríamos que convocar a elecciones casi de inmediato"* dijo.

Onganía se impuso y a las 19.15 horas, Imaz llegó a la Casa Rosada, pero la jura se postergo casi media hora: Onganía estaba conversando con Lanusse en su despacho. Imaz no es santo de nuestra devoción, habría dicho Lanusse, pero lo aceptamos por una cuestión disciplinaria. No nos hacemos cargo de sus errores. El palco para la jura estaba listo y Onganía y Lanusse subieron últimos. Allí estaba el coronel Francisco Guevara –viejo adversario de Lanusse- *¿Qué haces aquí Guevara?* Le habría preguntado Lanusse. Guevara respondió: *"estoy listo para deshacer las valijas porque el proceso de fondo se juega aquí"*. Cfr; *Primera Plana*, N° 338, p.13.

²⁵⁵ La voz de orden de Lanusse fue: *"Adelantarse a los sucesos, solucionar, por sobre los funcionarios, cualquier fricción política, porque ya no saldremos más a reprimir. No más muertos inútiles"*. *Primera Plana* N° 338, p. 14.

²⁵⁶ El viernes 13 de junio, Onganía parecía haber completado su Gabinete y Lanusse le pidió una entrevista: se reunieron a las 13 horas en el despacho presidencial. Mucho se sorprendió Lanusse cuando, el Presidente, le expuso, nuevamente, su tesis –ahora abonada por Imaz- sobre la "conjura liberal"; si bien Onganía, conociendo el pensamiento de Lanusse, no lo dijo directamente, podía adivinarse el esquema en que había comenzado a moverse. *"Vea Lanusse –dijo el Presidente- yo estuve pensando mucho, durante estos días, sobre la situación nacional, el papel de las Fuerzas Armadas y las perspectivas que se presentan al país. Llegué al fin a una conclusión: usted y yo no podemos seguir juntos en este proceso"*. *"No le voy a ocultar que estoy un poco asombrado por su resolución. De todos modos, si se trata de una decisión del Presidente de la Nación, no tengo nada que discutir"* –respondió Lanusse. Sin embargo –una vez terminada la conversación entre el Presidente y el Comandante en Jefe- Lanusse le dijo a Onganía que sería útil que conversara, ahora, sobre el problema como dos antiguos camaradas de arma: Onganía y Lanusse. Al retirarse Lanusse –después de una charla de más de una hora- le preguntó a Onganía cuál era el temperamento que debía adoptar a partir del conocimiento de la decisión del relevo. Onganía le dijo: *"deje todo en suspenso. Esta noche volveré a hablar con usted"*. A las 20 horas Lanusse recibió en su despacho del comando, una carta de Onganía –llevada por el Jefe de la Casa Militar, Almirante Fortunato- en ella, Onganía, con afecto y respeto, le consultaba su opinión sobre un candidato a Ministro de Defensa. Lanusse le dijo a Fortunato que iría, ahora mismo, a la Casa Rosada a ver a Onganía, Fortunato le contestó que lo estaba esperando. A las 21 horas Lanusse y Onganía se volvieron a reunir en el mismo lugar. Lanusse le preguntó al Presidente: *"Con respecto a la conversación que tuvimos esta mañana, quisiera saber cuál es su decisión definitiva"*. Onganía le contestó: *"Considero que esa conversación no existió nunca"*. Lanusse, Alejandro Agustín, Mi testimonio, Laserre editores, Buenos Aires, 1977, pp.27 a 30.

El candidato a Ministro de Defensa que Onganía, objeto de la consulta a Lanusse era, quien finalmente asumiría ese Ministerio, el abogado José Rafaél Cáseres Monié. Este hombre tendría el raro record de atravesar, indemne en su Ministerio, las gestiones presidenciales de Levingston y Lanusse.

En la misma tarde del 13 de junio, el Presidente había convocado al Jefe de Estado Mayor Conjunto –general José Jaime Toscano- a su oficina de la Casa de Gobierno, para ofrecerle el cargo de Comandante en Jefe. Toscano, sin embargo, rechazó el ofrecimiento porque él creía que era un error reemplazar a Lanusse: el Jefe de Estado Mayor –un oficial muy respetado por los oficiales de las tres Armas- persuadió al Presidente de lo innecesario e inoportuno de ese relevo, por lo que el Presidente actuó de la manera ya comentada con Lanusse. Cfr; Potasch, Robert, *ob.cit. "El Ejército..."*, p. 100.

²⁵⁷ El lunes 2 de junio, Lanusse le había explicado al Presidente todo lo que sabía sobre los sucesos de Córdoba: *“Estoy totalmente seguro –le dijo- que esto estuvo lejos de ser obra exclusiva de la subversión. Los elementos subversivos actuaron –es cierto- y hasta en algún momento marcaron el ritmo. Pero en la calle se veía el descontento de toda la gente. Por lo que pude ver y escuchar, así como por lo que vieron y escucharon los jefes y oficiales de la guarnición, puedo decirle que fue la población de Córdoba, en forma activa o pasiva, la que demostró que estaba en contra del Gobierno Nacional en general y del Provincial en particular”*. Lanusse, Alejandro Agustín; “Mi testimonio”, Laserre editores, Buenos Aires, 1977, pp. 15-16

²⁵⁸ Cfr; *“Aramburu en reserva”*, revista *Análisis*, 2 de diciembre de 1969 (con foto en tapa). Como antecedente periodístico; Cfr; *“Aramburu: ¿otra vez Presidente?”*. *Primera Plana*, N° 281, 14 de mayo de 1968.

²⁵⁹ El Congreso de La Cumbre, se realizó el sábado 24 de mayo en el Hotel Palace de esa ciudad –en una Córdoba ya incidentada- y la facción de Intransigencia Nacional, controlada por los sabattinistas cordobeses, había invitado a algunos dirigentes nacionales (Balbín, Illia y Palmero, ex Ministro de Interior de Illia). Balbín atinó a darse cuenta de la encerrona que significaba el Congreso –en manos de la intransigencia sabattinista- y alcanzó a regresar con su grupo, justo a tiempo. El incidente de La Cumbre tuvo eco en Buenos Aires: un grupo de dirigentes rebeldes asumió –de facto- la conducción del distrito. *Primera Plana*, N° 338, p.14

²⁶⁰ Aunque no hay documentos que lo verifiquen, el acuerdo parece haber sido, que a cambio del compromiso sindical de apoyar al Presidente, Onganía les daría a los líderes sindicales una porción del poder y adoptaría políticas económicas que protegerían a las industrias nacionales y resultarían en el reparto más equitativo del Ingreso Nacional a favor de los trabajadores.

²⁶¹ Se designa a Carcagno, porque su Jefe –el general de división Eliodoro Sánchez Lahoz- no podía abandonar el mando del Tercer Ejército –al que respondían las guarniciones de Mendoza, Tucumán y Salta- en manos de un oficial de menor graduación que la suya. Además, como Carcagno asumiría la conducción política de la provincia, pasaba a depender –directamente- del Comandante en Jefe Lanusse en el orden castrense.

En Buenos Aires, el nuevo Ministro del Interior –Francisco Imaz- confirma el nombramiento de Carcagno cerca de las 17.45 horas y vuela a Córdoba para ponerlo en funciones. Hacia las 22 horas se divulga la Ley de Intervención a la provincia por los Decretos 3392 y 3392: uno para aceptar la renuncia de Caballero y el otro para nombrar a Carcagno. El primer mensaje de Carcagno como Interventor Federal reveló a un soldado: *“Vengo en cumplimiento de una orden superior –dijo- cuando las disensiones internas amenazan convertir a la provincia en un cruento escenario, con su sombría secuencia de sangre y dolor. La autoridad militar afronta el momento con el impostergable propósito de restablecer el orden y también la paz”*. Carcagno nombró a un Gabinete de estricto corte militar con el coronel Albano Harguindeguy como Ministro de Gobierno. Tres coroneles, un teniente coronel y brigadier completaban las Carteras. Cfr; *Primera Plana*, N° 339, p. 13.

²⁶² ¿Qué había hecho Carcagno? Simplemente obtener la pasividad de los trabajadores cordobeses en huelga, solicitar el diálogo, hablar de paz. Es decir: cuando gobernaba en Córdoba un civil –nombrado por el Presidente- Carcagno debió sacar sus tropas a la calle para defenderlo de una sublevación alimentada por los errores oficiales. Expulsado el gobernador Caballero y entregada al Ejército la conducción de la provincia ya no era necesario acudir a la fuerza para dirimir antagonismos.

²⁶³ El sábado 14 de junio, dos días antes de la designación de Carcagno como Interventor Federal, –en prevención al paro de 36 horas dispuesto por ambas centrales obreras para el martes 17 y el miércoles 18 de junio- viajó a Córdoba el teniente coronel Rolando Obregón, enviado por Lanusse para intentar desactivar o desalentar el paro o, al menos la magnitud de la movilización. El enviado mantuvo reuniones con los líderes sindicales locales de ambas centrales y utilizó un argumento impecable: dijo que la movilización podría ser enorme y rebalsar a los sindicalistas y que los grupos de extrema izquierda no

peronistas podrían robarle la conducción. El domingo 15 se reunieron –en un lugar no revelado- el Jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, Sánchez Lahoz y los líderes de los sindicatos más fuertes, SMATA y LyF. Los argumentos de Obregón –que no eran descabellados- parecían haber surtido efecto y sus posiciones se ablandaron. El plenario de la CGT unificada decidió confirmar la huelga general para el martes y miércoles, pero suspender la marcha hacia la Plaza Vélez Sársfield. Al otro día la provincia fue intervenida.

²⁶⁴ La idea era que, si las Fuerzas Armadas eran la reserva de última instancia, habían dejado de serlo al intervenir, primero en Rosario y después en Córdoba. Por lo tanto, tenían que dar un paso atrás. Como también era las responsables de la existencia del Gobierno –ellas habían derrocado a Illia, no Onganía- tenían que velar porque el Gobierno ejerciera con sensatez el mandato que le habían otorgado, que no era el de llevar a la Nación al caos.

Un colaborador de Lanusse -en aquellos días de desaliento- llegó a comentar que una cosa era reconocer el poder de los fusiles y otra era ser “*el loco del rifle*” aludiendo al respaldo del Ejército en las decisiones del Presidente. Cfr; Lanusse, Alejandro; “*Mi testimonio*”, Lasserre editores, Buenos Aires, 1977, p. 61.

²⁶⁵ Como siempre, quedaron desairados los estudiantes: la Coordinadora Estudiantil de Lucha se enteró –recién a la mañana de ese día- que se habían suspendido los actos y la movilización de la CGT y, por lo tanto su movilización falló. No era la primera vez que esto sucedía: cuando –en setiembre de 1966- hicieron la protesta por la muerte de Santiago Pampillón y contaban con la promesa obrera de plegarse, lo único que consiguieron fue un mensaje de adhesión pronunciado por Elpidio Torres –líder del SMATA- cuando los manifestantes pasaron frente a la planta de automotriz de IKA.

²⁶⁶ Cuando comenzaba a oscurecer, en algunos barrios vecinos a la ciudad (Güemes, Observatorio y Bella Vista) estallaron algunos pequeños brotes de violencia. Hubo dos heridos leves lastimados en las piernas: pudieron haber sido muertos; no fue casualidad que los disparos policiales hubieran apuntado tan abajo.

²⁶⁷ Jáuregui había estado afiliado al Partido Comunista hasta que este lo expulsó en 1965, cuando – lanzado al liderazgo gremial- desalojó del Sindicato de Prensa a los adictos del MUCS. Esto no impidió que en su edición del 1° de julio en su órgano de prensa *Nuestra Palabra*, el PC condenara la muerte de su ex afiliado e hiciera responsable de ella a la Policía; sin decir ni una palabra sobre la carrera política de Jáuregui. Secretario de la Federación Argentina de Trabajadores de Prensa, Jáuregui ocupó un escaño en el Comité Central Confederado de la CGT. Al momento de su muerte, se encontraba dedicado al periodismo –dirigía Codepro- órgano de prensa de la cooperativa del mismo nombre. Citado en Primera Plana N° 341, p.17.

²⁶⁸ Justamente ese día, estaba agendado el almuerzo con el coronel Premoli y funcionarios de la Casa Rosada, para sellar el acuerdo que lo vincularía con el proyecto político oficial y le brindaría al régimen la base de apoyo gremial que tanto necesitaba.

²⁶⁹ A las 11,30 horas, cuando Vandor acababa de terminar una conversación telefónica con Antonio Cafiero, en el despacho de la UOM de La Rioja 1945 se escucharon gritos. Vandor salió y preguntó a Alfredo Pennisi –delegado de la UOM en Santa Fe- que era lo que sucedía. Solo alcanzó a ver dos intrusos que dispararon contra él. Vandor quedó tirado en el pasillo con cinco disparos de calibre 45 en el cuerpo. Los asesinos dejaron una bomba al lado del agonizante Lobo y huyeron, con la misma velocidad que habían llegado. Habían utilizado para entrar a la sede sindical credenciales judiciales falsas. Vandor murió antes de llegar al policlínico del gremio. La tragedia –que habría de cambiar el destino de los acontecimientos en el país- había sido consumada en menos de 15 minutos.

Crónicas sobre el asesinato de Vandor: “*En el primer semestre de 1966 se sucedieron los enfrentamientos internos en el sindicalismo peronista y en el seno de la propia UOM. El 13 de mayo de ese año comenzó a sesionar en Avellaneda el Congreso Nacional del gremio. Aprovechando un cuarto intermedio, los principales dirigentes metalúrgicos, entre ellos Vandor y su segundo, Rosendo García y Armando Cabo (padre de Dardo) se reunieron a tomar algo en un bar de la zona. Augusto Vandor y Armando Cabo, que*

están sentados con García, sí tenían armas. A pocos metros de ellos, en otra mesa, se reunían los delegados del peronismo revolucionario Domingo Blajaquis y Juan Salazar. Comenzaron los insultos que se transformaron en agresiones físicas. Vandor lo miró a García y le dijo: "atrás hay cuatro tipos que no me gustan nada". Rosendo se dio vuelta y justo vio que uno de los cuatro sacaba un revólver. Del grupo de Vandor partieron varios disparos. Cuando pasó la confusión y retornó la calma tres cadáveres yacían en el suelo de la confitería Real: el de Blajaquis, el de Salazar y el de Rosendo García. Según la versión vandorista Rosendo García alcanzó a decir, tendido en el piso de su muerte: "Tené cuidado, Augusto. Te la quieren dar con todo. A mí ya me la dieron...". El escritor Rodolfo Walsh, en su célebre ensayo Quién mató a Rosendo, responsabiliza a Vandor por todas las muertes, incluyendo la de García. El informe de Walsh estaba avalado por pericias balísticas que el expediente judicial no tuvo en cuenta al declarar al Lobo libre de culpa y cargo. www.elhistoriador.com.ar/articulos/revolucion.../asesinato_de_vandor.ph

Diario El Litoral, Santa Fe, edición del 29 de junio del 201: a 45 años del asesinato de Vandor: *"Los cinco integrantes de lo que luego se conocería como Ejército Nacional Revolucionario (ENR) bajaron del auto que dejaron estacionado en la puerta del gremio de calle La Rioja 1945 y, cumplida su faena, se retiraron en dirección a avenida Caseros. Nunca más se supo de ellos. Nadie, hasta el día de hoy, sabe a ciencia cierta quiénes fueron los que perpetraron ese operativo. Hay rumores, trascendidos, deducciones, pero pruebas concretas con nombres y apellidos no hay. A mediados de 1968, Rodolfo Walsh publicó en unos cuadernillos de la "CGT de los argentinos" su investigación sobre la muerte del dirigente metalúrgico de Avellaneda, Rosendo García. El libro se conoció luego con el nombre de "¿Quién mató a Rosendo?". Allí se alude al episodio que tuvo lugar el 13 de mayo de 1966 en la pizzería La Real de Avellaneda, cuando dos facciones sindicales se trenzaron a tiros. Según Walsh, el responsable de la muerte de García fue Vandor. También le atribuyó la muerte de Domingo Blajaquis y Juan Salazar. Entre los guardaespaldas o amigos de Vandor estaba Armando Cabo, el padre de Dardo y uno de los dirigentes míticos de la resistencia sindical peronista. También Beto Imbelloni. Un desconocido Ejército Nacional Revolucionario (ENR) se atribuye el asesinato, al que denomina Operación Judas. Catorce meses después, el ENR vuelve a ser noticia: el 27 de agosto de 1970, mata a tiros a José Alonso, dirigente de la Asociación Obrera Textil".*

Senén González, relata así las repercusiones internacionales: *"La reacción en el exterior es inmediata. The New York Times inserta en tapa una fotografía del encuentro entre el Presidente Onganía y Nelson Rockefeller que se había realizado en la víspera. El pie del grabado reza: "En el momento de la reunión, era asesinado Vandor, dirigente sindical y amigo del Presidente". El brasileño Tribuna de Imprensa, asevera: "El asesinato de Vandor puede provocar el caos en Argentina". El diario Ya de España en un editorial, advierte también sobre los peligros de guerra civil y traza un paralelo con el asesinato ocurrido en julio de 1936 del político monárquico español José Calvo Sotelo, uno de los factores desencadenantes de la guerra civil española. El Mercurio de Chile, compara el magnicidio: "El asesinato de Vandor es, guardando las proporciones de personas y lugar, semejante, en sustancia, a los de Martin Luther King o los hermanos Kennedy". Senén González, Santiago y Bosoer, Fabián; "Saludos a Vandor: vida muerte y leyenda de un Lobo", Vergara editores, Buenos Aires, Argentina, 2009, p. 240.*

²⁷⁰ El mismo día del asesinato de Vandor, arribaba al país Nelson Rockefeller quien se enteró del asesinato cuando regresaba al Hotel Plaza –donde se alojaba- después de conferenciar con el Presidente. Le dieron la bienvenida los atentados contra 13 sucursales de la cadena de supermercados de su propiedad: la muy conocida, por entonces, MINIMAX. A pesar que los funcionarios y empresarios privados se empeñaron en del mostrar la imagen de una Argentina pujante, el enviado del Presidente Nixon no se llevó una buena imagen del país.

Santiago Senén González lo relata así: *"Además, unas células identificadas con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) de orientación guevarista, habían incendiado trece supermercados Minimax en repudio a la presencia de Nelson Rockefeller en Buenos Aires. La Embajada norteamericana ya había reportado a*

Washington más ataques contra oficinas y empresas norteamericanas, manifestaciones contra la visita del gobernador de Nueva York, enviado del Presidente Richard Nixon y magnate norteamericano, y el paro previsto para el día 30 por la Federación Universitaria (FUA) controlada por los comunistas". Senén González, Santiago y Bosoer Fabián; ob.cit; "Saludos...." P. 223

²⁷¹ La Ley 18.281 –de intervención a la CGT- dictada el 14 de julio designaba a Valentín Suárez como Delegado del Poder Ejecutivo Nacional para normalizar la CGT, asignándole las atribuciones y facultades que el Estatuto de la propia CGT concedía a los organos de dirección y administración. La movida fue resistida –al principio- por la Comisión de los 20 que ahora controlaba la CGT de Azopardo.

²⁷² Córdoba fue testigo de paros del trabajo el 27 de agosto en respuesta a un llamado a la huelga por parte de la Comisión de los 20; y el 17 y 18 de setiembre, cuando los estudiantes volvieron a unirse a los trabajadores en escaramuzas con la Policía. En Rosario, los asaltos a la propiedad pública fueron tan graves que, el 17 de setiembre, tuvo que intervenir el Ejército para restablecer el orden. Una huelga general a nivel nacional y de 36 horas –anunciada para el 1° y 2° de octubre- fue suspendida en las primeras horas de la mañana del 27 de setiembre, después de una reunión de quince líderes sindicales de la Comisión de los 20 con el Presidente. El coronel Premoli sirvió como intermediario clave entre los líderes sindicales y el Presidente. Cfr; *Diez años de polémica, 1962-1972: los hechos y los hombres* N° 16: "La intervención a la CGT".

²⁷³ Un documento redactado por un oficial del Estado Mayor Conjunto –el coronel Francisco Cornicelli- denominado "Estado de ánimo de los cuadros" resumía la situación en estas palabras: "El Presidente de la República ha perdido autoridad, no solo ante el país, sino también ante el Ejército. En este sentido, la reacción es propia a la de quien, de golpe, se ha visto defraudado. Consecuentemente con lo expresado, se considera imperativo iniciar una nueva etapa, en la cual el Ejército –por intermedio de su Comandante en Jefe- asuma un papel rector acorde con la responsabilidad que la población le atribuye en la conducción del proceso". El documento fue preparado para el general López Aufranc, Jefe de Operaciones del Estado Mayor General. Más tarde, Cornicelli, sería designado secretario ayudante del general Lanusse. Potasch, Robert, ob.cit. "El Ejército y la...."p. 104.

²⁷⁴ Para este fin se dispuso un encuentro entre el general Labanca y Onganía, el 29 de junio. Si bien la reunión se mantuvo en secreto, al fin, el general Lanusse se enteró del hecho. Pero para aquel momento ya era evidente que Labanca se encontraba muy comprometido en algún tipo de actividad disidente o en un complot concreto. Potasch, Robert; ob.cit. "La Política y...." p.106.

²⁷⁵ El intento, unos días después, por parte de tres oficiales –dos coroneles y un teniente coronel retirado- de reclutar apoyo para Labanca entre oficiales de la Tercera Brigada de Curuzú Cuatiá y la Quinta Brigada de Tucumán, fracasó cuando los Comandantes de las Brigadas informaron de los episodios a sus respectivos Comandantes de Cuerpo. Fue la investigación consiguiente acerca de las actividades de los tres oficiales la que sacó a la luz la reunión entre Onganía y Labanca y fortaleció la decisión del general Lanusse de no ser sacado por la fuerza de su cargo. Véase: Informe A-408 de la Embajada de los EE.UU del 25 de agosto de 1969, para una revisión general de las relaciones de Onganía con el Ejército después del Cordobazo. Increíblemente, la versión no menciona ni el intento de Onganía por reemplazar a Lanusse, el 13 de junio, que fuera desalentado por el general Toscano; ni el encuentro posterior con el general Labanca.

²⁷⁶ Cfr. "Diez años de polémica; 1962-1971: los hechos y los hombre; La intervención de la CGT, N° 16, p.142.

²⁷⁷ Para la alocución de Lanusse ver: *La Nación* del 8 de agosto de 1969. La tapa de la agravante edición de Primera Plana del 5 de agosto, llevaba una imagen del Lanusse y el título del artículo en cuestión era "La ofensiva de Lanusse"

²⁷⁸ La decisión de Lanusse de reemplazar al general de división Eduardo Uriburu como Comandante del Quinto Cuerpo de Ejército, significaba el relevo de un general de neto corte nacionalista demasiado abierto

a las declaraciones, ese fin de año lo pasó a retiro. Mariano Castex sostenía que pocos en el Gobierno comprendieron la importancia de los cambios introducidos por Lanusse en la estructura del Ejército. Ver: Castex, Mariano; *El Escorial de Onganía*, editorial Hespérides, Buenos Aires, Argentina, 1981, p. 196.

²⁷⁹ El mismo Secretario de Informaciones del Estado (SIDE) general Eduardo Señorans, amigo personal del Presidente, en el mes de octubre le entregó un informe sobre la situación para 1970 le hacía saber que “*sería un año muy caliente*”. El propio Lanusse comentó el informe con Onganía –en una reunión sostenida entre ambos el 16 de enero de 1970- quien le comentó que, “*esos vaticinios escapaban a la realidad*”. Lanusse, Alejandro; *ob.cit. “Mi Testimonio”*, p. 75.
Lanusse propuso a Onganía –a principios de 1970- la creación de algo así como un Estado Mayor General del PEN, para institucionalizar la presencia de las Armas en él y enfatizar la necesidad de un plan político. Obviamente, el Presidente no lo tuvo en cuenta.

²⁸⁰ La Comisión fue conformada por LyF, calzado, aguas gaseosas, FOECYT, molineros, SOEME, obreros del vidrio, mecánicos, gastronómicos, seguro, alimentación, turf y telefónicos. Dawyd, Darío; *ob.cit. “Sindicatos y política....”* P. 231.

²⁸¹ Los temas tratados en la reunión giraron sobre cinco reclamos básicos; 1) libertad de los presos; 2) derogación del Estado de Sitio; 3) devolución de las organizaciones intervenidas; 4) paritarias y aumentos, previa congelación de precios, y; 5) reincorporación de los cesantes. Sin embargo, la situación en la Comisión era difícil, porque en ella convivían quienes rechazaban toda vuelta a la acción, otros más decididos y quienes temían ser desbordados por las bases.

²⁸² *La Razón*, miércoles 20 de agosto de 1969.

²⁸³ Contrariamente a las especulaciones de la opinión pública del momento, el Ejército no se opuso a la decisión del Presidente de amnistiar a los líderes sindicales -entre los que se encontraban Elpidio Torres y Agustín Tosco- por los hechos de mayo en la ciudad de Córdoba. La justificación del Gobierno era que la medida contribuiría a la pacificación interna. En realidad, sin que lo supieran la mayoría de los civiles y militares, la iniciativa que llevó a la amnistía había provenido del propio Ejército: la Corte Suprema había pedido los registros relacionados con los juicios y estos habían mostrado que los tribunales militares, en medio del apuro y su falta de experiencia, habían violado o desconocían numerosas normas legales. Preocupados por el hecho del descrédito público, si esto llegaba a difundirse, pero al mismo tiempo, preocupados por el hecho que la liberación de los activistas pudiera implantar un mal precedente para el futuro; la cúpula militar concluyó que un perdón, siempre que no apareciera como idea del Cuerpo, era el mejor modo de liberarse del problema. Potasch, Robert; *ob.cit. “El Ejército....”*, p. 113 y 114.

²⁸⁴ Finalmente, el 26 de febrero de 1970 se conoció la Ley 18.610 de Obras Sociales, en la que se estableció que estas serían conducidas por los trabajadores pero de manera independiente al sindicato. Las mismas prestarían servicios a los afiliados y jubilados. Los aportes serían: 2% a cargo del empleador; 1% a cargo del trabajador solo y 2% para el trabajador con familia. Se creaba el Fondo de ayuda a las Obras Sociales débiles o las fuertes si lo requirieran. Al mismo tiempo se creaba el Instituto Nacional de Obras Sociales (INOS) integrado por un presidente designado por el Estado, cinco vocales del Estado, tres vocales obreros -de la CGT- y dos por el empresariado –uno de ACIEL y otro de la CGE- encargados de promover, coordinar y controlar las Obras Sociales. La ley de Obras Sociales ayudó financieramente a los sindicatos que las poseían y a crearlas allí donde los convenios colectivos no hubieran creado ninguna. Ciertamente, los antecedentes en materia de salud señalaban la heterogeneidad de los servicios, la fragmentación y la vulnerabilidad de quienes no poseían cobertura y la ley buscó consagrar una institución social para la vida de los sindicatos, en ese momento y para el futuro, consolidando un elemento clave de la identidad sindical argentina.

²⁸⁵ Si bien ya lo hemos visto con anterioridad, aclaramos las correspondencias de las siglas: NCO era Nueva Corriente de Opinión; NA era el grupo de los No Alineados; GI, el Grupo Independiente y MUCS era el Movimiento de Unidad y Coordinación Sindical.

²⁸⁶ En una proyección poblacional se estimaba que, para 1980, habría unos 287 mil alumnos universitarios en todo el país y que el 85% estaría concentrado en la UBA, lo que significaba que esta Universidad debería albergar –para ese entonces- unos 150 mil estudiantes. Una cifra imposible con la infraestructura existente. Ver: *Primera Plana* N° 343, “*Las nuevas Universidades*”.

²⁸⁷ Los estudios estadísticos y de factibilidad serían realizados por la Secretaría de Educación y se suponía que llevarían de dos a tres años como mínimo. Las futuras Universidades debería instalarse en campus de 200 Ha. Como mínimo y no admitir más de 20 mil alumnos en sus aulas. Según el proyecto, en el centro se ubicarían cinco Departamentos interrelacionados, todos de Ciencias Básicas: Humanidades, Biología, Física, Química y Matemáticas, que concluirían sobre el edificio central, la Biblioteca común. Dos inmuebles complementarios –Auditorio y Administración- completaban el entorno. En las esquinas del terreno se levantarían las residencias de los profesores y alumnos, las áreas de deporte y el Centro de Ciencias Aplicadas.

Todo un proyecto ambicioso que demandaría, en total, unos diez años, su costo: mil millones de pesos.

²⁸⁸ Nadie duda que en 1955, la fría relación de fuerzas favorecía a Perón; que en 1917 favorecía a los zares; que en 1789, favorecía a los Borbones y que en 1776 favorecía a las autoridades coloniales en América del Norte. Seguramente, dos meses antes de cada una de las crisis que cambiaron la historia, gran parte de los protagonistas no sospechaban, siquiera, el rumbo que finalmente tomarían los hechos.

²⁸⁹ El 18 de setiembre de 1969, un conjunto cercano a los cuarenta oficiales intermedios, la mayoría de ellos perteneciente a la estructura profesional del Colegio Militar de la Nación, fueron sospechados de comunistas y fueron alejados de las filas del Ejército, con la anuencia del Comandante en Jefe. Estos oficiales formaban parte de una corriente que veía con creciente entusiasmo el establecimiento en Perú de un Gobierno militar de sesgo izquierdista encabezado por el general Velazco Alvarado. Cfr: García Lupo, Rogelio; *ob.cit.* “*Mercenarios y...*”, *La purga de la oficialidad joven*; p. 111

²⁹⁰ El 8 de diciembre, Lanusse –en una reunión de la Junta de Comandantes- había comunicado su decisión de resistir cualquier intento de desalojar de su puesto al Comandante en Jefe de la Marina y Gnavi apoyó esa decisión. En esa reunión, el coronel Cornicelli, asistente personal de Lanusse, sostuvo que el enfrentamiento con el Presidente –tal como iban las cosas- se produciría en algún momento sobre mediados de 1970. Ver: Potasch, Robert; *ob.cit.* “*El Ejército y la...*” p. 117

²⁹¹ En un trabajo entregado el 18 de noviembre de 1969, el Jefe de Estado Mayor enunciaba las alternativas a la vista: a) Un nuevo Presidente; b) Un Primer Ministro; c) Un proceso electoral precipitado e inmaduro; d) La anarquía. La respuesta fue fijar un plazo para el proceso de la Revolución Argentina, vencido el cual debería llamarse a elecciones. Pero se insistía en que se necesitaría de dos a tres años para llevarlo a cabo. Es decir, habría que llamar a elecciones entre 1972 y 1974. Como, finalmente sucedió. Ver: Lanusse, Alejandro; *ob.cit.* “*Mi testimonio*” pp. 67-68

Curiosamente, el general López Aufranc, había consultado a Costa Méndez y Krieger Vasena sobre la posibilidad de su regreso al Gabinete. El general Guglielmelli –un intelectual del Ejército- había expresado su interés en el cargo de Primer Ministro cuando se enteró de la idea durante una conversación informal mantenida el 23 de noviembre con Cornicelli. El 9 de abril de 1970 –en otra conversación con Cornicelli- le dijo que creía había llegado el momento del enfrentamiento y que Lanusse debía tomar el control a través de un *Premier*. Ver: Potasch, Robert; *ob.cit.* “*El Ejército...*” p. 118.

²⁹² Aramburu había establecido su credibilidad al honrar su compromiso de realizar elecciones y entregar el poder a un sucesor civil. Así el Presidente de facto de la llamada Revolución Libertadora que derrocó a Perón, había entregado el Gobierno –después de elecciones constitucionales pero con la veda del peronismo- a Arturo Frondizi. En consecuencia, disfrutaba de un apoyo considerable entre los argentinos de clase media (no peronista) por su integridad personal y compromiso democrático. Pero no era favorito de los *nacionalistas*, que seguían resentido por su papel en el derrocamiento de Lonardi.

La campaña para promover a Aramburu como reemplazo de Onganía comenzó en octubre de 1969 y el ex Presidente concedió entrevistas para concitar apoyos más allá de su electorado establecido. Pero,

Aramburu siempre dejó en claro que no era un liberal doctrinario en temas económicos. La relación entre Lanusse y Aramburu era prácticamente inexistente, al menos desde 1963, cuando Aramburu enfureció a Lanusse al adoptar una posición neutral ante el levantamiento *Colorado* contra el Gobierno de Guido apoyado por los *Azules*.

²⁹³ Un análisis sobre el punto en; Revista *Periscopio*: “*El nuevo Aramburu*”, 17 de febrero de 1970

²⁹⁴ Lanusse, Alejandro; ob.cit. “*Mi testimonio*” p. 76

²⁹⁵ El discurso de Lanusse ante el Colegio Militar de la Nación fue bastante controversial, por lo que no se entendía muy bien la calurosa aprobación del Presidente; ya que Lanusse, en el mismo discurso había dicho que el Ejército “*había gestado e iniciado la Revolución Argentina*” y que él como Comandante en Jefe, sentía la obligación de ser “*un permanente actor de su proceso y no un mero espectador*”. Era evidente que Lanusse ya había elegido el camino como censor del proceso. Onganía había llegado a decirle a Lanusse, después de la alocución: “*Así había que hablarle al Ejército*”; Cfr: Lanusse, Alejandro; ob.cit; *Mi Testimonio*, p.83

²⁹⁶ Onganía le pidió a Roth que asumiera la Representación ante los Organismos Internacionales en Ginebra (Suiza) donde había una pieza clave del comercio exterior argentino: el GATT (Acuerdo General de Tarifas y Comercio Internacional). Pero Roth aceptó la Embajada en Ginebra: aquella Embajada concentraba el comercio de carnes y Krieger Vasena acababa de aceptar un sillón en el directorio de DELTEC INTERNACIONAL. Nótese que, casualmente, Krieger al ser nombrado Ministro de Economía y Trabajo cumplía la función de Representante argentino ante el GATT. Cfr: Roth, Roberto; “*Los años de Onganía*”, ediciones La Campana, Buenos Aires, Argentina, 1980, p. 348-349.

²⁹⁷ Pero, con Martínez Zuviría había una diferencia importante: había sido compañero de Lanusse en el Colegio Militar y tenía una sólida amistad con él. A mismo tiempo, Martínez Zuviría era considerado por el Presidente como un gran amigo. Pero había una diferencias sutil entre ambas amistades: mientras que Onganía nunca pudo llegar a tutear a sus amigos militares, Martínez Zuviría y Lanusse hacía ya años que se tuteaban y se trataban por sus apodos. Cuando Martínez Zuviría aceptó la titularidad Del SIDE se mantuvo en actividad por decisión de Lanusse y le hizo saber al Presidente que él no reemplazaría a Lanusse en el Comando en Jefe, menos aún si este reemplazo resultaba de una disidencia entre el Presidente y el Comandante. El Presidente para tranquilizarlo le dijo: “*No volverán a surgir discrepancias con el Comandante*”. Cfr: Lanusse, Alejandro; ob. cit. “*Mi testimonio*” p.84-85.

²⁹⁸ Guglielmelli, Juan E.; “*Responsabilidad de las Fuerzas Armadas en la Revolución Nacional*”, Revista *Estrategia*, Año 1, N° 4, pp. 8 a 17.

²⁹⁹ Lanusse, Alejandro Agustín; ob.cit; “*Mi testimonio*”, p. 82 a 84.

³⁰⁰ El general Benjamín Rattenbach –un hombre de gran predicamento en el Ejército- que no había tenido contactos con el Presidente desde su alejamiento del Ejército en 1963, estaba tan alarmado por el aumento de la oposición y la endeblez del Presidente, que le pidió una audiencia para insistir en la necesidad de ofrecer a la ciudadanía una válvula de seguridad que dejara escapar la presión. Hizo sugerencias concretas para abrir canales que permitieran a los ciudadanos ser parte en los debates sobre el rumbo a seguir. Pero el Presidente –de acuerdo a su costumbre de cortesía- solo lo escuchó.

³⁰¹ El documento de Frondizi fue publicado –entre otros medios- por el diario *La Nación* del 22 de abril de 1970.

³⁰² En la reunión del 11 de mayo entre Onganía y Lanusse, se conversó sobre los temas de actualidad que incluían –sin duda- como veían sus respectivos futuros personales. Onganía le comentó que esperaba que si él moría o renunciaba por fatiga, la Junta de Comandantes se encargara otra vez de poder. Por su parte Lanusse le comentó que era su intención permanecer en el cargo hasta 1973, porque ese tiempo le llevaría al Ejército y al Presidente encontrar el hombre apto para su relevo. Al parecer, por esta

conversación, ninguno de los dos esperaba el desenlace que en pocos días tendría la situación. Lo que no parece muy creíble dada la experiencia y astucia de ambos protagonistas. Comentado en: Potasch, Robert; ob.cit. *"El Ejército y..."*, p.132.

³⁰³ La expectativa de Lanusse tenía un par de claves: la primera es que, un día antes de la reunión –el 26 de mayo- le pidió al coronel Cornicelli un pequeño memorándum con los pasos que debían darse para evitar la división entre las masas populares y el Gobierno y las instituciones castrenses que lo apoyaban. La otra clave era que el propio Lanusse había conversado con el Secretario de Defensa –Enrique Gilardi Novaro- y este le había dicho que el Presidente les había dado instrucciones a sus Ministros para que le prepararan ideas para un plan político a discutir en la reunión del 27 de mayo con los oficiales superiores del Ejército. Este comentario, generó en Lanusse mucha ansiedad y expectativa, a tal punto, que Cornicelli había dicho: *"Fue una bomba. Lanusse está muy contento"*. Pero Lanusse le había escrito a Levingston – un general de Inteligencia con sede en Washington, al que Lanusse comenzaba a mirar con simpatía-informándole de la profundidad de la crisis y le decía: *"Es indudable que, pese a todos los inconvenientes, mucho es lo que se ha realizado para cumplir las metas principales de la Revolución. Desgraciadamente, una serie de errores u omisiones debidos a la incapacidad de algunos funcionarios ha contribuido a crear un clima de insatisfacción e intranquilidad"*. El día 15 de mayo Levingston –por entonces agregado militar argentino en los Estados Unidos- le contestaba: *"No me cabe duda que nuestro Ejército, responsable final de esa empresa, sabrá encontrar los medios para que la Revolución Argentina, salvando errores que siempre resultan naturales en la dimensión de un país como el nuestro, se vea revitalizada y que pueda hacer las aproximaciones necesarias para que, cuando la Nación vuelva al funcionamiento normal y completo de todas sus instituciones constitucionales, se encuentre en una senda definitiva de progreso, que no pueda ser desviada y que deje atrás para siempre el estancamiento de los últimos años"*. Ver: Lanusse, Alejandro; ob.cit; *"Mi testimonio"*, pp. 88 a 90.

³⁰⁴ Una copia de esas curiosas construcciones piramidales de índole administrativo fue rescatada por Mariano Castex del escritorio de Onganía el mismo día de su derrocamiento. Los esquemas pueden visualizarse en: Potasch, Robert; ob.cit; *"El Ejército..."*, pp. 136-137. Estas raras nuevas estructuras de transformación social que componían el *cambio de estructuras* anunciado a principios del gobierno de Onganía, como la ideología del Estado Burocrático-Autoritario; también se muestran en: Rouquié, Alain; *"Poder militar y sociedad política en Argentina"* tomo 2 1943-1973; Buenos Aires, emecé, 1982, pp. 265 a 268.

³⁰⁵ Fuera o no consciente de ello, los esquemas de Onganía tenían una similitud más que notable con la estructura que Perón había tratado de promover en 1953 y 1954, como parte de su programa para una sociedad organizada. Años más tarde, con Juan Perón en su tercera presidencia, el viejo general insistiría en el esquema, a tal punto que creó una Secretaria (ad hoc) para el Proyecto Nacional a cargo del coronel Vicente Damasco. En el proyecto de Perón pueden verse con claridad el mismo tipo de organigramas triangulares sobre la comunidad organizada.

³⁰⁶ Durante el brindis, en el despacho del Jefe del Colegio Militar, Onganía le preguntó a Lanusse (con los otros Comandantes presentes) como había salido –en su opinión- la reunión del día 27 con los generales en actividad. Lanusse le contestó con toda franqueza: *"Las conclusiones que sacaron los generales fueron, por supuesto variadas, pero básicamente las opiniones se concentraron en dos sectores: el sector de los generales que no entendieron lo que usted quiso decir y, por otro lado, el sector de los generales que están en total desacuerdo con lo que usted dijo"*. Lanusse, Alejandro; ob.cit; *"Mi testimonio"*, p. 102

³⁰⁷ Un grupo de personas, hasta entonces desconocido, que se autodenominaba Montoneros se hizo responsable y, en una serie de comunicados se presentaron como peronistas que venían a vengar las ejecuciones que había ordenado Aramburu contra los rebeldes peronistas en 1956. Pero a la luz de las recientes actividades políticas de Aramburu y de sus esfuerzos por llegar a un entendimiento con la corriente principal peronista, el secuestro pareció más un intento por influir en el curso del futuro político del país que un acto de venganza retrospectiva.

³⁰⁸ Estas opiniones sobre el fin del régimen pueden verse ampliadas y con más detalle en: Lanusse, Alejandro; *ob.cit.*; "Mi..." p. 76 y 77.

³⁰⁹ El primer indicio apareció el 1° de julio, cuando una incursión del grupo Montoneros en La Calera (Córdoba) resultó en la herida y captura de dos de los participantes y el descubrimiento de documentos que condujeron a la identificación de los otros. Los dos que fueron capturados, Emilio Maza e Ignacio Véliz, eran graduados del Liceo Militar José María Paz en Córdoba. Maza murió de sus heridas unos días después. El documento clave fue una autorización enviada por Norma Arrostito a Emilio Maza para manejar su automóvil Renault: la autorización había sido preparada con la misma máquina de escribir que los comunicados de Montoneros. Pocos días después de La Calera, la Policía buscaba al Renault y su propietario, así como también a Fernando Abal Medina, José Sabino Navarro, Mario Firmenich, Carlos Capuano Martínez y Carlos Gustavo Ramus. El cadáver de Aramburu fue hallado por la Policía de la provincia de Buenos Aires el 16 de julio. Había sido enterrado, bajo una capa de cal, en el sótano de una casa de campo de la familia Remus, en Timote, provincia de Buenos Aires. Con la excepción de Sabino Navarro, que provenía de un hogar de trabajadores peronistas, el resto eran activistas católicos que provenían de familias pudientes o al menos con buen pasar.

³¹⁰ Si bien la historia de la guerra de guerrillas no constituye el tema de este trabajo, resulta significativo analizar cuál era la situación internacional y argentina en particular en aquellos tiempos, para así establecer un contexto y entenderla, por eso, nos parece relevante explicar aquel novedoso fenómeno: a) en el contexto global, todas o casi todas las guerras de guerrilla sirvieron a los propósitos de la URSS y su aliado cubano-castrista, aunque solo fuera como carta de negociación con los EE.UU. El mundo comunista era el beneficiario de las acciones insurreccionales que se fueron desencadenando en numerosos países de Asia, África y América Latina, en cuanto esas luchas debilitaban a sus enemigos, los norteamericanos, y tendían a aislarlos. Sin embargo, no todos los movimientos guerrilleros fueron planificados por los comunistas, que en un principio discreparon con muchos de ellos, como un ejemplo valga mencionar a la revolución argelina; b) en un marco internacional sumamente crítico con la aparición, más o menos simultánea de movimientos guerrilleros anti-norteamericanos y anti-europeos se produjo un efecto cascada que fue generando la aparición de grupos promotores de la violencia con características sumamente especiales. La circunstancia de que esos grupos se desarrollaran en el llamado Tercer Mundo contribuyó a conferirles características particulares: para mencionar un ejemplo, en diversos países surgieron tendencias mucho más inspiradas en los fanatismos religiosos o en los sentimientos de nostalgia feudal que en el marxismo-leninismo clásico. Aunque esas tendencias servían, de alguna manera, a la estrategia soviética, no se nutrían del pensamiento de izquierda sino, en muchos casos, del nacionalismo tradicionalista (el caso argelino fue un arquetipo en este sentido) y, aún, de los elementos residuales provenientes del nazismo y del fascismo. Una asombrosa cantidad de militantes de la extrema derecha cruzó, en esos tiempos, todo el recorrido político para enrolarse en organizaciones de acción directa que terminaban, o bien girando a la ultraizquierda, o bien constituyéndose en aliadas de tendencias a las cuáles habían siempre combatido. Por lo demás, significativas corrientes del nacionalismo de derecha tenían más puntos en común con el marxismo que con la democracia occidental:

- 1) Desde el punto de vista de la metodología, consideraban que la política parlamentaria de tipo occidental, era una suerte de enjuague permanente entre diversos grupos de interés y de presión, mientras que la lucha armada les permitía asumir, contra la democracia, que había sido el enemigo del fascismo durante la Segunda Guerra Mundial, el camino del heroísmo. Derrotado el totalitarismo al que habían adherido, descubrían que podían retomar el culto a los héroes en oposición a las estructuras democráticas y a sus partidos, que les merecían desprecio. Aún en países de la Europa desarrollada se produjeron fenómenos de este tipo y parte de los fundadores de las Brigadas Rojas, en Italia, provenían de grupos de choque de la ultraderecha.
- 2) En los países desarrollados de occidente, el fascismo estaba más proscrito y, por lo tanto, más tentado por la violencia que el comunismo, tanto en la vida política como cultural.
- 3) Los resultados políticos de episodios tales como la insurrección universitaria en los EE.UU y en la Francia de Gaulle, o la retirada norteamericana de Vietnam, fueron mal leídos por los sectores de extrema izquierda, que imaginaron estar a punto de lograr un triunfo en el orden mundial: la derecha más conservadora alentó ese mito para justificar sus propias posiciones, pero lo cierto es

que, a esa altura de las cosas, el campo occidental ya estaba en una ventaja que numerosos autores consideraban irreversible. De todos modos esa sensación de derrumbe del sistema occidental alentó a importantes franjas de la población mundial a volcarse a favor de los comunistas y de sus aliados. Una enorme cantidad de gente tiende a correr siempre en auxilio de los vencedores, reales o presuntos.

- 4) El hecho de que la subversión hubiera decidido dar batalla en los países periféricos del Tercer Mundo había llevado a que el marxismo –en el marco de la guerra fría o sea de un escenario de confrontación decisiva- se interesaran muy poco por los aspectos discursivos de los grupos guerrilleros: si enfrentaban al sistema eran, o terminaban siendo, considerados como aliados. Cuando una superpotencia se enfrenta a otra, no regala nada. Los centros de poder vinculados a la hegemonía soviética no iban a obsequiarle a Occidente, por ejemplo, un paquete con las diversas organizaciones terroristas, así estas estuvieran integradas por fanáticos religiosos e invocaran a Alá y no a Lenin.
- 5) El marxismo-leninismo no podía sostener ya ni el discurso del anticlericalismo –numerosos sectores de raíz religiosa, inclusive católicos, se levantaban contra las democracias industriales, muchas veces como aspiración a la restauración de un mundo pre-capitalista- ni el antimilitarismo (las dictaduras militares de Medio Oriente estaban enfrentadas con EE.UU; por lo demás, en América Latina comenzaron a surgir corrientes castrenses que eran, claramente, más antinorteamericanas que anticomunistas en países como Perú, Bolivia y Uruguay).

En Argentina de aquel tiempo, encontramos que la lucha armada, con algún eco en diversos sectores de la población, tenía dos brazos principales: uno –inspirado en el marxismo-leninismo- sea de origen trotskista, como el *Ejército Revolucionario del Pueblo* (ERP), o sea de tipo chinoísta como las *Fuerzas Armadas de Liberación* (FAL); otro, confusamente contestatario, que entroncaba con algunas tradiciones del peronismo y del nacionalismo, nutrido en concepciones de ultraderecha, como los *Montoneros*, al menos en su primera etapa. La revolución, el socialismo nacional, la lucha de clases, eran reinterpretados y ponderados por escritores fascistas como *Jaime María de Mahieu*, cuyo libro básico *El Estado Comunitario*, fue uno de los textos que habían despertado, en su momento, la curiosidad del general Onganía.

Es posible que la prehistoria de la guerrilla argentina, al menos en sus características específicamente locales se remontara a determinadas ideas ya utilizadas por hombres del movimiento que había llegado al poder en junio de 1943. En todo caso, existía una corriente *nacionalista-populista* bastante importante en el Ejército, cuyas tradiciones serían heredadas con el tiempo, por los modelos que pasaron a llamarse genéricamente *nasseristas*. Hacia fines de la década de los sesenta, en una argentina convulsionada y en un mundo que parecía desconcertante, muchos creyeron que algo así permitiría la continuidad indefinida del Ejército en el poder.

³¹¹ Vale la pena aclarar los orígenes de *Montoneros*, como el de su propio nombre: su elección implicaba la construcción de una genealogía que se remontaba a las luchas por la independencia, y luego, a las pugnas entre los diversos caudillos provinciales frente al poder de la provincia de Buenos Aires y del Gobierno Nacional, durante gran parte del siglo XIX. Por ende, obedecía a la fuerte influencia de la cultura historiográfica del revisionismo y de una identificación entre el peronismo proscripto y el imaginario nacional-popular que se desarrolló a partir de la "*Revolución Libertadora*", vínculo difícil de identificar en los años previos a ella. De hecho, varias agrupaciones o comandos de otras organizaciones armadas peronistas utilizaban el nombre de *Montonero* o *Montoneros* y esto contribuyó a la confusión sobre su origen. Suele identificarse –y esto es un error clásico del trabajo de Richard Gillespie- a los fundadores de *Montoneros* con el grupo que operaba en Buenos Aires, con algunos miembros de Córdoba y que fue el que perpetró el secuestro y la ejecución de Pedro Eugenio Aramburu. Como testimonian diversas fuentes posteriores, este fue un hecho, que si bien no sorprendió a los militantes de otros grupos, sí, los tomó desprevenidos. Cfr: Bonasso, Miguel; "*Diario de un clandestino*", Buenos Aires, Planeta, pp. 37 a 39; Anguita, Eduardo y Caparrós, Martín; *La Voluntad*, Buenos Aires, editorial Tesis-Norma, tomo 1, pp.364-366.

Si creemos en las versiones más difundidas, sobre las que hay mayor acuerdo, los miembros del grupo fundador eran, entre otros, los ex miembros de las *Juventudes Universitarias Católicas* (JUC) y del

Comando Camilo Torres, Fernando Abal Medina, Carlos Gustavo Ramus, Mario Firmenich, Norberto Crocco y Carlos Hobert; los estudiantes integralistas cordobeses Emilio Angel Maza, Carlos Capuano Martínez, Ignacio Vélez; un miembro de la *Juventud Obrera Católica* (JOC) Carlos Sabino Navarro, y una ex militante del *Partido Comunista* (PC) Norma Arrostito. Ellos ya estaban en tratativas para constituir una organización político-militar junto con un núcleo de Córdoba y otros dos de Santa Fe. El hecho de que se adelantaran y lanzaran el operativo bajo el nombre de Montoneros aceleró el proceso identificatorio y organizativo. La lógica constitutiva de *Montoneros* debe situarse en un marco más amplio; cinco fueron los grupos originarios: un grupo fundador en Buenos Aires, dos grupos en Santa Fe y dos en Córdoba. Cfr; Lanusse, Lucas; *“El mito de sus doce fundadores”*, Buenos Aires, Vergara editor, 2005.

La relación entre catolicismo y *Montoneros* se articula sobre la filiación previa que habían tenido algunos de sus miembros con el grupo *Tacuara*, vinculados a la *Falange española*, que había sido –originalmente– un lugar de tránsito, donde muchos jóvenes de los años sesenta encauzaban su rebeldía y, es posible, que militantes con un pasado en esa organización se hayan incorporado – más tarde– a *Montoneros*. Pero *Tacuara*, hacia mediados de la década del sesenta, ya había entrado en un proceso de diferenciación y fractura y, a fines de la década ya no existía. Además, había cierta distancia generacional entre sus integrantes y los fundadores de *Montoneros*. Pero la más conocida de las relaciones entre catolicismo y militancia insurreccional es la que cristalizó en el grupo de Buenos Aires. El centro de esta relación eran las misas universitarias terciaristas, muchas de ellas celebradas por el padre Carlos Múgica, y a las que concurrían parte del núcleo fundacional de *Montoneros*: Mario Firmenich, Carlos Ramus y Juan Manuel Abal Medina. Otros sacerdotes llevaban a cabo misas también en la capilla del Instituto Raffo, pero el dinamizador de las relaciones era Múgica. Es interesante también el nexo que se estableció con la *CGTA* y con el *Peronismo Revolucionario* de John William Cooke, por parte del núcleo fundacional de Córdoba. Los proto-montoneros provenientes del *Comando Camilo Torres* –dirigido por Juan García Elorrio y su esposa Cassiana Ahumada– permitió establecer contactos con el Centro de Estudiantes de la Universidad del Salvador, dirigido por Julio Bárbaro y Carlos Hobert; este último tendría –más tarde– una destacada participación en la organización *Montoneros*. Juan García Elorrio nucleaba a diversos actores en la revista *Cristianismo y Revolución*, que tuvo una fuerte influencia en la organización *Montoneros*: hacia 1968 *C y R* convocó a un grupo nutrido de militantes de distintas fracciones católicas a una reunión en un colegio de la localidad de Quilmes –el colegio Sandford– donde se planteó, por primera vez, la posibilidad de la lucha armada como una alternativa. De esas discusiones y de la ruptura producida entre García Elorrio y un grupo de militantes (Firmenich, Abal Medina y Ramus) se supone que surgió la decisión final de fundar *Montoneros*. Cfr; Donatello, Luis Miguel; *“Catolicismo y Montoneros”*, Buenos Aires, cuadernos Manantial, 2012, pp. 95 a 102.

³¹² La reunión en el CONASE fue de una enorme tensión entre el Presidente y Lanusse: ante la propuesta de Lanusse de abrir el diálogo con los partidos políticos, Onganía lo increpó; *¿usted dice que hay que llamar a los ex partidos políticos? ¿Me puede usted decir una sola persona para que yo me clarifique la idea?* dijo el Presidente; *¿A quién llamaría usted, por ejemplo? Habría que pensarlo*, contestó Lanusse para zafar del terreno al que lo quería llevar el Presidente. Onganía, satisfecho, agregó un último concepto, a modo de moño dijo: *“Bueno señores, yo este problema se lo dejo a las Fuerzas Armadas, a los tres Comandantes en Jefe, para que lo analicen a fondo y para que me digan que es esto de la política del diálogo”*. Onganía aceptó, luego, que la idea de reclamar un plan político de inmediatez se había ido generalizando: *“no podemos llegar muy tarde en esto, porque esa bola viene rodando y haciéndose cada vez más grande”* dijo. Cfr; Lanusse, Alejandro; *“Mi testimonio”* p. 103 a 105.

³¹³ Estas ideas y pasos a seguir –propuestas por Lanusse en caso de relevamiento de Onganía– consistían en: a) Que la Junta de Comandantes debía retomar el poder y conservarlo durante un breve período; b) Que durante ese breve período, la Junta estudiaría un plan completo de gobierno y sería responsable de su puesta en práctica; c) Que debía nombrarse, recién entonces un nuevo Presidente y que su nombramiento estaría sujeto a revalidación anual; d) Que los Comandantes tendrían un nuevo status por el que no estarían sujetos a relevamiento por parte del Presidente; e) Que en nombramiento de los Ministros del Gabinete exigiría la aprobación de al menos dos de los tres Comandantes; f) Que se exigiría una aprobación similar para las decisiones trascendentales; g) Que la difusión de leyes exigiría la firma de todos los Ministros del Gabinete y, por último; h) Que sería conveniente el nombramiento de un

Vicepresidente. Tomado de: notas de la reunión del 4 de junio de 1970 de la Junta de Comandantes en Jefe, tomadas por el coronel Cornicelli, como asistente personal de Lanusse. Finalmente, lo único que no prosperó del plan de acción de Lanusse, fue el nombramiento del Vicepresidente que, según los otros miembros de la Junta (y al propio Cornicelli) les pareció que podrían sumar un problema más para el futuro.

³¹⁴ Onganía manifestó en esa oportunidad: *“Los Comandantes en Jefe me designaron, pero no pueden cambiarme”*. El Presidente estaba completamente convencido que no se animarían a su derrocamiento. Cfr; Lanusse, Alejandro; *ob.cit*, *“Mi...”* p.108

³¹⁵ En la reunión del CONASE, Onganía había reiterado sus ideas del día 27 de mayo, y volvió a insistir – más errático aun- sobre los organigramas triangulares presentados en esa oportunidad. El Ministro de Justicia (Etchebarne) acotó que las estructuras propuestas por el Presidente era impracticables. Cáceres Monié admitió que –desde un punto de vista técnico- los esquemas no eran corporativistas, ya que excluían la tarea específicamente legislativa. Sin embargo –agregó- que el sistema político propuesto, no tenía nada que ver con la democracia representativa. Los diálogos y los cruces entre los participantes de esta reunión pueden verse –con un alto nivel de detalle- en el mencionado libro del general Lanusse.

³¹⁶ Gnavi reunió –muy temprano el mismo lunes 8- desde capitanes de navío hasta vicealmirantes, es decir la plana mayor completa de la Armada. Por su partes Lanusse reunió a las nueve de la mañana del lunes a casi todos los generales de división en actividad.

³¹⁷ El comunicado del Ejército –de solo dos puntos- ponía en conocimiento de la población la posición del Arma en cuanto a las rectificaciones que correspondía introducir al Estatuto de la Revolución Argentina para establecer la participación de su Comandante en Jefe en las decisiones fundamentales del Gobierno. Por su parte la Armada –a través de su Comandante en Jefe- comunicaba su decisión de suspender la reunión con el Presidente, por el desacuerdo expresado en su reunión con la Junta y, después, en la reunión del CONASE. El almirante Gnavi –ahora en su condición de Presidente de la Junta de Comandantes en Jefe- invitaba a sus pares a estudiar la situación creada.

³¹⁸ Los pormenores sobre los sucesos de ese día 8 de junio de 1970 en Casa de Gobierno, pueden verse en detalle en: Roth, Roberto; *ob.cit*; *“Los años...”* Capítulo 29; *“El derrocamiento”* pp. 359 a 378 Un hecho importante que destaca Roth, es que en la tarde de ese día, el Ministro de Justicia (Etchebarne) visitó a la Corte Suprema para informar a los miembros del Alto Tribunal que el Presidente de la Nación había sido destituido. La Corte acató el anuncio y proclamó a la Junta Militar como gobernante. Roth agrega irónico: *“Una demostración de eficiencia judicial que no había dado en cuatro años de funciones, ni volvería a repetir en los tres que le quedaban”*.

³¹⁹ Los resultados de la encuesta son mencionados en: Waldman, Peter; *“Anemia social y violencia”*. En *“Argentina hoy”*; Alain Rouquié, compilador, Buenos Aires, Siglo XXI, 1983, p.223.

³²⁰ *La Nación*, 29 de junio de 1966.

³²¹ En este sentido, pueden encontrarse similitudes entre lo ocurrido con el elenco que acompañó al general Uriburu en el golpe del 6 de setiembre de 1930, donde predominaba el interés por el modelo fascista, contrapuesto al grupo liberal, nucleado alrededor del general Agustín P. Justo, que en definitiva heredó esa revolución.

³²² Roth también ve a Lanusse actuando bajo la influencia del ala liberal: Roth, Roberto; *ob.cit*; *“Los años...”* pp. 359-378

³²³ Sobre el pensamiento político y la ideología de Onganía, vale la pena leer la entrevista concedida el miércoles 11 de agosto de 1971 –un año después de su derrocamiento- a los periodistas de *Primera Plana*, Carlos Villar Araujo y Pedro Olgo Ochoa en: *Primera Plana* N° 441, del 13 de agosto de 1971, pp. 14 a 16.

CAPÍTULO 6. *Roberto Marcelo Levingston: su breve interludio presidencial (18 de junio de 1970 – 22 de marzo de 1971)*

6.1. *Los cambios políticos en Latinoamérica: un escenario inesperado.*

A principios de octubre de 1968, un golpe de Estado en Perú había derrocado a Belaúnde Terry e instalado en el gobierno al general Velazco Alvarado, cabeza de una revolución nacionalista de sesgo socializante. Esto produjo un gran impacto entre civiles y militares en la Argentina¹. Por otro lado el rápido crecimiento de la insurgencia armada –sobre todo de característica urbana- en Brasil y sobre todo en Uruguay, no hacía más que confirmar que, Argentina y el Cono Sur de América, habría de convivir largo tiempo con la subversión. El tema de la emergencia subversiva, que ponía en peligro la seguridad interna y la estabilidad política de los países del área, se encontraba directamente relacionado –fundamentalmente a fines de la década de 1960– con la instauración de la *Doctrina de la Seguridad Nacional (DSN)* utilizada como política de seguridad interna por esos años y lo hemos desarrollado en detalle en los puntos 3.3 y 3.3.1 de nuestro tercer capítulo, al cual nos remitimos. Años más tarde sabríamos que este escenario condicionaría por completo la vida nacional y que, su eventual derrota, sería el resultado de una represión que excedería cualquier marco imaginable en aquel momento. En esta coyuntura latinoamericana, otros dos acontecimientos impresionaron a la opinión pública y contribuyeron a constituir un inédito clima de ideas: en primer lugar las elecciones generales realizadas en Chile –a principios de setiembre de 1970- le dieron un claro triunfo a la Unidad Popular; este hecho preanunció el destino de otras coaliciones de izquierda existentes, como el Frente Amplio en Uruguay. El 3 de noviembre Salvador Allende asume como Presidente en Chile y comienza el experimento de llegar –por la vía constitucional- al socialismo². En segundo término, el 9 de octubre asume la presidencia de Bolivia el general Juan José Torres –al frente de un movimiento nacionalista de izquierda influído por la revolución peruana- y declara que su país forma parte del tercer mundo revolucionario³. Como se ve, la escena política de Latinoamérica de 1970, era bien distinta a la de los inicios de la Revolución Argentina en junio de 1966.

6.2. *Las tribulaciones de la Junta y la designación de Levingston.*

Los hechos del 8 de junio habían trasladado –como al inicio de la revolución- el poder a la Junta de Comandantes y fueron reconocidos por la Corte Suprema de la Nación (CSJ), pero después de dedicar las energías a llevar a cabo el derrocamiento de Onganía, los tres Comandantes en Jefe no tenían una clara idea concreta acerca

de que hacer a continuación. Más allá de las declaraciones generales del acta del 4 de junio, o del 8 de junio, donde declararon el cese de Onganía y se dieron diez días para nombrar un nuevo Presidente⁴; no tenían un plan de acción ni nombre alguno en mente en aquellos primeros momentos⁵. La opinión pública barajaba los nombres de Pedro Gnavi y Alejandro Lanusse; también de dos civiles: José Rafael Cáceres Monié y Conrado Etchebarne y de diversos militares retirados con suficiente prestigio: Osiris Villegas, Eduardo McLoughlin, Manuel Laprida y Juan Guglielmelli. Si bien Cáceres Monié era una persona elegible ya que era un civil, lo cual le daría a su elección una tónica civilista que muchos sostenían necesaria y durante su actuación como Ministro del Interior nombrado interino el 8 de junio y como Ministro de Defensa del propio Onganía, había demostrado una buena pericia política, su figura se encuentra –sin embargo- muy cercana al *desarrollismo frondicista* y esto generaría sospechas de un pacto con esa tendencia política. El brigadier McLoughlin –embajador en ese momento ante el Reino Unido- era un hombre que había servido en diversos gabinetes y que era tenido en alta estima por su inteligencia, prudencia y ecuanimidad. Sin embargo, debido a que era de la Fuerza Aérea, no contó con el apoyo del Ejército ni de la Marina: podría haber sido, sin embargo, el candidato más experimentado y capaz. Conrado Etchebarne no era muy conocido por la opinión pública y su nombramiento podía generar algún desconcierto y crear la idea de un vacío de poder real. Los generales Osiris Villegas y Juan Guglielmelli, por razones ajenas a su reconocida capacidad e inteligencia, presentaban flancos para la discusión interna de la Fuerza y hubieran requerido un respaldo decidido de los comandantes y el generalato para superar esta situación. La Junta también descartó a sus propios integrantes por los problemas que –en ese momento- tendría la sucesión⁶ y para no avalar las sospechas de que, el desplazamiento de Onganía se realizaba solo para consagrar sus ambiciones personales⁷. Pero la Junta estaba completamente de acuerdo en que el próximo Presidente designado debía serlo por unanimidad y no por mayoría de sus miembros. De todas maneras, el estudio del Estado Mayor General del Ejército del día 10 de junio, había recomendado tres soluciones posibles: a) el nombramiento de un civil; b) el nombramiento de un militar retirado o la asunción de la presidencia por parte de Lanusse o Gnavi. El estudio las recomendaba en ese orden de preferencia⁸. Del análisis del Estado Mayor, también surgían dos factores decisivos para llegar a una determinación de quien debería ocupar la responsabilidad del gobierno: a) se había establecido que la Junta era la fuente y el origen del poder político de la Nación y; b) dentro de la Junta existía una responsabilidad especial del Ejército, en cuanto había sido determinante de los hechos del 8 de junio de 1970 y –por supuesto- de los hechos del 28 de junio de 1966. También se apuntaba –en el estudio- que, en la Argentina, no existían –en esos momentos- ni políticos ni militares cuya gravitación personal fuera tan amplia e indiscutida que la mayoría de la ciudadanía lo aceptara –espontáneamente- como solución conciliadora o superadora⁹. El 11 de junio, sorpresivamente y por su propia

sugerencia, el almirante Gnavi presentó a sus pares un nombre que ni siquiera se había mencionado antes: el general de brigada Roberto Marcelo Levingston¹⁰. La circunstancia de que tanto Gnavi como Rey tuvieran algún grado de amistad con Levingston y hubieran compartido –en su oportunidad- tareas profesionales con él, actuó como factor decisivo para que Lanusse adhiriera a la propuesta: finalmente, el hombre propuesto, si bien era una persona inteligente, informada, con experiencia, carácter y personalidad, no resultaba ni más ni menos que algunos otros de los generales en actividad; su única ventaja se debía al hecho de que, circunstancialmente, había estado alejado del terreno donde se habían desarrollado los acontecimientos¹¹. Así, la coincidencia de los tres comandantes fue total y Lanusse lo llamó a Levingston por teléfono a Washington –desde la misma Casa de Gobierno- para ofrecerle –en nombre de la Junta de Comandantes en Jefe- la Presidencia de la Nación¹². En su reunión con la Junta –en el mediodía del 13 de junio, en cuanto llegó al país- Levingston hizo dos preguntas: primero, si habría un segundo ciclo de la Revolución o si la presidencia sería solo interina al solo efecto de restaurar la normalidad institucional, si era así declinaría la designación: en su opinión, un gobierno militar que había estado tanto tiempo en el poder, solo podría justificarse a sí mismo llevando a cabo los cambios que no habían podido lograrse hasta allí y que lo prepararían para la etapa siguiente. Dejó claro que no le interesaría ser simplemente un Presidente transitorio. La otra pregunta se relacionaba con la naturaleza de los poderes que tendría respecto de la Junta: los comandantes le hicieron saber que en realidad habría un segundo ciclo de la Revolución y que él – como Presidente- tendría todos los poderes inherentes a su función, excepto las restricciones impuestas por la modificación al Estatuto de la Revolución¹³. El 15 de junio –tres días antes de que Levingston asumiera- la Junta de Comandantes llamó a una reunión que se realizó en el Comando en Jefe del Ejército, para analizar los antecedentes de los postulantes a Ministros, asistió también el grupo de asesores de los Comandantes en Jefe; general Carlos Dubra, almirante Carlos Álvarez y brigadier Osvaldo Cacciatore. Como resultado de la reunión Carlos Moyano Llerena recibió el puesto de Ministro de Economía, Aldo Ferrer se alzó con el Ministerio de Obras y Servicios Públicos y el general Juan Guglielmelli se quedó con la Secretaría del CONADE, Luis María de Pablo Pardo fue elegido para el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto y el Ministerio de Bienestar Social fue encabezado por un amigo personal de Lanusse, el ex oficial naval Francisco Manrique. El Comando en Jefe del Ejército, pudo materializar la designaciones del general Ibérico Saint James como Secretario de Informaciones del Estado (SIDE), del coronel Mourglie en la Secretaría General de la Presidencia y del general Rivera al frente de la Casa Militar¹⁴. Rafael Cáceres Monié se quedó firme en el Ministerio de Defensa que ya ocupaba y, finalmente el brigadier Eduardo McLoughlin aceptó –bajo la presión de su Comandante en Jefe- el Ministerio del Interior¹⁵. En este acuerdo, Levingston aceptó su designación como Presidente de la Nación y, aunque este hecho no cayó

bien en algunos sectores de las Fuerzas Armadas, a esa altura de las cosas era difícil pensar en algún candidato que dejara de tener resistencias y, además, a partir de ese momento, todo dependería más del éxito de su gestión que de las opiniones previas.

6.3. La presidencia de Levingston: su condicionamiento de origen y la falta de poder real.

Hay que reconocer que pocos presidentes argentinos debieron iniciar su gestión en un estado de vulnerabilidad de origen tan precario y endeble y en una situación tan condicionada. Para la opinión pública era –francamente- un desconocido y veía en él solo a un continuador de Onganía, a un nuevo general de Caballería especializado en *“inteligencia”*. Nadie sospechaba que un caluroso entusiasmo saludaría al nuevo Presidente, ni intuían en él a un avezado piloto de tormentas capaz de unir los melancólicos fragmentos de ilusiones que estaban en bancarota. Levingston no representaba una voluntad mayoritaria ni una legalidad constitucional, no era tampoco un caudillo de la Fuerza, ni tenía condiciones para el liderazgo popular, su mandato se evaluaba como transicional, tenía un poder real muy limitado y se encontraba al frente de un país desesperanzado: su papel, en la opinión de muchos, era simplemente el de preparar la retirada. Al asumir –el 18 de junio de 1970- tuvo que aceptar el hecho de que la Junta ya había nombrado gobernadores nuevos para las provincias de Buenos Aires y Córdoba y elegido a los miembros cruciales de su Gabinete: así, comenzó su administración con un grupo de Ministros heterogéneos que reflejaban más los deseos de la Junta que los propios. En un intento de redimir sus poderes –el 23 de junio- habló al país y señaló que era el objetivo de la Revolución: *“la creación de un orden político, fundamentado en la democracia, la libertad y la soberanía popular, apoyada en una eficacia adecuada a las exigencias que debe superar una Nación moderna”* y, tratan de reafirmar su autoridad, continuó; *“El Presidente de la Nación, designado por la Junta de Comandantes en Jefe, extrae de las Fuerzas Armadas el fundamento de su poder político. Las Fuerzas Armadas, a su vez, lo toman del pueblo en que se nutren, al que sirven y con el que, por consiguiente se hallan íntimamente circunstanciadas. Yo, como Presidente de la Nación tengo la total y exclusiva responsabilidad de los actos ejecutivos. Ese poder no lo comparto, lo ejerzo en su plenitud y surgen de las condiciones bajo las cuales acepté el cargo. La participación de las Fuerzas Armadas se institucionaliza a través de la Junta de Comandantes en Jefe, que comparte conmigo las responsabilidades legislativas. Pueden existir dudas sobre posibles limitaciones de mis atribuciones ejecutivas. Debe comprenderse, sin embargo, que yo no he hecho el gran sacrificio de retirarme del Ejército, al que con profunda vocación destiné mi vida, para ocupar*

un cargo que, si fuera limitado, significaría un menoscabo para la dignidad de la alta función que ejerzo, para el uniforme que visto y para mi propia persona”¹⁶.

6.3.1. La escalada subversiva: la insurgencia armada en su forma urbana. El atentado contra José Alonso.

Pero el país era un tembladeral, menos de dos semanas después de la asunción de Levingston la nación se conmovía al enterarse de un ataque –a plena luz del día- en la localidad de La Calera (Córdoba)¹⁷. Hubo un amotinamiento de policías en Rosario, donde tres mil hombres se acuartelaron para reclamar mejoras salariales. Mediante una perfecta operación de comando, las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR) coparon –el 30 de junio- el pueblo de Garín (Buenos Aires) y, a pesar de contar con poco tiempo, los guerrilleros consumaron sus objetivos y desaparecieron. En una estancia situada en Timote (partido de Carlos Tejedor) fue encontrado –el 16 de julio- el cadáver del ex presidente provisional de la Nación, Pedro Eugenio Aramburu. Fue por intermedio de los Montoneros detenidos después del copamiento de La Calera, que la policía obtuvo la punta del hilo conductor que le permitió esclarecer el hecho¹⁸. La comparación entre los copamientos de La Calera y Garín demostró a los expertos policiales y militares que la capacidad estratégica de las FAR era muy superior a la de Montoneros y, de acuerdo con lo que se desprendía de sus respectivos comunicados, eran también distintas las motivaciones ideológicas (guevaristas y peronistas), pero ambos grupos estaban inscriptos en una misma lucha subversiva, desatada en todo el país. El fracaso del ataque a La Calera y las noticias que confirmaron el asesinato de Aramburu, provocaron una corriente de emoción por parte de los argentinos en general y tuvieron un impacto visible sobre los voceros políticos y el periodismo¹⁹. Peronistas, radicales y antiperonistas –rivales tradicionales- sintieron que enfrentaban una amenaza común a su modo de vida y se unieron en manifestaciones de repudio al crimen. La sociedad toda denunció el hecho como un acto de vandalismo y entendió a la subversión como un enemigo común, sabiendo que un enemigo que no se ve es un enemigo más poderoso. Después del funeral de Aramburu, su círculo de allegados políticos y amigos –entre ellos el general Labayrú- apoyaron y reclamaron durante meses la idea de nombrar una comisión investigadora que, finalmente, no se constituyó²⁰. Apenas un mes y medio después de encontrar el cadáver de Aramburu, el ex Secretario General de la CGT –José Alonso- murió acribillado a balazos en plena calle de la Capital Federal, el 27 de agosto²¹. El 16 de setiembre fueron colocadas veintitrés bombas: los atentados se realizaron como repudio al aniversario de la Revolución Libertadora²². Al ser tomada una comisaría en Rosario –el 18 de setiembre- fueron muertos dos policías; en Villa Martelli en un tiroteo con subversivos cayó otro policía el 23 de setiembre; un grupo terrorista asaltó un tren cerca de Bancalari el 25 de setiembre.

El día del Censo Nacional – 30 de setiembre- en una acción de comando fueron sustraídas planillas que contenían resultados del Censo, correspondiente a barrio norte. También se efectuaron atentados en serie –el 2 de octubre- en Rosario, Santa Fe y Tucumán. El 16 de octubre un grupo guerrillero incendió, en Martínez, provincia de Buenos Aires, la casa del agregado aeronáutico de los Estados Unidos, coronel Charles Greffet. El 14 de noviembre fue muerto a balazos el comisario Osvaldo Sandoval del departamento de investigaciones de la Policía Federal. Siete miembros de las FAR atacaron un banco en La Plata el 15 de diciembre; y, el 16 de diciembre, una célula de las Fuerzas Armadas Peronista (FAP) atacó un puesto policial en Escobar y un oficial resultó muerto. El mismo día el abogado Néstor Martins y uno de sus clientes –Nildo Zanteno- fueron secuestrados a plena luz del día en plaza Congreso; se presumió que la acción había sido llevada a cabo por un grupo parapolicial. En otro enfrentamiento en Longchamps (provincia de Buenos Aires) fue muerto otro policía el 28 de diciembre; en Córdoba, durante un intento de asalto a un banco –el 29 de diciembre- fueron muertos un policía y una mujer. El mismo día, en un atentado contra la residencia presidencial de Olivos pereció un oficial. El 30 de diciembre, Montoneros asaltó una sucursal de correos en Córdoba y robó cinco millones de pesos. El 16 de diciembre, en el juicio oral contra tramitado por el caso Aramburu, se dictaron sentencias contra: Carlos Alberto Maguid (18 años de prisión); Ignacio Vélez (dos años y ocho meses); el sacerdote Alberto Carbone (dos años en suspenso); Nora Nélica Arrostito de Maguid y Ana María Portnoy de Silveira fueron declaradas libres de culpa y cargo.

6.3.2. El frente sindical: el Congreso Normalizador de la CGT. José Rucci al frente de la CGT unificada.

Tras el paro del 1° de mayo de 1970, la Comisión de la CGT se dedicó a preparar la normalización de la central obrera: la fecha elegida coincidía con el día del Ejército, el primer aniversario del Cordobazo y –más tarde se sabría- coincidió con el día del secuestro de Aramburu. Después de varios años, el Gobierno estaba por lograr que el Congreso Normalizador le diera –sino una CGT adicta- al menos una complaciente²³. Como sucedía tradicionalmente antes de los Normalizadores, los nucleamientos implicados (las 62, la NCO, L8 y los NA) acordaron el gremio que se alzaría con la Secretaría General de la CGT: la UOM, UOCRA y LyF estuvieron de acuerdo y, desde el comienzo, descartaron el nombre de Lorenzo Miguel (UOM) porque estaba ocupado en la seccional Capital. Así surgió la figura de José Ignacio Rucci (UOM) –antiguo y hábil colaborador de Vandor y flamante Secretario General de la seccional San Nicolás- con este acuerdo las 62 avanzaba un paso más en el pedido de Perón de una CGT unida y peronista²⁴. Pero a pocos días del Congreso comenzaron a surgir rumores de que el Congreso se postergaría²⁵. Aprovechando la

conmoción general por el secuestro de Aramburu, la CGT acordó postergar el Congreso Normalizador hasta comienzos de julio (finalmente se realizaría el jueves 2 de julio de 1970). Julio comenzó con otra conmoción por el golpe Montonero en La Calera. Con un país conmovido por estos hechos y un nuevo Gobierno Nacional, se constituyó el Congreso Normalizador de la CGT bajo el nombre de “Augusto Timoteo Vandor” – el 2 de julio- con la presencia de veedores oficiales. A pesar de los tanteos y reuniones previas en procura de la unidad, no se sabía aún si esta se había conseguido: solo conseguían –por el momento- en las críticas a las declaraciones del nuevo Ministro de Economía (Moyano Llerena) y en que, con la renuncia de San Sebastián (ex Secretario de Trabajo y enlace irremplazable con la dirigencia sindical) muchos dirigentes se sentían menos comprometidos con la Revolución Argentina²⁶. Por la tarde del sábado 4 de julio los delegados en el Congreso se enteraron que aún no había lista para votar. Poco más tarde se conoció el acuerdo entre los nucleamientos implicados, Gerónimo Izzeta fue el encargado de dar a conocer los nombres del Consejo Directivo, cuya Secretaría General quedó a cargo de José Ignacio Rucci (UOM -62) y la Secretaría Adjunta a cargo de Adelino Romero (Textiles-NCO). Para respetar el acuerdo se amplió en un cargo el Consejo Directivo de veinte miembros, que quedó integrado por cuatro representantes de las 62, cuatro de L8, cuatro de NCO y nueve de los NA²⁷. Las nuevas autoridades de la CGT asumieron el lunes 13 de julio de 1970. Sus primeras acciones fueron realizar un análisis de la realidad argentina, la elaboración de un memorial para entregar al Presidente Levingston y la convocatoria a un CCC –citado para el martes 29 de setiembre- para fijar el accionar futuro de la central. El encuentro con Levingston se produjo el jueves 23 de julio en la Casa de Gobierno. En el memorial se incluían reclamos salariales: restablecimiento de paritarias sin tutelajes ni topes y medidas para su actualización automática. En lo que hacía al régimen previsional se solicitaba el retorno a la ley 14.499 o la reforma de la ley vigente con la inclusión de compensaciones por año de servicio, directores obreros en las Cajas de Jubilación, incremento de los aportes empresarios en las Cajas de Subsidios Familiares (CASFEC y CASFPI) y la reglamentación de la ley de Obras Sociales porque al no estar reglamentada los empresarios no podían cumplir con sus aportes y estas se sostenían solo con el aporte de los trabajadores²⁸.

6.3.3. Las contradicciones de origen en el gabinete: vacilaciones sobre el plan político. El intento de profundizar la Revolución. La encrucijada política.

La formación del nuevo Gabinete fue trabajosa y se logró al cabo de tres semanas: el resultado fue un equipo heterogéneo, producto de la pugna de distintos grupos que buscaban influir en el poder y sin perspectiva unificada acerca de cómo y cuándo iniciar el proceso político. Se había conformado más por los deseos de las

Fuerzas Armadas que por la voluntad personal del Presidente²⁹ La fricción apareció en el Ministerio del Interior donde el brigadier McLaughlin basaba el futuro del plan político en un acuerdo con los viejos partidos tradicionales³⁰. Como no había estado relacionado con el golpe de junio de 1966 ni con la Revolución Argentina, salvo como embajador en el exterior, tenía poca preocupación a diferencia de otros miembros del gobierno –más comprometidos con el proceso- por implementar los objetivos formalmente manifestados o por salvar la imagen de la Revolución. Pero este no era el punto de vista del Presidente, ni del Ministro de Defensa –Cáceres Monié- y, al principio, del propio Lanusse. En un documento del 30 de junio de 1970, Cáceres Monié se manifestaba a favor de esfuerzos para promover el rápido desarrollo económico simultáneamente con el comienzo del diálogo político, argumentando que no podía haber solución política sin atacar primero los problemas económicos y políticos, sostenía que la condición básica para abrir la salida cívica perdurable y con gobiernos estables era profundizar la revolución en lo económico provocando aceleradamente el desarrollo económico y social de la Nación³¹. Con este pensamiento de profundizar la Revolución coincidía el Secretario del Interior Ricardo Gilardi Novaro³² que había sido nombrado personalmente por el Presidente el 21 de agosto, pasando por encima de las objeciones de McLoughlin³³ e iniciando las divergencias que más adelante llevarían a la recomposición del gabinete y al cambio de rumbo fogueado por esta tendencia. Gilardi Novaro, como Subsecretario del Interior para Asuntos Políticos comenzó a actuar independientemente de su jefe - el Ministro McLoughlin- con quien ya había entrado en colisión y empezó a trabajar en acuerdo directo con el Presidente³⁴. En las semanas siguientes el Ministerio del Interior presentó una imagen desorientadora con un Subsecretario tomando iniciativas y haciendo declaraciones que no eran autorizadas por el Ministro del área³⁵. Si bien esto y otros componentes, menos explícitos pero notoriamente corporativistas no eran ninguna novedad en el Gabinete, en esta relación directa entre el Presidente y Gilardi Novaro aparecían nuevos elementos que marcaban la distancia –nuevamente- entre estos nacionalistas y los liberales paternalistas: había un explícito propósito de eliminar a los viejos partidos, para los que hubo palabras más duras aún que durante el período de Onganía. Se pretendería sustituirlos –eventualmente- por nuevos y muy pocos partidos que no serían menos jerárquicos y ordenados que el resto del sistema social que se tenía en vista³⁶. No quedaba claro que eran “unos pocos partidos” pero no se descartaba que fuera solo uno insinuado en las intenciones de crear un *Movimiento de la Revolución Argentina* al que le tocaría encarnar y continuar el ideario más allá del lapso que durara el régimen militar³⁷. Para esto, el gobierno debería llevar adelante la proeza simultánea de movilizar al pueblo y, por otra parte, controlarlo y canalizarlo por los carriles de un capitalismo nacionalista y de una sociedad jerarquizada. Como se ve, el intento tenía clara inspiración en el PRI mexicano, con la diferencia que ese Movimiento no nacería de nada parecido a una revolución y se encontraba ante un sector popular

que ya había pasado por la experiencia populista durante los gobiernos de Juan Perón y se encaminaba hacia una activación mucho más allá de los límites dentro de los que se pretendía movilizarlo con lo poco que quedaba del régimen. Si era casi nulo el espacio político y organizacional para el intento, también eran pocos los beneficios económicos que podrían facilitarlos con la gestión económica de Moyano Llerena que –a pesar de las incongruencias comentadas en el Gabinete- era, sin duda, el más esforzado en mantener la ortodoxia y era reconocido como el principal inspirador e ideólogo de la gestión de Krieger Vasena. Increíblemente, el Presidente no ahorró esfuerzos por contradecir el objetivo político con su discurso intentando “llegar al pueblo”³⁸ mediante diálogos desairados o demostrando “su interés por los pobres”³⁹ pero esas intenciones no era precisamente ayudadas por las insistentes referencias a la *jerarquía* y a la *autoridad* ni por sus ataques contra los políticos que estaban comenzando a ser revalorizados por la opinión pública.

A principios de octubre el compromiso de Levingston de promover la conciliación nacional y la comunicación abierta con todos los sectores fue puesto a prueba cuando Jorge Daniel Paladino –delegado de Perón en la Argentina- y Adolfo Cavalli –un gremialista de la línea dura- solicitaron al Ministerio del Interior permiso para realizar una reunión al aire libre el 17 de octubre, día que se festejaba la lealtad peronista. Por supuesto las opiniones entre dar o no el permiso estaban divididas ya que se corría el riesgo de que la reunión se descontrolara y terminara convirtiéndose en una manifestación multitudinaria contra el gobierno. Por otro lado, era poco coherente permitir la manifestación de carácter político mientras seguía la prohibición general sobre las actividades de los partidos⁴⁰. Durante el fin de semana previo (10 y 11 de octubre, extendido por el feriado del día 12) el tema se había convertido en prioritario y la decisión del gobierno no podía seguir demorándose, así que debía resolverse ese fin de semana⁴¹. En función a los argumentos manifestados en las reuniones –el 16 de octubre- el gobierno decidió negar el pedido⁴².

La crisis en el Gabinete no tardó en llegar. La decisión presidencial explicitada en el discurso de Levingston del 30 de setiembre ante la Asamblea de Gobernadores comprometió su acción política tras el modelo nacionalista-desarrollista de sesgo populista propuesto por Cáceres Monié y Gilardi Novaro. Esto puso fuera de juego en forma inmediata a dos ministros: McLoughlin Ministro de Interior que renunció el martes 13 de octubre al quedar completamente descolocado frente a la opción presidencial⁴³ y Moyano Llerena, Ministro de Economía –que renunció en la misma tarde del martes 13- quien, sin embargo, había sido nombrado hacia justo 115 días (el 18 de junio) por expreso pedido de Levingston como una muestra de la continuidad de la política económica de Krieger, hoy disfuncional al nuevo proyecto político del Presidente⁴⁴. Claro está que en aquel momento, el Presidente

desconocía que su gobierno desembocaría en esta apuesta nacional desarrollista. Desde entonces, Levingston no dejó de dar más y más pasos: Moyano Llerena fue reemplazado por Aldo Ferrer que era el hombre que, en ese momento, podía llevar adelante la política económica elegida; McLoughlin dejó paso a Arturo Cordón Aguirre⁴⁵. Las otras etapas estarían signadas -meses después- por la renuncia de Francisco Manrique y el brigadier Ezequiel Martínez: el propósito, sumamente claro, era reconstruir la idea del gabinete presidencial, no del gabinete acordado entre el Presidente y la Junta de Comandantes. La Junta comenzaba a preguntarse si no había cometido un error al designar a Levingston: el escenario era preocupante, todo parecía conducir a un onganato sin Onganía. Lanusse había tomado debida nota de esta circunstancia y el 26 de octubre le envió al nuevo Ministro del Interior un memorándum con un cronograma tentativo que incluía la enunciación de un plan integral de gobierno para el corto y mediano plazo, mencionando la necesidad de lanzar una campaña para promocionar la unión entre los argentinos⁴⁶. Pero, entre el tempestuoso carácter mostrado por el Presidente y el temor de la Junta de Comandantes de relevar nuevamente y con tanta rapidez a otro Presidente designado por ella; Levingston lograba -por el momento- poner en marcha su pequeña revolución de octubre.

6.4. El giro de la política económica: del liberalismo económico al nacional-desarrollismo populista. El programa económico y social de Aldo Ferrer y el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971-1975.

Luego del primer ensayo continuista a cargo de Moyano Llerena, la segunda etapa de la Revolución Argentina planteó, a partir del nombramiento de Aldo Ferrer como Ministro de Economía, un cambio brusco en el modelo económico que se había establecido durante la presidencia de Onganía, primero con Krieger Vasena y luego con Dagnino Pastore. El nuevo Ministro propuso promover el desarrollo industrial y una intervención amplia y directa del Estado en este crecimiento⁴⁷. Este viraje significó también una redefinición de las alianzas con las fuerzas sociales que debieran sostener el nuevo plan. La dupla Levingston-Ferrer buscó el apoyo de los sindicatos agrupados en la CGT, es decir de la burocracia sindical, acosada en su poder por los sindicatos clasistas como SITRAC-SITRAM y la contestaría CGTA; del sector agropecuario postergado por la política de Krieger, del que dependía en el corto plazo el ingreso de divisas por exportaciones, y del conjunto de las Fuerzas Armadas que debían no solo aceptar el cambio, sino también apoyarlo y presentar ideas más flexibles para captar aliados moderados, en un intento de sostener las bases del gobierno a pesar de la escalada guerrillera.

A partir de octubre, toda la estrategia política de Levingston giró en torno al éxito del plan de Ferrer. Las líneas generales del plan fueron expuestas a la prensa a mediados de noviembre de 1970. Sobre la política de financiamiento, el crédito interno se orientó a las empresas de capital local; en cuanto a las empresas extranjeras, el propósito era que se expandieran sobre la base de una mayor eficiencia, capacidad de acumulación y captación de recursos financieros en el mercado internacional. Un papel estratégico en el crecimiento lo tendría el Estado con su capacidad de compra⁴⁸. Se contemplaba optimizar y dinamizar la economía mediante la implementación de cincuenta obras públicas importantes que implicarían inversiones por más de 4.000 millones de pesos nuevos que significaban unos 1.000 millones de dólares. Esto requería un crecimiento de la inversión pública para 1971 del orden de 25% en términos reales sobre 1970. Los fondos se conseguirían con la colocación de títulos públicos en el mercado internacional. Los proyectos se referían a la órbita de YPF, Vialidad Nacional, Agua y Energía y Ferrocarriles Argentinos. En la movilización de la industria jugaba un papel fundamental el Banco Nacional de Desarrollo (BANADE) al que se le había incrementado el capital de préstamo con el aporte del 3% de los sueldos que significaban alrededor de 200 millones de dólares. Se colocaron también títulos en el mercado interno y externo, con lo que se procuraba un importe similar para el financiamiento del Banco. Se presentaba también una política de ingresos más flexible con una decisión muy firme de defender el salario real y el poder adquisitivo de la población, intentando que de los incrementos de riqueza que generara el desarrollo participaran los trabajadores que, a través de su capacidad de consumo, son uno de los factores fundamentales de la creación de riqueza. Los nuevos lineamientos no deberían provocar desequilibrios, ya que el déficit presupuestario de 1970 se calculaba en alrededor de 45 mil millones de pesos, es decir unos 10.2 mm de dólares. La previsión de la inflación anual para 1970 se calculaba en un 20%, razón por la cuál se propuso un acuerdo voluntario de precios y la aplicación de algunas medidas de control⁴⁹. Desde un primer momento el apoyo al plan de Ferrer fue relativo y su capacidad de acción se vio limitado por la heterogeneidad de su equipo: si tanto Krieger como Dagnino Pastore y Moyano Llerena –verdaderos soberanos en sus ministerios- debieron resignarse a compartir poderes, Ferrer también tendría que hacerlo⁵⁰ y esto se vio reflejado en la conformación de los cargos^{51/52}. Entre los colaboradores de Ferrer se encontraban varios jóvenes economistas con los que tenía estrecha relación en el Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES): Juan Vital Sourrouille (Subsecretario de Hacienda); Adolfo Canitrot (a cargo de las comisiones de reconversión de las empresas tomadas por el gobierno); Mario Brodershon (Jefe del gabinete de asesores) y Javier Villanueva (Secretario del CONADE luego de la ruidosa renuncia de Guglielmelli)⁵³. Todos ellos serían figuras relevantes en los gobiernos de la Argentina de los próximos años.

El proyecto económico social y político de Aldo fue reproducido ordenadamente en el *Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971-1975*, presentado por el Presidente Levingston el 23 de diciembre de 1970 en la provincia de San Luis. El Plan tenía en cuenta medidas de política económica y social de fondo, con la intención de producir cambios estructurales profundos al modelo existente⁵⁴. El contenido de las medidas más relevantes del plan podría sintetizarse así:

- **Política Fiscal:** el déficit presupuestario debe acompañar a la actividad económica. Se calculaba para el período 1970-1975 un aumento del déficit similar al incremento del PBI que rondaba en un 40%.
- **Política Económica:** se esperaba el aumento sostenido del PBI durante el desarrollo del Plan, buscándose mejorar las exportaciones y el nivel de inversión nacional a partir de la creación de dos herramientas financieras; el BANADE y el Ente Nacional de Comercio Exterior dirigidos a favorecer a los sectores más dinámicos de la economía. Se privilegiaba en el sector industrial a las ramas: petrolera, siderúrgica, mecánica, eléctrica, electrónica y naval. En Energía: hidroeléctrica y nuclear (Salto Grande, Apipé, Alicurá y la segunda central nuclear de Rio Tercero).
- **Transportes:** renovación de la estructura aeronáutica con inversión en pistas existente y nuevas especialmente en el sur del país. Repotenciamiento de la Línea Aérea del Estado.
- **Ganadería:** incentivos a la retención de vientres, al aumento de la producción nacional y a la exportación de carne vacuna.
- **Inversión Pública:** se propulsaba un aumento considerable en la participación del Estado en la producción nacional. Se iniciaba la aplicación de la Ley de *Compre Nacional* (Ley 18.875) de aplicación obligatoria a todas las compras del Estado, sea nacional, provincial o municipal; con lo que se esperaba orientar un monto cercano a los 2 mm de pesos, aproximadamente uno 500 millones de dólares. Esta ley mejoraba las condiciones del *Compre argentino* de 1963.
- **Políticas Sociales:** mejoramiento de las condiciones del sector más vulnerable de la población y de las regiones del país más postergadas. Incorpora la reforma educativa puesta en marcha por Onganía.

- **Ciencia y Tecnología:** se preveía que, al final del período, como mínimo el 5% de la inversión global debía destinarse al financiamiento de investigaciones orientadas a resolver los problemas de la economía nacional.
- **Vivienda:** se esperaba, al final del período, una reducción del déficit habitacional del orden del 40%.
- **Salud y Seguridad Social:** se establecían seguros obligatorios por accidentes del trabajo y de enfermedades del trabajo y –en una segunda etapa- se preveía un seguro de salud y desempleo. Es Estado –en todos sus niveles- debía realizar los pagos correspondientes a la seguridad social.

En un intento de mejorar el ingreso nacional a favor del salario, el plan se proponía una mejor distribución en base a cuatro puntos: a) un mejoramiento del salario real de los trabajadores del orden de 5.5% anual; b) aumentar la participación del salario en el ingreso nacional pasando del 41% de 1971 al 47% en 1975; c) los servicios sociales como salud, vivienda y educación formarían parte de la mejora real de los salarios; y, d) la reducción de la desocupación que llegaba al 6% al inicio del plan a menos del 2% al final del quinquenio.

La prensa comprendió que el *Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad* y la ley de *Compre Nacional* y las *paritarias* eran el núcleo duro del proyecto de Ferrer⁵⁵. El problema que varios medios señalaban era que los índices eran poco consistentes para el crecimiento previsto y respondían más a un cálculo político que al estrictamente económico. El *Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad* planteaba como objetivo un crecimiento del 7% anual acumulativo. Pero, estos cálculos eran en realidad un promedio entre los realizados por el equipo de Javier Villanueva y el de sus predecesores en el CONADE: Zaldueño que lo estimaba en un 5.5% y Guglielmelli con ratios del 8%. El Plan calculaba –en la industria- un crecimiento anual acumulativo del 8.4% anual, es decir, casi el doble del 4.3% de la década de 1960. La exportaciones se expandirían a una tasa del 9.2% y participarían en forma creciente en el PBI, pasando de un 10.9% en 1970 a un 12% al final del quinquenio. La inversión bruta interna debería llegar en 1971 a 576 mm de pesos (unos 144 mm de dólares al tipo de cambio de \$4.- por dólar estadounidense, lo que significaba un 12.4% de incremento en relación al año anterior) y se esperaba que llegara a 690 mm de pesos al final del quinquenio^{56/57}. En defensa del Plan Ferrer, diremos que era casi inevitable que las previsiones de crecimiento contenidas en él, resultaran de un promedio de las realizadas por los anteriores responsables del CONADE (Zaldueño y Guglielmelli), por su parte, la meta del

7% prevista por Villanueva, resultaba también más realista que la previsión de Guglielmelli (8%)⁵⁸.

El proyecto económico y social de la segunda etapa de la *Revolución Argentina* suponía también un cambio drástico acerca del papel que deberían jugar los capitales nacionales en la economía: no se llegaría a una economía nacional integrada si los capitales nacionales no participaban crecientemente en los sectores más dinámicos. La decisión de orientar a las empresas extranjeras a financiarse en el exterior no solucionó los problemas de la balanza de pagos sino que más bien los agravó. Las empresas extranjeras, en lugar de realizar inversiones genuinas con aportes de capital (o tipo greenfield) se financiaban con autopréstamos (del tipo back to back) lo que terminaba, a corto plazo, agravando el problema de la balanza de pagos⁵⁹. También se había notado que la transferencia de tecnología era, por lo general, obsoleta para el país de origen y no mejoraba las posibilidades de exportación sino que solo abastecía el mercado local. Había también que revertir el proceso de desnacionalización de la banca privada para permitir que el capital nacional se centrara en los sectores más dinámicos de la economía: la creación del BANADE fue la herramienta más relevante para darle al empresariado nacional la opción de modernizar sus plantas con nuevas máquinas herramientas⁶⁰. Estas políticas, de ninguna manera atentaban contra la inversión extranjera, sino que, por el contrario, la encauzaban beneficiosamente para el logro de los intereses de la estrategia de desarrollo nacional⁶¹. Aunque Lanusse y los generales no comulgaban con la propuesta de *profundizar la Revolución* y promovían una salida electoral más o menos rápida, tampoco discrepaban demasiado con este tipo de proyecto económico: la discrepancia entre los militares se limitaban –más bien- a si las transformaciones que contenían estas ideas debían preceder o acompañar a las elecciones.

Las ideas económicas no era exclusivas de Ferrer, sino que predominaban –con distintos matices- en un amplio espectro ideológico: en el anteproyecto de plan político que el Ejército elevara a Levingston -el 24 de noviembre de 1970- a pedido del propio Presidente, además de señalar, en forma general, que los objetivos económicos del Arma eran la nacionalización de la economía y el desarrollo con justicia, se daba un respaldo explícito al nombramiento de Ferrer en el Ministerio de Economía⁶². Algo parecido ocurrió con el movimiento multipartidario La Hora del Pueblo: cuando hizo públicas sus ideas económicas, estas, no parecían ser muy diferentes en su esencia a las de Aldo Ferrer. Hay que convenir que era muy difícil que alguien no acordara en que los intereses fundamentales de la Nación debían pasar por un moderado nacionalismo económico, la defensa del desarrollo nacional, el crecimiento económico, la equitativa distribución del ingreso, la dinamización y eficientización de los recursos, etc. Estos eran valores fundamentales con los que –con matices- era difícil no coincidir.

6.4.1. Un cuestionado Rucci en la CGT: el paro edulcorado. Los cambios en el Ejército.

El lunes 28 de setiembre –poco antes de la medianoche- un centenar de delegados al Comité Central Confederal (CCC) tuvieron que esperar cuatro horas antes de entrar al salón enmarcado por los retratos de Vandor y Alonso. La endurecida línea de las 62 Organizaciones bajo la conducción de Adolfo Cavalli, Agustín Cuello y Néstor Carrasco, renegaron del plan acuñado por el vandorismo (movilizaciones en octubre y un paro de 48 horas en noviembre) para proponer acción inmediata ya; dos paros completos en octubre (el día 9 y el 22) y una huelga general de 72 horas en noviembre. El motivo: los reclamos incumplidos de la reunión del 23 de julio con el Presidente. No le fue fácil a Rucci modificar la situación, necesito tiempo (cuatro horas) para acordar con su Consejo Directivo. Por fin –en la madrugada del martes 29- se adoptó, sin resistencias, el plan de las 72 horas: Se reincidía en los planes de lucha, un remedo de los que Alonso y Vandor habían hecho en 1964, cuando, sin mellar al gobierno, terminaron peleándose entre ellos. Pero todos salieron contentos, incluso el Secretario de Trabajo Juan Alejandro Luco (sucesor de San Sebastián) que comentó: *“es lo normal y lógico, lo que esperábamos. Esto no afecta las excelentes relaciones que tienen los gremios con mi Secretaría”*. La pasividad del Gobierno también era normal y lógica: sabía que –al costo de 72 horas perdidas- conservaba el ínfimo ascendiente sindical de la dirección cegetista, la cuál, fingiéndose belicosa, enviaba la agitación obrera a vía muerta. En tanto, en el frente militar, –el martes 22 de setiembre- la Junta Superior de Calificaciones del Ejército había terminado su dictámen sobre promociones de fin de año para generales de división y de brigada; ascenderían a generales de división: Alcides López Aufranc (amigo personal de Lanusse), Miguel Angel Viviani Rossi (amigo personal de Levingston), Juan Carlos Sánchez y Alberto Nicolás Rocatagliata.

Sin embargo, era un hecho que a Levingston le había bastado poco más que un trimestre para librarse de dos Ministros –McLoughlin y Moyano- avalados por Lanusse y la Junta de Comandantes. Pero Levingston también pago su precio; Gilardi Novaro –su Subsecretario de Acción Política- que había conservado su puesto durante el interinato en Interior –confiado al Canciller de Pablo Pardo- debió renunciar inmediatamente después que su Ministro. La crisis había terminado, o, al menos, eso parecía. Simultáneamente, se dieron a conocer los pases militares y los nuevos destinos de los altos jefes del Ejército, quienes tomarían sus cargos a partir del 2 de enero próximo; solo dos Cuerpos cambiarían de comando: el II Cuerpo de Ejército, con sede en Rosario y el III Cuerpo, con sede en Córdoba, donde Juan Carlos Sánchez y Alcides López Aufranc –nuevos generales de división- sucederían a Roberto Fonseca y Aliodoro Sánchez Lahoz. En Córdoba, el III Cuerpo perdía también a su segundo comandante: el general de brigada Jorge

Raúl Calcagno (el pacificador del Cordobazo) era suplantado por el general de brigada Virgilio Ernesto Gorrioz. Calcagno –futuro Jefe del Ejército en la presidencia de Isabel Perón- pasaría a revestir en el Estado Mayor Conjunto: un organismo burocrático que servía a las tres armas⁶³. Los ascensos y los cambios en los destinos del generalato con mando en los Cuerpos de Ejército fueron cuidadosamente realizados por Lanusse. Definitivamente la Fuerza estaba alineada tras él, su liderazgo era indiscutible.

6.5. *El compromiso de La Hora del Pueblo. El proyecto de Plan Político.*

Entre el 12 y el 13 de noviembre de 1970, los partidos políticos más significativos de la Argentina –comenzando por el Movimiento Nacional Justicialista y la Unión Cívica Radical- firmaron junto a otras agrupaciones menores y ciudadanos independientes un compromiso que se conocería como La Hora del Pueblo⁶⁴. Sin duda alguna, Juan Domingo Perón y Ricardo Balbín habían decidido presionar juntos a favor de una salida electoral e incidir sobre la opinión pública, para lograr la adopción de una política económica con un sesgo nacionalista moderado. La importancia que tuvo de inmediato ese nucleamiento, mostró hasta qué punto los resultados de la Revolución Argentina habían sido insatisfactorios. Los antiguos dirigentes –a los cuales el proceso iniciado en 1966 había intentado superar- regresaban a escena con más fuerza que nunca. El 24 de noviembre, Lanusse desencadenó una verdadera sorpresa; formuló imprevistas declaraciones a la prensa cordobesa, anunciando la existencia de un plan político: el propio Levingston le había solicitado al Ejército este proyecto. El plan proponía: una reforma constitucional, la unificación de los mandatos de legisladores y Presidente en cuatro años y un estatuto para los partidos políticos. Había también una recomendación: no aceptar un partido oficialista⁶⁵. El miércoles 2 de diciembre, el Presidente, sus Ministros y los tres comandantes cambiaron ideas sobre el plan político –la Armada y la Aeronáutica ya habían presentado el suyo, adhiriendo al del Ejército- la reunión duró casi cuatro horas y algo quedó claro: el Presidente haría en adelante los enunciados políticos y retendría el poder de decisión. Las Fuerzas Armadas ya habían dado su opinión y lo que importaba era que el plan fuera prescindente, democrático, representativo de la opinión de todos los sectores y no reflejara en exceso el punto de vista de los militares. El viernes 4 de diciembre, Levingston hablaba desde Neuquén en su visita al Chocón. Para los que esperaban un calendario electoral, la defraudación fue total; en 21 minutos de alocución presidencial hubo solo un anuncio de modesta proyección: el anteproyecto del plan estaría listo para el 30 de junio de 1971. El desaliento fue total y el semáforo militar encendió su luz amarilla. El martes 29 de diciembre – para cerrar el año- Lanusse expuso ante los mandos las directivas para 1971:

“Después de un siglo –dijo con referencia al terrorismo- la Nación está nuevamente en guerra y el Ejército en operaciones. La guerra se está librando por la conquista de las mentes y los corazones. En la lucha contra el enemigo subversivo debe evitarse la fácil tentación de emplear los mismos métodos que los terroristas, ya que ello deterioraría gravemente la eticidad de nuestra posición y destruiría el fundamento de nuestra lucha. La victoria solo es posible si se tiene la capacidad para mantener la fidelidad a las normas de conducta que nos definen. El gobierno tiene el apoyo del Ejército para el logro de los objetivos trazados”⁶⁶. Esta advertencia sobre los métodos en la lucha contra la subversión resultaría premonitoria de lo sucedido apenas seis años después.

6.5.1. La coyuntura impone límites al plan de Ferrer.

Definitivamente, la crisis de la *Revolución Argentina* –incubada desde tiempo atrás- comenzó a expresarse claramente en el primer bimestre de 1971. El Presidente –en comunión de ideas con un sector de creciente importancia en el gabinete- no dejaba de mover sus piezas con audacia, sea removiendo a un ministro o designando a un gobernador, es decir, tratando de reafirmar su autoridad e independencia de la Junta. No hay dudas sobre la importancia que le estaba dando Levingston a la coyuntura latinoamericana; influído –tal vez- por la situación política en algunos países de la región; pensó quizás, que el triunfo de Salvador Allende en Chile –en el marco de una experiencia democrática como vía al socialismo- y la revolución peruana de tinte nacionalista bajo el liderazgo del general Velazco Alvarado -ambas de alto impacto político en Latinoamérica- abrían la posibilidad de una perduración de su gobierno a través del nacional-populismo⁶⁷. Lo cierto es que se estaba produciendo una compleja mutación en el pensamiento del general Levingston, quizá como resultante de la breve experiencia de gobierno o como adecuación táctica a fines que –seguramente- debía considerar permanentes.

Las críticas al joven Ministro del *modelo integrado y abierto*, provenían de lo que se consideraba un manejo deficiente del corto plazo, especialmente en lo referido a la inflación. El índice del costo de vida había ido en aumento a finales de 1970 y en los primeros meses de 1971 llegó a niveles inauditos para ese entonces: 27.4% en enero; 29.9% en febrero; 29.6% en marzo y 29.8% en abril. En la base de este fenómeno estaba el complicado problema de la carne vacuna: el precio de la carne había aumentado 300% de enero de 1970 a enero de 1971⁶⁸. Este incremento había llevado a que los productores liquidaran virtualmente sus existencias, lo que trajo como consecuencia una escasa oferta y, por supuesto, un nuevo estímulo al alza del precio. La importancia de este alimento (por entonces el

consumo anual *per cápita* superaba los cien kilos) en el consumo y en la composición del índice de costo de vida, también había impulsado hacia arriba los precios de los bienes sustitutivos, sin mencionar que la disminución de las ventas al exterior impactaba en el flujo de divisas⁶⁹. El Ministro Ferrer acudió –por primera vez, el martes 29 de diciembre de 1970- tras la asunción de la cartera económica a una alocución televisiva para explicar los objetivos de su plan y los problemas de la coyuntura. El Ministro estaba enfrentando un sordo operativo de desgaste llevado a cabo contra las aristas más audaces de su programa, por parte de los principales voceros del *establishment* liberal⁷⁰. El aumento de salarios anunciado se reducía al 6% prometido por su antecesor –Moyano Llerena- y tendía un manto de silencio sobre el revolucionario proyecto de destinar dos puntos al BANADE, alrededor del cual el Ministro se limitó a volcar meros enunciados literarios que ya había formulado antes. Lo peor era que Ferrer parecía abandonar sus propias concepciones estructuralistas sobre el origen de la inflación, cuando se alegraba de que en próximo presupuesto “la contribución del sector público al incremento de la demanda global se mantiene en proporciones bajas”; esta observación debía llenarlo de incertidumbre considerando que el nivel de actividad estaba seriamente deteriorado y que existían amplios márgenes de capacidad ociosa en equipos y mano de obra: de este modo, no se entendía cómo iba a arreglárselas para imprimir a la economía de 1971, no ya la expansión del 8% que procuraba en un principio, sino inclusive, la más modesta tasa del 6.2% que había introducido el flamante plan del CONADE. La crítica más enfática provino de la Unión Industrial Argentina (UIA) en cuya opinión: *“este camino conduce directamente a la socialización de los medios de producción, o sea, hacia la estructuración de una sociedad en la que todo el poder económico, político y sindical, quede concentrado en un Estado omnipotente”*⁷¹. Ante tal aluvión de críticas, sonó casi inadvertida la voz discordante de la Confederación General Económica (CGE), que en su declaración correspondiente se felicita de: *“la existencia de una nueva mentalidad a nivel de la conducción oficial, capaz de abordar en profundidad los problemas estructurales que han conducido al país a su actual situación de deterioro”*. Como se dijo, el proyecto de Ferrer tenía tres pilares: el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad 1971-1975, la Ley de Compre Nacional y las paritarias. Con el Plan buscaba promover el desarrollo económico a partir de polos que arrastraran el crecimiento en el conjunto de la economía. Para ello pretendía continuar con una intensa construcción de obras públicas, tal como lo había realizado en ese ministerio que desempeñara en los primeros meses de la administración Levingston. Aunque en su proyecto no se descartaba la inversión de los capitales externos, los controles que intentaba introducir y su posición teórica privilegiaban el papel de las inversiones nacionales, que estarían centradas en el enorme poder de compra del Estado y su consecuente papel de potencial dinamizador de la economía a través de la inversión pública y de la dirección que

el Estado daría al crédito para la reactivación y reequipamiento del sector industrial, pero: ¿Era realista este proyecto?

6.5.2. Apuntes y conclusiones sobre el Plan Ferrer: cuando la coyuntura condiciona el largo plazo.

Con Ferrer en el Ministerio de Economía y Trabajo se producía, finalmente, el acceso de un grupo nacionalista a este sector del aparato estatal. El Ministro como buena parte de sus colaboradores tenían la particularidad de no provenir del nacionalismo *católico* y *derechista* sino de ser *técnicos desarrollistas* de orientación reformista. Igual que los liberales tenían vínculos internacionales, pero mucho más con los organismos vinculados al desarrollo –CEPAL, Grupo Andino, BID- que con empresas transnacionales u organismos financieros internacionales. Sin embargo, las ideas del ministro acerca de la función del Estado en la economía parecían adolecer de cierta ingenuidad, común en los desarrollistas. Para Ferrer el Estado parecía encontrarse por encima de los intereses sectoriales, del movimiento obrero, del empresariado y no tomaba en cuenta que, en realidad, es un fenómeno social y como tal, se convierte en un instrumento institucional, un área de puja, por medio del cuál determinados grupos intentan obtener sus fines, y esto hace al problema bastante más complejo. La pregunta era: ¿en qué circunstancia y bajo qué condiciones el conjunto de los grupos que conforman el espectro de sectores que puján por sus objetivos, a veces antagónicos, aceptarían que el Estado se transforme en el dinamizador del desarrollo industrial? El asunto podría verse de otra manera: el Compre Nacional estaba pensado para que las empresas nacionales –a través de su crecimiento- pudieran competir en el mercado internacional, pero, en cambio se transformó en un instrumento para que los empresarios le vendieran al Estado cualquier cosa y a cualquier precio. El BANADE debía ser una palanca financiera para que los préstamos a largo plazo y bajo costo fueran aplicados a la renovación del stock de maquinarias y equipos existentes y a la conformación del capital de trabajo necesario para fortalecer a las empresas nacionales. Pero los empresarios no aplicaron los créditos en forma adecuada, sobrefacturaron las importaciones de equipo para dejar divisas en el exterior y, de paso, nunca devolvieron los préstamos; así que, finalmente el BANADE se transformó en un verdadero transferidor de recursos a las arcas empresarias, sin retorno alguno. Estas deficiencias intentan explicar la incapacidad y la inconveniencia de la intervención del Estado en la economía. Pero, tal vez, esa incapacidad consistía en creer que el sector empresario existía ciertamente, que se estaba conformando una verdadera burguesía industrial, cuando el sector no era más que una entelequia. En definitiva, la banca oficial de fomento –creada para apuntalar la creación de un pujante sector empresario-

permitió negocios rápidos a un grupo de oportunistas maquillados de empresarios. Por otro lado, la alianza de intereses en la que se apoyó el Plan no pudo consolidarse debido a las condiciones políticas en las que intentó concretarse. Si bien las propuestas de Ferrer para aliviar la situación social con los resultados del desarrollo no dejaba de ser atractiva y parecía incluso promisorio en el largo plazo, no tenía posibilidades reales de concretarse a tiempo para favorecer el proyecto político. Por su parte, el movimiento obrero agremiado en la CGT –que había sido cooptado por el gobierno de Onganía desde 1967- ya se encontraba comprometido por la aparición del gremialismo combativo que, en esta coyuntura, sobrepasaban con sus demandas las posibilidades del gobierno. Así terminaba rápidamente las pretensiones de distender el clima social mediante un moderado aumento del salario real y, lo que debía ser una solución, se tornó en un serio problema con la discusión de los topes salariales en las paritarias. A un tiempo, el empresariado nacional –nucleado en la CGE- ante lo crítico de la coyuntura se retira a la espera de un mejor momento para comprometerse en un proyecto político. La llegada del ministro Ferrer –en octubre de 1970- se dio en el mismo mes en que el conjunto de variable económica produjeron un punto de inflexión muy notable: un insostenible incremento de los índices de precios, la reaparición del mercado negro de cambios, la salida de capitales de corto plazo y el recelo de la burguesía pampeana y la gran burguesía industrial, confluyeron y ayudaron al descrédito del ministro: todos los factores socavaron las bases de la frágil alianza que sostenía a Ferrer. El campo tronó su desacuerdo ante la política de carnes y la CGT mostró su ira cuando apareció la lista de precios máximos: “*son irreales, se trata de una nueva trampa*” dijeron los capitostes sindicales⁷². La base de la coalición que había intentado el gobierno también se desmoronaba y deslindaba responsabilidades: “*el retiro del apoyo de la CGE a la gestión económica y las críticas del sector agropecuario contribuyeron a aumentar el clima de desconcierto*”⁷³. El mismo status quo que se buscaba modificar enfrentaba límites que, inevitablemente, resultarían en un círculo vicioso.

El escenario de lo que ocurría en la Argentina de 1970 podría sintetizarse del siguiente modo. Para los militares y los partidos políticos el asunto era si los cambios económicos debían preceder a los políticos (esta era la posición de Ferrer, Levingston y algunos aliados) o si debían ser la consecuencia de estos últimos como lo proponía Lanusse y sus seguidores en el Ejército⁷⁴. Hay que enfatizar una cuestión: el debate estaba centrado en el orden en que los cambios políticos y económicos debían producirse, pero no en la política económica a seguir⁷⁵. Onganía y Krieger habían intentado una transformación profunda con una política heterodoxa que no dejaba de lado la intervención estatal, pero que se sustentaba en la estabilidad económica y la inversión de capitales externos a través de una política de ingresos-precios, esta modalidad fue reemplazada en

tiempos de Levingston-Ferrer por una estrategia desarrollista basada en el poder de compra del Estado y el ahorro interno. Otra diferencia entre Krieger y Ferrer era que, mientras con Krieger la política *ingresos-precios* estaba destinada a solucionar los problemas de la coyuntura, con Ferrer el predominio es del largo plazo que pretendía solucionar los problemas estructurales de la economía argentina. Más adelante, con Lanusse, la estrategia de Ferrer no se descarta pero se subordina la economía a la política⁷⁶. Curiosamente se puede ver una rara paradoja: mientras el ministro que contaba con las condiciones de país propicias y el apoyo político sólido y suficiente para encarar el largo plazo (Krieger) se decide por la coyuntura (programa de estabilización de corto plazo); el que carecía de poder político sólido con condiciones de país mucho más inestables (Ferrer) se decide por el largo plazo (plan de carácter estructural de largo plazo) mientras debe hacer equilibrio para solucionar la coyuntura. Si bien se puede decir que el clima de ideas económicas de los primeros 1970 pasaba especialmente por el desarrollismo, la adhesión de los militares a las ideas del desarrollo económico era, a la vez, un condicionante para la ejecución de las obras pública. Así, vinculaban el desarrollo con la afirmación de la soberanía nacional: las empresas cuyo desarrollo privilegiaban eran aquellas que consideraban cumplían un papel estratégico ante un eventual conflicto armado. De esta manera los militares eran – a un tiempo- una oportunidad y una limitación porque, si las hipótesis de conflicto eran principalmente Chile y Brasil, cualquier proyecto de desarrollo regional en territorios de dudosa defensa quedaba postergado. Un fenómeno interesante es que, el desarrollismo que intentó desplegar Ferrer ya no era el que predominaba en tiempos de Frondizi. En la década de 1960, el énfasis de los ideólogos del desarrollo pasaba por el crecimiento del ingreso *per cápita* y en los 1970 pasó a ser la mejora en la calidad de vida de la población: el desarrollismo de Ferrer era algo más parecido a las socialdemocracias europeas. Esto implicaba aceptar que los sindicatos fueran interlocutores en la tarea de consolidar bases nacionales – privadas y estatales- para este tipo de capitalismo. Pero, como ya estaba claro, en ese momento sus condiciones estructurales y políticas eran aún más débiles que para la implantación de un Estado fascista. De esto resultó que el equipo económico –motor inicial de un proyecto nacionalista- se encontró coexistiendo con la particular versión de nacionalismo de Levingston y sus colaboradores directos.

Pero, en definitiva: ¿cuál fue el resultado del Plan de Ferrer? Para algunos autores se trató de un completo fracaso, en cambio, para otros no lo fue tanto^{77,78}. Lo cierto fue que las ideas de Ferrer sobrevivieron al gobierno de Levingston y no fueron desechadas por Lanusse, quien lo mantuvo en el cargo durante los primeros dos meses de su gestión al frente del gobierno nacional y, -por un momento- hasta pareció compatible con una política económica que –aunque debiera archivar muchas de sus pretensiones nacionalistas- tuviera la *sensibilidad*

social necesaria para facilitar las negociaciones con las fuerzas políticas que expresaban a un sector popular cuyos votos volverían a ser cruciales: este novedoso intento de *populismo liberal* también naufragó rápidamente.

6.6. El flanco político y militar. El sindicalismo clasista y combativo: otra vez Córdoba: Los idus de marzo.

Aunque resulte difícil identificar un hecho específico en la relación Levingston-Lanusse como el punto de quiebre después del cual se desgastó la capacidad de ambos para la cooperación mutua, puede sostenerse que uno de ellos fue el discurso del Presidente del 4 de diciembre en Neuquén. En ese discurso en el que se esperaba delineara su programa político, Levingston desilusionó a su público al presentar un mensaje vago, contradictorio y con algunos puntos agresivos: ridiculizó a los políticos radicales y peronistas e insinuó que el gobierno podría crear su propio partido político como el instrumento necesario para asegurar la continuidad de su programa. La última parte de su discurso se leía como un documento de trabajo del Estado Mayor General del Ejército; y consistía en líneas detalladas de acción para el Ministerio del Interior, dándole instrucciones para preparar una agenda de trabajo para el 25 de diciembre a fin de estudiar las normas constitucionales y legales que debían aplicarse para llevar adelante el proceso de institucionalización. Sin embargo, el Presidente, al reiterar que el proceso exigiría cuatro o cinco años y al sostener que no emitiría un plan político definitivo antes del 30 de junio de 1971, dejó en claro que no veía ninguna urgencia en adelantar el proceso electoral⁷⁹. El discurso de Neuquén, no solo desilusionó a los líderes políticos, sino que se apartaba del consejo que Levingston había recibido de las Fuerzas Armadas⁸⁰.

En los días y semanas que siguieron a las directivas de Lanusse a los altos mandos del Ejército –el martes 29 de diciembre de 1970- se volvió –cada vez más claro- que el Presidente por su parte y los militares asociados con el Comandante en Jefe por la suya, estaban embarcados en caminos políticos divergentes. Levingston no dio ninguna instrucción al Ministro del Interior –Cordón Aguirre- para iniciar los preparativos de las listas de votantes (padrón electoral) y los tiempos (tres semanas) establecidos para que ese mismo Ministerio le enviara una agenda de trabajo con la formulación de los diversos pasos del plan político tampoco fueron cumplidos: esto sugería que su plazo del 30 de junio de 1971 para tener listos los documentos del plan político era probable que tampoco fuera respetado⁸¹. Al parecer el Presidente y su Ministro –Cordón Aguirre- estaban menos interesados en cumplir con los plazos que en explorar las posibilidades de crear un movimiento político pro gobierno⁸². En esta tónica de sumar voluntades para su proyecto político, el miércoles 30 de diciembre de 1970, Levingston

conversó –en la quinta de Olivos- con una decena de dirigentes políticos intermedios de distintas facciones, algunos de ellos era: los democristianos Fernández Gill y Augusto Conte McDonald; los alendistas Domingorena, Musacchio y Arana, el midista Julio Fernández Mendy y el demoprogresista Rafael Martínez Raymonda⁸³. Después de cinco horas de comida y sobremesa, revelaron una actitud política del Presidente que había sido tejida con prolijidad desde el Ministerio del Interior por Cordón Aguirre y sus asesores⁸⁴. Siguiendo con esta indecisa apertura política y en el marco de la ronda de conversaciones, Levingston se reunió también –el viernes 22 de enero de 1971- con Oscar Alende, un prestigioso dirigente político conductor de la *Unión Cívica Radical Intransigente* (UCRI) (más tarde Partido Intransigente) y ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, donde mantenía su prestigio y representaba una posición nacionalista de izquierda, que luego lo llevaría a una alianza con parte de la *democracia cristiana* y el *Partido Comunista*: con él departió el presidente durante casi dos horas en la Casa Rosada. La entrevista produjo una sacudida periodística en medio del abúlico enero. El líder *ucrista* desató la ofensiva de verano de Levingston contra Lanusse: después de almorzar con el Presidente, Alende denunció ante el periodismo la existencia de un complot por parte de monopolios extranjeros para derrocar al Ministro de Economía –Aldo Ferrer- y al propio Presidente. Sin suministrar prueba alguna, Alende aseguró que el propósito del complot era detener el proceso revolucionario ahora en camino de romper la unidad del Ejército: su táctica -sostuvo Alende- era crear un complejo de culpa entre los militares y convencerlos de aceptar la solución desesperada del comicio inmediato⁸⁵. Atacó también –con dureza- a la empresa *Deltec Internacional* y a los ex ministros Adalbert Krieger Vasena y Nicanor Costa Méndez: en adelante, Alende se convertiría en un verdadero numen tutelar del *partido de la revolución*⁸⁶. El fracaso en manchar a Lanusse con la acusación de “*ser blando con los monopolios extranjeros*” llevó a una nueva etapa en la campaña para desacreditarlo. Algunas versiones sostenían que oficiales de alto rango del Ejército estaban tratando de afectar las políticas de préstamos del Banco Nación en beneficio de una importante firma cerealera: *Bunge & Born*. Quien difundió esta acusación (en declaraciones del 19 de febrero, ver nota 97) fue otro líder de la *UCRI* –Celestino Gelsi- en otros tiempos gobernador de Tucumán, quien como Alende, estaba interesado en desempeñar un papel crucial en el nuevo partido político al calor oficial. El miércoles 27 de enero, el general Levingston daba a conocer una “*Información de la Presidencia de la Nación*” con forma de comunicado hablando sobre los intereses antinacionales “*que no siempre son extranjeros*”. Hacía comentarios sobre la nacionalización del crédito y la energía y sostenía que se incitaba a la rebelión con la creación malévolamente de falsas expectativas ya que era dable esperar una enconada resistencia y una creciente ofensiva por parte de quienes veían reducidos sus privilegios, sobre todo,

buscando comprometer a las Fuerzas Armadas. No se entendió muy bien a que venía este comunicado ni a quien iba dirigido. En clave de filosofía política para algunos dirigentes la síntesis fue: el propósito presidencial era aguantar mientras se pueda.

6.6.1. El gremialismo clasista y combativo. Los sindicatos de FIAT en el post-cordobazo. Un verano sin concesiones.

La ola de militancia que barrió las ciudades del interior en los años siguientes a 1969 contribuyó a desestabilizar tanto a gobiernos como a liderazgos sindicales establecidos. El centro de militancia permaneció en Córdoba pero sus ramificaciones se extendieron mucho más. La vanguardia del movimiento en Córdoba (como ya vimos) fue desempeñada por los gremios de Luz y Fuerza – liderado por Agustín Tosco- por los obreros de la planta IKA-Renault y por los sindicatos emergentes del post-cordobazo: SITRAC (Sindicato de Trabajadores de Fiat-Concord) y SITRAM (Sindicato de Trabajadores de Materfer, división de materiales ferroviarios)⁸⁷. Una de las características distintivas de esta militancia residió en el concepto de “*conducción gremial honesta*”, la frecuencia con que apelaron a la acción directa y a la adopción de otras tácticas no convencionales de movilización laboral: los llamados paros activos llegaron a ser la forma más común de lucha sindical en Córdoba⁸⁸. En 1971 la CGT de Córdoba desencadenó alrededor de doce paros activos. La modalidad de paro activo suponía la política consciente de romper con la pasividad asociada a las tradicionales protestas obreras: implicaba, por ejemplo, la tentativa de involucrar –diariamente- a la fuerza laboral en manifestaciones callejeras que procuraban llevar el conflicto laboral al marco más amplio de la comunidad⁸⁹. Aunque virtualmente no había participación de activistas peronistas intransigentes como dirigentes dentro los sindicatos clasistas de FIAT, los nuevos SITRAC-SITRAM no surgieron como explícitamente antiperonistas. A decir verdad, con una mano de obra que era casi en su totalidad peronista y una dirigencia sindical en la que se contaban muchos trabajadores que habían pasado por el peronismo, inicialmente no se contempló una confrontación con el movimiento obrero peronista en el terreno ideológico o político. El encono entre el peronismo gremial y los clasistas de FIAT fue, más bien, el resultado del aliento activo de estos últimos a otros movimientos de recuperación sindical del país, casi todos los cuales afectaban a las conducciones peronistas establecidas. Detrás de la animosidad entre clasistas y peronistas también se encontraban los cambios en la política obrera nacional: la elección de José Rucci –de la UOM- al frente del Secretariado General de la CGT –el 2 de julio de 1970- presagiaba el intento de restablecer la estructura verticalista en el movimiento obrero, que no había sido restaurada desde la época de la rebelión de la CGTA. La oposición de

los clasistas no se expresaba en términos de clasismo versus peronismo, sino en los del combate por una dirigencia sindical honesta y democrática y la reivindicación de un papel de conducción para la clase obrera en la construcción del socialismo.

La relación entre SITRAC-SITRAM y sindicatos locales como los legalistas de Atilio López y los independientes de Agustín Tosco fue al principio cordial, pero nunca pasó de un respaldo formal. Si bien ambos sintieron simpatía por el movimiento de recuperación sindical de FIAT y apoyaban la causa antiburocrática –que en los hechos era una reivindicación de la autonomía de Córdoba frente al centralismo porteño- ninguno estaba complacido con las posiciones clasistas con las que esos gremios se identificaban. La lucha nacida en las fábricas y el tutelaje político que ahora recibían los trabajadores desde la izquierda, comenzaron a acercar a los trabajadores de FIAT a posiciones adversas a las soluciones electorales peronistas apoyadas por los legalistas, es decir, a posiciones claramente revolucionarias y, por lo tanto contrarias al reformismo peronista. En los últimos meses de 1970 la rebelión en las fábricas FIAT creció y los sindicatos descubrieron que la empresa actuaba con vacilación e ineficacia en sus intentos de desbaratar el movimiento.

Al calor del verano, mientras la CGT se aprestaba a conceder vacaciones, las regionales del interior comenzaban a remozar sus cuadros; el nuevo año amenazaba con conflictos de envergadura: Córdoba –una vez más- despuntaba como la pionera. La CGT local controlada por la seccional de las 62 *Organizaciones*, no había podido normalizarse desde que Elpidio Torres renunciara a la Secretaría General, en julio de 1970. A la tradicional división entre *auténticos* –que responden a la ortodoxia porteña, es decir, *participacionistas*- y *legalistas* -vandoristas beligerantes- se había sumado un tercer grupo: *los basistas*, casi todos los sindicatos que lo integran habían sido asesorados por el gobernador Bernardo Bas, cuando este –desde el llano- se dedicaba a aconsejarlos. Después de media docena de plenarios las tendencias no habían logrado ponerse de acuerdo, aunque el *estatal* Héctor Castro – apoyado por Elpidio Torres y también por los *legalistas*- era el de mayores posibilidades. Torres bregaba por mantener la hegemonía de su gremio (SMATA) ante el avance de *dos listas ultras* (1° de mayo y Azul) que habían ganado varias elecciones de delegados. Ahora Torres se colocaba entre los más duros: desde este terreno disputaba la comandancia al SITRAC y al SITRAM. También los gremios independientes –liderados por Agustín Tosco- competían por una beligerancia mayor. La hora de las paritarias se presentaba como decisiva y el enfrentamiento con la corriente *clasista y combativa* era seguro.

El jueves 14 de enero de 1971, hacia la media tarde, los obreros de FIAT ocupaban la planta de Ferreyra (en las afueras de la ciudad de Córdoba) y

capturaban a unos 30 directivos de la empresa, parapetados tras tambores de nafta: una amenazante barricada en los accesos, que pretendía detener la represión. La medida la había decidido la asamblea del personal como réplica por los despidos de siete delegados del SITRAC-SITRAM y SMATA. Una intimación del Secretario de Trabajo y una orden del Presidente –bajo la amenaza de declarar en estado de emergencia en la provincia- fueron desoídas por los gremios, aunque se soltaron algunos rehenes para no endurecer las tratativas con el gobierno⁹⁰. Ferrer que intentaba encontrar una senda negociadora –para evitar la declaración del estado de emergencia en la provincia- pagó un alto precio para lograrlo: en la mañana del sábado 16 de enero intimó a FIAT la reposición de los despedidos y por la noche recogió el triunfo; la empresa cumplía y los obreros abandonaron la planta⁹¹. Sin embargo, fueron 30 horas que conmovieron a la sensibilizada Córdoba, mucho más cuando sobre el cielo caldeado sobrevoló el avión presidencial: hasta el menos imaginativo supuso que trasladaba al Comandante del III Cuerpo de Ejército –general de división Alcides López Aufranc y descontaban que la provincia sería declarada en emergencia. Todos evocaron la advertencia de López Aufranc al asumir el comando, a fines de noviembre: *“Si llegara a producirse la alteración del orden, no deseándolo en la jurisdicción del Cuerpo, el potencial del mismo estará al servicio de su restablecimiento”*⁹². Un análisis al terminar la semana, mostraba que los hechos de Córdoba fueron una amenaza para la corriente aperturista y negociadora que, en el Gabinete, propulsaba, junto a Ferrer, el Secretario de Asuntos Políticos del Ministerio del Interior, Hugo Taboada, al enfrentar la tendencia transaccional de los políticos con la formación militar, decididamente partidaria de afirmar el principio de autoridad. El jueves 21 de enero la semana de lucha de los cordobeses había sido analizada en Presidencia, en la Sala de Situación, por el gobernador Bas, Cordón Aguirre – Ministro del Interior- Ferrer –de Economía- y Luco –Secretario de Trabajo- y la presencia significativa de los generales Ibérico Manuel Saint James y Jorge Cárcano que comandaban la SIDE y el Estado Mayor Conjunto.

6.6.2. Levingston y la Junta de Comandantes: poderes en pugna. Ferrer en apuros.

El viernes 29 de enero de 1971, Lanusse recibía en la residencia oficial de Chapadmalal, donde estaba descansando con su familia, una carta del su asistente personal –el coronel Cornicelli- donde le informaba sobre la conversación que había mantenido con el almirante Gnavi para preparar el temario de la reunión que tendrían los Comandantes con el Presidente el 31 de enero por la mañana⁹³. El sábado 30 de enero llegaba –en avión- a Campo de Mayo desde Mar del Plata, el teniente general Lanusse: apenas aterrizó el aparato, los

generales Viviani Rossi y Tomás Sánchez de Bustamante le transmitieron experiencias negativas que habían tenido con el Presidente⁹⁴. El domingo 31 de enero, el Presidente y los tres Comandantes en Jefe –Lanusse, Gnavi y Rey sin sus esposas- conversaron con amplitud sobre las causas de tensión interna en el gobierno de la Revolución Argentina. La reunión terminó después de 5 horas y 45 minutos y había quedado claro que el Presidente debía siempre tomar en cuenta la responsabilidad de las Fuerzas Armadas en el gobierno y mantener su total libertad de acción en la ejecución del proceso, pero sobre la base de decisiones previamente adoptadas en equipo: la periodicidad de las reuniones, en este sentido, se tornaba indispensable⁹⁵. Pero, -a pesar del énfasis que se ponía en remarcar la cohesión entre la Junta de Comandantes y el Presidente-⁹⁶ ningún observador podía negar el desencuentro de criterio entre las partes⁹⁷.

El mes de febrero fue testigo de un resurgimiento de los rumores acerca de que el Presidente estaba planeando relevar a Lanusse: adquirieron importancia cuando Levingston actuó para reemplazar a funcionarios nombrados en acuerdo con la Junta. La primera víctima fue Francisco Manrique, Ministro de Bienestar Social y conocido amigo de Lanusse y Gnavi; su nombramiento había sido decidido por la Junta (y específicamente por Lanusse) y, de alguna manera, impuesto al mismo tiempo que Levingston aceptaba el cargo: era -sin duda- un intento de reafirmar la autoridad Presidencial –marcando autonomía frente a la Junta- y a un tiempo un acto de desafío a la autoridad de la Junta⁹⁸. No resultó fácil encontrar un sucesor calificado y paso casi un mes antes de que pudieran convencer al conservador mendocino Amadeo Frugoli para que aceptara el puesto. El 25 de febrero, Levingston provocó la renuncia del intendente de Buenos Aires, general Manuel Iricibar⁹⁹. El mismo día tuvo que aceptar la renuncia del gobernador de Córdoba, Bernardo Bas, descontento por la forma en que el Presidente intentaba manejar la crisis obrera en su provincia¹⁰⁰. Fue reemplazado por un nacionalista de la vieja guardia, José Camilo Uriburu, sobrino del Jefe de la Revolución de 1930, que asumiría la gobernación el 2 de marzo (apenas veinte días más tarde, el Presidente no alcanzaría a lamentar su decisión)¹⁰¹. Entre los despidos del Presidente también se contó el del presidente de Ferrocarriles Argentinos, general De Marchi¹⁰². La purga alcanzó también a gobernadores como Carlos Imbaud (Tucumán) y José Augusto López (San Juan) que renunciaron antes del despido¹⁰³. Esta escalada de decisiones inconsultas se enmarcaron –sin duda- en una campaña de desprestigio contra los altos mandos y tuvo su mayor exteriorización cuando –el 19 de febrero- el ex gobernador de Tucumán –Celestino Gelsi- denunció una conjura de intereses¹⁰⁴. A pesar de los rumores periodísticos y los episodios ya comentados, Lanusse no se alarmó demasiado, más bien, continuó –de un modo metódico- la exploración de la idea de promover un acuerdo sobre un programa político que condujera, eventualmente, a la realización de

elecciones y la restauración de un gobierno democrático¹⁰⁵. Pero, una rareza política de la primera quincena de febrero consistió en el apoyo que el reciente ex Presidente Juan Carlos Onganía –en persona- estaba brindando a Levingston; el ex presidente le habría pedido a sus íntimos que colaboren con el Ejecutivo – algunos aún militaban en el gabinete- y, únicamente se movilicen ante la eventualidad de lo que llamaba “*un golpe contrarrevolucionario*”¹⁰⁶. Onganía, no parecía quedarse quieto: a mediados de febrero –el jueves 18- un emisario le había hecho llegar una curiosa carta personal del ex presidente a otro ex presidente, Juan Perón. Tras sostener allí que el gobierno, en la primera etapa de la Revolución Argentina, estuvo libre del pecado del antiperonismo, ensayaba una extraña justificación dialéctica sobre la gestión de Krieger. Aseguraba que le entregó a este el manejo de la economía no porque quisiera, sino debido a presiones de poderosos sectores militares. Pero al hacerlo, decía, logró que los liberales agotaran sus posibilidades y salieran de la experiencia desprestigiados ante la opinión pública, con el objeto de provocar después un vuelco nacionalista¹⁰⁷.

El 27 de febrero –en la Residencia del Comandante en Jefe del Ejército, en Campo de Mayo- Lanusse presidió una reunión de más de dos horas, a la que concurren los generales: Miguel Ángel Viviani Rossi, Tomás Sánchez de Bustamante, Mariano de Nevaes, Virgilio Corriz, Jorge Leandro Anaya, Francisco Dubra, Francisco Pedro Goicoa y Antonio Merlo. Este tipo de reuniones tenía como objetivo mantener el mejor nivel de información posible en el Comando en Jefe y en el cuadro de generales: Lanusse manifestó que había decidido actuar con gran cautela ante el difícil cuadro de la situación nacional y que –todo lo que hiciera- sería en función de la cohesión del Ejército¹⁰⁸. Pero, los puntos de vista de Lanusse se explicitaron –totalmente- el 2 de marzo cuando asumió –en reemplazo del almirante Gnavi- en el Salón de Invierno de la Casa Rosada la presidencia de la Junta de Comandantes en Jefe: en ese marco, expresó las ideas básicas que orientarían la gestión de la Junta en los planos que, por imperio de las disposiciones legales constituían el área de su interés particular¹⁰⁹.

El Presidente había asistido –el domingo 7 de marzo- a la Fiesta Nacional del Trigo en la ciudad de Leones, provincia de Córdoba: había solicitado a los cordobeses que apoyaran al nuevo gobernador Uriburu y también mostró su disgusto por el hecho de que el ex gobernador se hubiera ido mientras estaba en discusión el presupuesto provincial (ver nota 100), pero el mayor escozor lo produjo el párrafo del mensaje donde Levingston marcó el tope de aumentos sobre el salario real en un 19 por ciento, encorsetando al Ministro de Economía. El lunes 8 de marzo, Ferrer conversó con sus amigos gremialistas, para él el techo de mejoras podía alargarse del 20 al 23 por ciento, pero el anuncio de Levingston había reducido su margen de maniobra. La escalada inflacionaria del trimestre – impulsada por el precio de la carne- había impactado de lleno en los planes del

Ministro y hacía trastabillar una de las tres bases de su programa, la más coyuntural de ellas: las negociaciones paritarias¹¹⁰. Las otras dos bases – el Plan Nacional de Desarrollo y Seguridad y el Compre Nacional- eran de resultados mediatos y –por lo tanto- no impactaban en la coyuntura. El aumento en los índices de precios, la distorsión de los precios relativos más el retraso cambiario - que ya comenzaba a notarse- parecían imponer una nueva devaluación¹¹¹. El Presidente relacionaba la estampida inflacionaria –intuitivamente- con las estancadas negociaciones paritarias: en su opinión, ambas conformaban un círculo vicioso que –sin duda- había que detener; solo que olvidó recordar que, justamente había sido ese círculo vicioso el que había llevado al fracaso más estrepitoso a todos los Ministros de Economía de la década pasada. Si la situación derivaba hacia un plan de estabilización, el *estructuralista* Ferrer no parecía el hombre indicado para conducirlo¹¹².

6.6.3. Los Idus de Marzo: Córdoba otra vez.

La elección de Uriburu para gobernar una provincia como Córdoba había sido un disparate político, dada la radicalización que estaba teniendo lugar para ese entonces (ver nota 101). Su nombramiento llegó justo cuando los sindicatos se movilizaban en toda la ciudad y estaba en preparación una nueva protesta obrera para el 12 de marzo y, su discurso en la Fiesta de Trigo en Leones no había sido pasado por alto por los gremios. Las relaciones entre los sindicatos SITRAC-SITRAM con las CGT cordobesa y los demás gremios paso a ser crucial. Los sindicatos FIAT siempre habían rechazado las propuestas de unión y colaboración con la CGT local: la relación se crispó aún más cuando la CGT local no prestó colaboración en la crisis de enero por los despidos de los dirigentes gremiales, Tosco fue el único que había hecho una declaración de apoyo a favor de SITRAC¹¹³. La presencia de ambos sindicatos en la asamblea del 9 de marzo provocó preocupación en varios sindicatos que temían una fuerte represión con la ocupación de las plantas de Ferreyra. Los sindicatos *cegetistas* preferían un retorno a la estrategia de columnas separadas de trabajadores y una manifestación multitudinaria en la zona céntrica, tal como había ocurrido en el Cordobazo. La moción de ocupación de las plantas propuesta por los sindicatos de FIAT fue derrotada en la votación y –en consecuencia- estos se negaron a adherir a la propuesta de la CGT local. Finalmente ambas tendencias llegaron a un compromiso: primero se llevarían a cabo los planes de ocupación de fábricas y luego, una marcha de columnas hasta la Plaza Vélez Sarsfield; también se prepararía una huelga general. El viernes 12 de marzo, en lugar de ocupar las fábricas, los obreros de los sindicatos de FIAT abandonaron las plantas de Concord y Materfer y realizaron una manifestación frente a esta última. Luego

marcharon hacia los barrios cercanos donde los esperaba la policía provincial (única fuerza represiva) que disparó sobre los manifestantes, matando a un obrero y repitiendo la experiencia represiva del Cordobazo¹¹⁴. La policía y los manifestantes chocaron repetidamente en Ferreyra a lo largo de la tarde y hasta el anochecer, hasta que las fuerzas policiales se retiraron de escena: el mártir que se necesitaba para galvanizar la protesta popular ya estaba logrado¹¹⁵. Este conflicto con los trabajadores de FIAT señaló el comienzo de una insurrección obrera que abarcó toda la ciudad: los hechos del viernes 12 de marzo fueron el entreacto de una protesta que sumió a Córdoba en la parálisis total, ese viernes se habían rebasado las cuatro horas previstas por la CGT¹¹⁶. El domingo 14 de marzo, unos diez mil cordobeses acompañaron –en un repudio silencioso a la brutalidad policial- el cortejo fúnebre de Alfredo Cepeda, el trabajador que había sido asesinado dos días antes. El lunes 15 de marzo –por la mañana- miles de trabajadores de FIAT abandonaron la planta y las columnas de SITRAC-SITRAM marcharon –como se había planificado- desde Ferreyra al centro de la ciudad; al pasar por la planta de energía de Villa Revol –la principal fuente de electricidad de la ciudad- notaron que los trabajadores de Luz y Fuerza se habían apostado dentro y alrededor de la planta en lugar de encaminarse hacia la Plaza Vélez Sarsfield, una medida que los trabajadores de FIAT consideraban una traición al compromiso de la asamblea del 9 de marzo¹¹⁷. Cuando llegaron a la plaza descubrieron que la CGT no había instalado ni la tribuna ni los parlantes, como se había convenido. La concentración, no obstante, siguió adelante y los trabajadores de FIAT e IME –históricamente aislados del movimiento obrero cordobés y ampliamente ausentes de las protestas de mayo de 1969- constituyeron los contingentes más grandes en el centro de la ciudad¹¹⁸. Estudiantes y ciudadanos comunes se unieron a las marchas y –en horas de la tarde- la ciudad estaba sumergida otra vez en una ola de destrucción, mayor incluso que en las jornadas de mayo de 1969, sino en vidas humanas en términos de daños a la propiedad¹¹⁹. A diferencia del levantamiento de mayo de 1969, la zona céntrica no fue ocupada, sino que se eligió retirarse y fortificarse en los barrios cercanos (Alberdi y Clínicas). Al anochecer esas zonas fueron abandonadas – una vez más- por la policía provincial y entregadas al control de los manifestantes: solo en el barrio Clínicas se habían levantado más de 200 barricadas¹²⁰. Al día siguiente – 16 de marzo- llegó, de Buenos Aires, una brigada antiguerrilla especialmente entrenada, que se topó ya con poca resistencia callejera y ocupó la ciudad en pocas horas. El mismo día el Ministerio de Trabajo anunció que una serie de sindicatos –entre ellos SITRAC-SITRAM- habían sido colocados bajo supervisión gubernamental y el Ejército libro orden de captura y detención para Tosco, Maserá, y el resto de los principales dirigentes cordobeses. El 17 de marzo el gobierno nacional relevó al gobernador Urriburu y puso a la provincia –otra vez- bajo el control militar.

6.7. Una crónica del final

Para analizar la situación en Córdoba –el miércoles 15 de marzo por la mañana- se reúne la Junta de Comandantes en Jefe: en la misma oportunidad se consideró la evolución negativa de las negociaciones paritarias y el estado del plan político. Mientras se desarrollaba la reunión, los Comandantes comenzaron a recibir noticias sobre el desarrollo de los sucesos en Córdoba, la Junta se mantuvo en sesión hasta bien entrada la noche; cerca de la 20.30 horas el brigadier Rey, les hace saber que el brigadier Zappino –Jefe de la guarnición aérea Córdoba- recomendaba el establecimiento de una zona de emergencia, más que nada como una medida para desplazar al gobernador. A las 22.30 horas se incorpora a la reunión el Ministro del Interior –Cordón Aguirre- que cuenta que el gobernador Uriburu no está de acuerdo con la declaración de zona de emergencia porque consideraba que la situación ya estaba superada: a las 23.00 horas la Junta levantó la sesión¹²¹. El Presidente Levingston se había retirado a la Residencia de Olivos donde el general Mourglie –Secretario General de la Presidencia- lo mantenía informado sobre la evolución de los acontecimientos. El jueves 16 de marzo, el general López Aufranc concurre al Comando en Jefe para informar ampliamente al Estado Mayor General sobre los sucesos de Córdoba y propuso el relevo inmediato del gobernador Uriburu, la detención de los activistas y que la declaración de zona de emergencias debería haber sido hecha previo a los sucesos, es decir tenerlo como una herramienta de prevención y no de represión. El mismo día –por la tarde- se reunió el CONASE –con la presencia del presidente y de los Comandantes en Jefe (no asistió López Aufranc) para evaluar la situación en Córdoba: se aprobó requerir la renuncia de Uriburu y nombrar en su reemplazo al almirante Gouzden, así como la detención de los activistas. Asimismo se determinó que –a partir de esa fecha- se dictara el decreto de zona de emergencia. El 18 de marzo a las 10 horas y poco antes de la iniciación del paro activo, Córdoba es declarada zona de emergencia: se desplegaron las tropas por toda la ciudad y la responsabilidad del gobierno le correspondió al Comandante del III Cuerpo de Ejército, general de división Alcides López Aufranc¹²². La reunión entre el Presidente, Lanusse y el brigadier Martínez no fue feliz: nuevamente hubo reproches y mentideros sobre expresiones críticas que Levingston habría hecho sobre las decisiones de la Junta el día anterior. No solo nada se aclaró sino que Levingston relevó al brigadier Martínez por sus tratativas con los dirigentes gremiales¹²³. A las 17 horas de ese mismo día la Junta se reunió para considerar el relevo presidencial del brigadier Martínez al que, por supuesto se oponían Lanusse y Gnavi¹²⁴. Conviniere que –el lunes 22 de marzo- una vez regresado del exterior el brigadier general Carlos Rey, volverían a reunirse para considerar el procedimiento más conveniente para intentar superar los obstáculos que se presentaban entre la Junta y el Presidente. Ese mismo día –a última hora de la

tarde- Lanusse mantuvo una charla informal con los generales de división que se habían reunido en el Comando en Jefe, preocupados por las novedades producidas: no estaban en la reunión los generales López Aufranc y Juan Carlos Sánchez, ambos se encontraban en sus sedes; los Comandos de los Cuerpos de Ejército II y III en Rosario y Córdoba. Aprovechó la reunión y el hecho de que el Presidente había invitado a cenar a Olivos a su amigo el general Viviani Rossi para encargarle a este que le transmitiera a Levingston que los Comandantes en Jefe querían tener una conversación el lunes 22 de marzo. En medio de un ambiente cargado y tenso, al que no estaba ajena la calle ni los medios periodísticos, se llegó a ese histórico 22 de marzo¹²⁵. A las 17.30 horas del lunes 22 de marzo de 1971, se inicia –en la Sala de Situación de la Casa de Gobierno- la conferencia del Presidente con los Comandantes en Jefe. La conversación se convirtió en un monólogo por parte del Presidente, los Comandantes no tuvieron posibilidad alguna de cumplir con el propósito que los había llevado hasta allí: durante más de dos horas, Levingston se dedicó a denostar a Lanusse las permanentes interferencias de la Junta en el Poder Ejecutivo. Le formuló cargos de todo tipo y le exigió que instruyera un sumario por la no intervención del Ejército en Córdoba. Por supuesto que Lanusse rechazó todas las pretensiones presidenciales y expresó claramente que no admitía ese criterio, recordándole al Presidente que todas las decisiones sobre los sucesos cordobeses habían sido tomadas por la Junta en pleno. Ante la manifestación de Lanusse de que no cumpliría con las exigencias del Presidente, este lo relevó de inmediato de sus funciones y le solicitó que abandonara la reunión. Así que aproximadamente a las 20 horas Lanusse salió arrestado y fue conducido al despacho de la Casa Militar, acompañado por el general Horacio Rivera. Poco después de las 20 horas ingresó a la reunión –convocado por Levingston y sin el conocimiento de Lanusse- el general Cáceres Monié –en ese momento Jefe de la Policía Federal- a quien Levingston le comunicó el relevo de Lanusse y le ordenó hacerse cargo del Comando en Jefe del Ejército¹²⁶. A las 22.30 horas Lanusse es puesto en libertad y se le permitió abandonar la Casa de Gobierno para dirigirse a su domicilio: la situación era tan surrealista que Lanusse aún era escoltado por su custodia como Comandante en Jefe, aunque ya no ocupaba esa función¹²⁷. Por su parte Cáceres Monié se presentó en el Comando en Jefe del Ejército para asumir su cargo; ante los oficiales superiores presentes en la accidentada ceremonia, dijo: *“En estas circunstancias, me hago cargo del Comando en Jefe del Ejército al solo efecto de reponer al teniente general Alejandro Lanusse en su cargo como Comandante en Jefe del Ejército”*¹²⁸. Los Cuerpos de Ejército y las guarniciones de todo el país se mantuvieron en todo momento- fieles a Lanusse y la Junta de Comandantes en Jefe¹²⁹ –a las 2.10 horas en la madrugada del martes 23 de marzo de 1971- resolvió destituir al Presidente y asumir el poder político hasta que se cumpliera el proceso revolucionario¹³⁰. A las 3.25 horas Levingston –sin apoyo alguno-

renunciaba a su cargo y se retiraba de la Casa de Gobierno. Por segunda vez, en menos de dos años, los acontecimientos en Córdoba habían sido decisivos para el derrumbe de un gobierno nacional. ¿Qué fuerzas supuso Levingston que tenía? Aún es una incógnita, pero, parecía que el suyo había sido un acto de audacia, que no podía tener otro final.

El jueves 25 de marzo, se modificó –nuevamente- el Estatuto de la Revolución Argentina y el poder dejó de ser compartido por los tres comandantes, encomendándose la Presidencia de la Nación al teniente general Alejandro Agustín Lanusse el 26 de marzo de 1971. El 29 de marzo, la autoridad militar designó una comisión honoraria para determinar si correspondía o no formar un tribunal de honor para juzgar al general Levingston por los últimos acontecimientos: la comisión se constituyó el 1º de abril¹³¹. El 1º de abril –bajo la presidencia de Lanusse- Arturo Mor Roig, ahora Ministro del Interior anunció la rehabilitación de la actividad política, con la que el nuevo gobierno esperaba alcanzar y consolidar –con la participación de todos- una democracia participativa, moderna, estable y eficiente. El 4 de abril –en una declaración pública- el teniente general Juan Carlos Onganía negaba al gobierno de Lanusse el derecho a usar el término Revolución Argentina: “*el pueblo –dijo- no puede admitir que se invoque a las Fuerzas Armadas para frustrar su voluntad de cambio, ni menos aún que se pretenda convertirlas en el brazo armado de una aventura partidista, facciosa y personal*”¹³². Así comenzaba otra historia.

6.8. Apuntes y conclusiones sobre el gobierno de Levingston.

Irritable, colérico, de baja tolerancia al disenso, contestatario y tormentoso (ver notas 94 y 95); Levingston intentó profundizar la Revolución Argentina cuando ella, en realidad, ya estaba terminada: sus límites habían sido agotados por la experiencia de Onganía. Las Fuerzas Armadas –en sus más altos niveles- tampoco coincidían con la profundización de la Revolución sino que, más bien, necesitaban encontrar una salida rápida y honrosa para el enredo en el que se habían metido: toleraron la propuesta *levingstoniana* más por la necesidad de encontrar un Presidente que se hiciera cargo –preservando así a las propias fuerzas- que por coincidencias con sus propósitos políticos (ver nota 84). Levingston intentó un proyecto político personal de corte *nacional- populista* y quiso generar un partido oficial; el *partido de la revolución*. Eligió un hombre para conducir el régimen social y económico que lo acompañara: fue Aldo Ferrer. Solo que Ferrer era un *cepalino- desarrollista estructuralista* y –por lo tanto- un planificador de largo plazo con poca preocupación por el corto plazo, no porque lo subestimara, sino porque no encajaba bien en su programa. La única variable de

corto plazo que incluyo, las *negociaciones colectivas de trabajo* (paritarias) fracasaron antes de comenzar. Argentina –históricamente y aun en la actualidad- es un país cortoplacista que, dadas las restricciones estructurales de su economía, -al menos en esa época- requería un tratamiento intensivo de corto plazo que solo podía lograrse con un crédito político apoyado en un liderazgo fuerte y consensuado. No era esta la oportunidad: ni Levingston era un líder popular fuerte y consensuado ni Ferrer un piloto de tormentas. En la Argentina de ese momento, un país como la Argentina con alta inestabilidad política y bajo liderazgo, con sus fundamentales económicos muy volátiles y problemas serios en la coyuntura (alta tasa inflacionaria, restricciones de balanza de pagos y problemas en la distribución del ingreso y el salario real) la política económica recomendada –al menos en inicio- podría haber sido un plan de estabilización de corto plazo (un par de años) a cargo de un hombre fuertemente vinculado a los organismos financieros internacionales (del tipo Jorge Whebe, Roberto Alemann, Antonio Cafiero o el propio Gómez Morales) que estuviera además vinculado –aunque más no fuere por simpatía- con la corriente política mayoritaria (el justicialismo). Ferrer también era un hombre vinculado a organismos internacionales pero –como buen *cepalino desarrollista*- sus vinculaciones eran con organismos de desarrollo y reconstrucción del tipo de BID, BIRF, BM. Solo después de una estabilización rápida y exitosa podría pensarse en un plan de mediano y largo plazo, aunque, los planes de desarrollo en Argentina siempre fueron de mediano plazo (5 años máximo) y no de largo al estilo de la reconstrucción europea (10 años). La razón: Argentina fue y es un país con alta inestabilidad política y –por lo tanto- carente de políticas de Estado; cada gobierno es fundacional. La coyuntura económica sobrepasó las posibilidades operativas de Ferrer (ver nota 76). La situación se complicó con los indicadores económicos de corto plazo fuera de control, con un empresariado temeroso y un frente obrero muy combativo y politizado, al menos en el interior. Los sucesos de Córdoba liquidaron el programa: había sido como llevar un accidentado a ser atendido por el mejor de los homeópatas.

La responsabilidad por el fracaso de su gobierno no fue solo de Levingston. La Junta de Comandantes en Jefe tuvo más responsabilidad que él en el fracaso: a poco de elegirlo comprendió que era el hombre equivocado; desde el momento de aceptación del cargo nunca estuvieron claros cuáles eran los límites a la autoridad el Presidente ni tampoco que la responsabilidad última del Estado recaía sobre la Junta. El PEN parecía no tener en cuenta las reformas al Estatuto de la Revolución (ver notas 12 y 13). Estas restricciones –a decir verdad- parecen nunca haber sido comprendidas por Levingston y la Junta nunca tuvo –hasta el final- la decisión clara de hacérselo saber. El corto interludio de Levingston no solo no sirvió para darle a las Fuerzas Armadas la salida que necesitaban sino que

complicó los tiempos en que necesitaban encontrarla: solo el *Gran Acuerdo Nacional (GAN) lanussiano* —en forma muy desordenada, pero la única posible— pudo encausar la salida constitucional sin tiempo para planificarla.

NOTAS AL CAPÍTULO N° 6

¹ Sobre la influencia que tuvo en la Argentina el golpe *nacional-populista* de Velazco Alvarado en Perú puede verse: *Primera Plana*, N° 342 “*Argentina-Perú: dos revoluciones*”, 15 de julio de 1969.

² Sobre algunos detalles del día de la asunción a la presidencia de Chile por parte de Salvador Allende, el 3 de noviembre de 1970, puede verse: *Primera Plana* N° 404, “*¿Comunismo democrático?*”. Edición del 27 de octubre de 1970.

³ El general Juan José Torres intentó instaurar un régimen populista y favorecedor de los sectores más bajos de la sociedad boliviana, entre 1970 y 1971. En este año es derrocado –en un golpe de derecha- por el coronel Hugo Banzer Suárez.

⁴ *La Nación*, 10 de junio de 1970; y, entrevista con Lanusse, 24 de agosto de 1973.

⁵ Una solución recomendada por un estudio de dos Jefes de Estado Mayor –generales López Aufranc y Sánchez- era que, el Presidente, fuera el mismo que el de la Junta y tuviera el mismo carácter rotativo. El propio almirante Gnavi –Presidente de la Junta en esos momentos- se opuso a la propuesta por considerarla egoísta. Meses más tarde, visto el resultado con el hombre designado, la idea parecía bien atractiva.

⁶ El 10 de junio en una reunión con su Estado Mayor General convocada para recibir un estudio con recomendaciones sobre la situación, Lanusse había expresado: “*quiero terminar de una vez por todas, con el Comandante en Jefe que pasa a ser Presidente de la Nación como si fuera un ascenso*”. Cfr; Lanusse, Alejandro; *ob.cit*, “*Mi.....*” p.139

⁷ Algunos observadores políticos –muy suspicaces- arriesgaron la hipótesis de que, Lanusse, procuraba reservarse para ser Presidente en una futura restauración del régimen democrático. El 8 de junio Lanusse consultó a su amigo, el general Gustavo Martínez Zuviría, con quien se encontraba entrañablemente vinculado (ver nota 19 del cap. 3), sobre la posibilidad de asumir el Gobierno personalmente. Martínez Zuviría –como era natural, dada su formación- le contestó por escrito con una carta personal. En ella, el amigo más querido de Lanusse, le formulaba algunas observaciones y enfatizaba su oposición a un Gobierno compartido, sea entre los tres Comandantes o entre estos y un civil designado. Decía en su carta: “*Cuando Onganía asumió el poder fue designado Presidente por la Junta de inmediato. Ahora, desgraciadamente, esto tendrá que demorarse, lo que supone un compromiso más. Me estremezco pensando lo que va a ser la “gata parida” para la designación del Presidente. Confieso que estaría mucho más tranquilo si mandarás vos exclusivamente. No habría que soportar más que tus errores, que pueden ser bastantes, pero que siempre serán menos que los que cometerá un terceto*”. Cfr; Lanusse, Alejandro; *ibidem*, p.143.

⁸ El nombramiento de un civil sería evidentemente ventajoso a los efectos de lograr un cambio de imagen en la opinión pública y, desde el punto de vista militar, el beneficio sería importante para el eventual caso de una crisis, ya que era casi imposible que un Presidente civil no constitucional tuviera capacidad –aun queriendo hacerlo- de provocar divisiones internas en las Fuerzas y, tendría la ventaja adicional de que sus errores no impactarían directamente sobre ellas.

⁹ El mencionado estudio del 10 de junio decía, más adelante: “*lo anterior es válido, con la sola excepción del Comandante en Jefe del Ejército quien, por su prestigio y el hecho de haber tenido la responsabilidad primaria de los últimos sucesos es, o sería, por lo menos reconocido como el líder auténtico de esta etapa del proceso, aunque más no fuera por el derecho que se asigna al triunfador*”.

¹⁰ Se supone que Gnavi, antes de proponerlo, había tomado en cuenta algunos factores: como agregado militar y delegado de la Argentina en la Junta Interamericana de Defensa en Washington, se creía que Levingston tenía buenas relaciones con el gobierno norteamericano. Además, estaba en el exterior desde 1969, así que no había participado en ninguna de las decisiones que habían llevado al derrocamiento de Onganía y ni siquiera había estado en el país durante los sucesos de mayo de 1969. Como consecuencia, no era vulnerable a acusaciones de ambición personal y podía comenzar con su historia limpia. Gnavi también debía haber tomado en cuenta el hecho de su conocimiento personal del hombre; había trabado con él una amistad personal y profesional que venía de los años 1958 a 1961, época en que Levingston era subordinado de Gnavi en la SIDE. El brigadier general Rey también conocía a Levingston personalmente, ya que había servido con él en el Estado Mayor Conjunto en 1967.

¹¹ La preocupación de Lanusse por crear un vínculo comprensivo y cierto entre el Comandante en Jefe del Ejército y el Presidente, llegó a tal punto, que al ser designado Levingston como Presidente de la Nación, Lanusse nombró –inmediatamente- como nuevo Jefe del Estado Mayor General, al general Vivianni Rossi porque, además de tener las condiciones para desempeñarse en el cargo (como algunos otros generales en actividad), apreciaba personal y profesionalmente a Levingston, de quien era amigo personal y había sido compañero de promoción en el Colegio Militar de la Nación.

¹² Levingston llegó a Ezeiza desde Washington el sábado 13 de junio y en el mismo vuelo llegó también –por casualidad- el general Osiris Villegas. Los periodistas asediaron a Villegas de inmediato pensando, que el entonces Embajador en Brasil, era el candidato de la Junta. Levingston fue recibido por el ayudante de Lanusse –coronel Ríos Ereñú- y trasladado inmediatamente y en secreto a la residencia del Comandante en Jefe de la Fuerza Aérea, en las inmediaciones de Ezeiza. Allí lo esperaba la Junta en pleno y se le explicó las modificaciones al Estatuto de la Revolución, que estaban en la lógica del pronunciamiento del 8 de junio. Levingston las aceptó y manifestó su disposición a trabajar –con la Junta- en el logro de los objetivos de la Revolución. En esta misma reunión, el propio Levingston, propuso a Moyano Llerena para ocupar el cargo de Ministro de Economía.

¹³ Según parece, se le hizo saber que el 12 de junio –antes que partiera hacia la Argentina- la Junta había difundido una enmienda al Estatuto de la Revolución que decía que los decretos y las leyes de significativa trascendencia para las metas de la Revolución Argentina debían contar con la aprobación de la Junta de Comandantes y que el Presidente designado no tendría el poder de relevar a ninguno de los miembros de la Junta. Pero, dado que la reunión fue secreta y estaban presentes solo Levingston y los tres Comandantes, también es posible que –en la reunión en la quinta del Jefe de la Fuerza Aérea- la ansiedad de la Junta porque Levingston asumiera haya sido de tal importancia, que se hayan pasado por alto zonas potenciales de fricción (la ansiedad estaba sugerida por el hecho de que el decreto de nombramiento de Levingston estaba fechado un día antes, es decir el 12 de junio de 1970). Más aún, un día antes de que Levingston fuera a ocupar la presidencia –es decir el 17 de junio- la Junta emitió la Ley 18.713 que le daba, de modo explícito, el derecho de decidir que era un decreto o ley de significativa trascendencia. Esta misma ley nombraba a la Junta como parte integrante del Gabinete Nacional con todos los poderes asignados por la ley a los Ministros del Gabinete. Así que Levingston mal podría ignorarlo.

¹⁴ La formación del nuevo gabinete fue interpretada por la opinión pública como una reiteración de la estrategia que permitía la presencia simultánea de dos matices: *liberal* por una parte y, *nacional* o *nacionalista* por la otra. Sin embargo, se notaba una inversión de las hegemonías: el Ministro del Interior –Eduardo Mc Loughlin- era asignado al liberalismo político y Moyano Llerena más cerca de la línea nacionalista se encontraba apoyado en Aldo Ferrer, de su misma tendencia. De Pablo Pardo –un conocido aramburista antiperonista- ya había suavizado su posición y giraba –lentamente- desde una posición muy liberal hacia un morigerado nacionalismo.

¹⁵ El nombramiento de los gobernadores de provincia fue otro tema que, por ese tiempo, permitió medir la tónica que se aprestaba a asumir el gobierno nacional. Había tres criterios posibles que debían ser necesariamente integrados: *continuidad*, *seguridad* y *apertura*. Era importante establecer una *continuidad* con el gobierno del general Onganía, porque debía demostrarse que la Revolución Argentina se mantenía en pie pero, simultáneamente, debía irse marcando una *apertura* que rompiera el aislamiento de las Fuerzas Armadas. Al mismo tiempo, el factor *seguridad*, frente a los hostigamientos de la subversión armada, no podía ser desdeñado. Si una fórmula hubiera permitido marcar las proporciones podría decirse que el predominio del factor *continuidad* demostró hasta qué punto predominaba la idea de ir emprendiendo lentamente las rectificaciones: 14 gobernadores de provincia nombrados por Onganía fueron ratificados en sus cargos. La apertura tuvo una ratificación concreta con el nombramiento de Bernardo Bas en Córdoba, que fue designado por la Junta de Comandantes antes de que esta formalizara la designación de Levingston. En Santa Fe se priorizó la seguridad y se nombró al general Sánchez Almeira. La designación de un militar en la provincia de Buenos Aires era inevitable por la enorme influencia electoral del distrito y se convino que la Fuerza Aérea ejercería allí su responsabilidad ya que era el arma a la que pertenecía el Ministro del Interior. En Mendoza se nombró a un político de amplio prestigio, Francisco Gabrielli y en Neuquén se confirmó a otro político designado por Onganía, Felipe Sapag, de raíz peronista.

¹⁶ *La Nación*, 24 de junio de 1970

¹⁷ La agrupación *autodenominada Montoneros*, ocupó militarmente la localidad de La Calera (Córdoba) un pueblo de 5.000 habitantes ubicado a 25 kms de la ciudad de Córdoba. Entre las 7.30 y las 8.30 horas; los autores de la operación subversiva de mayor envergadura registrada hasta el momento en todo el territorio nacional se apoderaron de cuatro millones de pesos de la sucursal del Banco Nación, coparon la comisaría y obligaron a los policías a cantar la marcha Los Muchachos Peronistas. Revisaron minuciosamente la municipalidad mientras controlaban las oficinas de Correos y Teléfonos. De las 20 a 25 personas que integraban el grupo comando fueron detenidas seis: Luis Lozada, Ignacio Vélez, Cristina Liprandi de Vélez, Carlos Alberto Soratti, Emilio Massa y José Alberto Fierro. Todos alumnos de los principales colegios católicos de Córdoba.

¹⁸ Carlos Malamud, Nélica Arrostito de Maguid, Ana María Portnoy y el sacerdote tercermundista Alberto Carbone, fueron apresados en la Capital Federal y sus alrededores. En los allanamientos realizados en sus respectivos domicilios se encontraron pruebas que posibilitaron determinar el lugar donde había sido ultimado Aramburu e identificar a sus ejecutores materiales, que habrían sido: Fernando Luis Abal Medina –hermano menor del ex secretario de redacción del semanario nacionalista Azul y Blanco- ; Carlos Gustavo Ramus –hijo del dueño de las tierras de Timote- y Mario Eduardo Firmenich, dirigente de la *Juventud Estudiantil Católica* (JEC).

El 7 de setiembre de 1970, durante un tiroteo con la policía en la localidad de William Morris –cerca de Hurlingham en la provincia de Buenos Aires- fueron muertos Fernando Luis Abal Medina y Gustavo Ramus. Al momento de ser sepultados en el cementerio de La Chacarita, les rindió homenaje el sacerdote Carlos Mujica quien dijo: “*se comprometieron con la causa de la justicia, que es la de Dios, porque comprendieron que Jesucristo nos señala el camino del servicio. Que este holocausto –el de Abal Medina y Ramus- nos sirva de ejemplo*”. Por su parte, otro sacerdote –Hernán Benítez- imploró en su oración: “*perdón a Dios por la muerte de ellos, que fueron asesinados por la Nación, que ni supo comprenderlos, darles un camino, colmar su sed de justicia. La sociedad los ha juzgado, castigado y destruido, pero sí tienen que responder ahora a la inquisitoria del Señor -¿Has dado de comer al hambriento y de beber al sediento?- ellos pueden responder que han dado sus vidas para que en el mundo no hubiera hambre ni sed*”. Ambos clérigos fueron detenidos –el 14 de setiembre- bajo la acusación de incitación a la violencia y puestos en libertad pocos días más tarde.

¹⁹ La revista *Panorama* afirmaba: “*los tremendistas creen que un futuro no muy lejano el país mostrará al mundo un epitafio lóbrego: Aquí yace media Argentina, la mató la otra mitad....Puede*

resultar exagerado, pero si los temperantes ceden ante el terrorismo montonero la violencia se derramará sobre el país". Panorama, 15 de setiembre de 1970, p. 11

²⁰ No están del todo claro los motivos por los que Lanusse se opuso a sacar el caso de manos de la Policía Federal. Quizá le preocupaba el impacto negativo que el informe de una comisión independiente pudiera tener sobre el Ejército y el Gobierno, habida cuenta de los rumores que corrían sobre la posibilidad de que se encontraran involucrados en el hecho algunas personas que habían servido durante el gobierno de Onganía. A la luz de los hechos posteriores de la década esta parece haber sido una decisión desafortunada de Lanusse.

Si la comisión investigadora se hubiera constituido y encontrado a los instigadores del crimen y se hubiera determinado que los autores del crimen; Firmenich, Abal Medina, Ramus, Capuano Martínez y Arrostito habían respondido a uno o más autores intelectuales –hubieran sido o no funcionarios de gobiernos anteriores- se les hubiera visto muy dificultado a los únicos sobrevivientes del grupo original -después de 1972- proyectar una imagen de idealismo revolucionario sobre miles de jóvenes argentinos y, seguramente, la historia posterior del movimiento *Montoneros* habría sido muy distinta.

²¹ En el velatorio de Alonso hizo su primera aparición pública Juan Carlos Onganía, para rendir homenaje a una de las figuras principales de la corriente gremial participacionista, lo que dio la pauta de su intención de mantenerse políticamente activo.

²² Mientras la ciudad de Buenos Aires amaneció empapelada con invitaciones al acto programado en el Luna Park para tributar un recuerdo a Aramburu, los matutinos publicaron una declaración firmada por Mercedes Villada Achával de Lonardi, sus hijos y yernos, que procuraba separar la imagen del jefe del alzamiento de la del general Aramburu en la conmemoración del 16 de setiembre de 1955, porque consideraban que las ideas de ambos militares habían sido completamente distintas. *La Nación*, 16 de setiembre de 1970.

²³ *"El gobierno podría ver concretado el anhelo de una CGT complaciente, pero si las condiciones sociales siguen generando ingredientes para la convulsión, habrá creado un muñeco maldito al que puede zafársele el resorte, y entonces le saltará a los ojos". La Nación, 14 de mayo de 1970.*

²⁴ Se comentaba una carta reciente de Perón a Alberto Campos (delegado de la UOM en las 62) que llamaba a unir fuerzas para un sólido frente común y la posibilidad de un perdón a L8 para que se reintegren y así lograr una CGT peronista. *La Razón*, 22 de mayo de 1970.

²⁵ *La Razón*, miércoles 27 de mayo de 1970.

²⁶ *La Razón*, miércoles 1° de julio de 1970.

²⁷ *La Razón*, domingo 5 de julio de 1970; *La Razón*, lunes 6 de julio de 1970.

²⁸ *La Razón*, miércoles 22 de julio de 1970.

²⁹ Tan heterogéneo era el Gabinete que algunas usinas de palacio comenzaron a llamarlo "gabinete arco iris" por el amplio espectro que abarcaba y otros, menos piadosos, "el arca de Noé" porque en él se encontraba un animal de cada especie.

³⁰ McLoughlin había servido como funcionario del Gabinete en los gobiernos de Aramburu y Guido que habían terminado en dos elecciones. Comprendía que el problema –en esencia- era tener al país organizado para una eventual competencia electoral.

³¹ El memorándum de Cáceres Monié –del 30 de julio- nada decía sobre dos temas de preocupación pública: no estipulaba el tiempo para una transferencia eventual del poder a un sucesor electo en comicios democráticos, sino que hacía depender esto del logro de objetivos que

el gobierno definiría por su cuenta en el campo socio económico y no ofrecía ninguna propuesta explícita para tratar con los disueltos partidos políticos. Por entonces el Subsecretario del Interior Giraldo Novaro, en una conversación con Lanusse –el 3 de agosto de 1970- defendió la postura de que se mantuvieran disueltos, con el fundamento de que eso permitiría mantener consultas con el peronismo sin que este tuviera que pedir permiso a Madrid y que, además, facilitaría el derrumbe de la estructura del radicalismo (por entonces UCRP) mediante la atracción de hombres como Arturo Mor Roig y otros líderes partidarios enfrentados a la postura de Ricardo Balbín, por entonces presidente del partido. El general Lanusse parecía estar de acuerdo con esto, a punto tal, que un año más tarde –ya en la presidencia- nombraría a Mor Roig como su Ministro del Interior y armador político de la salida electoral. Ver: Potasch, Robert; *ob.cit*, “*El Ejército y....*” pp. 187 a 188.

³² Gilardi Novaro había actuado en el conservadorismo de la provincia de Buenos Aires y, al dividirse su partido, se plegó a la corriente encabezada por Vicente Solano Lima. Viejo conocido personal de Perón, estaba influenciado ideológicamente por el desarrollismo. Sus reticencias ante la posibilidad de un lanzamiento de un plan político eran evidentes y no podía disimular las profundas divergencias filosóficas con su jefe Eduardo McLoughlin.

³³ El brigadier McLoughlin era un hombre de una firme vocación democrática y con una gran experiencia política personal ya que había sido titular de la Fuerza Aérea durante los gobiernos de Aramburu y Guido. Llegó al Ministerio del Interior con la imagen de una honestidad política indiscutible. Hombre de inteligencia profunda y pausada pero también meditativo y muy cauteloso, seguramente podía ser útil para una etapa preparatoria pero, luego debería desembarazarse de sus hábitos diplomáticos porque sus funciones no requerían de un exceso de prudencia. En algún momento debía provocar una definición que reagrupara a las fuerzas: la política es el arte de hacer y deshacer alianzas. Es imposible operar políticamente quedando bien con todos, bajo el pretexto de la neutralidad oficial.

³⁴ A lo que apuntaban los partidarios de *profundizar la Revolución* era a producir en un período de cuatro a cinco años las condiciones de desarrollo económico y social que posibilitarían una salida electoral sin condicionamientos. Se llegaría a una democracia con Constitución, elecciones y partidos, pero ya no sería una democracia faccionalista y desordenada sino que expresaría el consenso que la Revolución habría logrado y sería, entonces, una democracia jerarquizada y ordenada. Cfr: *La Nación*, 13 de julio de 1970 y 28 de setiembre de 1970. *Confirmado*, 23 de setiembre de 1970, pp. 14 a 18.

³⁵ Gilardi Novaro dejó saber que el Ministerio estaba considerando una amnistía amplia para las penas por cuestiones políticas o sindicales, medida que algunos militares imaginaban como aplicable a Perón. El Ministro McLoughlin no compartía estas ideas y, por su lado, esperaba una definición del Presidente, a punto tal, que había preparado el texto de un decreto para que lo firmara el Presidente, que llamaba a los partidos políticos a reanudar la actividad una vez que pasaran por un breve proceso de reorganización. A este punto llegó la bicefalía del Ministerio político. La puja terminó cuando el Presidente –en su discurso del 29 de setiembre de 1970- ante una asamblea de gobernadores provinciales, se comprometió con la orientación política que reflejaba el modelo de Cáceres Monié y Gilardi Novaro, declarando que la disolución de los partidos políticos decretada por Onganía era irreversible (ver nota 32).

³⁶ *La Nación*, conferencia de prensa del Presidente Levingston, 11 de octubre de 1970, y discurso del 30 de setiembre de 1970.

³⁷ Por lo pronto, Levingston anotaba que el proceso conducido por su gobierno habría de durar por lo menos 4 ó 5 años. A su término, nada tendrían que hacer los partidos políticos preexistentes ya que: “...*las estructuras partidarias vigentes hasta 1966 pertenecen al pasado. La disolución de los partidos concretada por la Revolución Argentina es para este gobierno una decisión irreversible*”. En lugar de ellos se lograría “*una fórmula que neutralice la atomización política y facilite el*

encauzamiento de la opinión en grandes y nuevas fuerzas partidarias, que convivan en el marco de una democracia estable y eficiente". Todo esto iba a ser consecuencia del intento exitoso de profundizar la Revolución Argentina, para lo que hacía falta *"la movilización y la participación total de la población del país"*. *La Nación*; discurso de Levingston del 29 de setiembre en la edición del 30 de setiembre de 1970, pp. 1 a 14.

³⁸ Ver: *Primera Plana* del 15 de diciembre de 1970, p. 15

³⁹ Ver: *La Razón*, 29 de setiembre de 1970, p. 16

⁴⁰ En un intercambio preliminar de puntos de vista, McLoughlin y Gnavi favorecieron la posición de otorgar el permiso, en tanto que Levingston y Lanusse se opusieron y, como siempre, el brigadier general Rey estaba indeciso. Cfr; Lanusse, Alejandro, ob.cit. *"Mi Testimonio"* p. 170

⁴¹ El lunes 12 de octubre por la mañana, el Jefe de la Fuerza Aérea, el brigadier McLoughlin y Lanusse fueron invitados a una comida con el Presidente en la Residencia de Olivos, el almirante Gnavi se encontraba en Puerto Belgrano en una inspección de rutina; asistió también el coronel Mourglie que era Secretario General de la Presidencia. Luego de comenzada la comida, Lanusse hizo una mención intrascendente pero jocosa sobre el Subsecretario de Asuntos Políticos Gilardi Novaro. La reacción de Levingston consistió en desatar una tempestad, el Presidente, en un estado asombroso de cólera interrumpió a Lanusse diciendo que él no había objetado nunca las amistades del Comandante en Jefe. A medida que hablaba su descontrol aumentaba al punto que ya no parecía ser una persona enojada sino una verdadera entidad poseída. Todos quedaron desconcertados por el estallido y algunos –conociendo a Lanusse- temieron una reacción incontrolable de su parte, pero Lanusse, alelado no reaccionó y buscó retomar en forma normal el hilo de la conversación con la oportuna ayuda de Mourglie que intentaba desviar el eje de la conversación; por su parte Levingston buscó la calma y los presentes pretendieron disimular la situación. El general Levingston pareció ser el único que no apreciaba la gravedad de la situación y, más tarde, pretendió escalar en la situación, advirtiendo que Lanusse evitaba replicarlo. Luego Levingston lanzó su cólera sobre McLoughlin, este con toda tranquilidad evito la cuestión ante un Presidente colérico y ofuscado. Levingston se pintó de cuerpo entero poniendo al descubierto su muy irritable carácter y su falta de control. El suceso fue de una gran trascendencia para todos, especialmente para Lanusse: el Presidente, sin haberlo percibido, acababa de sellar su muy corta actuación en el cargo.

⁴² En la misma semana el Presidente inició una ronda de conversaciones con ex Presidentes de la Nación: Onganía fue invitado para el 13 de octubre, pero declinó la invitación; Arturo Illia tenía su turno para el 9 de octubre y también lo rechazó. En cambio José María Guido asistió al invite el 2 de setiembre y Arturo Frondizi hizo lo propio el 14 de setiembre. Levingston, para entrevistarse con Edelmiro J. Farrell, se trasladó hasta su domicilio porque el ex Presidente de facto estaba convaleciente de una enfermedad. Cfr; revista *Diez años de Polémica 1962-1972: los hechos y los hombres*, N° 18, julio-diciembre de 1970.

⁴³ Cuando ocurre la renuncia de McLoughlin la prensa no se sorprendió. *Primera Plana* afirma que: *"...todos sabían, desde el primer día, que Eduardo McLoughlin no era el hombre adecuado para profundizar la Revolución, sino para darla por concluida"*. *Primera Plana*, 20 de octubre de 1970, p. 14.

⁴⁴ El mismo día 13 Moyano Llerena pidió una audiencia con el Presidente que lo recibió en forma airada. Levingston habló en tono tan alto que Llerena se vio obligado a pedirle que bajara la voz pues si no lo hacía se retiraría de la reunión. Levingston se tranquilizó y el diálogo continuó en forma aparentemente cordial, hasta que el Ministro le informó que venía a ofrecer su renuncia como consecuencia de la crisis desatada en el área de Interior. Seguramente el gesto del Ministro parecía ser una formalidad, pero la inmediata respuesta presidencial fue: *"Bueno, ahora que no es*

más Ministro le puedo contar el fondo de la cuestión". La renuncia le había sido aceptada. Cfr; Lanusse, Alejandro, *ob.cit.* "Mi testimonio" p. 170-171.

Carlos Moyano Llerena había sido uno de los hombres más importantes en la elaboración del plan económico de Krieger y esta identificación con el ex ministro hacia que, irónicamente, se lo llamara *Moyano Vasena*.

⁴⁵ El reemplazo de McLoughlin no resultó sencillo, los medios periodísticos se hicieron eco de la puja del Presidente con los comandantes en la búsqueda del nuevo ministro y coincidieron en algunos nombres, entre ellos se mencionaron: los políticos Oscar Alende, Carlos Aguinaga, y Carlos Sylvestre Begnis y de militares como los generales Manuel Laprida y Julio Aguirre. Lanusse propuso a su asesor Bringas Nuñez –el civil más cercano al jefe del Ejército- y se dice que a Mor Roig, a quien no conocía personalmente. Casi se confirmó el nombre del general Juan Guglielmelli, pero cuando todo parecía arreglado el nombramiento no se concretó por el rechazo del candidato que no aceptaba a Ferrer dirigiendo la economía. En su momento, también había rechazado a Moyano Llerena. Finalmente primó el espíritu corporativo y se cambió a un aviador por otro: el brigadier Cordón Aguirre. Tanto Gnavi como Lanusse manifestaron su disidencia con la designación del brigadier Cordón Aguirre en Interior. El mismo Comandante de la Fuerza Aérea hizo conocer su poco entusiasmo por el candidato. No obstante los tres aceptaron que el Presidente nombrara al nuevo Ministro. Ver: *Panorama*, 27 de octubre de 1970.

⁴⁶ El memorándum terminaba expresando textualmente: "Prever la posibilidad y conveniencia de que, a fines de 1971 o a principios de 1972 se realice un referéndum para que el Presidente Levingston lo siga siendo por voluntad del pueblo por un período de cuatro años, y como un medio para facilitar y adelantar el cumplimiento del proceso y plazos para la plena normalización institucional". Ver: Lanusse, Alejandro; *ob.cit.* "Mi testimonio" p. 173.

⁴⁷ Sería erróneo pensar que los ministros de 1967 a 1970 habían llevado una política en la que el Estado era prescindible. Luego de las políticas ultraliberales de las décadas de 1980 y 1990, resulta cuanto menos curioso, ver cómo años después Ferrer, al hablar de esta etapa, la calificaba de neoliberal y luego, al describirla, enumera medidas que no concuerdan con esa categoría como: fijación del tipo de cambio, control de salarios, deliberado desplazamiento de ingresos del campo a la industria, incremento de la presión tributaria, etc. Cfr: Ferrer, Aldo; *Crisis y alternativas de la política económica argentina*; Buenos Aires, Fondo de Cultura Económica, 1980, pp. 73 a 76.

⁴⁸ La inversión pública estaba en torno a los 1.500 millones de dólares anuales, sumada la de las provincias y municipalidades giraba en unos 2.000 millones de dólares. El 40% de las construcciones totales que se hacen en el país se realizan para el sector público y alrededor de una tercera parte de las maquinarias y equipos se hacen también para el sector público. Así que el Ministro sostenía que, con esta capacidad de compra se sostendría parte del desarrollo nacional.

⁴⁹ Ver: *La Nación*, 14 de noviembre de 1970, p. 5

⁵⁰ "En esos reductos (la Universidad, la prensa, los organismos financieros internacionales) y basta hojear la prensa desde el día en que fue nombrado, la oposición a la nueva política económica alcanza ya un diapasón histérico" *Primera Plana*, 3 de noviembre de 1970, p. 17

⁵¹ "Quienes observan desapasionadamente la constitución del nuevo equipo económico anotan que entre sus jóvenes e inteligentes integrantes no se cuenta ningún experto en política monetaria y fiscal que haya pasado por la función pública". *Revista Análisis*, 27 de octubre de 1970.

⁵² "Ferrer ha logrado ubicar en Energía al ingeniero Jorge Haiek y al frente del Banco Central a Daniel Fernández; pero el Secretario de Hacienda, Leonardo Anidjar, ya se reveló como un funcionario demasiado escrupuloso, que tamizará con cicatería las inspiraciones del Ministro. Si bien Ferrer puede considerar aliados potenciales a los generales Chescota (Industria y Comercio), Colombo (Obras y Servicios Públicos) y Guglielmelli (CONADE); todo concurre a demostrar que ni

Elbio Baldenelli (Comercio Exterior), ni José Pascual (Minería), ni Walter Kugler (Agricultura), ni Juan Alejandro Luco, son gente que él hubiera movilizado, de poder hacerlo". Primera Plana, 3 de noviembre de 1970.

Guglielmelli renunció al CONADE justo el día en que apareció esta nota. La razón de la renuncia fue su marginación ya que esperaba un cargo con mayores responsabilidades ejecutivas. También hubo una directiva de Frondizi (su jefe ideológico) quién –convencido de que la administración de Levingston no tenía futuro- lo retiraba del gobierno a la espera de circunstancias más propicias.

⁵³ El *affaire Guglielmelli* fue una historia de espionaje sobre un plan económico –en estado de borrador- preparado por el CONADE que salió imprevistamente a la luz y produjo la renuncia de su Secretario el general Juan Guglielmelli. Para los detalles sobre este tema –que en su momento produjo bastante conmoción en el ámbito empresario- ver: *Primera Plana*, N° 397 del 8 de setiembre de 1970.

⁵⁴ *La Nación*, el 24 de diciembre publica en forma minuciosa el contenido del *Plan de Desarrollo y Seguridad 1971-1975*

⁵⁵ *Primera Plana* en su edición del 3 de noviembre de 1970 decía: “*El Plan Ferrer –haya o no ecuacionado con precisión necesidades y posibilidades, y sea o no, por lo tanto, el más adecuado para la década que comienza- es, precisamente, un camino sin retorno. Representa, en suma, el más vigoroso intento de escapar a la disyuntiva planteada por dos escuelas antagónicas de la economía argentina, que abrevaron en la común herencia de Raúl Prebisch: la autarquía frigerista, financiada desde el exterior, y el eficientismo ditelliano, que tal vez acepta para la Argentina una posición secundaria. La idea más fecunda del Ministro de Economía es que la tasa de ahorro interno compite con ventaja con la de otros países del mismo escalón, mientras que la tasa de inversión no soporta el cotejo: achicar la distancia entre ambos, canalizando el ahorro interno hacia la infraestructura, las industrias de base y las exportaciones es una tarea ciclópea. ¿Quiere el país acometerla? Su falta de voluntad puede ser el último tapón.*”

⁵⁶ Ver *Panorama* del 29 de diciembre de 1970, pp. 10 y 11.

⁵⁷ La revista *Análisis* en su edición del 29 de febrero de 1971, decía: “*El Plan en sí mismo difiere de otros que ya son tradicionales en varios países –Francia es el mejor ejemplo- pues carece del relevamiento de opiniones particulares y sectoriales que bajo la égida de De Gaulle constituyeron la materia prima de varios programas quinquenales. El programa argentino contiene, en cambio, la yuxtaposición de estudios de sectores realizados en los últimos años, que todavía no han sido rigurosamente compatibilizados.*”

⁵⁸ En *Desarrollo Económico* N°47 del año 1972, Aldo Arnaudo; “*El desarrollo regional en el Plan de Desarrollo y Seguridad 1971-1975*” Arnaudo hace una valoración del Plan y reconoce en las conclusiones de su artículo “*El Plan es el primero que contiene metas de desarrollo regional, pero sus metas globales de crecimiento y su metodología inspirada en la programación por el lado de la demanda suponen una filosofía subyacente de crecimiento equilibrado que pone a las primeras en función de las segundas. El Plan, aunque sin una justificación adecuada, contiene una decisión política de tremenda importancia, la determinación de polos de desarrollo. Sin embargo, los loables propósitos de reorientar las migraciones hacia estos centros urbanos no son acompañadas -sino excepcionalmente- por provisiones de inversión social básica y proyectos industriales que harían posible su concreción.*”

⁵⁹ Schvarzer, Jorge; “*La industria que supimos conseguir*”, Buenos Aires, Planeta, 1996, p. 253 y ss.

⁶⁰ Cfr. “*Aldo Ferrer: en “Argentinización, un término que necesitaba límites”, Ferrer decía: “el gobierno sigue una política de orientación del crédito hacia las empresas de capital nacional y las estadísticas de que dispone indican que, naturalmente una mayor participación de la banca extranjera en lo financiero implica una mayor proporción de créditos para las empresas foráneas.*”

Pero no debe perderse de vista que el proceso tiene dos caras: sistema financiero y control del aparato industrial. Si el control nacional sobre la manufactura dinámica es escaso, de nada sirve un sistema financiero totalmente argentinizado". Panorama, 23 de febrero de 1971, pp. 16-17.

⁶¹ *"las perspectivas y posibilidades de negocios de las empresas del exterior en la Argentina, son posibles y mejoraran solo en el marco de una política de signo nacional. Porque es una condición necesaria para obtener una rápida tasa de crecimiento, y esta, en última instancia, determina las posibilidades de inversión. La economía más liberal del mundo, si está estancada, es menos conveniente que una economía nacional pero en expansión". Ibídem.*

⁶² *Primera Plana* N° 409, del 1° de diciembre de 1970.

⁶³ Seguramente no fue una sorpresa para Carcagno su nuevo destino en el EMC, debió de conocerlo el 7 de octubre, cuando Lanusse se detuvo en Córdoba a almorzar con él. Para los observadores militares, tanto ese contacto como el destino que se le otorga son consecuencia lógica del perfil que en los últimos tiempos había tomado su imagen. En mayo de 1969 había mandado la fuerza operativa que reprimió el cordobazo en 24 horas; luego pasaría a desempeñar la gobernación interina y estableció un sorprendente diálogo con las fuerzas que habían ganado la calle. Quienes estuvieron a su lado en aquellas circunstancias, quedaron fuertemente impresionados por esa experiencia que hablaba de la pericia personal de este general. Desde entonces, Carcagno, cuyo vivaz antiperonismo lo había llevado a militar en el sector colorado del Ejército en 1962, se convirtió en un tenaz promotor de cambios sociales y económicos y también en el oído atento y eficiente portavoz de estudiantes y sindicatos.

⁶⁴ Por las dificultades de Balbín para negociar directamente con el peronismo, el frente se amplió con el Partido Demócrata Progresista (bajo la conducción de Horacio Teddy), la Unión Cívica Radical Bloquista, el Partido Socialista Argentino y el Partido Conservador Popular que, apenas dos años más tarde, en la salida electoral conducida por Lanusse, aportarían al Vicepresidente de la República: Vicente Solano Lima. La Democracia Cristiana, el desarrollismo, la intransigencia radical, los socialistas democráticos y los comunistas, fueron algunos de los partidos que no adhirieron.

⁶⁵ *Primera Plana* N° 408, 24 de noviembre de 1970, p. 14. *Clarín*, edición del 27 de noviembre de 1970.

⁶⁶ Lanusse, Alejandro; *ob.cit.*; *"Mi testimonio"* p. 177.

⁶⁷ El 10 de octubre, Levingston ante una pregunta concreta sobre los procesos políticos de Chile y Bolivia (Allende y Torres) invitaba a los periodistas para que *"los analicen como experiencia histórica contemporánea, incorporándolos a los factores que debemos tener en cuenta para la solución de nuestros problemas durante el proceso revolucionario"*. *Clarín*, 11 de octubre de 1970. Sobre la influencia que tuvo en la Argentina el golpe *nacional-populista* de Velasco Alvarado en Perú puede verse: *Primera Plana*, N° 342 *"Argentina-Perú: dos revoluciones"*, 15 de julio de 1969.

⁶⁸ El *Instituto de la Economía Social de Mercado*, que reunía las huestes adictas al ingeniero Álvaro Alsogaray publicaba en los matutinos del lunes 28 de diciembre de 1970 una solicitada de tono publicitario advirtiendo sobre la inflación, para ellos *"el peor de los males que vive el país"*. Los culpables serían *"los ideólogos desarrollistas que han creado esta ola nacionalista de extracción estatista y socializante"*. *Primera Plana* N° 414, 5 de enero de 1971. p. 11.

⁶⁹ La veda al consumo de carne vacuna se implementó por primera vez el 29 de marzo de 1971.

⁷⁰ Se comprende que el discurso *ferreriano* fuera dominado por la intención de calmar las iras de los poderosos sectores liberales: *"el Gobierno Nacional –dijo- se propone estimular decididamente la empresa privada y fortalecer el funcionamiento del mercado. El acrecentamiento de las*

expectativas inflacionarias en los últimos meses constituye un hecho negativo que no se corresponde con la posibilidad real de expandir la producción sin inflación. Es fundamental por lo tanto, dejar claramente señaladas las reglas del juego a que se ajustará el Gobierno en la determinación de la evolución de los costos y la demanda”.

⁷¹ El martes 29 de diciembre, la Unión Industrial Argentina (UIA), la Bolsa de Comercio y la Cámara Argentina de Exportadores, bombardearon con sendas declaraciones que dramatizaban el intervencionismo estatal del titular de Economía. *La Nación* y *Clarín*, ediciones del 30 de diciembre de 1970.

⁷² *Panorama*, 16 de marzo de 1971, p. 16

⁷³ *Panorama*, 27 de abril de 1971, p. 18

⁷⁴ Quienes proponían que la política debía preceder a lo económico también estaban de acuerdo con una tendencia del pensamiento que excedía el marco argentino. En 1968 se publicó en inglés *El orden político en las sociedades en cambio*, que fue traducido al español en 1972. Allí Samuel Huntington sostenía: *“El cambio económico y social –urbanización, crecimiento del alfabetismo y la educación, industrialización, expansión de los medios masivos de comunicación- amplían la conciencia política, multiplican sus demandas, ensanchan su participación. Estos cambios socavan los fundamentos tradicionales de la autoridad y las instituciones políticas tradicionales y complican tremendamente la creación de nuevas bases de asociación e instituciones políticas que unan la legitimidad a la eficacia. Los ritmos de movilización social y el auge de la participación política son elevados; los de organización e institucionalización política, bajos. El resultado es la inestabilidad y el desorden. El principal progreso de la política es el atraso en el desarrollo de las instituciones políticas que deben respaldar los cambios económicos y sociales”.* Huntington, Samuel; *El orden político en las sociedades en cambio*, Barcelona, Paidós, 1997, p. 16.

⁷⁵ Una prueba de ello está en el fortalecimiento que algunos organismos destinados a la planificación económica recibieron durante la *Revolución Argentina*, como el caso del CONADE (creado durante la presidencia de Illia) y el Consejo Federal de Inversión (CFI) creado por Frondizi.

⁷⁶ Si no había ya generales liberales en esa época, habría que responder si se podía atribuir alguna ideología -referida a lo económico- que fuera común y sobre todo estable para el conjunto de los uniformados. La respuesta la brindará el propio Aldo Ferrer, muchos años después de los acontecimientos de los que nos estamos ocupando. Ferrer decía: *“En principio, cabe suponer que el estamento militar está interesado en el desarrollo industrial, la expansión de la industria pesada, el desarrollo regional y el poblamiento de las zonas de frontera. Son todos problemas que hacen al poder económico de la Nación y, en consecuencia, a la consolidación de la defensa nacional. Es probable que estos criterios predominen en el cuerpo de oficiales de las tres armas. Sin embargo, esta conclusión basada en el sentido común, cede paso al hecho de que los militares reflejan la diversidad de criterios que, en materia económica, impera en la sociedad argentina. Más bien, la opción económica del poder militar parece decidirse por la coyuntura política del momento. Así pudieron ser ministros de gobiernos militares Krieger Vasena, el autor de estas páginas y Martínez de Hoz...”.* Ferrer, Aldo; *Nacionalismo y orden constitucional*, Buenos Aires, FCE, 1981, p. 57.

⁷⁷ *“Durante la presidencia de Levingston todo pareció cambiar. Se abandonó la austeridad y se hizo hincapié en una estrategia nacional de desarrollo. Un talentoso economista, poco sospechoso de complacencia hacia los capitales extranjeros, promulgó diversas medidas cuyo objeto era apoyar a las empresas nacionales, tanto privadas como estatales y limitar la penetración extranjera en la economía argentina. Algunas concesiones salariales sustanciales completaron esta apertura nacionalista. En realidad se trataba desarmar la hostilidad popular, no de cuestionar las prioridades del modelo de crecimiento. Los economistas del gobierno se dan cuenta rápidamente de ello: no disponen de ningún apoyo. Una orientación combatida por los medios empresariales, necesita de un apoyo masivo, o el apoyo unánime del Ejército. Al no cumplirse ninguna de las dos condiciones,*

los verdaderos detentores del poder quiebran rápidamente dichas veleidades dirigistas y la reactivación concertada de la inflación arruina el crédito de su impulsor". Rouquié, Alain; *El año de Perón: Los malentendidos de la tercera presidencia, en Autoritarismo y democracia, Estudios de política argentina*, Buenos Aires, Edicial, 1994, p. 151

⁷⁸ Desde una posición ideológica distinta, Carlos A. Quinteros hace un balance parecido de los resultados. Sin embargo su valoración de la impronta que deja la política de Ferrer es diferente: "Igualmente el gobierno de Levingston miró con simpatía el curso de esa prédica contra las llamadas empresas multinacionales y estimuló su difusión con el fin de dar un falso contenido popular a la Revolución. Con esto no hizo sino alertar a los adversarios del gobierno militar y, sin allegarle nuevos amigos, se enajenó la colaboración de importantes grupos de intereses que hasta ese momento habían apoyado ese programa.....Fue así como con Ferrer el país ingresó en la aplicación de las prácticas populistas que iban a campear, casi sin interrupción, durante los seis años subsiguientes sin obtener por eso la contención de las inquietudes sociales ni la acción de los grupos combativos". Quinteros, Carlos A.; *Militares y populismo. La crisis argentina de 1966 a 1976*. Buenos Aires, Temas Contemporáneos, 1978, p. 119 a 120

⁷⁹ *La Nación*, 5 de diciembre de 1970 presenta el texto completo del discurso. Ver; *Confirmado* del 9 de diciembre de 1971, p. 11.

⁸⁰ En documentos preparados por sus respectivos equipos y enviados unos días antes del discurso del Presidente, los tres Comandantes en Jefe habían recomendado que el gobierno diera prioridad a un programa político enunciado con claridad como el mejor modo de obtener el apoyo de la mayoría moderada del pueblo; solo con ese apoyo el gobierno sería capaz de hacer avanzar sus objetivos en los campos económico, social y de seguridad interna. Las Fuerzas Armadas también proponían un calendario político provisorio que incluía la realización de un plebiscito sobre reformas constitucionales, la promulgación de un Estatuto de los Partidos Políticos y la adopción de un Estatuto Electoral, como así también una lista de votantes. *Confirmado* del 25 de noviembre de 1970, p. 13; y 2 de diciembre de 1970, pp. 14 y 18.

⁸¹ *Confirmado*, 20 de enero de 1971, p. 10.

⁸² Si Levingston creía en serio que podía organizar un movimiento político pro gobierno que pudiera convertirse en una fuerza importante para competir con eficacia en una elección futura como el partido de la revolución, esa creencia tendría que apoyarse en una serie de suposiciones: a) que su anuncio reciente de un plan de desarrollo de cinco años, junto con las medidas diseñadas por Ferrer, sería muy popular dentro de las Fuerzas Armadas y garantizaría el apoyo de muchos oficiales; b) que con este apoyo sería capaz de mantenerse en el poder por otros cuatro años, aún cuando eso exigiera pasar a retiro a Gnavi y a Lanusse y colocar a sus propios comandantes; c) que podría entusiasmar a integrantes de la *generación intermedia* de oficiales con el ofrecimiento de gobernaciones provinciales y otros cargos en el Estado y que esto le permitiría construir un aparato político y una masa de seguidores que le permitirían ganar elecciones.

⁸³ *Primera Plana* N° 415, 12 de enero de 1971, p. 12. *Clarín*, edición del domingo 3 de enero de 1971.

⁸⁴ El 13 de enero de 1971, Levingston y Lanusse se reunieron para enfrascarse en el análisis de las divergencias de criterio en que encallaban los prolegómenos del Plan Político. Cuarenta y ocho horas después se atribuía al Comandante del Ejército una espontaneidad: "el plazo del gobierno será de cuatro años, pero si se da una coyuntura favorable será de seis meses". Era el trasunto de un deseo de Lanusse de arribar –cuanto antes- a la salida institucional.

⁸⁵ *La Nación*, 22 de enero de 1971. *Confirmado*, 27 de enero de 1971, p. 11. *Primera Plana*, N° 417, 26 de enero de 1971. Alende había propuesto la formación de una Comisión Investigadora, pero Cordón Aguirre no dio su visto bueno, quizá porque intuyó que la aventura podría terminar en

un escándalo. En la avalancha de noticias de la semana, paso casi inadvertido que Deltec se había desprendido de tres de sus filiales: Provita (alimentos balanceados), Argentaria (compañía de inversiones) e Ingenio La Esperanza.

⁸⁶ No quedó claro si Levingston había sido informado en el almuerzo sobre las supuestas observaciones de Alende, pero el hecho de que la televisión y la radio oficiales dieran amplia cobertura a sus suposiciones sugiere una campaña deliberada para convencer al público, incluyendo a los militares, de que quienes estaban presionando por una solución política que terminara con elecciones eran, de algún modo, agentes de intereses extranjeros. *Ibidem*.

⁸⁷ Pero: ¿Cómo emergieron estos sindicatos de corte clasista y combativa? Hasta la experiencia iniciada con la asamblea del 23 de marzo de 1970, el Sindicato de Trabajadores de Concord (SITRAC) y el Sindicato de Trabajadores de Materfer (SITRAM) se habían mantenido aislados del movimiento obrero local e, incluso, no habían participado orgánicamente en el “cordobazo” del 29 y 30 de mayo de 1969. Se trataba de sindicatos que agrupaban al personal de las distintas plantas de la empresa: la de Concord, que producía motores y chasis, y la de Materfer, dedicada a la fabricación de material ferroviario; la tercera planta instalada en el predio de Ferreyra, la de Grandes Motores Diesel (GMD) había conformado también un sindicato -el SITRAGMD- cuyo personal logró, luego de la importante huelga promovida por estos sindicatos en 1965 y que fuera totalmente derrotada, ingresar al Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA) en 1966. De este modo el SITRAC y el SITRAM (en adelante SyS) quedaron como sindicatos muy débiles, cuya afiliación decayó notablemente, controlados por una dirigencia pro empresarial y regidos por el convenio de la UOM, con la cual el SMATA había disputado la representación gremial de las plantas Fiat. Sin embargo, dentro del ciclo de protesta abierto tras el “cordobazo” y en el marco de la restitución de las discusiones paritarias, las cosas cambiaron. El disparador fue la asamblea convocada por la Comisión Directiva encabezada por Lozano en la planta de Concord, convocada para aprobar el nuevo convenio negociado con la empresa que resultaba claramente inferior a los otros convenios que se estaban negociando por entonces. La intervención circunstancial de algunos trabajadores como Masera, Clavero y Torres, que acusaban a la dirección del sindicato de montar una farsa para aprobar el nuevo convenio, con el respaldo de los presentes, llevó a la solicitud de la renuncia de la Comisión Directiva y a la formación de una “Comisión Provisoria” que se encargaría de gestionar la elección de una nueva Comisión Directiva. La planta de Materfer vivió un proceso similar. Al comienzo se siguieron los pasos legales pero como en junio no se habían conseguido respuestas, la Comisión Provisoria dio por concluidas las gestiones ante la Secretaría de Trabajo poniendo como plazo el 14 de Junio para que se expidiera sobre lo solicitado. Al no conseguirlo, ese día se decidió la ocupación de la fábrica de Concord tomando como rehenes a los directivos de la empresa. Finalmente se logró la renuncia de la antigua Comisión Directiva y se convocó a elecciones para el 7 de julio de 1970. En la elección se presentó una lista única, surgida de una asamblea masiva de trabajadores de Concord, en la que se propuso a Carlos Masera como Secretario General. También se había logrado la renuncia de la Comisión Directiva de SITRAM. Durante los primeros meses la nueva conducción buscó consolidar la organización de las bases, el trabajo sindical y muchas reivindicaciones laborales que había en las plantas. Las asambleas se convirtieron en prácticas corrientes donde se discutían cuestiones sindicales y políticas. Los temas principales que preocupaban eran las paritarias, que no se habilitarían hasta el año siguiente, y la relación con el resto del movimiento obrero, sobre todo con la CGT local, para entonces en manos del peronismo legalista hasta la renuncia de su Secretario General, Elpidio Torres, del SMATA, a fines de 1970. Al principio, SyS no se presentaron con una identidad clara. El término *clasista* surgió casi aleatoriamente. En un momento se le preguntó a uno de los dirigentes a qué corriente pertenecían (si eran marxistas, trotskistas, “chinos”, o de otras

tendencias), a lo que respondió: *“nosotros no somos de ninguna corriente, somos clasistas”*. Un hito importante en la trayectoria de SyS fue la ocupación de fábrica en enero de 1971 para solicitar la reincorporación de siete delegados despedidos. Con la intervención del gobierno provincial que dictó la conciliación obligatoria éstos fueron reincorporados, lo que fue visto como un logro sindical. En febrero del mismo año, en un plenario de la CGT, se propuso y se aprobó la creación de una *“comisión de lucha”* para que elaborara un plan de acción y coordinara las medidas a tomar hasta tanto se normalizara el funcionamiento de la CGT tras la renuncia de Elpidio Torres. Luego de largas discusiones, tanto en el ámbito de la regional de CGT como en las asambleas de base de SyS, éstos decidieron no integrar la *“comisión de lucha”* para preservar su independencia táctica de la mayoría de los sindicatos definidos como burocráticos. Finalmente la normalización de la central se produjo en el mes de abril, resultando electos como Secretarios general y adjunto Atilio López (UTA) enrolado en el peronismo y Agustín Tosco (Sindicato de Luz y Fuerza) del sector independiente. Sin embargo, previamente, se habían manifestado las distintas posiciones con motivo de las medidas de fuerza decididas en el marco de una serie de conflictos gremiales intensificados tras las desafortunadas palabras del que fuera designado como nuevo gobernador, José Camilo Uriburu -en reemplazo del renunciado Bernardo Bas- quien a su llegada a Córdoba había señalado que cortarían la cabeza de la víbora venenosa que anidaba en la provincia. La reacción no se hizo esperar, la *comisión de lucha* convocó a una reunión para el día 9 de marzo a la que asistieron representantes de SyS. La propuesta de la Comisión fue la de ocupar las plantas fabriles, pero los representantes de SyS propusieron un paro activo con movilización al centro. La moción de SyS fue vencida y éstos decidieron llevar a cabo su propuesta aun sin la CGT. El día 12 los trabajadores se congregaron frente a las plantas de Fiat e hicieron abandono de tareas, dirigiéndose hacia los barrios aledaños en donde se produjeron enfrentamientos con la policía y, finalmente, la muerte del obrero Adolfo Cepeda. Estos acontecimientos fueron conocidos como el *“ferreyrazo”*, fueron la antesala del *“viborazo”*, o *segundo “cordobazo”* que tuvo lugar los días 15 y 16 de marzo de 1971 y que marcaron el fin del gobierno de Levingston.

Luego del *“viborazo”*, Tosco fue nuevamente detenido, pese a lo cual la CGT cordobesa convocó al *“plenario de gremios combativos”* a desarrollarse en conmemoración del segundo aniversario del *“cordobazo”*. En dicho plenario SyS presentó un programa de lucha con objetivos claramente radicalizados, tendientes a un control obrero de la economía y del comercio. El programa terminaba con la proclama *“ni golpe ni elección, revolución”*. Finalmente, el programa no fue aprobado en aquel plenario. Un programa similar fue presentado en el *“primer congreso de sindicatos, agrupaciones clasistas y obreros revolucionarios”* que convocó SyS para los días 28 y 29 de Agosto de 1971 y al que asistieron numerosas delegaciones de distintos puntos del país que mantenían procesos similares a los de SyS. En el congreso la discusión estuvo hegemonizada por partidos de izquierda y agrupaciones estudiantiles. La principal propuesta presentada fue el programa de SyS, pero no se llegó a la votación ya que los sectores peronistas presentes no acordaban con la totalidad del *“programa”* y la conducción de SyS no quiso llegar a una ruptura con esos sectores que representaban una parte considerable de las bases de SyS.

Tras dedicarse durante todo el año a las negociaciones salariales y conseguir un convenio por debajo de sus expectativas, en la mañana del 26 de octubre de 1971 llegó el desenlace final de la *experiencia clasista* cuando las fábricas fueron ocupadas por el Ejército, al mismo tiempo que llegaba desde Buenos Aires la notificación de la quita de la personería gremial. Para una mayor información sobre el tema, ver; Gordillo, Mónica; *Los sindicatos FIAT y la autonomía obrera*; Boletín informativo del programa Buenos Aires de Historia Política (PolHis) Año 5 N°10, 2do semestre 2012.

⁸⁸ ¿Por qué surgieron en FIAT? El problema de la autonomía fue un tema recurrente a lo largo de la historia del movimiento obrero. Sin embargo no existió acuerdo sobre lo que esto significaba. En el caso argentino pareció condensarse, durante el proceso de institucionalización de ese movimiento, uno de los sentidos posibles, el que aludía a la autonomía obrera como independencia o *no sujeción* a una agrupación política, como una virtud a exaltar en pos de la representación de los verdaderos intereses de la clase. Esta dimensión de la autonomía fue sostenida tanto por quienes defendían una posición clasista - sobre todo frente a la denunciada como cooptación heterónoma por parte del peronismo- como desde sectores liberales que estimaban conveniente la división de las esferas de actuación: lo político a través de los partidos y lo gremial a través de las corporaciones o asociaciones de interés. A medida que fue transcurriendo el siglo éste se convirtió en el sentido predominante, diluyéndose otro que también estuvo presente en el momento constitutivo del movimiento obrero: el referido a la relación establecida con el Estado mediante su función de dotar de existencia a las propias asociaciones sindicales, a través de su reconocimiento, y por su rol de exclusivo habilitador de la negociación sectorial. Mucho menos se cuestionó su papel como dador de una determinada estructura sindical centrada en el sindicato único mayoritario y, con ello, su capacidad para legitimar el pacto fordista que tan beneficioso había resultado para el capital, por lo menos en los años dorados de la entreguerras y de la inmediata posguerra. Ello implicó también no discutir si era una función inherente al Estado la de determinar a través de sus órganos competentes las cuestiones relativas a encuadramientos sindicales y a las formas de organización interna de las asociaciones, o si era un derecho sólo de los propios sindicatos el resolver las instancias superiores de representación a través de federaciones, confederaciones u otras modalidades. En ese marco, los planteos de autonomía apuntaron casi exclusivamente hacia los intentos de cooptación por parte de actores externos a los intereses de clase, ya fueran –como se señaló- de agrupaciones políticas o de sectores del capital que, con sus políticas paternalistas o directamente a través de prácticas corruptas, desviaban a los trabajadores de sus verdaderos intereses. Este esquema tendía a pensar a los trabajadores como portadores de cierta pureza original desvirtuada por los dirigentes que se enquistaban en el poder conformando burocracias. De allí que para efectivizar la autonomía y, con ello, una legítima democracia, bastaba con recuperar para los verdaderos trabajadores los aparatos dirigenciales, terminar con los desvíos burocráticos y limitar las diferentes formas de *“penetraciones” externas*.

Las reflexiones anteriores adquieren sentido para introducir cómo fue concebida la autonomía dentro de una breve experiencia, la de los sindicatos de la empresa Fiat de Córdoba en la coyuntura de 1970-71, dado que ellos fueron puestos como un ejemplo de radicalización clasista, portadores de una propuesta de autonomía obrera al decidir, entre otras cosas, no integrar los aparatos burocráticos y hacer efectiva una verdadera democracia de base. *Ibidem*

⁸⁹ Los pasos dados hacia el clasismo fueron vacilantes. El eslogan de estos sindicatos, adoptado más adelante hacia fines de 1971, sería: *¡Ni golpe ni elección, revolución!* Que prendió fuerte en el discurso público de los sindicatos de FIAT y en sus panfletos, en un momento en que las posibilidades electorales genuinas parecían remotas. Entre los trabajadores, el eslogan expresaba más desconexión con el estado general de las cosas en el país, que simpatía extendida para con la revolución o incluso el socialismo.

⁹⁰ El Secretario de Trabajo –Juan Alejandro Luco- que tenía a su cargo las negociaciones paritarias, una de las patas del trípode en el que se apoyaba el programa de Ferrer; había sido nombrado a instancias del Presidente Levingston, eran comprovincianos, ambos era oriundos de la provincia de San Luis y además habían cultivado una amistad. Levingston había ordenado a los trabajadores que abandonaran la planta en un plazo de tres horas y amenazó con que, si no lo hacían, Córdoba sería declarada zona de emergencia, lo que le daba al Presidente plenos poderes para ordenar la intervención militar de la provincia (el III Cuerpo de Ejército estaba al mando de Alcides López Aufranc, amigo personal de Lanusse). El sindicato ignoró la orden. La declaración del estado de emergencia en la provincia no era un supuesto de los cordobeses: después de las reuniones entre Levingston, Cordón Aguirre, Ferrer, Luco y el propio Lanusse; en la madrugada del viernes 15 de enero quedó decidida. Solo se revió en la mañana a instancias de Ferrer, que bregaba por la línea negociadora.

⁹¹ El proceso lo había explicado FIAT con antelación en un memorial de 10 carillas; comenzó con el asalto del puesto de vigilancia en Ferreyra, protagonizado por guerrilleros del *ERP*, quienes invitaron a los obreros a *plegarse a la lucha con fervor revolucionario*. Un par de días después –el 24 de diciembre de 1970- SITRAC organizaba una huelga de hambre, en protesta por tres despidos, complicado con *curas tercermundistas* de la casa parroquial de Ferreyra; en sucesivas asambleas menudearon los comunicados subversivos, signo que, según FIAT, caracterizaba el trance, que por reacciones gremiales y políticas había significado, durante 1970, la pérdida de 260 mil horas de trabajo. Ver; *Primera Plana* N° 416, del 19 de enero de 1971.

⁹² López Aufranc no había participado del encuentro en la Casa Rosada. El jueves 21 de enero, en Córdoba, afirmó haberse hallado en el Regimiento 11 de Infantería de montaña, en Tupungato, Mendoza: se enteró del cónclave por los diarios. *Primera Plana* N°s 416 417 del 19 y 26 de enero de 1971.

⁹³ El 14 de enero sucedió algo que iba a ser un paso notable para preparar las bases de un futuro acuerdo político: Lanusse conoció a Arturo Mor Roig, un histórico dirigente del radicalismo y antiguo Presidente de la Cámara de Diputados. Fue invitado junto a José Luis Cantilo y Antonio Tróccoli a un lunch en el Cuartel General del Ejército. Mor Roig impresionó a Lanusse por su habilidad política y la asombrosa semejanza de sus puntos de vista. De hecho, tuvo gran influencia en la confección del documento que los Comandantes en Jefe llevarían a la reunión del 31 de enero con el Presidente: Mor Roig coincidió –casi de lleno- en la impresión de que existía un cuerpo de opinión sustancial entre empresarios, sindicalistas y políticos a favor de un acuerdo negociado para la salida electoral y coincidió plenamente con Lanusse sobre la necesidad de realizar reformas constitucionales como parte del proyecto para establecer un régimen democrático estable. Tal fue la coincidencia entre Lanusse y Mor Roig que –dos meses más tarde- ya bajo la presidencia de Lanusse, Mor Roig ocupó el cargo de Ministro del Interior y se transformó en el gestor del *Gran Acuerdo Nacional* (GAN). Su acción se vio truncada por su asesinato a manos del ERP, en pleno ejercicio de su Ministerio. El hecho sacudió fuerte al Presidente Lanusse y a todo su gobierno, pero estos sucesos exceden el campo de este trabajo.

⁹⁴ Puede leerse una carta del general Viviani Rossi a Lanusse fechada el 5 de febrero de 1971, donde –entre otros comentarios- se queja de la irritabilidad y el mal humor del Presidente en sus reuniones con los mandos. Recuérdese que Viviani Rossi había sido compañero de promoción de Levingston en el Colegio Militar de la Nación y, además, tenían un grado de amistad importante. En; Lanusse, Alejandro A.; *ob.cit.* “*Mi.....*” p. 211.

El 27 de enero, por la noche, el Presidente había invitado a cenar –en la Residencia de Olivos- a sus camaradas y compañeros de promoción: generales Viviani Rossi, Sánchez de Bustamante y José María Díaz. *Primera Plana* N° 418, 2 de febrero de 1971, p. 10.

⁹⁵ Al día siguiente de la reunión –el 1° de febrero- el vocero de prensa de la Presidencia –Rodolfo Baltierrez- dio a conocer un comunicado, nada trascendente, en el que se limitaba a enunciar algunos de los temas de la conversación entre Levingston y sus legisladores militares. La verdad era que las dificultades del cogobierno respondían –al menos- a algunas causas fundamentales: a) Levingston requería la opinión de las Fuerzas Armadas pero no tomaba sus resultados como vinculantes en las decisiones de gobierno; b) el temperamento agresivo del Presidente hacía que cualquier disidencia en las reuniones terminara –casi inevitablemente- en un incidente personal; c) la recurrencia a acudir al asesoramiento de funcionarios de tercer nivel, sin acudir a los responsables directos. Cfr: *Primera Plana* N° 419 del 9 de febrero de 1971, p. 12 y; Lanusse, Alejandro; *ob.cit.* “*Mi....*” P. 182.

⁹⁶ “*Contrariamente a los rumores que circularon días pasados todo indica que el teniente general Alejandro Lanusse, Jefe de las Fuerzas Armadas (sic) coincide totalmente con el Presidente Levingston en que es necesario prolongar la revolución durante cuatro o cinco años más...*”. *Financial Times*, edición del sábado 13 de febrero de 1971.

Parecía tener razón: el propio Lanusse lo había dicho, por otra parte. El punto clave era el convencimiento –en casi todos los jefes y oficiales- de que debía evitarse a toda costa una salida deshonrosa del poder, capaz de empañar la imagen castrense.

⁹⁷ Los resultados de la reunión fueron tan poco confiables que –el martes 2 de febrero- comenzaron a correr rumores sobre una rebelión en el II Cuerpo de Ejército en Rosario y otra en la base aeronaval de Puerto Belgrano: la versión tomó –para el periodismo- cierta importancia porque era atribuida al círculo íntimo del ex presidente Arturo Frondizi. Por supuesto que –finalmente- fueron solo rumores, pero los rumores siempre contienen algo de verdad. Ver; *Primera Plana* N° 419, del 9 de febrero de 1971.

⁹⁸ La suerte del Ministro de Bienestar Social se habría echado el 26 de enero, cinco días antes de la publicitada reunión presidencial con los tres Comandantes en Jefe. Entonces, durante una de sus diarias charlas privadas con el titular del Ejército, Paco Manrique le habría advertido que su permanencia en el gabinete era insostenible. En dicha situación, frente a la posibilidad de irse por propia voluntad, dando la imagen de un hombre derrotado, prefería precipitar un defenestramiento exógeno que le garantizaría una formidable plataforma de lanzamiento político. “*Se trata de una pelea solitaria, Cano –le confesó- te ruego que no te interpongas*”. Sin embargo, el 31, en Olivos, Lanusse ensayó una tímida defensa de su amigo. Lo hizo cuando Levingston, a fin de cubrirse por los reproches contra la lentitud de Cordón Aguirre, que había arrojado Lanusse, replicó quejándose a su vez de las indisciplinas atribuidas al titular de Bienestar Social. “*no se puede discutir la política de Manrique –contestó estratégicamente Lanusse-; en todo caso, usted está cuestionando su estilo. Y bueno Presidente, si usted no soporta su estilo, pídale la renuncia nomás. Es una decisión suya*”. Sabía que eso le dejaría las manos libres para reclamar la cabeza del Ministro del Interior. *Primera Plana* N° 420, 16 de febrero de 1971. *Manrique ¿Una bomba de tiempo?* p. 8 y 9.

⁹⁹ Iricibar ya intuía el despido, el Presidente lo convocó mientras veraneaba en Mar del Plata. Así que el martes 16 regresó para acudir a la entrevista. Creyó que el Presidente le solicitaría la renuncia, nada sucedió. Así que –en una decisión desdeñosa hacia el Presidente- fletó el avión presidencial para regresar a Mar del Plata. Irritadísimo por la actitud, Levingston lo convocó nuevamente y lo despidió sin más trámite. *Primera Plana* N° 422, 2 de marzo de 1971, p.11.

¹⁰⁰ La renuncia de Bas tomó por sorpresa al gobierno (lo había reconocido Levingston en su visita a Leones durante la Fiesta del Trigo). No obstante, habían sido notorias las quejas del gobernador Bernardo Bas: desde el Ministerio del Interior, su comprovinciano Hugo Taboada –Secretario de Asuntos Políticos- le bloqueaba, desde noviembre, los recursos financieros que le daban autonomía a la provincia. Cordón Aguirre le retenía la aprobación del presupuesto provincial que lo hacía consumir su cuota de amistad con los caudillos sindicales. El conflicto en las plantas de Santa Isabel enfrentaba a los funcionarios provinciales (que daban la razón a los obreros) con los funcionarios nacionales (que apadrinaban a las empresas). Pero el astuto jurista realizó una contrarréplica demoledora: envió su renuncia la Presidente –en mano de su Ministro de Obras y Servicios Públicos, ingeniero Ramón Asis, ex Vicegobernador del peronismo- en un avión militar y se fue a La Calera para conversar con su amigo, el general López Aufranc, Jefe del III Cuerpo de Ejército con asiento en la provincia, no sin antes hacer trascender el hecho por Radio Universidad. Diecinueve veces lo llamó Cordón Aguirre, ningún funcionario de importancia le contestó. Astuto, el ahora ex gobernador estaba previendo los eventos obreros de marzo.

¹⁰¹ El nombramiento de José Camilo Uriburu en la gobernación de Córdoba provocó una amplia marea de críticas en la provincia. Los tres diarios de Córdoba, en una coincidencia única, fueron unánimes en sus editoriales contra su elección. El nombramiento de Uriburu aumentó, en realidad, el estado de tensión y violencia en la provincia; situación que el nuevo gobernador hizo poco por disipar por el tono agresivo de sus declaraciones públicas. Su intolerante actitud sería decisiva en la conmoción pública de los días 13 a 15 de marzo de 1971 y que sellarían –definitivamente- la suerte del gobierno de Levingston. Entonces: ¿Por qué lo nombró Levingston para gobernar una

provincia que había visto ir y venir siete gobernadores desde 1966? Al parecer, el Presidente veía en él un hombre afín en lo ideológico identificado plenamente con las políticas presidenciales.

En la Fiesta del Trigo del 7 de marzo de 1971 –en la ciudad de Leones, Córdoba- el gobernador Uriburu, acompañado en el acto por Levingston, adjudicó las tensiones en la provincia a una conspiración marxista y prometió emplear toda su autoridad para combatirla, declarando que esa conspiración era: “una venenosa serpiente cuya cabeza quizá Dios me depare me permita el honor histórico de cortar de un solo tajo”. *La Nación*, 8 de marzo de 1971.

El mismo día en que Uriburu asumía el mando, el coronel Cornicelli –secretario personal y consejero de Lanusse- ofreció a su jefe el consejo personal de que si la situación cordobesa llegaba a un punto explosivo, el general Lanusse debía actuar para derrocar al gobierno en lugar de enviarlo a reprimir al pueblo. Cornicelli resulto premonitorio: una semana después –el 9 de marzo- el gobernador Uriburu convocaba al Jefe de la guarnición de la Fuerza Aérea –brigadier Zappino- y al Comandante en funciones de la guarnición del Ejército –general Orfila- para pedirles su apoyo en las medidas que pensaba tomar a fin de conservar su imagen de autoridad e impedir que la huelga anunciada para el 12 de marzo diera pié a disturbios. Potasch, Robert; *ob.cit*; “*El Ejército y la*” p. 225.

En esa misma noche del 9 de marzo, el Presidente Levingston le comentó a un ocasional compañero de cena en la Residencia de Olivos, que el pueblo de Córdoba necesitaba que le cortaran las alas, que tenía aviones y cañones y que iba a usarlos. El ocasional compañero de cena era José Ber Gelbard, que se mostró tan perturbado frente a ese comentario, que le contó esta conversación –al día siguiente- al coronel Cornicelli. *Ibidem*, p. 227

¹⁰² De Marchi había arribado al cargo el 10 de enero de 1967, en el marasmo de graves conflictos con los gremios ferroviarios, contaba con dos ventajas: era hijo de un ferroviario de Junín y –una década atrás- había movilizó al personal del San Martín durante el gobierno de Arturo Frondizi. Logró bajar el déficit de Ferrocarriles Argentinos a costa de reducir servicios. Mientras se le reprochaba falta de ejecutividad, este general de 51 años cosechaba el odio de los gremios ferroviarios por su empeño en eliminar ramales poco transitados. Su salida se atribuyó a un pedido explícito de la *Unión Ferroviaria* y *La Fraternidad*. Su reemplazo por el más joven general de brigada Emiliano Flourent se realizó en forma indolora: ofrecieron a De Marchi una embajada a cambio del pedido de retiro; la razón: él estaba primero en la línea sucesoria de Lanusse por su antigüedad (recuérdese que De Marchi era general de división y estaba en actividad). Su retiro ponía en la línea sucesoria al general de división José Rafael Herrera, *lanussista* y firme titular de Institutos Militares. *Primera Plana* N° 422, 2 de marzo de 1971, p. 12.

¹⁰³ Sobre el relevo de Francisco Manrique, puede verse; *La Nación* del 10 de febrero de 1971. Sobre el relevo de Iricibar y De Marchi, que habían sido designados por Onganía. Levingston los reemplazó por los generales Tomás Caballero y Emiliano Flouret, *La Nación*, 26 de febrero de 1971. Sobre el reemplazo de Manrique por Frugoli, *La Nación* del 6 de marzo de 1971.

¹⁰⁴ Celestino Gelsi –ex gobernador de Tucumán- había asistido al juramento del nuevo gobernador de Tucumán –Oscar Sarrulle- de neta formación peronista. Nadie entendió porque, pero aprovechó la oportunidad para denunciar que quince generales (luego aclaró: quince oficiales) habían intercedido a favor de un poderoso monopolio (se refería a Bunge & Born). La idea, sin duda, había sido vincular a los altos mandos del Ejército con los intereses imperialistas que venían siendo vapuleados por el Presidente. *Confirmado* del 3 de marzo de 1971 lo explicaba así: “*Sin duda, Gelsi no produjo simplemente una tontería que hubiera resultado inexplicable en un político de su experiencia y reconocida astucia. Tampoco se trata de una vulgar frase antimilitarista. En realidad Gelsi nunca se caracterizó por tener ninguna fobia antimilitar.....y no puede ser cierto que un desconocimiento de las instituciones castrenses lo hubieran llevado a ignorar que estas reaccionarían con verdadera irritación contra lo que considerarían como una afrenta.....Los pensamientos íntimos del tucumano constituyen un misterio, pero lo cierto es que Gelsi y sus amigos políticos alientan la táctica de promover las segundas líneas y rebelarlas contra sus jerarquías partidarias, propósito que se atribuyó al operativo generación intermedia. No sería descartable que, trasladando esa práctica al plano militar, Gelsi aliente la hostilidad contra los*

generales –hostilidad que, naturalmente, se centraliza contra el Comandante en Jefe- porque considera más práctico apoyarse en los mandos medios. Se estaría, en este caso, ante una increíble aplicación del principio utilizado al forjarse la tesis sobre la generación intermedia: la intención no sería agraviar infantilmente al Ejército, como puede suponerse, sino fomentar pasos en falso en la jerarquía militar”. Mal favor le había hecho Gelsi al Presidente, este había demostrado su mal humor al escuchar tremendas acusaciones a sus camaradas. Cordón Aguirre también le restó su apoyo y el brigadier retirado Hugo Martínez Zuviría montó un escándalo. El miércoles 24 de febrero, de regreso en Buenos Aires, Levingston se reunía con Lanusse y Rey (Jefes del Ejército y la Aeronáutica). En la reunión se evidenció un disgusto unánime contra el impolítico ex gobernador Gelsi. El episodio canceló toda posibilidad de Gelsi para ocupar el Ministerio de Bienestar Social –al que aspiraba- o, nuevamente, la propia gobernación tucumana: además fue declarada –por el propio Cordón Aguirre- persona no grata en Casa de Gobierno. Ver; *Primera Plana* N° 422, 2 de marzo de 1971, p. 10.

¹⁰⁵ En la compleja realidad nacional existían otras circunstancias –muy notorias especialmente desde el inicio de 1971- capaces de integrar el cuadro complejo ante el que el país se encontraba. Las agresiones de Levingston a los dirigentes políticos principales, para apoyarse en partidos menores o segundas líneas y la profunda desconfianza de los dirigentes sobre las intenciones del Presidente –que no perdía oportunidad de denostarlos- habían llevado a una definición en la cual convergían, tanto la CGT –que rompía relaciones con el gobierno- como el peronismo –que se expresaba a través de Jorge Daniel Paladino, delegado personal de Perón- como el radicalismo: mientras no hubiera nuevo Presidente, no habría colaboración ni diálogo político con el gobierno nacional.

¹⁰⁶ Sobre el regreso de Onganía a la política puede verse un extenso reportaje de Jorge Nader en; *Primera Plana* N° 411 del 15 de diciembre de 1970: *Onganía rompe el silencio*; p. 16 y 17

¹⁰⁷ Los amigos de Lanusse recogieron la insinuación de Onganía y recordaron que había sido él quien había impulsado la apertura nacionalista cuando –en su memorándum del 29 de abril de 1970- se quejó de la extranjerización de la economía porque estaba jaqueando seriamente el margen de decisión de la República. Había sido a instancias del Jefe del Ejército que tales inquietudes se introdujeron en las políticas nacionales redactadas más tarde. Una síntesis del contenido del memorándum del 29 de abril de 1970 –cuarenta días antes de la caída de Onganía- puede verse en; *Primera Plana* N° 419 del 9 de febrero de 1971, p. 12 y en; Lanusse, Alejandro; *ob.cit. “Mi.....”* p. 87, 88 y 89.

¹⁰⁸ En la reunión, Lanusse informó que los generales Saint Jean, Rivera y Mourglie – colaboradores directos del Presidente- le habían manifestado su preocupación por las decisiones inconsultas que tomaba Levingston. Lanusse también refirió un comentario del ex presidente Arturo Frondizi, a quien respetaba por su agudo sentido político. En opinión de Frondizi la situación presentaba cuatro cursos posibles: a) Que Lanusse se subordinara completamente a Levingston; b) Que Lanusse derrocara a Levingston; c) Que Levingston relevara a Lanusse y, d) Que todo siguiera como estaba. Según Frondizi, esta última era la peor de las variantes.

¹⁰⁹ Los párrafos más significativos del discurso de Lanusse del 2 de marzo de 1971, pueden verse en: Lanusse, Alejandro; *ob.cit. “Mi.....”* p. 189 y 190. Lo más sugestivo del mensaje surgiría de la exhortación *lanussista* a forjar el *Gran Acuerdo Nacional* que “es imperativo de la hora presente.... Solo así se podrá llevar a feliz término la gran empresa de encauzar al país en la senda de la libertad, el progreso y la justicia, como condición básica para el pleno restablecimiento de una democracia representativa, eficiente y estable”. *Primera Plana* N° 423, 9 de marzo de 1971, p.10

¹¹⁰ Los principales actores económicos comenzaron a tomar distancia del programa de Ferrer: la UIA, representada por Elbio Cohelo, anunció que de ninguna manera absorberían los resultados de las paritarias, con tope o sin él. El alicaído secretario General de la CGT, José Rucci –intentado retomar una iniciativa que le era esquivada- hacía saber su disconformidad con el anuncio

presidencial acerca de los topes a las paritarias. La CGE –de la mano de José Ber Gelbard - decía que no se habían reflejado modificaciones sustanciales respecto del rumbo económico instaurado en 1967. El mismo día de sus declaraciones, Gelbard cenaba con Levingston en Olivos. (ver nota 101 in fine). *Primera Plana* N° 424, 19 de marzo de 1971.

¹¹¹ El martes 2 de marzo, el INDEC había dado a conocer el índice de precios que en el primer bimestre ya había acumulado un 9.5% (la hipótesis de trabajo del Plan era del 10% anual), es decir, había agotado o casi la meta anual prevista por el plan. El jueves 4 de marzo se impusieron las primeras medidas de control: márgenes de ganancia minorista para la carne vacuna, regulación del mercado de papas y precios máximos para 13 artículos de primera necesidad en la canasta familiar. Finalmente, la batería de medidas adoptada por el tándem Levingston-Ferrer, no diferían mucho –en su conjunto- con las que había adoptado el gobierno de Arturo Illia en su momento: los radicales también aspiraron a dominar el precio de la carne y de los productos y bienes esenciales de la canasta familiar (Ley de Abastecimiento) a la vez que los sindicatos seguían el carril de las negociaciones paritarias.

¹¹² El Plan de Ferrer tenía un talón de Aquiles que sería decisivo. A la inversa que Juan Perón en 1945, el actual gobierno carecía del margen de demagogia necesaria para una conquista de la adhesión popular. Más bien, la economía de 1971 se asemejaba a la de 1952: si entonces Alfredo Gómez Morales y Antonio Cafiero consiguieron estabilizar el peso, controlar la inflación e incrementar el ahorro y la inversión sin pérdidas políticas, fue gracias a la confianza de las mayorías afianzadas durante la primera presidencia de Perón. Ahora, volvía a sonar el nombre de Gómez Morales, pero la situación política del país era muy otra.

¹¹³ *La Voz del Interior*, 14 de marzo de 1971, p. 26. *Panorama* N° 206, 6 de abril de 1971, p. 13

¹¹⁴ El discurso del gobernador Uriburu en Leones no sería su único paso en falso. Irritado por la convergencia de las críticas, el delegado de Levingston intentó un recurso que los Jefes militares rechazaron: Uriburu planteó ante el segundo de López Aufranc –el general de brigada Orfila- la movilización de los agentes provinciales. Lo cierto es que el “no” de Orfila, nadie lo dudaba. Los militares de la guarnición Córdoba –aunque no lo proclamaban a los cuatro vientos- se negaron a prestar apoyo a un gobernador cuestionado desde los frentes más antagónicos: pero quien –finalmente- había decidido la no intervención del Ejército fue López Aufranc. La jornada del 12 de marzo había arrojado la muerte –a manos policiales- de un joven de 19 años, Adolfo Cepeda, obrero de una fábrica de postes de cemento. Ángel Rosa Gómez –otro obrero fabril- tuvo más suerte, la bala le laceró una pierna y lo salvó la rápida intervención de un médico que lo asistió. *Primera Plana* N° 424, 16 de marzo de 1971, p. 12.

¹¹⁵ El otro foco de violencia epilogaba con la represión en Ferreyra. La batalla con la policía local recién cedió por la noche: el fuego había devorado unos cuantos autos, dos camiones, parte de un tren y el desastre seguía con las barricadas en la Ruta Nacional 9. *Ibidem*

¹¹⁶ Luego del sacrificio y en la noche del viernes 12 de marzo, la conducción gremial cordobesa dispuso prolongar el paro hasta las 14 horas del sábado y convocar a plenario. La situación presentaba dos actitudes; por un lado un ámbito pacífico, cerca de 200 establecimientos fueron ocupados por los obreros sin represión; en esta tarea no hubo deserciones: SMATA, UTA, UOM, L y F y ATE, cumplieron la consigna y exhibieron como trofeo tres Ministerios provinciales y varias reparticiones (Rentas, Arquitectura y Vialidad). El episodio más resonante fue la toma de los diarios entre los que se encontraba el Boletín Oficial. *Ibidem*.

¹¹⁷ Balvé B y Balvé B; *Lucha en las calles; lucha de clases, Córdoba (1969-1971)*, Buenos Aires, La Rosa Blindada, 1973, p. 62.

¹¹⁸ Después de los discursos de Masera y Díaz – Secretario General de SITRAM- y al correr la voz de la ocupación de Villa Revol por parte de Tosco, estallaron las discusiones y debates acerca

de qué pasos dar después. Un contingente dirigido por los trabajadores del SMATA y L y F marchó hacia Villa Rivol para apoyar a Tosco. Otros sindicatos dejaron la plaza para ocupar los barrios cercanos –como Alberdi y Clínicas- centros de protesta durante el Cordobazo.

¹¹⁹ Los ataques a las empresas se difundieron y hacia la media tarde el Banco de Galicia, el Banco del Interior, el Jockey Club y una gran cantidad de supermercados, estaban en llamas. Unas cien empresas serían incendiadas ese día.

¹²⁰ *Clarín*, 13 de marzo de 1971. *La Voz del Interior*, 17 de marzo de 1971.

¹²¹ La Junta de Comandantes en Jefe se reunió el 15 de marzo bajo la presidencia –asumida el 2 de marzo en reemplazo del almirante Gnavi- del general Lanusse y con la presencia del brigadier Ezequiel Martínez, el recién instalado Jefe del Estado Mayor Conjunto, actuando como secretario, decidió tomar iniciativas en el área del Poder Ejecutivo. La Junta dio directivas al brigadier Martínez de reunirse con representantes de la CGT para ver si se podía encontrar una solución a las estancadas negociaciones de contratos de trabajo (paritarias). Al mismo tiempo, la Junta pidió al Ministerio del Interior un informe del estado de los estudios relacionados con el plan político, como para permitir a las Fuerzas Armadas colaborar en el proceso de su preparación y ejecución. En los días siguientes el brigadier Martínez tuvo prolongadas entrevistas con el asesor legal de la CGT – Antonio Cafiero- y con varios de sus líderes clave. Por su parte, el Ministerio del Interior invitó a cada fuerza militar a nombrar a su representante para un comité de coordinación para el estudio y redacción del plan político. Ver; Potasch, Robert; ob.cit; *“El Ejército y....”* p. 228.

¹²² El mismo 18 de marzo, a las 21 horas, Lanusse llamó a su despacho al general Mourglie para informarle: 1) que el brigadier Martínez había tomado contacto con los dirigentes gremiales por encargo de la Junta de Comandantes; 2) que su objetivo era el de interiorizarse de los obstáculos que se oponían al buen éxito de las comisiones paritarias. Lanusse le requirió a Mourglie que le agendará una entrevista con el Presidente para el otro día, 19 de marzo, a la que concurriría con el Jefe del Estado Mayor Conjunto, brigadier Ezequiel Martínez. Ver; Lanusse, Alejandro; ob.cit.; *“Mi...”* p. 202.

¹²³ El asunto del relevo de Ezequiel Martínez (Jefe del Estado Mayor Conjunto) por parte de Levingston, no fue tan sencillo ni se produjo por su trato con los gremios que –por otra parte- había sido ordenado por la Junta. El 18 de marzo, Martínez había estado en Olivos, acompañado por dos aeronáuticos. Imprevistamente recibió –de boca de Levingston- una información que lo asombró: el Presidente le comentó que Lanusse quería derrocarlo y que el nuevo Presidente sería Alcides López Aufranc. Martínez trató de convencer a Levingston que ese supuesto era una barbaridad y; muy preocupado, le habría comentado su inquietud al propio Lanusse: fue esta actitud la que, realmente, motivó el castigo. Primera Plana N° 426, 30 de marzo de 1971, p. 10.

¹²⁴ Poco antes Gnavi se había reunido con el Presidente y, en la reunión de la Junta, le comentó a Lanusse que había encontrado a Levingston sumamente nervioso, tensionado y con inestabilidad emocional. Comentó que el Presidente le había manifestado su desacuerdo por la acción de la Junta frente a los acontecimientos cordobeses y por los contactos entre el brigadier Martínez y los dirigentes sindicales. Gnavi le hizo saber al Presidente que, las actividades del Jefe de Estado Mayor Conjunto habían sido órdenes de la Junta de Comandantes en Jefe en su carácter de responsable última del Estado. *Ibidem*.

¹²⁵ Antes de acudir a la reunión con el Presidente, la junta de Comandantes en Jefe se reunió y Lanusse expuso la necesidad de establecer normas que definieran con mayor precisión las relaciones entre la Junta de Comandantes en Jefe y el Poder Ejecutivo Nacional. Después de considerar el estudio realizado por el Estado Mayor General del Ejército y los trabajos similares de las otras fuerzas, se coincidió en la necesidad de definir el alcance de la modificación introducida al Estatuto de la Revolución Argentina, por la Ley 18.713, sancionada por la Junta antes de la

designación de Levingston. Se dio por finalizada la reunión adoptándose las medidas a proponer al Presidente: a) la firma de un acta-convenio que regulara la participación de la Junta en su función legisladora; b) la difusión de un comunicado conjunto que ratifique la existencia de una total identidad de criterios para continuar con el proceso revolucionario y que adelantara –públicamente- el propósito de perfeccionar lo dispuesto en el Estatuto de la Revolución Argentina y en la ley 18.713.

¹²⁶ El mismo 22 de marzo Levingston, por la cadena nacional de radiodifusión emitió un comunicado explicando la medida del relevo de Lanusse: *“la causa que motivó el relevo del teniente general Alejandro Agustín Lanusse, es la de no haber extremado las medidas para que se cumpliera una orden que asignaba a las Fuerzas Armadas responsabilidades en el mantenimiento del orden y la seguridad de la República, cuestión que el teniente general ha reconocido”*. *Polémica 1962-1972: los hechos, los hombres; enero-junio 1971, N° 14*, Buenos Aires, CEAL, 1972.

¹²⁷ El toque dramático lo dio la situación del arresto de Lanusse –ordenado por el Presidente- y su traslado a la Casa Militar de Presidencia, al mando del general de brigada Héctor Rivera. Enterado de la situación, el coronel Osvaldo Ortiz –ya alertado por el Cáceres Monié- Jefe del Regimiento 1 de Patricios (en el barrio de Palermo) quien tenía a su cargo la custodia y seguridad del Comandante en Jefe, se comunicó telefónicamente con Rivera para advertirle: *“Si en cinco minutos no se libera a Lanusse, arraso la Casa de Gobierno”*. Rivera –que conocía el resultado de la pulseada de antemano- le respondió: *“no hace falta Ortiz, yo también respondo a Lanusse”*. *Primera Plana N° 426*, 30 de marzo de 1971, p. 11.

¹²⁸ Poco más tarde de las 23 horas, Cáceres Monié se puso en comunicación telefónica con Lanusse, que se encontraba en la Residencia del Comandante en Jefe del Ejército en Campo de Mayo. Le informó que había hablado con todos los generales de división, así como con los Comandantes en Jefe de la Armada y la Aeronáutica y le pidió que se trasladara cuanto antes a la sede del Comando en Jefe para reasumir el cargo, aclarándole que en la pista de la Guarnición Campo de Mayo estaba alistado un helicóptero para trasladarlo. Para tranquilizar a Lanusse, Cáceres Monié agregó: *“Mi general el Ejército es una sola fuerza bajo su mando”*. Lanusse, Alejandro; *ob.cit.*; *“Mi testimonio”* p. 208 y 209.

Cáceres Monié había tenido una conversación telefónica con el almirante Gnavi para preguntarle si el relevo de Lanusse había sido avalado por él y por el brigadier Rey. Grande fue la sorpresa y el fastidio de Cáceres Monié cuando Gnavi le dijo que, ni él ni Rey habían firmado el decreto correspondiente y que, por lo tanto, la medida de Levingston no tenía efecto, era nula. El Presidente había engañado a Cáceres Monié. Llamó entonces a Levingston y le hizo conocer –en una dura conversación- la nulidad de la medida y su decisión de reintegrar a Lanusse en su cargo. La derrota de Levingston estaba sellada. *Ibídem*.

¹²⁹ A las 21.30 horas, López Aufranc (Comandante del III Cuerpo de Ejército con asiento en Córdoba) difundía el comunicado N° 25 en el que decía que no reconocía otra autoridad que la de Lanusse. Al mismo tiempo el general Juan Carlos Sánchez (Comandante del II Cuerpo de Ejército con asiento en Rosario) hizo lo propio y el general de división Manuel Ángel Ceretti (Comandante del V Cuerpo de Ejército con asiento en Bahía Blanca) y consuegro de Levingston, también reconocía en Lanusse a su Jefe.

¹³⁰ Las nuevas autoridades (Lanusse, Gnavi y Rey) ratificaron en sus cargos a todos los ministros, con excepción de los titulares de Bienestar Social, Amadeo Frúgoli; y el Ministro del Interior, Cerdón Aguirre. También fue relevado el Secretario de Trabajo, Juan Alejandro Luco, que fue reemplazado por el indestructible Rubéns San Sebastián. Arturo Mor Roig, ex presidente de la Cámara de Diputados durante el gobierno de Arturo Illia, aceptó el cargo de Ministro del Interior.

¹³¹ La Comisión de Honor formada el 1° de abril fue constituida por: brigadier Carlos Armani, vicealmirante Vicente Baroja y el teniente general Julio Alsogaray. El Tribunal de Honor que juzgó la conducta de Levingston, lo absolvió de culpa y cargo el 14 de mayo de 1971. *Polémica 1961-*

1972, *los hechos y los hombres* N° 19. *El derrocamiento de Levingston*, Buenos Aires, CEAL, 1972.

¹³² El comunicado completo de la Junta de Comandantes en Jefe del 23 de marzo de 1971, puede verse en, *Ibidem* p. 245. En el mismo cuerpo puede leerse el comunicado de Onganía negándole a Lanusse el derecho a usar el término *Revolución Argentina* para su gobierno. p. 246.

Apuntes y comentarios: una mirada de conjunto.

- Cuando se produjo el derrocamiento del gobierno constitucional de Arturo Illia, conformado por una conspiración cívico militar que se expresó en un levantamiento del Ejército, –acompañado pasivamente por la Armada y la Fuerza Aérea- la última fase de una democracia limitada basada en la prohibición –de diferentes formas- de la participación electoral del partido peronista en las elecciones, llegaba a su fin. Los dirigentes de los partidos políticos tradicionales, líderes sindicales peronistas, la propia CGT, organizaciones empresarias como la CGE y de la sociedad civil y medios periodísticos, impulsaban una aventura política de características muy diferentes a cualquiera de las experimentadas a partir del derrocamiento de Juan Perón. Solo algunos dirigentes del propio radicalismo como Ricardo Balbín, Facundo Suárez (Ministro de Defensa) o el propio Secretario de Guerra –general Eduardo Castro Sánchez, decidido sostenedor del gobierno constitucional- advirtieron al país sobre las consecuencias de semejante aventura. La dictadura aparecía - otra vez- como una alternativa deseable y viable entre los grupos de interés y organizaciones de la sociedad civil que cifraban amplias expectativas en un gobierno militar de larga duración sin las interferencias de instituciones representativas y partidos políticos ni participación de sus viejos dirigentes, para intentar resolver –de una manera nueva y fundacional- los conflictos políticos y sociales que agitaban la Argentina y paralizaban –según la percepción general- su potencial desde hacía más de treinta años. Los medios periodísticos escritos más relevantes de la época, concentrados en cuatro revistas semanales de opinión (Confirmado, Extra, Panorama y Primera Plana) y con la prensa diaria en otros cuatro periódicos (Crónica, La Razón, La Nación y Clarín) no solo representaron a los grupos de interés comprometidos en la ruptura constitucional, sino que, también, reflejaron el clima de época, propulsado por una opinión pública expresada en la voluntad manifiesta de la sociedad civil. El *consenso destituyente* fue conformado por la convergencia de esas dos voluntades –los grupos de interés y la sociedad civil- que, a un tiempo consensuaron el fin del debilitado gobierno de Arturo Illia.

Así que, aquella hipótesis acerca de que la sociedad civil y la población en general se mantuvo indiferente y abúlica frente a los sucesos, no es correcta: más bien, la participaron activa de la sociedad civil y sus organizaciones en la conformación de una coalición activa de carácter destituyente, resultó determinante y lo suficientemente importante, como para convertirse en una expresión mayoritaria¹. Al menos una vez más –en la Argentina del futuro

próximo- se reeditaría este tipo de alianza cívico-militar con carácter de derrocamiento de estilo clásico: fue el 24 de marzo de 1976 cuando propiciaron el derrocamiento del gobierno constitucional de María Estela Martínez de Perón, apenas cuatro meses antes de las elecciones legislativas de medio término. Dos veces más, en la Argentina póstuma, se daría este tipo de singular consenso entre las organizaciones de la sociedad civil y los grupos de interés, solo que ahora bajo una forma novedosa y solapada. Conformarían algo así como una *destitución con formato constitucional* que, en el caso del Presidente Raúl Alfonsín se disfrazó de *golpe de mercado*, obligándolo a abandonar la presidencia en forma anticipada y con Fernando de la Rúa en una revuelta que, a modo de pueblada, fue fogoneada por la propia oposición con la colaboración del aparato político peronista. En estos últimos dos casos, novedosos pero no menos peligrosos, no encontramos la presencia de la institución militar, ya suficientemente desarticulada y disciplinada en su capacidad operativa y sin intereses políticos corporativos manifiestos. Como un pasado admonitorio en clave de presente, vemos como la sociedad civil a través de sus organizaciones, casi siempre en alianza con organismos corporativos – movimiento obrero organizado, organizaciones empresarias y grupos de interés coyunturales- sigue siendo hoy - más aún frente en las nuevas modalidades destituyentes- un actor principal de este tipo de acontecimientos lesivos al orden constitucional. Existe el peligro de que estas nuevas coaliciones –travestidas bajo la forma de *destitución con formato constitucional*- pretendan reemplazar un *referéndum revocatorio* no contenido en ella y aparecer como un mecanismo de cambio incorporado y naturalizado a la cultura política contemporánea.

- La idea -popularizada- de que el general Onganía fue elegido por una decisión exclusiva de las Fuerzas Armadas para la conducción del Estado no es correcta. Onganía había surgido –por aquel entonces- como una figura unificadora y líder indiscutido del Ejército, pero, este general, terminaría convirtiéndose más tarde –hacia 1965- en un punto de confluencia de grupos de interés y, también, de buena parte de la opinión pública, es decir, de la sociedad civil² en contraposición a la figura del entonces Presidente Illia, que cada vez se desgastaba más, se iba agrandando la suya (ver nota 1 in fine), porque había logrado sacar al Ejército del creciente desorden en el que se había sumido durante las presidencias de Guido y de Frondizi –la lucha entre azules y colorados concluida con el éxito azul en 1962- logrando reencauzar el Arma y restableciendo el orden. El nuevo líder interpretó a la fuerza compuesta por el país no partidario y, su conducción fue vista como la posibilidad de un futuro diferente ante un presente dominado por los partidos políticos tradicionales: su principal propósito parecía ser la superación de la antinomia

peronismo-antiperonismo y la cooptación –dentro del Estado- de las elites sindicales: era, para la época, una especie de De Gaulle argentino. Así que, las organizaciones de la sociedad civil y la población en general, tuvieron tanta responsabilidad como los cuadros militares en su elección. A poco de iniciar su gestión las limitaciones y defectos de este general, se pusieron de relieve y contrastaron con la idea mítica que la prensa y la opinión pública había construido sobre su persona. El fracaso del proyecto de la Revolución Argentina, se debió, en buena parte a su incorregible terquedad, su falta de formación política y su propensión a pretender solucionar los problemas complejos de la realidad con el simple uso de la fuerza.

- El programa de estabilización puesto en marcha por Krieger en 1967 - con el objetivo de reducir la inflación, recomponer los precios relativos, generar la expansión de la economía y reflejar las nuevas condiciones del poder económico y político- se inició bajo condiciones más favorables para su implementación que otros planes posteriores: el nivel de amenaza política era menor y la crisis económica y la inflación no habían alcanzado las proporciones a que llegaría –más tarde- en la Argentina; por ejemplo, en el momento de aplicación del plan de estabilización implementado diez años después por Alfredo Martínez de Hoz. Los presupuestos sobre el que el programa de Krieger se planificó fue asumir que el principal impulso de la inflación venía por el lado de los costos y de las expectativas de los agentes económicos y no del lado de la demanda. Esto permitió que –contra todas las prescripciones ortodoxas- se permitiera llevar a cabo una política expansiva; al tiempo que la ortodoxia sí se hizo notar en la inclusión del típico imperativo de reducción del déficit fiscal, el congelamiento cambiario, la apertura al capital extranjero y la reforma financiera. La renta diferencial pampeana producida por la devaluación de la moneda local – apropiada por el Estado bajo la novedosa forma de retenciones a la exportación de granos- permitió, por un lado, achicar sustancialmente el déficit fiscal y, por el otro, llevar adelante un fuerte programa de inversión en obras públicas. Lo cual permitió que apareciera, por medio de esas inversiones, el impulso dinamizador del que carecieron planes posteriores (Martínez de Hoz). La consecuencia fue que –ya en 1968- se había reducido fuertemente la inflación, se había recuperado el crecimiento global de la economía y, aunque el proceso no dejaba de reproducir conocidas características de sesgo en la distribución del ingreso – aunque de una manera muy atenuada- así como de concentración e internacionalización del capital; lo cierto es, que los éxitos logrados fueron bastante más allá de una mejoría en la balanza de pagos (referimos a capítulo 5, puntos 5.2 y 5.3 y al anexo de infografías y grupo de cuadros 3 y 4). A juzgar por los indicadores económicos disponibles, el impacto de la estrategia puesta en práctica sobre la economía a

corto plazo fue claramente favorable: a) el nivel real de actividad económica se incrementó en forma perceptible entre 1967 y 1971; b) parece haberse confirmado la hipótesis de la autoridad económica según la cual la existencia de inflación interna, junto a las políticas de tipo de cambio fijo, impedían al país utilizar plenamente los recursos productivos existentes³; c) la tasa de inflación disminuyó en forma sensible durante el período 1968 a 1970. Desde el punto de vista coyuntural, la estrategia ensayada fue exitosa. En lo que hace al largo plazo, comencemos por recordar que –como dijimos– la estrategia estaba básicamente pensada para eliminar la inflación en un período de alrededor de un año. En estos términos fue posible aceptar el congelamiento de la estructura de precios y salarios. En la realidad, sin embargo, la estrategia implicó, no solo el proceso de implementación del plan sino también el período de consolidación de la estabilidad. Esto significó una prolongación del período durante el cual la estructura de los precios y la de los salarios iba a permanecer congelada. No solamente se congeló la estructura de precios y salarios durante un período mayor al previsto, sino que además, la autoridad económica tendió a una política que trataba, en lo posible, de no modificar la estructura de precios⁴. En este sentido, el único paso tímido en la dirección correcta fue cuando –a principios de 1969– se permitió, a nivel de firmas, que se variaran los precios de los productos individuales con la condición de que su promedio ponderado a los sumo quedara constante; en otras palabras: estabilidad de precios implica movimiento en los precios relativos de los bienes, pero manteniendo el promedio de los precios absolutos. En este sentido, parece claro que, si una rigidez casi completa de la estructura de precios es el “precio” de la estabilidad, sus beneficios tienden a desaparecer en el largo plazo. Algo similar sucede con la estructura de ingresos. A este respecto es interesante el mecanismo de aumento del 20% otorgado a algunos empleados públicos (el 4 de marzo de 1969) como un primer paso para modificar deliberadamente –por medios distintos de la inflación– la distribución del ingreso a favor del trabajo. Además, la variación en la tasa de interés en términos reales, que se mantuvo elevada desde principios de 1968, agregaba una dificultad adicional, porque estaba implicando una redistribución permanente en los ingresos: una situación muy difícil de sostener en el largo plazo. Lo cierto es que los efectos del plan en las variables económicas de largo plazo, no han podido ser correctamente evaluados porque solo tuvo vigencia por tres años, pero sí tuvo un correcto desempeño de corto plazo. Pero, ciertamente, el plan económico implementado por Krieger fue un programa concreto y coherente de estabilización y desarrollo y –en definitiva– el único a tener en cuenta durante el período 1966-1971.

- Otro tema a considerar es la idea –muy generalizada- acerca de que el plan de Krieger fue el responsable de los sucesos de mayo de 1969: la idea –en nuestra opinión- no es del todo correcta. En un esquema de ganadores y perdedores del programa, hay que decir que los sectores de ingresos medios - que comprendían generalmente a técnicos altamente capacitados, burócratas gubernamentales o trabajadores de cuello blanco, que se encontraban en un estrato de ingresos entre el trabajador mal pago y el propietario de capital acomodado, como una definición muy general, no fueron ganadores netos del sistema, ya que durante el período 1967-1968 el salario medio de esas ocupaciones disminuyó y, posiblemente esta caída haya contribuido, solo en parte, al descontento: para la mayoría de estos trabajadores de ingresos medios el período Krieger representó una pérdida si se lo compara con el último año del gobierno civil; aunque, para 1970 los indicadores mejoran para algunos sectores debido a los aumentos concedidos bajo el esquema más populista de Levingston. En cambio, los sectores económicos donde los beneficios derivados de la inversión de capital y la propiedad de empresas son relativamente altos, se generó una tasa de ganancia mayor que en los sectores de ingresos medios⁵. En los sectores manufactureros, donde la mayoría de las empresas eran pequeñas y medianas, pero con un margen de ganancias relativamente alto, las variaciones de ingreso experimentaron –entre 1966 y 1968- una caída en muchos sentidos similar a lo sucedido en los sectores de ingresos medios (en ese período la caída de ingresos en ambos sectores fue de alrededor del 10%)⁶. En sectores como finanzas, transporte, construcción, comunicaciones y abastecimiento, donde los ingresos son relativamente altos para los propietarios de empresas, las ganancias logradas fueron más importantes: estos sectores parecieron haber logrado beneficios más sustanciales durante el programa de Krieger. En definitiva, los sectores de ingresos tanto medios como altos experimentaron altibajos en sus ingresos durante todo el período militar y –cuando se comparan con los mejores años del gobierno civil, especialmente el de Illia- perdieron algún terreno en términos de ingresos, mientras que los sectores de ingresos altos se beneficiaron más.

Pero la aparición del discurso contestatario y del sindicalismo clasista y combativo, - con epicentro en Córdoba y Rosario- parece haberse debido menos a causas económicas que a la represión social y política sostenida desde el PEN, agravada por la falta de organismos de negociación que, actuando como moderadores, pudieran gestionar las tensiones de la problemática subyacente en las relaciones entre el gobierno y la ciudadanía (ver punto 5.9.4. del Cap. 5).

- El derrocamiento de Onganía contó con un apoyo tanto o más amplio que el que rodeó el golpe de 1966⁷. La desorientación de la Junta en aquel momento era tal, que los Comandantes no tenían ni idea de cómo continuar. Así que cuando nos preguntamos: ¿Por qué Levingston? Nuestra respuesta es bastante sencilla: la Junta no había acordado nunca un plan alternativo a Onganía y, en realidad, a ninguno de los comandantes le interesaba –en ese momento- ejercer la presidencia por la doble razón de preservar tanto a su fuerza como a su persona para una oportunidad más propicia. Buscaron y encontraron entonces a un militar desconocido para el público en general, de prestigio en su fuerza, con reputación de intelectual erróneamente sugerida por su participación en la comunidad de inteligencia, que estaba recién llegado al grado de general de brigada, que nunca había tenido a su comando unidades militares importantes y además se encontraba alejado del país desde hacía años, es decir, sin responsabilidad funcional sobre los sucesos. El hecho de ser un desconocido para la opinión pública y ser considerado por sus propios camaradas una incógnita fue, precisamente, la razón de su designación en la presidencia. Fue para la Junta una jugada de riesgo: desconocían si cumpliría con las condiciones para el papel de mandatario que la Junta le había asignado, si tenía o no alguna idea personal sobre la política y si tendría algún plan para desarrollar: como se ve los riesgos tomados fueron altos y el resultado de la apuesta previsible. Efectivamente, Levingston no cumplió ninguna de las expectativas de la Junta, el giro nacional desarrollista de su política económica estuvo más lleno de desventuras que de aciertos y –para entonces- el crecimiento del liderazgo de Lanusse, tanto en lo militar como en lo político, resultaba incontenible. Tanto, que el golpe que lo depuso instaló –inmediatamente- a Lanusse en la presidencia como figura dominante, casi caudillesca, en el gobierno nacional y, con él, el pleno restablecimiento de las instituciones democráticas con el inicio de la salida electoral que daba por terminado al experimento político, social y económico de la Revolución Argentina.

NOTAS A LOS COMENTARIOS

¹ En un sondeo de opinión pública realizado en marzo de 1966 por la Secretaría de Informaciones del Estado (SIDE) que contenía la *Encuesta de Opinión Pública N° 1/1966* (realizada el 19 de marzo de 1966) resultó muy reveladora del ánimo colectivo y la conformación del consenso mencionado cuatro meses antes del golpe de Estado. La encuesta nos revela percepciones de índole socio-política y expectativas socio-económicas, que nos permiten inferir, en esa precisa circunstancia, que la antinomia peronismo-antiperonismo había conservado el potencial de referencialidad de Perón, e incorporado a Onganía como el nuevo líder militar, que los medios de comunicación escritos ponderaban como el político extra partidario capaz de presentarse como una síntesis superadora de la antinomia y, aunque vigente el liderazgo de Perón, intentara empañar y superar ese liderazgo.

² La encuesta confirmaba el prestigio asignado a Onganía al convertirse en la nueva figura de autoridad capaz de superar el desorden social, el vacío de autoridad, la quiebra de las jerarquías y, un punto clave: la antinomia peronismo-antiperonismo. Ver; Taroncher, Miguel Ángel; *El proceso de inestabilidad político institucional en Argentina: el golpe de Estado de 1966 y algunos aspectos de la opinión pública*. Ciclo de conferencias *Estado e sociedade civil. Ditaduras no América Latina do século XX*, organizada por el programa de Pós-Graduação em História da PUCRS, 28 de octubre del 2011.

³ La desaceleración de la tasa de inflación hacia fines de 1967, a pesar de los resultados relativamente pobres en el intento de aumentar el nivel real de actividad económica del sector privado, sugiere –con bastante claridad- que en la Argentina de ese período, la inflación era básicamente de costos. Esta conclusión es importante para considerar el grado de utilización de la capacidad instalada en la economía. Era posible pensar que –en el pasado- la actividad económica se había desvenuelto en niveles inferiores a los permitidos por las cantidades existentes de factores productivos –trabajo y capital- debido a dos causas principales, no totalmente independientes entre sí: a) la combinación de incrementos autónomos –es decir incrementos independientes de los niveles de empleo, beneficios reales o variables similares- y una política monetaria restrictiva (en relación con los aumentos y devaluaciones) y; b) el uso de un tipo de cambio fijo frente a una tasa significativa de inflación interna con las consiguientes devaluaciones. Esto implicaba la formación de un ciclo económico muy típico, que incluía una devaluación, lo cual daba lugar a un aumento en los salarios nominales con una expansión relativamente pobre de la oferta monetaria para no provocar un aumento en los precios y/o problemas en la balanza de pagos. Cuando con posterioridad se generaba la expansión –dada la política de cambio fijo- los problemas en la balanza de pagos aparecían a un nivel de actividad económica que era inferior al máximo posible, en función a la dotación existente de capital y trabajo. Aunque hay que tener en cuenta que la mayor parte del incremento de las reservas operado en el segundo trimestre de 1967 se realizó bajo la forma de ingresos de capital externo de costo pazo (hot money) de modo que el nivel de reservas internacionales debía cuidarse a fin de prevenir una demanda de divisas de tipo especulativo que dependía de la tasa internacional. Pero, a principios de 1968, ambos factores (a) y (b), habían dejado de operar como restricciones. A fines de 1967, el país se encontraba, por una parte, con la existencia de algún grado de capacidad instalada ociosa, un cierto desempleo de mano de obra y un nivel significativo de divisas. En principio, por un lado, no se presentaban los impedimentos clásicos para aumentar el nivel de actividad. Pero, por otro lado, el sector privado observaba un comportamiento conservador y con perspectivas de depresión. La idea era simple: sin inflación de costos, solo faltaba impulsar el crecimiento, eliminar el déficit fiscal y consolidar la estabilidad, lo cual, dentro de las restricciones de política económica, solamente se podía conseguir en el marco de una expansión económica que ahora parecía posible (el papel del crecimiento para cerrar el déficit fiscal viene dado por los ingresos tributarios, que dependen del

nivel de actividad. La consolidación de la estabilidad se refería a un mayor reparto de los gastos fijos de las empresas). Pero, a pesar de las intenciones de reactivación y el paquete de medidas que la incentivaba, la realidad era que –durante 1967- el sector privado estaba estancado; el problema era –entonces- encontrar como impulsar el crecimiento. La idea fue, entonces, que ese papel lo asumiera el sector público, principalmente a través de la obra pública: esta es la justificación del fantástico aumento en la inversión pública real planeada para 1968 y realizada por un gobierno que había puesto tanto énfasis en la estabilidad de precios. Una interpretación alternativa podría ser que la política fiscal fue expansiva en forma independiente del programa antiinflacionario. En este sentido, podría decirse que la política fiscal estaba basada en propósitos anticíclicos y se hubiera dado de todos modos, aun comprometiendo –dentro de una estrategia pautada- el programa antiinflacionario.

⁴ Recuérdese, por ejemplo, que se alteraba el precio de la nafta (porque, presumiblemente, los camiones no utilizaban ese combustible) pero se dejaba constante el precio del gasoil.

⁵ En la argentina, la hipótesis de que los regímenes militares funcionaban como protectores armados de los intereses de la clase media –de manera conservadora y reaccionaria, contra los avances de la clase trabajadora- era particularmente relevante debido a la particular estructura socio-económica del país, donde predominan los sectores de ingresos medios. Las manufacturas, el comercio y los servicios –sectores que habitualmente indican la magnitud de los estratos medios- explicaban, por aquel entonces- cerca del 60% del PBI y aproximadamente el mismo porcentaje de la fuerza laboralmente activa.

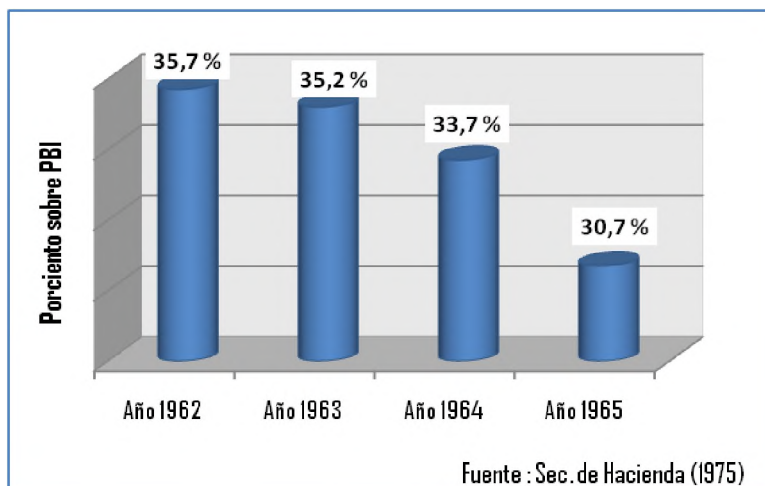
⁶ Ver: Guerchunoff, Pablo y Llach, Juan; *Capitalismo industrial, desarrollo asociado y distribución del ingreso entre los dos gobiernos peronistas, 1950-1972*. Desarrollo Económico N° 57, 1975, p. 20.

⁷ Así lo hicieron saber las declaraciones de la Junta de Comandantes en Jefe (La Nación, 10 de junio de 1970) en las que se daba cuenta de las razones del golpe. Luego de pasar revista a los logros modernizantes del gobierno de Onganía el comunicado señalaba *“la ausencia de ideas claras acerca de la culminación del proceso de institucionalización del país en un plazo razonable comprobándose, al mismo tiempo, la reiteración de tensiones sociales y una evidente sensación de inseguridad pública”*. Al mismo tiempo el comunicado empleaba un lenguaje muy conocido al decir *“La necesidad de procurar un justo equilibrio entre las aspiraciones de los sectores empresarios, profesional y laboral en orden al interés general”*. Era, además, ambiguo respecto de la política partidaria al postular el propósito de llegar a un **“.....sistema democrático y representativo, basado en la formación de partidos políticos verdaderamente responsables”**. (el resaltado en negrita es nuestro).

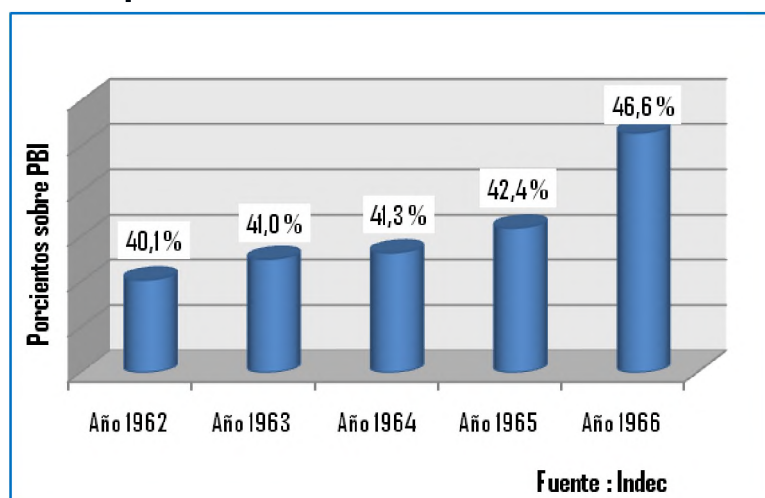
ANEXO 1 - CUADROS E INFOGRAFÍAS

Posición de las principales variables económicas al final de la Presidencia del Dr. Arturo Illia (1962/1966)

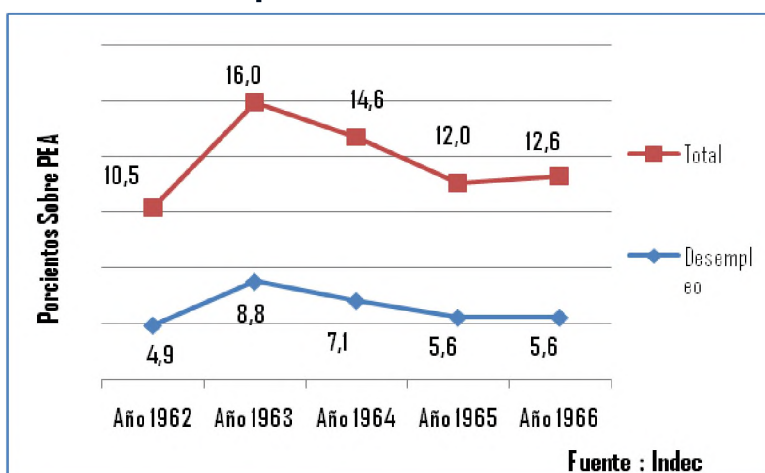
Gasto Público



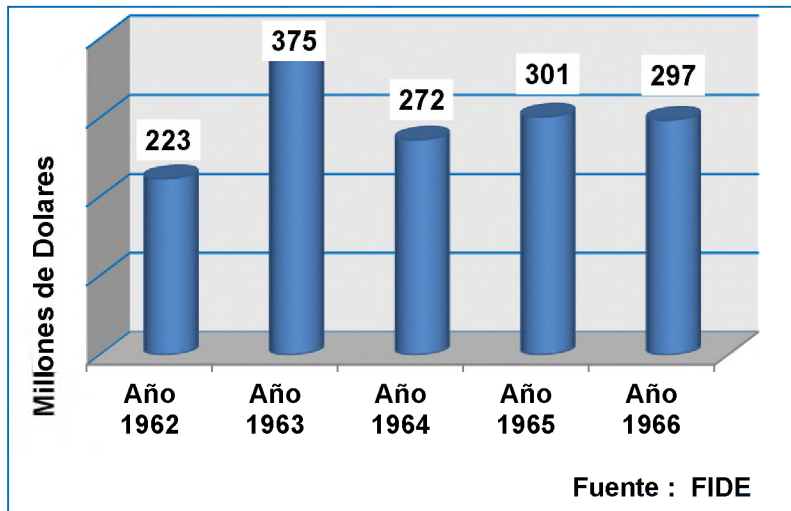
Participación del salario



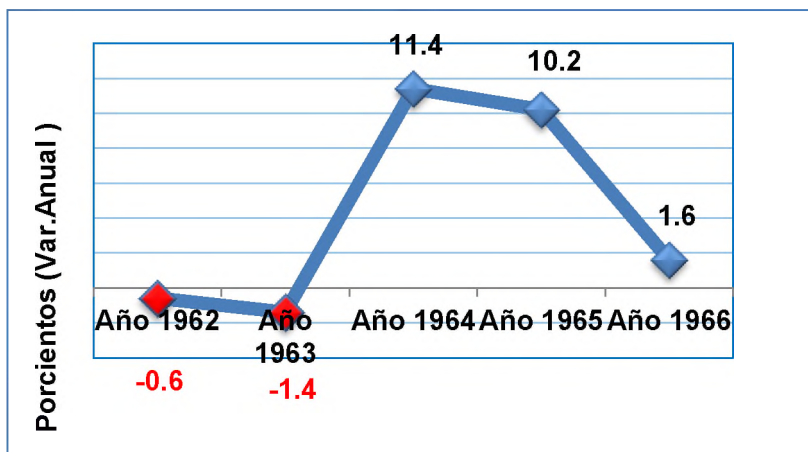
Situación ocupacional



Reservas de libre disponibilidad

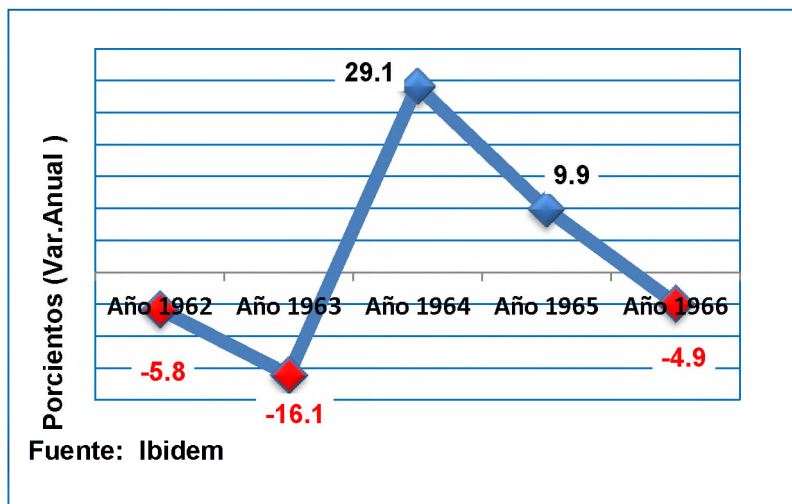


Producto Bruto Interno

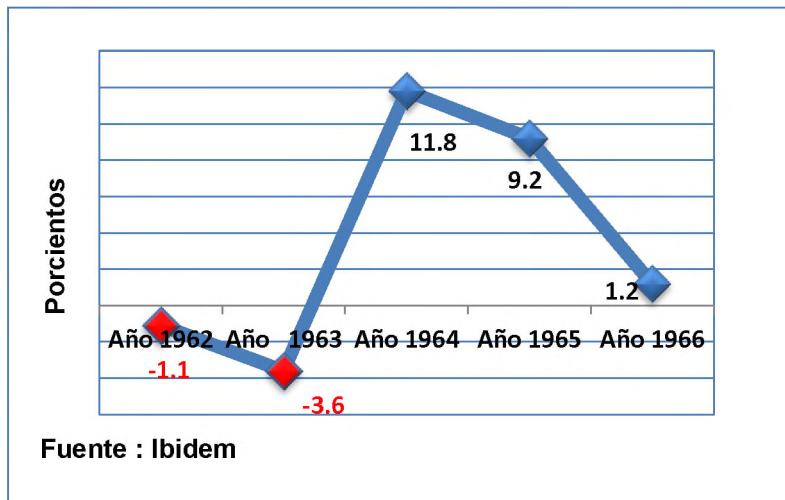


Fuentes: Elaboracion propia sobre datos de Revista Estudios Estudios Nro 39 año 1986. INDEC. Anuarios Estadisticos Orlando Ferreres Dos Siglos de Historia Económica Argentina.

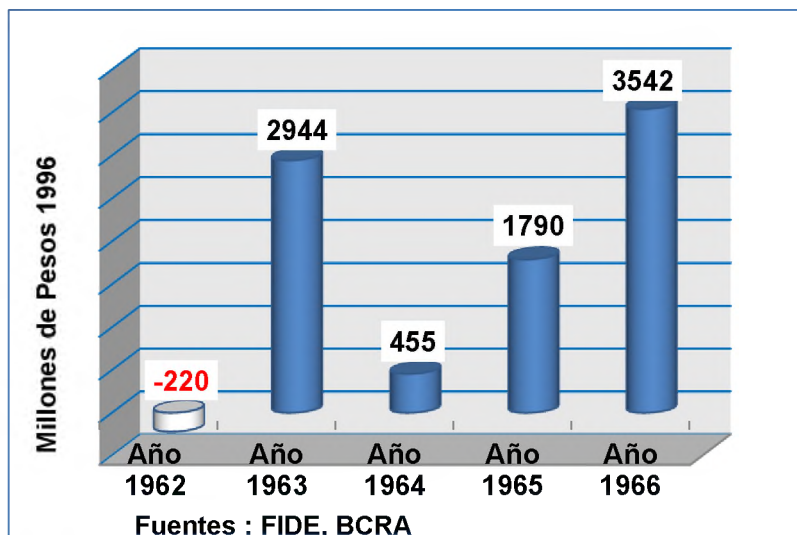
Inversión



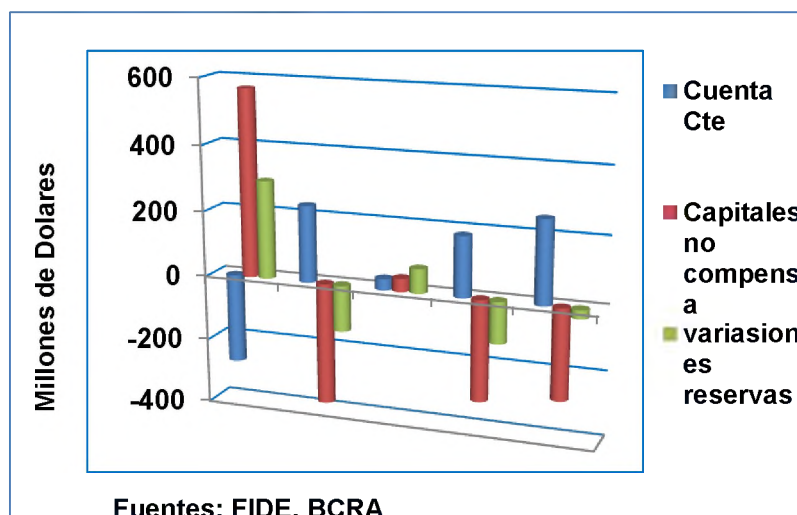
Demanda y Oferta Global



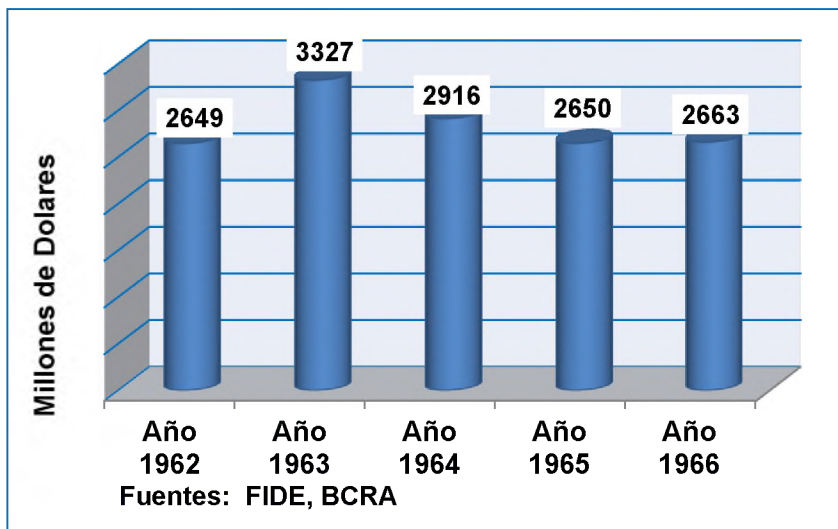
Balanza Comercial



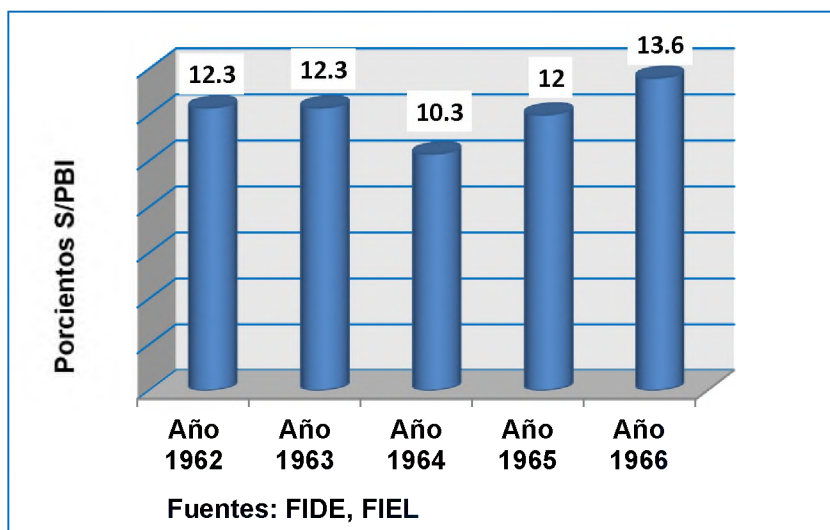
Balanza de Pagos



Deuda Externa



Presión tributaria



**POSICION DE LAS PRINCIPALES VARIABLES ECONOMICAS DURANTE LA VIGENCIA DEL
PLAN DE ESTABILIZACION DE KRIEGER VASENA**

Salarios promedios anuales en actividades económicas donde los salarios son altos y cuyos empleados son normalmente considerados "clase media" (1960-100)

Actividad / Años	1960	1963	1966	1968	1970	1972
Petróleo	100	132	181	162	171	148
Textil	100	97	129	116	123	125
Prod químicos	100	108	141	124	149	122
Máquinas y vehículos	100	118	162	149	159	153
Comunicación	100	103	122	99	119	137
Transporte Aéreo	100	90	112	98	126	141
Finanzas, seguros, bienes	100	125	133	128	135	132
Servicio de Gobierno	100	130	166	146	165	159
Impresión y publicación	100	107	133	133	144	154
Electricidad, agua, gas	100	131	135	140	160	168

Fuentes: Sistemas de cuentas del producto e ingreso de la Argentina, Buenos Aires, Banco Central de la República Argentina, 1975, cuadro nro. 52.

Balanza de pagos en millones de dólares estadounidenses.

	1966	1967	1968	1969	1970	1971
Cuenta Corriente	283	178	-45	-216	-155	-385
Balance Comercial	496	369	198	42	79	-128
Servicios	-213	-191	-243	-243	-258	-234
Cuenta Capital (Corto y largo plazo, privado y publico)	-210	243	175	106	390	-181
Pagos Internacionales (Movimiento de capital compensatorio)	23	414	159	-109	259	-562
Errores y omisiones	-50	-7	29	1	24	4

Fuentes: Indicadores de coyuntura, FIEL, N° de 1970 y 1976; e Informe económico, Ministerio de Economía, Buenos Aires, 1972.

Inversiones del gobierno nacional

Año	Inversión pública en trabajos de infraestructura física en millones de \$a de 1966	Inversión del gobierno general como porcentaje de la Inversión Bruta Interna %	Inversión de gobierno general como porcentaje del PBI %
1965	439,8	en.	n.d
1966	455,0	30,5	5,8
1967	1.177,9	35,2	7,1
1968	1.061,2	35,6	7,5
1969	1.307,7	36,6	8,0

Fuentes: Ministerio de Economía y Trabajo (o de Secretaria de Hacienda según periodos) informe económico, varios números y planillas. Secretaria de Hacienda de la Nación.

Nota: Datos relacionados por el índice de precios mayoristas no agropecuarios.

Algunos datos monetarios.

Año	Índice 1966:100 Medios de pago en valores constantes al fin de cada año.	Coefficiente de liquidez de a economía. %	Índice 1966:100 Crédito bancario en valores %
1965	92,3	25,0	95,0
1966	100,0	26,0	100,0
1967	114,6	28,0	109,3
1968	137,7	32,0	144,1
1969	142,4	30,0	166,4

Fuentes: Computado de BCRA, boletín estadístico; FIEL Indicadores de coyuntura. Ambos varios números.

Nota: Datos relacionados por el índice de precios mayoristas INDEC

Retenciones a las exportaciones

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Año	Ingresos por Retenciones	índice 1966-100 de (1)	Porcentaje de (1) sobre el total de ingresos nacional %	Ingresos por recargo a importaciones	índice 1966-100 de (3)
1966	72,0	100,0	2,5	576,0	100,0
1967	500,0	694,4	13,1	552,0	95,8
1968	372,0	516,7	10,1	487,0	84,5
1969	262,0	363,9	7,6	654,0	113,5

Fuentes: Ministerio de Hacienda, Informe económico, IV trimestre, Buenos Aires 1972.

Nota: Datos relacionados por el índice de precios mayoristas nacionales. INDEC

Balanza comercial de pagos, en millones de dólares estadounidenses corrientes.

Año	Créditos públicos al gobierno Nacional y BCRA	Exportaciones	Importaciones	Saldo de la Balanza Comercial	% de las reservas externas netas del BCRA al fin de cada año
1964	74,0	1.410,5	1.077,4	331,1	25%
1965	44,0	1.488,0	1.195,0	293,0	25%
1966	129,0	1.593,3	1.124,3	468,9	26%
1967	253,0	1.464,5	1.095,6	369,0	71%
1968	108,0	1.367,9	1.169,2	198,7	71%
1969	107,0	1.612,1	1.576,1	36,0	36%

Fuentes: BCRA, Boletín estadístico y Ministerio de Economía y Trabajo, informe económico, ambos, varios números.

Sueldos de sectores medios bajos en valores constantes; índice 100=1966

	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Año	Sueldo básico del empleado de menor jerarquía en el gobierno central	Sueldo básico del empleado del maestro de escuela primaria	Sueldo básico de convenio del empleado de comercio	Sueldo básico del empleado bancario de menor jerarquía	Sueldo básico del conductor de vehículos públicos de transporte	Sueldo básico del empleado telefónico de menor jerarquía	Sueldo básico del empleado de menor jerarquía del Inst.Nac.Tec.Agrup
1966	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0
1967	92,5	89,0	97,1	99,4	102,9	94,4	78,1
1968	84,4	76,6	86,7	89,6	88,6	87,3	73,2
1969	85,5	85,0	68,7	91,7	90,3	89,2	79,6

Fuentes: columna (1) Secretaria de Hacienda; columna (2,6) CONADE; Ministerio de Trabajo; boletín de estadísticas sociales, varios números, Columna (7) Centro de Investigación en administración Pública Instituto T. Di Tella, Buenos Aires, 1971, "Determinación de objetivos y asignación de recursos en el INTA: un análisis crítico.

Notas: Datos relacionados por el índice de costo de vida de la Ciudad de Buenos Aires. (2)"Sueldo Básico" es el del empleado sin cargas familiares ni adicionales por estudios post-secundarios completados.

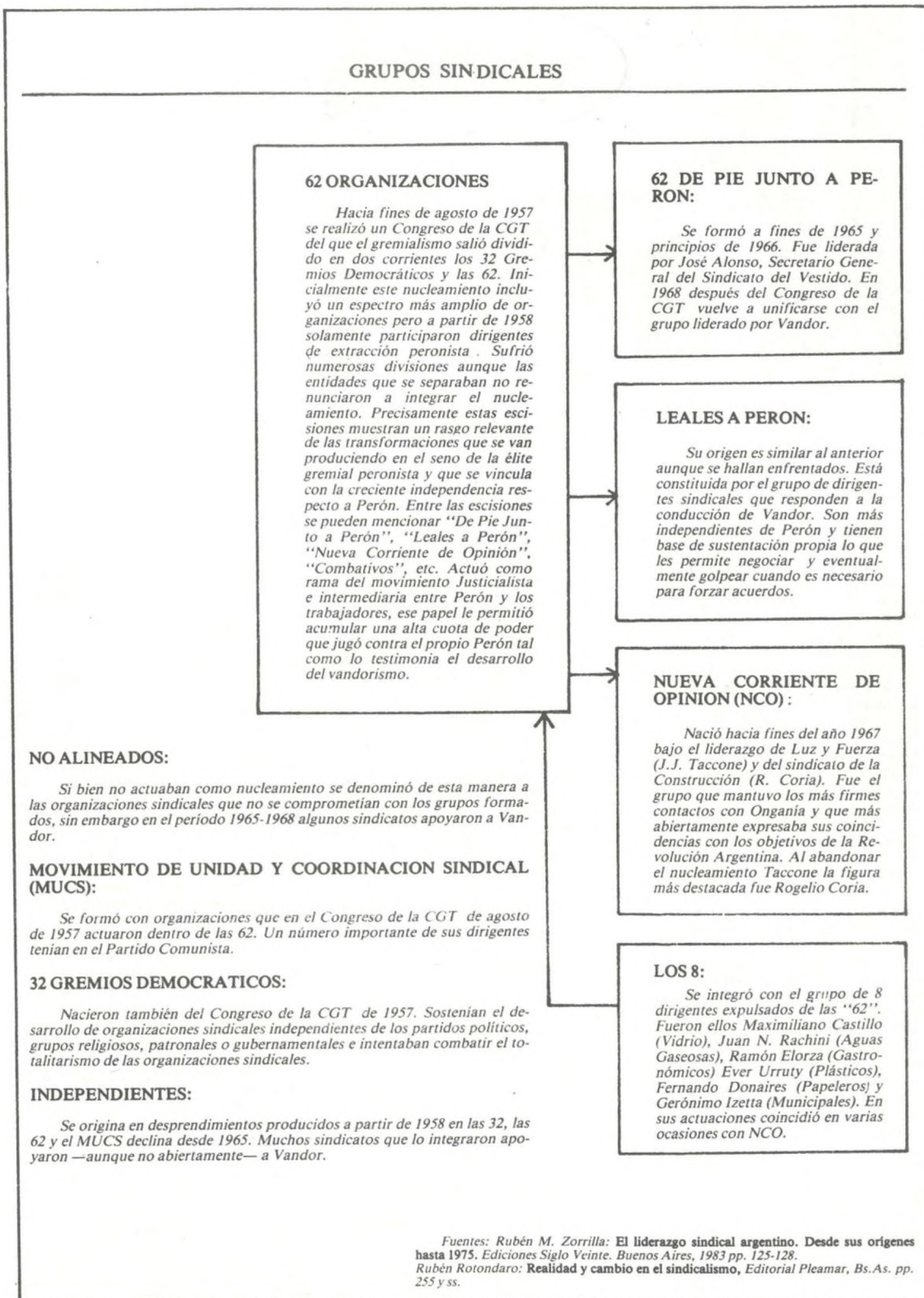
Principales datos presupuestarios del gobierno nacional, administración central índices 1966=100 a valores constantes.

Año	Total ingresos	Total egresos	Egresos corrientes	Egresos de capital	Déficit	% del Déficit sobre el total egresos	% Déficit sobre el PBI
1965	99,3	88,4	80,7	84,2	62,7	21,2	1,4
1966	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0	29,9	3,0
1967	124,8	104,9	95,1	153,0	57,0	16,5	1,7
1968	134,7	102,4	90,9	166,4	26,5	7,7	0,7
1969	144,5	108,5	97,9	170,1	23,9	6,6	0,6

Fuentes: Ministerio de Economía y Secretaria de Hacienda, informe económico, varios números; Superintendencia del Tesoro, Presupuesto del Gobierno Nacional.

Nota: Datos relacionados por el IPCN-INDEC.

Situación sindical al inicio del régimen



**ORIGEN DEL CAPITAL MAYORITARIO
EN 50 GRANDES EMPRESAS**

(Facturación superior a los 3.700 millones anuales) ⁽¹⁾

<i>Empresa</i>	<i>Facturación (en miles de m\$ n millones)</i>	<i>Origen del Capital Mayoritario</i>
YPF	181	Argentina Estatal
Ferrocarriles Argentinos	75	Argentina Estatal
FIAT	66	Italiana
SEGBA	58	Argentina Estatal
Shell	53	Anglo Holandesa
Gas del Estado	44	Argentina Estatal
IKA-Renault	41	Francesa
Esso	40	Norteamericana
Ford	39	Norteamericana
Somisa	38	Argentina Estatal
Swift	37	Norteamericana
General Motors	36	Norteamericana
Nobleza	35	Inglesa
Molinos Río de la Plata	30	Argentina Privada
CAP	25	Argentina Privada
Chrysler	25	Norteamericana
Ducilo Hisisa	19	Norteamericana
Alpargatas	17	Argentina Privada
Pirelli	16	Italiana
Acindar	15	Argentina Privada
Duperial	15	Inglesa
Celulosa Argentina	14	Argentina Privada
Good Year	13	Norteamericana
Dálmine Siderúrgica	13	Italiana
CIADE	12	Italo-Suiza
Safrar Peugeot	12	Francesa
Philips Salvo	12	Holandesa
Nestlé	12	Suiza
Particulares	12	Alemana
Siam Di Tella	11	Argentina
Ledesma	10	Argentina Privada
Ex-Wilson	10	Argentina Privada
Piccardo	10	Norteamericana
Imparciales	10	Alemana
Firestone	9	Norteamericana
Massalin y Celasco	9	Norteamericana
Mercedes Benz	9	Alemana
Santa Rosa	9	Francesa
Anglo	9	Inglesa
Gurmendi	8	Argentina Privada
Grafa	8	Argentina Privada
Compañía Química	8	Argentina Privada
Alba S.A.	8	Argentina Privada
Bodegas Giol	8	Argentina Privada
Coca Cola	8	Norteamericana
Sudamtex	8	Norteamericana
Olivetti	7	Italiana
Fate	7	Argentina Privada
Sasetru	7	Argentina Privada
Refinerías Maíz	7	Norteamericana

Fuente: *Primera Plana, N° 297, 3 de setiembre de 1968.*

(1) *Se han tomado, por lo general, ejercicios terminados en 1967. En algunos casos, ante la negativa o la demora de la información, se han estimado las cifras.*

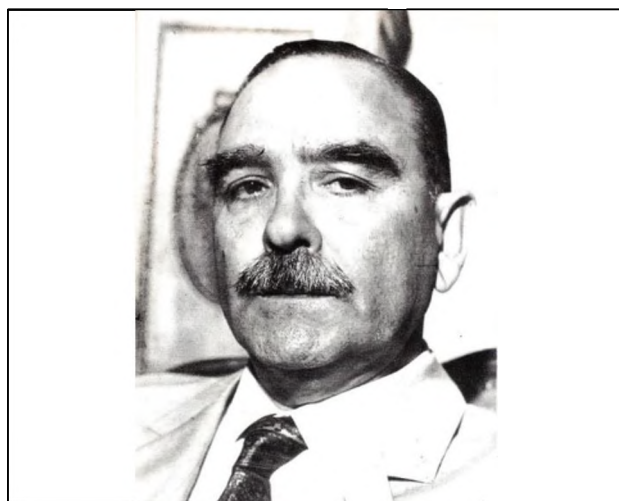
CASOS PRINCIPALES DE TRANSFERENCIAS EN EMPRESAS ARGENTINAS

(Períodos: de 1962 a 1968)

<i>Empresa Transferida</i>	<i>Ramo</i>	<i>Empresa Compradora</i>	<i>País</i>
Banco Argentino del Atlántico	Banco	City Bank of N. Y.	USA
Banco de Bahía Blanca	Banco	City Bank of N. Y.	USA
Banco Popular Argentino	Banco	Banco Central Madrid	España
Banco Francés y Río de la Plata	Banco	Morgan Guaranty Trust	USA
Banco Comercial Industrial Córdoba	Banco	Banco de Santander	España
Banco Mercantil Rosario	Banco	Banco de Santander	España
Banco Continental	Banco	Banco de Urquijo	España
Banco de Centro Mercedes	Banco	Banque Armenienne	Francia
Banco Hogar Argentino	Banco	Banco de Santander	España
Massalin y Celasco	Cigarrillos	Philip Morris Int.	USA
Imparciales	Cigarrillos	Reemtsma Fabriken	Alemania
Particulares	Cigarrillos	Reemtsma Fabriken	Alemania
Piccardo	Cigarrillos	Ligget Myers	USA
Thompson Ranco	Autopiezas	Thompson Products	USA
Indeco S.A.	Autopiezas	Federal Mogul	USA
Suavegom	Autopiezas	Dow Chemical	USA
Transax S.A.	Autopiezas	Ford Motor	USA
Acinfer S.A.	Autopiezas	Ford Motor	USA
Argelite S.A.	Autopiezas	Holley	USA
Beciu S.A.	Autopiezas	Eaton S.A.	USA
Armetal S.A.	Autopiezas	Budd	USA
Resortes Argentina S.A.	Autopiezas	Associated Spring	USA
Resortes Sachs S.A.	Autopiezas	Isringhausen GBM	Alemania
Agrometal Ingersol	Autopiezas	Borg Warner	USA
Byron Jackson S.A.	Autopiezas	Borg Warner	USA
Bendix S.A.	Autopiezas	Bendix	USA
Proyectores Argentinos	Autopiezas	Cibie	Francia
Salvo	Art. Hogar	Philips	Holanda
Gigler	Art. Hogar	Philips	Holanda
IKA	Autos	Renault	Francia
Química Hoechst	Química	Hoechst	Alemania
Duranor	Química	Hooker Chemical	USA
Lepetit	Química	Dow Chemical	USA
Talleres Coghlan	Maquinaria	Sulzer	Suiza
Papelera Hurlingham	Papel	Kimberly Clark	USA
Fuerte Sancti Spiritu	Produc. Veter.	Philips	Holanda
Argafer	Cerámica	Philips	Holanda
Hudson Ciovini	Distribuc.	Seaterm	USA
Hisisa	Produc. Sint.	Seaterm	USA

Fuente: Primera Plana, N° 297, 3 de setiembre de 1968.

ANEXO 2. LOS PROTAGONISTAS EN IMAGENES



**Gobernador de Córdoba
José Camilo Uriburu**



**Presidente General
Roberto Marcelo Levingston**



**Secretario de Trabajo: Rubens San Sebastián
y Augusto Timoteo Vandor**



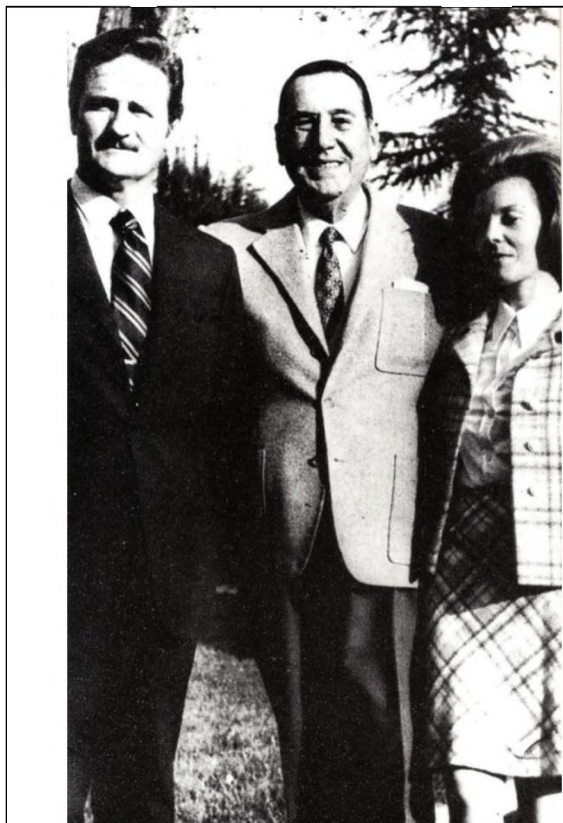
**Almirante Gnavi y
General Lanusse**



**Presidente General Onganía
y Dr. Dagnino Pastore**



**Presidente Onganía, N. Costa Mendez y nuevo
Embajador de USA Carter Burgess**



Daniel Paladino - Gral. Peron – Isabel Martinez



General Julio Alsogaray y Maria Julia Alsogaray



**Monseñor Caggiano – General Ongania
General Pistarini**



**General Ongania a su arribo a la
Exposicion Ganadera**



General Ongania con su Gabinete de Gobierno



Ministros Borda y Krieger Vasena



Presidente Illia – Zavala Ortiz y Ex Presidente del Perú F. Belaunde Terry



Planta de Fiat Concord (Córdoba) Durante el Cordobazo



Pres. Levingston con Tte. Gral Lanusse
Almirante Gnavi y Brigadier Rey



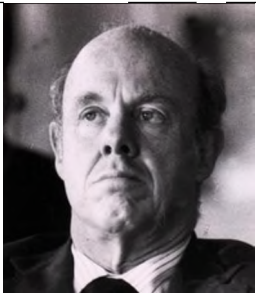


Presidente Levingston con el Gral Lanusse
Almirante Gnavi y Brigadier Rey



Presidente Onganía y Tte. Gral. Julio Alsogaray









Monseñor Caggiano y General Onganía

		
Dr. Nicanor Costa Méndez	Dr. Conrado Bauer	Dr. Moyano Llerena

		
Aldo Ferrer	Cardenal Antonio Caggiano	Jose Maria Dagnino Pastore

		
Dr. Enrique Martínez Paz	Arturo Mor Roig	Pres. Arturo Illia

		
Tnte. Gral Juan Carlos Onganía	Tte Gral Onganía y Tte Gral Lanusse	Brigadier Gral. Carlos Rey

		
Augusto Timoteo Vandor	José Alonso	Rogelio Coria
		
Raimundo Ongaro	Agustín Tosco	Elpidio Torres



FUENTES SECUNDARIAS Y PRIMARIAS

Fuentes bibliográficas ordenadas:

- Apter, David (1968), *Política de modernización*, Buenos Aires, Paidós, 1972.
- Azpiazu, Daniel; Bonvecchi, Carlos y Khavisse, Miguel (1976), "Acerca del desarrollo industrial argentino", *Desarrollo Económico*, N° 60, enero-marzo 1976, Instituto de Desarrollo Económico y Social (IDES).
- Balvé, Beba y Balvé, Beatriz (2005); *El '69. Huelga política de masas*; Buenos Aires, Razón y Revolución.
- Botana, Natalio y Floria, Carlos (1973), *El Régimen Militar 1966-1972*, Buenos Aires, La Bastilla.
- Boneo, H; Cavarozzi, M; Lavergne, N y Picabea, G. (1973); *Análisis y evaluación del plan de transformación agro-industrial de la provincia de Tucumán*. Informe final. Serie técnica N° 17. Consejo Federal de Inversiones, Buenos Aires.
- Bowles, Samuel; Gordon, Davis y Weisskopf, Thomas; *La economía del despilfarro*; Alianza, Madrid.
- Brenta, Noemí (2008), *Argentina atrapada. Historia de las relaciones con el F.M.I. 1956 – 2006*, Buenos Aires, Ediciones Cooperativas.
- Brennan, James (1996); *El Cordobazo. Las guerras obreras en Córdoba 1955-1976*. Buenos Aires, Historia y Cultura, editorial Sudamericana.
- Briones, Álvaro (1978); *Economía política del fascismo dependiente*; México, Siglo XXI.
- Canitrot, Adolfo (1975); *La experiencia populista en la redistribución de ingresos*; D.E. N°57, abril-junio 1975.
- Carnovale, Vera (2011); *Los combatientes*; Buenos Aires; Siglo XXI
- Caparrós, Martín; Anguita, Eduardo (1998); *La Voluntad*; vol. 1 a 4; Buenos Aires, editorial Norma.
- Castellani, Ana (2002), *La gestión estatal durante los regímenes políticos Burocrático-Autoritarios. El caso argentino entre 1967 y 1969. De: Gestión económica estatal y procesos de crecimiento empresario. Argentina 1966-1973*, en www.fuentesmemoria.fhase.unlp.edu.ar/art_revistas/pr3060.pdf
- Castellani, Ana (2008), "La ampliación del complejo estatal-privado y su incidencia sobre el perfil de la cúpula empresaria", *H-industria*, N° 2, año 2, primer semestre del 2008, IDAES, UBA, CONICET.
- Castex, Mariano (R.P.) (1981); *El Escorial de Onganía*. Buenos Aires, editora Hespérides.
- Cavarozzi, Marcelo (1983); *Autoritarismo y democracia (1955-1983)*, Buenos Aires, CEAL.
- Comblin, José (R.P.) (1977); *Ensayo sobre la Seguridad Nacional*; Arzobispado de Santiago de Chile, Vicaría de la Solidaridad.
- Cordone, Héctor (2004), *Reseña histórica sobre la planificación económica en Argentina*. Programa de fortalecimiento institucional y apoyo al entorno productivo de la provincias con menor desarrollo relativo (B.I.D. FAPEP

1353/06- AR) Estudio sobre análisis prospectivo. Ministerio de Economía y Producción de la República Argentina.

- Cepeda, Ramil (1972), *Crisis de una burguesía dependiente. Balance económico de la Revolución Argentina*, Buenos Aires, Ed. La Rosa Blindada.
- Cortés Conde, Roberto (1998), *Progreso y declinación de la economía argentina*, Buenos Aires, F.C.E.
- Dawyd, Darío (2011); *Sindicatos y política en la Argentina del Cordobazo*; Buenos Aires, editora Pueblo Heredero.
- Dawyd, Darío (2011); *La huelga santa de los petroleros de Ensenada. Petrleo, peronismo y política en el '68 argentino*. En Basualdo V. (coord.); *La clase trabajadora en la Argentina del Siglo XX*. Buenos Aires; editorial Cara y Ceca.
- De Amézola, Gonzalo (2000), *Levingston y Lanusse o el arte de lo imposible – Militares y políticos en la Argentina 1970-1971*; La Plata, edición de la U.N.L.P.; ediciones Al Margen.
- De Amézola, Gonzalo (2001), *El cambio del modelo económico de la segunda etapa de la Revolución Argentina 1970-1971*, Itztapalapa, México, Signos Históricos, Universidad Autónoma Metropolitana de México.
- De Pablo, Juan Carlos (1970), *Política antiinflacionaria en la Argentina 1967-1970*, Buenos Aires, Amorrortu editores.
- De Pablo, Juan Carlos (1972), *Precios relativos, distribución del ingreso y planes de estabilización. La experiencia argentina 1967-1970*, Buenos Aires, Amorrortu editores.
- De Pablo, Juan Carlos (1981), *La economía que yo hice (tomo II)*, reportaje al Dr. Adalbert Krieger Vasena. Buenos Aires, ediciones El Cronista Comercial
- De Riz, Liliana (2000), *Historia Argentina. La política en suspenso 1966-1976*, Buenos Aires, Paidós.
- Di Pietro, Sergio (2004); *Seis décadas de Políticas Económicas en la República Argentina. Señales, logros, dudas y peligros de cada período, 1943-2003*; Rosario, editora Pueblos del Sur.
- Di Stéfano, Roberto y Zanatta Loris (2000); *Historia de la Iglesia Argentina. Desde la conquista hasta fines del siglo XX*, Buenos Aires, Grijalbo-Mondadori.
- Ferreres, Orlando (2010), *Dos siglos de economía argentina 1810-2010*, Buenos Aires, Fundación Norte-Sur.
- Ferrer, Aldo (1974), *Los planes de estabilización en la Argentina*, Buenos Aires, Paidós
- Ferrer, Aldo (1981), *Nacionalismo y constitucionalismo*, Buenos Aires, F.C.E.
- Ferrer, Aldo (2004), *La economía argentina*, Buenos Aires, F.C.E.
- Ferrer, Aldo (1980); *Crisis y alternativas de la política económica argentina*; Buenos Aires, F.C.E.
- Ferrucci, Ricardo (1991), *Política económica argentina contemporánea*, Buenos Aires, ediciones Macchi.

- García Belsunce, Horacio A. (1978); *Trece años en la política económica argentina 1966-1978*; Buenos Aires, Emecé.
- García Vazquez, Enrique (1994); *La economía durante la presidencia de Illia*; Desarrollo Económico N° 134. Buenos Aires.
- García, Alejandro (1994), *La crisis argentina 1966-1976. Notas y documentos sobre una época de violencia política*. Murcia, Editorial de la Universidad de Murcia, Secretariado de Publicaciones.
- García Lupo, Rogelio (1971), *Mercenarios y monopolios en la Argentina. De Onganía a Lanusse*. Buenos Aires, Achával Solo editor.
- García Lupo, Rogelio (1963), *La rebelión de los generales*, Buenos Aires, ediciones Jamcana.
- Ghio, José María (2007); *La Iglesia Católica en la política argentina*; Buenos Aires, Prometeo.
- Graham-Yooll, Andrew (comp.) (1972), *Tiempo de tragedia. Cronología de la Revolución Argentina*, Buenos Aires, Ediciones de la Flor.
- González Trejo, Horacio (1969); *Argentina. Tiempos de violencia*; Buenos Aires, editor Carlos Pérez.
- Gordillo, Mónica (2012); *Los sindicatos FIAT y la autonomía obrera*; Boletín informativo del programa Buenos Aires de Historia Política (PolHis), año 5 N°10, segundo semestre del 2012.
- Gordillo, Mónica (1999); *Córdoba en los 60, la experiencia del sindicalismo combativo*; Córdoba, editorial de la U.N.C.
- Guerchunoff, Pablo y Llach, Lucas (1975), "Capitalismo industrial, desarrollo asociado y distribución del ingreso entre los dos gobiernos peronistas 1955-1973", *Desarrollo Económico*, N° 57, abril/junio 1975, Instituto de Desarrollo Económico y Social.
- Guerchunoff, Pablo y Llach, Lucas (1976), "El nuevo carácter del capitalismo en Argentina", *Desarrollo Económico*, N° 60, enero/marzo 1976. Instituto de Desarrollo Económico y Social.
- Guerchunoff, Pablo y Llach, Lucas (1998), *El ciclo de la ilusión y el desencanto. Un siglo de políticas económicas argentina*, Buenos Aires, Editorial Ariel.
- Herrera, Genaro (1965); *El pensamiento político de los militares*; Buenos Aires, ediciones Arayú.
- Huntington, Samuel (1997); *El orden político en las sociedades en cambio*; Barcelona, España, Paidós.
- Instituto de Desarrollo Económico y Social (I.D.E.S.) Centro de Estudios de Coyuntura (1979) varios autores, *Situación actual y perspectivas de la economía argentina*, Informe N° 18 del segundo semestre.
- James, Daniel (2010); *Resistencia e integración. El peronismo y la clase trabajadora argentina*; Buenos Aires, Siglo XX.
- Kvaternik, Eugenio (1990); *El péndulo cívico militar. La caída de Illia*; Buenos Aires, editorial Tesis.

- Krieger Vasena, Adalbert (1968), *El programa económico argentino 1966-1969*, Buenos Aires, Anales de la Academia, N° 32.
- Krieger Vasena, Adalbert (1968), *Discursos del Ministro de Economía y Trabajo de la República Argentina (1967-1968)*, Buenos Aires, edición del Ministerio de Economía y Trabajo de la República Argentina, 1968.
- Laguado Duca, Arturo (2006), *“Onganía y el nacionalismo militar en Argentina”*, Universitas Humanística, N° 62, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.
- Laguado Duca, Arturo (2010), *“Cuestión social, desarrollo y hegemonía en la Argentina de los años sesenta. El caso de Onganía”*, Universitas Humanística, N° 70, julio/diciembre, Bogotá, Pontificia Universidad Javeriana.
- Lanusse, Alejandro Agustín (1994), *Confesiones de un general*, Buenos Aires, Editorial Planeta.
- Lanusse, Alejandro A. (1977); *Mi testimonio*; Buenos Aires, Lasserre editores.
- Lousteau Heguy, Guillermo y Losada, Salvador María (comp.) (1966), *La Revolución Argentina. Análisis y prospectiva*, Buenos Aires, Ediciones Depalma.
- Luna, Félix (2003), *Los golpes militares 1930-1983. Momentos clave de la historia argentina*, Buenos Aires, Editorial Planeta.
- Maddison, Angus (1992); *La economía mundial en el siglo XX*; México, FCE.
- Mansilla, H.C.F. (2007), *“Autoritarismo y modernización. La aceleración del desarrollo mediante regímenes dominantes”*, Trayectorias, Vol. IX, N° 23, enero/abril, México, Universidad Autónoma de Nuevo León.
- Martinotti, Héctor (1966); *Análisis y perspectivas de la Revolución Argentina*; Buenos Aires, Depalma.
- Muraro, Heriberto. (2000) *Políticos, periodistas y ciudadanos*, Sao Paulo, FCE.
- Moyano Llerena, Carlos (1994); *Vigencia de una visión*; Buenos Aires, Fundación Banco de Boston, Sudamericana.
- Nun, José (1966); *América Latina: la crisis hegemónica y el golpe militar*; Buenos Aires, D.E. volumen VI, julio-diciembre 1966.
- O'Donnell, Guillermo (1982), *El Estado Burocrático-Autoritario*, Buenos Aires, Editorial de Belgrano.
- O' Donnell, Guillermo (1972), *Modernización y golpes militares. Teoría, comparación y el caso argentino*, Buenos Aires, Instituto Torcuato Di Tella, Centro de Investigaciones en Administración Pública.
- O'Donnell, Guillermo (1977); *Estado y alianzas en la Argentina (1956-1976)*; Buenos Aires, D.E. N° 64.
- Orsolini, Mario (1965); *Ejército Argentino y crecimiento nacional*, Buenos Aires, ediciones Arayú.
- Pavetti, Oscar (2001); *Azúcar y Estado en la década de 1960*; en Luis M. Bonano (coord.) *Estudios de Historia Social de Tucumán*; Universidad Nacional de Tucumán. Tucumán, Argentina.

- Perina, Rubén (1983), *Onganía-Levingston-Lanusse. Los militares en la política argentina*, Buenos Aires, Editorial de Belgrano.
- Potash, Robert (1994), *El Ejército y la política en la Argentina*, Tomo 3, primera y segunda parte, Buenos Aires, Sudamericana.
- Portantiero, Juan Carlos (1972); *Clases dominantes y crisis política en la Argentina actual*; Buenos Aires, editorial Del Cardo.
- Polanyi, Karl (1989); *La gran transformación. Crítica al liberalismo económico*; Madrid, La Piqueta.
- Quintero, Carlos A (1978), *Militares y populismo. La crisis argentina entre 1966 y 1976*, Buenos Aires, Editoriales Temas Contemporáneos.
- Rapoport, Mario (2000); *Historia económica, política y social de la Argentina*; Buenos Aires, Macchi.
- Rapoport, Horacio (1985); *Una reseña de los reactores de investigación y su utilización en la República Argentina*; trabajo presentado en la décima reunión de la American Nuclear Society, Rio de Janeiro, agosto 1978
- Romano, Silvina (2008), "Brasil, Argentina y la integración regional durante la década de 1960 en el marco de las relaciones con los Estados Unidos", *Confines* N° 008, agosto/diciembre, año 4, Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, Monterrey, Universidad Autónoma de México.
- Roth, Roberto (1980); *Los años de Onganía*; Buenos Aires, La Campana.
- Rougier, Marcelo (2004), *Desarrollo y financiación industrial en Argentina. La experiencia del BANADE*, Buenos Aires, Editorial de la Universidad de Quilmes.
- Rougier, Marcelo y Belini, Claudio (2008), *El Estado empresario en la industria argentina*, Buenos Aires, Ediciones Manantial.
- Rougier, Marcelo (2004); *Industria, finanzas e instituciones en la Argentina. La experiencia del Banco Nacional de Desarrollo 1967-1976*; Buenos Aires, editorial de la UNQui.
- Rouquié, Alain (1982), *Poder militar y sociedad política en la Argentina (II)*, Buenos Aires, editorial Emecé.
- Rubinstein, J.C. (1988); *El Estado periférico latinoamericano*; Buenos Aires, Eudeba.
- Sábato, Jorge (1972); *Quince años de metalurgia en la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)*; Buenos Aires; Boletín CNEA.
- Sábato, Jorge (1985); *Energía Atómica en Argentina*; Estudios Internacionales; informe 1985. Buenos Aires.
- Sábato, Jorge (1970); *Para el prontuario del Plan Nuclear Argentino*; revista Ciencia Nueva, Año 1 N° 1. Buenos Aires.
- Sánchez, Pedro (1983); *La presidencia de Illia*, Buenos Aires, CEAL
- Schvarzer, Jorge (1988), *Orígenes poco mencionados de la deuda externa argentina*, Buenos Aires, publicación del Centro de Investigaciones Sociales sobre el Estado y la Administración.
- Schvarzer, Jorge (1996), *La industria que supimos conseguir*, Buenos Aires, Grupo Editorial Planeta.

- Schvarzer, Jorge (1978); *Estrategia industrial y grandes empresas: el caso argentino*; D.E. N° 71, octubre-diciembre 1978.
- Selser, Gregorio (1972), *El Onganiato*, vols. I y II, Buenos Aires, Hyspamerica.
- Senén González, Santiago (1971); *El sindicalismo después de Perón*; Buenos Aires, Galerna.
- Sigal, Silvia (1991), *Intelectuales y poder en la década del sesenta*, Buenos Aires, Punto Sur.
- Sourrouille, Juan y Mallon, Richard (1973); *La política económica en una sociedad conflictiva. El caso argentino*; Buenos Aires, Amorrortu.
- Smulovitz, Catalina (1991), *En búsqueda de la fórmula perdida*, Buenos Aires, Desarrollo Económico N° 121 abril-junio 1991.
- Smulovitz, Catalina (1993), *La eficacia como crítica y utopía. Notas sobre la caída de Illia*, Buenos Aires, Desarrollo Económico N° 131 octubre-diciembre 1993.
- Snow, Peter (1972); Desarrollo económico y seguridad nacional; Revista de Estudios Internacionales, Instituto de Estudios Internacionales de la Universidad de Chile, año 5, N° 20., octubre - diciembre 1972.
- Taroncher, Angel Miguel (2009), *La caída de Illia. La trama oculta del poder mediático*, Buenos Aires, Vergara editores.
- Taroncher, M. Ángel (2004); *La caída de Illia y la Revolución Argentina*; Universidad de Valencia, España.
- Taroncher, Miguel Ángel (2011); *El proceso de inestabilidad político institucional en la Argentina: el golpe de Estado de 1966 y algunos aspectos de la opinión pública. Ciclo de conferencias Estado e Sociedade civil. Ditaduras no América Latina do século XX. Del programa de Pós-Graduacao em Historia da PUCRS. Octubre del 2011.*
- Tcach, César y Rodríguez, Celso (2006), *Arturo Illia: un sueño breve*, Buenos Aires, Edhasa editorial
- Terán, Oscar (1991), *Nuestros años sesenta*, Buenos Aires, Punto Sur.
- Touraine, Alain (1978); *Las sociedades dependientes*; México, Siglo XXI.
- Torres, Elpidio (1999); *El Cordobazo organizado. La historia sin mitos*. Córdoba, editorial Catálogos.
- Villar, Daniel (1971); *El Cordobazo*, Buenos Aires, CEAL, La Historia Popular N° 32
- Vitelli, Guillermo (1999), *Dos siglos de historia argentina. Historia económica comparada*, Buenos Aires, Prendesgrast editores.
- Villegas, Osiris (1968); *Seguridad, política y estrategia*; Buenos Aires, Temas militares I.

REVISTAS DE LA ÉPOCA

- *Azul y Blanco*, varios números
- *Atlántida*, varios números
- *Análisis*, varios números
- *Estrategia*, varios números
- *Primera Plana*, varios números.
- *Confirmado*, varios números
- *Panorama*, varios números.
- *Análisis*, varios números
- *Extra*, varios números
- *Todo es historia*, colección
- *Polémica*, colección 10 años
- *Marcha* (Montevideo), varios números
- *Visión*, varios números

PERIÓDICOS

- *La Nación*, varios números
- *Clarín*, varios números
- *Correo de la tarde*, varios números
- *Economic Survey*, varios números
- *La Razón*, varios números
- *Crítica*, varios números
- *La voz del interior* (Córdoba), varios números.
- *La Nueva Provincia* (B. Blanca) varios números

ANEXOS 1 y 2.

Anexo 1. CUADROS E INFOGRAFÍAS – FUENTES

- Boletines del Ministerio de Economía
- Boletines estadísticos de la Fundación de Investigaciones Económicas para América Latina (FIEL)
- Estadísticas de: Dos siglos de Economía Argentina – Orlando Ferreres.
- Doscientos años de estadísticas económicas – Juan Carlos de Pablo.
- Boletines del Banco Central de la República Argentina (BCRA).

Anexo 2. IMÁGENES DE ALGUNOS PROTAGONISTAS

- Compiladas de publicaciones de la época.

EPÍLOGO

Para los que estamos recorriendo la vida en el segundo lustro de nuestra sexta década y dedicamos una parte de ella a nuestra formación universitaria en la ciencia económica y somos lectores y estudiosos sin remedio, curiosos de las revelaciones de esa interdisciplina apasionante que son las ciencias sociales, no pasará inadvertido que los acontecimientos y sucesos aquí relatados siempre regresaran a la mente modificados por la memoria o perdonados por el olvido, que es también una forma selectiva de memoria. El pasado no es evocado en colores sino en alguna tonalidad de gris, aprendimos que las alegrías no fueron tan alegres ni las tristezas tan tristes, miramos a través de un lente oblicuo y percibimos la vida pasada como un promedio de euforias y frustraciones, de victorias y derrotas. Hemos sido testigos y participantes activos de la agitada Argentina de esos años que nos sorprendió en plena formación intelectual, por eso, abordamos este trabajo como un ejercicio reflexivo, sin la pasión del torbellino borrascoso que nos insufló aquel tiempo. En esta etapa de la vida ya aprendimos que la vida en sociedad es un derecho que tiene más costos que beneficios, que la terquedad es mucho más costosa que la obediencia y que el poder desgasta siempre a quién no lo tiene; que los pueblos son una cera blanda esperando siempre a alguien que la moldee; su humor cambia en un día, y derrocha pródigamente lo mismo su odio que su amor.

La Argentina que vino después, la del medio siglo que pasó, no aprendió que el fracaso no esconde la experiencia, que en cada fracaso hay solo derrota y frustración, que el futuro se construye sobre el perdón del pasado y que un presente perfecto se destruye si un pasado imperfecto insiste en volver, que si se van a cometer errores tienen que ser nuevos, no los mismos. Los inteligentes siempre están llenos de dudas, los estúpidos llenos de certezas.